RV: CONTESTACIÓN DEMANDA 50001-23-33-000-2021-00272-00 - P- INVESTIDURA CONCEJALES ACACÍAS

Secretaria General Tribunal Administrativo - Seccional Villavicencio
<sgtadmvcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mar 03/08/2021 15:43

Para: Iser Leonardo Tejeiro Quintero <itejeirq@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: Gina Paola Rodriguez Gomez <grodrigg@cendoj.ramajudicial.gov.co>

3 archivos adjuntos (2 MB)

SENTENCIA TUTELA revoca T-2020-202-01 Vs Concejo.pdf; Poder Zulma.pdf; Contestación Demanda concejal ZULMA DÍAZ pdf.pdf;

50001233300020210027200

Radicación: 50001-23-33-000-2021-00272-00
Medio de control: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Demandantes: WILMER OLAYA CARVAJAL, ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, HÉCTOR REYES RATIVA Y JHONNY ANDRES BASTO HERNÁNDEZ
Demandados: VÍCTOR JULIO RAMOS CUBILLOS, FARLEY CARVAJAL REY, ANDRÉS MAURICIO CHÁVEZ QUEVEDO, JHONNY STEVENSON GIRALDO ARAGÓN, ALEXANDER VARELO, ZULMA YOLIMA DIAZ, LILIANA MARCELA BAQUERO TORRES Y GILDARDO SANTOS CHAPARRO

El doctor VÍCTOR OBDULIO BENAVIDES LADINO, apoderado de la Concejal del Municipio de Acacías, ZULMA YOLIMA DIAZ DIAZ, allega poder y contestación de la demanda.

De: Víctor Obdulio Benavides Ladino <vicbenavides351@gmail.com>
Enviado: martes, 3 de agosto de 2021 3:36 p. m.
Para: Secretaria General Tribunal Administrativo - Seccional Villavicencio <sgtadmvcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: CONTESTACIÓN DEMANDA 50001-23-33-000-2021-00272-00 - P- INVESTIDURA CONCEJALES ACACÍAS

PARA: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META
H. MP. Dra. **NOHRA EUGENIA GALEANO PARRA**

DE: VÍCTOR O BENAVIDES L
Apoderado Zulma Yolima Díaz

Actor(es) WILMER OLAYA CARVAJAL OTROS
--

Víctor Obdulio Benavides Ladino

H. Magistrados
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META
sgtadmvcio@cendoj.ramajudicial.gov.co
H. MP. Dra. **NOHRA EUGENIA GALEANO PARRA**

REF: **CONTESTACIÓN DE DEMANDA .-** Rad. **50001-23-33-000-2021-00272-00**

- PÉRDIDA DE INVESTIDURA CONCEJALES DE ACACÍAS
- **Actor(es)** WILMER OLAYA CARVAJAL, ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, HÉCTOR REYES RATIVA Y JHONNY ANDRES BASTO HERNÁNDEZ
- Demandada ZULMA YOLIMA DIAZ DIAZ y otros

VÍCTOR OBDULIO BENAVIDES LADINO, abogado en ejercicio, con Tarjeta Profesional 39.474 del Consejo Superior de la Judicatura, de esta vecindad e identificado con la cédula de ciudadanía 17.310.786 de Villavicencio, con mi respeto acostumbrado, les manifiesto que para los presentes efectos actúo en nombre y representación de la Concejal del Municipio de Acacías, **ZULMA YOLIMA DIAZ DIAZ** , identificada con cédula de ciudadanía 40.432.811 de Acacias, domiciliada en este Municipio, y en esa condición obro como su apoderado conforme al poder que me ha conferido y que acompaño al presente escrito, y que de conformidad con el art. 175 de la Ley 1437 de 2011, procedo a contestar y a pronunciarme respecto de la demanda de la referencia:

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

M**e opongo a la pretensión demandada** de que se declare la pérdida de investidura de concejal del municipio de Acacias para el periodo 2020-2023 que ostenta ZULMA YOLIMA DIAZ DIAZ porque ni los hechos ni las pruebas tienen que ver con la causal aducida de tráfico de influencias, como expongo a la Sala más adelante:

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS HECHOS DE LA DEMANDA

Los hechos expuestos en la demanda **NO SE ADMITEN** por no ser generadores de pérdida de investidura, porque resultan irrelevantes y ajenos a la causal de tráfico de influencias. **La esencia de los hechos** expuestos por los demandantes (actuación de los demandados en la elección de la Secretaria General del Concejo para el periodo 2021) **nada tienen que ver con tráfico de influencia.**

Lo que en resumen hablan los hechos es que hay un descontento de parte de la minoría del Concejo de Acacías (compuesta por siete concejales) frente a la votación que mayoritariamente hicieron los otros ocho concejales para elegir el día 18 de diciembre de 2020 a KATHERINE ARENAS ÁLVAREZ en el cargo de SECRETARIA GENERAL de la corporación, para el periodo 2021, mientras que la candidata de los demandantes, PATRICIA MORERA ANAYA, no fue la elegida. **Veamos:**

En resumen, dicen los demandantes que (**Hecho 1**) la plenaria del Concejo facultó a la Mesa Directiva para adelantar los trámites tendientes a la elección de Secretaria General según el Reglamento de la Corporación, Acuerdo 427 de 2016, art. 50; (**Hechos 2 y 3**) que la Mesa abrió la convocatoria con Resolución 48 de 2020, modificada por Resolución 77 de 2020; (**Hecho 4**) presentándose diez (10) aspirantes con sus respectivas hojas de vida, de las cuales (**hecho 5**) se presentaron sólo cinco (5) a la prueba de conocimientos para responder un cuestionario, (**hecho 6**) con presencia de una Comisión accidental de verificación, y que la mesa directiva hizo entrega de unos formatos de calificación; (**Hecho 7**) para finalmente estas cinco aspirantes presentar entrevista, **(hechos 8 y 9**) entrevista que una vez terminó se conoció la calificación de cada aspirante por parte de cada concejal, sin que los demandados sustentaran "su voto" en sus respectivos formatos de calificación, **DE LO CUAL CONCLUYEN QUE HUBO TRÁFICO DE INFLUENCIAS**, según la lista de elegibles. Y agregan (**Hecho 10**) que **hubo fue una CONFABULACIÓN** de ocho concejales ese 18 de diciembre al calificar y elegir a la aspirante KATHERINE ARENAS ÁLVAREZ como Secretaria General del Concejo, incluso (**Hecho 11**) que hubo burla del concejal GILDARDO SANTOS al amagar escoger a la perdedora, aspirante que interpuso una acción de tutela (Hecho 12) que le resultó favorable. **AQUÍ LOS DEMANDANTES OMITEN DECIR QUE FUE REVOCADA POR EL JUZGADO DEL CIRCUITO DE ACACÍAS el 25 de febrero de 2021. (Rad. 50318 4089 001 2020 00202**

Como puede advertirse, estos hechos **nada tienen que ver con los elementos que deben aparecer demostrados de forma suficiente y concurrente en el proceso, para efectos de configurar la causal de tráfico de influencias**, como lo ha exigido la ley y la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por ejemplo la **Sentencia de junio 21 de 2017** del Consejo de Estado, Sala Plena SP CA con radicación 11001-03-15-000-2016-01503-00, consejero ponente dr Carlos Enrique Moreno Rubio:

> " *[…]*
> *la Sala a partir de la Jurisprudencia suficientemente decantada en cuanto a la demarcación conceptual del tráfico de influencias dentro de la acción de pérdida de investidura, se permite reiterar,* ***los cuatro elementos que deberán aparecer demostrados de forma suficiente y concurrente en el proceso, para efectos de configurar la referida causal****, así:*

"a) Que la persona que ejerce la influencia ostente o haya ostentado la calidad de Congresista de la República, la cual se adquiere a partir de la posesión en el cargo";

*b) Que se invoque esa calidad o condición ante el servidor público16**, ejerciéndose en todo caso un influjo síquic**o sobre éste, sin tener en consideración el orden jerárquico existente entre ambos;*

....

que Quien influye, ejerce predominio o fuerza moral, valiéndose de su poder, superioridad o fuerza dominante.

"c) ***Que se reciba, haga dar o prometer para sí o para un tercero dinero o dádiva****, con las salvedades o excepciones contempladas en la Ley 5ª de 1992, en cuanto a las gestiones de los Congresistas en favor de sus regiones";*

En el presupuesto "c)" ... ***conducta que implica una relación de doble envío, donde el Congresista solicita para recibirlo, darlo o prometerlo y consecuentemente el servidor público accede a ello.*** *Sin embargo, la conducta se configura aún cuando el servidor público no accede, porque basta la simple solicitud.*

d) Que el beneficio pretendido *por el Congresista provenga de un asunto que el servidor público se encuentre conociendo o haya de conocer".*

..., en el elemento "d)" ***habrá que precisar que el referido beneficio pretendido por el Congresista, ya sea en dinero y/o dádiva,*** *tenga su origen en un asunto en donde el servidor público sea o vaya a ser competente, es decir, que tenga o vaya a tener el conocimiento del mismo, razón justamente por la cual resulta abordado por el Congresista"*

EN CUANTO A LAS PRUEBAS agregadas, se refieren a los mismos hechos de la demanda; PERO **no hay pruebas relevantes como declaraciones, testimonios, grabaciones, etc** en que consten estas exigencias que aparecen en estos literales, con excepción de que mi prohijada es servidora pública.

De manera H. Magistrados del Tribunal, que estos hechos no encajan ni se adecúan a las exigencias que le ley y la doctrina del CONSEJO DE ESTADO disponen para edificar la causal de tráfico de influencias, **pues no hay hechos referidos a las situaciones previstas en los literales "b", "c", "d", como que se le hubiere imputado a Zulma Yolima en calidad de concejal haber ejercido un influjo síquico sobre un servidor público para ofrecer, prometer, hacer que se reciba para sí o para un tercero dinero o dádiva, ni se le precisó un beneficio pretendido por ella, ya sea en dinero y/o dádiva**.

FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA DE LA DEFENSA

Los demandantes han escogido la causal quinta de pérdida de investidura de los concejales (tráfico de influencias) prevista en el artículo 48 de la Ley 617 2000, **norma que exige un tráfico DEBIDAMENTE COMPROBADO**, resultando en nuestro caso una causal inexistente, como ya expuse, porque los hechos en que se funda la petición de declaratoria de pérdida de investidura de mi mandante no resultan adecuables en este numeral 5º , esto es, que resultan inadecuables, atípicos.

A este respecto ha sostenido el CONSEJO DE ESTADO:

> "ACCIÓN DE PERDIDA DE LA INVESTIDURA- Características: es declarativa, es decir, que **tiene como objeto establecer la ocurrencia o no de unos hechos; verificar si se adecuan** o corresponden **o no a los supuestos normativos** que señale la Constitución y/o la ley **como causales de pérdida de** la investidura... , así como la calidad o condición oficial del sujeto activo de esos hechos que se predica en esos supuestos, y declarar las consecuencias jurídicas respecto de dicho sujeto que las normas prevén por la ocurrencia de esos hechos."(DESTAQUÉ)
>
> C.E. SCA SECCION PRIMERA C.P. RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA Sentencia del 24 de julio de 2008 Rad. 63001-23-31-000-2007-00149-01(PI) .

De las pruebas arrimadas no se concluye que la demandada hiciera exigencia de dineros.

La causal "Tráfico de Influencias" consiste en una relación de doble envío en donde el Corporado gracias a la investidura que posee, crea en el destinatario de su influencia la decisión de hacer lo solicitado. Pero la demanda no habla de que la Concejal ZULMA YOLIMA tentó o presionó a funcionario público o que éste la tentó o presionó, a cambio de dinero, dádiva o beneficio para comprometer su voto en la elección de la Secretaria General del Concejo.

No se le precisó un beneficio pretendido por ella, ya sea en dinero y/o dádiva.

Es por todo esto que reitero a la Sala se desestime y rechace la pretensión de pérdida de investidura de la señora **ZULMA YOLIMA DÍAZ DÍAZ** como concejal de Acacías,

PRUEBAS

1. Téngase por tales las presentadas con la demanda y

2. Sentencia de segunda instancia del 25 de Febrero de 2021 del JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE ACACIAS (Rad. 50318 4089 001 2020 00202 01), que revocó una tutela concedida el 6 de enero de 2021 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Guamal a la aspirante Patricia Morera, y a la vez niega nulidad.

ANEXOS

- Poder debidamente a mí conferido por ZULMA YOLIMA DÍAZ DÍAZ.

- Sentencia de segunda instancia del 25 de Febrero de 2021 del JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE ACACIAS (Rad. 50318 4089 001 2020 00202 01), que revocó tutela concedida el 6 de enero de 2021 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Guamal.

NOTIFICACIONES

Mi mandante, en la Manzana E casa 3 Barrio Altos de Covicom, de Acacías

Demandantes y demás demandados y en el sitio indicado en la demanda.

El suscrito abogadeo en la calle 15 Nro. 45-02, Of. F-18, Barrio El Buque de Villavicencio.

Atentamente,



VÍCTOR OBDULIO BENAVIDES LADINO
C.C. 17.303.786 de Villavicencio
T.P. 39.474 C.S.J.

E mail: vicbenavides351@gmail.com

Victor O. Benavides L
Abogado.- U. Libre

H. Magistrados
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META
Dra. NOHRA EUGENIA GALEANO PARRA

REF: Rad. **50001-23-33-000-2021-00272-00**
PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL ACACÍAS
Actor(es) WILMER OLAYA CARVAJAL, ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, HÉCTOR REYES RATIVA Y JHONNY ANDRES BASTO HERNÁNDEZ
Demandada ZULMA YOLIMA DIAZ DIAZ y otros
Auto Admisorio de Julio 26 -2021
Asunto: PODER

ZULMA YOLIMA DÍAZ DÍAZ, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Acacías, Manzana E casa 3 Barrio Altos de Covicom, identificada con la cédula de ciudadanía 40432811, expedida en Acacías, Meta, manifiesto al H. Tribunal que por este escrito confiero poder especial, amplio y suficiente al abogado VÍCTOR OBDULIO BENAVIDES LADINO, mayor de edad y portador de la tarjeta profesional 39.474 del Consejo Superior de la Judicatura, e identificado con cédula de ciudadanía 17.303.786 de Villavicencio, para que me represente y defienda mis derechos e intereses dentro del proceso de la referencia, de PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL de Acacías y en tal virtud conteste demanda, excepcione, pida, recurra, reciba, sustituya, reasuma este poder y ejerza aquello que la ley le autoriza en procura de mi defensa. Sírvanse reconocérsele personería para actuar.

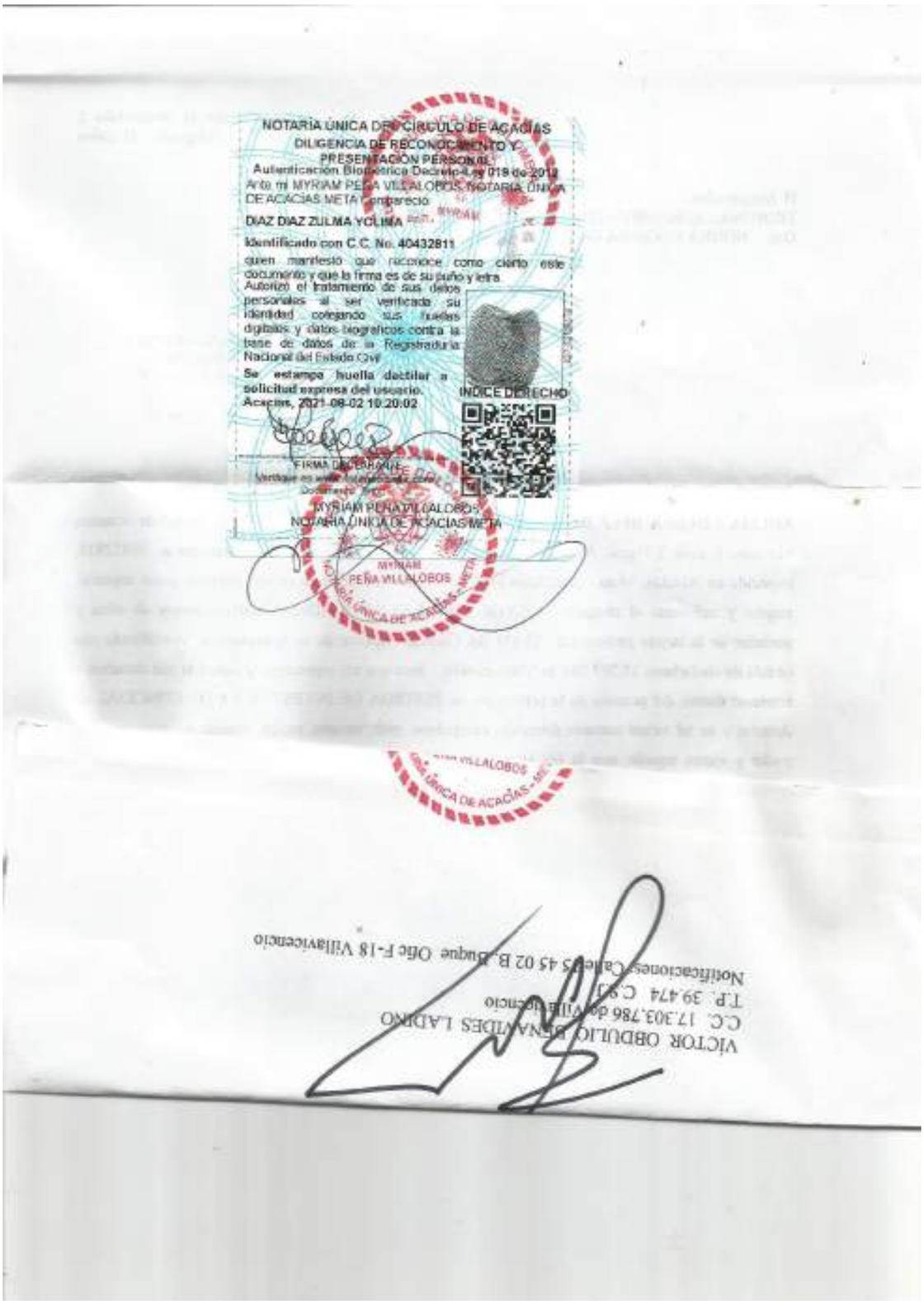
Cordialmente

ZULMA YOLIMA DÍAZ DÍAZ
C.C. 40.432.811 de Acacías

NOTIFICACIONES
Dirección urbana: Manzana E casa 3 Barrio Altos de Covicom, Acacías
Celular: 313 3443451
Correo electrónico zuyodiaz@gmail.com

ACEPTO:

VÍCTOR OBDULIO BENAVIDES LADINO
C.C. 17.303.786 de Villavicencio
T.P. 39.474 C.S.J.
Notificaciones: Calle 15 45 02 B. Buque Ofic F-18 Villavicencio



NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO DE ACACÍAS
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO Y PRESENTACIÓN PERSONAL
Autenticación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012
Ante mi MYRIAM PEÑA VILLALOBOS NOTARIA ÚNICA DE ACACÍAS META compareció
DIAZ DIAZ ZULMA YOLIMA
Identificado con C.C. No. 40432811
quien manifestó que reconoce como cierto este documento y que la firma es de su puño y letra.
Autorizo el tratamiento de sus datos personales al ser verificado su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil
Se estampa huella dactilar a solicitud expresa del usuario.
Acacías, 2021-08-02 10:20:02
INDICE DERECHO
FIRMA DECLARANTE
Verifique en www.notariaenlinea.com este Documento con el PIN
MYRIAM PEÑA VILLALOBOS
NOTARIA ÚNICA DE ACACÍAS META

VÍCTOR OBDULIO BERNAL DES LADINO
C.C. 17.303.786 de Villavicencio
T.P. 39.474 C.S.J.
Notificaciones: Calle 15 45 02 B. Buque Ofic F-18 Villavicencio

Victor O. Benavides L
Abogado.- U. Libre

H. Magistrados
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META
Dra. NOHRA EUGENIA GALEANO PARRA

REF: Rad. **50001-23-33-000-2021-00272-00**
PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL ACACÍAS
Actor(es) WILMER OLAYA CARVAJAL, ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, HÉCTOR REYES RATIVA Y JHONNY ANDRES BASTO HERNÁNDEZ
Demandada ZULMA YOLIMA DIAZ DIAZ y otros
Auto Admisorio de Julio 26 -2021
Asunto: PODER

ZULMA YOLIMA DÍAZ DÍAZ, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Acacias, Manzana E casa 3 Barrio Altos de Covicom, identificada con la cédula de ciudadania 40432811, expedida en Acacías, Meta, manifiesto al H. Tribunal que por este escrito confiero poder especial, amplio y suficiente al abogado VÍCTOR OBDULIO BENAVIDES LADINO, mayor de edad y portador de la tarjeta profesional 39.474 del Consejo Superior de la Judicatura, e identificado con cédula de ciudadania 17.303.786 de Villavicencio, para que me represente y defienda mis derechos e intereses dentro del proceso de la referencia, de PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL de Acacías y en tal virtud conteste demanda, excepcione, pida, recurra, reciba, sustituya, reasuma este poder y ejerza aquello que la ley le autoriza en procura de mi defensa. Sírvanse reconocérsele personeria para actuar.

Cordialmente

ZULMA YOLIMA DÍAZ DÍAZ
C.C. 40.432.811 de Acacias

NOTIFICACIONES
Dirección urbana: Manzana E casa 3 Barrio Altos de Covicom, Acacias
Celular: 313 3443451
Correo electrónico zuyodiaz@gmail.com

ACEPTO:

VÍCTOR OBDULIO BENAVIDES LADINO
C.C. 17.303.786 de Villavicencio
T.P. 39.474 C.S.J.
Notificaciones: Calle 35 45 02 B. Buque Ofic F-18 Villavicencio

NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO DE ACACÍAS

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO Y PRESENTACIÓN PERSONAL

Autenticación Biométrica Decreto 4 de 019 de 2012

Ante mi MYRIAM PEÑA VILLALOBOS NOTARIA ÚNICA DE ACACÍAS META Compareció

DIAZ DIAZ ZULMA YOLIMA

Identificado con C.C. No. 40432811

quien manifestó que reconoce como cierto este documento y que la firma es de su puño y letra.

Autorizo el tratamiento de sus datos personales al ser verificado su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil

Se estampa huella dactilar a solicitud expresa del usuario.

Acacías, 2021-08-02 10:20:02

INDICE DERECHO

FIRMA DECLARANTE

Verifique en www.notariasenlinea.com

Documento No.

MYRIAM PEÑA VILLALOBOS
NOTARIA ÚNICA DE ACACÍAS META

NOTARÍA ÚNICA DE ACACÍAS - META

VÍCTOR OBDULIO BENAVIDES LADINO
C.C. 17.303.786 de Villavicencio
T.P. 39.474 C.S.J.
Notificaciones: Calle 15 45 02 B. Buque Ofic F-18 Villavicencio

JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE ACACIAS, META
Acacias, Meta, veinticinco (25) de febrero de dos mil veintiuno (2021)

I-. OBJETO POR DECIDIR

La impugnación interpuesta por los concejales del Municipio de Acacías -Meta, **Zulma Yolima Díaz Díaz, Víctor Julio Ramos Cubillos** y **Liliana Marcela Baquero Torres,** contra el fallo de primera instancia proferida el 6 de enero de 2021 por el **Juzgado Promiscuo Municipal de Guamal, Meta,** dentro de la acción de tutela promovida por la señora **Patricia Morera Anaya**, identificada con cédula de ciudadanía No 55.058.856, contra el **Concejo Municipal de Acacías, Meta,** por la presunta vulneración de los derechos al debido proceso, igualdad, trabajo y acceso a los cargos públicos por concurso de méritos.

II-. SÍNTESIS DE LA DEMANDA

1.- De la tutela

La accionante fundamenta la acción de tutela en los siguientes hechos:

-. El Concejo de Municipal accionado, apertura convocatoria por medio de la Resolución No 048 de 2020, modificada mediante Resolución No 073 de 2020, para la elección de Secretaria General del Concejo para la vigencia 2021.

-. Se postuló y concursó por el empleo convocado, presentando las pruebas que correspondían según el cronograma de la convocatoria realizada.

-. El 16 de diciembre de 2020, la plenaria del Concejo Municipal accionado, realizó la entrevista como bien estaba señalado en la Convocatoria, con anterioridad, se habían establecido con precisión las reglas de la prueba, forma de calificación de 1 a 100, las cuales debían estar soportadas y sustentadas por parte de los evaluadores (concejales).

-. Los evaluadores (concejales) faltaron a su deber objetivo, imparcial y transparente, toda vez que al momento de calificar las entrevistas se pusieron de acuerdo, con el único propósito de beneficiar a la aspirante **Katherine Arenas Álvarez**; afirmación que soporta con las hojas de calificación, donde 8 concejales le pusieron 100 a la aspirante mencionada, sin exponer las razones por las cuales le daban el máximo puntaje permitido.

-. Igualmente, se pusieron de acuerdo -considera que no debe tomarse como mera coincidencia- que los mismos ocho concejales la calificaron a ella -**Patricia Morera**- con 1, la mínima calificación permitida.

-. Una vez finalizadas las pruebas -evaluaciones de las hojas de vida, de conocimientos y entrevista- la mesa directiva expidió la correspondiente lista de elegibles, atendiendo la consolidación de resultados.

-. El 18 de diciembre de 2020, la plenaria del Concejo Municipal adelantó la respectiva elección del cargo de secretaria general, sesión en la que también se presentan irregularidades, tales como:

a.- Una vez expedida la Lista de Elegibles, los concejales debían, en virtud de la convocatoria, elegir el primero de la lista que, para este caso, obedecía a ella -**Patricia Morera Anaya.**

b.- Al momento de la votación, efectivamente 8 concejales -**Wilmer Orlando Carvajal Olaya, Jhonny Andrés Basto Hernández, José Jair Echeverry Ospina, Héctor Reyes Rativa, Luis Carlos Richard Rodríguez, Orlando Granados Acevedo, Arnold Mauricio Pinilla Triana** y **Gildardo Santos Chaparro**- manifestaron a viva voz, mediante el uso de la palabra al momento de votar, que su voto era por ella -**Patricia Morera Anaya;** así que, de los 15 votos posibles, ella tenía 8.

c.- Al momento de contar los votos, por extrañas circunstancias, la comisión escrutadora contó 8 votos en favor de **Katherine Arenas Álvarez** y 7 en favor de **Patria Morera**, hecho contrario a lo expuesto por los concejales al momento de votar.

-. La comisión escrutadora y la mesa directiva declararon elegida a **Katherine Arenas Álvarez** como secretaria general para la vigencia 2021.

-. La situación presentada en la entrevista, la forma de calificación en la prueba de evaluación de 8 concejales, la cual fue realizada sin argumentos serios, parcializados y amañados, con un claro y notorio direccionamiento de lo que iba a ser la elección plenaria, su actuar doloso y mal intencionado en el resultado del proceso de selección, aún mas grave el hecho que 8 concejales manifestaran su intención de voto por **Patricia Morera**, y luego, la comisión escrutadora solo cuenta 7 votos, todos ellos, son hechos que vulneran sus derechos fundamentales.

-. El Concejo no respetó los principios al mérito, al no elegir a la primera de la lista de elegibles.

- Con base en dichos precedentes, la accionante solicita que:

-. Se protejan sus derechos derechos al debido proceso, igualdad, trabajo y acceso a los cargos públicos por concurso de méritos, vulnerados por el **Concejo Municipal de Acacías -Meta.**

-. Se ordene al Concejo Municipal accionado respetar la lista de elegibles proferida al interior del Concurso de Méritos para el nombramiento de la secretaria general de ese órgano colegiado.

-. Se ordene al Concejo Municipal elegir como secretaria general de ese órgano colegiado a quien ocupó el primer puesto del concurso de méritos adelantado.

2-. Respuesta de las accionadas y vinculadas.

Con ocasión de la vacancia judicial iniciada el 19 de diciembre de 2020, el Consejo Seccional de la Judicatura del Meta emitió el Acuerdo No CSJMET202-107 del 28 de octubre de 2020, con el cual asignó turno para dicho periodo al **Juzgado Promiscuo Municipal de Guamal, Meta,** autoridad judicial que, finalmente, avocó el conocimiento de la acción de tutela, mediante providencia del 22 de diciembre de 2020, y emitió el fallo que ahora se revisa.

En el auto admisorio se dispuso la notificación de la entidad accionada Concejo Municipal de Acacías, Meta.

Posteriormente, mediante providencia del 24 de diciembre de 2020, el a quo dispuso la vinculación de la **Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC-**; de cada uno de los concejales: **Liliana Marcela Baquero Torres, Jhonny Andrés Bastón Hernández, Wilmer Orlando Carvajal Olaya, Ferley Carvajal Rey, Andrés Mauricio Chávez Quevedo, Zulma Yolima Diaz Díaz, José Jair Echeverry Ospina, Jhonny Stevenson Giraldo Aragón, Orlando Granados Acevedo, Arnold Mauricio Pinilla Triana, Víctor Julios Ramos Cuvillos, Héctor Reyes Rativa, Luis Carlos Richar Rodríguez Cortes, Gildardo Santos Chaparro** y **Alexander Valero**, y, de cada una de las aspirantes del Concurso de Méritos par nombrar secretario general del Concejo Municipal accionado, ellas son, **Katherine Arenas Álvarez, Johana Patricia Ovalle Rojas, Angelica Alejandra Ordoñez Osorio** y **Lizeth Katherine Rodríguez Prieto.**

2.1.- Respuesta de la concursante Angelica Alejandra Ordoñez Osorio.

La participante del Concurso para nombrar el secretario general del Concejo Municipal accionado, frente a los hechos expuestos por la accionante, expuso lo siguiente:

"PRIMERO: CIERTO, la corporación apertura una convocatoria para la elección de la Secretaria General de ese organismo.

SEGUNDO: NO ME CONSTA, sin embargo, como se observa en las pruebas aportadas se observa el nombre de la accionante dentro de las listas y resultados de las etapas de la convocatoria como también, aparece mi nombre como concursante.

TERCERO: ES CIERTO, EL 16/Dic/2020, se llevó a cabo la entrevista de las concursantes que realizamos la prueba, estableciéndose las reglas de la misma en la Resolución No. 073 de 2020, en especial la forma de calificación de 1 a 100 donde los evaluadores debían soportar sus calificaciones de manera objetiva, sin razones políticas, sin distinción de residencia y forma de presentación de la prueba, como sucedió en mi caso que, me discriminaron por residir en otro municipio y haber presentado la entrevista de forma virtual (evaluadores 7, 6 y 3) el resto se abstuvieron a soportar las respuestas.

Es de resaltar que, los evaluadores se encontraban evidentemente inclinados y divididos ante dos (2) candidaturas, es decir, por la accionante la Sra. Moreno Anaya y la Sra. Arena Alvares, lo anterior se prueba con sólo el analizar los resultados de las calificaciones de los evaluadores que, se precavieron a calificar con los resultados mas bajos a quienes no contábamos con acompañamiento político, como fue en mi caso que participe con la legitima confianza de poder hacer parte de un concurso trasparente y no irregular e parcializado como realmente sucedió.

CUARTO: ES CIERTO PARCIALMENTE, es totalmente cierto que, los evaluadores faltaron a la forma de evaluar de manera responsable, imparcial, objetiva y con mayor énfasis con Transparencia a la entrevista de quienes participamos en ella con la legitima confianza de encontrar una oportunidad y no una mera formalidad de llenar espacios para justificar el actuar de un Concejo dividido políticamente ante dos candidatas la Sra. Moreno Anaya y la Sra. Arena Alvares.

Confianza que se quebranta con la forma en que se calificó y por no haberse considerado la experiencia y formación académicas de quienes nos postulamos como es mi caso la única profesional con sólo la falta de la graduación.

QUINTO: ES CIERTO, El concejo violo con flagrancia los principios de imparcialidad, moralidad y selección objetiva no de la Sra. Moreno Anaya y la Sra. Arena Alvares, si no de quienes participamos creyendo en la meritocracia.

SEXTO: ES CIERTO, pero se expidió de forma irregular.

SÉPTIMO: NO ME CONSTA, no me permitieron llegar a esa instancia, luego que era evidente la inclinación del concejo ante las concursantes Sra. Moreno Anaya y la Sra. Arena Alvares, sin embargo, esto es una prueba más de que la división política de la corporación que vulnero los Derechos no de la accionante sino de quienes participamos creyendo en el mérito.

OCTAVO: NO ME CONSTA.

NOVENO: ES CIERTO, aclarando que, la forma de calificación sólo dio muestra de división política e inclinación ante dos candidatas la Sra. Moreno Anaya y la Sra. Arena Alvares, defraudando verdaderamente a quienes participamos creyendo en la meritocracia.

DÉCIMO: No es un hecho es una afirmación, lo cierto es que, el concurso desde su inicio estuvo direccionado hacia dos candidatas la Sra. Moreno Anaya y la Sra. Arena Alvares, y quienes creíamos en la meritocracia estamos condenados al fracaso, como es mi caso que cuento con la mejor preparación académica y cuento en experiencia suficiente para el cargo."

Con base en los precedentes, la concursante, vinculada a la presente acción de tutela, solicita en su contestación lo siguiente:

"1. ACCEDER a proteger los Derechos Fundamentales de manera PARCIAL en protección de Derechos consolidados de quienes los que hasta el momento tenemos aspiraciones legítimas para ser elegidos por haber pasado las diferentes etapas con éxito,

2. ORDENAR al Concejo de Acacias Meta, realice nuevamente la etapa de entrevistas a todos concursantes con la OBLIGACIÓN de la corporación para que la califique bajo las reglas de la Resolución No. 073 de 2020.

3. ORDENAR al Concejo de Acacias Meta, realice me realice la entrevista de manera virtual por ser una ciudadana residente del Municipio de Zarzal (V), y debido a la distancia y el crecimiento y el peligro de contagio de Sars-Corv2."

2.2.- Respuesta de la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC.

El apoderado de la Comisión señala que, en el caso de esa entidad se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva.

2.3.- Respuesta del concejal Andrés Mauricio Chávez Quevedo.

El Concejal, vinculado a la presente acción de tutela, manifestó que de acuerdo al reglamento interno del Concejo Municipal, Acuerdo 427 del 2016, artículo 50, y, artículo 2° del Acto Legislativo 02 del 2015, la forma de elección del cargo de secretaria general de ese órgano colegiado, es mediante la figura de Convocatoria, y, no de Concurso de Méritos; razón por la cual, hace énfasis en la diferencia entre estas dos figuras, advirtiendo que, en el marco de la primera no es obligación del Concejo elegir quien ocupe el primer puesto, pues ello ocurre es en los concursos de méritos.

En ese sentido, solicita que, se denieguen las pretensiones de la accionante, por cuanto carecen de fundamento, además, acceder a las mismas, sentaría un

precedente equivocado, máxime, cuando los nombramientos del cargo de secretario general de los Concejos Municipales del orden nacional, se realizan a través de Convocatoria Pública, y, de la lista de elegibles resultante de las pruebas realizadas, los concejales tienen la potestad de elegir a quienes en su discrecionalidad decidían, esto, por cuanto los Concejos son órganos Político-Administrativos.

2.4.- Respuesta del concejal Farley Carvajal Rey.

El concejal solicitó que se restituyera el derecho adquiridos por la señora **Katherine Arenas Alvares,** quien fue elegida por el Concejo Municipal de Acacías, Meta, como secretaria general, quien superó todas las pruebas y hace parte de la lista de legibles resultante de la Convocatoria adelantada por ese órgano; también, pidió que se negaran las pretensiones de la accionante, quien confunde Convocatoria Pública con Concurso Público de Méritos.

III-. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El juzgado de conocimiento, mediante fallo del 6 de enero de 2021, resolvió lo siguiente:

> *"PRIMERO: CONCEDER la acción de tutela instaurada por PATRICIA MORERA AMAYA por las razones dadas en la parte motiva de esta providencia.*
>
> *SEGUNDO: Ordenar a los integrantes del Concejo Municipal de Acacias Meta, al Presidente del Concejo Municipal de Acacias Meta que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación del presente fallo, procedan a nombrar en el cargo de secretaria general del concejo municipal de Acacias Meta para el período 2021 a la señora PATRICIA MORERA ANAYA, quien obtuvo el mayor puntaje en el proceso de méritos convocado para el efecto según consolidación de resultados de la lista de elegibles.-*
>
> *TERCERO: Notifíquese a la accionante, a los integrantes del Concejo Municipal de Acacias, al presidente del Concejo Municipal de Acacias, a las personas participantes de la convocatoria, al Departamento Administrativo del Servicio Civil, y a las demás involucrados en los hechos el contenido de este fallo por el medio más expedito."*

IV-. IMPUGNACIÓN

Como en el presente caso se formularon varias impugnaciones contra el fallo de primera instancia, todas ellas con el objetivo que se revocara la decisión, y en su lugar, se negaran las pretensiones de la accionante, por no existir transgresión de los derechos fundamentales alegados, se hará alusión a cada una de ellas de la siguiente manera:

4.1.- Impugnación de la concejal Zulma Yolima Díaz Díaz:

La concejal fundamentó su recurso en tres puntos, a saber:

a.- Criterios para la elección del secretario del Concejo Municipal.

Para el caso concreto, de conformidad con lo determinado en el artículo 50 del Acuerdo 427 de 2016, a través del cual se establece el Reglamento Interno del Concejo Municipal de Acacías, "*El secretario general será elegido por el concejo para un período legal de un (1) año, de la lista de admitidos previa convocatoria pública con criterios de mérito*". Asimismo, la Resolución N°18 del 05 de marzo de 2020, expedida por la actual Mesa directiva, mediante la cual actualizo y ajustó el Manual de funciones y competencias, en cuanto al cargo de Secretario General del Concejo Municipal de Acacías, estableció que *"El cargo de Secretaria General del Concejo será elegido por los Concejales del Municipio de Acacías, previa convocatoria realizada, verificación de requisitos mínimos establecidos y entrevista pública ante la plenaria donde se surtirá finalmente el proceso de elección".*

En ejercicio de las anteriores facultades, la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Acacías expidió la Resolución 048 del 17 de noviembre de 2020 "Por medio de la cual se realiza una convocatoria para la elección de la Secretaria General del Concejo Municipal de Acacías", la cual fue modificada por la Resolución 073 del 1 de diciembre de 2020 y la Resolución 077 del 17 de diciembre de 2020.

En las referidas resoluciones se establecieron las reglas de la Convocatoria Pública para la elección del Secretario General del Concejo, dentro de los cuales está:

1. Requisitos y documentos.
2. Pruebas, puntaje y ponderación.
3. Etapas de la estructura del proceso.
4. Cronograma del proceso.
5. Principios orientadores del proceso.
6. Empleo convocado.
7. Naturaleza del cargo.
8. Funciones.
9. Reclamaciones.

Como se puede observar, en la convocatoria pública para la elección del Secretario General del Concejo municipal de Acacías, se cumplieron con los criterios de mérito que establece el artículo 126 de la Constitución Política y de acuerdo al alcance dado por el Consejo de Estado, el cual estableció*: "Se podría decir entonces que la convocatoria pública, como está consagra en el artículo 126 Superior, es un nivel intermedio entre ese tipo de procedimientos en los que no necesariamente se debe designar*

a quien ocupe el primer lugar en una lista de elegibles – como sí ocurre en los concursos de mérito–, pero que, en todo caso, sí requiere de la fijación de unos procedimientos y requisitos mínimamente reglados –lo cual se evidencia en menor medida en los avisos de invitación– que consulten criterios de mérito".

Como se puede observar, con la convocatoria se buscó establecer la capacidad e idoneidad de la persona que fuera a ocupar el cargo de Secretario General a través del estudio de las (i) calidades académicas, (ii) la experiencia y (iii) las competencias.

b.- Diferencia entre el concurso público de mérito y la convocatoria pública.

Si bien el mecanismo de convocatoria consagrado en la Carta y el concurso público tienen como común denominador el "mérito", uno y otro no son equiparables, pues, mientras este último es la regla general, el primero constituye un procedimiento exceptivo y, por tal, con características propias.

Sobre este punto el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, a través del concepto de noviembre diez (10) de 2015, radicación No. 2274, expediente No. 11001-03-06-000-2015-0182-00, C.P. Álvaro Namen Vargas, sobre la diferencia entre el concurso público de mérito y la convocatoria pública, se pronunció en los siguientes términos:

> *"en el caso consultado los debates legislativos dan cuenta de que el Acto Legislativo 2 de 2015 al utilizar la expresión "convocatoria pública" optó por un mecanismo de elección que si bien se funda en los mismos principios básicos de los concursos públicos (incluso en cuanto al criterio de mérito), se diferencia de estos en que al final del proceso de selección las corporaciones públicas conservan la posibilidad de valorar y escoger entre los candidatos que han sido mejor clasificados. Se entendió que, si se adoptaba un concurso público de méritos como tal, se obligaba al organismo nominador a nombrar de acuerdo con el orden de clasificación de los aspirantes, lo que se consideró como una reducción indebida de la autonomía de las corporaciones públicas. Por tanto, se dijo, era necesario acudir a un sistema transparente, público, objetivo y basado en el mérito, pero que fuera distinto al concurso público en cuanto permitiera al organismo elector escoger entre los varios candidatos que superaran la etapa de selección. (...) el constituyente derivado quiso diferenciar la convocatoria pública del concurso público de méritos del artículo 125 de la Constitución Política, particularmente porque en los procesos de elección mediante convocatoria pública no existe un orden obligatorio de escogencia entre los candidatos que superan las etapas de selección, tal como ocurre en los concursos de méritos. (...) Sin embargo, en lo demás (publicidad de la convocatoria, reclutamiento de los mejores perfiles, transparencia, aplicación de criterios objetivos y de mérito, etc.) puede decirse que no existen diferencias sustanciales entre uno y otro mecanismo de selección de servidores públicos".*

De lo anterior se concluye que una de las principales diferencias entre el concurso público de mérito y la convocatoria pública está en la etapa de elección, ya que en el

primero el nominador obligatoriamente debe elegir a la persona que haya ocupado el primer lugar en la lista de elegibles, mientras que en el segundo no existe un orden obligatorio de selección, lo anterior, atendiendo el principio de autonomía de las corporaciones públicas.

c.- Error en los criterios jurídicos que sustentan el fallo de primera instancia.

Dentro de los argumentos que sustentan la sentencia de primera instancia de la tutela de la referencia, el juez constitucional establece:

> *"Se tiene el concepto a nivel jurisprudencial que la lista de elegibles es el acto administrativo que conforma y adopta una entidad, que el mismo otorga una posición a los elegibles en estricto orden de mérito, y esta posición de ubicación se crea a partir de los resultados obtenidos en el proceso de selección para la provisión de un empleo, en el caso concreto se trata para proveer el cargo de secretaria general del concejo municipal de Acacias por el año 2021 en cuyo listado figura la accionante en el primer puesto con un puntaje según la tabla que obra en el proceso y es la misma que se transcribió en esta sentencia de tutela, puntaje que corresponde al valor numérico de 92.15."*

Asimismo, el juez de tutela expresó lo siguiente:

> *"Para el despacho judicial es claro entonces, que las corporaciones públicas en este caso el ente accionado no puede transgredir derechos fundamentales de la concursante, por lo tanto, la lista de elegibles es un acto administrativo de carácter particular que debe ser utilizada para proveer los cargos convocados. El fin de la lista de elegibles es el tener por parte del nominador el resultado de la participación en el concurso de méritos, en la que de manera ordenada se indican las personas que alcanzaron los mejores resultados en las diferentes pruebas realizadas para acceder a los respectivos cargos ofertados. De acuerdo a la Jurisprudencia Constitucional la provisión de cargos debe tener en cuenta el orden establecido en el correspondiente registro de elegibles, so pena de afectar diversos derechos fundamentales".*

Al estudiar el fallo de primera instancia, se observa que el sustento jurídico que utiliza el juez está relacionado con el concurso público de mérito, que como se explicó anteriormente, difiere del alcance de la convocatoria pública que deben adelantar las corporaciones públicas para la elección de los servidores públicos de acuerdo a lo establecido en el artículo 126 de la Constitución Política de Colombia.

Así las cosas, yerra el juez de tutela al concluir que la persona que ocupó el primer lugar en la lista de elegibles como resultado de la convocatoria pública debe ser obligatoriamente elegido como secretario general del concejo municipal, ya que mantener esta tesis, es equiparar la convocatoria pública con el concurso público de méritos, lo cual desconoce el espíritu del artículo 126 de la Constitución Política, que como se citó anteriormente, que no es otro que crear un mecanismo de elección que si bien se funda en los mismos principios básicos de los concursos públicos

(incluso en cuanto al criterio de mérito), se diferencia de estos en que al final del proceso de selección las corporaciones públicas conservan la posibilidad de valorar y escoger entre los candidatos que han sido mejor clasificados, en atención de principio de autonomía de las corporaciones públicas, que en últimas, fue lo que hizo el Concejo de Acacías.

En conclusión, la recurrente considera que, el **Concejo Municipal de Acacías Meta,** no le vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, al principio de confianza legítima y acceso a cargos públicos invocados por la accionante, y tutelados por el juez de primera instancia, toda vez que como se ha explicado en el presente documento, la referida Corporación actuó de acuerdo con la discrecionalidad que le otorga el artículo 126 de la Constitución Política, en atención al principio de autonomía.

4.2.- Impugnación del presidente del Concejo Municipal de Acacías -Meta.

El presidente del Concejo accionado, formuló recurso de impugnación, fundamentando el mismo en que, atendiendo a las consideraciones esbozadas por el *a quo* sobre la decisión adoptada, es fundamental establecer la clara diferencia sobre el sentido esencial de la Convocatoria Pública, y el hilo conductor que determina la brecha existente con el denominado Concurso de Méritos, porque no puede considerarse que ambos son iguales, porque son disímiles, en el aspecto del orden de elegibilidad, y que la estructura del proceso, en el caso específico, puede determinarse el procedimiento por parte de la Corporación Pública, por cuanto, se ciñe al reglamento interno del Concejo, y si en el mismo no reza de forma específica, el acto administrativo de Convocatoria lo determinará, situación que es distinta en un concurso, que, en su mayoría, están reglados, por ejemplo, los concursos de carrera de régimen especial, caso que no es asunto a tratar en este recurso.

El problema jurídico que es derrotero del sustento de la impugnación a la decisión adoptada en primera instancia por el Juzgador en relación a decidir conforme a que se emitió una lista de elegibles por parte de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Acacías, y apreciando que la señora **Patricia Morera Anaya**, es quien ocupaba el primer lugar, debía ser ella, quien fuese elegida, situación jurídica que cercenaba totalmente el derecho al voto por los Concejales, y afecta profundamente el ejercicio constitucional de ámbito político sobre la elección de funcionarios, toda vez que, si se mantiene dicha regla de elegir en el orden estricto, se entraría en el campo de un concurso de méritos, desdibujando el sentido de la norma cuando el Legislador expidió el Acto Legislativo 02 de 2015, sembró una clara diferenciación entre convocatoria pública y el concurso de méritos, y precisó que si bien ambos

comparten los principios orientadores, y el criterio de mérito es piedra angular, el primero, la convocatoria permite un radio de acción por los miembros de una corporación pública, como lo es el Concejo Municipal de Acacías, para decidir mediante votación secreta quien debe ser la Secretaria General del Concejo, por esto, no es dable restarle dicha autonomía que guarda la entidad político-administrativa.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 136 de 1994, *"El Concejo Municipal elegirá un secretario para un periodo de un año, reelegible a criterio de la corporación y su primera elección se realizará en el primer periodo legal respectivo."*.

Esta disposición establece que corresponde al Concejo realizar la elección de su secretario. Sin embargo, la norma no previó ningún trámite o procedimiento para el efecto, razón por la que se entendía que la corporación pública tenía discrecionalidad y autonomía para fijar la forma en la que realizaría la designación. Sin embargo, a raíz de la expedición del Acto Legislativo 2 de 2015 las funciones electorales asignadas a las corporaciones públicas deben ejecutarse de acuerdo con lo establecido en el artículo 126 Superior.

Por tanto, no cabe duda de que por disposición constitucional desde el año 2015 las designaciones a cargo de las corporaciones públicas, entre las cuales se encuentran los concejos municipales deben estar precedidas de una convocatoria pública regulada por la ley, entidad que debe ceñirse a los postulados ahí expuestos.

El juzgador reitera y cita la Sentencia T-502-2010/ Concurso de Méritos de la Corte Constitucional, aduciendo que descarta de plano que el Concejo Municipal tenga la autonomía para elegir a la Secretaría General conforme una lista de elegibles, sin que sea de obligatorio cumplimiento designar a la persona ubicada en el primer lugar de la lista, y procede a citar la sentencia referida en este párrafo, la cual plasma el caso sobre un concurso de méritos, lo cual es, totalmente distinto a la convocatoria pública para elección de funcionarios como la Secretaria General del Concejo, donde los Concejales les asiste el derecho en plenaria de realizar votación como órgano político que es, y asimismo, derivado del resultado elegir a quien consideren idóneo basado en el mérito, por tanto, la referencia jurisprudencial no es admisible para el caso concreto.

4.3.- Impugnación de la concejal Liliana Marcela Baquero Torres.

En el escrito de impugnación, la concejal también hace referencia a la diferencia entre Convocatoria Pública y Concurso de Méritos, señala la normatividad aplicable al caso de elección del secretario general del Concejo Municipal de Acacías, Meta, explica la naturaleza del cargo, cita cada uno de los Actos Administrativos que

deben ser tenidos en cuenta al momento de decidir el caso tutelado, resume cada uno de las fases de la Convocatoria aquí cuestionada y hace énfasis en la legalidad de la elección del cargo convocado.

Con base en lo anterior, concluye que, no se materializa la violación de derechos fundamentales invocados por la accionante y erro el a quo al desestimar las razones expuestas en la contestación de la tutela, al dar por hecho que del proceso de selección realizado para el cargo convocado aplicaba la modalidad de concurso de méritos y se obligaba al concejo a elegir al primero de la lista de elegibles. Desconociendo el alcance que el legislador mediante acto legislativo le quiso dar al diferenciar la forma de proveer el cargo de secretaria general de una corporación pública. Al no haberse materializado violación alguna a los derechos fundamentales impetrados por la accionante, en cambio si los derechos de la accionante tienen límites que podrían a raíz de la decisión errada del A quo al realizar una indebida interpretación y aplicación del mérito en convocatoria pública, vulnera los derechos que le genero la elección de la secretaria a la concursante elegida por la corporación.

V-. RAZONAMIENTOS QUE FUNDAMENTAN LA CONCLUSIÓN

1-. Problema Jurídico

Con fundamento en la decisión cuestionada y las razones expuestas por los concejales recurrentes, corresponde a este juzgador resolver si se debe revocar el fallo de primera instancia, que concedió el amparo constitucional deprecado por la señora **Patricia Morera Anaya**, y, ordenó su nombramiento como secretaria general del **Concejo Municipal de Acacías -Meta,** y en su lugar, negar la acción de tutela, atendiendo que existió error por parte del a quo al no diferenciar entre Concurso de Méritos y Convocatoria Pública.

Sin embargo, previo a resolver el problema jurídico anterior, debe el despacho analizar sí la acción de tutela es procedente para resolver de fondo la controversia suscitada entre los participantes de una Convocatoria Pública y el órgano colegiado que convoca, atendiendo que en dichos eventos existen otros medios de defensa judicial.

2-. Sobre la procedencia de la acción de tutela cuando existen otros medios de defensa judicial.

Conforme al artículo 86 de la Constitución y a lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la Acción de Tutela, de manera general, ésta tiene como objeto la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas *"cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la*

omisión de cualquier autoridad pública" o, de un particular en las condiciones determinadas en dichas normas. Procede siempre y cuando no exista otro medio judicial de defensa idóneo, es decir, tanto o más eficaz que la acción de tutela para lograr la garantía efectiva del derecho vulnerado o amenazado, a menos que se ejerza como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Es, además, un mecanismo subsidiario; en cuanto que solo resulta procedente cuando se carece de otro medio judicial ordinario para el efecto de su protección. No obstante, excepcionalmente, pero de manera transitoria procede así exista otro instrumento judicial ordinario cuando se trata de evitar un perjuicio irremediable, de forma que de no ser recurriendo a ella, tal perjuicio se consumaría irreversiblemente.

2.1.- Análisis del caso concreto - Procedencia de la acción de tutela para intervenir en el proceso de selección del cargo de secretario general de un Concejo Municipal.

Acorde con la documental aportada se tiene:

-. La Mesa Directiva del **Concejo Municipal de Acacías -Meta,** profirió la Resolución No 48 del 17 de noviembre de 2020 *"Por medio del cual se realiza una Convocatoria para la elección de la secretaria general del Concejo Municipal de Acacías"* (Fls. 134 al 139).

-. La Mesa Directiva del **Concejo Municipal de Acacías -Meta,** profirió la Resolución No 73 del 1° de diciembre de 2020 *"Por medio de la cual modifica la Resolución 48 de 2020 "Por medio de la cual se realiza una Convocatoria para la elección de la secretaria general del Concejo Municipal de Acacías"* (Fls. 140 al 145).

-. La Mesa Directiva del **Concejo Municipal de Acacías -Meta,** profirió la Resolución No 77 del 17 de diciembre de 2020 *"Por medio de la cual se ajusta y modifica la Resolución 073 de 2020 y se dictan otras disposiciones en el marco de la Convocatoria para la elección de la secretaria general del Concejo Municipal de Acacías"* (Fls. 20 al 24).

-. En la Convocatoria para la elección de la secretaria general del Concejo Municipal accionado fueron admitidas las concursantes: **Patricia Morera Anaya, Katherine Arena Álvarez, Johana Patricia Ovalle Rojas, Angelica Alejandra Ordoñez Osorio** y **Lizeth Katherine Rodríguez Prieto** (Fl. 25).

-. Que mediante Acta No 5 el Concejo Municipal accionado emitió el consolidado de Resultados obtenido por las aspirantes dentro del proceso de selección de la secretaria general, dentro de la cual se publicaron los resultados en orden, de la siguiente manera:

LISTA DE ELEGIBLES EN ESTRICTO ORDEN DE RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE LAS PRUEBAS REALIZADAS

ORDEN	IDENTIFICACION DE LOS ASPIRANTES		PONDERACION DE PUNTAJES			CONSOLIDACION RESULTADO FINAL			
NUM.	NOMBRE COMPLETO DEL ASPIRANTE	NUM. CEDULA	CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	ESTUDIOS ADICIONALES	EXPERIENCIA	TOTAL PARCIALIDAD	PRUEBA CONOCIMIENTOS 5%	PRUEBA ENTREVISTA 5%	TOTAL CONVOCATORIA 100
1	Patricia Morera Anaya	55.058.656	60	10	10	80	7,5	4,65	92,15
2	Katherine Arenas Alvarez	1.030.564.899	60	10	10	80	5	5,99	90,99
3	Angélica Alejandra Ordoñez O	1.112.626.153	60	10	10	80	5,5	2,11	87,61
4	Lizeth Katherine Rodríguez P.	1.122.134.161	60	10	10	80	5,5	1,60	87,10
5	Johana Patricia Ovalle Rojas	40.434.906	60	10	0	70	4,7	1,94	75,94

ORLANDO GRANADOS ACEVEDO
Presidente Concejo Municipal

HECTOR REYES RATIVA
1ER Vicepresidente

ARNOLD MAURICIO PINILLA TRIANA
2DO Vicepresidente

-. Que el 18 de diciembre de 2021 se llevó a cabo la etapa de la Convocatoria denominada *"Elección y Posesión secretario (a) general del Concejo Municipal"*, en donde los diferentes concejales emitieron de forma escrita y secreta su voto por cada una de las aspirantes inscritas en la Lista de Elegibles publicada por la Mesa Directiva del órgano accionado.

Ahora, como se ha dicho, la accionante centra la acción de tutela en el hecho que, pese haber ocupado, por mérito, el primer lugar en la lista de elegibles, no obstante, en la elección surtida el 18 de diciembre de 2021, los miembros del Concejo Municipal, que en su mayoría habían votado por ella, finalmente, optaron por elegir a la segunda aspirante inscrita, vulnerando con ello sus derechos al debido proceso, igualdad, trabajo y acceso a los cargos públicos por concurso de méritos.

Empero, debe el despacho señalar que, frente a las controversias suscitadas entre los participantes de una Convocatoria Pública y el órgano colegiado que convoca, existen otros medios de defensa judicial, siendo el idóneo y eficaz el denominado medio de control de *"Nulidad Electoral"*, consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011 -Código Contencioso Administrativo- el cual establece lo siguiente:

> *"ARTÍCULO 139. NULIDAD ELECTORAL. Cualquier persona podrá pedir la nulidad de los actos de elección por voto popular o por cuerpos electorales, así como de los actos de nombramiento que expidan las entidades y autoridades públicas de todo orden. Igualmente podrá pedir la nulidad de los actos de llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones públicas."*

A este respecto llama la atención del despacho, una de las pruebas aportadas por la recurrente -concejal- **Liliana Baquero**, quien allega la providencia proferida el 19 de noviembre de 2020 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, en donde se: *"... profiere sentencia por escrito de única instancia dentro del proceso de nulidad electoral instaurado por JOSÉ ENRIQUE MOLINA ROJAS contra*

el acto de elección de la Secretaria General del Concejo Municipal de Acacías (Meta), señora LEIDY ALEXANDRA ROMERO URUEÑA para el periodo 2020, contenido en el Acta de Sesión Plenaria No. 002 del 03 de enero de 2020."

Como se observa, dentro de dicho proceso de Nulidad Electoral también se discute la elección de la secretaria general del **Concejo Municipal de Acacías, Meta**, para el periodo 2020, trámite procesal dentro del cual se resuelve lo siguiente:

> **PRIMERO: DECLARAR** la nulidad parcial del Acta de Sesión No. 02 del 03 de enero de 2020 del Concejo Municipal de Acacías-Meta, en lo que respecta a la elección de la señora LEIDY ALEXANDRA ROMERO URUEÑA, como Secretaria General del Concejo Municipal de Acacías para el periodo 2020.
>
> **SEGUNDO:** Contra la presente decisión no procede recurso de apelación, al tratarse de un proceso de única instancia.
>
> **TERCERO: NOTIFICAR** esta decisión al demandante, señor JOSÉ ENRIQUE MOLINA ROJAS, a los demandados, Concejo Municipal de Acacías-Meta y la señora LEIDY ALEXANDRA ROMERO URUEÑA y a la agente del Ministerio Público, de conformidad con el artículo 289 del CPACA.
>
> **CUARTO:** Ejecutoriada esta providencia, archívense las diligencias.

En ese sentido, debe concluir el despacho que dicho medio de control resulta idóneo y eficaz para resolver el problema jurídico planteado por la accionante en el presente trámite constitucional, legitimando la improcedencia de la acción por existir otro medio de defensa judicial.

Además, debe atenderse que, en este evento, la acción constitucional no se interpone como "*mecanismo transitorio"* para evitar un perjuicio irremediable, por tanto, no existe justificación o razón alguna para inaplicar el numeral 1°, artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 el cual reza que la acción de tutela no procederá *"Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante."*

En esencia, se reitera que no se evidencia que los mecanismos ordinarios de defensa judicial no sean idóneos para garantizar una solución adecuada a la controversia planteada. Por el contrario, como se expresó, pretermitiendo acudir ante el juez natural se busca por esta vía sustituirlo.

En igual sentido, debe advertirse a la parte accionante que el primer análisis que se surte al interior de la acción de tutela, radica en la procedencia del mecanismo constitucional, determinando para ello si se cumplen con los requisitos de subsidiaridad e inmediatez, por tanto, en caso que no se encuentre acreditado uno de

ellos, como sucede en el caso concreto en donde no se acreditó el cumplimiento del requisito de subsidiaridad, corresponde al Juez Constitucional declarar la improcedencia de la acción, sin que para ello requiera realizar un análisis profundo de los hechos expuestos en la acción de tutela

Conforme a las razones expuestas se revocará el fallo proferido en primera instancia, que concedió la acción de tutela impetrada por la señora Patricia Morera Anaya y, en su lugar, se negará por improcedente el amparo constitucional deprecado.

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE ACACIAS, META, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, actuando como juez constitucional,

R E S U E L V E:

Primero-. Revocar el fallo de primera instancia proferido el 6 de enero de 2021 por el **Juzgado Promiscuo Municipal de Guamal, Meta,** por las razones expuestas.

Segundo-. En su lugar, **negar** por improcedente el amparo constitucional deprecado por la señora **Patricia Morera Anaya**, identificada con cédula de ciudadanía No 55.058.856.

Tercero-. Comuníquese lo resuelto, tanto al Juez *a quo* como a las partes, por los medios más expeditos y eficaces.

NOTIFÍQUESE Y ENVÍESE A LA H. CORTE CONSTITUCIONAL PARA SU EVENTUAL REVISIÓN-.

El Juez,



DIDIER LÓPEZ QUICENO

RV: CONTESTACION DEMANDA ALEX VALERO RAD 50001-23-33-000-2021-00272-00

Secretaria General Tribunal Administrativo - Seccional Villavicencio <sgtadmvcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mar 10/08/2021 17:21

Para: Gina Paola Rodriguez Gomez <grodrigg@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Iser Leonardo Tejeiro Quintero <itejeirq@cendoj.ramajudicial.gov.co>

6 archivos adjuntos (18 MB)

CONTESTACION DDA ALEXANDER VALERO.docx; CONTESTACION DDA ALEXANDER VALERO.pdf; ACTA No 132 DE DICIEMBRE 12 DE 2020.PDF; ACTA No 133 DE DICIEMBRE 16 DE 2020.PDF; Acuerdo No. 427 Diciembre 9 de 2016.PDF; SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA O-275-2019.docx;

De: Alexander Valero <alexvalero16@hotmail.com>
Enviado: martes, 10 de agosto de 2021 4:59 p. m.
Para: Secretaria General Tribunal Administrativo - Seccional Villavicencio <sgtadmvcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Alexander Valero <alexvalero16@hotmail.com>
Asunto: CONTESTACION DEMANDA ALEX VALERO RAD 50001-23-33-000-2021-00272-00

cordial saludo envio contestacion de la demanda.

Acacias, 05 de agosto de 2021

Honorable Magistrados
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META
H. MP. DRA NOHORA EUGENIA GALEADO PARRA
Villavicencio - Meta
E. S. D.

Asunto: **CONTESTACIÓN DEMANDA PERDIDA DE INVESTIDURA**.

RADICADO: 50001-23-33-000-2021-00272-00
ACCIONANTES: Wilmer Olaya, Orlando Granados, Héctor Reyes y Jhonny Bastos.
ACCIONADOS: Víctor Ramos, Farley Carvajal, Mauricio Chávez, Jhonny Giraldo, Alexander Valero, Zulma Diaz, Liliana Baquero y Gildardo Santos.

Respetada Magistrada:

El suscrito **ALEXANDER VALERO**, mayor de edad, domiciliado en Acacías, identificado con Cédula de ciudadanía No **CC. 17.418.345** , Concejal en ejercicio del Municipio de Acacías, obrando en representación propia, me permito contestar la demanda de **PERDIDA DE INVESTIDURA** en la cual soy uno de los demandados, proceso con radicado: **N° 50001-23-33-000-2021-00272-00,** en los siguientes términos:

1. PRETENSIONES:

Desde ahora me opongo a todas y cada una de las pretensiones, por cuanto los actores carecen de fundamentos de hecho y de derecho frente a las mismas, de tal suerte que sus pretensiones no están llamadas a prosperar y por ende, en su lugar, solicito respetuosamente denegar en su totalidad las suplicas de la misma y exonerarme de toda responsabilidad con fundamento a lo expresado previamente, complementado con las razones y fundamentos que se expresan a continuación en la presente contestación.

2. HECHOS:

AL HECHO 1: Es cierto. Se anexa el acuerdo 427 de 2016 Reglamento interno del Concejo Municipal, en su artículo 50, cabe precisar que dispone, que el secretario general será elegido por el Concejo para un periodo de 1 año, de una lista de admitidos previa CONVOCATORIA PUBLICA con principios de Mérito. Durante el proceso de elección de secretaria me limite a cumplir este artículo.

AL HECHO 2 y 3: Es parcialmente cierto. De acuerdo a las siguientes precisiones, en primer lugar, se le dieron facultades a la mesa directiva según el articulo 50 del acuerdo 427 de 2026 reglamento del Concejo de Acacías, es claro que es para adelantar una **CONVOCATORIA PUBLICA** con principios de mérito para la elección del cargo de Secretaria General del Concejo Municipal de Acacías. Para lo cual se expidieron 3 resoluciones

El Concejo Municipal en uso de sus atribuciones legales, mediante acta número 118 de 13 de noviembre de 2020 se aprobó en plenaria mediante proposición otorgar facultades amplias y plenas a la mesa directiva para que adelantara de conformidad con la el proceso para elección de secretaria general de la vigencia 2021. Desde este momento, la responsabilidad de adelantar el proceso se entrega a la mesa directiva de la corporación, para lo cual la mesa directiva expidió tres resoluciones N. 48, 73 y 77. para llevar a cabo dicho proceso así:

1.

RESOLUCIÓN No. 48
(17 DE NOVIEMBRE DE 2020)

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UNA CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÒN DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS"

2.

RESOLUCION N. 73
(01 de Diciembre de 2020)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION 48 DE 2020 "POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UNA CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÒN DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACIAS"

3.

RESOLUCIÓN No. 77
(17 DE DICIEMBRE DE 2020)

"POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA Y MODIFICA LA RESOLUCIÒN 073 DE 2020 Y SE DICTAN OTRAS DIPOSCIONES EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÒN DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACIAS"

Por lo tanto si se va a mirar la normatividad que aplica a la convocatoria realizada, es necesario tener en cuenta no solo uno o dos artículos de las resoluciones, si no todo el contexto normativo, empezando por del artículo 126 de nuestra constitución, puesto que desde allí parte la diferencia entre el sistema a aplicar que en este caso siempre actué con el firme convencimiento de que aplicaba el artículo 126 Constitucional puesto que se trata de una elección de servidor público atribuida a una CORPORACIÓN PÚBLICA (secretario general del Concejo) y la forma de aplicar el principio de mérito en medio de uso de su autonomía dada a las Corporaciones Públicas, contrario a los demandantes que por lo visto creen que para esta elección aplica un CONCURSO PUBLICO DE MERITOS, pues se debatió por algunos compañeros frente a las dudas que tenían, reitero mi elección y actuar en todo el proceso fue respecto de una convocatoria pública y en este sentido interprete y aplique el mérito en el proceso cuestionado.

Como lo diferencia claramente y aclara en Concepto Sala de Consulta C.E. 2274 de 2015 Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil…. "Además, como ha reiterado la jurisprudencia, es característica esencial del concurso que la lista de elegibles se ordene estrictamente de acuerdo con el resultado del procedimiento de selección (regla de mérito), de modo que quien obtiene la mejor calificación adquiere el derecho a ser nombrado en el respectivo cargo. (…) Ahora bien, en el caso consultado los debates legislativos dan cuenta de que el Acto Legislativo 2 de 2015 al utilizar la expresión "**CONVOCATORIA PÚBLICA**" optó por un mecanismo de elección que si bien se funda en los mismos principios básicos de los concursos públicos (incluso en cuanto al criterio de mérito), se diferencia de estos en que al final del proceso de selección las corporaciones públicas conservan la posibilidad de valorar y escoger entre los candidatos que han sido mejor clasificados. Se entendió que si se adoptaba un concurso público de méritos como tal, se obligaba al organismo nominador a nombrar de acuerdo con el orden de clasificación de los aspirantes, lo que se consideró como una reducción indebida de la autonomía de las corporaciones públicas. Por tanto, se dijo, era necesario acudir a un sistema transparente, público, objetivo y basado en el mérito, pero que fuera distinto al concurso público en cuanto permitiera al organismo elector escoger entre los varios candidatos que superaran la etapa de selección. (…) De este modo, además de que literalmente se trata de expresiones distintas y que el nuevo artículo 126 Constitucional alude a una y otra como figuras separadas (al señalar que la convocatoria aplicará "salvo los concursos regulados por la ley"), la Sala observa que los antecedentes del Acto Legislativo 2 de 2015 ratifican que el constituyente derivado quiso diferenciar la convocatoria pública del concurso público de méritos del artículo 125 de la Constitución Política, particularmente porque en los procesos de elección mediante convocatoria pública no existe un orden obligatorio de escogencia entre los candidatos que superan las etapas de selección, tal como ocurre en los concursos de méritos. Así pues, el sistema de convocatoria pública mantiene un grado mínimo de valoración o discrecionalidad política en cabeza de las corporaciones públicas para escoger entre quienes se encuentran en la "lista de elegibles", aspecto que constituye el elemento diferenciador entre la convocatoria pública de los artículos 126, 178A, 231, 257, 267 y 272 de la Constitución Política, y el concurso público de méritos a que alude el artículo 125 de la misma Carta.."

AL HECHO 4: No me consta, pues, no puedo hacer afirmaciones sobre la expectativa personal de los participantes en la convocatoria.

AL HECHO 5: No me consta. Asumo que fue así no estuve presente ni hice parte de la elaboración de preguntas de prueba de conocimiento, no sé cómo fue la cadena de custodia y mucho menos de la forma de calificación, ni quien puntualmente califico las pruebas y calificación de las mismas, tampoco hice parte de comisión de escrutar los votos ni de verificación de requisitos mínimos al cargo, tan solo participe en la entrevista dando calificación y en el voto de elección de la secretaria..

AL HECHO 6: No es cierto. Por otra parte, me parece una Falacia, irresponsable e incoherente la afirmación que se hace en esta demanda en este hecho: " los mencionados concejales ratificaron con su firma en el reverso de los formatos de calificación y/o votación realizada, por lo que puede demostrarse que bajo su firma y refrendación los formatos anexos a la presente demanda reflejan la verdad del proceso y el TRAFICO DE INFLUENCIAS"

De lo anterior me permito puntualizar lo siguiente:

En primer lugar, el presidente de la corporación designo una comisión escrutadora a los concejales WILMER CARVAJAL, JAIR EHCEVERRY Y ARNOLD PINILLA como consta en el acta N. 134 de 2020, párrafo 1 de la pagina 24 para el escrutinio de los votos de elección de secretaria.

En segundo lugar respecto de las entrevistas, tan solo que se pidieron a 3 concejales que firmaran al respaldo los formatos de calificación, para mayor garantías y que no fueran hacer cambiados físicamente las hojas. Hecho las anteriores aclaraciones reitero, me parece una falacia e irresponsabilidad afirmar que de lo anterior se refleja un **TRAFICO DE INFLUIENCIAS.**

AL HECHO 7: Es parcialmente cierto, si se presentaron las aspirantes el 16 de diciembre, aclarando que dieron respuesta ante la plenaria de unas preguntas, mas no que los interrogantes fueran planteados por la plenaria, por que yo no participe en la elaboración de las preguntas a las diferentes aspirantes, no sabia que se les preguntaría, eso fue una actuación de la mesa directiva. En mi caso al igual que varios compañeros nos enteramos de manera instantánea como iban realizando las preguntas a cada una de las aspirantes y ellas respondían.

Las preguntas se supone, fueron realizadas por la mesa directiva dando cumplimiento a la resolución No 73 del 01 de siembre de 2020 por medio de la cual se modificó la convocatoria para la elección de secretaria del concejo Municipal de Acacías, la cual se anexa, dicha resolución fue expedida por la mesa directiva. En su articulo primero habla de las PRUEBAS, PUNTAJE Y PONDERACION. En los parágrafos 1 y 2 dice:

PARAGRAFO 1. La elaboración de las pruebas de Conocimientos, será única y exclusivamente de manejo de la mesa directiva quien deberá acatar los principios de objetividad, transparencia, imparcialidad y publicidad, en la elaboración de las pruebas, garantizando el protocolo de seguridad, control, cuidado y manejo de las mismas.

PARAGRAFO 2. Las preguntas de las pruebas de entrevista, será única y exclusivamente de manejo de la mesa directiva quien deberá elaborar las preguntas bajo el cumplimiento de los principios de objetividad, transparencia, imparcialidad y publicidad. Las preguntas de entrevista se expondrán únicamente el día de la realización de la prueba.

AL HECHO 8: Es totalmente falso. Es una afirmación de los demandantes que además de irresponsable, carece de soporte probatorio, atenta contra mi dignidad y buen nombre**,** al concluir "que ocho 8 concejales no tuvieron ningún principio de imparcialidad, ni actuaron de buena fe para dar su calificación" me permito precisar lo siguiente:

La No 73 del 01 de siembre de 2020 por medio de la cual se modificó la convocatoria para la elección de secretaria del concejo Municipal de Acacías, la cual se anexa, dicha resolución fue expedida por la mesa directiva. En su artículo primero habla de las PRUEBAS, PUNTAJE Y PONDERACION, de este se tiene en el literal E, define los parameros para la PRUEBA DE ENTREVISTA, indica que:

PUNTAJE: 10% DEL VALOR TOTAL DE LA PRUEBA: El aspirante presentará entrevista en el lugar fecha y hora señaladas. En la entrevista la mesa directiva diseñará 3 preguntas abiertas relacionadas el cargo, sus funciones administrativas y la disposición sobre el cumplimiento de las funciones.

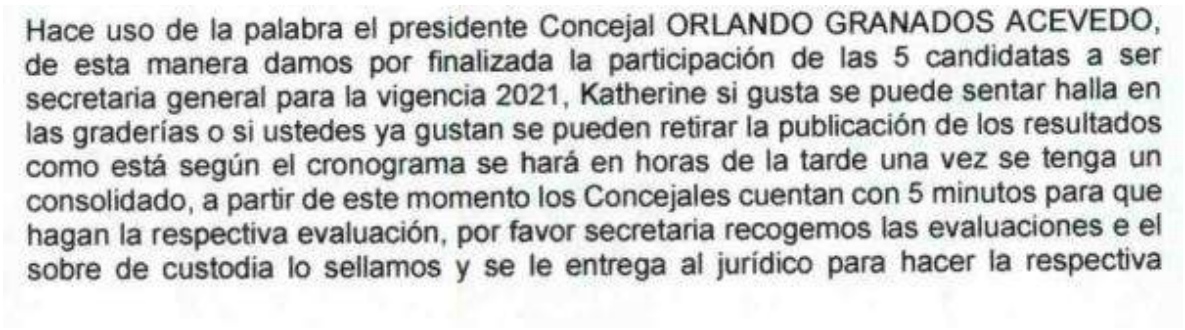
Cada Concejal tendrá la obligación de calificar cada pregunta en un rango de 1 a 100 sin incluir decimales. El total de los resultados se ponderara de forma global y se obtendrá el resultado, correspondiendo este al 10% del total de la Prueba.

Ilustración 1recorte Resolution N.73 de 2020 Concejo de Acacías, pagina 4. indicaciones de prueba entrevista.

De lo anterior se puede observar que se dio un rango de calificación de puntaje de 1 a 100,. Somos 15 concejales, cada uno el puntaje de calificación equivaldría a 1/15, califique según mi criterio al querer la persona que considere según sus respuestas la mas acorde a las exigencias del cargo de Secretaria General del Concejo.

Por otra parte, Como consta en el acta 133 del 16 de diciembre, pagina 21, finalizadas las entrevistas e intervenciones de cada una de las 5 participantes que se presentaron, el presidente nos dio a los concejales 5 minutos para que hiciéramos la evaluación, quiere decir que contábamos con 1 minuto para calificar y llenar el formato de calificación de entrevista de las 5 participantes. De lo anterior puedo manifestar que aunque hubiera querido hacer algunas observaciones respecto de la calificación de las entrevistas, el tiempo no me alcanzó. Notece señora juez, que 1 minuto por cada participante y a su vez eran 3 preguntas quiere decir que tenia 20 segundos para calificar cada pregunta, poner observaciones en esos tiempos dados para mí se convirtió en algo imposible.

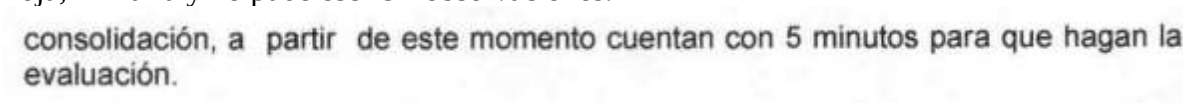
Al final en el último párrafo de la página 20 del acta N.133 de 2020 la cual se anexa, se puede observar lo que indica el presidente una vez finalizada la intervención de entrevista de la ultima aspirante.



Hace uso de la palabra el presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, de esta manera damos por finalizada la participación de las 5 candidatas a ser secretaria general para la vigencia 2021, Katherine si gusta se puede sentar halla en las graderías o si ustedes ya gustan se pueden retirar la publicación de los resultados como está según el cronograma se hará en horas de la tarde una vez se tenga un consolidado, a partir de este momento los Concejales cuentan con 5 minutos para que hagan la respectiva evaluación, por favor secretaria recogemos las evaluaciones e el sobre de custodia lo sellamos y se le entrega al jurídico para hacer la respectiva

Ilustración 2Recorte acta N. 133 de 2020 del concejo municpal pag. 20

Continuando el anterior, en la página 21 primer párrafo nos reitera "cuentan con 5 minutos para que hagan la evaluación", reitero nadie esta obligado a lo imposible, en mi maso no me alcanzaron los 5 minutos para evaluar a las 5 participantes, cada una 3 pregunta, marcar la hoja, firmarla y no pude escribir observaciones.

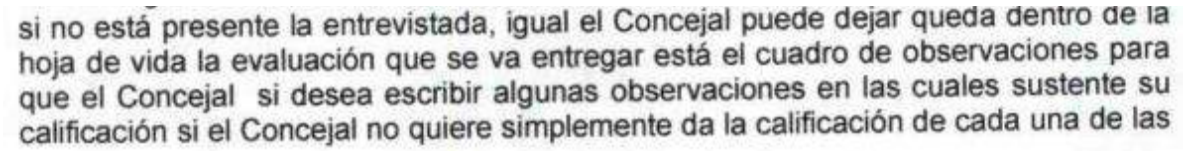


consolidación, a partir de este momento cuentan con 5 minutos para que hagan la evaluación.

Ilustración 3recorte acta 133 de 2020 Concejo Municipal pag. 21

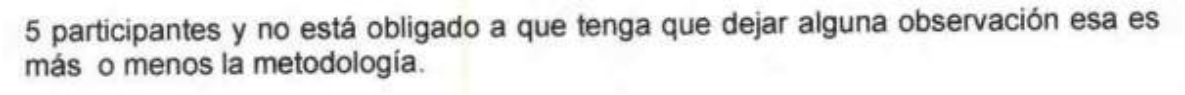
Respecto de que los formatos de calificación de la entrevista entregados a cada concejal, traían la columna de observaciones, esto con el fin de que cada concejal pudiera sustentar su voto.

Me permito traer un recorte del acta No 133 de 2020 del Concejo, anexa, se puede ver el final de la pagina 6



si no está presente la entrevistada, igual el Concejal puede dejar queda dentro de la hoja de vida la evaluación que se va entregar está el cuadro de observaciones para que el Concejal si desea escribir algunas observaciones en las cuales sustente su calificación si el Concejal no quiere simplemente da la calificación de cada una de las

Me permito traer un recorte del acta No 133 de 2020 del Concejo, anexa, ver del inicio de la pagina 6



5 participantes y no está obligado a que tenga que dejar alguna observación esa es más o menos la metodología.

De lo anterior, nótese señora juez que el mismo presidente nos dio las indicaciones de que las observaciones no eran obligatorias, si no optativas, en mi caso y mas como lo dije hace unos párrafos el tiempo no me alcanzó. No se puede decir que el hecho de no haber puesto observaciones es una mala conducta, o indicio de una mala conducta y mucho menos de contribuir a un reflejo de trafico de influencias.

AL HECHO 9: Es cierto

AL HECHO 10: No es cierto. Son suposiciones de los demandantes, falacias que carecen de acervo probatorio, no entiendo de adonde sacan el termino confabulación, al respecto puedo decir que fui coherente en la forma de calificar la entrevista pues vote por la persona que estaba dentro de la lista de elegibles y considere tenia el mejor perfil y capacidades para ocupar el cargo.

AL HECHO 11: no me costa, se que varios compañeros pronunciaron el nombre de la señora Patricia Morera Anaya, pero asumí que según el reglamento del concejo la elección de funcionarios es de manera secreta, mediante papeleta y se escribe un nombre. Por eso en todo momento le di validez a los resultados brindados por la comisión escrutadora de acuerdo a las papeletas depositadas en la urna. Ahora, asegurar quien o quienes de mis compañeros votaron por determinada candidata seria una irresponsabilidad de mi parte.

AL HECHO 12: No es cierto. En el entendido que la señora PATIRICIA MORERA ANAYA si presento tutela, pero que se impugno el fallo y quedo en firme la elección de la señora KATHERIE ARENAS ALVARES. Pero considero que esa tutela no es prueba de un tráfico de influencias interno como lo afirman erróneamente los demandantes. Me permito anexar: Copia de admisión de tutela de la señora Patricia Morera Anaya. (2 folios), Fallo de Tutela de la Señora Patricia Morera Anaya.(22 folios) y Fallo de impugnación de la tutela de la señor Patricia Morera Anaya. (16 folios).

3. EXCEPCIONES

1. Excepción genérica

Ruego al señor Juez, decretar de oficio, cualquier excepción que advierta, o que resulte probada dentro del proceso. Ha hecho carrera en la doctrina y principalmente en la jurisprudencia, al amparo de la reivindicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, que las circunstancias fácticas constitutivas de "excepción" que se pruebe dentro del trámite procesal, se declararan en la respectiva sentencia, por lo que se eleva esta respetuosa solicitud, en el ejercicio de mi defensa técnica.

4. FUNDAMENTOS FACTICOS Y JURIDICOS DE LA DEFENSA

4.1 Inexistencia de la causal de pérdida de investidura deprecada. Atipicidad de la conducta - Tráfico de influencias

La mayoría de los hechos expuestos en la demanda se fundan en simples apreciaciones subjetivas de los demandantes, que no demuestran la configuración de los elementos configurativos del hipotético tráfico de influencias que den lugar a decretar la perdida de investidura que se han establecido en diferentes sentencias del Consejo de estado, como es el tráfico de influencias, no se puede ajustar la tipicidad de la conducta. Dentro de la demanda en el numeral III, enmarcan las supuestas conductas sustento del tráfico de influencias como son imparcialidad, buena fe, y confianza legitima, al efectuar la calificación de entrevista y el incumplimiento del principio del merito al no respetar la lista de elegibles y haber elegido a quien ocupo el segundo lugar, desconociendo los méritos de quien ocupo el primer lugar.

Reitero no existe material probatorio que ajuste los supuestos hipotéticos de los demandantes a los requisitos exigidos por la normatividad aplicable a la perdida de investidura por causal de tráfico de influencias, más cuando erróneamente se pretende hacer ver que para la elección de secretaria general se aplica el concurso público de méritos y que se debe votar en estricto orden, cuando en este caso actúe aplicando el articulo 126 de la Constitución Nacional y el fuero de discrecionalidad de las corporaciones publicas a la hora de elegir cargos de esa naturaleza.

4.2 Ausencia de los elementos propios de la causal invocada e inexistencia de pruebas que soporten los cargos. Atipicidad de la conducta endilgada.

Una vez analizados los hechos fundamento de la acción de pérdida de investidura por tráfico de influencias, no se han probado la totalidad de los elementos propios configurativos de dicha causal según la jurisprudencia del Consejo de Estado.

El material probatorio, no demuestra la configuración de los elementos configurativos del hipotético tráfico de influencias que den lugar a Perdida de investidura, que demuestre que ejercí, o ejercieron sobre mi alguna influencia, tampoco existe prueba de haber recibido , o que hiciera dar o prometer para mi o para un tercero dinero o dádiva y mucho menos que se anteponga la investidura de Concejal con el fin de obtener beneficio de un servidor público en el caso de elección de secretaria del Concejo Municipal Acacías para el periodo 2021.

4.3 Ausencia de responsabilidad subjetiva

En mi caso, todo el tiempo actúe convencido de estar dando estricto cumplimiento al articulo 126 de nuestra constitución como es una convocatoria pública, que es un deber nuestro elegir secretaria general y que quería que fuera la persona con mejores condiciones para ocupar dicho cargo, dado lo estratégico que es para el cumplimiento de las funciones del concejo Municipal,

LEY 1881 DE 2018 Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas (aplicable a Concejales), e su ARTÍCULO 1o. <Artículo modificado por el

artículo 4 de la Ley 2003 de 2019. Establece que **el proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva**. La Corte Constitucional en sentencia[1] manifiesta que el análisis de responsabilidad que realiza el juez en el proceso sancionatorio de pérdida de investidura es subjetivo, pues en un Estado de Derecho los juicios que implican un reproche sancionador, por regla general, no pueden operar bajo un sistema de responsabilidad objetiva, y las sanciones que se adopten en ejercicio del ius puniendi deberán **verificar la ocurrencia de una conducta regulada en la ley (principio de legalidad o tipicidad), contraria al ordenamiento jurídico (principio de antijuridicidad) y culpable**.

De lo anterior puedo afirmar que actué de buena fe y convencido cumplir en todo momento la constitución y la ley, por lo tanto, reitero una vez mas que no existió ningún tráfico de influencias y se debe denegar la perdida de investidura endilgada.

4.4 Ausencia de causa para demandar e inexistencia del hecho.

El tráfico de influencias al tenor de lo señalado en el artículo 183, numeral 5 de la Constitución Política, debe estar debidamente comprobado, lo cual exige que el tráfico de influencias esté debidamente comprobado, por tanto indica que es necesario que se presenten pruebas idóneas para establecer que los actos relacionados con el hipotético tráfico de influencias se han realmente presentado y configurado, lo cual con el material probatorio que se adjunta en la demanda no se demuestra y por lo tanto no se debe decretar la perdida de investidura.

Por otra parte, la sentencia AC-11349 de la consejera ponente Olga Ines Navarrete, precisa que el tráfico de influencias presupone anteponer la investidura en este caso de Concejal ante un servidor público, quien bajo ese influjo psicológico realiza una actividad que no haría de no ser por la calidad de quien se lo solicita. De allí que se trata de una relación de doble envío, donde el concejal gracias a su investidura crea en el destinatario de su influencia la decisión de realizar lo solicitado.

También dice que lo esencial de la conducta es que en este caso concejal, gracias a su condición obtiene de un servidor público para sí o para un tercero, dinero, dadiva, o la promesa de ellos, sin causa licita.

En sentencia del 30 de agosto de 2005[2] **la corporación contenciosa reitera que el tráfico de influencias debe estar debidamente comprobado**, que este presupone invocar la calidad de congresista en este caso conejal, ante un servidor público, con el fin de que este realice determinada actividad, la cual no llevaría a cabo de no ser por el resultado que produce utilizar tal investidura.

---

[1] Sentencia SU474/20 Acción de Tutela instaurada por Libardo Enrique García Guerrero contra la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado

[2] Consejo de Estado, Sentencia del 30 de agosto de 2005, rad. 11001-03-15-000-2005-00446-00(PI), C.P Alejandro Ordoñez M..

Con base en el anterior razonamiento y no estando demostrado en el caso debatido que en mi condición de Concejal, que hice uso de la investidura y menos aún que prevaliéndome de ella, le pedí a otro servidor público o particular la realización de una actividad configurativa de tráfico de influencias, por lo tanto no se estructura la causal alegada por los demandantes y por tanto debe negarse el decreto de perdida de investidura.

Esta posición es reiterada, entre otra sentencia del 2012[3], donde se precisa que sobre la configuración de la causal de perdida de investidura por tráfico de influencias la sala plena de dicha corporación, ha precisado que es una prohibición constitucional que se tipifica cuando:

- Existe un sujeto activo que ostenta la calidad de Congresista al momento de realizar la conducta cuestionada, e invoca esa condición, ante un servidor público para obtener de él un beneficio de su parte, respecto de un asunto que sea de su competencia; o cuando bajo el mismo supuesto de hecho el congresista recibe, hace dar o prometer para si mismo o para un tercero dinero o dadiva en situaciones que estén relacionadas con las funciones propias de su cargo.
- Hay un sujeto pasivo de la acción, ante quien el Congresista antepone su condición, que realiza la acción que le es requerida llevar a cabo, la cual de ordinario no haría de no ser por la calidad de quien se lo solicita. Lo anterior en el caso debatido, no está demostrado, sencillamente por no ocurrió.
- Se constata que la actuación del Congresista se trata de una gestión. Recomendación o exigencia, realizada en virtud de la relación que tiene con el servidor público, o por su influencia en él; y además porque existe interés en el resultado de la actuación.

Por otra parte, La administración pública tiene por fundamento la búsqueda constante de la satisfacción del interés general. Así, está consagrado en el artículo primero de la Constitución Política de Colombia de 1991. Por esta razón, el legislador penal identificó la necesidad de reprochar cualquier conducta que se oriente a la satisfacción de intereses personales en contravía del rol que se precisa de quienes ejercen una función pública. De esta manera, se afecta la administración pública cuando el poder se desvía para la satisfacción de intereses personales, dentro de los argumentos de la demanda no se evidencia ningún interés personal de mi parte en ninguno de los procesos que he participado.

"La tipificación del tráfico de influencias tiene como propósito evitar que intereses ajenos al buen servicio y al bien común prevalezcan en la actividad de la administración, garantizando que las funciones de los agentes del Estado se realicen con estricto sometimiento a la Constitución y la Ley, así como con la orientación de cumplir y promover los fines de las autoridades".

5. FUNDAMENTOS FACTICOS Y JURIDICOS

[3] Consejo de Estado, Sentencia del 29 de mayo de 2012 , rad. 11001-03-15-000-2011-01378-00(PI), C.P. Susana Buitrago V.

De la causal contemplada en el numeral 5º del artículo 183 de la Constitución Política.- Ni la Constitución Política ni la Ley definen el tráfico de influencias invocado en el presente asunto, sin embargo, la jurisprudencia de esta Corporación ha expresado de manera reiterada que el incurrir en él, "presupone anteponer la investidura de congresista ante un servidor público, quien, bajo tal influjo sicológico, realiza una actividad que no adelantaría de no ser por la calidad de quien se lo solicita. Consiste en una relación de doble envío en donde el congresista, gracias a la investidura que posee, crea en el destinatario de su influencia la decisión de realizar el hacer solicitado"

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, al fijar los alcances de la causal de pérdida de investidura invocada, ha señalado como presupuestos para que esta se configure, los siguientes:

a) Que la persona que ejerce la influencia ostente la calidad de Congresista, la cual se adquiere a partir de la posesión en el cargo.
b) Que se invoque esa calidad o condición ante el servidor público sin tener en consideración el orden jerárquico de este.
c) Que se reciba, haga dar o prometer para sí o para un tercero dinero o dádiva, con las salvedades o excepciones contempladas en la Ley 5 de 1992, en cuanto a las gestiones de los congresistas en favor de sus regiones;
d) Que se anteponga la investidura con el fin de obtener beneficio de un servidor público en asunto que éste encuentre conociendo o haya de conocer en su condición. [4]

La disposición constitucional exige que el tráfico de influencias esté debidamente comprobado, lo anterior indica que es necesario que se presenten pruebas idóneas para establecer que los actos relacionados con el hipotético tráfico de influencias sean realmente presentado, lo cual con el material probatorio que se adjunta en la demanda no se demuestra y por lo tanto no se debe decretar la pérdida de investidura.

6. MEDIOS DE PRUEBA

Solicito de manera respetuosa se tengan como medio de pruebas documentales los siguientes documentos que me permito allegar con el presente escrito, toda vez que son conducentes, pertinentes y necesarias en haciendo uso del derecho de defensa y contradicción.

- Acuerdo 427 de 2016 reglamento interno del Concejo Municipal de Acacías (76 folios)
- Informe de comisión secretaria 2021 (5 folios)
- ACTA No 132 DE DICIEMBRE 12 DE 2020 (12 folios)

[4] Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 8 de marzo de 2008. Radicación No. 11001-03-15-000-2007-01054-00(PI). Consejera Ponente: Susana Buitrago Valencia. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 17 de abril de 2007. Radicación No. 11001- 03-15-000-2006-00192-00 (PI). Consejero Ponente: Reinaldo Chavarro Buriticá.

- ACTA N0 134 DE DICEIMBRE 2020(31 Folios)
- Copia de admisión de tutela de la señora Patricia Morera Anaya. (2 folios)
- Fallo de Tutela de la Señora Patricia Morera Anaya.(22 folios)
- Fallo de impugnación de la tutela de la señor Patricia Morera Anaya. (16 folios)
- Acta 134 del Concejo Municipal 2020.(31 folios).

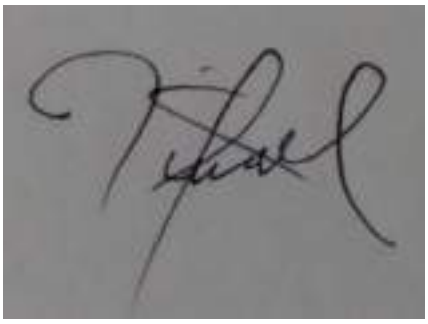
7. ANEXOS

- Los documentos enunciados en el Acápite de las pruebas.

8. NOTIFICACIONES

El suscrita se notificará de las decisiones que se profieran en la dirección: email: alexvalero16@hotmail.com y celular:3203049234

Cordialmente,



_____

ALEXANDER VALERO
CC. 17.418.345 DE ACACIAS.

ACTA No. 132
(diciembre 12 de 2020)

QUE TRATA DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS– META, CONFORME LO ESTABLECEN EL ARTICULO 8 DEL DECRETO 2796 DE 1994, LEYES 136 DE 1994, 617 DEL 2000 Y 1551 DE 2012. CONVOCADAS MEDIANTE DECRETO 235 DE DICIEMBRE 11 DE 2020. LA CUAL SE REALIZO EL DÍA SABADO DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2020.

En Acacias siendo las ocho y treinta (8:30) de la mañana del doce (12) del mes de diciembre del año 2020, en el salón de sesiones del Honorable Concejo Municipal de Acacías –Meta, se reunieron sus integrantes bajo la presidencia del Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, y como secretaria general (e) la señora DIGNORY CLAVIJO ORTIZ

El presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, presenta un cordial saludo a los Concejales y a las demás personas que hacen presencia el día de hoy, luego solicita a la secretaria general hacer el llamado a lista.

La secretaria general (e) DIGNORY CLAVIJO ORTIZ, procede a llamar a lista y verificar el quórum, así

CONCEJALES PRESENTES
LILIANA MARCELA BAQUERO TORRES
JHONNY ANDRES BASTO HERNANDEZ
WILMER ORLANDO CARVAJAL OLAYA
FARLEY CARVAJAL REY
ANDRES MAURICIO CHAVEZ QUEVEDO
ZULMA YOLIMA DIAZ DIAZ
JOSE JAIR ECHEVERRY OSPINA
JHONNY STEVENSON GIRALDO ARAGON
ORLANDO GRANADOS ACEVEDO
ARNOLD MAURICIO PINILLA TRIANA
VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS
HECTOR REYES RATIVA

LUIS CARLOS RICHAR RODRIGUEZ CORTES
GILDARDO SANTOS CHAPARRO
ALEXANDER VALERO

Hecho el llamado a lista con la asistencia de quince (15) Concejales, se le informa al presidente que hay quórum para deliberar y decidir.

El presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, solicita a la secretaria general dar lectura al orden del día propuesto así:

ORDEN DEL DÍA

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA.
3. INSTALACION SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS POR EL ACALDE MUNICIPAL MEDIANTE DECRETO No. 235 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2020.
4. PROPOSICIONES Y VARIOS

DESARROLLO:

PRIMER PUNTO: LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUÓRUM: La secretaria general informa que se encuentran presentes los Concejales enunciados al inicio de la sesión, por lo que hay quórum para deliberar y decidir

SEGUNDO PUNTO: DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA. Interviene el presidente Concejal ORLANDO GRANADOS pone en consideración el orden del día leído, se abre la discusión, sigue abierta la discusión anuncio que se va a cerrar, se cierra, se abre la votación, anuncio que se va a cerrar, se cierra, siendo aprobado por unanimidad.

TERCER PUNTO: INSTALACION SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS POR EL ALCALDE MUNICIPAL MEDIANTE DECRETO No. 235 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2020. La secretaria general (e) procede a dar lectura al decreto No. 235 del 11 de diciembre de 2020 con los considerandos.

Hace uso de la palabra el presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, con la lectura del decreto No. 235 donde se cita al concejo municipal a las sesiones extraordinarias para que se ocupe de unos proyectos de acuerdo el No. 627 y 628 y la secretaria(o) general para la vigencia 2021 declaramos formalmente instaladas las sesiones extraordinarias.

CUARTO PUNTO: PROPOSICIONES Y VARIOS. Hace uso de la palabra el presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, se les informa a los Concejales que estamos en el proceso de elección de secretaria general ayer se adelantó la prueba de conocimientos hay 5 aspirantes en concurso el día lunes se publicara la consolidación de los resultados y para el 18 es la entrevista.

Hace uso de la palabra el Concejal ANDRES MAURICIO CHAVEZ QUEVEDO, presidente ayer alguien me planteo el siguiente interrogante y duda que creo que es sana hacérnosla todos, me dijo estuve leyendo la sentencia que saco en el fallo que nos sacó a Alexandra y me decia tengan cuidado porque lo que plantean es que no es concurso público para elección sino convocatoria pública, lo planteo como siempre planteo mis interrogantes aquí delante de todos para que sean tenidas en cuenta y de pronto el jurídico nos pueda sacar en estos días y si me gustaría que la pudiéramos revisar presidente si es convocatoria o es concurso, porque si es convocatoria la forma de decisión habría que revisarla.

Tiene el uso de la palabra el presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, igual vale la sugerencia se la plantearemos al jurídico y si hay que hacer alguna modificación estamos dentro de los términos para poderla realizar, le informo a la plenaria que según la cronología del proceso está programado para el día 16 de diciembre está programada la entrevista de los participantes y para el día 18 la elección y posesión.

Hace uso de la palabra el Concejal JHONNY GIRALDO saluda a los presentes, para hacer una proposición que el viernes 18 de diciembre se incluya dentro del orden del día entregar los reconocimientos que los Concejales ARNOLD PINILLA, LILIANA BAQUERO y el suscrito.

Hace uso de la palabra el presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, está abierta la discusión sobre la proposición presentada por el Concejal JHONNY GIRALDO para que el 18 de diciembre dentro del orden del día se incluya otorgar unos reconocimientos a unas personalidades que ya fueron aprobados por plenaria, está

abierta la discusión sobre la proposición presentada, aviso que se va cerrar, queda cerrada, se abre la votación, aviso que se va cerrar, queda cerrada, siendo aprobado.

No habiendo más proposiciones y varios, agotado el orden del día, se da por terminada la sesión del día de hoy sábado (12) de diciembre del 2020, siendo las 8:45 a.m., se convoca el miércoles 16 de diciembre a las 7:00 am.

ORLANDO GRANADOS ACEVEDO
Presidente Concejo Municipal

DIGNORY CLAVIJO ORTIZ
Secretaria General (e) Concejo Mpal

L.R.R.
Elaboró y digitó: Lucila Rodriguez Rodriguez
Contratista

SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS MEDIANTE DECRETO No. 235 DE DICIEMBRE 11 DE 2020.

SÁBADO DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2020

ORDEN DEL DÍA

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA
3. INSTALACIÓN DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS POR EL ALCALDE MUNICIPAL MEDIANTE DECRETO No. 235 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2020.
4. PROPOSICIONES Y VARIOS.

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS	CÓDIGO: PGA-200-01.04
		FECHA: OCTUBRE 2015
	MODELO ESTANDAR DE CONTL INTERNO - MECI GESTION DOCUMENTAL	VERSIÓN: 01

SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS MEDIANTE DECRETO No. 235 DE DICIEMBRE 11 DE 2020.

SÁBADO DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2020

CONTROL DE ASISTENCIA

LILIANA MARCELA BAQUERO TORRES

JHONNY ANDRES BASTO HERNANDEZ

WILMER ORLANDO CARVAJAL OLAYA

FARLEY CARVAJAL REY

ANDRES MAURICIO CHAVEZ QUEVEDO

ZULMA YOLIMA DIAZ DIAZ

JOSE JAIR ECHEVERRY OSPINA

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS	CÓDIGO: PGA-200-01.04
		FECHA: OCTUBRE 2015
	MODELO ESTANDAR DE CONTL INTERNO - MECI GESTION DOCUMENTAL	VERSIÓN: 01

SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS MEDIANTE DECRETO No. 235 DE DICIEMBRE 11 DE 2020.

SÁBADO DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2020

CONTROL DE ASISTENCIA

JHONNY STEVENSON GIRALDO ARAGON

ORLANDO GRANADOS ACEVEDO

ARNOLD MAURICIO PINILLA TRIANA

VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS

HECTOR REYES RATIVA

LUIS CARLOS RICHAR RODRIGUEZ CORTES

GILDARDO SANTOS CHAPARRO

ALEXANDER VALERO

ALCALDÍA DE Acacías
Camino de oportunidad.

CONCEJO MUNICIPAL
RECIBIDO
HORA 4:51 PM
FECHA 11/12/2020
FIRMA Dignoy Clojo

NIT 892001457-3

1000

DECRETO N° 235
(DICIEMBRE 11 DE 2020)

"POR MEDIO DEL CUAL SE CONVOCA A SESIONES EXTRAORDINARIAS AL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS- META"

EL ALCALDE MUNICIPAL DE ACACÍAS- META

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales, especialmente las establecidas en el artículo 315 de la Constitución Política y lo previsto en el artículo 23 y 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 29 la Ley 1551 de 2012 y

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 315º determina como atribuciones del Alcalde en el numeral 5º, "Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del municipio".

Que de conformidad con el parágrafo segundo del Artículo 23º de la Ley 136 de 1994, los Alcaldes podrán convocar al Concejo Municipal a sesiones extraordinarias en oportunidades diferentes, para que se ocupen exclusivamente de los asuntos que se sometan a su consideración.

Que el Señor Presidente del Concejo Municipal, ORLANDO GRANADOS ACEVEDO en oficio calendado el 07 de diciembre de 2020, solicita se convoque a sesiones extraordinarias al Concejo Municipal para que se cumpla con el proceso de elección de la secretaria general del concejo, de conformidad con las Resoluciones 048 de 2020, modificada por la Resolución 073 de 2020.

Que el artículo 73 de la Ley 136 de 1994 establece que para que un proyecto sea Acuerdo, debe aprobarse en dos debates celebrados en distintos días.

Que el Artículo 91 ibidem, modificado por el artículo 29º de la Ley 1551 de 2012 establece en el literal A:

1. Presentar los proyectos de acuerdo que juzgue convenientes para la buena marcha del municipio.

2. Presentar oportunamente los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social con inclusión del componente de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario y de obras públicas, que deberá estar coordinado con los planes departamentales y nacionales.

4. Colaborar con el Concejo para el buen desempeño de sus funciones; presentarles informes generales sobre su administración en la primera sesión ordinaria de cada año, y convocarlo a sesiones extraordinarias en las que sólo se ocupará de los temas y materias para los cuales fue citado".

ALCALDÍA DE Acacías
Camino de oportunidad.

NIT 892001457-3

1000

Que la Administración Municipal encontrándose dentro del término legal requiere darle trámite a tres iniciativas de proyectos de acuerdo para la buena marcha de la administración municipal y el Concejo Municipal.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA

ARTÍCULO PRIMERO: CONVOCATORIA: Convóquese y cítese a sesiones extraordinarias al Concejo Municipal de Acacías - Meta por el periodo comprendido entre el 12 de diciembre al 23 de diciembre de 2020.

ARTÍCULO SEGUNDO: **MATERIAS DE SESIONES EXTRAORDINARIAS**: Durante las sesiones extraordinarias se estudiara los Proyectos de Acuerdo Municipal que se enuncian a continuación, y deberá realizarse la elección de la Secretaria General del Concejo para la vigencia 2021:

627 - "POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA POLITICA PÚBLICA DE EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS Y SE DICTAN OTRA DISPOSICIONES."

628 - "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO MUNICIPAL No. 454 DE 2017- ESTATUTO TRIBUTARIO MUNICIPAL"

- ELECCIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACIAS PARA LA VIGENCIA 2021.

ARTÍCULO TERCERO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y publicación.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en el Municipio de Acacías Meta, a los once (11) días del mes de diciembre de 2020.

EDUARDO CORTES TRUJILLO
Alcalde Municipal

Revisó: Lisith Meliza Aguilar Sanabria
Proyectó: Roger Alexander Acero Rojas

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS	CÓDIGO: PGA-200-01.04
		FECHA: OCTUBRE 2015
	MODELO ESTANDAR DE CONTL INTERNO - MECI GESTION DOCUMENTAL	VERSIÓN: 01

ENTREGA COPIAS PROYECTOS DE ACUERDOS Nrs. 627 y 628 DE 2020, CON EXPOSICION DE MOTIVOS, Y ANEXOS

Acacías, diciembre 12 de 2020

LILIANA MARCELA BAQUERO TORRES

JHONNY ANDRES BASTO HERNANDEZ

WILMER ORLANDO CARVAJAL OLAYA

FARLEY CARVAJAL REY

ANDRES MAURICIO CHAVEZ QUEVEDO

ZULMA YOLIMA DIAZ DIAZ

JOSE JAIR ECHEVERRY OSPINA

JHONNY STEVENSON GIRALDO ARAGON

ORLANDO GRANADOS ACEVEDO

ARNOLD MAURICIO PINILLA TRIANA

VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS

HECTOR REYES RATIVA

LUIS CARLOS RICHAR RODRIGUEZ CORTES

GILDARDO SANTOS CHAPARRO

ALEXANDER VALERO

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS	CÓDIGO: PGA-200-01.06
		FECHA: OCTUBRE 2015
	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI GESTION DOCUMENTAL	VERSIÓN: 01

CITACIÓN No. 05 DEL 2020

HONORABLES CONCEJALES

En cumplimiento de mis funciones como Presidente de esta Honorable Corporación y de acuerdo a la Constitución Nacional y el Reglamento Interno del Concejo Municipal Acuerdo 427 de 2016, me permito citarlos a SESIONES EXTRAORDINARIAS convocadas mediante Decreto No. 235 de diciembre 11 de 2020, emanado por el Alcalde Municipal Licenciado Eduardo Cortes Trujillo, durante 12 días, contados a partir del día sábado doce (12) de diciembre de 2020.

Por lo anterior, me permito citarlos a la sesión de instalación el día sábado doce (12) de diciembre de 2020., en el horario de las 8:00 a.m., de conformidad al artículo 62 del Reglamento Interno.

Acacías - Meta, diciembre 11 de 2020.

ORLANDO GRANADOS ACEVEDO
Presidente Concejo Mpal

Anexo: Decreto 235 de diciembre 11 de 2020 (en 2 folios)

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS	CÓDIGO: PGA-200-01.06
		FECHA: OCTUBRE 2015
	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI GESTION DOCUMENTAL	VERSIÓN: 01

CITACIÓN No. 05 DEL 2020

LILIANA MARCELA BAQUERO TORRES

JHONNY ANDRES BASTO HERNANDEZ

WILMER ORLANDO CARVAJAL OLAYA

FERLEY CARVAJAL REY

ANDRES MAURICIO CHAVEZ QUEVEDO

ZULMA YOLIMA DIAZ DIAZ

JOSE JAIR ECHEVERRY OSPINA

JHONNY STEVENSON GIRALDO ARAGON

ARNOLD MAURICIO PINILLA TRIANA

VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS

HECTOR REYES RATIVA

LUIS CARLOS RICHAR RODRIGUEZ CORTES

GILDARDO SANTOS CHAPARRO

ALEXANDER VALERO

ACTA No. 133
(diciembre 16 de 2020)

QUE TRATA DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS– META, CONFORME LO ESTABLECEN EL ARTICULO 8 DEL DECRETO 2796 DE 1994, LEYES 136 DE 1994, 617 DEL 2000 Y 1551 DE 2012. CONVOCADAS MEDIANTE DECRETO 235 DE DICIEMBRE 11 DE 2020. LA CUAL SE REALIZO EL DÍA MIERCOLES DIECI SEIS (16) DE DICIEMBRE DE 2020.

En Acacías siendo las siete y veinte ocho (7:28) de la mañana del dieciséis (16) del mes de diciembre del año 2020, en el salón de sesiones del Honorable Concejo Municipal de Acacías –Meta, se reunieron sus integrantes bajo la presidencia del Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, y como secretaria general (e) la señora DIGNORY CLAVIJO ORTIZ

El presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, presenta un cordial saludo a los Concejales y a las demás personas que hacen presencia el día de hoy, luego solicita a la secretaria general hacer el llamado a lista.

La secretaria general (e) DIGNORY CLAVIJO ORTIZ, procede a llamar a lista y verificar el quórum, así

CONCEJALES PRESENTES
JHONNY ANDRES BASTO HERNANDEZ
WILMER ORLANDO CARVAJAL OLAYA
FARLEY CARVAJAL REY
ANDRES MAURICIO CHAVEZ QUEVEDO
ZULMA YOLIMA DIAZ DIAZ
JOSE JAIR ECHEVERRY OSPINA
ORLANDO GRANADOS ACEVEDO
ARNOLD MAURICIO PINILLA TRIANA
HECTOR REYES RATIVA
LUIS CARLOS RICHAR RODRIGUEZ CORTES

Hecho el llamado a lista con la asistencia de nueve (9) Concejales, se le informa al presidente que hay quórum para deliberar y decidir.

El presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, solicita a la secretaria general dar lectura al orden del día propuesto así:

ORDEN DEL DÍA

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA
3. ENTREVISTA A LAS ASPIRANTES ADMITIDAS EN LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCION DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS VIGENCIA 2021.
4. PROPOSICIONES Y VARIOS

DESARROLLO:

PRIMER PUNTO: LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUÓRUM: La secretaria general informa que se encuentran presentes los Concejales enunciados al inicio de la sesión, por lo que hay quórum para deliberar y decidir

SEGUNDO PUNTO: DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA. Interviene el presidente Concejal ORLANDO GRANADOS pone en consideración el orden del día leído.

Hace uso de la palabra el Concejal ANDRES MAURICIO CHAVEZ, presidente es una pequeña duda y es porque estuve leyendo conforme salió la sentencia de Alexandra y nos habla de que es una convocatoria y todo el tema y quiero que me aclare el tema si es convocatoria y si lo que se va ser ahorita es una entrevista y cuál es el ponderado que se va sacar porque leyendo la convocatoria quiero hacer la aclaración para que quede la constancia presidente, leyendo la sentencia y unos conceptos aquí se trata que ninguno nos metamos en problemas veo que hay una diferencia entre convocatoria y concurso es la parte decisiva y final.

Hace uso de la palabra el Concejal FARLEY CARVAJAL REY buenos días, de la sesión pasada me queda la incognito presentada por el Concejal MAURICIO

CHAVEZ, puesto que seria bien distante y diferente la una de la otra en eso quisiera que le diéramos claridad pero además presidente me asalta otra duda, si la Dra. Alexandra secretaria del Concejo declararon nulo el nombramiento, pienso que debió haberse inmediatamente convocado a elecciones a concurso para el tema de la secretaria del 2020 es bien cierto que muy posiblemente los términos no hubiese podido un tema exprés pero no hay una norma que nos diga cuando faltan 25 días entonces se siga en interlineal mientras se nombra la del otro año pienso que aquí tendrían que existir dos concursos uno para suplir la del 2020 y la del 2021, tengo esa duda sabemos que nos pueden estar vigilando desde la parte externa como así paso este año entonces no quiero que quedara ese vacío, si hubiera pasado en mayo o en junio hubiéramos tenido que realizar una convocatoria para elegir el restante del tiempo, aquí no veo una norma que lo respalde mi constancia es para que porque no realizamos la convocatoria de lo restante del 2020, gracias.

El presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, sigue abierta la discusión Se deja constancia de la asistencia de los Concejales, JHONNY STEVENSON GIRALDO ARAGON, GILDARDO SANTOS CHAPARRO, VICTOR RAMOS, ALEXANDER VALERO.

Hace uso de la palabra el Concejal JHONNY GIRALDO, saluda a los presentes, para dejar una constancia a cerca de la duda que se manifiesta sobre la diferencia de concurso y convocatoria pública, de igual manera pedir que se nos explique cómo va el tema del proceso de elección de personero municipal, gracias.

El presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO manifiesta sigue abierta la discusión del orden del día aviso que se va a cerrar, queda cerrada la discusión, se abre la votación, anuncio que se va a cerrar, se cierra, siendo aprobado por unanimidad.

TERCER PUNTO: ENTREVISTA A LAS ASPIRANTES ADMITIDAS EN LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCION DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS VIGENCIA 2021. Tiene el uso de la palabra el presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEEVDO, Concejal MAURICIO CHAVEZ le trasmití su inquietud al asesor jurídico y el me hace una sentencia de unificación de jurisprudencia sobre el tema del magistrado ponente Jorge Ignacio Pretelt quien básicamente en la sentencia dice: la convocatoria es " la norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los participantes", y como tal impone

las reglas que son obligatorias para todos, entiéndase administración y administrados-concursantes. Por tanto, como en ella se delinean los parámetros que guiaran el proceso, los participantes, en ejercicio de los principios de buena fe y confianza legítima, esperan su estricto cumplimiento. La corte constitucional ha considerado, entonces, que el estado debe respetar y observar todas y cada una de las reglas y condiciones que se imponen en las convocatorias, porque su desconocimiento se convertiría en una trasgresión de los principios axiales de nuestro ordenamiento constitucional, entre otros la trasparencia, la publicidad, la imparcialidad, así como el respeto por las legítimas expectativas de los concursantes en consecuencia, las normas de la convocatoria sirven de auto- vinculación y autocontrol porque la administración debe "respetarlas y que su actividad, en cuanto a la selección de los aspirantes que califique para acceder al empleo o empleos correspondientes, se encuentra previamente regulada" y también hay una sentencia de tutela del magistrado Jorge Iván Palacios en la cual establece: la convocatoria se convierte en un expresión del principio de legalidad tanto para oferentes como para los inscritos, de tal forma que incumplir las directrices allí estipuladas contraviene no solo los derechos de los aspirantes, sino aquel valor superior al cual está sujeto toda actuación pública. Dicho, en otros términos, el acto administrativo que la contenga funge como norma del concurso de méritos, por lo cual todos los intervinientes en el proceso deben someterse aquel so pena de trasgredir el orden jurídico imperante. Creo que con estas dos sentencias queda definido el tema Concejal MAURICIO CHAVEZ.

Tiene el uso de la palabra el Concejal ANDRES MAURICIO CHAVEZ QUEVEDO, siendo consecuente con mi profesión y con mi área de especialidad siempre se ha dicho todo acto jurídico emanado por el Concejo que es un acto administrativo tiene presunción de legalidad y este carácter vinculante y eso no lo estoy poniendo en duda en ningún momento lo que usted está leyendo, mi inquietud realmente es una cosa es concurso público de méritos y otra cosa es convocatoria pública de méritos y eso es lo que me tiene intranquilo.

El presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, lee la parte de la sentencia de tutela la convocatoria utiliza las dos expresiones que es convocatoria y concurso de méritos y es válido en el debate se trata de enriquecer y que los procesos estén fortalecidos dice: la convocatoria se convierte en una expresión de principio de legalidad dicho en otros términos el acto administrativo que la contenga funge como norma del concurso de méritos, utiliza las dos expresiones ya queda a interpretación de cada uno de lo que quieran.

Hace uso de la palabra el Concejal FARLEY CARVAJAL REY quiero anunciar es que las implicaciones no es de terminología, es el tema si es convocatoria, la convocatoria nos arroja una lista de elegibles a diferencia que el concurso nos arroja un ganador entonces al enunciar la como convocatoria en mi entender es que se arrojaría una lista de elegibles de los cuales todos van a tener diferente puntaje de los cuales el Concejo municipal elegiría, pues quisiera simplemente que se indicara el tema si el ganador es la secretaria del Concejo o de los 3 o 4 últimos que estén de ahí vamos a elegir nosotros, gracias.

Tiene el uso de la palabra el presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, Resolución 48, 17 de noviembre de 2020 por medio de la cual se realiza una convocatoria para la elección de la secretaria general del Concejo de Acacías, el título es el que da la inducción de lo que se va desarrollar en todo el acto administrativo, lo que se está realizando es una convocatoria en ese orden de ideas se hicieron todas las pruebas, se hizo la recepción de hojas de vida, se hizo la evaluación de las mismas de hojas de vida a través del comité evaluador el cual está conformado por la Concejala LILIANA BAQUERO, MAURICIO CHAVEZ Y JHONNY ANDRES BASTO se hizo la respectiva publicación de las hojas de vida, hubo una sola reclamación es esa publicación, reclamación que fue absuelta por el mismo comité de manera favorable a la peticionaria en el entendido que un soporte de la hoja de vida no había sido tenido en cuenta dentro de la evaluación e inicialmente había sido rechazada esa hoja de vida, el comité evaluador acepto esa hoja de vida dentro de la convocatoria, después vino la etapa de la prueba de conocimiento la cual también se desarrolló con todos los protocolos necesarios de custodia teniendo en cuenta que la resolución 48 fue modificada por la resolución No. 73 estableció y descargo esa responsabilidad de la prueba de conocimientos en la mesa directiva en ese orden de ideas la mesa directiva realizo las prueba de conocimientos bajo los estrictos controles de seguridad de la misma, aquí estuvieron las 5 candidatas una de ellas venía de Cali, Buga vino solo a presentar la prueba ella ese día radico una solicitud para que la entrevista de hoy se hiciera de manera virtual lo cual en aras de garantizar todos los derechos su petición fue resuelta de manera favorable, ella a las 8:30 am se conectara de manera virtual para acceder a la entrevista, termino la prueba de conocimiento se hizo al respectiva evaluación y publicación de los mismos no se presentó ninguna reclamación sobre la prueba de conocimiento y el proceso está en la etapa de entrevista, una vez se desarrolle la entrevista tal como lo dice el cronograma en la resolución No 73, el cronograma establece para el día de hoy entrevista a todos los participantes admitidos para el día 16 publicación de resultados obtenidos y publicación de la lista de elegibles, en ese orden de ideas, contestarle la pregunta al Concejal FARLEY en ese orden de

ideas una vez publicado realizada la entrevista se hará el consolidado y se deberá hacer la publicación de lista de elegibles el cual debe salir según el cronograma el día de hoy una vez hecha la publicación tendrán el día de mañana para hacer las reclamaciones que consideren pertinentes y el día 18 de diciembre está programada la elección, ya en la elección es un mandato legal y constitucional de los Concejos municipales elegir personero, secretaria, para la elección cada Concejal será autónomo de definir a quien va elegir, cada Concejal dará la publicación y serán los Concejales los que tendrán que elegir, se deja la constancia de la Concejala LILIANA BAQUERO, en ese orden de ideas la convocatoria que se había realizado esta con base en esos términos, en la resolución No. 048 y la No. 73 me permito leer el título de la resolución No. 73 " por medio de la cual se modifica la resolución No. 46 de 2020 por medio de la cual se realiza una convocatoria para la elección de la secretaria general del Concejo municipal, les adelanto algo pero la idea es que estén ellas, para que la resolución, ponerlos en contexto, la resolución No. 48 y la No. 73 establecen que el procedimiento estará en cabeza de la mesa directiva la mesa directiva dispuso 1. Una elaboración de tres preguntas atendiendo una sentencia de la corte constitucional en las entrevistas que básicamente la misma metodología que utilizamos para la elección de personero, hacer una pregunta que se hizo en la selección de personero de manera general para poder contextualizar algunos temas porque lo que ha dicho la corte en la sentencia que se reviso es que las entrevistas no pueden ser con preguntas taxativas sino que simplemente las personas que hacen las entrevistas en este caso los Concejales simplemente se puedan hacer una idea general tanto de la personalidad, como de su perfil profesional del entrevistado, bajo ese concepto la mesa directiva preparo 3 preguntas que están en custodia de la secretaria general esa preguntas se destaparan aquí, lo que ha dispuesto la mesa directiva es que como hay una persona que se va conectar para la entrevista desde Buga y esperamos que las otras 4 hagan presencia, la idea es la misma metodología que se utilizó cuando estuvo el concurso de personero, las 4 que van a estar presencial las vamos a dejar en la oficina de la presidencia e iniciaríamos la entrevista con la que está conectada de manera virtual, se les da un máximo de tres minutos la que va pasando le hacemos las tres preguntas de una vez y así hasta agotar las 5 entrevistadas, en la calificación está dispuesto la resolución que es en números enteros de 1 a 100 como se hizo en el tema de personero es prácticamente la misma metodología el mismo sistema de calificación no hay que utilizar decimales, cero seria si no está presente la entrevistada, igual el Concejal puede dejar queda dentro de la hoja de vida la evaluación que se va entregar está el cuadro de observaciones para que el Concejal si desea escribir algunas observaciones en las cuales sustente su calificación si el Concejal no quiere simplemente da la calificación de cada una de las

5 participantes y no está obligado a que tenga que dejar alguna observación esa es más o menos la metodología.

Pasando al planteamiento que hizo el Concejal JHONNY STEVENSON GIRALDO decirle que el concurso de Personero ya les había manifestado que teníamos la propuesta financiera de la ESAP que estaba en treinta y dos millones cuatrocientos ochenta y cinco mil pesos, la solicitud de la ESAP fue resulta favorablemente la ESAP nos pidió que hiciéramos todo el proceso contractual a través de la plataforma secop dos, hemos venido haciendo esa implementación no es fácil hay que enviarlo a Colombia compra eficiente, una solicitud ya se hizo ellos la devolvieron diciendo que tocaba subsanar algunos elemento que faltaban se subsanaron, luego la ESAP y la plataforma volvieron e hicieron un requerimiento de otro documento y todavía no nos han habilitado con la plataforma Secop dos en ese entendido la comunicación que hemos tenido permanente con la ESAP, ustedes bien lo saben en el meta el único municipio de tercera categoría es Acacias, los demás de cuarta, quinta y sexta creo que ellos ya están adelantando concurso, a Acacias nos tienen incluidos en una plataforma de concurso con capitales estaríamos con Armenia, Manizales, con capitales al mismo nivel es lo que nos han dicho ellos, la ESAP nos ha tenido un poco de paciencia y nos han dicho que están esperando, eso iba hasta antier, antes de ayer ya la ESAP en vista que habían inconvenientes con el Secop II talvez en decisión administrativa decidido en Bogotá de la ESAP habilitar el Secop I, en vista que había inconvenientes que el secop II no agilizaba para que los Concejos pudieran hacer su inscripción a la plataforma entonces la ESAP decidió habilitar el Secop I en ese orden de ideas inmediatamente ayer procedimos a firmar los documentos y enviarlos a la ESAP, el certificado de disponibilidad presupuestal todo lo que requiere un contrato de esta modalidad de contratación directa ya fueron enviados a la ESAP es decir Concejal JHONNY GIRALDO que en este momento los papeles están en manos de la ESAP los tienen ya firmados y refrendados para que no los devuelvan así ya quedaría para que la ESAP proceda con el concurso hasta ahí va la etapa, también en ese tema les adelanto en el tema de personero para el día de ayer estaba programado una audiencia pública en la procuraduría general de la nación de una demanda de nulidad y restablecimiento de derecho que instauraron contra el Concejo municipal Raúl el instauro ante la procuraduría una conciliación administrativa estaba programada para ayer 15, el Concejo municipal se enteró a través de las redes sociales más exactamente del conuco de Gilberto Díaz quien publicaba esos, nosotros llamamos a la procuraduría y hablamos directamente con la Dra. Adriana Gutiérrez Hernández, hablamos con ella y efectivamente le hicimos saber que nunca fuimos notificados para esa audiencia en ese orden de ideas la procuradora nos manifestó a través del jurídico

que ella creía y suponía que la alcaldía había notificado los canales de información de la alcaldía hacia el Concejo no fluyeron, entonces le dijimos a la procuradora que jamás fuimos notificados en ese orden de ideas la procuradora decidió cancelar la audiencia quedo de paso aprovecho para notificar al presidente electo para el día 4 de enero deberá el presidente asistir a esa audiencia en la cual el concursante Raúl solicita una indemnización de setenta millones de pesos aproximadamente por daños y perjuicios obviamente que cuando el solicito eso no había salido la sentencia que salió favorable para el Concejo y la posición de una vez para informarle al presidente Víctor Ramos que la posición de esta mesa directiva es no entrar a desarrollar ninguna negociación porque ya hay una sentencia que fue muy clara que es la sentencia que acaba de proferir el tribunal administrativo del meta donde negó una solicitud de perdida de envestidura contra los conejales del municipio de Acacias en el entendido que supuestamente habíamos destinado de manera indebida para el pago del personero en esa sentencia hay dos apartes muy importantes Concejal RAMOS para que os tenga en cuenta en ese día de la audiencia 1. El ministerio público fue muy claro y muy tajante en dos aspectos en su intervención en esa sentencia, 1. Manifestó y dejo claro que el concurso como estaba debía acabarse en esta sentencia ya el procurador fue muy claro y dijo que el concurso debía acabarse por todos los vicios de ilegalidad aquí vale la pena hacer un reconocimiento al trabajo porque durante la sentencia se hace un acápite muy importante al trabajo investigativo que hizo el Concejal FARLEY y JHONNY y el Concejal BASTO ahí a sentencia deja en claro de que hubo una falsedad en documento, en ese orden de ideas el procurador deja en claro en su intervención de que el concurso debería acabarse para que lo tengan en cuenta el día de la audiencia en la etapa que se encontrara es decir que así estuviese lista de elegibles cosa que nunca sucedió nunca se publicó, nunca salió y nunca hubo consolidado esos dos aspectos es importantes que los tengan claro y el procurador en esa sentencia afirma y ratifica que el concurso debería acabarse en la etapa que se encontrara porque uno de los argumentos del Dr. Raúl es de que había lista de elegibles y que él tenía un derecho adquirido, la procuraduría deja muy claro que el concurso debería acabarse en la etapa que se encontrara y a renglón seguido dice el procurador interviniente dice de haberse materializado el concurso y haberse elegido es decir que si hubiéramos elegido al Dr. Raúl quien ahora está pidiendo una indemnización que si hubiésemos materializado cabria una demanda de nulidad contra la elección como ya ha sucedido en muchos casos del país con esta misma empresa y por su puesto con los efectos colaterales contra los Concejales que hubiésemos hecho la elección en su momento como se quiso que se hiciera el día 10 de enero es decir el procurador en esa intervención en esa sentencia es muy claro es muy tajante y le da la razón a los 11 Concejales que en su momento a través de la resolución No, 25 del mes de mayo

que revoco la resolución No. 112 del 2019 actuamos de manera con estricto apego a la ley en esa misma sentencia ahora que dijo el tribunal que es muy importante recordar también para que lo manifiesten en la audiencia Concejal VICTOR y es que primero fue audiencia de sala plena es decir, 5 magistrados fueron los que de manera unánime tomaron la decisión que dijeron los magistrados en esa sentencia muy claramente que revisado toda la actuación 1. Es claro que no hubo una destinación indebida de recursos si ya os magistrados dicen con apego a la ley y ya hubo una sentencia que no hubo una destinación indebida de recursos mal hace ahora el señor Raúl a reclamar una indemnización de setenta millones de pesos como primera medida, 2.que dijeron los magistrados se observa dentro del proceso palabra utilizadas por la magistrada un amplio despliegue por querer hacer las cosas con estricto apego a la ley es claro Concejal VICTOR que con base en esa sentencia el día 4 de enero no tiene ninguna razón ningún fundamento la reclamación que está haciendo el señor Raúl y por lo tanto de una vez de parte de esta mesa directiva se rechace cualquier tipo de conciliación en aras de que la sentencia es muy clara y les dio la razón a los 11 Concejales que en su momento tomamos la decisión de revocar un proceso de concurso que ya no lo decimos nosotros ahora si hay una sentencia se hizo con serias falencias que ya están demostradas dentro el proceso en ese orden de ideas queda claro que el actuar del Concejo ha sido así, en aras que las concursantes ya retomando el punto del orden del día estaban convocadas para las 8:40 a.m.

Hace uso de la palabra el Concejal VICTOR JULIO RAMOS buenos días a los presentes, señor presidente es para dejar una claridad y quede tal cual como lo voy a informar en el acta, sobre el tema de elección de secretaria con relación al nombramiento y elección de la secretaria general del Concejo municipal el artículo 50 del reglamento interno de esta Corporación municipal manifiesta "siempre que se haga una elección después de haberse iniciado un periodo se entiende hecha solo para el resto del periodo en curso como puede llegar a ser aquí el presente ejercicio". esa era mi claridad.

Hace uso de la palabra el presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, tal cual como lo manifesté las niñas están citadas para las 8:45 am, son las 8:10 am vamos a decretar un receso de 30 minutos con eso nos empalmamos de una vez con ellas para iniciar la etapa de la entrevista se le solicita a Alan enviarle el enlace a la niña de Buga y a las 8: 45 am se levanta el receso.

Siendo las 8:50 se levanta el receso, se le solicita a la secretaria (e) hacer el llamado a lista y verificación del quorum.

CONCEJALES PRESENTES
JHONNY ANDRES BASTO HERNANDEZ
WILMER ORLANDO CARVAJAL OLAYA
FARLEY CARVAJAL REY
ANDRES MAURICIO CHAVEZ QUEVEDO
ZULMA YOLIMA DIAZ DIAZ
JOSE JAIR ECHEVERRY OSPINA
JHONNY STEVENSON GIRALDO ARAGON
ORLANDO GRANADOS ACEVEDO
ARNOLD MAURICIO PINILLA TRIANA
VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS
HECTOR REYES RATIVA
LUIS CARLOS RICHAR RODRIGUEZ CORTES
GILDARDO SANTOS CHAPARRO
ALEXANDER VALERO

Hecho el llamado a lista con la asistencia de catorce (14) Concejales, se le informa al presidente que hay quórum para deliberar y decidir.

El presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, solicita a la secretaria general (e) confirmar el punto del orden del día.

TERCER PUNTO: ENTREVISTA A LAS ASPIRANTES ADMITIDAS EN LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCION DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS VIGENCIA 2021. Hace uso de la palabra el presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO saluda a la comunidad presente, se permite hacer el respectivo llamado a lista de las aspirantes Katherine Arenas Álvarez, Lizet Catherine Rodríguez Prieto, Patricia Morera Anaya, Johana Patricia Ovalle Rojas, Angélica Alejandra Ordoñez Osorio, estando las 5 candidatas presentes me voy a permitir explicarles y ponerlas en contexto la metodología y el procedimiento, se deja la constancia de la asistencia de la Concejala LILIANA BAQUERO me permito ponerlas en contexto de la metodología o el proceso que se va desarrollar para la entrevista son 5 candidatas por reglamento del concurso estaba dispuesto que la mesa directiva diseñara el procedimiento del mismo, lo que ha dispuesto la mesa directiva es lo siguiente, se van a desarrollar 3 preguntas las cuales ustedes deberán contestar de manera simultánea, haremos un sorteo para que de ustedes las cuatro quien va de primeras por disposición y como la niña Angélica

Alejandra esta de manera virtual a ella le vamos a hacer la entrevista de primeras porque si ella queda de segundas o terceras escucharía las preguntas y se puede llevar una idea más contextualizada de las preguntas, ustedes las 4 que están presencial van a ingresar a la oficina de la presidencia ahí van a estar las cuatro ahí se les va poner música para que no puedan escuchar el ambiente del recinto y puedan escuchar las preguntas y las vamos a ir llamando una por una después de Angélica a medida que van contestando ahí se pueden ubicar en las sillas y pueden escuchar las demás respuestas o la que se quiera retirar lo puede hacer no van a poder tener celulares ahí adentro, sin embargo Lucila que es asistente del Concejo las va a acompañar en la oficina, cuando estén adentro no pueden manipular celulares porque la entrevista está siendo trasmitida por Facebook lite no pueden tener sus celulares porque se podrían conectar y podrían ver cuáles son la preguntas, son 3 preguntas, yo les leo la primera pregunta y ustedes tienen un máximo de 3 minutos para contestarla pueden contestarla en un minuto o en dos pero máximo tres una vez ustedes la contesten ya pueden decir ya termine o siguiente pregunta como gusten y les formulo de una vez la siguiente pregunta, y a los Concejales se les va entregar la hoja de evaluación cada Concejal va tener una planilla de estas, el Concejal tiene un cuadro de observaciones si el Concejal quiere hacer uso de ese cuadro puede colocar las observaciones que considere y al frente el Concejal le dará la calificación, la calificación tiene que ser de 1 a 100 números enteros no puede haber decimales y tampoco Concejales pueden haber tachones ni enmendaduras, si algún Concejal dentro del desarrollo de la evaluación considera que tuvo algún inconveniente o quiere corregir algo durante el desarrollo de la evaluación me dice y le cambiamos la planilla y anulamos la que tiene, una vez termine la evaluación y el Concejal entregue la planilla se le entregara en custodia a la secretaria y ella lo hará al respectivo al asesor jurídico que es quien está llevando todo el proceso esas son las condiciones, vamos a proceder al sorteo para ustedes las 4 para que se ubiquen en la oficina de presidencia y así las vamos llamando una por una.

Cada Concejal firma su planilla, la calificación de cada Concejal es privada, cada Concejal entrega su evaluación, si algún Concejal o alguna de las niñas quiere conocer su resultado ella realizara su oficio ella diciendo quiero saber que me califico cada Concejal yo no puedo conocer usted que califico y que observaciones le hizo cada uno porque es privado es su pensamiento y es lo que dice la sentencia que revisamos es la impresión que se llevó de cada una de las niñas.

Hace uso de la palabra el Concejal FARLEY CARVAJAL REY, presidente en aras de la transparencia me gastaría que quedaran plasmados como siempre se ha hecho por

lo menos la elección de presidente de una vez se hizo públicamente aquí que quede evidenciado los votos porque me asalta la preocupación y tengo derecho a ello de que una vez sean guardados los votos pueda suceder alguna situación no trasparente, en aras de la trasparencia que se hiciera aquí una verificación de cada uno de los votos, porque irse halla a mí me generaría dudas me gustaría que se diera un poco de trasparencia ene se tema.

Interviene el presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, les recuerdo que no estamos votando no hay votos individuales estamos es calificando son dos cosas muy diferentes, si estuviésemos votando como se hace unas mesa directiva pues claro habría una comisión escrutadora estamos es calificando y es el mismo proceso que se hizo para la elección de Personero tal cual la misma metodología el presidente procede a llamar a las aspirantes Lizet Katherine, Patricia Morera, Johana Patricia Ovalle y Katherine Arenas son las 4 que están presentes, ya dijimos que la que va de primeras es Angélica.

Hace uso de la palabra el Concejal JHONNY STEVENSON GIRALDO, para buscarle una salida a los que plantea el Concejal FARLEY CARVAJAL yo haría la proposición como lo reza el reglamento interno de que la plenaria del Concejo municipal es la máxima instancia de la Corporación que dentro de ese proceso de verificación de los votos de la evaluación que se va realizar el día de hoy pus además de la mesa directiva se integren otros corporados para que ele generen tranquilidad al Concejal FARLEY CARVAJAL.

Hace uso de la palabra el presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, no hay ningún problema Concejal hay una comisión accidental que está encargada de la verificación no hay ningún inconveniente, en este momento declaramos la suficiente ilustración en materia de la entrevista. Me permito irlas llamando y vienen y san un papelito para saber en qué turno les toco. El nombre que saque va de segundas, el orden de intervenciones seria primera Angélica Alejandra, segunda Johana patricia Ovalle, tercera Patricia Morena Anaya, cuartas Katherine Arenas Álvarez Lizet Katherine Rodríguez Prieto, hechas todas las aclaraciones, las observaciones se le solicita a las 4 niñas que ingresen a la oficina de presidencia. Se le solicita a Dignory que le entregue a cada Concejal el cuadro de evaluación.

Se le concede el uso de la palabra al Concejal FARLEY CARVAJAL REY, presidente en aras de la transparencia y acogiendo sus planteamientos que posibilidad habría lo hago a manera de proposición con todo respeto de que 3 Concejales distintos y

diferentes a los enunciados en la comisión accidental pudieran firmar los 15 votos de cada Concejal en aras de la transparencia para que no haya lugar a equivocos de que es que después a que entregamos los votos alguien lo quiso cambiar después en la urna entonces tres Concejales llevan la firma diferente a los otros 3 que están en la comisión y pienso que so la daría un sello de seguridad.

Interviene el presiente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, le digo Concejal que ya las reglas del concurso estaban prediseñadas en la resolución, entonces cualquier modificación puede contaminar el concurso hay na comisión accidental que es la encargada de todo el procedimiento, sin más preámbulos y no hay lugar a más intervenciones porque en este momento Concejales vamos a iniciar con las preguntas, se procede a llamar a ANGÉLICA ALEJANDRA ORDOÑEZ se le indica son 3 preguntas tiene 3 minutos para contestar máximo cada pregunta, la primera pregunta dice así:

¿DESDE SU EXPERIENCIA DE VIDA PERSONAL Y PROFESIONAL COMO PODRÍA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVO DEL CONCEJO DE ACACIAS?.

Se le dan 3 minutos.

Hace su intervención ANGELICA ALEJANDRA ORDOÑEZ saluda a los presentes, considero que desde mi experiencia de vida y el de mi experiencia profesional teniendo en cuenta que en este momento trabajo en una personería municipal que es un ente de control y que tengo formación como trabajadora social considero que podria contribuir a la Corporación a través de la proyección de esa apuesta participativa que se tiene, estuve observando que dentro su misión y su visión se proyecta mucho el hecho de trabajar con trasparencia apostando a la democracia y a la participación y considero que desde los saberes que he adquirido en mi proceso porque también en un consejo de juventud y me he forjado dentro de esos principios que se apuesta en la Corporación considero que podría ayudar y haciendo un análisis de todo el tema del acuerdo 427 que tiene la Corporación identifique que dentro de las comisiones hace falta el tema de la actualización a la adición de la comisión de la equidad de la mujer que contemplan la ley 1981 y considero que como profesional del trabajo social podria contribuir a los aportes que pueda dar al honorable Concejo para que se pueda establecer este tema en la proyección de la equidad de la mujer que es algo muy importante. Gracias.

El presidente ORLANDO GRANADOS ACEVEDO procede a realizarle la segunda pregunta:

EL CONCEJO MUNICIPAL ES UNA CORPORACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA DE ELECCIÓN POPULAR Y SU PRINCIPAL FUNCIÓN ES LA DEL EJERCICIO DEL CONTROL POLÍTICO A LA ADMINISTRACIÓN, LA PREGUNTA SERÍA ¿CUÁL ES SU PERCEPCIÓN SOBRE LA IMAGEN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACIAS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES BUENA, MALA, REGULAR Y PORQUE?

Hace uso de la palabra ANGELICA ALEJANDRA ORDOÑEZ responde así: considero que el Concejo municipal de Acacias tiene una buena gestión y una buena ejecución de sus funciones y una videncia es este proceso que está desarrollando porque aunque como ustedes saben yo vivo en el departamento del valle y considero que el hecho que se permita que una persona que vive en otro departamento tenga la posibilidad de presentar una entrevista virtual y que se le brinde esa trasparencia y esa se seguridad de que hay una garantía para que pueda participar con confianza eso es una muestra de que eso es un proceso eficiente y frente al tema de control político considero que es algo importante y se contempla también en el ejercicio del reglamento interno del Concejo porque evidencia que en realidad hay un compromiso y algo que puedo resaltar en ese control político es que vincula mucho el hecho de que las personas también puedan vincularse a ese ejercicio de control y vigilancia que se hace a la administración y a la gestión pública, gracias.

El presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, procede a realizar la tercera pregunta:

EN EL EVENTO QUE TUVIESE QUE TOMAR UNA DECISIÓN ADMINISTRATIVA SOBRE UNA MISMA ORDEN IMPARTIDA 1. POR EL EJECUTIVO MUNICIPAL ALCALDE Y LA OTRA POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN LA PREGUNTA ES ¿CUÁL SERÍA SU DECISIÓN Y/O INCLINACIÓN FRENTE A ACATAR UNA DE LAS DOS Y POR QUÉ?

Hace uso de la palabra ANGELICA ALEJANDRA ORDOÑEZ responde así: bueno creo que mi decisión estaría orientada hacia la orden que me de él presidente del Concejo porque es la cabeza de la Corporación y la persona que es mi jefe inmediato teniendo en cuenta el compromiso que tengo al adquirir el cargo y lo que contempla dentro del reglamento interno pues tendría que tener esa pertenencia y ese compromiso con la responsabilidad que adquirí como secretaria del Concejo pues debo tener esa

responsabilidad para ejercer mis funciones y responder a esas órdenes que se me dan desde el Concejo y desde el presidente que es mi jefe inmediato, gracias.

Hace uso de la palabra el presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, muy amable de esta manera Angélica gracias y si quiere permanecer conectada bien pueda durante el desarrollo de las demás compañeras, ahora llamamos a JOHANA PATRICIA OVALLE.

El presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO saluda a Johana, tal como se le explico se le van a formular 3 preguntas le formulo la primera pregunta cuando usted considere la según da y luego la tercera, la primera pregunta dice:

¿DESDE SU EXPERIENCIA DE VIDA PERSONAL Y PROFESIONAL COMO PODRÍA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVO DEL CONCEJO DE ACACIAS?.

Hace uso de la palabra JOHANA PATRICIA OVALLE responde así: considero que tengo conocimientos ampliaos en Excel es una forma de poder organizar toda la información, he trabajado en empresas donde siempre se generan informes quincenales, mensuales por lo cual puedo tomar la información organizarla para presentarla de una mejor manera a la persona a ustedes el Concejo como la estén solicitando, personalmente considero que cuento con estas habilidades para poder aplicar al cargo.

El presidente ORLANDO GRANADOS ACEVEDO procede a realizarle la segunda:

EL CONCEJO MUNICIPAL ES UNA CORPORACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA DE ELECCIÓN POPULAR Y SU PRINCIPAL FUNCIÓN ES LA DEL EJERCICIO DEL CONTROL POLÍTICO A LA ADMINISTRACIÓN, LA PREGUNTA SERÍA ¿CUÁL ES SU PERCEPCIÓN SOBRE LA IMAGEN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACIAS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES BUENA, MALA, REGULAR Y PORQUE?

Hace uso de la palabra JOHANA PATRICIA OVALLE responde así: personalmente nunca había aplicado a ningún cargo público creo que es una percepción buena normalmente siempre tenemos que mejorar, siempre hay que hacer las cosas mejor normalmente la gente siempre piensa que nada está bien a nadie le gustan las cosas a mi parecer creo que ha sido buena ha venido desarrollando buenas labores se ha visto personalmente creo que sí.

El presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, procede a realizar la tercera pregunta:

EN EL EVENTO QUE TUVIESE QUE TOMAR UNA DECISIÓN ADMINISTRATIVA SOBRE UNA MISMA ORDEN IMPARTIDA 1. POR EL EJECUTIVO MUNICIPAL ALCALDE Y LA OTRA POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN LA PREGUNTA ES ¿CUÁL SERÍA SU DECISIÓN Y/O INCLINACIÓN FRENTE A ACATAR UNA DE LAS DOS Y POR QUÉ?

Hace uso de la palabra JOHANA PATRICIA OVALLE responde así: acataría la orden que me dan directamente del Concejo porque son los que harán el análisis me dicen este es el proceso que tiene que hacer es el que se debe acatar, si el alcalde me está dando una orden en mis conocimientos que tengo creería primero debe haber pasado aquí por un con censo para que se pueda realizar.

Hace uso de la palabra el presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, muy amable JOHANA, si gusta puede sentarse en las graderías o si gusta retirarse también lo puede hacer llamamos a PATRICIA MORERA ANAYA, le voy a formular 3 preguntas le formulo la primera tiene 3 minutos para contestar tan pronto me diga le formulo la segunda y luego la tercera. la primera pregunta dice así:

¿DESDE SU EXPERIENCIA DE VIDA PERSONAL Y PROFESIONAL COMO PODRÍA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVO DEL CONCEJO DE ACACIAS?.

Se le dan 3 minutos.

Hace uso de la palabra la señora PATRICIA MORERA ANAYA, saluda a los presentes, en cuanto a mi experiencia de vida personal me considero muy afortunada, tengo una familia muy bonita uno de mis dos hijos tengo un niño con síndrome de Down mis hijos me han enseñado a salir adelante mis hijos son mi motor mis hijos me han enseñado a ser una gran persona principalmente mi niño especial por el siento que estoy aquí frente a ustedes para muchas familias es vergonzoso tener un niño especial que pena no lo muestro no le digo a nadie que tengo un niño especial pero para nosotros no señores Concejales es un orgullo él nos trasmite mucha alegría mucho amor, ternura, en cuanto a mi vida profesional señores Concejales soy técnica en administración pública, labore en la alcaldía de Acacias casi durante 8 años en la

oficina de recurso humano la oficina de personal tengo conocimiento señores Concejales sobre actos administrativos de nombramiento, tengo conocimiento de vacaciones, cesantías tengo conocimiento sobre derechos de petición, archivo, conocimiento sobre certificaciones laborales, insuficiencias de personal, tengo c conocimientos sobre afiliaciones a la seguridad social y también se por qué y para que se hace un manual de funciones.

El presidente ORLANDO GRANADOS ACEVEDO procede a realizarle la segunda pregunta:

EL CONCEJO MUNICIPAL ES UNA CORPORACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA DE ELECCIÓN POPULAR Y SU PRINCIPAL FUNCIÓN ES LA DEL EJERCICIO DEL CONTROL POLÍTICO A LA ADMINISTRACIÓN, LA PREGUNTA SERÍA ¿CUÁL ES SU PERCEPCIÓN SOBRE LA IMAGEN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACIAS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES BUENA, MALA, REGULAR Y PORQUE?

Hace uso de la palabra la señora PATRICIA MORERA ANAYA, mi percepción es buena el Concejo municipal a lo largo del año ha adelantado de vetes de control político en la lucha muy importantes muchos por favor uno de ellos en la lucha contra la corrupción vemos el caso de la alimentación escolar, vemos el caso de los mercados durante la pandemia considero señores Concejales que la imagen que tiene el Concejo municipal ante la opinión pública es muy buena.

El presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, procede a realizar la tercera pregunta:

EN EL EVENTO QUE TUVIESE QUE TOMAR UNA DECISIÓN ADMINISTRATIVA SOBRE UNA MISMA ORDEN IMPARTIDA 1. POR EL EJECUTIVO MUNICIPAL ALCALDE Y LA OTRA POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN LA PREGUNTA ES ¿CUÁL SERÍA SU DECISIÓN Y/O INCLINACIÓN FRENTE A ACATAR UNA DE LAS DOS Y POR QUÉ?

Hace uso de la palabra la señora PATRICIA MORERA ANAYA, realmente acataría la orden del presidente porque el presidente en este caso es el jefe inmediato mío además que el Concejo municipal es autónomo, el Concejo municipal es independiente de la administración municipal, lo considero así.

Hace uso de la palabra el presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, gracias, si gusta se puede sentar en las graderías o si desea se puede retirar bien pueda, llamamos a la cuarta aspirante KATERINE ARENAS ALVAREZ. Como les dije le voy a formular 3 preguntas tiene 3 minutos para contestarlas la primera pregunta es la siguiente:

¿DESDE SU EXPERIENCIA DE VIDA PERSONAL Y PROFESIONAL COMO PODRÍA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVO DEL CONCEJO DE ACACIAS?.

Hace uso de la palabra la señora KATERINE ARENAS ALVAREZ, podría aportar la eficiencia el liderazgo que debe tener una persona en este cargo podría ceñirme a los lineamientos que tiene el Concejo de manera interna, pero aportando en agilizar los procesos que quizás queden atascados contribuyendo de la mejor manera actuando con trasparencia para los fines que tenga el Concejo y desde mi liderazgo y desde lo que yo pueda aportar ciñéndome siempre a los lineamientos sería eso básicamente.

El presidente ORLANDO GRANADOS ACEVEDO procede a realizarle la segunda pregunta:

EL CONCEJO MUNICIPAL ES UNA CORPORACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA DE ELECCIÓN POPULAR Y SU PRINCIPAL FUNCIÓN ES LA DEL EJERCICIO DEL CONTROL POLÍTICO A LA ADMINISTRACIÓN, LA PREGUNTA SERÍA ¿CUÁL ES SU PERCEPCIÓN SOBRE LA IMAGEN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACIAS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES BUENA, MALA, REGULAR Y PORQUE?

Hace uso de la palabra la señora KATERINE ARENAS ALVAREZ, yo considero que el Concejo ha estado trabajando en lo que podido observar a estado trabajando en iniciar su periodo gestionando los proyectos a que haya lugar en aras de ayudar a la comunidad y en aras de poder garantizar que se obre con total trasparencia dentro del municipio que tanto la alcaldía como los diferentes entes institucionales pues se ciñan al reglamento y a las leyes y lo más importante es siempre obrar en pro de la comunidad y en pro del municipio.

El presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, procede a realizar la tercera pregunta:

EN EL EVENTO QUE TUVIESE QUE TOMAR UNA DECISIÓN ADMINISTRATIVA SOBRE UNA MISMA ORDEN IMPARTIDA 1. POR EL EJECUTIVO MUNICIPAL ALCALDE Y LA OTRA POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN LA PREGUNTA ES ¿CUÁL SERÍA SU DECISIÓN Y/O INCLINACIÓN FRENTE A ACATAR UNA DE LAS DOS Y POR QUÉ?

Hace uso de la palabra KATERINE ARENAS ALVAREZ siempre que una disparidad entre estas dos personas o entre estas dos entidades siempre debo estar ceñida a lo que la mesa del Concejo directivo en este caso el presidente del Concejo y de la Corporación me puedan indicar tengo que ir acorde a los lineamientos que este me indique porque haría parte de la Corporación no podría estar contrariando los deberes o las directrices que me imparta esta Corporación.

Hace uso de la palabra el presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, muchas gracias si puede sentarse en las graderías o si desea retirarse no hay ningún inconveniente, llamamos a nuestra quinta aspirante LICET KATERINE RODRIGUEZ PRIETO, seria 3 preguntas ya sabe las condiciones máximo 3 minutos puede contestarla en uno o dos como usted a bien lo considere, la primera pregunta es la siguiente:

¿DESDE SU EXPERIENCIA DE VIDA PERSONAL Y PROFESIONAL COMO PODRÍA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVO DEL CONCEJO DE ACACIAS?.

Hace uso de la palabra LICET KATERINE RODRIGUEZ saluda a los presentes, gracias por la oportunidad que nos brindaron básicamente mi vida laboral ha sido enfocada en el sector publico pienso que acá puedo obtener mayor experiencia, yo trabaje 4 años en la alcaldía del Dorado soy de halla y tengo la certeza de que todo lo que yo he adquirido personal y profesionalmente ha sido lo que puedo ahorita en este ámbito trasmitirles.

El presidente ORLANDO GRANADOS ACEVEDO procede a realizarle la segunda pregunta:

EL CONCEJO MUNICIPAL ES UNA CORPORACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA DE ELECCIÓN POPULAR Y SU PRINCIPAL FUNCIÓN ES LA DEL EJERCICIO DEL CONTROL POLÍTICO A LA ADMINISTRACIÓN, LA PREGUNTA SERÍA ¿CUÁL ES

SU PERCEPCIÓN SOBRE LA IMAGEN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACIAS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES BUENA, MALA, REGULAR Y PORQUE?

Hace uso de la palabra LICET KATERINE RODRIGUEZ muy buena desde mi concepto personal tuve la oportunidad de estudiar el reglamento interno y dentro de ello hablaban que la Corporación maneja tanto acuerdos, decretos, ordenanzas y toda normatividad que puede ser esencial para la comunidad el pueblo, ellos trabajan en pro de los beneficios mancomunadamente con la alcaldía municipal y son unos beneficios muy importantes, la plenaria que es conformada por todos pueden realizar dentro de sus funciones digamos la lectura de los proyectos de acuerdo y decidir que está bien y que es apropiado para el pueblo, me parece que es algo excelente, gracias.

El presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, procede a realizar la tercera pregunta:

EN EL EVENTO QUE TUVIESE QUE TOMAR UNA DECISIÓN ADMINISTRATIVA SOBRE UNA MISMA ORDEN IMPARTIDA 1. POR EL EJECUTIVO MUNICIPAL ALCALDE Y LA OTRA POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN LA PREGUNTA ES ¿CUÁL SERÍA SU DECISIÓN Y/O INCLINACIÓN FRENTE A ACATAR UNA DE LAS DOS Y POR QUÉ?

Tiene 3 minutos.

Hace uso de la palabra LICET KATERINE RODRIGUEZ pienso que como lo dije anteriormente esto es algo de trabajar mancomunadamente en equipo en realidad las cosa y las decisiones antes que las tome al alcalde deben pasar por la Corporación y debe ser una elección popular y pienso que trabajando en equipo se llegan a mejores resultados, gracias.

Hace uso de la palabra el presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, de esta manera damos por finalizada la participación de las 5 candidatas a ser secretaria general para la vigencia 2021, Katherine si gusta se puede sentar halla en las graderías o si ustedes ya gustan se pueden retirar la publicación de los resultados como está según el cronograma se hará en horas de la tarde una vez se tenga un consolidado, a partir de este momento los Concejales cuentan con 5 minutos para que hagan la respectiva evaluación, por favor secretaria recogemos las evaluaciones e el sobre de custodia lo sellamos y se le entrega al jurídico para hacer la respectiva

consolidación, a partir de este momento cuentan con 5 minutos para que hagan la evaluación.

CUARTO PUUNTO: PROPOSICIONES Y VARIOS. El Concejal MAURICIO CHAVEZ solicita que se sesione el 18 a las 9:00 am

El presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, para sesionar el viernes 18 a las 9 am se abre la discusión sobre la proposición presentada por el Concejal CHAVEZ, sigue abierta la proposición aviso que se va cerrar queda cerrada, se abre la votación aviso que se va cerrar, queda cerrada siendo aprobado.

No habiendo más proposiciones y varios, agotado el orden del dia, se da por terminada la sesión del día de hoy miércoles (16) de diciembre del 2020, siendo las 9:36 a.m., se convoca el viernes 18 de diciembre a las 9:00 am.

ORLANDO GRANADOS ACEVEDO
Presidente Concejo Municipal

DIGNORY CLAVIJO ORTIZ
Secretaria General (e) Concejo Mpal

L. R. R.
Elaboró y digitó: Lucila Rodríguez Rodríguez
Contratista

8:10 recoge inicia

77

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS	CÓDIGO: PGA-200-01.04
		FECHA: OCTUBRE 2015
	MODELO ESTANDAR DE CONTL INTERNO - MECI GESTION DOCUMENTAL	VERSIÓN: 01

SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS MEDIANTE DECRETO No. 235 DE DICIEMBRE 11 DE 2020.

MIÉRCOLES DIECISEIS (16) DE DICIEMBRE DE 2020

ORDEN DEL DÍA

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA
3. ENTREVISTA A LAS ASPIRANTES ADMITIDAS EN LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACIAS, 2021.
4. PROPOSICIONES Y VARIOS.

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS	CÓDIGO: PGA-200-01.04
		FECHA: OCTUBRE 2015
	MODELO ESTANDAR DE CONTL INTERNO - MECI GESTION DOCUMENTAL	VERSIÓN: 01

SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS MEDIANTE DECRETO No. 235 DE DICIEMBRE 11 DE 2020.

MIÉRCOLES DIECISEIS (16) DE DICIEMBRE DE 2020

CONTROL DE ASISTENCIA

LILIANA MARCELA BAQUERO TORRES

JHONNY ANDRES BASTO HERNANDEZ

WILMER ORLANDO CARVAJAL OLAYA

FARLEY CARVAJAL REY

ANDRES MAURICIO CHAVEZ QUEVEDO

ZULMA YOLIMA DIAZ DIAZ

JOSE JAIR ECHEVERRY OSPINA

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS	CÓDIGO: PGA-200-01.04
		FECHA: OCTUBRE 2015
	MODELO ESTANDAR DE CONTL INTERNO - MECI GESTION DOCUMENTAL	VERSIÓN: 01

SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS MEDIANTE DECRETO No. 235 DE DICIEMBRE 11 DE 2020.

MIÉRCOLES DIECISEIS (16) DE DICIEMBRE DE 2020

CONTROL DE ASISTENCIA

JHONNY STEVENSON GIRALDO ARAGON

ORLANDO GRANADOS ACEVEDO

ARNOLD MAURICIO PINILLA TRIANA

VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS

HECTOR REYES RATIVA

LUIS CARLOS RICHAR RODRIGUEZ CORTES

GILDARDO SANTOS CHAPARRO

ALEXANDER VALERO

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS	CÓDIGO: PGA-200-01.04
		FECHA: OCTUBRE 2015
	MODELO ESTANDAR DE CONTL INTERNO - MECI GESTION DOCUMENTAL	VERSIÓN: 01

ENTREGA FOTOCOPIAS PROYECTO DE ACUERDO No. 626 DE 2020, CON EXPOSICION DE MOTIVOS, CONSIDERANDOS, ANEXOS.

LILIANA MARCELA BAQUERO TORRES

JHONNY ANDRES BASTO HERNANDEZ

WILMER ORLANDO CARVAJAL OLAYA

FARLEY CARVAJAL REY

ANDRES MAURICIO CHAVEZ QUEVEDO

ZULMA YOLIMA DIAZ DIAZ

JOSE JAIR ECHEVERRY OSPINA

JHONNY STEVENSON GIRALDO ARAGON

ORLANDO GRANADOS ACEVEDO

ARNOLD MAURICIO PINILLA TRIANA

VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS

HECTOR REYES RATIVA

LUIS CARLOS RICHAR RODRIGUEZ CORTES

GILDARDO SANTOS CHAPARRO

ALEXANDER VALERO

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS	CÓDIGO: PGA-200-01.04
		FECHA: OCTUBRE 2015
	MODELO ESTANDAR DE CONTL INTERNO - MECI GESTION DOCUMENTAL	VERSIÓN: 01

ENTREGA FOTOCOPIAS PROYECTO DE ACUERDO No. 625 DE 2020, CON EXPOSICION DE MOTIVOS, CONSIDERANDOS, ANEXOS.

LILIANA MARCELA BAQUERO TORRES

JHONNY ANDRES BASTO HERNANDEZ

WILMER ORLANDO CARVAJAL OLAYA

FARLEY CARVAJAL REY

ANDRES MAURICIO CHAVEZ QUEVEDO

ZULMA YOLIMA DIAZ DIAZ

JOSE JAIR ECHEVERRY OSPINA

JHONNY STEVENSON GIRALDO ARAGON

ORLANDO GRANADOS ACEVEDO

ARNOLD MAURICIO PINILLA TRIANA

VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS

HECTOR REYES RATIVA

LUIS CARLOS RICHAR RODRIGUEZ CORTES

GILDARDO SANTOS CHAPARRO

ALEXANDER VALERO

ACUERDO No. 427
(Diciembre 9 de 2016)

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS-META

En ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, especialmente las previstas en el artículo 313 de la constitución política de 1991, los artículos 31, 32 y 71 de la ley 136 de 199, Ley 1431 de 2011, ley 974 de 2005, 1557 de 2015 y demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO

Que el Artículo 31° de la ley 136 de 1994 establece que los concejos expedirán un reglamento interno para su funcionamiento en el cual se incluyan, entre otras, las normas referentes a las comisiones, a la actuación de los concejales y la validez de las convocatorias y de las sesiones.

Que el actual Reglamento Interno del Concejo Municipal de Acacías data del año 2008.

Que durante esto 8 años, se han expedido normas que obligan a ajustar el actual Reglamento Interno.

Que para una mejor consulta y manejo se hace necesario adoptar un nuevo Reglamento Interno y derogar el existente.

Por lo anteriormente expuesto;

ACUERDA

ARTÍCULO 1º. Adóptese el presente Reglamento Interno del Concejo Municipal de Acacías, cuyo contenido será el siguiente:

TÍTULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES

CAPITULO I
EL CONCEJO COMO CORPORACION ADMINISTRATIVA Y POPULAR.

ARTÍCULO 2º.- DEFINICIÓN, INTEGRACIÓN Y PERÍODO. El Concejo Municipal de Acacías es una Corporación Político Administrativa de elección popular, integrada por quince (15) concejales elegidos por un periodo constitucional de cuatro (4) años y reelegibles indefinidamente, quienes representan al pueblo, y que en el ejercicio de sus funciones, deberán actuar en bancadas y cuyas decisiones estarán ajustadas a la Constitución Política, Actos Legislativos, Leyes, Decretos, Ordenanza, Acuerdos y demás normas relacionadas con el ejercicio de estas corporaciones y de sus integrantes.

ARTÍCULO 3º.- AUTONOMÍA. El Concejo Municipal, como suprema autoridad Municipal es autónomo en materia administrativa y presupuestal.

ARTÍCULO 4º.- ATRIBUCIONES. El Concejo Municipal ejercerá en pleno las atribuciones, funciones y competencias establecidas en la constitución política de 1991, acto legislativo 01 de 2009 y en Decreto Ley 1333 de 1986, Ley 136 de 1994, Ley 974 de 2005, Ley 1148 de 2007, Ley 1368 de 2009, 1431 de 2011, 1551 de 2012, la ley 1557 de 2015 y demás normas jurídicas vigentes, especialmente en materia normativa y de control político.

ARTÍCULO 5º.- FUNCIONES CONSTITUCIONALES. Son funciones constitucionales del Concejo, las siguientes:

1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Municipio.
2. Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico, social y de obras públicas.

3. Autorizar al Alcalde para celebrar contratos y ejercer pro témpore, precisas funciones de las que corresponden al Concejo.
4. Votar de conformidad con la Constitución y la Ley los tributos y los gastos locales.
5. Dictar a iniciativa del Alcalde las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos.
6. Determinar a iniciativa del Alcalde la estructura de la administración Municipal y las funciones de sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear a iniciativa del Alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta.
7. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda.
8. Elegir Personero para el periodo que fije la ley y los demás funcionarios que ésta determine.
9. Dictar las normas necesarias para el control, preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultura del municipio.
10. Las demás que la Constitución y la Ley le asignen.
11. Citar y requerir a los secretarios del despacho del Alcalde para que concurran a las sesiones. Las citaciones deberán hacerse con una anticipación no menor de cinco (5) días y formularse en cuestionario escrito. En caso de que los Secretarios no concurran, sin excusa aceptada por el Concejo Municipal, este podrá proponer moción de censura. Los Secretarios deberán ser oídos en la sesión para la cual fueron citados, sin perjuicio de que el debate continúe en las sesiones posteriores por decisión del Concejo. El debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario y deberá encabezar el orden del día de la sesión.
12. Proponer moción de Observación respecto de los Secretarios del Despacho del Alcalde por asuntos relacionados con funciones propias del cargo o por desatención a los requerimientos y citaciones del Concejo Municipal o Municipal. La moción de observación deberá ser propuesta por la mitad más uno de los miembros que componen el Concejo Municipal. La votación se hará entre el tercero y el décimo día siguientes a la terminación del debate, con audiencia pública del funcionario respectivo. Su aprobación requerirá el voto afirmativo de las dos terceras partes de los miembros que integran la Corporación. Una vez aprobada, se enviara la decisión a Alcalde para que tome la decisión que considere. Si fuere rechazada, no podrá presentarse otra sobre la misma materia a menos que la motiven hechos nuevos. La

renuncia del funcionario respecto del cual se haya promovido moción de observación no obsta para que la misma sea aprobada conforme a lo previsto en este artículo.

ARTÍCULO 6°.- ATRIBUCIONES LEGALES[1]. Son atribuciones legales del Concejo Municipal, las siguientes:

1. Disponer lo referente a la policía en sus distintos ramos, sin contravenir las leyes y ordenanzas, ni los decretos del Gobierno Nacional o del Gobernador respectivo.
2. Exigir los informes escritos o citar a los secretarios de la Alcaldía, Directores de departamentos administrativos o entidades descentralizadas Municipales, al Personero, así como a cualquier funcionario Municipal, excepto el Alcalde, para que en sesión plenaria hagan declaraciones orales sobre asuntos relacionados con la marcha del municipio.
3. Invitar a los diferentes funcionarios del Orden Departamental, así como a los representantes legales de los organismos descentralizados y de los establecimientos públicos del orden nacional, con sedes en el respectivo departamento o municipio, en relación con temas de interés local.
4. Reglamentar la autorización al Alcalde para contratar, señalando los casos en que requiere autorización previa del Concejo.
5. Autorizar al Alcalde para delegar en sus subalternos o en las juntas administradoras locales algunas funciones administrativas distintas de las que dispone esta Ley.
6. Determinar la nomenclatura de las vías públicas y de los predios o domicilios.
7. Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas, de conformidad con la ley.
8. Velar por la preservación y defensa del patrimonio cultural.
9. Organizar la personería y dictar las normas necesarias para su funcionamiento.
10. Dictar las normas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, el cual deberá corresponder al plan Municipal o distrital de desarrollo, teniendo especial atención con los planes de desarrollo de los organismos de acción comunal definidos en el presupuesto participativo y de conformidad con las normas orgánicas de planeación.

[1] Ley 1551 de 2012.

11. A iniciativa del Alcalde, establecer la forma y los medios como el municipio puede otorgar los beneficios establecidos en el inciso final de los Art. 13, 46 y 368 de la Constitución Política.
12. Aquellas funciones normativas del municipio para las cuales no se haya señalado si la competencia corresponde al Alcalde o al Concejo se entenderá asignada a esta Corporación, siempre y cuando no contrarié la Constitución y la Ley.
13. Ejercer funciones normativas del municipio para las cuales no se haya señalado si la competencia corresponde al Alcalde o al Concejo, y se entenderá asignadas a esta Corporación, siempre y cuando no contrarien la Constitución y la Ley
14. Elegir Secretario General del Concejo.
15. Durante los periodos de sesiones, autorizar al Alcalde para salir del país, previo informe de la comisión que va a cumplir.
16. Fijar el monto de los viáticos del Alcalde para Comisiones dentro del país.
17. Aceptar la renuncia del Presidente del Concejo y de los Concejales.
18. Resolver la apelación de los proyectos de acuerdo rechazados por falta de unidad de materia.
19. Hacer el seguimiento y exigir el cumplimiento a la Administración de los acuerdos vigentes.
20. Fijar un rubro destinado a la capacitación del personal que presta su servicio en la administración Municipal.
21. Garantizar el fortalecimiento de la democracia participativa y de los organismos de acción comunal.
22. Citar a control especial a los Representantes Legales de las empresas de servicios públicos domiciliarios, sean públicas o privadas, para que absuelvan inquietudes sobre la prestación de servicios públicos domiciliarios en el respectivo Municipio o Distrito. Si La empresa de servicios públicos domiciliarios por intermedio de su representante legal no atienda las solicitudes o citaciones del control especial emanadas de los Concejo Municipal, se enviara a la Superintendencia de los Servicios Públicos Domiciliarios solicitud para que adelante una investigación administrativa e imponga las sanciones procedentes establecidas por la ley. Lo anterior sin perjuicio de las demás acciones legales o Constitucionales procedentes.
23. De conformidad con el numeral 3° del artículo 313 de la Constitución Política, el Concejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre la autorización al Alcalde para contratar en los siguientes casos:
    a. Contratación de empréstitos.

b. Contratos que comprometan vigencias futuras.
c. Enajenación y compraventa de bienes inmuebles.
d. Enajenación de activos, acciones y cuotas partes.
e. Concesiones.
f. Las demás que determine la Ley.

Parágrafo: En caso de que el Alcalde requiera facultades en cualquiera de los casos anteriores, deberá presentar un proyecto de acuerdo que contenga en forma específica como serán utilizadas dichas facultades.

Se negara la solicitud cuando se presenta en forma general o amplia y/o no se haya informado la utilización de la Autorización anterior.

24. Las demás que le atribuyan la Constitución y las Leyes.

ARTÍCULO 7°.- DECISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL. Las principales decisiones del Concejo Municipal se plasman mediante ACUERDO. Este es un acto administrativo obligatorio para las autoridades y los particulares en la jurisdicción del territorio Municipal. Otras decisiones de menor categoría podrán ser adoptadas mediante RESOLUCIONES Y PROPOSICIONES suscritas de la Mesa Directiva y el Secretario de la Corporación, según la naturaleza del acto.

ARTÍCULO 8°.- SEDE. El Concejo Municipal sesionará ordinariamente y por derecho propio, durante los periodos señalados por la ley y extraordinariamente por convocatoria del Alcalde en la cabecera Municipal y en el recinto oficialmente señalado para tal efecto, es decir en la carrera 14 No. 13-30, primer piso del Palacio Municipal.

Cuando se trata de asuntos que afecten específicamente a una vereda o barrio, el Concejo Municipal podrá hacer presencia allí cuando se convocare a cabildo abierto o a sesiones especiales en virtud a la ley 152 de 1994 y la ley 388 de 1997, 1557 de 2015 para lo cual deberá instalarse en el recinto y clausurarse en el mismo con sujeción a los preceptos de la ley estatutaria de los mecanismos de participación ciudadana y las demás que considere la Corporación.

ARTÍCULO 9°.- INVALIDEZ DE LAS REUNIONES[2]. Toda reunión de miembros del Concejo Municipal que con el propósito de ejercer funciones propias de la

[2] artículo 24 de la ley 136 de 1994

Corporación, se efectúe fuera de las condiciones legales o reglamentarias, carecerá de validez, y a los actos que realicen no podrá dárseles efecto alguno, y quienes participen en las deliberaciones serán sancionados conforme a las leyes.

ARTÍCULO 10°.- QUÓRUM DELIBERATORIO Y DECISORIO ORDINARIO. En cumplimiento de la disposición normativa contenida en el artículo 148 de la Constitución Política de 1991, las normas sobre quórum y mayorías decisorias previstas para el Congreso de la República, regirán también para el Concejo Municipal de Acacías, en consecuencia, en el Concejo Municipal regirá tanto el quórum deliberativo como el decisorio. Mediante el primero, podrá abrir sus sesiones y deliberar con la asistencia de por lo menos una cuarta parte de sus miembros, pero las decisiones únicamente podrán tomarse con la asistencia de la mayoría de los integrantes de la Corporación, lo cual constituye el quórum decisorio. En la plenaria y en las Comisiones Permanentes, las decisiones se tomarán por mayoría de los votos de los asistentes, salvo que la constitución o la ley exijan expresamente una mayoría especial.

ARTÍCULO 11°.- QUORUM DECISORIO: La aprobación de los proyectos de acuerdo referente a las normas orgánicas del presupuesto Municipal, plan general de desarrollo del municipio, plan básico de ordenamiento territorial (PBOT), reglamento interno del Concejo, la aceptación o rechazo de las objeciones a los acuerdos por inconveniencias y de derecho formuladas por el Alcalde, la recomposición de las Comisiones Permanentes y las demás que señale la Constitución y la Ley, requerirán de los votos favorables de la mayoría de los miembros que integran las Comisiones Permanentes respectivas y de los miembros que integran la Corporación, excepto la moción de censura que requerirá del voto favorable de los dos tercios de los miembros de la Corporación.

CAPÍTULO II
PRINCIPIOS RECTORES Y CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN

ARTÍCULO 12°.- PRINCIPIOS RECTORES. Las actuaciones de los Concejales y las bancadas a las que éstos pertenezcan, deberán desarrollarse con sujeción a los principios generales de la función administrativa contenida en el artículo 209 de la Constitución Política y los artículos, 3° del código contencioso administrativo y 5° de la ley 136 de 1994.

ARTÍCULO 13°.- REGLAS DE INTERPRETACIÓN DEL REGLAMENTO. La interpretación de las disposiciones reglamentarias aquí contenidas habrá de

realizarse según el sentido lógico y literal de las palabras. Con todo, en tratándose de disposiciones que presenten dificultades interpretativas se tendrán en cuenta las reglas de interpretación normativa contenidas en los artículos 25 a 32 del Código Civil Colombiano en lo que resulten pertinentes, así como también en caso de no encontrarse disposición aplicable se tendrá en cuenta las disposiciones contenidas en la Ley 5 de 1992.

ARTÍCULO 14°.- APLICACIÓN DE PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO. Cuando frente a situaciones fácticas particulares, el presente Reglamento no proporcione disposiciones normativas aplicables, se acudirá a las normas que regulen casos, materias o procedimientos semejantes y, en su defecto, a la doctrina constitucional y los principios generales del derecho. En todo caso de incompatibilidad entre la constitución, las leyes y el presente reglamento, se aplicarán las disposiciones superiores.

CAPÍTULO III
DEL CONCEJO Y LAS BANCADAS

ARTÍCULO 15°.- DEFINICIÓN. Para los efectos del presente Acuerdo, de conformidad con el artículo 1 de la Ley 974 2005, ratificado por la ley 1551 de 2012, los miembros del Concejo Municipal elegidos por un mismo partido, movimiento social o grupo significativo de ciudadanos, constituyen una bancada en la respectiva Corporación. Cada Concejal pertenecerá exclusivamente a la bancada del partido, movimiento político, social o grupo significativo de ciudadanos por el cual fue elegido.

Parágrafo. Son los partidos y movimientos políticos los competentes para determinar de manera general, los asuntos de conciencia y establecer un régimen disciplinario, que incluirá la gradualidad y las sanciones correspondientes por el incumplimiento a la obligación de actuar en bancadas al interior del Concejo Municipal.

ARTÍCULO 16°.- NOTIFICACIÓN DE BANCADAS. Las bancadas del Concejo Municipal deberán notificarse a la entrada en vigencia del presente acuerdo. En los siguientes periodos legales ordinarios o extraordinarios, se notificarán el primer día de sesiones. En tal circunstancia, deberán informar por escrito a la Presidencia y a la Secretaria General de la Corporación, la relación de los Concejales que integran las bancadas y el nombre de quienes hayan sido

designados como voceros de las mismas, así como los nombres de quienes les designan otras actividades directivas al interior de dichas bancadas. El vocero de cada bancada, recibirá el nombre de coordinador.

ARTÍCULO 17º.- ACTUACIÓN EN BANCADAS. En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 2 de la Ley 974 de 2005, los miembros de cada bancada actuarán en grupo y coordinadamente y emplearán mecanismos democráticos para tomar sus decisiones al interior del Concejo Municipal, en todos los temas que los Estatutos de los respectivos partidos o movimiento político no establezcan como de conciencia.

ARTÍCULO 18º.- FACULTADES DE LAS BANCADAS. Son facultades de las bancadas existentes en el Concejo Municipal de Acacías, las siguientes:

1. Promover citaciones, debates e intervenir en ellos a través de sus respectivos voceros.
2. Participar con voz en las sesiones plenarias del Concejo.
3. Intervenir a través de sus voceros en las sesiones en las que se discutan y se voten proyectos de acuerdo.
4. Hacer interpelaciones.
5. Solicitar votaciones nominales y en bloque.
6. Solicitar verificaciones de quórum.
7. Solicitar mociones de orden, de suficiente ilustración y las demás establecidas en el presente reglamento.
8. Postular candidatos.
9. Votar la moción de censura que requerirá del voto favorable de los dos tercios de los miembros de la Corporación.

Parágrafo: Lo anterior sin perjuicio, de las facultades o atribuciones que por virtud del Reglamento del Concejo se les confiere de manera individual a los concejales, para participar con voz en las sesiones plenarias de la respectiva Corporación

ARTÍCULO 19º.- INTERVENCIONES[3]. Durante las sesiones plenarias o de comisión permanente, las bancadas podrán hacer uso de la palabra máximo hasta en dos (2) oportunidades por tema. En cada caso, la intervención de la bancada no podrá ser 20 minutos la cual se realizará a través del vocero determinado para el efecto, permitiéndose intervenciones de otros miembros de la bancada, dentro del mismo tiempo asignado a cada bancada.

ARTÍCULO 20º.- USO DE LA PALABRA[4]. Para hacer uso de la palabra se requiere autorización previa de la Presidencia. La Mesa Directiva fijará el tiempo de las intervenciones de cada uno de los oradores teniendo en cuenta la extensión del proyecto y la complejidad de la materia.

El uso de la palabra se concederá con sujeción al siguiente orden: (tener en cuenta art 97 C:N)

1. En el trámite de proyectos de acuerdo, a los ponentes para la respectiva sustentación, hasta por Veinte (20) minutos
2. A los voceros y los miembros de las bancadas, hasta por quince Veinte (20) minutos por grupo. Cuando la bancada represente al menos el veinte por ciento de las curules, el tiempo de intervención podrá ampliarse hasta por (10) minutos más
3. A los oradores en el orden en que se hubieren inscrito ante la Secretaria General. Ninguna intervención individual, en esta instancia, podrá durar más 10 minutos
4. Los servidores públicos que tengan derecho a intervenir lo harán las veces y el tiempo que la Mesa Directiva considere, dependiendo de la extensión y complejidad de la materia.
5. Los voceros de las bancadas podrán intervenir por segunda vez y se cerrará las intervenciones.

PARÁGRAFO 1. Ningún orador podrá referirse a un tema diferente del que se encuentra en discusión, y su desconocimiento obligará a la Presidencia a llamar la atención y suspender el derecho para continuar en la intervención.

---

[3] ARTÍCULO 10 ley 974 de 2005. El articulo 97 de la Ley 5ª de 1992
[4] Art 10 ley 974 de 2005

PARÁGRAFO 2. Todos los oradores deben solicitar la palabra ante la presidencia de la Corporación, harán uso de la palabra por una sola vez en la discusión de un tema.

PARÁGRAFO 3. En la discusión o modificación de una proposición no se requiere inscripción previa, pero no podrán intervenir más de dos (2) veces, a excepción del autor o de quien proponga otra sustitutiva y los voceros de las bancadas.

ARTÍCULO 21°.- NÚMERO DE INTERVENCIONES. No se podrá intervenir por más de dos veces en la discusión de un proyecto de acuerdo, proposición o en su modificación, con excepción del autor del mismo o de los voceros de las bancadas, y no se podrá hablar más de una vez cuando se trate de:

1. Proposiciones para alterar o diferir el orden del día.
2. Mociones y Cuestiones de orden.
3. Proposiciones de suspensión o que dispongan iniciar o continuar en el orden del día.
4. Apelaciones o revocatoria de lo resuelto por la Presidencia.

ARTÍCULO 22°.- PROGRAMACIÓN PREFERENTE. Los proyectos de acuerdo o proposiciones presentados a nombre de una bancada, se programaran de manera preferente en el orden del día de las Comisiones o en la plenaria, sobre las que hayan presentado a título personal los Concejales miembros de la Corporación.

ARTÍCULO 23°.- CONSTANCIAS: Cualquier Concejal podrá dejar constancia verbal o escrita de su posición sobre todos los proyectos de acuerdos que se tramiten, si así lo considera.

ARTÍCULO 24°.- FUNCIÓN NORMATIVA DEL USO DE LA PALABRA. Cuando se traten de proyecto de acuerdo, se observarán las siguientes reglas tendientes a la racionalización de las intervenciones en el uso de la palabra:

1. El ponente o coordinador ponente, según sea el caso, dispondrá de 20 minutos para que sustente su informe. En caso de ponencia de minorías, la ponencia alternativa podrá exponerse por el mismo tiempo que la ponencia principal.

2. En el caso de ponencias colectivas, los demás ponentes podrán hacer uso de la palabra hasta por 20 minutos que se distribuirán entre ellos, procurando la intervención de todas las bancadas que tienen representación de la ponencia.
3. Los voceros de los partidos que no hayan intervenido, podrán intervenir sin el requisito de inscripción previa, de conformidad con lo establecido con el inciso final del artículo 10 de la Ley de Bancadas.
4. Los inscritos con la antelación debida, podrán hacer uso de la palabra hasta por 5 minutos.
5. No obstante, en caso de que se presente la discusión separada del articulado, se abrirán las inscripciones y los oradores podrán intervenir hasta por 5 minutos a juicio de la Presidencia, según el número de inscritos.

CAPITULO IV
ESTRUCTURA ORGANICA DEL CONCEJO

ARTÍCULO 25º- ESTRUCTURA ORGÁNICA INTERNA. En ejercicio de sus funciones normativas y de control político, el Concejo Municipal de Acacías, con sujeción a las disposiciones legales vigentes, determina la siguiente estructura orgánica.

1. **Plenaria:** Conformada por la totalidad de los Concejales de la Corporación, facultada para la elección del órgano de dirección y de gobierno denominado Mesa Directiva, así como al Secretario General y los integrantes de las Comisiones Permanentes.

2. **Mesa Directiva:** Es el órgano de dirección y de gobierno. Está integrada por los siguientes miembros elegidos por la plenaria de la Corporación para periodos fijos de un (1) año: Un Presidente, un primer vicepresidente y un segundo vicepresidente.

3. **Comisiones Permanentes:** Son aquellas que cumplen funciones especializadas y específicas de acuerdo a la materia, conforme lo disponga la ley y el presente reglamento.

TITULO II
CONCEJO PLENO

CAPITULO I
INSTALACION POSESIÓN. PERIODO DE SESIONES. ACTAS. PUBLICIDAD.

ARTÍCULO 26°.- SESIONES DE INAGURACION. De conformidad con el artículo 8 del Decreto 2796 de 1994, el Concejo se instalará públicamente en el recinto oficial, el día dos (2) de enero correspondiente a la iniciación de su periodo legal a las 4: 00 pm y se ocuparán exclusivamente de la elección de los funcionarios que le corresponde, mesa directiva y Comisiones Permanentes para los efectos mencionados, se reunirá máximo hasta el 10 enero, fecha en la cual clausurará este tipo de sesiones.

Establecido al menos el quórum deliberatorio, los miembros presentes se constituirán en junta preparatoria, la que será presidida por el concejal a quien corresponda el primer lugar por orden alfabético y de apellidos. Si hubiere dos o más concejales cuyos apellidos los coloque en igualdad de condiciones preferirá el orden alfabético de su nombre.

Actuará como Secretario provisional hasta que se elija Secretario en propiedad, el Secretario General del Concejo del periodo inmediatamente anterior, quien previamente a la sesión inaugural, obtendrá de la autoridad electoral la lista de los Concejales electos, para su debida identificación; en ausencia de aquel, actuará como secretario ad hoc el Concejal designado por el Presidente de la junta preparatoria.

Así las cosas, se dará inicio al proceso de acreditación de los Concejales electos, la cual se llevará a cabo primeramente ante el Presidente de la junta preparatoria y posteriormente ante el Presidente en propiedad. Los documentos que acreditan su condición, serán revisados por la comisión de acreditación documental que se designe para el efecto.

A continuación, todos los miembros presentes se pondrán de pie, para dar respuesta a la siguiente pregunta formulada por el Presidente provisional:

"¿Declaran los honorables concejales presentes instalado constitucionalmente el Concejo Municipal y abiertas su sesiones?".

Parágrafo. Si por fuerza mayor o caso fortuito no se pudiese llevar a cabo la instalación en la fecha antes mencionada se hará tan pronto como fuere posible.

ARTÍCULO 27°.- POSESIÓN DEL PRESIDENTE Y DE LOS CONCEJALES. Instalado el Concejo, el Presidente provisional jurará ante los miembros presentes de la Corporación, diciendo en voz alta las palabras siguientes:

"Invocando la protección de Dios, juro ante esta Honorable Corporación cumplir y defender la Constitución Política y las Leyes de la república, las ordenanzas y los acuerdos y desempeñar fielmente los deberes del cargo"

Acto seguido, el Presidente provisional tomará el juramento de rigor a los Concejales presentes, el que se entenderá prestado por todo el período constitucional; estos contestarán afirmativa a la siguiente pregunta:

"Invocando la protección de Dios, ¿Juran cumplir y defender la Constitución Política y las leyes de la República, las ordenanzas, los acuerdos y desempeñar fielmente a los deberes de cargo?" a lo que los Concejales responden Si Juro.

Si hubiere quórum decisorio, la Corporación procederá a elegir Presidente, primer Vicepresidente y segundo Vicepresidente, en forma separada, quienes conformarán la Mesa Directiva. El Presidente electo, acto seguido, se posesionará ante la plenaria y lo juramentará el Presidente provisional y asumirá funciones de manera inmediata, y proseguirá con la elección del primer y segundo Vicepresidente, a quienes juramentará y posesionará.

Los dignatarios de la Mesa Directiva para el segundo, tercer y cuarto año de sesiones, se elegirán en cualquier día del último periodo de sesiones ordinarias o en su prorrogas y se posesionarán y juramentarán ante la plenaria de forma inmediata.

Todos prestarán juramento en los siguientes términos: "Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las Leyes".

Parágrafo 1. El Presidente del Concejo instalará y clausurará las sesiones ordinarias y extraordinarias del Concejo Municipal con la presencia del señor Alcalde o su delegado, sin que su ausencia impida ni vicie el acto. En estas sesiones al dar inicio y cierre las sesiones se entonarán el Himno Nacional, departamental y Municipal.

Parágrafo 2. En las sesiones de instalación y clausura se podrán adelantar debates de control político y discusiones de proyectos de acuerdo, a excepción de la sesión inaugural del Concejo Municipal en el periodo constitucional.

ARTÍCULO 28.- PERIODO DE SESIONES. El Concejo Municipal sesionará ordinariamente y por derecho propio en la cabecera Municipal y en el recinto señalado oficialmente para tal efecto, por derecho propio y máximo una vez por día así:

A. **PERIODO ESPECIAL** es el comprendido del el 02 al 10 de enero del primer periodo después de elegidos y se ocupara de la elección de funcionarios.
B. El **PRIMER PERIODO** legal será: entre el primero y el último día de febrero
C. **EL SEGUNDO** periodo legal será del 1° al 31 de mayo
D. **EL TERCER** periodo legal será del 1° al 30 de agosto,
E. **EL CUARTO** periodo legal será del 1° al 30 de Noviembre

Si por cualquier causa el Concejo Municipal no pudiere reunirse en las fechas indicadas, lo hará tan pronto como fuere posible dentro del periodo legal correspondiente.

Parágrafo 1: Se entiende por periodo constitucional el establecido en el Art. 312 de la Constitución Política y los periodos legales los señalados por la Ley 136 de 1994. Cada periodo ordinario podrá ser prorrogado por diez (10) días calendario más, a voluntad de la plenaria del Concejo Municipal.

Parágrafo 2: El Concejo Municipal sesionará extraordinariamente por convocatoria que haga el Alcalde Municipal, por el término que éste le fije y en oportunidades que no coincidan con el periodo especial o los periodos ordinarios, para que se ocupe exclusivamente de los asuntos que el Alcalde someta a su consideración.

ARTÍCULO 29°.- ACTAS. De las sesiones del Concejo y sus Comisiones Permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las Comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas.

Abierta la sesión, el Presidente someterá a discusión y aprobación, previa lectura, si los miembros de la Corporación lo consideran necesario, el acta de la sesión

anterior. No obstante el acta debe ser puesta previamente en conocimiento de los de los miembros de la Corporación, bien por su publicación en la gaceta del Concejo bien mediante reproducción por cualquier otro medio mecánico y/o electrónico, que disponga en municipio para estos efectos

ARTÍCULO 30°- PUBLICIDAD[5]. El Concejo debe informar a los ciudadanos sobre sus actividades, utilizando cualquier medio masivo impreso, radial o sistema electrónico de archivo y transmisión de datos, pagina web. En todo caso, cuyo director será el Secretario General de la Corporación. En dicho medio de información serán publicadas las resoluciones que para el efecto del reconocimiento de honorarios a los concejales expida la mesa directiva.

CAPITULO II
CONTROL POLITICO. DELEGACIONES. PROHIBICIONES

ARTÍCULO 31°.- FUNCIONES DE CONTROL POLÌTICO[6]. El Concejo Municipal, respecto de la administración Municipal, podrá ejercer las siguientes funciones de control político:

1. Citar con anticipación no menor de cinco (5) días hábiles, a los Secretarios de Despacho, Directores de Departamentos Administrativo, representantes legales de entidades descentralizadas, Institutos y demás funcionarios del orden Municipal, designados para periodos fijos, incluyendo al Personero. La citación debe contener el cuestionario que debe ser absuelto haciendo referencia a asuntos propios del cargo del respectivo funcionario; sobre este cuestionario versará el debate y su procedimiento será conforme a este reglamento.

2. Solicitar informaciones escritas a toda entidad y autoridades Municipales.

3. Proponer moción de censura respecto de los secretarios de despacho del Alcalde por asuntos relacionados con funciones propias del cargo o por desatención a los requerimientos y citaciones del Concejo Municipal en virtud al acto legislativo 01 de 2007.

---

[5] Art 27 ley 1551 de 2012 Los Concejos deberán publicar sus actos a través del medio que consideren oportuno, siempre y cuando ellos garanticen la efectividad de su difusión a la comunidad

[6] Acto Constitucional No. 01 de 2007

La Moción de censura es un procedimiento que se adelanta por el Concejo Municipal cuando las actuaciones o medidas adoptadas por un funcionario, no satisfacen los fines de la función pública en general y en especial los intereses del Municipio y como tal de su comunidad.

La Moción de censura procede contra:

A. Secretarios de Despacho del Municipio.
B. Directores y/o Jefes de Oficinas Asesoras de Despacho de Municipio.
C. Gerentes y/o Directores de Entidades Descentralizadas del Orden Municipal.
D. Gerentes y/o Directores de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado del Orden Municipal.

El Concejo Municipal podrá proponer moción de censura respecto a los funcionarios señalados anteriormente por asuntos relacionados con funciones propias del cargo o por desatención a los requerimientos y citaciones del Concejo Municipal y además:

A. Incumplimiento injustificado por una sola vez, e incumplimiento justificado hasta por tres (3) ocasiones, a la citación que le efectuó el Concejo Municipal a cualquiera de los funcionarios enunciados en el Artículo anterior
B. Responder el cuestionario con argumentos imprecisos, incoherentes o falsos o de manera evasiva o incompleta.
C. No ejecutar el presupuesto dentro del periodo correspondiente y sin justa causa o ejecutarlo por fuera de los marcos legales y/o reglamentarios.
D. Omitir o efectuar de manera ineficaz o ineficiente los mecanismos de Control Interno.
E. Cuando por negligencia o incompetencia, intereses personales y/o de terceros las actividades del Plan de Desarrollo que le competen al funcionario citado, se atrasen, paralicen, se desvien de sus fines o se demeriten en sus aspectos cuantitativos o cualitativos.
F. Cuando por su negligencia o incompetencia, intereses personales y/o de terceros, no se utilicen los recursos destinados por entidades nacionales o internacionales, gubernamentales o no gubernamentales, privadas o de cualquier orden a la implementación o ejecución de programas y proyectos.
G. Todas aquellas decisiones que por acción u omisión den lugar a infracciones la Constitución, la Ley, Las Ordenanzas o los Acuerdos.

Si de las respuestas del cuestionario objeto de una citación, se identifica una o más de las causales antes descritas, sin que a juicio de la Corporación sustenten una justificación, se podrá proponer al final del debate la Moción de censura.

PARAGRAFO 1: Los funcionarios deberán ser oídos en la sesión para la cual fueron citados, sin perjuicio de que el debate continúe en las sesiones posteriores por decisión del Concejo. El debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario y deberá encabezar el orden del día de la sesión.

La Moción de censura deberá ser propuesta por la mitad más uno de los miembros de la Corporación, expresando las razones en que se sustentan para proponerla.

PARAGRAFO 2: La propuesta puede ser efectuada en Comisiones Permanentes, en Plenaria.

Propuesta y aprobada la Moción de censura el Presidente de la Corporación convocará a sesión para efectos de su aprobación o improbación, la cual deberá efectuarse entre el tercero y el décimo día siguiente a la terminación del debate en el cual se presentó la propuesta, con audiencia pública del funcionario respectivo.

PARAGRAFO 3: La aprobación de la Moción de censura requerirá del voto afirmativo de las dos terceras partes de los miembros de la Corporación.

PARAGRAFO 4: En caso de ser aprobada la moción de censura, el funcionario quedará separado de su cargo La renuncia del funcionario al que se le promueva moción de censura no es obstáculo para que esta sea aprobada por la Corporación.

PARAGRAFO 5: Si la Moción de censura fuere rechazada, no podrá proponerse otra sobre la misma materia a menos que sea motivada por hechos nuevos.

Si los hechos objeto de la Moción de censura lo ameritan se nombrará una subcomisión de investigación.

Una vez recibida la propuesta de Moción de censura y demás documentos, al Secretario le corresponderá:

A. Abrir el expediente, el cual radicará con número, fecha, nombre del Concejal o Concejales que solicitaron la citación, nombre y cargo del funcionario citado. En este expediente deberán contenerse todas actuaciones que se generen en el transcurso de esta actuación.

B. Solicitar de inmediato al Personero Municipal, información sobre investigaciones que se adelanten en su despacho, respecto a los temas relacionados en el cuestionario.

Este funcionario contestará dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, indicando fecha de iniciación de preliminares o disciplinario materia de la investigación, estado en que se encuentra y última actuación.

ARTÍCULO 32º.- CITACIONES. Para el cumplimiento de la función de control político, podrá presentar las proposiciones que estime convenientes, según el tema, en las Comisiones Permanentes o en la plenaria, citando a los funcionarios mediante proposición escrita y aprobada, la cual se notificará al día siguiente a través de la Secretaria.

En el desarrollo de la citación para el control político, las intervenciones se harán conforme al Artículo 35° de este reglamento.

Parágrafo 1[7]. El funcionario citado responderá y radicará en Secretaría dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la citación, un medio magnético de la respuesta, un original impreso y firmado con los anexos respectivos y una copia y una copia para cada concejal.

Parágrafo 2: Para dar inicio al desarrollo de la citación, debe estar presente el Concejal o alguno de los miembros de la bancada, y tendrán que permanecer en el recinto y escuchar atentamente la exposición de los citados, so pena de no poder intervenir en las conclusiones del debate.

ARTÍCULO 33º.- CITACIONES NO REALIZADAS. Si la bancada citante no se hace presente a la sesión, la citación no puede adelantarse y no podrán citar nuevamente al funcionario para tratar los mismos temas hasta treinta (30) días

---

[7] Acto legislativo 01 de 2007 art 6 numera 12Una vez aprobada, el funcionario quedará separado de su cargo. Si fuere rechazada, no podrá presentarse otra sobre la misma materia a menos que la motiven hechos nuevos. La renuncia del funcionario respecto del cual se haya promovido moción de censura no obsta para que la misma sea aprobada conforme a lo previsto en este artículo.

calendario después, a menos que mediaren razones cabalmente aceptadas por la Corporación.

ARTÍCULO 34°. PLURALIDAD DE CITACIONES. Sólo tratándose de asuntos similares o conexos en la materia a debatir, podrán citarse varios funcionarios para la misma sesión

ARTÍCULO 35°.- DEBATES DE CONTROL POLÍTICO. En los debates que se lleven en el Concejo en función de control político, se observarán las siguientes reglas preferentes:

1- Para promover citaciones o debates de control político, deberá haber por lo menos una bancada o concejal responsable de la citación, que tendrá derecho a designar uno o varios ponentes que intervendrán hasta por veinte (20) minutos.
   De igual forma, varias bancadas podrán agruparse como una sola para efectos de adelantar debates de control político. Con todo, la coadyuvante de una bancada a otra no concederá a la coadyuvante los derechos de la bancada citante, de suerte que en estos eventos será menester determinar concretamente el nombre de la bancada citante.
2. La administración Municipal dispondrá de un tiempo máximo de una hora que podrá distribuirse proporcionalmente entre el número de servidores públicos citados.
3. Posteriormente se escucharan las posiciones del o de los voceros que para el respectivo debate designen las bancadas no citantes, las cuales podrán extenderse máximo hasta por 30 minutos. Cuando la bancada represente al menos el veinte por ciento de las curules, el tiempo de intervención podrá ampliarse hasta por 10 minutos más.
4. A continuación intervendrán los oradores debidamente inscritos, hasta por un periodo máximo de 10 minutos. La Presidencia podrá modificar el tiempo de la intervención dependiendo del número de inscripciones programadas, pero en ningún caso las intervenciones podrán durar menos de 5 minutos.
5. En ese punto, la Administración Municipal podrá intervenir nuevamente hasta por espacio de 10 minutos, que podrá prorrogarse por el mismo tiempo a juicio de la Presidencia.
6. Finalmente, el vocero de la bancada citante y el de las no citantes, si a bien lo consideran, dispondrán de 10 minutos adicionales para rendir su informe de conclusiones y presentar proposiciones a consideración de la Corporación.

7. Realizado lo anterior la Presidencia dará por terminada la cesión de Control Político.

ARTÍCULO 36°.- INFORMES. Rendirán informes escritos al Concejo Municipal sobre la gestión adelantada:

1. El Alcalde Municipal en la primera sesión ordinaria de cada año, y al regresar de Comisiones dentro y fuera del país.
2. Los Secretarios de despacho y Representantes legales de Entidades Descentralizados del municipio directas o indirectas, todas éstas con sus filiales y subsidiarias, y entidades de 2° grado o asociaciones entre entidades públicas, donde el Municipio tenga participación, dentro de los diez (10) primeros días del tercer período de sesiones de cada año.
3. El Personero dentro de los diez (10) primeros días del segundo período de sesión de cada año.
4. Las Comisiones Accidentales que estudien asuntos específicos asignados por la Presidencia, contaran a criterio de la presidencia con un término máximo de quince (15) días calendario, contados a partir de la notificación de su designación. Cuando requieran un término mayor para el cumplimiento de su misión, deben solicitar prórroga a la presidencia antes del vencimiento del plazo máximo en forma motivada, indicando el término que requieren para cumplir la labor. Podrán presentar informes parciales en forma verbal o escrita. Si en la prórroga no presentan informe alguno la presidencia designará una nueva comisión, si las circunstancias lo ameritan.
5. Los Concejales designados por la Mesa Directiva para asistir a eventos dentro o fuera de la ciudad o del país en representación de la Corporación, presentarán informe a la plenaria dentro de los quince (15) calendario a la terminación de la comisión

Parágrafo: Los informes rendidos por escrito presentados por los servidores públicos y señalados en los numerales 2° y 3° deberán ser sustentados por sus titulares dentro de los diez días siguientes a fecha de dicha presentación en sesión especial de plenaria, previa convocatoria efectuada por la Mesa Directiva de la Corporación.

ARTÍCULO 37°.- DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS. El Concejo también podrá delegar alguna o algunas de sus funciones en el Alcalde, sobre materia precisa y por tiempo determinado, confiriéndole mediante Acuerdo Municipal las respectivas

facultades extraordinarias, cuando la necesidad lo exija o las conveniencias públicas lo aconsejen.

En todo caso, en cualquier evento de delegación, habrán de cumplirse las reglas que sobre el particular establece la Ley 489 de 1998 y todas aquellas otras normas que la modifiquen o complementen.

ARTÍCULO 38º.- PROHIBICIONES. Conforme a lo preceptuado por el artículo 41 de la Ley 136 de 1994, le es prohibido al Concejo:

1. Obligar a los habitantes, sean domiciliados o transeúntes, a contribuir con dineros o servicios para fiestas o regocijos públicos.

2. Aplicar o destinar los bienes y rentas Municipales a objetos distintos del servicio público.

3. Intervenir en asuntos que no sean de su competencia, por medio de Acuerdos o de Resoluciones.

4. Dar votos de aplauso o de censura a actos oficiales. Con todo, la podrá pedir la revocación de los que estime ilegales o inconvenientes, exponiendo los motivos en que se funde.

5. Privar a los vecinos de otros municipios de los derechos, garantías o protección de que disfruten los de su propio municipio.

6. Decretar actos de proscripción o persecución contra personas naturales o jurídicas.

7. Decretar auxilios o donaciones a favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado.

8. Tomar parte en el trámite o decisión de asuntos que no son de su competencia.

TITULO III
DIGNATARIOS

CAPITULO ÚNICO
MESA DIRECTIVA. COMITÉ DE COORDINACIÓN POLÍTICA.

ARTÍCULO 39°.- PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA. El Concejo Municipal tendrá un Presidente, un Primer Vicepresidente y un Segundo Vicepresidente, elegidos para un periodo legal de un (1) año, quienes en conjunto integran la Mesa Directiva.

ARTÍCULO 40°.- ELECCIÓN DEL PRESIDENTE. Será Presidente de la Corporación, el Concejal que obtenga la mayoría simple de los votos de los Concejales asistentes a la Plenaria que conformen quórum decisorio. En un eventual empate entre dos o más candidatos, se repetirá la votación hasta por tres veces, y de persistir el empate, se procederá a dirimirlo por sorteo entre los candidatos empatados en la misma sesión. El presidente que esté ejerciendo establecerá el mecanismo de dicho sorteo.

Parágrafo 1. El primer y segundo Vicepresidente se elegirá por separado y con el mismo procedimiento aplicado en la elección de Presidente.

ARTÍCULO 41°.- FUNCIONES DEL PRESIDENTE. Al Presidente le corresponderá:

1. Convocar, presidir y dirigir las sesiones plenarias del Concejo.
2. Actuar en representación del Concejo en los actos y actividades que le correspondan.
3. Liderar la representación política del Concejo Municipal.
4. Suscribir con el Secretario las actas de plenaria y los proyectos de acuerdos aprobados en segundo debate.
5. Ser el nominador de los funcionarios del Concejo que por competencia le corresponda.
6. Juramentar y/o dar posesión a los Concejales, Vicepresidentes, Secretario General, Personero Municipal y funcionarios del Concejo.
7. Cuidar que los Concejales concurran puntualmente a las sesiones, requiriendo con apremio si fuere el caso, la presencia de los ausentes que no estén legalmente excusados, y mantener el orden interno.

8. Cumplir y hacer cumplir el reglamento, y decidir las cuestiones o dudas que se presenten sobre la aplicación del mismo. Contra esta decisión, cualquier Concejal puede apelar ante la Plenaria y ésta adoptar otra posición.
9. Disponer el reparto de los proyectos de acuerdo presentados a consideración de la Corporación.
10. Rechazar las iniciativas que no se avengan con el principio de unidad de materia, pero sus decisiones serán apelables ante la plenaria de la Corporación.
11. Designar ponentes de los proyectos de acuerdo y coordinador de ponentes cuando fueren dos o más los designados dos o más para un mismo proyecto.
12. Requerir a los Presidentes de las Comisiones Permanentes o de las Comisiones Accidentales para que presenten sus informes dentro de los términos legales o en el que se les haya fijado.
13. Sancionar y publicar los proyectos de acuerdo cuando la plenaria rechazare las objeciones por inconveniencia presentadas por el Alcalde y éste no los sancionare dentro del término legal de ocho (8) días hábiles.
14. Llevar la debida representación de la Corporación y fomentar las buenas relaciones interinstitucionales.
15. Designar las Comisiones Accidentales que demande la Corporación.
16. Dar curso, fuera de la sesión, a las comunicaciones y demás documentos o mensajes recibidos.
17. Cuidar que el Secretario y los demás empleados de la Corporación cumplan debidamente sus funciones y deberes.
18. Disponer las medidas conducentes para hacer efectiva la suspensión provisional de un Concejal, dispuesta por la jurisdicción contenciosa administrativa, o la suspensión provisional del desempeño de funciones dentro de un proceso disciplinario o penal.
19. Tomar las medidas conducentes para hacer efectiva la decisión de la autoridad judicial competente en relación con la declaratoria de nulidad de la elección de un Concejal o la declaratoria de interdicción.
20. Recibir la renuncia presentada por un Concejal, con indicación de la fecha a partir de la cual se quiere hacer.
21. Dar posesión al Concejal que entre a reemplazar a uno de los titulares, así como al Secretario y a los subalternos si los hubiere.
22. Llamar al candidato que deba llenar una vacancia absoluta de un Concejal, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la declaratoria, para que tome posesión del cargo vacante, de conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política.

23. Hacer efectivas las sanciones impuestas por los órganos de control fiscal y administrativo competentes, a los Concejales y empleados de la Corporación.
24. Presidir la Mesa Directiva.
25. Actuar como ordenador de gasto del presupuesto de la Corporación, con sujeción a la ley orgánica del presupuesto.
26. Celebrar a nombre de la Corporación los contratos legalmente autorizados, con observancia de las normas contenidas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Publica.
27. Decidir por fuera de la sesión plenaria el curso que debe darse a las comunicaciones y demás documentos que se reciban.
28. Solicitar a las entidades públicas o privadas en nombre del Concejo Municipal los documentos e informes que se requieran para el cumplimiento de las funciones que corresponde a su cargo.
29. Formular ante las autoridades competentes las consultas que juzgue pertinentes para la buena marcha de la Corporación.
30. Vigilar el funcionamiento del Concejo Municipal en todos los órdenes y coordinar con el Comandante de la Policía, la seguridad al interior del Concejo.
31. Resolver los derechos de petición que se presenten ante la Corporación, así como los que se dirijan ante los demás miembros y que hagan referencia exclusivamente a actuaciones o decisiones tomadas por el Concejo.
32. Presentar al término de su gestión, un informe sobre la labor cumplida.
33. Designar y/o distribuir a su criterio las oficinas, los vehículos y demás bienes de uso de la Corporación.
34. Las demás dispuestas por la Constitución y la ley.

ARTÍCULO 42°.- FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES DEL PRESIDENTE. La falta absoluta del Presidente del Concejo determinará la celebración de una nueva elección por el resto del periodo, en tanto que las temporales serán suplidas por el Primer Vicepresidente y si no es posible, por el Segundo Vicepresidente.

ARTÍCULO 43°.- RECURSO EN VÍA GUBERNATIVA. Las decisiones tomadas por el Presidente a nombre de la Corporación son apelables ante la Plenaria.

ARTÍCULO 44°.- FUNCIONES DE LOS VICEPRESIDENTES. Las funciones de los Vicepresidentes consisten en formar parte de la Mesa Directiva y en su orden,

reemplazar al Presidente en sus faltas temporales y las demás que les encomiende el Presidente o la Mesa Directiva.

El Primer Vicepresidente hará las veces del Presidente en sus faltas transitorias o a petición de éste.

ARTÍCULO 45°.- DE LA MESA DIRECTIVA. La plenaria elegirá para el periodo de un (1) año calendario la Mesa Directiva del Concejo Municipal.

Parágrafo 1. Ningún Concejal podrá ser reelegido en dos periodos consecutivos en la respectiva Mesa Directiva.

Parágrafo 2. El o los partidos que se declaren en oposición al Alcalde, tendrán participación en la primera vicepresidencia del Concejo.

Parágrafo 3. La Mesa Directiva y el Presidente serán los encargados de definir la agenda general del Concejo Municipal, la cual ha de ser concertada con los coordinadores, jefes o voceros de las bancadas con presencia en la Corporación.

ARTÍCULO 46°.- FUNCIONES DE LA MESA DIRECTIVA. Como órgano de orientación y dirección del Concejo Municipal, le corresponde:

1. Elaborar el proyecto del presupuesto anual del Concejo y enviarlo al Alcalde para su consideración e incorporación en el proyecto de acuerdo definitivo sobre rentas y gastos del municipio.
2. Vigilar el funcionamiento de las Comisiones y velar por el cumplimiento oportuno de las actividades encomendadas.
3. Autorizar Comisiones oficiales de concejales fuera de la sede del Concejo, siempre que no impliquen utilización de dineros del tesoro público.
4. Expedir mociones de duelo y de reconocimiento cuando ellas sean conducentes.
5. Aceptar la renuncia, conceder licencia, vacaciones y permisos al personero, con fundamento en la atribución conferida en el artículo 172 de la Ley 136 de 1994.
6. Suscribir las resoluciones para el efecto de reconocimiento de honorarios a los Concejales por su asistencia comprobada a las sesiones plenarias, y ordenar su publicación en el medio oficial de información del Concejo (art. 65 de la Ley 136 de 1994)
7. Recibir la renuncia del Presidente de la Corporación.

8. Darle cumplimiento a las sanciones disciplinarias impuestas por los partidos y movimientos políticos a los Concejales de las bancadas con presencia en la Corporación.
9. Acreditar a los voceros de las bancadas para efectos de determinar las intervenciones de las mismas en las sesiones en las que se voten proyectos de acuerdo o se adelanten procesos de control político, según las reglas de procedimiento determinadas procedentemente.
10. Garantizar que en cada comisión permanente tenga presencia al menos un miembro de las diferentes bancadas que tenga presencia en la Corporación, cuando existan suficientes integrantes en la misma.
11. Las demás establecidas en la ley o el presente reglamento.

Parágrafo. Durante los periodos de sesiones, la Mesa Directiva se reunirá por lo menos una vez a la semana, a la hora y el día que sea convocada por su Presidente. Sus decisiones se tomarán por mayoría y de cada reunión deberá quedar constancia en acta.

ARTÍCULO 47°.- COMITÉ DE COORDINACIÓN POLÍTICA. Conformado por el Presidente de la Corporación, quien lo preside, y los voceros o coordinadores de las bancadas. Se reunirá por lo menos una vez al mes para el desarrollo de las siguientes funciones:

1. Proponer la agenda de trabajo de la Corporación.
2. Coordinar con la Presidencia el orden del día de las sesiones plenarias a celebrar.
3. Promover y ejecutar acciones de concertación política.

TITULO IV
DEBERES Y DERECHOS DE LOS CONCEJALES

CAPITULO PRIMERO
DE LOS DEBERES

ARTÍCULO 48°.- DEBERES. Como todo servidor público, el Concejal tiene el deber de acatar la Constitución y las leyes de la República, siendo responsable por su infracción, por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Especialmente tendrá los siguientes deberes:

1. Asistir a las sesiones de plenaria y de las Comisiones a que pertenezca.
2. Respetar el presente reglamento.
3. Guardar secreto sobre los asuntos que demanden reserva.
4. Abstenerse de invocar su condición de concejal para la obtención de algún provecho personal indebido.
5. Utilizar adecuadamente los bienes y recursos asignados para el desempeño de su función.
6. Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por razón del servicio.
7. Ejercer sus funciones consultando permanentemente los intereses del bien común.
8. Abstenerse de incurrir en alguna de las causales de pérdida de la investidura, previstas en el artículo 48 de la Ley 617 de 2000.
9. Declarar bajo juramento el monto de sus bienes y rentas, antes de tomar posesión del cargo y al retirarse del mismo.
10. Poner en conocimiento de la Corporación las situaciones de carácter moral o económico que lo inhiban para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración, conforme al artículo 70 de la Ley 136 de 1994, así como las incompatibilidades en que pueda estar incurso.
11. Actuar exclusivamente en la bancada del partido o movimiento político por el cual fue elegido y con sujeción a los parámetros de actuación que determinen aquella, salvo en los asuntos determinados como de conciencia

CAPITULO SEGUNDO
DE LOS DERECHOS

ARTÍCULO 49°.- DERECHOS. El concejal tiene los siguientes derechos principales:

1. A voz durante las sesiones, conforme al reglamento.
2. A voto, tanto en la plenaria como en la comisión permanente a que pertenezca.
3. A citar en ejercicio del control político que corresponde a la Corporación, a los funcionarios que autoriza la ley.
4. A formar parte de una comisión permanente.
5. Al reconocimiento y pago de honorarios por su asistencia comprobada a las sesiones plenarias de la Corporación, conforme a la reglamentación legal.

6. A ser afiliado por el sector central del municipio al sistema contributivo de seguridad social en salud y ARP, en su condición de servidor público y conforme a los artículos 157 y concordantes de la Ley 100 de 1993
7. A un seguro de vida y a la atención médico asistencial personal, de conformidad con los artículos 66, 68 y 69 de la Ley 136 de 1994 y la ley 1148 de 2007 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional contenida en la sentencia C-043 de 2003.
8. Al reconocimiento de transporte[8] en los casos en que resida en zona rural y deba desplazarse hasta la cabecera Municipal para asistir a las sesiones plenarias o de comisión, teniendo en cuenta el acuerdo aprobado para tal efecto
9. A ejercer individualmente las actividades propias de su dignidad de conformidad con la Constitución Política, la Ley 136 de 1994 y la Ley 974 de 2005.

TITULO V
SECRETARIO GENERAL

CAPITULO ÚNICO
DESIGNACIÓN. REQUISITOS. PERIODO. FUNCIONES.

ARTÍCULO 50°.- DESIGNACIÓN, REQUISITOS Y PERIODOS. El secretario general será elegido por el Concejo para un periodo legal de un (1) año, de lista de admitidos previa convocatoria pública con principios de mérito, pude ser reelegido a criterio de la Corporación. Deberá acreditar los requisitos exigidos por la Ley 136 de 1994.

La primera elección de este funcionario se realizará dentro de los diez (10) primeros días del mes de enero correspondiente a la iniciación del periodo constitucional. Para los años siguientes del mismo periodo constitucional, tendrá lugar durante el último periodo ordinario de sesiones o en su prórroga, o en su defecto en sesiones extraordinarias que para el efecto convoque el Alcalde. Se posesionará y juramentará ante el Presidente de la Corporación y asumirá funciones a partir de su posesión.

[8] según el Artículo 67 ley 1368 de 2009.

Siempre que se haga una elección después de haberse iniciado un período, se entiende hecha sólo para el resto del período en curso.

ARTÍCULO 51°.- FUNCIONES GENERALES. Es el jefe administrativo de los empleados al servicio de la Corporación, Secretario de la misma y de las Comisiones. En tal condición le corresponde la organización y dirección del talento humano para el cumplimiento de la misión de la Corporación.

ARTÍCULO 52°.- FUNCIONES ESPECÍFICAS. Son funciones específicas y deberes del Secretario General de la Corporación, las siguientes:

1. Asistir a todas las sesiones, tanto de plenaria como de las Comisiones Permanentes.
2. Llevar y firmar junto con el Presidente las actas de las sesiones plenarias. Igual procedimiento se cumplirá con las actas de las sesiones de Comisiones.
3. Dar lectura a los proyectos, proposiciones, documentos y mensajes que deban ser leídos en sesión plenaria y en las Comisiones.
4. Informar sobre los resultados de toda clase de votación que se cumpla en la Corporación.
5. Notificar las citaciones e invitación aprobadas por la Corporación.
6. Elaborar las comunicaciones oficiales que deban ser enviadas por el Presidente o por la Mesa Directiva.
7. Informar al Presidente sobre todos los documentos y mensajes dirigidos a la Corporación, acusar oportunamente su recibo, y mantener organizado y actualizado un registro de entrega y devolución de los mismos y de los enviados a las Comisiones.
8. Recibir y dar trámite a todo documento o petición que llegue al Concejo con destino a la Secretaría General de la Corporación.
9. Recibir y radicar los proyectos de acuerdo y repartirlos a cada uno de los Concejales y a la Comisión correspondiente para su trámite en primer debate.
10. Llevar los siguientes libros: el de registro de intereses privados de los Concejales de que trata el artículo 70, inciso segundo, de la Ley 136 de 1994, y el de registro de participación ciudadana a que se refiere el artículo 77 de la misma ley.
11. Preservar, cuidar y dar buen uso a todos los documentos a cargo de la Secretaría General.
12. Dirigir el órgano de publicación del Concejo.

13. Registrar y certificar la asistencia de los Concejales a las sesiones plenarias.
14. Recibir la inscripción de constitución de las bancadas de partidos y movimientos políticos del Concejo Municipal y dar a conocer a la plenaria los documentos constitutivos de las mismas.
15. Responder por la preservación y conservación de bienes muebles e inmuebles así como el inventario general que sea propiedad o este a cargo del Concejo Municipal, además responder por el archivo del Concejo Municipal.
16. Rendir oportunamente los informes a los diferentes entes de control.
17. Los demás deberes que le señale la Corporación, la mesa directiva o el presidente que sea concordantes con la naturaleza del cargo.

Parágrafo. Las faltas absolutas del Secretario General se suplen con una nueva elección en el menor tiempo posible. La mesa directiva convocara a la plenaria para la nueva elección en cualquier momento. En caso de falta temporal, la Mesa Directiva dispondrá lo pertinente.

TITULO VI
COMISIONES

CAPITULO PRIMERO
CLASES DE COMISIONES

ARTÍCULO 53.- COMISIONES ACCIDENTALES. Además de las Comisiones Permanentes, el Concejo podrá integrar Comisiones Accidentales. El Presidente nombrará Comisiones Accidentales para el cumplimiento de asuntos específicos como protocolo, asuntos de ética, acreditación documental, transmisión de mensajes, escrutinio de las votaciones internas, primer debate a proyectos cuando no se hayan constituido las Comisiones Permanentes, estudio de objeciones, presentación de informes a la plenaria sobre asuntos de interés para la Corporación, entre otros. Sin perjuicio de lo anterior, serán funciones específicas de las Comisiones Accidentales, las siguientes:

- Recibir sectores de la comunidad para el conocimiento de situaciones y problemas relacionados con el Municipio en sus diferentes aspectos.
- Presentar a la plenaria del Concejo o a las Comisiones Permanentes informe escrito sobre la gestión adelantada.

- Escrutar el resultado de las votaciones.
- Recibir dignatarios o personalidades que invite el Concejo Municipal.
- Presentar informe escrito sobre las objeciones del Alcalde Municipal a los proyectos de acuerdo.
- Preparar proyectos de acuerdo de especial interés para la Corporación y el Municipio.
- Llevar a cabo las funciones que le sean asignadas por el respectivo Presidente de la Corporación y de las Comisiones Permanentes.

Parágrafo. Dichas Comisiones deberán ser integradas por dos (2) Concejales, máximo cinco (5) asegurando la representación de las diferentes bancadas. En su designación, el Presidente definirá el termino para la presentación del informe sobre el tema, el cual deberá ser por escrito y radicado en la Secretaria General para su lectura en plenaria.

CAPÍTULO SEGUNDO
COMISIONES PERMANENTES

ARTÍCULO 54º.- NÚMERO, INTEGRACIÓN Y FUNCIONES. El Concejo tendrá tres (3) Comisiones Permanentes, integradas así: Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo integrada por cinco (5) miembros; Comisión Segunda Permanente del Presupuesto y Hacienda Pública integrada por cinco (5) miembros, Comisión Tercera Permanente Administrativa y de Gobierno integrada por cinco (5) miembros. En estas Comisiones Permanentes se surtirá el primer debate a los proyectos de acuerdo que por competencia le sean remitidos por la Secretaria General de la Corporación.

Cualquier comisión permanente podrá citar a persona natural o jurídica para que en sesión especial rinda declaraciones orales o escritas, sobre hechos relacionados directamente con asuntos de interés público, investigados por la misma, lo anterior con fundamento legal en el artículo 40 de la Ley 136 de 1994.

Todo concejal deberá hacer parte de una Comisión permanente durante el respectivo periodo constitucional.

Parágrafo 1. Los reemplazos de los Concejales harán parte de la Comisión permanente a que pertenece o pertenecía el titular de la curul.

Parágrafo 2. Las funciones de Secretario de las Comisiones las cumplirá el Secretario General, sin embargo en caso de imposibilidad la comisión nombrara AD-HOC.

Parágrafo 3. En los eventos en que las Comisiones Permanentes no se hayan integrado, los informes serán rendidos por Comisiones Accidentales nombradas para el efecto por la Presidencia de la Corporación.

Parágrafo 4: Para el desarrollo de sus funciones, las Comisiones Permanentes, en lo no contemplado en el presente acuerdo, se regirán por lo estipulado en la Constitución y las Leyes, especialmente el reglamento del congreso.

ARTÍCULO 55°.- ELECCIÓN[9]: Las Comisiones Permanentes deben ser integradas y elegidas por voto secreto, cada comisión estará integrada por cinco (5) concejales, cada concejal debe pertenecer a una comisión permanente y en ningún caso hará parte de dos (2) Comisiones Permanentes.

Para la elección de las Comisiones se presenta las planchas con los nombres de los concejales para cada comisión, cada plancha debe presentar la integración de las tres (3) Comisiones Permanentes, luego la presidencia del Concejo someterá a votación las planchas, todas a la vez, la plancha que obtenga la mayoría de los votos será la ganadora.

Cada comisión permanente elegirá el día de su instalación un presidente y un vicepresidente que ejercerán el cargo durante un año

Al presidente le corresponde dirigir los debates y señalar el día y la hora para la reunión de la comisión sin que pueda coincidir con el horario de la plenaria.

ARTÍCULO 56°.- MATERIA DE ESTUDIO DE LAS COMISIONES. Las Comisiones Permanentes se dedicarán en sus deliberaciones al examen de los temas especializados que le sean propios en materia normativa y de control

[9] artículo 3 de la Ley 1431 de 2011. VOTACION SECRETA No permite identificar la forma como vota el Congresista. Las rectificaciones solo serán procedentes cuando el número de votos recogidos no sean igual al de los votantes.
Esta votación solo se presentará en los siguientes eventos:
a) Cuando se deba hacer elección

político, al análisis y evaluación de los informes que deben rendir los funcionarios de la administración, aprobar o negar en primer debate los proyectos de acuerdo que sean sometidos a su consideración y a la realización de los debates que hayan sido aprobados en la Comisión sobre asuntos propios de su competencia.

Parágrafo: Los asuntos que por su naturaleza no estén claramente definidos como responsabilidad de una comisión permanente quedarán a disposición del Presidente de la Corporación para su asignación.

ARTÍCULO 57°.- SESIONES CONJUNTAS DE COMISIONES PERMANENTES. Dos Comisiones Permanentes sesionarán de manera conjunta cuando se trate de tramitar proyectos de acuerdo u otros asuntos relacionados con la competencia de ambas, y cuya materia lo exija. Las Comisiones Permanentes deberán ser convocadas a sesión conjunta por el Presidente de la Corporación quien la presidirá.

Parágrafo. Si una de las Comisiones Permanentes en sesión conjunta no aprueba un proyecto de acuerdo, este se considerará negado y se procederá a su archivo.

ARTÍCULO 58°.- MATERIAS OBJETO DE LA COMISIÓN PRIMERA PERMANENTE DEL PLAN DE DESARROLLO Y BIENES. Para el ejercicio de sus funciones normativas y de control político, será la encargada de los siguientes asuntos:

1. Plan de desarrollo del municipio.
2. Plan básico de ordenamiento territorial.
3. Plan vial y de movilidad, transito, transporte y seguridad.
4. Organización y funcionamiento de las veedurías ciudadanas, la descentralización, la desconcentración y el control social de los servicios públicos.
5. Reglamentación del uso del suelo y el espacio público del municipio.
6. Desarrollo físico de las áreas rurales del municipio.
7. División del territorio Municipal.
8. Planeación y asesorías a las Juntas de Acción Comunal en la elaboración del Plan de Desarrollo Económico y Social.
9. Preservación y defensa del patrimonio ecológico, los recursos naturales y del medio ambiente.

10. Vigilancia y control de la prestación de los servicios públicos domiciliarios y del transporte público y seguridad ciudadana.
11. Divulgación, fomento y pedagogía de los procesos de participación y cultura ciudadana.
12. Ejercer la vigilancia y control de las actividades de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda establecidas en el artículo 187 de la Ley 136 de 1994.
13. Estudio de facultades pro témpore al Alcalde del Municipio en las materias antes relacionadas.
14. organización de la personería reglamento interno del Concejo y determinación de la estructura orgánica del mismo
15. Las demás que sean asignadas por el Presidente de la Corporación.

ARTÍCULO 59°.- MATERIAS OBJETO DE LA COMISIÓN SEGUNDA PERMANENTE DE PRESUPUESTO Y HACIENDA PÚBLICA. Para el ejercicio de sus funciones normativas y de control político, será la encargada de los siguientes asuntos:

1. Plan de inversiones del municipio y el componente financiero que contengan los planes de desarrollo económico y social y de obras públicas.
2. Establecimiento, reforma o eliminación de tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas, extensiones tributarias, sistemas de retención y anticipos.
3. Normas orgánicas del presupuesto y expedición anual del presupuesto de rentas y gastos.
4. Los recursos de gastos e inversión para el municipio.
5. Definición de las escalas de remuneración para las distintas categorías de empleos de la administración Municipal.
6. Cupo global de endeudamiento.
7. Estudio de las facultades pro témpore al Alcalde Municipal sobre materias de competencia de esta Comisión.
8. Examen del balance general y demás estados contables del municipio, presentados por el Alcalde, firmados por el Secretario de Hacienda y presentación al Concejo Municipal de sus conclusiones.
9. Examen del informe sobre el estado de las finanzas del municipio y análisis de las políticas económicas adoptadas por la Administración.
10. Las demás que sean asignadas por el Presidente de la Corporación

ARTÍCULO 60°.- MATERIAS OBJETO DE LA COMISIÓN TERCERA PERMANENTE ADMINISTRATIVA Y DE GOBIERNO. Para el ejercicio de sus funciones normativas y de control político, será la encargada de los siguientes asuntos:

1. Regulación, preservación y defensa del patrimonio cultural.
2. Estudio de facultades pro témpore al Alcalde sobre materias de competencia de esta Comisión.
3. Estructura de la Administración Central y sus funciones, creación y supresión de empleos, creación, constitución, supresión, transformación y fusión de establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales, sociedades de economía mixta y participación del municipio en otras entidades de carácter asociativo.
4. Educación, salud, bienestar social, deporte, recreación, turismo y cultura ciudadana.
5. Organizaciones sindicales, comunitarias y sociales.
6. Derechos humanos.
7. Las demás que sean asignadas por el Presidente de la Corporación.

TÍTULO VII
SESIONES

CAPITULO PRIMERO
REUNIONES. CITACIONES. ORDEN INTERNO

ARTÍCULO 61°.- CLASES DE SESIONES. El Concejo podrá sesionar bajo las siguientes modalidades:

1°. PLENARIA. Es la reunión de la mayoría de los Concejales para tratar asuntos que por Constitución y la Ley son de su competencia. Sus modalidades son:

a. Sesión inaugural. Es aquella con que se inicia cada nuevo periodo constitucional del Concejo.
b. Sesión de instalación. Es aquella sesión con la que se inicia todo periodo legal.

c. Sesión de clausura. Corresponde a la última sesión plenaria de la Corporación en cada periodo ordinario y la última de las sesiones extras.
d. Sesión reservada. Es la que se realiza sin asistencia ni participación de la comunidad, por requerirlo el asunto que haya de tratarse o lo disponga la Mesa Directiva o cuando en tal sentido se apruebe una proposición.
e. Sesión especial. Cuando el Concejo se reúne a solicitud de la comunidad con el lleno de los requisitos señalados por la Ley para tratar únicamente los asuntos para la cual fue convocada.
f. Cabildo abierto. Cuando el Concejo se reúne previo el lleno de los requisitos establecidos en las normas correspondientes.

2º. SESION DE COMISIÓN PERMANENTE. Es aquella en que se surte el primer debate a los proyectos de acuerdo y se tratan aquellos asuntos que la Corporación determine pertinentes en cumplimiento de sus funciones.

3º. SESIÓN DE COMISIÓN ACCIDENTAL. Es aquella que surte el primer debate cuando no se hayan conformado las Comisiones Permanentes. También es aquella que se reúne para estudiar asuntos específicos que le asigne la Presidencia.

ARTÍCULO 62º.- SESIONES. El Concejo Municipal sesionará de manera ordinaria y extraordinaria en el recinto oficial, en los periodos descritos en el Artículo 28º de este reglamento. Para tal efecto, todos los días de la semana son hábiles, tanto para la plenaria como para las Comisiones. Los horarios para las sesiones son los siguientes, a no ser que la plenaria por proposición los modifique en forma temporal:

1. De lunes a viernes de 7:00 AM a 10:30 am, la sesión se iniciará con un número no inferior al 25% de sus miembros, teniendo como máximo plazo las 7:30 AM para la conformación del quórum decisorio a fin de aprobar el respectivo orden del día. De no darse esta condición, se levanta la sesión.
2. Sábados, domingos y festivos, de 8:00 AM a 11:30 AM, la sesión se iniciará con un número no inferior al 25% de sus miembros, teniendo como máximo plazo las 8:30 AM para la conformación del quórum decisorio a fin de aprobar el respectivo orden del día. De no darse esta condición, se levanta la sesión.

La propuesta para declarar sesión permanente será votada por la plenaria sin lugar a discusión previa.

Las Comisiones Permanentes sesionarán válidamente para ejercer sus funciones normativas y de control político en todo tiempo y momento dentro del periodo constitucional. No podrán sesionar mientras haya sesión plenaria.

Las sesiones de las Comisiones Permanentes durarán máximo cuatro (4) horas a partir del momento en que el Presidente las declarare abiertas, pero podrán declararse de sesión permanente cuando consideren necesario.

Durante el desarrollo de las sesiones, el Presidente tanto de plenaria como de las Comisiones, podrá declarar los recesos por el término que considere necesario.

Cada periodo de sesiones ordinarias podrá prorrogarse hasta por diez días (10) calendario más. Esta prórroga se decidirá mediante proposición presentada por cualquier concejal y aprobada por la mayoría simple de la plenaria.

Parágrafo 1: El horario establecido en el presente artículo podrá ser modificado por la plenaria.

Parágrafo 2: Después de 3 horas y media de sesión se debe declarar sesión permanente para que los actos sean válidos, de no hacerlo los actos después de 3 horas y media no serán válidos.

ARTÍCULO 63º.- CITACIONES: La citación a las sesiones plenarias y a las Comisiones, deberán hacerla los Presidentes. Al finalizar la sesión debe informar el día y la hora de la siguiente reunión, o en su defecto, a través de la Secretaría General de manera expresa y oportuna, dejando constancia de la misma.

Parágrafo 1: Cuando se trate de elección de funcionarios, de Mesa Directiva o Comisiones Permanentes, la citación se hará con tres (3) días de anticipación, ya sea de manera verbal en una sesión o por escrito o por un medio electrónico a través de la Secretaría General.

Parágrafo 2: Cuando el Concejo no este sesionando y se convoque para citar a sesiones plenarias y de comisión, el Presidente a través de la Secretaria General, notificara por escrito a los concejales y en caso de no ser posible se realizara de

manera expresa y oportuna, dejando constancia de la misma, en todo caso la citación se hará con tres (3) días de anticipación.

ARTÍCULO 64°.- SESIONES FUERA DE LA SEDE. Con el voto afirmativo de la mayoría simple de los Concejales miembros de la plenaria o de las Comisiones Permanentes, se podrá sesionar fuera de la sede oficial para atender asuntos de interés para la comunidad, en el sitio que se determine en la proposición que se apruebe para tal fin, la cual deberá contener los asuntos a tratar. El Presidente de la plenaria o comisión permanente podrá objetar la sesión fuera del Concejo por razones comprobables de seguridad o por que el sitio no ofrezca las garantías de protección para los honorables concejales.

ARTÍCULO 65°.- ORDEN INTERNO. Al recinto destinado a la realización de las sesiones del Concejo, solo podrán ingresar los miembros de la Corporación, quienes participen con derecho a voz en sus deliberaciones, funcionarios invitados y citados, el personal administrativo y de seguridad, así como periodistas. La Presidencia podrá autorizar el ingreso de otras autoridades y de particulares cuando no se afecte el normal desarrollo de las sesiones.

Los Concejales tendrán en el recinto sus sillas dispuestas por bancadas, en el orden que lo determine la Mesa Directiva.

La comunidad podrá ingresar libremente a las sesiones y ocupar su lugar en las graderías destinadas para las barras, sin embargo, el Presidente regulará su ingreso cuando las circunstancias lo exijan y ejercerá el control necesario. Durante la sesión, podrá pedir que guarden compostura y silencio, mandar salir a los perturbadores, e incluso ordenar el despeje de las barras.

Para el mantenimiento del orden, el Presidente impondrá al Concejal, funcionario o ciudadano que falte al respeto debido a la Corporación o ultrajare de palabra a cualquiera de sus miembros, según la gravedad de la falta, alguna de estas sanciones:

1. Llamamiento al orden.
2. Declaración pública de haber faltado al orden y al respeto debido.
3. Suspensión en el uso de la palabra. (Esta decisión es Apelable ante la Plenaria)
4. Suspensión del derecho a continuar interviniendo en el debate o en la sesión.

5. Desalojo inmediato del recinto. Si no acata lo ordenado (Esta decisión es Apelable ante la Plenaria)

Parágrafo. Sin excepción, ninguna persona podrá portar armas en el recinto del Concejo. También estará prohibido ingerir bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas o fumar, como también el ingresar en ropa deportiva (pantaloneta).

ARTÍCULO 66°.- ORDEN DE LAS SESIONES. Llegada la hora para iniciar la sesión convocada, el Presidente ordenará al Secretario General llamar a lista. Si se verifica el quórum decisorio ordenará dar lectura al orden del día.

Si llegada la hora fijada para iniciar la sesión no se encuentra presente el Presidente, la instalación la podrá hacer en su orden, el Primer o Segundo Vicepresidente. Si estuvieren ausentes todos los miembros de la Mesa Directiva, la instalación de la sesión la hará el Concejal que por orden alfabético se encuentre primero en la lista.

Si por haberse turbado el orden de la sesión, fuere conveniente diferir el tratamiento de un asunto previo en la agenda del día, el Presidente podrá disponer su aplazamiento hasta la sesión siguiente. Esta decisión es susceptible de apelación inmediata ante la plenaria, por cualquier Concejal.

En relación con el orden en el que deberán adelantarse las sesiones, se considerarán como faltas de los Concejales, las siguientes:

1. El desconocimiento de los deberes que impone este reglamento.

2. El cometer actos de desorden e irrespeto en el recinto de sesiones.

3. No presentar las ponencias en los plazos señalados, salvo excusa legítima.

ARTÍCULO 67°.- SESIONES EXTRAORDINARIAS. El Concejo Municipal sesionará extraordinariamente por convocatoria que haga el Alcalde Municipal y por el término que éste le fije. Durante el periodo de sesiones extraordinarias el Concejo únicamente se ocupará de los asuntos que el Alcalde someta a su consideración, sin perjuicio de que ejerza las funciones inherentes a su naturaleza y las de control político que le corresponde en todo tiempo.

CAPITULO SEGUNDO
ORDEN DEL DIA

ARTÍCULO 68°.- ORDEN DEL DÍA. La serie de asuntos que se someten en cada sesión a la discusión y decisión del Concejo, tanto en plenaria como en sus Comisiones Permanentes, se llama Orden del Día, el cual seguirá el siguiente orden y orientación:

1. Llamado a lista y verificación de quórum.
2. Oración.
3. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.
4. Lectura, discusión y aprobación de actas.
5. Debates e intervención de funcionarios citados.
6. Intervención de invitados y representantes de la comunidad.
7. Trámite de proyectos de acuerdo apelados.
8. Trámite de proyectos objetados por el Alcalde.
9. Proyectos de trámite especial.
10. Informe de las Comisiones Permanentes.
11. Proyectos de acuerdo para segundo debate.
12. Elección y posesión de funcionarios, Mesa Directiva y Comisiones permanente.
13. Informe de Comisiones especiales y accidentales.
14. Lectura de documentos y comunicaciones.
15. Proposiciones y asuntos varios.

Parágrafo 2. El orden del día puede ser modificado solo por una vez, mediante propuesta de uno de los Concejales asistentes, por la respectiva plenaria o comisión permanente. Para que pueda darse este evento, debe haber transcurrido una hora después de su aprobación.

Parágrafo 3. Cuando se vayan a incluir en el orden del día proyectos de acuerdo para segundo debate, la presidencia a través de la Secretaría lo anunciará en la plenaria con no menos de un día de antelación.

Parágrafo 4. Cuando en una sesión no se agote el orden del día aprobado, los puntos pendientes deberán evacuarse con prelación en la sesión siguiente, teniendo en cuenta las prioridades de ley, como son llamado a lista y verificación del quórum, aprobación del orden del día y aprobación de actas.

CAPITULO TERCERO
DEBATES

ARTÍCULO 69º.- CONCEPTO. El debate es el sometimiento a discusión de cualquier proyecto o proposición sobre cuya adopción deba resolver la plenaria o una de sus Comisiones Permanentes. La presidencia declara abierto el debate y permite su desarrollo cuando exista quórum deliberativo. Las decisiones sólo pueden tomarse con la mayoría requerida, con el cual termina el debate.

ARTÍCULO 70º.- INTERVENCIONES. En todos los casos y sin excepción, para hacer uso de la palabra, se requiere autorización previa de la presidencia. Se concederá con sujeción al orden establecido en este reglamento.

ARTÍCULO 71º.- INTERPELACIÓN. Es la solicitud al orador para que conceda el uso de la palabra, exclusivamente para la formulación de preguntas o aclaración de algún aspecto que aquel esté tratando. Requiere de la autorización de la presidencia.

La interpelación tendrá una duración máxima e improrrogable de dos (2) minutos. Si excede este límite o no se refiere a una solicitud de aclaración o pregunta, o no fuere concisa y pertinente, el Presidente le retirará la autorización para interpelar y dispondrá que el orador continúe su exposición.

El orador podrá solicitar al Presidente no conceder la autorización de interpelación hasta tanto termine su intervención. En ningún caso se concederá más de dos (2) interpelaciones al orador.

ARTÍCULO 72º.- DERECHO DE RÉPLICA. En todo debate se garantizará el derecho de réplica cuando se expresen juicios de valor, inexactitudes o comentarios contra la dignidad de una persona, grupo político, preceptos religiosos, morales u otro del mismo orden. Al aludido o titular del derecho de réplica, se le concederá el uso de la palabra hasta por tres (3) minutos.

ARTÍCULO 73º.- MOCIONES. Es una proposición especial que presenta uno o varios concejales durante la discusión de un asunto, que el Presidente debe decidir de manera inmediata.

ARTÍCULO 74°.- MOCIÓN DE ORDEN. Cuando exista dispersión en el tratamiento del tema correspondiente al orden del día, cualquier Concejal podrá solicitar moción de orden con el fin de que las intervenciones se centren en el tema específico.

ARTÍCULO 75°.- MOCIÓN DE PROCEDIMIENTO. Cuando se considere que en el curso de la sesión no se están observando algunos procedimientos establecidos, cualquier Concejal podrá solicitar moción de procedimiento con el fin de que la sesión se ajuste estrictamente al reglamento de la Corporación

ARTÍCULO 76°.- MOCION DE SUFICIENTE ILUSTRACION. CUANDO UN CONCEJAL considere que el tema en discusión del orden del día ha sido debatido ampliamente por las bancadas interesadas en el tema, podrá solicitar moción de suficiente ilustración, así hubiere oradores inscritos, con el fin de que se suspendan las intervenciones sobre el mismo y se entre a votar de inmediato.

ARTÍCULO 77°.- MOCION DE ACLARACION DE VOTO. Es el derecho que tiene todo concejal para fundamentar las razones o circunstancias en las cuales tomo la decisión respectiva.

ARTÍCULO 78°.- PROPOSICIONES. Uno o más Concejales pueden presentar de manera verbal o escrita una proposición. El autor o el vocero de los proponentes podrán hacer uso de la palabra para sustentarla. Las proposiciones en plenaria o en Comisiones Permanentes podrán ser:

1. Principal: Es la que se presenta por primera vez a consideración y decisión de la plenaria o de una comisión.
2. Supresivas: Cuando se propone suprimir total o parcialmente uno o más artículos de un proyecto de acuerdo, el contenido de un informe, ponencia o una proposición.
3. Aditivas: Cuando se propone adicionar los artículos de un proyecto de acuerdo, o el texto de informe, ponencia o proposición.
4. Sustitutivas: Cuando se propone sustituir el título, atribuciones o el articulado de un proyecto de acuerdo, el texto de un informe o una proposición. Se discute y se vota primero, si es aprobada, la inicial queda negada y viceversa. No podrá haber ninguna proposición sustitutiva de la sustitutiva. Aprobada la sustitutiva desaparece la principal.
5. Divisivas: Cuando se propone dividir un artículo o capítulo de un proyecto de acuerdo o el texto de un informe, ponencia o proposición.

6. Asociativas: Cuando se propone reunir artículos o capítulos de un proyecto de acuerdo o ponencia.
7. Transpositivas: Cuando se propone cambiar de ubicación uno o varios títulos o artículos de un proyecto o ponencia.
8. De citación: Cuando se propone citar para debate a funcionarios o autoridades de la administración Municipal. Las proposiciones de citación que versen sobre temas, asuntos o materias similares deberán ser acumuladas para ordenar y ser más productivas a la programación y el desarrollo de los debates, cuando así lo disponga el Presidente de la Corporación o la comisión. Debe ir acompañada del respectivo cuestionario, la fecha y la hora de citación.
9. De reconocimiento: Cuando se propone exaltar y reconocer la vida y obra de personas naturales o jurídicas. Éste tipo de proposiciones solamente podrá presentarse ante la plenaria de la Corporación.
10. Modificativa: Es la que aclara la principal. Puede ser mediante la variación de su redacción sin cambiar el contenido material, o dividiendo o reuniendo sus temas para su mayor comprensión o claridad, o por otro procedimiento similar. No será admisible la proposición modificativa de otra modificativa. Aprobada la modificativa, se tendrá por rechazado el artículo o texto original. Por el contrario, negada una proposición modificativa, continuará abierta la discusión sobre la original.

ARTÍCULO 79º.- PROHIBICIONES. Durante las sesiones ordinarias y extraordinarias, en el uso de la palabra no se podrá:

1. Referirse a un tema diferente al que se encuentra en discusión. El desconocimiento de este deber obligará a la Presidencia a llamar la atención y/o suspender el uso de la palabra.

2. Dar lectura a discursos escritos, salvo notas o apuntes tomados para auxiliar la memoria.

3. Hablar más de una vez cuando se trate de proposiciones para alterar o diferir el orden del día, apelaciones por lo resuelto en la Presidencia, revocatorias o proposiciones para que un proyecto regrese a primer debate.

4. Colocar grabaciones en la sesión sin previa autorización del Presidente.

ARTÍCULO 80°.- USO DE LA PALABRA DE FUNCIONARIOS. Los funcionarios citados o invitados por la Corporación hablaran en el momento en que el Presidente de la plenaria o de las Comisiones Permanentes les conceda el uso de la palabra. Lo harán únicamente para referirse al tema debatido y tendrán para ello hasta quince (15) minutos. Si estiman que necesitan más tiempo, deberán solicitar autorización al Presidente para continuar con el tema a tratar. En este caso el Presidente de la plenaria o la comisión permanente fijará el tiempo adicional para su intervención.

En las sesiones de control político, al funcionario citado deberá concedérsele el uso de la palabra para que se refiera a cada uno de los puntos controvertidos en el debate.

ARTÍCULO 81.- USO DE LA PALABRA DE INVITADOS Y COMUNIDAD. Para efectos de foros, debates de control político, la comunidad invitada a la Corporación hablará en el momento en que el presidente de la plenaria o de las Comisiones Permanentes les conceda el uso de la palabra. Lo harán únicamente para referirse al tema y tendrá para ello hasta cinco (5) minutos. Si estiman que necesitan más tiempo, deberán solicitar autorización del presidente para continuar con el tema a tratar, en cuyo caso el Presidente de la plenaria o de la Comisión permanente fijará el tiempo adicional para su intervención.

ARTÍCULO 82°.- INCUMPLIMIENTO DE UNA CITACIÓN. Si el funcionario citado reglamentariamente para un debate incumple la citación sin justa causa, no radica el informe o es presentado extemporáneamente, o no de respuesta completa y veraz al cuestionario, el Presidente del Concejo o de las Comisiones permanente, oficiosamente deberá dar traslado al organismo competente para que realice la correspondiente investigación disciplinaria, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 3 del Artículo 31° de este Reglamento, sobre la moción de censura.

Parágrafo. El funcionario citado no podrá delegar su asistencia, salvo por justa causa debidamente comprobada. Se entiende por justa causa la calamidad pública o doméstica, la grave perturbación del orden público, la enfermedad debidamente certificada y los periodos legales de vacaciones.

ARTÍCULO 83.- GRABACIÓN Y TRASCRIPCIÓN DE LAS SESIONES. Las sesiones del Concejo podrán ser grabadas en su totalidad. La grabación y la digitación del contenido de las grabaciones será responsabilidad del Secretario General de la Corporación, la grabación es un apoyo magnetofónico para la

elaboración final del Acta, la cual una vez transcrita será leída y aprobada en la respectiva plenaria junto con sus modificaciones, la grabación no constituye parte integral del acta ya que es un apoyo para la elaboración final de la misma. La trascripción de las actas aprobadas debe conservarse en las condiciones de archivo apropiadas con copia de seguridad y bajo el cuidado del Secretario General de la Corporación. Su propósito será el de atender las solicitudes o consultas que eleven los Concejales, las autoridades competentes o personas interesadas.

CAPITULO CUARTO
VOTACIONES

ARTÍCULO 84°.- REGLAS EN MATERIA DE VOTACIONES. Cada Concejal tiene derecho a un voto, el cual deberá reflejar las posiciones adoptadas por la bancada a la que pertenece. El voto es irrenunciable, pues una vez cerrada la discusión de un proyecto de acuerdo o de una proposición, los Concejales están obligados a votar afirmativa o negativamente, salvo por razones de conciencia o excusa con autorización de la Plenaria cuando manifieste tener conflicto de interés en el asunto que se debate.

En casos de elecciones, los Concejales deberán votar por uno de los candidatos o en blanco.

En toda votación el número de votos debe ser igual al número de Concejales presentes al momento de ejercer este derecho; si el resultado no coincide, el presidente anulará la elección y ordenará su repetición.

Mientras se halle en curso una votación, no se concederá el uso de la palabra.

Parágrafo. Se considera como voto en blanco la papeleta depositada en la urna que no contenga escrito alguno o cuando así se expresa y el voto nulo es el que contiene más de un nombre, un nombre ilegible o uno distinto al de las personas por las cuales se está votando.

ARTÍCULO 85°.- MODOS DE VOTACIÓN[10]. En el Concejo, tanto en plenaria como en las Comisiones Permanentes, se podrá votar:

1. **Ordinaria,** Se utilizará para los casos señalados en este artículo y se efectúa dando los Concejales, con la mano, un golpe sobre el pupitre.

El Secretario informará sobre el resultado de la votación, y si no se pidiere en el acto la verificación, se tendrá por exacto el informe.

Si se pidiere la verificación por algún Concejal para dicho efecto podrá emplearse cualquier procedimiento que acredite el sentido del voto de cada Concejal y el resultado total de la votación, lo cual se publicará Íntegramente en el acta de la sesión.

Se podrán adoptar por el modo de votación ordinaria antes descrito:

a) Consideración y aprobación del orden del día y propuestas de cambios, modificaciones o alteración del mismo.
b) Consideración y aprobación de actas de las sesiones.
c) Suspensión o prórroga de la sesión. declaratoria de la sesión permanente o levantamiento de la sesión por moción de duelo o circunstancia de fuerza mayor.
d) Declaratoria de sesión reservada.
e) Declaratoria de sesión informal.
f) Declaración de suficiente ilustración.
g) Mociones o expresiones de duelo, de reconocimiento o de rechazo o repudio. Así como saludos y demás asuntos de orden protocolario.
h) Proposiciones de cambio o traslado de Comisiones que acuerden o soliciten sus respectivos integrantes.
i) Resolución de las apelaciones sobre las decisiones del presidente o la mesa directiva de la Corporación o de las Comisiones.
j) Proposiciones para citaciones de control político. Información general o de control público o para la realización de foros o audiencias públicas.
k) Decisiones sobre apelación de un proyecto negado o archivado en comisión.
l) Decisión sobre excusas presentadas por servidores públicos citados por las Comisiones o por la plenaria.

---

10 ley 1431 de 2011

m) Tampoco se requerirá de votación nominal y pública cuando en el trámite de un proyecto de Acuerdo exista unanimidad por parte de la respectiva comisión o plenaria para aprobar o negar todo o parte del articulado de un proyecto, a menos que esa forma de votación sea solicitada por alguno de sus miembros. Si la unanimidad no abarca la totalidad del articulado se someterán a votación nominal y pública las diferentes proposiciones sobre los artículos respecto de los cuales existan discrepancias.
n) El titulo de los proyectos siempre que no tenga propuesta de modificación.
o) La pregunta sobre si el Concejo quiere que un proyecto sea acuerdo Municipal.
p) La pregunta sobre si declara válida una elección realizada por el Concejo.
q) Los asuntos de mero trámite. entendidos como aquellos que. haciendo o no parte de la función constitucional y legal. no corresponden al debate y votación de los textos de los proyectos de Acuerdo y los no prescritos que puedan considerarse

Parágrafo 1. La verificación de la votación ordinaria debe surtirse por el mismo procedimiento que la votación nominal y pública, es decir deberá arrojar el resultado de la votación y el sentido del voto de cada Concejal. Se llamará a lista y cada Concejal anunciará de manera verbal su voto sí o no

Parágrafo 2°. Aceptado o negado un impedimento a un concejal en el trámite de un proyecto de Acuerdo en comisión, no será necesario volver a considerarse en la Plenaria de la Corporación a menos que se presenten circunstancias nuevas que versen los fundamentos del mismo.

2. **Votación Nominal.** Como regla general las votaciones serán nominales y públicas, con las excepciones que determine la ley o aquellas que la modifiquen o adicionen.

En esta modalidad, cada Concejal será llamado por el Secretario en orden alfabético de apellido y contestará individualmente en voz alta "SI" o "NO", o "NEGATIVO" o "POSITIVO" La votación nominal la ordena el Presidente cuando cualquier Concejal lo solicite

El resultado de la votación nominal se consignara en el acta, con expresión del nombre de los Concejales que votaron por el "SI" y quienes votaron por el "No".

3. Votación Secreta.

Es aquella en la que no se permite identificar como vota el Concejal. Las rectificaciones sólo serán procedentes cuando el número de votos recogidos no sean igual al de los votantes.

Ésta modalidad el Secretario llamará a cada Concejal en orden alfabético por apellido y procederá depositando en una urna la respectiva papeleta marcada con la leyenda "Sí" o "No". Sólo se empleará cuando se deba hacer una elección

Previamente el Presidente designará una comisión escrutadora.

ARTÍCULO 86°.- VOTACIÓN DE PROYECTOS DE ACUERDO. Un proyecto de acuerdo podrá ser votado en bloque o en conjunto, tanto en plenaria como en comisión permanente, con base en el entendido de que todos los miembros de la Corporación conozcan el documento con sus soportes y anexos. Igualmente, si la mayoría de la plenaria o comisión permanente mediante proposición lo aprueba, podrá votarlo de manera separada en todas sus partes. La solicitud puede provenir de un Concejal o del el autor de la iniciativa.

ARTÍCULO 87°.- EMPATES. En caso de empate en la votación de un proyecto o proposición, se procederá a una segunda votación en la misma sesión o en la inmediatamente siguiente, según lo disponga la presidencia. De presentarse nuevamente el empate, se entenderá negada la iniciativa. Si el empate se produce para una elección, está se repetirá y si el empate subsiste se decidirá por la suerte.

ARTÍCULO 88.- REGLAS ESPECIALES EN MATERIA DE ELECCION DE FUNCIONARIOS[11]. El acto de elección funcionarios de competencia del Concejo se citará con tres (3) días calendario de anticipación conforme a la ley. En la fecha y la hora indicada, el presidente abrirá la votación secreta. Cada votante escribirá en su papeleta el nombre de uno de los candidatos al cargo por proveer y la depositará en la urna dispuesta para el efecto, en el orden de llamado a lista por el secretario.

[11] Articulo 35 ley 136 de 1994

Previamente, el Presidente designará una comisión escrutadora encargada de contar las papeletas depositadas e informar el resultado, indicando el número de votos obtenidos por cada uno de los candidatos, los votos en blanco, los votos nulos y el total de los votos. Entregado el resultado, la presidencia declarará legalmente elegido para el cargo o dignidad de que se trate, al candidato que ha obtenido la mayoría de votos, e inmediatamente se le tomara el juramento de rigor. Si se debe acreditar requisitos, se dispondrá su posesión para otra oportunidad en términos legales.

Parágrafo.- Con el fin de prevenir acusaciones o demandas, los Concejales, al hacer una elección tendrán en consideración las prohibiciones de que tratan los artículos 126 y 292 de la Constitución Política y 49 de la ley 617 del 2000.

TITULO VIII
PROCESO NORMATIVO

CAPITULO I
ACUERDOS MUNICIPALES

ARTÍCULO 89°.- INICIATIVA[12]**.** La presentación de los proyectos de acuerdo ante la Secretaria del Concejo, deberá hacerse en un (1) original, y una copia para cada concejal y un (1) medio magnético y/o electrónico que contenga la totalidad del documento radicado. Contendrá su texto distribuido en titulo, encabezamiento, y la parte dispositiva o articulado; irán acompañados de la correspondiente exposición de motivos y conservarán el principio de unidad de materia.

Sin el cumplimiento de estos requisitos, la presidencia devolverá el proyecto para su corrección.

Son titulares de la iniciativa cualquiera de los Concejales individualmente considerados o agrupados en bancadas, así como también el Alcalde y en las materias relacionadas con sus atribuciones, también tiene iniciativa el Personero.

12 Articulo 71 ley 136 de 1994

Los proyectos de acuerdo también pueden ser de iniciativa popular como medio de participación ciudadana, conforme a la respectiva ley estatutaria[13]. Un grupo de ciudadanos que representen no menos del diez por ciento (10%)[14] del censo electoral vigente en el municipio, podrán presentar proyectos de acuerdo.

MATERIAS QUE PUEDEN SER OBJETO DE INICIATIVA POPULAR NORMATIVA[15]. Solo pueden ser materia de iniciativa popular normativa, aquellas que sean de la competencia de esta Corporación.

No se podrán presentar iniciativas populares normativas ante el Concejo, sobre las siguientes materias:

a) Las que sean de iniciativa exclusiva del Gobierno, de los gobernadores o de los Alcaldes;

b) Presupuestales, fiscales o tributarias;

c) Relaciones internacionales;

d) Concesión de amnistías o indultos;

e) Preservación y restablecimiento del orden público.

TRÁMITE ANTE EL CONCEJO DE LAS PROPUESTAS DE INICIATIVA NORMATIVA DE ORIGEN POPULAR,[16] Cuando se haya expedido la certificación que trata la ley 1557 de 2015, la Registraduría correspondiente

---

13 Articulo 18 ley 1757 de 2015 ARTÍCULO 18. MATERIAS QUE PUEDEN SER OBJETO DE INICIATIVA POPULAR LEGISLATIVA Y NORMATIVA, REFERENDO O CONSULTA POPULAR. Solo pueden ser materia de iniciativa popular legislativa y normativa, consulta popular o referendo ante las corporaciones públicas, aquellas que sean de la competencia de la respectiva Corporación o entidad territorial.

No se podrán presentar iniciativas populares legislativas y normativas o consultas populares ante el Congreso, las asambleas, los Concejos o las juntas administradoras locales, sobre las siguientes materias:

a) Las que sean de iniciativa exclusiva del Gobierno, de los gobernadores o de los Alcaldes; b) Presupuestales, fiscales o tributarias; c) Relaciones internacionales; d) Concesión de amnistías o indultos; e) Preservación y restablecimiento del orden público.

14 Articulo 9 literal c ley 1757 de 2015 Para presentar una iniciativa popular normativa de competencia de entidades territoriales se requiere el apoyo de un número de ciudadanos igual o superior al 10% del Censo Electoral vigente en la entidad territorial

15 Artículo 18 de la ley 1757 de 2015

16 Artículo 19 de la ley 1757 de 2015

enviará Al Concejo el articulado, la exposición de motivos de iniciativa normativa de origen popular. El nombre de la iniciativa, el de sus promotores y voceros, así como el texto del proyecto de articulado y su exposición de motivos, deberán ser divulgados en la publicación oficial del Concejo o la alcaldía.

PARÁGRAFO 1o. Cuando para continuar con el proceso de una iniciativa de participación ciudadana pueda generarse el archivo de la misma por vencimiento de la legislatura, el Concejo deberá darle curso a la iniciativa en la siguiente legislatura, dentro de los cinco primeros días del inicio de la misma.

La iniciativa popular normativa será estudiada de conformidad con lo establecido en el reglamento interno y se aplicarán las disposiciones establecidas en el artículo 163 de la Constitución Política para los proyectos que hayan sido objeto de manifestación de urgencia.

En el caso de iniciativas normativas, los términos serán improrrogables y su estudio será prioritario en el orden del día. En el caso en que la iniciativa sea negada en comisión, podrá ser apelada por el comité promotor en los términos del reglamento interno de la respectiva Corporación ante la plenaria.

PARÁGRAFO 2o. Quien sea reconocido como promotor de los mecanismos de participación ciudadana, cuyo propósito sea el de derogar, modificar o crear una norma, deberá ser convocado a todas las sesiones en que se tramite el proyecto y tendrá en ellas los mismos derechos, salvo el del voto, que la ley o el reglamento confiere a los miembros de esta Corporación.

Para presentar una iniciativa popular normativa de competencia de entidades territoriales se requiere el apoyo de un número de ciudadanos igual o superior al 10% del Censo Electoral vigente en la entidad territorial

Solo podrán ser presentadas por iniciativa del Alcalde[17] los proyectos acuerdos que versen sobre las siguientes materias:

1. Planes de desarrollo y de ordenamiento territorial.
2. Presupuesto anual de rentas y gastos.

[17] artículos 313- 6 y 315 – 5 de la Constitución Política y 71 de la Ley 136 de 1994,

3. Estructura de la administración Municipal, las funciones de sus dependencias y las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos.
4. Establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales
5. Sociedades de economía mixta.
6. Celebración de contratos.
7. Facultades temporales y precisas al Alcalde, de aquellas que corresponden al Concejo.
8. Las demás que determinen la constitución o la ley.

Parágrafo. El Alcalde, antes de su aprobación en plenaria, podrá coadyuvar en el impulso de cualquier proyecto de su iniciativa que curse en el Concejo cuando las circunstancias lo justifiquen.

ARTÍCULO 90°.- DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: Una vez recibido, radicado y clasificado el proyecto de acuerdo en la Secretaría, será remitido en el menor tiempo posible a la comisión permanente respectiva y a cada uno de los Concejales.

ARTÍCULO 91°.- DESIGNACION DE PONENTES. DESIGNACION DE PONENTES. Corresponde al Presidente de la Corporación designar los ponentes para primer y segundo debata para cada proyecto, pudiendo ser el mismo o distinto para el primer y segundo debate. Podrá designar varios ponentes y un coordinador de los mismos, señalará un término para la presentación de las ponencias entre uno (1) y diez (10) días calendario si el proyecto contiene hasta 10 artículos, hasta a 15 días si contiene más de 10 artículos. Estos términos se podrán prorrogar por una sola vez hasta la mitad del tiempo inicialmente concedido. En caso de incumplimiento se procederá a su reemplazo.

Se publicará una lista con los nombres de los concejales negligentes en la presentación de las ponencias.

Parágrafo 1°. Los términos que habla el presente artículo se empezara a contar una vez se le haga saber mediante acto administrativo y entregue copia del proyecto de Acuerdo al Concejal que ha sido designado como ponente por el Presidente de la Corporación.

Parágrafo 2°. Antes de presentarse ponencia para primer debate, el proyecto podrá ser retirado por su autor. En los demás eventos se requerirá la aceptación de la comisión respectiva o de la plenaria.

Parágrafo 3°. Las ponencias para primer y segundo debate que deberán ser entregadas por escrito, serán publicadas a través de un medio idóneo

ARTÍCULO 92°.- ACUMULACIÓN DE PROYECTOS. Sólo en primer debate y antes de rendirse ponencia, el proyecto o proyectos de acuerdo que se refieran a un mismo tema, podrán ser remitidos con nota explicativa por el Presidente de la comisión al ponente del proyecto en estudio, quien a su juicio podrá acumularlos. Si ya los proyectos cursaren simultáneamente, en las mismas condiciones, podrán acumularse por decisión de la presidencia.

ARTÍCULO 93°.- REQUISITOS LEGALES. Todo proyecto para ser acuerdo Municipal, debe cumplir los requisitos siguientes:

1. Aprobación en primer debate en la comisión permanente respectiva.
2. Aprobación en segundo debate en la plenaria de la Corporación.
3. Sanción ejecutiva por parte del Alcalde.
4. Publicación o promulgación en el medio oficial.

CAPITULO SEGUNDO
PRIMER DEBATE

ARTÍCULO 94°.- PRESENTACIÓN DE LA PONENCIA Y APERTURA DEL DEBATE. La ponencia para primer debate será radicada en Secretaría y deberá ir acompañada de un medio magnético que la contenga, se incorporará al expediente del proyecto de acuerdo y se distribuirá por un medio idóneo a los Concejales miembros de la respectiva comisión permanente.

En la sesión de la comisión permanente, leída la ponencia, se someterá a discusión la proposición con que termina. Aprobada esta, se continuará con el trámite en el siguiente orden: título, encabezado y articulado.

ARTÍCULO 95°.- DISCUSIÓN. En la discusión de la ponencia, el ponente intervendrá para dar explicaciones, aclarar los temas debatidos y ordenar el

trabajo. Se considerarán las modificaciones propuestas por el ponente, y las que puedan ser presentadas por concejales o autoridades Municipales con derecho a voz.

El presidente podrá ordenar los debates por artículos, grupo de artículos, materia o atendiendo a las enmiendas presentadas, según lo aconseje la naturaleza del proyecto, la conexidad entre las pretensiones y la mayor claridad.

ARTÍCULO 96°.- ENMIENDAS. Podrán presentarse enmiendas por cualquier concejal hasta el cierre de la discusión verbal o mediante escrito dirigido a la presidencia de la respectiva comisión. Esta podrá referirse a la totalidad del proyecto, proponiendo un cambio en su orientación o principios o un texto alternativo, o referirse a una o varias disposiciones del articulado, con el fin de suprimirlas, modificarlas o adicionarlas. En ambos casos, la enmienda deberá estar fundamentada en motivo de conveniencia, y si es posible, en razones jurídicas. Las enmiendas no admitidas en comisión podrán ser puestas en consideración en plenaria en segundo debate, dentro de la discusión de la ponencia, si así lo solicitare el concejal proponente, a efectos de incorporarse o negarse en el texto del proyecto.

ARTÍCULO 97°.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA[18]. Toda persona natural o jurídica podrá presentar observaciones escritas sobre cualquier proyecto de acuerdo cuyo estudio y examen se esté adelantando en una de las Comisiones Permanentes, previa fijación de día, hora y duración de las intervenciones por la mesa directiva[19].

ARTÍCULO 98°.- PROYECTO APROBADO. Cerrado el debate y aprobado el proyecto y en lapso no superior a dos (2) días después de surtido el primer debate, el Presidente de la comisión y con la firma del Secretario, radicaran en la Corporación el informe de la comisión para efecto del segundo debate.

ARTÍCULO 99°.- PROYECTO NO APROBADO. Los proyectos que no recibieron aprobación en el primer debate, serán archivados y para que el Concejo se pronuncie nuevamente sobre ello deben presentarse nuevamente. Sin embargo,

---

18 ARTÍCULO 74 ley 1757 de 2015. FORMAS DE PARTICIPACIÓN. En cumplimiento del derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político en las Corporaciones Públicas, además de los mecanismos de participación contemplados en la Constitución y la ley, estas promoverán la participación ciudadana, entre otras, a través de las siguientes formas: participación ciudadana en aspectos normativos de acuerdo a las disposiciones del artículo 155 de la Constitución Política; sesión abierta; propuestas ciudadanas para el ejercicio del control político y sesiones de comunidades educativas.

19 artículo 77 de la Ley 136 de 1994

de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 73 de la ley 136 de 1994, dicho proyecto podrá ser considerado por el Concejo por solicitud del autor, de cualquier otro concejal, del gobierno Municipal o del vocero de los proponentes en el caso de la iniciativa popular, presentando recurso en la misma sesión en que fue negado el proyecto, el Presidente de la Comisión lo remitirá al Presidente de la Corporación, quien integrara una comisión accidental para el estudio del caso. Esta comisión presentará el respectivo informe en un plazo no superior a cinco (5) días calendario ante la plenaria, la que decidirá si acoge o rechaza la apelación. Si ocurriere lo primero, la Presidencia remitirá el proyecto a otra comisión permanente para que surta el trámite de primer debate; en el segundo caso se procederá a su archivo.

CAPITULO TERCERO
SEGUNDO DEBATE

ARTÍCULO 100°.- INICIACIÓN DEL DEBATE. Tres días después de su aprobación en la comisión respectiva[20], la plenaria considerara el proyecto en segundo debate, previa radicación en Secretaría y reparto de la ponencia a cada uno de los concejales. En este evento, después de leído el informe de la comisión y la o las ponencias por el Secretario, el coordinador de ponente o el ponente explicarán el significado y alcance del proyecto. A continuación podrán tomar la palabra los Concejales, y las autoridades Municipales con derecho a voz.

ARTÍCULO 101°.- ENMIENDAS. Se admitirán en la plenaria las enmiendas que no impliquen un cambio sustancial.

ARTÍCULO 102°.- APROBACIÓN. Antes de declararse la suficiente ilustración y una vez terminen de intervenir los concejales inscritos, podrá concederse el uso de la palabra a los funcionarios de la administración Municipal, al personero, según el caso, si así lo solicitaren en un tiempo no superior a (10) minutos a consideración del presidente. El Presidente declara la suficiente ilustración y someterá a votación el contenido del proyecto. Aprobado éste, preguntará a la Corporación si quiere que el proyecto aprobado se convierta en acuerdo Municipal.

---

20 Articulo 73 ley 136 de 1994

La secretaria dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, remitirá al Alcalde para la sanción ejecutiva del proyecto de acuerdo aprobado. Si el Alcalde no objetare dicho proyecto, lo sancionará como acuerdo y ordenará su promulgación. El acuerdo sancionado será publicado en la Gaceta Municipal dentro de los diez (10) días calendario siguiente.

El proyecto votado negativamente por la plenaria, al entenderse rechazado, se archivará, y deberá ser presentado nuevamente

ARTÍCULO 103°.- SECUENCIA NUMERICA DE LOS ACUERDOS. Los acuerdos debidamente sancionados y publicados, al igual los proyectos de acuerdo que se radiquen en la secretaria del Concejo tendrán secuencia numérica indefinida, establecida a partir del año 2008.

ARTÍCULO 104°.- REVISIÓN DE LOS ACUERDOS POR EL GOBERNADOR. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la sanción, el Alcalde enviará copia del acuerdo al Gobernador del Departamento para que cumpla con la atribución del numeral 10 del artículo 305 de la Constitución Política; en consecuencia el Gobernador por motivo de inconstitucionalidad o de ilegalidad, podrá remitir los acuerdos al Tribunal Administrativo para que decida sobre su validez. La revisión no suspende los efectos jurídicos de los acuerdos.

Los acuerdos son de obligatorio cumplimiento mientras no sean derogados, suspendidos o anulados por la jurisdicción contenciosa administrativa.

TITULO IX
DE LAS OBJECIONES

CAPITULO PRIMERO
MOTIVOS. PLAZOS

ARTÍCULO 105°.- MOTIVOS. Los proyectos de acuerdo aprobados por el Concejo podrán ser objetados por el Alcalde por los siguientes motivos:

1. Por considerarlos inconvenientes (objeción de inconveniencia).

2. Por estimarlos contrarios a la constitución política o al ordenamiento jurídico del país (objeción de derecho).

ARTÍCULO 106°.- PLAZOS. El Alcalde dispone de cinco (5) días hábiles para resolver con objeciones un proyecto de no más de veinte artículos, de diez (10) días hábiles cuando el proyecto sea de veintiuno a cincuenta artículos y hasta de veinte (20) días cuando el proyecto exceda los cincuenta artículos.

CAPITULO SEGUNDO
TRAMITE DE LAS OBJECIONES

ARTÍCULO 107°.- DEVOLUCIÓN CON OBJECIONES: Si el Concejo se encuentra sesionando, el proyecto devuelto será incluido por la Mesa Directiva en el orden del día de la siguiente sesión plenaria, en la cual el Presidente nombrará una comisión accidental para que estudie los argumentos del Alcalde en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles. Si el Concejo estuviese en receso, el Alcalde lo convocará a sesiones extraordinarias en la semana siguiente a la presentación de las objeciones, por un término no superior a cinco (5) días hábiles.

ARTÍCULO 108°.- OBJECIONES POR INCONVENIENCIA. La plenaria puede proponer que las objeciones sean declaradas fundadas, parcialmente fundadas o infundadas.

Si la plenaria declara las objeciones fundadas, el proyecto se archivará. Si decide declarar las objeciones infundadas o parcialmente fundadas, el proyecto una vez corregido, según el caso, será devuelto y el Alcalde deberá sancionarlo dentro de los ocho (8) días hábiles, si el Alcalde omite el cumplimiento de sus obligaciones, el Presidente del Concejo procederá a sancionar y promulgar el acuerdo correspondiente.

ARTÍCULO 109°.- OBJECIONES DE DERECHO. Para las objeciones jurídicas se seguirá el mismo procedimiento dispuesto en el artículo inmediatamente anterior. Si la plenaria declara las objeciones fundadas, el proyecto se archivará. Si declara las objeciones parcialmente fundadas, se harán las correcciones pertinentes siguiendo las orientaciones del Alcalde. Acto seguido el proyecto le será devuelto para su sanción. Si declara las objeciones infundadas, el proyecto regresará al Alcalde, quien dentro de los diez (10) días hábiles siguientes lo remitirá al

Tribunal Administrativo para su decisión, acompañado de una exposición de motivos de las objeciones.

Si el proyecto objetado fuere el de presupuesto, deberá enviarlo al Tribunal Administrativo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recibo, y esta Corporación se pronunciara dentro de los veinte días hábiles siguientes. Mientras el tribunal decide, regirá el proyecto de presupuesto presentado oportunamente por el Alcalde, bajo su directa responsabilidad[21]

Si las objeciones son declaradas fundadas por el Tribunal Administrativo, el proyecto se archivará y si son declaradas infundadas, el Alcalde sancionará el proyecto dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación del Tribunal. Pero si es considerado parcialmente viciado, así lo indicará al Concejo para que se reconsidere y lo rehaga, oído el respectivo Secretario administrativo y financiero del municipio; cumplido este trámite, será devuelto a Tribunal para fallo definitivo.

TITULO X
CABILDO ABIERTO

ARTÍCULO 110°.- PETICIÓN DEL CABILDO ABIERTO: En cada periodo de sesiones ordinarias Por proposición aprobada en plenaria a petición de uno o varios concejales o por iniciativa de un número no inferior al cinco por mil de los ciudadanos del censo electoral del municipio, el Concejo podrán celebrar cabildos abiertos en los que, se considerarán los asuntos que los residentes soliciten sean estudiados, siempre y cuando sean de competencia del Concejo. Es obligación del Alcalde asistir al cabildo abierto[22].

MATERIAS DEL CABILDO ABIERTO[23]. Podrán ser materias del cabildo abierto cualquier asunto de interés para la comunidad. En caso de que la comunidad cite al Alcalde respectivo deberá adjuntar a las firmas el cuestionario que formulará al funcionario, el cual debe ser remitido por el presidente de la Corporación, con mínimo cinco (5) días de antelación a la celebración del cabildo. El cuestionario deberá versar únicamente sobre asuntos de competencia del funcionario citado.

---

21 Decreto 111 de 1996, art.109.

22 Articulo 22 ley 1757 de 2015

23 Articulo 23 ley 1757 de 2015

PARÁGRAFO. A través del Cabildo Abierto no se podrán presentar iniciativas de ordenanza, acuerdo o resolución local.

PRELACIÓN. En los cabildos abiertos se tratarán los temas en el orden en que fueron presentados ante la respectiva secretaría. En todo caso el Cabildo Abierto deberá celebrarse a más tardar un mes después de la radicación de la petición.

PARÁGRAFO. Si la petición fue radicada cuando la respectiva Corporación no se encontraba en sesiones ordinarias, el cabildo deberá realizarse en el siguiente periodo de sesiones ordinarias.

ARTÍCULO 111°.- DIFUSIÓN DEL CABILDO.

DIFUSIÓN DEL CABILDO. El Concejo dispondrán la amplia difusión de la fecha, el lugar y de los temas que serán objeto del cabildo abierto. Para ello, antes de la fecha de vencimiento para la fecha de inscripción de los participantes ordenarán la publicación de dos convocatorias en un medio de comunicación de amplia circulación y cuando fuere posible, a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones, con diferencia no menor de diez (10) días entre una y otra.

ARTÍCULO 112° ASISTENCIA Y VOCERÍA. A los cabildos abiertos podrán asistir todas las personas que tengan interés en el asunto. Además del vocero podrán intervenir, por la misma duración a la que tienen derecho por reglamento los respectivos miembros de la Corporación, quienes se inscriban a más tardar tres (3) días antes de la realización del cabildo en la secretaría respectiva, presentando para ello un resumen escrito de su intervención.

Luego de las intervenciones de la comunidad, el Alcalde dará respuesta a sus inquietudes. Una vez surtido este trámite, los miembros de la Corporación podrán hacer uso de la palabra en los términos que establece el reglamento.

PARÁGRAFO. Cuando los medios tecnológicos lo permitan, los cabildos abiertos serán transmitidos en directo a través de Internet o a través de los mecanismos que estime conveniente la mesa directiva[24].

---

[24] Articulo 26 ley 1757 de 2015

ARTÍCULO 113º.- CITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN. Por solicitud ciudadana derivada de la convocatoria al cabildo abierto, podrá citarse a funcionarios Municipales, con cinco (5) días de anticipación, para que concurran al cabildo y para que respondan, oralmente o por escrito, sobre hechos relacionados con el tema del cabildo. La desatención a la citación sin justa causa, será causal de mala conducta[25].

ARTÍCULO 114º.- OBLIGATORIEDAD DE LA RESPUESTA. Una semana después de la realización del cabildo se realizará una sesión a la cual serán invitados todos los que participaron en él, en la cual se expondrán las respuestas razonadas a los planteamientos y solicitudes presentadas por los ciudadanos, por parte del mandatario y de la Corporación, según sea el caso.

Cuando se trate de un asunto relacionado con inversiones públicas Municipales, la respuesta deberá señalar el orden de prioridad de las mismas dentro del presupuesto y los planes correspondientes[26].

Si las respuestas dadas por los funcionarios incluyen compromisos decisorios, estos serán obligatorios y las autoridades deberán proceder a su ejecución, previo cumplimiento de las normas constitucionales y legales.

SESIONES FUERA DE LA SEDE. Cuando se trate de asuntos que afecten específicamente al municipio, la sesión de la Corporación podrá realizarse en el sitio en que la mesa directiva y el vocero estimen conveniente de manera concertada[27].

REGISTRO DE LOS CABILDOS ABIERTOS. La Secretaría General de la Corporación deberá llevar un registro de cada cabildo abierto, los temas que se abordaron, los participantes, las memorias del evento y la respuesta de la Corporación. Copia de este registro se enviará al Consejo Nacional de Participación y al Consejo Nacional Electoral[28].

---

25 Artículo 27 ley 1757 de 2015

26 Artículo 28 ley 1757 de 2015

27 Artículo 29 ley 1757 de 2015

28 Artículo 30 ley 1757 de 2015

TITULO XI
OTRAS DISPOSICIONES

ARTÍCULO 115°.- EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES POR VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE BANCADAS. Las sanciones en firme impuestas a los Concejales por los partidos que avalan la bancada correspondiente, se ejecutarán mediante resolución de la Mesa Directiva de la Corporación que se notificará personalmente al disciplinado.

ARTÍCULO 116°.- MEDIOS. Todos los Concejales y funcionarios del Concejo procurarán obtener un correo electrónico, para efectos de satisfacer el principio de la eficiencia en las actuaciones administrativas. Al efecto, deberán ejercer sus funciones teniendo en cuenta la legislación de comercio electrónico, contenidas en la Ley 527 de 1999.

ARTÍCULO 117°.- DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO. Todas las actividades de las Comisiones Permanentes que no estén específicamente descritas para ellas, se aplicarán en lo pertinente, lo establecido en este reglamento para la plenaria. Igualmente y en lo pertinente, se acogerá y aplicará el reglamento interno del Congreso de la República sobre los asuntos que no estén reglados para esta Corporación en el presente reglamento.

ARTÍCULO 118°.- CONFLICTO DE INTERESES. Cuando para los concejales exista interés directo en una decisión porque le afecta de alguna manera a él, o a su cónyuge o compañera o compañero permanente, a alguno de sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho, deberán declararse impedidos a participar en los debates o votaciones respectivas.

No existirán conflictos de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten a un Concejal en igualdad de condiciones que a la ciudadanía en general.

ARTÍCULO 119. SUPLENCIAS, FALTAS Y VACANTES. Los miembros de las Corporaciones Públicas de elección popular no tendrán suplentes. Solo podrán ser reemplazados en caso de muerte, incapacidad física absoluta para el ejercicio del cargo, declaración de nulidad de la elección, renuncia justificada, y aceptada por la Corporación, sanción disciplinaria consistente en destitución, pérdida de investidura, condena penal o medida de aseguramiento por delitos distintos a las

relacionadas con pertenencia, promoción o financiación a o por grupos armados ilegales, de narcotráfico, delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad o cuando el miembro de una Corporación pública decida presentarse por un partido distinto según lo planteado en el parágrafo transitorio 1° del artículo 107 de la Constitución Política.

En tales casos, el titular será reemplazado por el candidato no elegido que, según el orden de inscripción o votación obtenida, le siga en forma sucesiva y descendente en la misma lista electoral. Como consecuencia de la regla general establecida en el presente artículo, no podrá ser reemplazado un miembro de una Corporación pública de elección popular a partir del momento en que le sea proferida orden de captura, dentro de un proceso penal al cual se le vinculare formalmente, por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación a o por grupos armados ilegales, de narcotráfico o delitos de lesa humanidad. La sentencia condenatoria producirá como efecto la pérdida definitiva de la curul, para el partido al que pertenezca el miembro de la Corporación pública.

No habrá faltas temporales, salvo cuando las mujeres, por razón de licencia de maternidad deban ausentarse del cargo. La renuncia de un miembro de Corporación pública de elección popular, cuando se le haya iniciado vinculación formal por delitos cometidos en Colombia o en el exterior, relacionados con pertenencia, promoción o financiación a o por grupos armados ilegales, de narcotráfico o delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad, generará la pérdida de su calidad de congresista, diputado, concejal o edil, y no producirá como efecto el ingreso de quien corresponda en la lista. Las faltas temporales no darán lugar a reemplazos.

Cuando ocurra alguna de las circunstancias que implique que no pueda ser reemplazado un Concejal, para todos los efectos de conformación de quórum, se tendrá como número de miembros la totalidad de los integrantes de la Corporación con excepción de aquellas curules que no puedan ser reemplazadas.

TITULO XII
VIGENCIA

ARTÍCULO 120°.- VIGENCIA. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación, deroga el acuerdo 002 de 2008 y todas las disposiciones que le sean contrarias.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Honorable Concejo Municipal, a los Nueve (9) días del mes de Diciembre del año 2016.

HELMUTH JOHAN LEAO CASTILLO PÉREZ
Presidente Concejo Municipal

RUTH MIREYA MARTINEZ GONZALEZ
Secretaria General Concejo Municipal

EL PRESIDENTE Y SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ACACIAS – META

HACEN CONSTAR

Que el Acuerdo No. **427** de fecha Nueve (9) de Diciembre de 2016 "**POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES**", surtió los dos debates reglamentarios según el Artículo 73 de la Ley 136 de 1994, surtiendo el primer debate el día Lunes Cinco (5) del mes de Diciembre de Dos mil Dieciséis (2.016) en la Comisión Primera del Plan de Desarrollo y el segundo debate el día Viernes Nueve (9) del mes de Diciembre del año Dos mil Dieciséis (2.016) en Plenaria.

Se expide en la ciudad de Acacías-Meta, a los Doce (12) días del mes de Diciembre del año dos mil dieciséis (2016).

HELMUTH JOHAN LEAO CASTILLO PÉREZ
Presidente Concejo Municipal

RUTH MIREYA MARTINEZ GONZALEZ
Secretaria General Concejo Municipal

TABLA DE CONTENIDO

ACUERDO No. 427 DE 2016

Pag.

ARTÍCULO 1º. 2
TÍTULO I. DISPOSICIONES PRELIMINARES 2
CAPITULO I. EL CONCEJO COMO CORPORACION ADMINISTRATIVA Y POPULAR. 2
ARTÍCULO 2º. 2
ARTÍCULO 3º.- AUTONOMÍA 2
ARTÍCULO 4º.- ATRIBUCIONES. 2
ARTÍCULO 5º.- FUNCIONES CONSTITUCIONALES. 2
ARTÍCULO 6º.- ATRIBUCIONES LEGALES. 4
ARTÍCULO 7º.- DECISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 6
ARTÍCULO 8º.- SEDE. 6
ARTÍCULO 9º.- INVALIDEZ DE LAS REUNIONES. T 7
ARTÍCULO 10º.- QUÓRUM DELIBERATORIO Y DECISORIO ORDINARIO. 7
ARTÍCULO 11º.- QUORUM DECISORIO 7
CAPÍTULO II. PRINCIPIOS RECTORES Y CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN 7
ARTÍCULO 12º.- PRINCIPIOS RECTORES 7
ARTÍCULO 13º.- REGLAS DE INTERPRETACIÓN DEL REGLAMENTO. 8
ARTÍCULO 14º.- APLICACIÓN DE PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO. 8
CAPÍTULO III. DEL CONCEJO Y LAS BANCADAS 8
ARTÍCULO 15º.- DEFINICIÓN. 8
ARTÍCULO 16º.- NOTIFICACIÓN DE BANCADAS 9
ARTÍCULO 17º.- ACTUACIÓN EN BANCADAS. 9

ARTÍCULO 18º.- FACULTADES DE LAS BANCADAS 9

ARTÍCULO 19º.- INTERVENCIONES. 10

ARTÍCULO 20º.- USO DE LA PALABRA 10

ARTÍCULO 21º.- NÚMERO DE INTERVENCIONES. 11

ARTÍCULO 22º.- PROGRAMACIÓN PREFERENTE. 11

ARTÍCULO 23º.- CONSTANCIAS 11

ARTÍCULO 24º.- FUNCIÓN NORMATIVA DEL USO DE LA PALABRA 11

CAPITULO IV. ESTRUCTURA ORGANICA DEL CONCEJO 12

ARTÍCULO 25º- ESTRUCTURA ORGÁNICA INTERNA. 12

TITULO II. CONCEJO PLENO 13

CAPITULO I. INSTALACION POSESIÓN. PERIODO DE SESIONES. ACTAS. PUBLICIDAD 13

ARTÍCULO 26°.- SESIONES DE INAGURACION. 13

ARTÍCULO 27º.- POSESIÓN DEL PRESIDENTE Y DE LOS CONCEJALES. 14

ARTÍCULO 28.- PERIODO DE SESIONES 15

ARTÍCULO 29º.- ACTAS. 15

ARTÍCULO 30º- PUBLICIDAD.. 16

CAPITULO II. CONTROL POLITICO. DELEGACIONES. PROHIBICIONES 16

ARTÍCULO 31º.- FUNCIONES DE CONTROL POLÌTICO 16

ARTÍCULO 32º.- CITACIONES 19

ARTÍCULO 33º.- CITACIONES NO REALIZADAS. 20

ARTÍCULO 34º. PLURALIDAD DE CITACIONES. 20

ARTÍCULO 35º.- DEBATES DE CONTROL POLÍTICO. 20

ARTÍCULO 36º.- INFORMES 21

ARTÍCULO 37º.- DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS.. 22

ARTÍCULO 38º.- PROHIBICIONES. 22

TITULO III. DIGNATARIOS 22

CAPITULO ÚNICO. MESA DIRECTIVA. COMITÉ DE COORDINACIÓN POLÍTICA 22

ARTÍCULO 39º.- PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA..... 23
ARTÍCULO 40º.- ELECCIÓN DEL PRESIDENTE. 23
ARTÍCULO 41º.- FUNCIONES DEL PRESIDENTE. 23
ARTÍCULO 42º.- FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES DEL PRESIDENTE..... 25
ARTÍCULO 43º.- RECURSO EN VÍA GUBERNATIVA. 25
ARTÍCULO 44º.- FUNCIONES DE LOS VICEPRESIDENTES. 25
ARTÍCULO 45º.- DE LA MESA DIRECTIVA. 26
ARTÍCULO 46º.- FUNCIONES DE LA MESA DIRECTIVA. 26
ARTÍCULO 47º.- COMITÉ DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 27
TITULO IV. DEBERES Y DERECHOS DE LOS CONCEJALES..... 27
CAPITULO PRIMERO. DE LOS DEBERES..... 27
ARTÍCULO 48º.- DEBERES. 27
CAPITULO SEGUNDO. DE LOS DERECHOS 28
ARTÍCULO 49º.- DERECHOS. 28
TITULO V. SECRETARIO GENERAL..... 29
CAPITULO ÚNICO. DESIGNACIÓN. REQUISITOS. PERIODO. FUNCIONES..... 29
ARTÍCULO 50º.- 29
ARTÍCULO 51º.- FUNCIONES GENERALES. 30
ARTÍCULO 52º.- FUNCIONES ESPECÍFICAS. 30
TITULO VI. COMISIONES 31
CAPITULO PRIMERO. CLASES DE COMISIONES..... 311
ARTÍCULO 53.- COMISIONES ACCIDENTALES..... 31
CAPÍTULO SEGUNDO. COMISIONES PERMANENTES 32
ARTÍCULO 54º.- NÚMERO, INTEGRACIÓN Y FUNCIONES. 32
ARTÍCULO 55º.- ELECCIÓN. 33
ARTÍCULO 56º.- MATERIA DE ESTUDIO DE LAS COMISIONES..... 33
ARTÍCULO 57º.- SESIONES CONJUNTAS DE COMISIONES PERMANENTES. 34

ARTÍCULO 58º.- MATERIAS OBJETO DE LA COMISIÓN PRIMERA PERMANENTE DEL PLAN DE DESARROLLO Y BIENES. 34

ARTÍCULO 59º.- MATERIAS OBJETO DE LA COMISIÓN SEGUNDA PERMANENTE DE PRESUPUESTO Y HACIENDA PÚBLICA. 35

ARTÍCULO 60º.- MATERIAS OBJETO DE LA COMISIÓN TERCERA PERMANENTE ADMINISTRATIVA Y DE GOBIERNO. 35

TÍTULO VII. SESIONES 36

CAPITULO PRIMERO. REUNIONES. CITACIONES. ORDEN INTERNO 36

ARTÍCULO 61º.- CLASES DE SESIONES. 36

ARTÍCULO 62º.- SESIONES. 37

ARTÍCULO 63º.- CITACIONES. 38

ARTÍCULO 64º.- SESIONES FUERA DE LA SEDE. 39

ARTÍCULO 65º.- ORDEN INTERNO. 39

ARTÍCULO 66º.- ORDEN DE LAS SESIONES. 40

ARTÍCULO 67º.- SESIONES EXTRAORDINARIAS. 40

CAPITULO SEGUNDO. ORDEN DEL DIA 41

ARTÍCULO 68º.- ORDEN DEL DÍA. 41

CAPITULO TERCERO. DEBATES 41

ARTÍCULO 69º.- CONCEPTO. 42

ARTÍCULO 70º.- INTERVENCIONES. 42

ARTÍCULO 71º.- INTERPELACIÓN. 42

ARTÍCULO 72º.- DERECHO DE RÉPLICA. 42

ARTÍCULO 73º.- MOCIONES. 42

ARTÍCULO 74º.- MOCIÓN DE ORDEN. 43

ARTÍCULO 75º.- MOCIÓN DE PROCEDIMIENTO. 43

ARTÍCULO 76º.- MOCION DE SUFICIENTE ILUSTRACION. 43

ARTÍCULO 77º.- MOCION DE ACLARACION DE VOTO. 43

ARTÍCULO 78º.- PROPOSICIONES. 43
ARTÍCULO 79º.- PROHIBICIONES 44
ARTÍCULO 80º.- USO DE LA PALABRA DE FUNCIONARIOS. 45
ARTÍCULO 81.- USO DE LA PALABRA DE INVITADOS Y COMUNIDAD. 45
ARTÍCULO 82º.- INCUMPLIMIENTO DE UNA CITACIÓN 45
ARTÍCULO 83.- GRABACIÓN Y TRASCRIPCIÓN DE LAS SESIONES. 45
CAPITULO CUARTO. VOTACIONES 46
ARTÍCULO 84º.- REGLAS EN MATERIA DE VOTACIONES. 46
ARTÍCULO 85º.- MODOS DE VOTACIÓN. 47
ARTÍCULO 86º.- VOTACIÓN DE PROYECTOS DE ACUERDO 49
ARTÍCULO 87º.- EMPATES 49
ARTÍCULO 88.- REGLAS ESPECIALES EN MATERIA DE ELECCION DE FUNCIONARIOS. 49
TITULO VIII. PROCESO NORMATIVO 50
CAPITULO I. ACUERDOS MUNICIPALES 50
ARTÍCULO 89º.- INICIATIVA. 50
ARTÍCULO 90º.- DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO 53
ARTÍCULO 91º.- DESIGNACION DE PONENTES. DESIGNACION DE PONENTES. 53
ARTÍCULO 92º.- ACUMULACIÓN DE PROYECTOS 54
ARTÍCULO 93º.- REQUISITOS LEGALES. 54
CAPITULO SEGUNDO. PRIMER DEBATE 54
ARTÍCULO 94º.- PRESENTACIÓN DE LA PONENCIA Y APERTURA DEL DEBATE 54
ARTÍCULO 95º.- DISCUSIÓN. 54
ARTÍCULO 96º.- ENMIENDAS. 55
ARTÍCULO 97º.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 55
ARTÍCULO 98º.- PROYECTO APROBADO 55
ARTÍCULO 99º.- PROYECTO NO APROBADO. 55
CAPITULO TERCERO. SEGUNDO DEBATE 56

ARTÍCULO 100º.- INICIACIÓN DEL DEBATE. 56
ARTÍCULO 101º.- ENMIENDAS. S 56
ARTÍCULO 102º.- APROBACIÓN.. 56
ARTÍCULO 103º.- SECUENCIA NUMERICA DE LOS ACUERDOS. 57
ARTÍCULO 104°.- REVISIÓN DE LOS ACUERDOS POR EL GOBERNADOR. 57
TITULO IX. DE LAS OBJECIONES 57
CAPITULO PRIMERO. MOTIVOS. PLAZOS 57
ARTÍCULO 105º.- MOTIVOS. 57
ARTÍCULO 106º.- PLAZOS. 58
CAPITULO SEGUNDO. TRAMITE DE LAS OBJECIONES 58
ARTÍCULO 107º.- DEVOLUCIÓN CON OBJECIONES 58
ARTÍCULO 108º.- OBJECIONES POR INCONVENIENCIA. 58
ARTÍCULO 109º.- OBJECIONES DE DERECHO 58
TITULO X. CABILDO ABIERTO 59
ARTÍCULO 110º.- PETICIÓN DEL CABILDO ABIERTO 59
ARTÍCULO 111º.- DIFUSIÓN DEL CABILDO. 60
ARTÍCULO 112º ASISTENCIA Y VOCERÍA 60
ARTÍCULO 113º.- CITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 61
ARTÍCULO 114º.- OBLIGATORIEDAD DE LA RESPUESTA. 61
TITULO XI. OTRAS DISPOSICIONES 62
ARTÍCULO 115º.- EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES POR VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE BANCADAS... 62
ARTÍCULO 116º.- MEDIOS. 62
ARTÍCULO 117º.- DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO. 62
ARTÍCULO 118º.- CONFLICTO DE INTERESES. 62
ARTÍCULO 119. SUPLENCIAS, FALTAS Y VACANTES. 62
TITULO XII. VIGENCIA 64
ARTÍCULO 120º.- VIGENCIA. 64

Acacías, 25 de Noviembre de 2016

CONCEJO MUNICIPAL DE ACACIAS
RECIBIDO
HORA 8:30 am
FECHA NOV-30-2016
FIRMA Mireya M

Señores
HONORABLES CONCEJALES
La ciudad

REFERENCIA: EXPOSICION DE MOTIVOS "proyecto de acuerdo No. 492 de 2016 "**POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".**

En atención a lo establecido en la ley 136 de 1994 en el **Artículo 31°.- establece lo siguiente** *Reglamento.* Los concejos expedirán un reglamento interno para su funcionamiento en el cual se incluyan, entre otras, las normas referentes a las comisiones, a la actuación de los concejales y la validez de las convocatorias y de las sesiones.

Que el actual Reglamento Interno del Honorable Concejo Municipal data del Acuerdo 002 del año 2008.

Que desde la expedición del Reglamento Interno el Congreso de la República ha expedido una serie de disposiciones legales no contempladas en el Reglamento Interno del Concejo Municipal y es necesario realizar las modificaciones y/o actualizaciones de conformidad con el ordenamiento jurídico..

Que en el actual reglamento interno tiene aspectos que se presentan en el desarrollo de la sesiones y no están regulados y son de la esfera de su competencia dicha regulación.

Así las cosas se pone a consideración la iniciativa de un nuevo reglamento para el Honorable Concejo Municipal.

Cordialmente;

MESA DIRECTIVA.

HELMUTH JOHAN LEAO CASTILLO PEREZ
Presidente Honorable Concejo Municipal de Acacías.

JOSE IGNACIO SERRATO CORTES
Primer Vicepresidente

FABIO MARTIN JARA AGUDELO
Segundo Vicepresidente

1003.21

ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS (META)
(14 de Diciembre de 2016)

ACTO DE SANCION

De conformidad con el Artículo 76 y Artículo 81 de la Ley 136 del 1994, se sanciona y se ordena la publicación del presente Acuerdo No.427 del 9 de Diciembre de 2016 **"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACIAS"** se envía copia al señor Gobernador del Departamento del Meta, para su correspondiente revisión y control de legalidad.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUZ GRACIELA MORENO ROLDAN
Alcaldesa Municipal (e)

DORA PATRICIA MORENO REYES
Secretaria de Gobierno Municipal

CAROL MAGALY GUEVARA ROJAS

Proyectó: Lu

Hoy catorce (14) de diciembre de 2016; siendo las 10:00 am; se fija el ACUERDO Nº 427 DE 2016: **"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACIAS".**

DORA PATRICIA MORENO REYES
Secretaria de Gobierno Municipal

Se publica conforme al artículo 81 de la ley 136 de 1994, el día 14 de diciembre de 2016, siendo las 10:00 a.m.

DORA PATRICIA MORENO REYES
Secretaria de Gobierno Municipal

Proyectó: Sandra P. Quevedo C.
Secretaria

Fecha Providencia	09/12/2019
Fecha de notificación	09/12/2019

Sala: Sala de lo Contenciosos Administrativo
Subsección: null
Consejero ponente: William Hernández Gómez
Norma demandada: Decreto 2485 de 2014, así como del Título 27 del Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, artículos 2.2.27.1 al 2.2.27.6., por medio de los cuales «se fijan los estándares mínimos para el concurso público y abierto de méritos para elección de personeros municipales
Demandante: JOSÉ IGNACIO ARANGO BERNAL Y OTRO
Demandado: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y OTRO

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá, D. C., nueve (09) de diciembre de dos mil diecinueve (2019)
Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001-03-25-000-2015-01089-00 (4824-2015)
11001-03-25-000-2016-00001-00 (0001-2016) (ACUMULADO)
Demandantes: JOSÉ IGNACIO ARANGO BERNAL Y OTRO
Demandados: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y OTRO
Temas: Concurso público y abierto de méritos para elección de personeros municipales.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA O-275-2019

1. **ASUNTO**

La Sala dicta la sentencia que en derecho corresponda en los procesos judiciales[1] tramitados en virtud del medio de control de nulidad de que trata el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 que ejercieron los señores (i) David Alonso Roa Salguero[2] en contra del Departamento Administrativo de la Función Pública[3] y (ii) José Ignacio Arango Bernal en contra de esta última entidad y de la Nación, Ministerio del Interior y de Justicia[4].

2.DEMANDAS

2. **PROCESO 11001-03-25-000-2015-01089-00 (4824-2015)[5]**

1. **Pretensiones**

Principal: Que se declare la nulidad del Decreto 2485 de 2014, así como del Título 27 del Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, artículos 2.2.27.1 al 2.2.27.6., por medio de los cuales «se fijan los estándares mínimos para el concurso público y abierto de méritos para elección de personeros municipales».
Subsidiaria: Que se declare la nulidad del artículo 4 del Decreto 2485 de 2014, compilado en el artículo 2.2.27.4 del mencionado Decreto 1083 de 2015.

1. **Normas violadas y concepto de violación**

En la demanda se invocaron como normas vulneradas el preámbulo y los artículos 1, 2, 40, 189-11, 150, 287 y 313-8 de la Constitución Política; 2, inciso 4, del Acto Legislativo 2 de 2005; 35, inciso 1, de la Ley 1551 de 2012; y 37 de la Ley 1437 de 2011.
Como concepto de violación, manifestó que los actos demandados incurrían en las siguientes causales de nulidad:

- **Falta de competencia por existir reserva de ley:** Adujo que los actos administrativos demandados adolecen de este vicio porque la regulación del proceso de elección de personeros municipales es una materia sometida a reserva de ley.

Al respecto, explicó que así lo disponen los artículos (i) 313 superior, numeral 8, que prevé que a los concejos municipales les corresponde «Elegir personero para el periodo que fije la ley y los demás funcionarios que esta determine»; (ii) 35 de la Ley 1551 de 2012, que modificó el 170 de la Ley 136 de 1994, según el cual los personeros deben elegirse «[…] previo concurso público de méritos de conformidad con la ley vigente […]»; (iii) artículo 2, inciso 4, del Acto Legislativo 02 de 2015, que dispuso que «[…] la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley […]». Además, señalo que así lo sostuvo la Corte Constitucional en sentencia C-105 de 2013.

- **Falta de competencia por exceso en el ejercicio de la facultad reglamentaria y desconocimiento de normas superiores en que debía fundarse:** Puntualmente en lo que se refiere al artículo 4 del Decreto 2485 de 2014, la demanda precisó que vulnera el principio democrático porque si la vacante del empleo de personero debe proveerse con quien ocupe el primer puesto de la lista, ello implica omitir la deliberación necesaria que merece un proceso de elección de tal naturaleza, confundiéndolo abiertamente con aquellos previstos para los empleos de carrera.

En punto a este reproche, indicó que el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012, que modificó el 170 de la Ley 136 de 1994, no reguló en modo alguno que la vacante se ocuparía con la persona que quede en el primer puesto de la lista. De ello emerge que, a través del acto acusado, el Gobierno Nacional se extralimitó en el ejercicio de la facultad reglamentaria, desnaturalizando la intención que tuvo la Ley 1551 de 2012 de favorecer el debate democrático y la participación ciudadana a través de los concejos municipales, en un proceso novedoso que, si bien pretendía privilegiar el mérito, nunca buscó vaciar de competencia a dichas corporaciones para elegir al personero municipal.
En línea con lo anterior, adujo que, para encontrar un punto de equilibrio entre las competencias de los concejos municipales y distritales, por un lado, y el mérito en la escogencia de personeros, por el otro, la lista de elegibles debería permitir la preselección de varios candidatos entre quienes obtuvieron los más altos puntajes a efectos de que, entre ellos, los concejales abran un diálogo democrático fruto del cual puedan elegir a quien debe ocupar el cargo. Agregó que la anterior situación se traducía en el desconocimiento del principio de autonomía de las entidades territoriales.

2. **PROCESO 11001-03-25-000-2016-00001-00 (0001-2016)[6]**

1. **Pretensiones**

Primera: Que se declare la nulidad parcial del artículo 2.2.27.4. del Decreto 1083 de 2015, respecto de la expresión «con la persona que ocupe el primer puesto de la lista».
Segunda: Que se declare que los concejos municipales podrán elegir a quien consideren de la lista de elegibles que arroje el proceso de selección en concurso público de méritos.

1. **Normas violadas y concepto de violación**

El demandante estimó vulnerados los artículos 313, numeral 8, de la Constitución Política; 35 y 170 de la Ley 136 de 1994, este último modificado por el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012.
Como concepto de violación, expresó que el acto administrativo parcialmente acusado resulta nulo debido a la **falta de competencia por exceso en el ejercicio de la facultad reglamentaria y desconocimiento de normas superiores en que debía fundarse**. Al respecto, indicó que el artículo 313 superior, numeral 8, dispone que el concejo municipal elegirá al personero municipal, lo que supone de conformidad con el significado de dicho verbo que la corporación pública debe tener la facultad de seleccionar entre varias opciones a la persona que ocupará el cargo, lo que no se garantiza con la norma demandada puesto que su contenido desnaturaliza ese proceso de selección a un simple acto protocolario en el que los concejales se ven obligados a dar su voto al candidato que se ubique primero en la lista de elegibles.
En línea con lo anterior, manifestó que en este caso se configurarían los supuestos que la Corte Constitucional precisó en sentencia C-105 de 2013 para predicar un vaciamiento de las competencias constitucionalmente atribuidas a los órganos de las entidades territoriales en la elección de servidores públicos que no son de carrera.
3.CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

3. **PROCESO 11001-03-25-000-2015-01089-00 (4824-2015)**

Nación, Ministerio del Interior[7]
Se opuso a la prosperidad de las pretensiones con apoyo en las siguientes consideraciones:
En primer lugar, indicó lo complejo que resulta definir los límites de la competencia del ejecutivo cuando ejerce función reglamentaria, destacando en ese sentido la facilidad con la que cualquier desarrollo podría calificarse, *prima facie,* como una alteración del núcleo esencial del derecho o la figura regulada.
Asimismo, llamó la atención en cuanto a que el término «ley» no debe entenderse necesariamente como la voluntad del legislador pues una lectura más amplia del concepto permite incluir las diferentes manifestaciones normativas.
De otro lado, afirmó que el contenido de los actos administrativos demandados no es novedoso, siendo una reproducción de principios que ya se habían contemplado en normas superiores que regulan lo relativo al concurso de méritos, tales como las Leyes 443 de 1998 y 909 de 2004.
Agregó que es precisamente el silencio de ciertas normas, en este caso de la Ley 1551 de 2012, el que exige la intervención de ejecutivo por medio del uso de la potestad reglamentaria.
Con base en ello, sostuvo que los decretos acusados se enmarcan dentro del término «ley» establecido en los artículos 2 del Acto Legislativo 2 de 2015 y 35 de la Ley 1551 de 2012, por lo que no resultaba viable predicar el quebrantamiento del principio de reserva legislativa.
De igual manera, negó que aquellos actos hubieran creado supuestos normativos ajenos a las normas reglamentadas o que en su expedición el ejecutivo hubiese extralimitado el ejercicio de su facultad reglamentaria, último punto frente al cual resaltó que las funciones técnicas que le corresponden a las entidades demandadas se encuentran en armonía con las temáticas que desarrolló la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012.
Aunado a lo anterior, puso de presente que la Sala de Consulta y Servicio Civil, por medio de concepto del 3 de agosto de 2014 (expediente 2261-14), ratificó la vigencia del Decreto 2485 de 2014, de la Ley 1551 de 2012 y del tipo de elección que esta prevé en relación con los personeros.
En cuanto a los reproches que formuló la demanda frente al artículo 4 del Decreto 2485 de 2015, señaló que estos se desvirtúan con sustento en la sentencia C-105 de 2013, en la que la Corte Constitucional negó que la exigencia de un concurso público de méritos para elegir a los personeros municipales contraviniese el principio democrático. Indicó también que la providencia hizo énfasis en la necesidad de que la elección de cargos de esa naturaleza se encuentre

precedida de un procedimiento que garantice que el funcionario electo sea imparcial y ajeno a vínculos de orden político.
Por último, en punto a la alegada afectación de la autonomía de los entes territoriales, adujo que esta resulta constitucionalmente aceptable cuando su limitación deviene proporcionada y razonable en virtud de la necesidad de salvaguardar principios que en el caso concreto resultan superiores.
Departamento Administrativo de la Función Pública[8]
Se opuso a la prosperidad de las pretensiones por considerar que el demandante no había logrado desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados. Como fundamento de esta posición, señaló que el Gobierno Nacional se encontraba facultado para que en desarrollo de la Ley 1551 de 2012, fijara los estándares mínimos del concurso público y abierto de méritos en aras de elegir los personeros municipales, máxime cuando dicha reglamentación, además de ajustarse al artículo 313-8 de la Constitución, al artículo 35 de la citada Ley y a la sentencia C-105 de 2013, en nada afecta la autonomía de las entidades territoriales, ni vacía la competencia de los concejos municipales en lo que se refiere al control y direccionamiento efectivo del concurso.
Adicionalmente, sostuvo que el Consejo de Estado ya se había pronunciado sobre la problemática jurídica planteada a través de la Sala de Consulta y Servicio Civil, quien en Conceptos 2261 de 2015, 2274 de 2015 y 2283 de 2016 sostuvo que los personeros deben ser nombrados en estricto orden de mérito como resultado de un concurso abierto y público.
Finalmente, precisó que no existen fundamentos para colegir la vulneración del artículo 313-8 superior toda vez que este no ordena que los personeros sean elegidos por un sistema de ternas u otra figura semejante, con el consecuente desconocimiento de las listas de elegibles conformadas en los procesos meritocráticos.

3. **PROCESO 11001-03-25-000-2016-00001-00 (0001-2016)**

Departamento Administrativo de la Función Pública[9]
La entidad formuló oposición a las pretensiones de la demanda con apoyo en los mismos argumentos que presentó en el proceso con radicado 11001-03-25-000-2015-01089-00 (4824-2015).

4. **INTERVENCIÓN DE TERCEROS**

Delio Andrés Vargas Guerrero[10]
Se vinculó al proceso en calidad de coadyuvante de la parte demandante por considerar que el Decreto 2485 de 2014 y el Título 27 del Decreto 1083 de 2015 están viciados de nulidad al incurrir en las causales de falta de competencia y violación de normas superiores. Con tal fin, estimó vulnerados el preámbulo y los artículos 1, 2, 40, 189-11, 150, 287 y 313-8 de la Constitución Política; 2, inciso 4, del Acto Legislativo 2 de 2005; y 35, inciso 1, de la Ley 1551 de 2012.

5. **DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL**

En el marco de la parte oral del proceso bajo la Ley 1437 de 2011, la principal función de la audiencia inicial es la de precisar el objeto del proceso y de la prueba. En esta etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma, de la contestación o de la reconvención. Además, se conciertan las principales decisiones que guiarán el juicio.
Con fundamento en lo anterior, se resumen los puntos más importantes de la audiencia inicial, a modo de antecedentes:

[…] EXCEPCIONES PREVIAS O MIXTAS (art. 180-6 CPACA)

Las demandadas no propusieron ninguna excepción previa ni mixta. Por su parte, el despacho no encontró probada ninguna otra de las enlistadas en el artículo 100 del CGP ni de las enunciadas en el numeral 6 del artículo 180 del CPACA.
Decisión notificada en estrados.
[…]

FIJACIÓN DEL LITIGIO (art. 180-7 CPACA)[11]

[…] Del análisis de las pretensiones, el concepto de violación de ambas demandas y las contestaciones, el despacho, de manera provisional, fijó los siguientes **problemas jurídicos**, que se contraen a determinar si los actos demandados son nulos por las causales de violación de las normas en que debían fundarse y por falta de competencia, así:
Primero: ¿La materia objeto de los actos administrativos acusados está sometida a reserva de ley y, por ende, es totalmente nulo el Decreto 2485 de 2014 y parcialmente el Decreto 1083 de 2015, al haberse expedido por las entidades demandadas
Segundo: ¿El Ministerio del Interior y el Departamento Administrativo de la Función Pública excedieron el ejercicio de la facultad reglamentaria a través de los artículos 4 del Decreto 2485 de 2014 y el 2.2.27.4 del Decreto 1083 de 2015
Tercero: ¿Son nulos los artículos 4 del Decreto 2485 de 2014 y el 2.2.27.4 del Decreto 1083 de 2015 por desconocimiento del principio democrático y el de autonomía de las entidades territoriales
Interrogados el apoderado del Ministerio de Interior y el Ministerio Público frente a los problemas jurídicos planteados, manifestaron estar conformes.
Decisión notificada en estrados […]

6.ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

David Alonso Roa Salguero[12]

En sus alegatos de conclusión reiteró brevemente que el acto administrativo demandado debe declararse nulo toda vez que desconoce la facultad que tienen los concejos municipales para elegir discrecionalmente al personero, por disposición del artículo 313 superior, numeral 8.

Departamento Administrativo de la Función Pública[13]

En esta etapa procesal confirmó los argumentos expuestos en la contestación de la demanda relativos a sostener que los actos acusados son el reflejo de un adecuado y riguroso desarrollo de lo que establecen el artículo 313 numeral 8 de la Constitución Política, la Ley 1551 de 2012 y las reglas que la jurisprudencia constitucional ha sentado en materia de concursos de personeros. En tales condiciones, afirmó, los cuestionamientos de los demandantes resultan infundados.

Ministerio del Interior[14]

En sus alegatos de conclusión se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, para lo cual reprodujo lo expuesto en la contestación de aquella.

7. **MINISTERIO PÚBLICO**

No se pronunció en esta oportunidad procesal.

8. CONSIDERACIONES

8. **Cuestiones preliminares**

1. **Clasificación del empleo público y su provisión**

El artículo 40, numeral 7, de la Constitución Política consagra el derecho de acceso a cargos públicos, el cual ha sido entendido como la garantía que le asiste a todo ciudadano de participar en un determinado proceso de selección para aspirar a un empleo público, una vez cumplidos los

requisitos previstos para tal fin. Asimismo, dentro de la esfera de protección de tal derecho, a quien ha sido nombrado y posesionado en un cargo de dicha naturaleza debe garantizársele no ser removido arbitrariamente de este, al igual que las condiciones necesarias para el normal desempeño de sus funciones.

La Corte Constitucional ha destacado la categoría de derecho fundamental que ostenta aquel en la medida en que, al promover la participación ciudadana en la conformación, ejercicio y control del poder político, permite lograr la efectividad de la democracia participativa.

Ahora bien, la forma de acceso al empleo público dependerá de la tipología dentro de la cual pueda enmarcarse el cargo respectivo. Los criterios de clasificación del personal al servicio de la administración pública se encuentran contenidos esencialmente en los artículos 123 y 125 superiores. De acuerdo con el primero de ellos, es posible establecer una categoría general denominada «servidores públicos», dentro de la que están comprendidos 1) los miembros de las corporaciones públicas; 2) los trabajadores oficiales; y 3) los empleados públicos.

Por su parte, el artículo 125 *ibidem* consagra como tipos de empleo público los (i) de carrera; (ii) de libre nombramiento y remoción; (iii) de elección popular; (iv) de trabajador oficial y (v) los demás que determinen la Constitución y la ley, últimos dentro de los cuales pueden identificarse los empleos de periodo fijo; los temporales; y aquellos cuyas funciones deban ser ejercidas en las comunidades indígenas[15].

Cada uno de estos estos empleos es provisto de diferente forma según la tipología a la que respondan. Así, el sistema de provisión de los cargos de carrera está dado por el concurso público[16], el cual constituye la regla general pues ha de aplicar a los empleos de dicha naturaleza y a cualquier otro, cuando la Constitución o la ley no hayan determinado uno distinto. En tales eventos, una vez elegida la persona que ha de ocupar el puesto conforme a las reglas del concurso, esta debe ser nombrada en periodo de prueba[17] por un término de seis meses, al final del cual se le evalúa el desempeño. Si la calificación es satisfactoria se entenderá aprobado el periodo de prueba y, en consecuencia, el concursante adquiere los derechos de carrera respecto del empleo ofertado.

De otro lado, la característica esencial de los cargos de libre nombramiento y remoción[18] es la discrecionalidad de que goza el nominador a efectos de vincular y retirar al servidor público de la administración. El nombramiento de estos servidores públicos es de naturaleza ordinaria[19] en la medida en que basta el acto que así lo disponga y la aceptación por parte del funcionario designado, quien previamente deberá haber acreditado el lleno de los requisitos exigidos para desempeñar el empleo.

Los empleos de elección popular, por su parte, son aquellos cuya provisión debe surtirse con el candidato que el pueblo haya elegido para el periodo institucionalmente establecido, a través del ejercicio del derecho al voto.

Ahora, los trabajadores oficiales[20] son servidores que se vinculan laboralmente a la administración pública mediante un contrato de trabajo que regula la prestación del servicio bajo condiciones especiales que difieren de aquellas previstas en la parte individual del CST.

Por último, se encuentran los demás cargos públicos que consagre la Constitución o la ley, categoría dentro de la cual aparecen los empleos temporales[21] como aquellos que se crean para (i) cumplir funciones que no son desempeñadas por el personal de la planta de la entidad por resultar ajenas a las actividades de las que esta se ocupa permanentemente, (ii) desarrollar programas o proyectos de duración determinada, (iii) suplir necesidades de personal por una sobrecarga de trabajo que se origine en hechos excepcionales, y (iv) desarrollar labores de consultoría y asesoría institucional.

La provisión de estos cargos, de acuerdo con la interpretación constitucional realizada en sentencia C-288 de 2014, debe efectuarse, en primer lugar, con la lista de elegibles vigente para la provisión de empleos de carácter permanente. Si ello no resulta posible por faltar de dicha lista, debe dársele prioridad a quienes, encontrándose en carrera administrativa, reúnan los requisitos para el cargo y trabajen en la misma entidad, mediante la realización de un proceso de selección

en el que se garantice la libre concurrencia y en el que la escogencia del servidor público tenga «[…] en cuenta exclusivamente factores objetivos como: el grado de estudios, la puntuación obtenida en evaluaciones de Estado como las pruebas ICFES, ECAES, Saber Pro y Saber, la experiencia en el cumplimiento de funciones señaladas en el perfil de competencias y otros factores directamente relacionados con la función a desarrollar […]»[22].

La ley se ocupó igualmente de crear los empleos de periodo fijo, los cuales han sido diseñados para que su provisión sea por un lapso previamente determinado[23]. En estos la provisión tiene lugar, en unos casos, a través del ejercicio de una facultad discrecional de selección y, en otros, mediante una convocatoria pública reglada en la que deben fijarse requisitos y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito.

Por otro lado, dentro de los tipos de empleo público creados por disposición legal se encuentran aquellos cuyas funciones deben ser ejercidas en las comunidades indígenas, los cuales se someten a la autonomía que se le reconoce a estos pueblos, última que les confiere la potestad para darse sus propias autoridades, al igual que la competencia para establecer normas y procedimientos propios.

Finalmente, es importante señalar que, aunque en principio la naturaleza del cargo público define su forma de provisión en los términos anotados, es factible que, en algunos empleos que no son de carrera, las vacantes sean provistas a través de la realización de un concurso público de mérito. En otras palabras, a pesar de que este último es el proceso de selección obligatorio para los empleos de carrera, no es exclusivo de estos, porque también es viable que la Constitución o la ley dispongan su aplicación para cargos de otra índole.

Se ha abierto paso a esta posibilidad bajo el entendido de que el concurso público es la forma de provisión del empleo que materializa en mayor medida el mérito. En ese sentido, siendo este un principio rector de la función pública[24] que concreta otros principios como los de transparencia, moralidad, imparcialidad e igualdad, toda vez que permite asegurar que aquella sea desarrollada por los mejores y más capacitados funcionarios, la consagración del concurso público para la provisión de empleos, diferentes a los de carrera, aunque no es forzoso, sí resulta razonable y ajustado a derecho.

Según la regla jurisprudencial sentada por la Corte Constitucional[25] en la materia, excepción hecha de los cargos elegidos a través del ejercicio del derecho al voto[26], en el caso de los empleos públicos sometidos a un periodo fijo y de los de libre nombramiento y remoción, el concurso público aparece como un proceso de selección admisible, aunque no obligatorio. Ello sucede, por ejemplo, con la elección del registrador Nacional del estado civil, el que a pesar de tratarse de un empleo de periodo, por disposición del artículo 266 de la Carta Política, debe ser «[…] escogido por los Presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, mediante concurso de méritos organizado según la ley […]»[27].

Las características anotadas según la tipología de empleos públicos pueden sintetizarse en el siguiente esquema:

		provisión	**nombramiento**	**carácter**
EMPLEOS PÚB	**carrera**	Proceso de selección: Concurso público	Periodo de prueba	Principio general
	libre nombramiento y remoción	Facultad discrecional, salvo que la ley prevea la realización de concurso público	Ordinario, previo cumplimiento de requisitos.	Excepcional
	elección popular	Ejercicio del derecho al voto	N/A Toma posesión del cargo	Excepcional
	trabajadores oficiales	Libertad contractual	N/A	Excepcional

L I C O S				Contrato de trabajo	
	los demás que determinen la c.p. o la ley	**periodo fijo**	Facultad discrecional	Acto de nombramiento previo cumplimiento de requisitos	Excepcional
			Proceso de selección: Convocatoria pública	Acto de nombramiento previo cumplimiento de requisitos	
			Proceso de selección: concurso público expresamente consagrado en la Constitución o la ley	Acto de nombramiento previo cumplimiento de requisitos	
		temporal	Lista de elegibles. En su defecto, proceso de selección interno	Acto de nombramiento previo cumplimiento de requisitos	
		aquellos cuyas funciones deban ser ejercidas en comunidades indígenas	Autonomía indígena: Potestad para darse autoridades propias y competencia para establecer normas y procedimientos propios		

2. **Provisión de empleos públicos mediante procesos de selección**

Lo visto hasta ahora enseña que para proveer los cargos de carrera y algunos de periodo fijo, el ordenamiento jurídico ha consagrado los procesos de selección, los cuales aluden a un conjunto de etapas que tiene como propósito evaluar la capacidad e idoneidad de los aspirantes a un determinado empleo público para ejercer las funciones y asumir las responsabilidades propias de éste, con el fin de escoger a aquel que ha de desempeñar el cargo en cuestión.
El concepto «proceso de selección» da cuenta de una categoría amplia o, si se quiere a un género, dentro del cual es factible identificar especies como el concurso público de méritos que según se anotó constituye la regla general en la provisión de empleos, la convocatoria pública y cualquier otra clase de procedimiento que se ajuste a la caracterización anotada[28].
Visto lo anterior, es importante ahondar en la distinción existente entre el «concurso público de méritos» y «la convocatoria pública» pues a pesar de que ambos constituyen tipos de proceso de selección, cada uno tiene características propias y responde a dinámicas especiales.
En el ámbito de la función pública, el **concurso de méritos** puede definirse como un proceso de selección para el desempeño del empleo público, llevado a cabo con plena garantía de los principios de transparencia, objetividad e igualdad, en el que la escogencia del aspirante que habrá de ocuparlo se realiza **exclusivamente[29] con base en el mérito**, entendido este como el reconocimiento que le corresponde a una persona en razón de las capacidades, competencias y aptitudes que ha demostrado tener para el desempeño del contenido funcional del cargo de que se trate.
De esta forma, cuando la provisión del empleo se encuentra sometida a concurso público, siendo el mérito el único criterio por el que debe regirse la escogencia del empleado público, queda descartado cualquier mecanismo que represente para el empleador facultades discrecionales de

selección de los aspirantes, pues aun cuando estas últimas no implicarían *per se* arbitrariedad, sí afectarían la exigencia de aplicación exclusiva de tal criterio.
Respecto de las etapas que han de surtirse en este tipo de procesos de selección, el artículo 31 de la Ley 909 de 2004[30] señaló que son (i) la convocatoria[31], (ii) el reclutamiento[32], (iii) la aplicación de pruebas o instrumentos de selección[33], (iv) la conformación de lista de elegibles[34] y (v) el período de prueba[35].
En particular, es oportuno precisar los alcances de dos etapas: (i) de «pruebas o instrumentos de selección» y (ii) «conformación de las listas de elegibles». Veamos:
El propósito de la primera de ellas es el de evaluar la capacidad, idoneidad y cumplimiento de las aptitudes de los concursantes en relación con las calidades necesarias para ejercer efectivamente el contenido funcional del empleo público de que se trate.
Los resultados objetivos de las pruebas aplicadas son los que determinan el orden en que debe elaborarse el listado que contiene el nombre de las personas que habrán de ser designadas en las plazas vacantes, así lo indica el artículo 31, numeral 4, de la Ley 909 de 2004, que a su vez prevé que con la lista «[…] y en estricto orden de mérito se cubrirán las vacantes […]». Al respecto, la corte Constitucional ha indicado lo siguiente:

> […] quien ocupe el primer lugar, de acuerdo con el puntaje obtenido, será el ganador y excluirá a los demás, en orden descendente. Si se procede de otro modo, habría que preguntarse, como lo hace el demandante, **¿para qué el concurso de méritos y calidades, si el nominador puede elegir al candidato de sus preferencias [36]** […] (negrilla fuera del texto original)

En similar sentido, en T-610 de 2017, el máximo juez constitucional señaló que:

> […] las etapas y pruebas de una convocatoria deben dirigirse a identificar las destrezas, aptitudes, experiencia, idoneidad, suficiencia, entre otras cualidades, calidades, competencias y capacidades de los candidatos. Una vez estas habilidades han sido calificadas de manera objetiva, **sólo aquél con mayor mérito debe ser designado en el respectivo cargo, con exclusión de los demás concursantes** […][37] (negrilla fuera del texto original)

El análisis que antecede permite concluir que en los procesos que se adelantan bajo la modalidad del concurso público, la escogencia del participante atiende a la aplicación rigurosa y exclusiva del principio del mérito, sin que pueda existir otro parámetro al cual obedezca tal decisión.
De otro lado, aparece el sistema de convocatoria pública como un proceso de selección que involucra instrumentos de diferente naturaleza. Así, integra un componente meritocrático al disponer la aplicación de pruebas como una de sus etapas, pero también contempla uno de orden discrecional porque, a diferencia de lo que sucede en el concurso público, los resultados obtenidos no son concluyentes de la elección. Esta última se realiza por un órgano colegiado mediante la votación que hagan sus integrantes de una lista de elegibles cuyo orden no condiciona la decisión.
Lo anterior evidencia que, aunque este procedimiento prevé una primera fase clasificatoria en la que se aplican herramientas que responden exclusivamente al principio de mérito, como lo son las pruebas que permiten la conformación de aquel listado, en la elección final hay un importante margen de libertad para el nominador que le da la posibilidad de valorar y escoger entre los candidatos.
La aplicación de la convocatoria pública como modalidad de proceso de selección se contempló para la provisión de los siguientes cargos:

- Los servidores públicos que deban ser escogidos por las corporaciones públicas (Artículo 126 C.P. modificado mediante el Acto Legislativo 2 de 2015, artículo 2[38]).

- Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, quienes son elegidos por la respectiva Corporación, previa audiencia pública, de lista de diez elegibles

enviada por el Consejo Superior de la Judicatura, tras una convocatoria pública reglada por la ley (Artículo 231 C.P.).

- Los siete magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial son escogidos por el Congreso en pleno, así: cuatro de ellos de ternas enviadas por el Consejo Superior de la Judicatura y los tres restantes, de ternas enviadas por el presidente de la República, en ambos casos previa convocatoria pública reglada (Artículo 257A C.P.).

- El contralor general de la República es elegido por el Congreso en pleno de lista de elegibles conformada por convocatoria pública con base en lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución (Artículo 267 C.P.).

- Los Contralores departamentales, distritales y municipales, quienes son elegidos por las asambleas departamentales, concejos municipales y distritales, de terna conformada por quienes obtienen los mayores puntajes en convocatoria pública realizada conforme a la ley (Artículo 272 C.P.).

En concepto del 10 de noviembre de 2015[39], la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación se ocupó de estudiar los antecedentes del Acto Legislativo 02 de 2015. Dicho pronunciamiento explicó las razones por las cuales, en el caso de los servidores públicos electos por corporaciones públicas, la reforma constitucional en cuestión optó por consagrar un sistema de convocatoria pública, en lugar de un concurso público de méritos. Sobre el particular señaló la referida Sala:

> […] Se entendió que si se adoptaba un concurso público de méritos como tal, se obligaba al organismo nominador a nombrar de acuerdo con el orden de clasificación de los aspirantes, lo que se consideró como una reducción indebida de la autonomía de las corporaciones públicas. Por tanto, se dijo, era necesario acudir a un sistema transparente, público, objetivo y basado en el mérito, pero que fuera distinto al concurso público en cuanto permitiera al organismo elector escoger entre los varios candidatos que superaran la etapa de selección […]

En relación con las diferencias existentes entre estos procesos de selección, el referido concepto sostuvo que la convocatoria pública «[…] comparte en lo sustancial los elementos propios del concurso público de méritos, salvo por el hecho de que no existe un orden de elegibilidad dentro de la lista de seleccionados […]».

De conformidad con lo señalado, la Sala concluye que, los procesos de selección que regula, por un lado, el artículo 125 superior y, por otro, los artículos 126, 231, 257A, 267 y 272 *ibidem* no resultan equiparables. Mientras que en los primeros, esto es, en los concursos públicos existe un orden obligatorio de escogencia entre los aspirantes que superan las respectivas pruebas según como se haya conformado la lista de elegibles, en las convocatorias públicas se conserva cierto grado de valoración que permite seleccionar a cualquiera que se encuentre en dicha lista, con independencia del puesto ocupado o el orden allí establecido.

Sin embargo, esto no significa que sean radicalmente opuestos. De hecho, en esencia, tanto la convocatoria pública como el concurso público de méritos son procesos de selección del empleo público que deben basarse en el respeto de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, celeridad, publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y mérito.

La Ley 909 de 2004 señaló en su artículo 2 que el mérito «[…] es un elemento sustantivo de los procesos de selección del personal que integra la función pública […]» y, seguidamente, dispuso que su aplicación puede ajustarse a los empleos públicos de libre nombramiento y remoción. Esto significa que todo empleo público que sea provisto mediante un proceso de selección o en virtud de la facultad discrecional consagrada para los cargos de libre nombramiento y remoción debe

tener en cuenta la satisfacción del principio del mérito al momento de elegir a la persona que ha de ocuparlo.
La diferencia estará en la rigurosidad con la que, dependiendo de la forma de provisión del empleo, debe evaluarse el mérito. De acuerdo con ello y con la caracterización que se ha hecho hasta ahora, es posible esquematizar de la forma en la que sigue las escalas o grados de severidad con la que, en cada caso, debe calificarse tal criterio:

sistema de provisión del empleo público	**método de evaluación del mérito**	**graduación de la evaluación del mérito**
Concurso público	Aplicación de pruebas o instrumentos de selección	Estricta
Convocatoria pública	Aplicación de pruebas o instrumento de selección + Buen juicio del nominador	Intermedia
Facultad discrecional	Buen juicio del nominador	Leve

Ahora bien, es importante anotar que en todo caso la aplicación de las pruebas o instrumentos de selección habrá de realizarse por la ESAP o universidades debidamente acreditadas ante el Ministerio de Educación, a fin de garantizar el mérito y los principios constitucionales antes descritos.

3. **Sentencia C-105 de 2013: Naturaleza del proceso de selección para la provisión del cargo de personero municipal**

La sentencia C-105 de 2013 declaró la constitucionalidad parcial del inciso 1 del artículo 35 de la Ley 1551 de 2012 en cuanto contempló que los personeros municipales deben elegirse por las corporaciones públicas «previo concurso de méritos».
Las principales razones de la Corte Constitucional que sustentan su decisión se resumen así: (i) la trascendencia de la función de promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos asignada a los personeros; (ii) los personeros cumplen la función de veeduría y vigilancia de la conducta de los servidores públicos del orden territorial; (iii) por tanto, la escogencia o designación debe ser ajena a los elementos discrecionales que puedan comprometer la independencia e imparcialidad del personero municipal.
Con base en ello, concluyó que en el caso de los personeros municipales es perfectamente aplicable la regla jurisprudencial que admite el concurso de méritos como sistema de provisión de empleos que no son de carrera, no porque su elección a través de dicho mecanismo resulte imperativa, sino porque su adopción constituye una posibilidad dentro del margen de libertad de configuración que ostenta el legislador.
La anterior decisión, en lo se refiere a la exequibilidad de la expresión anotada, hizo tránsito a cosa juzgada constitucional relativa, de lo que se desprende su carácter vinculante y obligatorio para esta Corporación. En ese sentido, si el máximo intérprete de la Constitución ya realizó una lectura respecto de la forma en que actualmente se encuentra regulada la provisión del cargo de personero municipal, para concluir que esta se realiza a través de concurso público, en consecuencia, este es el criterio al que obligatoriamente debe ceñirse esta Sala.

8. Problemas jurídicos

Se advierte que no hay necesidad de hacer ajustes a los problemas jurídicos que, fruto del diálogo y la concertación con las partes, se plantearon de manera provisional en la etapa de fijación del litigio de la audiencia inicial. Por lo tanto, los interrogantes que corresponde resolver son los siguientes:

1. ¿La materia objeto de los actos administrativos acusados está sometida a reserva de ley y, por ende, es totalmente nulo el Decreto 2485 de 2014 y parcialmente el Decreto 1083 de 2015, al haberse expedido por las entidades demandadas

2. ¿El Ministerio del Interior y el Departamento Administrativo de la Función Pública excedieron el ejercicio de la facultad reglamentaria a través de los artículos 4 del Decreto 2485 de 2014 y el 2.2.27.4 del Decreto 1083 de 2015

3. ¿Son nulos los artículos 4 del Decreto 2485 de 2014 y el 2.2.27.4 del Decreto 1083 de 2015 por desconocimiento del principio democrático y el de autonomía de las entidades territoriales

Primer problema jurídico

¿La materia objeto de los actos administrativos acusados está sometida a reserva de ley y, por ende, es totalmente nulo el Decreto 2485 de 2014 y parcialmente el Decreto 1083 de 2015, al haberse expedido por las entidades demandadas

A efectos de resolver este interrogante, la Sala se ocupará de estudiar lo concerniente a (i) la competencia como presupuesto de validez del acto administrativo; (ii) la reserva de ley; y (iii) el caso concreto.

1. **La competencia como presupuesto de validez del acto administrativo**

El proceso de formación y expedición de un acto administrativo corresponde a la administración[40], como sujeto activo al que se le ha asignado la competencia necesaria para adoptar decisiones unilaterales por medio de las cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas.

De acuerdo con ello, para que esa manifestación de voluntad estatal sea válida se requiere, entre otros, que al sujeto de quien emana le haya sido atribuida, vía constitucional, legal o reglamentaria, la facultad de tomar dicha decisión. Esto es lo que en la teoría del acto administrativo se conoce como competencia, que no es otra cosa que la capacidad jurídica que se predica de los sujetos particulares en el derecho privado.

Así pues, la competencia administrativa se determina a partir de la identificación de funciones, deberes, responsabilidades, obligaciones y facultades que le ha asignado el ordenamiento jurídico a los servidores públicos y a los particulares que ejercen funciones **administrativas**, pues no de otra forma se puede delimitar el campo de acción dentro del cual le es dado desenvolverse a una autoridad administrativa.

A efectos de garantizar derechos fundamentales como el debido proceso y la seguridad jurídica, las normas que fijan competencias deben ser expresas, claras y anteriores a la expedición del acto administrativo de que se trate, lo que demuestra la íntima conexión que tiene el concepto objeto de estudio con el principio de legalidad y que el fundamento constitucional de ambas figuras reside en los artículos 2[41], 6[42], 121[43], 122[44] 123.2[45], 209[46] superiores.

En ese orden de ideas, dado que la competencia permite que las decisiones de la administración se encuentren revestidas de legalidad, el acto administrativo estará viciado de nulidad en aquellos casos en que se profiere por un sujeto que carece de capacidad jurídica para actuar, esto es, sin una competencia atribuida por el ordenamiento. Es por ello que el artículo 137 del CPACA consagra la falta de este requisito como uno de los vicios invalidantes de los actos administrativos, al señalar que toda persona podrá solicitar que se anulen aquellos que «hayan sido expedidos […] sin competencia».

Como puede observarse, la falta de competencia es un vicio externo al acto administrativo debido a que no se afinca en el contenido de este, en su motivación o finalidad, sino en el sujeto que lo

expide pues lo que se advierte en tales casos es que el derecho positivo no consagra una facultad que le permita fungir al Estado como autoridad normativa.
Ahora, es importante tener en consideración que la asignación de competencias a la administración pública atiende a diferentes factores que pueden identificarse como el funcional, el material, el territorial y, en algunos casos, el temporal. La expedición de un acto administrativo en ausencia de cualquiera de ellos da lugar a la anulabilidad de la decisión.
El primero de estos criterios (funcional) se refiere al ejercicio de atribuciones según el grado jerárquico que, dentro de la estructura organizacional de la administración pública, ostenta el servidor público o particular investido de funciones administrativas. El material, por su parte, supone que el acto administrativo proferido sea el desarrollo de una competencia efectivamente asignada a la autoridad que lo expidió. El factor territorial parte de reconocer que debe haber una división del territorio que permita delimitar el espacio geográfico en el que la autoridad administrativa se encuentra habilitada para el desempeño de sus funciones. Por último, el temporal es un parámetro que aplica en determinados casos en los que el ordenamiento jurídico impone un límite de tiempo para que la administración pueda ejercer su poder decisorio.
Finalmente, en relación con las normas que deben considerarse a efectos de estudiar la competencia como presupuesto de validez de los actos administrativos, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:

> […] la valoración del ejercicio de una competencia, esto es, la definición acerca de si un órgano estatal obró o no de conformidad con las reglas que la fijan, debe hacerse necesariamente mediante el cotejo con los preceptos vigentes al tiempo en que se efectivizó, dado que por constituir éstos su fuente de validez son los que determinan la regularidad de su ejercicio. [...][47]

2. **Principio de reserva de ley**

Como primera medida, es preciso señalar que el trasfondo histórico de este principio reside en el constitucionalismo revolucionario francés, el cual, al concebir la ley como máxima expresión de la soberanía popular, le confirió preeminencia en el ordenamiento jurídico. Esto hizo que en sistemas normativos como el colombiano, de marcada influencia francesa, sin desconocer la actual supremacía constitucional, se predicara la existencia de una cláusula general de competencia en cabeza del Congreso de la República[48], la cual lo faculta para ejercer su función de producción normativa en cualquier ámbito, salvo que se trate de alguno que, por expresa disposición del constituyente, debe ser regulado por la administración a través del reglamento.
Ahora bien, además de aquella cláusula general de competencia en favor del Congreso, en ciertos casos, la Constitución[49] ha previsto la exigencia de que la regulación de un determinado asunto se realice a través de una fuente del derecho en particular que, en este caso, es la ley. Esto es lo que se conoce como el principio de reserva de ley que, en otras palabras, da cuenta de un condicionamiento con ocasión del cual la configuración de ciertos temas solo puede realizarse mediante la expedición de (i) una ley en sentido formal, es decir aquella que surge del legislador ordinario o (ii) por disposiciones que sin haber surgido en el seno del Congreso de la República, tienen rango de ley al expedirse por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió aquel[50].
En el ordenamiento jurídico colombiano este último supuesto encuentra una limitación importante en el texto del artículo 150 superior, numeral 10, el cual identifica los siguientes asuntos que por ser de competencia exclusiva del legislador no pueden ser regulados a través de la concesión de facultades extraordinarias:

1. La expedición de códigos.

2. La expedición de leyes estatutarias.

3. La expedición de leyes orgánicas.

4. El decreto de impuestos.

5. La expedición de leyes marco a las que hace referencia el numeral 19 del artículo 150 superior, esto es, normas generales en las que se prevén los objetivos y criterios a los que debe someterse el Gobierno con el fin de organizar el crédito público; regular el comercio exterior y señalar el régimen de cambio internacional; modificar las disposiciones del régimen de aduanas; regular la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con recursos captados del público; fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos; regular el régimen de prestaciones sociales mínimas para los trabajadores oficiales y modificar la estructura de ministerios, departamentos administrativos y demás organismos de la administración nacional[51].

Visto lo anterior, en los casos en que tiene aplicación la reserva de ley no se encuentra permitido regular la materia por medio de preceptos de inferior jerarquía o fuerza normativa, como lo son los reglamentos. En esos términos, el principio en cuestión constituye una garantía esencial de los estados modernos hacia sus asociados, si se tiene en cuenta que los asuntos sujetos a reserva legal involucran temas de gran importancia e interés social y económico que, en tal virtud, deben positivarse como resultado de una amplia deliberación que garantice el principio democrático, lo que le otorga legitimidad a la norma de derecho resultante.
Es importante resaltar la forma en que la reserva de ley constituye un límite inquebrantable a la potestad reglamentaria pues, habiéndose reservado un asunto al legislador, no es dable que la administración entre a regular los aspectos centrales de la materia en cuestión. Esto no significa que se excluya el reglamento porque, una vez expedida la ley, podrán dictarse aquellos que se conocen como reglamentos ejecutivos o *secundum legem*, los cuales gozarán de validez en la medida en que tengan una adecuada cobertura legal, esto es, en cuanto se dediquen a ejecutar o desarrollar la ley a la que se encuentran inmediatamente ligados. Esto quiere decir que en aquellos casos solo habrá espacio para el reglamento, en la medida en que previamente haya una habilitación legal.
Sobre el particular, el profesor Luciano Parejo Alfonso enseña lo siguiente:

> […] La **finalidad** entonces de la técnica de la reserva de Ley se circunscribe, en principio, a **subordinar el acceso a una materia** perteneciente al campo por ella acotado y, por tanto, la intervención reguladora de normas inferiores (de rango reglamentario), **a la ocupación previa de esa materia por una Ley** con el contenido (variable) que la CE quiere (en virtud, justamente, del tipo de reserva de Ley) que sea establecido precisamente por el órgano parlamentario. Una vez que la Ley haya fijado –mediante una regulación propia- los contenidos requeridos por la norma constitucional, **pueden llamar a otras normas** (reglamentarias) **a colaborar con ella** –para complementar aquella regulación- y en todo caso, producirse la normación reglamentaria de desarrollo […][52]

En el evento de no haberse previsto una reserva de ley, la respectiva regulación se podrá realizar a través del reglamento siempre y cuando se tenga la competencia para el efecto y se respete el contenido de disposiciones superiores, de manera que no se trastorne el sistema de fuentes. En ese sentido, la reserva legal es un mecanismo constitucional que permite proteger el reparto de competencias entre el legislador y la administración pública o, si se quiere, entre la ley y el reglamento.
En relación con la materia objeto de estudio, el máximo tribunal constitucional ha distinguido entre dos clases de reserva de ley, así:

> […] i) Una, *material*, que la conforma el conjunto de supuestos o materias sobre las cuales la Constitución exige una regulación de rango legal. Este tipo de reserva supone que los temas que no han sido reglados por la ley, no pueden ser regulados por normas reglamentarias.

> Sin embargo, debe precisarse que excepcionalmente el Presidente de la República a través de una norma con fuerza de ley, como legislador extraordinario con facultades expresamente otorgadas, pueda reglamentar el tema correspondiente. (ii) Otra, *formal*, que significa que cualquier materia, por intrascendente que sea, que haya sido regulada en la ley, no puede ser modificada por un reglamento. En razón a las materias restringidas o a los trámites especiales exigidos, sólo el Congreso está facultado para realizar la regulación […][53]

Lo anunciado hasta ahora indica que, en los eventos en que por disposición expresa del constituyente la competencia es exclusiva del legislador no es admisible el vaciamiento de las facultades atribuidas a este mediante la expedición de normas que carezcan de rango y fuerza legal. No obstante, surge el interrogante de cómo identificar tales hipótesis, pues lo cierto del caso es que el uso constitucional de la palabra ley no es unívoco.

Así, en ocasiones la norma superior se refiere a la ley en un sentido formal que se define a través de un criterio orgánico como aquel precepto expedido por el Congreso o, al menos, que tiene rango y fuerza de ley formal. En otras ocasiones la Constitución alude a la ley en un sentido material, es decir, una disposición con carácter jurídico vinculante, con independencia del órgano que haya dispuesto su producción.

Ante la dificultad que puede representar esta ambivalencia a efectos de determinar si existe reserva de ley o no, la Subsección A considera que en cada caso particular será necesario definir el alcance de la expresión «ley» contenido en la norma objeto de revisión.

Mal podría pensarse que todas las cuestiones pasibles de ser regladas por la ley están sujetas a reserva legal pues ello desnaturalizaría la esencia de esta institución. Así, mientras que la cláusula de competencia del legislador constituye una regla general que le permite a este ocuparse de cualquier materia que no haya sido asignada privativamente a la administración, la reserva de ley aparece como una excepción que obedece a la especial trascendencia que la norma de normas le ha otorgado a un determinado asunto.

Es por ello que, en lugar de predicar la aplicación generalizada de tal reserva en todo uso que haga la Constitución de la palabra ley, conviene adoptar una posición que opte por estudiar, en cada caso concreto, si a la luz del ordenamiento jurídico la regulación de la temática en particular solo puede efectuarse a través un precepto con fuerza y rango de ley[54], para lo cual el intérprete debe tener en cuenta los siguientes criterios:

Configuración	**Casuística**
Materias sometidas a **reserva de ley** por disposición del artículo 150 superior, norma competencial del Congreso de la República.	**(i)** Códigos (Competencia exclusiva del legislador ordinario – art.150 #10). **(ii)** La estructura de la administración nacional; la creación, supresión o fusión de ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades del orden nacional, señalando sus objetivos y estructura orgánica; la reglamentación de la creación y funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales; la creación o autorización para la constitución de empresas industriales y comerciales del estado y sociedades de economía mixta. **(iii)** El ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia a cargo del Gobierno. **(iv)** Las autorizaciones al Gobierno para celebrar contratos, negociar empréstitos y enajenar bienes nacionales. **(v)** El decreto de impuestos (Competencia exclusiva del legislador ordinario – art.150 #10). **(vi)** La expedición de leyes marco (Competencia exclusiva del legislador ordinario – art.150 #10) en asuntos de crédito público;

	comercio exterior y régimen de cambio internacional; régimen de aduanas; actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con recursos captados del público; régimen salarial y prestacional de los empleados públicos; régimen de prestaciones sociales mínimas para los trabajadores oficiales; estructura de ministerios, departamentos administrativos y demás organismos de la administración nacional **(vii)** La apropiación o adjudicación y recuperación de tierras baldías. **(viii)** Cuestiones relativas al Banco de la República y a las funciones de su Junta Directiva. **(ix)** La intervención económica en asuntos de que trata el artículo 334 superior como explotación de recursos naturales, uso del suelo; producción, distribución, utilización y consumo de los bienes; y en los servicios públicos y privados. **(x)** La prestación de servicios públicos. **(xi)** El ejercicio de funciones públicas. **(xii)** La propiedad industrial, patentes y marcas y las otras formas de propiedad intelectual.
Reserva de ley orgánica (Art. 151 CP) Competencia exclusiva del legislador ordinario (Art.150 #10)	**(i)** Reglamentos del Congreso y de cada una de las Cámaras (Art. 151 CP). **(ii)** Normas sobre preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones y del plan general de desarrollo (Arts. 151, 342 y 352 CP). **(iii)** Normas sobre asignación de competencias normativas a las entidades territoriales (Art. 151 CP). **(iv)** Ordenamiento territorial (Arts. 150 #4, 288, 297, 307 y 329 CP)
Reserva de ley estatutaria (Art. 152 CP) Competencia exclusiva del legislador ordinario (Art.150 #10)	**(i)** Derechos y deberes fundamentales, así como procedimientos y recursos para su protección[55]. **(ii)** Administración de justicia[56]. **(iii)** Organización y régimen de partidos y movimientos políticos[57]; estatuto de la oposición y las funciones electorales[58]. **(iv)** Instituciones y mecanismos de participación ciudadana[59]. **(v)** Estados de excepción[60]. **(vi)** Igualdad electoral entre candidatos a la Presidencia de la República.

Respecto de las demás alusiones que haga el texto constitucional al término «ley», la Sala considera que la ubicación de la norma respectiva al interior de la Carta Política puede servir como pauta para dilucidar el sentido en que se ha utilizado aquel concepto.

Parte dogmática de la Constitución[61]	Si las decisiones esenciales para la sociedad y el Estado deben reservarse a la actividad de producción normativa del legislador, goza de toda lógica que los asuntos comprendidos en la parte dogmática del texto superior, al integrar los elementos que orientan y legitiman la actividad estatal, queden sometidos a tal reserva la mayoría de las veces, salvo que de la interpretación sistemática del texto y de la jurisprudencia constitucional pueda concluirse lo contrario. Por eso, en principio, en estos casos, aplica una especie de **indicio de reserva legal**, debiéndose entender que, por regla general, el término «ley» es usado en un sentido formal, es decir, como aquel precepto de carácter

	vinculante que resulta luego de haberse agotado el respectivo trámite legislativo o aquel que, habiéndose expedido por el Gobierno Nacional, tiene rango y fuerza de ley[62].
Parte orgánica de la Constitución[63]	El carácter instrumental de la parte orgánica de la norma de normas, que tiene razón de ser solo en cuanto sirva a la aplicación y realización de los principios, valores y derechos contemplados en su parte dogmática, hace que no resulte imperativa la intervención exclusiva del legislador en las materias allí comprendidas, salvo que de la interpretación sistemática del texto y de la jurisprudencia constitucional pueda concluirse lo contrario. Por eso, en estos casos, opera un **indicio de ausencia de reserva legal**, debiéndose entender que, por regla general, cuando la Carta Política utiliza la expresión «ley» se refiere a su sentido material, es decir, como cualquier tipo de precepto de carácter vinculante, con independencia de su rango y fuerza normativa.

De esta forma, que la disposición de que se trate pertenezca a la parte dogmática o a la orgánica de la Constitución sirve de indicio para presumir la existencia o no de reserva de ley. Sin embargo, esta proposición, lejos de constituir una regla absoluta, aparece como un simple criterio orientador que tendrá que ser valorado en armonía con la norma de que se trate y esta, a su vez, interpretarse sistemáticamente a la luz del texto superior.

Por ello, definir si el constituyente dispuso o no que el tema en particular fuese regulado en forma privativa por el legislador, dependerá de la valoración que se haga en cada caso concreto, evaluación que, en todo caso, deberá llegar a una respuesta afirmativa cuando logre establecerse que se trata de un asunto que, luego de ser estudiado a la luz de la carta política y de la jurisprudencia constitucional, puede catalogarse como de **especial trascendencia** por su **íntima conexión** con el modelo de Estado Social de Derecho y con la satisfacción de los fines esenciales del Estado[64], del interés general o de principios transversales como el democrático o de separación de poderes[65].

Finalmente, es importante destacar la existencia de ciertos eventos en los que entender que la Constitución alude a la «ley» como norma jurídica con rango y fuerza de tal resultaría contrario a aquella pues una lectura de la disposición respectiva de cara al ordenamiento jurídico no deja otra opción que concluir que el término ley fue usado en un sentido material, esto es, aludiendo a todo tipo de disposición jurídicamente vinculante sin que interese su naturaleza.

A título simplemente enunciativo, tal es el caso del artículo 4 cuando señala que «[…] Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades […]»; el 6 que dispone que «[…] Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes […]»; y el 13 según el cual «[…] Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley […]». Mal podría pensarse que, en ese mismo orden, los ciudadanos y residentes en Colombia únicamente están obligados al cumplimiento de las leyes expedidas por el Congreso; que la responsabilidad de los particulares solo surge ante la violación de las normas que ha proferido el legislador; o que el derecho a la igualdad solo se puede exigir respecto de aquellas últimas.

3. **Caso concreto**

Para el demandante José Ignacio Arando Bernal, el Decreto 2485 de 2014 y el Título 27 del Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, artículos 2.2.27.1 al 2.2.27.6., deben ser declarados nulos porque la materia de que se ocupan se encuentra sometida a reserva de ley, última que en su criterio está consignada en las siguientes normas:

- El artículo 313 constitucional, numeral 8, que prevé que a los concejos municipales y distritales les corresponde «Elegir personero para el periodo que fije la ley y los demás funcionarios que esta determine»;

- El artículo 35 de la Ley 1551 de 2012, que modificó el 170 de la Ley 136 de 1994, según el cual los personeros deben elegirse «[…] previo concurso público de méritos de conformidad con la ley vigente […]»;

- El artículo 2, inciso 4, del Acto Legislativo 02 de 2015, que modificó el artículo 126 superior al disponer que «[…] la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley […]».

Lo primero que advierte la Sala es que, como se anunció, la reserva de ley es una figura que tiene aplicación gracias a la consagración expresa que efectúa el constituyente, sin que resulte viable considerar que sea el mismo legislador quien la establezca. Esta consideración conduce a descartar el reproche por el presunto desconocimiento del artículo 35 de la Ley 1551 de 2012.
Ahora bien, con el fin de esclarecer si los artículos constitucionales 313, numeral 8, y 126, inciso 4, implican una reserva de ley que fue desconocida con la expedición de los actos demandados, es preciso recordar la materia que fue objeto de regulación mediante estos últimos. Así, el Decreto 2485 de 2014, cuyo contenido es reproducido en el Título 27 del Decreto 1083 de 2015, artículos 2.2.27.1 al 2.2.27.6., se encarga de fijar los estándares mínimos para el concurso público y abierto de méritos para la elección de personeros municipales.
En ese sentido, lo que en esencia disponen las normas en cuestión es que el concurso sea adelantado por los concejos municipales o distritales atendiendo a criterios de objetividad, transparencia, imparcialidad, publicidad e idoneidad de los aspirantes. Así mismo, prevén como etapas del concurso la convocatoria, el reclutamiento y las pruebas; regulan los mecanismos de publicidad; el uso de la lista de elegibles, al igual que la posibilidad de celebrar convenios interadministrativos para la realización parcial de los concursos y el diseño de las pruebas a ser aplicadas.
Visto lo anterior, en lo que se refiere al artículo 313 de la Constitución Política, cuyo numeral 8 señala que corresponde a los concejos municipales «[…] Elegir Personero para el período que fije la ley […]», se observa que no sería viable predicar un vaciamiento de competencias por violación de una reserva legal porque el precepto constitucional no admite duda en cuanto a que aquello que debe definir la «ley», más allá de la acepción en que se esté usando la palabra, es el «periodo» de los personeros municipales o distritales, entendido como el lapso o término para el cual han de ser elegidos, asunto que en modo alguno fue abordado en los actos administrativos objeto de la actual demanda.
Queda entonces por analizar si el inciso 4 del artículo 126 de la Constitución Política, modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 2 de 2015, consagra una reserva de ley y, en caso afirmativo, si esta fue vulnerada por el Ministerio del Interior y el Departamento Administrativo de la Función Pública. Según la norma en cuestión:

> […] Salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección […] (Subrayas fuera del texto original)

De acuerdo con la explicación ofrecida en las anotaciones preliminares, la disposición en la que el señor José Ignacio Arango Bernal pretende fundamentar la ilegalidad de los actos administrativos demandados no es aplicable a los personeros municipales pues, según se explicó, la provisión de este tipo de cargos debe efectuarse mediante concurso público, proceso de selección que difiere del de convocatoria pública, contemplada en el Acto Legislativo 2 de 2015.

En tales condiciones, no es factible predicar una alegada falta de competencia por existencia de reserva de ley cuando el asunto del que se ocupan los decretos acusados no se rige por la norma constitucional en la que, a voces de la demanda, se establece la reserva en comento.
En conclusión, con la expedición del Decreto 2485 de 2014 y del Título 27 del Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, artículos 2.2.27.1 al 2.2.27.6., el Ministerio del Interior y el Departamento Administrativo de la Función Pública no infringieron el principio de reserva de ley por desconocimiento de lo dispuesto en los artículos 126 y 313 constitucionales, y el 35 de la Ley 1551 de 2012. En ese sentido, las entidades demandadas podían hacer uso de su facultad de producción normativa a través del reglamento, respetando el contenido y la estructura jerárquica del sistema de fuentes, cuestión que pasa a estudiarse a continuación.
Segundo problema jurídico
¿El Ministerio del Interior y el Departamento Administrativo de la Función Pública excedieron el ejercicio de la facultad reglamentaria a través de los artículos 4 del Decreto 2485 de 2014 y el 2.2.27.4 del Decreto 1083 de 2015

1. **Ejercicio de la potestad reglamentaria**

Uno de los rasgos característicos del sistema jurídico colombiano es la organización jerárquica que se le ha otorgado a los diferentes tipos de normas que lo integran, organización que supone la existencia de una estructura escalonada, si se quiere piramidal, en la que cada categoría normativa tiene características propias que influyen directamente en el rango que se les otorga y, por consiguiente, en la relación de subordinación predicable entre unas y otras. Todo ello responde a una teleología particular que no es otra que permitir la construcción sistemática, coherente y racional del ordenamiento jurídico.
El hecho de que esta estructura jerárquica no aparezca definida explícitamente en la Constitución Política no es óbice para afirmar su existencia ya que a lo largo de este cuerpo normativo pueden encontrarse sendas disposiciones que dan cuenta de la primacía o sujeción que se le confiere a cada tipología. Así, por ejemplo, el artículo 4.º superior, prevé que «[…] La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales […]».
De esta forma, se ha entendido que la Constitución y las normas convencionales que se integren al ordenamiento jurídico, ocupan el nivel más alto dentro de este, seguidas en orden por las leyes que debe expedir el Congreso con sujeción a aquellas y por los actos administrativos, los que de acuerdo a la categoría en la que puedan clasificarse deberán obedecimiento a la Constitución y a la ley, o en algunos casos, solo a la primera.
Dicha estratificación normativa se convierte en un criterio de validez que ha sido explicado en los siguientes términos por la Corte Constitucional:

> […] La unidad del sistema jurídico, y su coherencia y armonía, dependen de la característica de ordenamiento de tipo jerárquico de que se reviste. La jerarquía de las normas hace que aquellas de rango superior, con la Carta Fundamental a la cabeza, sean la fuente de validez de las que les siguen en dicha escala jerárquica. Las de inferior categoría, deben resultar acordes con las superiores, y desarrollarlas en sus posibles aplicaciones de grado más particular. En esto consiste la connotación de sistema de que se reviste el ordenamiento, que garantiza su coherencia interna. La finalidad de esta armonía explícitamente buscada, no es otra que la de establecer un orden que permita regular conforme a un mismo sistema axiológico, las distintas situaciones de hecho llamadas a ser normadas por el ordenamiento jurídico […][66]

Establecido lo anterior, resulta claro que las facultades de producción normativa de la administración tienen un límite incuestionable en el contenido de las normas respecto de las cuales pueda predicarse una superioridad jerárquica, asunto que se definirá atendiendo a la tipología del reglamento.

Así, tratándose de los reglamentos (i) expedidos por el presidente de la República en ejercicio de la potestad reglamentaria que le atribuye el artículo 189-11 superior; de los (ii) reglamentos que desarrollan leyes habilitantes y de los (iii) reglamentos expedidos por otras autoridades administrativas en asuntos especializados de su competencia, se ha dicho que su propósito es complementar la ley en la medida en que sea necesario para lograr su cumplida aplicación, cuando se requiera por ejemplo, precisar definiciones o aclarar etapas del procedimiento previsto en aquella. En ese orden de ideas, si lo que se busca es permitir la ejecución de la ley, esta facultad no apareja la interpretación, modificación, limitación o ampliación de los contenidos legislativos, como tampoco el modo de encuadrar las distintas situaciones jurídicas en los supuestos que contiene[67].

En este punto resulta relevante, de conformidad con el objeto del presente proceso, explicar que los reglamentos que desarrollan leyes habilitantes son aquellos que se profieren en ejercicio de una competencia asignada directamente por la Constitución con sometimiento, por disposición de la misma carta suprema, a una norma legal que faculte el desarrollo de dicha atribución. Se trata entonces de normas superiores que establecen potestades normativas en cabeza de la administración utilizando las expresiones «de conformidad», «de acuerdo» o «según la ley».

Ahora bien, en relación con los límites a la potestad reglamentaria de la administración frente a los tres tipos de normas reglamentarias que se señalaron, el Consejo de Estado ha precisado lo siguiente:

> […] en nuestro orden, la potestad reglamentaria es la facultad constitucional que se atribuye de manera permanente al Gobierno Nacional para expedir un conjunto de disposiciones jurídicas de carácter general y abstracto para la debida ejecución de la ley, a través de las cuales desarrolla las reglas y principios en ella fijados y la completa en aquellos detalles y pormenores necesarios que permiten su aplicación, pero que en ningún caso puede modificar, ampliar o restringir en cuanto a su contenido o alcance. El reglamento, como expresión de esta facultad originaria del Ejecutivo es, pues, un acto administrativo de carácter general que constituye una norma de inferior categoría y complementaria de la ley; su sumisión jerárquica a ésta (sic) en la escala normativa (principio de jerarquía normativa piramidal) es indiscutible y absoluta, toda vez que se produce en los ámbitos y espacios que la ley le deja y respecto de aquello que resulte necesario para su cumplida ejecución, sin que pueda suprimir los efectos de los preceptos constitucionales o legales ni contradecirlos, motivo por el cual si supera o rebasa el ámbito de aplicación de la ley e incursiona en la órbita de competencia del Legislador compromete su validez y, por tanto, deberá ser declarado nulo, de conformidad con lo ordenado por el numeral 2 del artículo 237 de la Constitución Política. El poder reglamentario se encuentra limitado en función a la necesidad de la cumplida ejecución de la ley y, como lo ha manifestado la jurisprudencia, la extensión de esta competencia es inversamente proporcional a la extensión de la ley, es decir, cuanto mayor sea el campo disciplinado por la ley, menor será el que corresponde al decreto reglamentario […][68] (Subrayas fuera del texto original)

Así pues, para el ejercicio de la atribución de producción normativa, la administración debe limitarse a desarrollar las disposiciones respecto de las cuales sea posible predicar una relación de jerarquía, en algunos casos será la Constitución, en otros también la ley e incluso algunos preceptos reglamentarios[69]. De esta forma, cuando sea viable establecer esa subordinación normativa, el reglamento no puede introducir normas que no se desprendan natural y lógicamente de las disposiciones superiores, ampliar o restringir el sentido de estas, como tampoco puede suprimirlas o cambiarlas ni reglamentar materias que estén reservadas a ellas, pues en tales eventos excedería sus competencias.

En ese sentido, es importante señalar que a pesar de que en la acción de simple nulidad se ejerce el control de legalidad de la norma reglamentaria, también es cierto que, de encontrar que el reglamento no se ajusta a los preceptos constitucionales, habrá de declararse su nulidad, habida cuenta de que el ejercicio de la potestad reglamentaria no solo está atado a la ley que desarrolla,

sino también, a los postulados superiores contenidos en la Constitución Política[70], así como a los fines del Estado Social de Derecho[71], a los cuales no puede ser ajeno en el desarrollo de sus funciones.

2. **Caso concreto**

Los demandantes consideraron que, a través de los actos administrativos demandados, el Ministerio del Interior y el Departamento Administrativo de la Función Pública excedieron lo indicado en el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012, que modificó el 170 de la Ley 136 de 1994, pues a su modo de ver este último no estableció en modo alguno que la vacante de personero municipal se ocuparía con la persona que quede en el primer puesto de la lista.
Para resolver este interrogante, basta remitirse a las consideraciones efectuadas en desarrollo del primer problema jurídico pues allí quedó establecido que la Corte Constitucional, en sentencia C-105 de 2013, resolvió declarar exequible el inciso 1 del artículo 35 de la Ley 1551 de 2012 en cuanto contempló que los personeros municipales deben elegirse por las corporaciones públicas, «previo concurso de méritos».
Así las cosas, es plausible concluir que, respecto de este tipo de empleos, opera el precedente constitucional que admite el concurso público como proceso de selección aplicable a funcionarios que no son de carrera. Al hacer parte de una sentencia de constitucionalidad, dicha interpretación se integra al contenido del precepto legal en comento, luego no es viable para el Consejo de Estado desatender el texto normativo admitiendo, como pretenden los demandantes, que la elección de personeros municipales evada el estricto orden en que debe aplicarse la lista de elegibles, lo que implicaría, según la caracterización ampliamente explicada, que su elección se realice a través de convocatoria pública y no mediante el concurso público de méritos.
En conclusión, el Ministerio del Interior y el Departamento Administrativo de la Función Pública no excedieron el ejercicio de la facultad reglamentaria a través de los artículos 4 del Decreto 2485 de 2014 y el 2.2.27.4 del Decreto 1083 de 2015, al disponer que la vacante del empleo de personero se cubrirá con quien ocupe el primer puesto de la lista.
Tercer problema jurídico
¿Son nulos los artículos 4 del Decreto 2485 de 2014 y el 2.2.27.4 del Decreto 1083 de 2015 por desconocimiento del principio democrático y el de autonomía de las entidades territoriales

1. **Principio democrático**

La Constitución Política, desde el mismo preámbulo y en su artículo 1, consagra la democracia como uno de los principios fundamentales del Estado colombiano y, seguidamente, en su artículo 2, establece como uno de los fines estatales esenciales «[…] facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación […]».
La teleología a la que responde este principio no es otra que garantizar el involucramiento y participación de los ciudadanos en el diseño y funcionamiento de las instituciones públicas, lo cual resulta factible gracias a una serie de mecanismos y derechos que instituyó la carta política en atención al modelo de Estado Social de Derecho adoptado.
De esta forma, la democratización de la función pública aparece como uno de los principios más importantes en nuestro ordenamiento jurídico pues sobre él descansa toda la estructura institucional y normativa. En efecto, el nutrido contenido de este principio le otorga un alcance amplio que no se restringe a la intervención ciudadana en materia electoral, sino que impacta, además, ámbitos sociales, comunitarios, familiares e individuales.
Es por ello que las manifestaciones del principio en cuestión son abundantes y pueden encontrarse a lo largo y ancho de la Constitución Política. A manera de ejemplo y por nombrar solo unas

cuantas, es factible identificar como expresiones de dicho mandato la diversidad étnica y cultural (artículo 7); el respeto por la autodeterminación de los pueblos (artículo 9); el derecho a la igualdad (artículo 13); el derecho a la libertad de conciencia, cultos y expresión (artículos 18, 19 y 20); el de petición (artículo 23); el de reunión (artículo 37); los diferentes mecanismos de participación ciudadana que consagra el artículo 40 como el derecho de acceso a cargos públicos; la acción de tutela (artículo 86); la posibilidad de que grupos significativos de ciudadanos presenten proyectos de ley o de reforma constitucional (artículo 155), entre muchas otras.

Con base en ello, la Corte Constitucional ha indicado que el principio democrático por el que propende la Carta Política es universal y expansivo, características a las que se ha referido en los siguientes términos:

> […] es universal en la medida en que compromete variados escenarios, procesos y lugares tanto públicos como privados y también porque la noción de política que lo sustenta se nutre de todo lo que vitalmente pueda interesar a la persona, a la comunidad y al Estado y sea por tanto susceptible de afectar la distribución, control y asignación del poder social. El **principio democrático**es expansivo pues su dinámica lejos de ignorar el conflicto social, lo encauza a partir del respeto y constante reivindicación de un mínimo de democracia política y social que, de conformidad con su ideario, ha de ampliarse progresivamente conquistando nuevos ámbitos y profundizando permanentemente su vigencia, lo que demanda por parte de los principales actores públicos y privados un denodado esfuerzo para su efectiva construcción […][72]

Ahora bien, dicha Corporación también ha destacado que las diversas formas en las que opera el principio democrático permite sostener que el constituyente no se adhirió a un modelo específico de democracia, sino que quiso consagrar un esquema en el que pudieran articular y armonizar los diferentes tipos de democracia, que en la sentencia C-105 de 2013 caracterizó así[73]:

democracia	**alcance**
Sustancial	Se enfoca en un el contenido mínimo de los derechos fundamentales, normalmente reconocidos en textos constitucionales, como eje central de la organización política y social, lo que significa que la voluntad popular, incluso aquella que se manifieste a través de un sistema de organización político debe someterse a aquellos.
Deliberativa	Lo valioso del ejercicio democrático no está en la decisión misma sino en los procedimientos a través de los cuales se encausan el debate y el diálogo públicos.
Representativa	Hace énfasis en el ejercicio de la voluntad popular a través de representantes que son elegidos mediante el derecho al voto.
Participativa	Resalta la importancia de que los ciudadanos intervengan directamente en los escenarios políticos, sociales y económicos para propender por la gestión de sus propios intereses.

Finalmente, es importante señalar que la trascendencia innegable de este mandato para el adecuado funcionamiento del modelo estatal colombiano hace que se erija como un parámetro esencial a la hora de estudiar la validez de una determinada norma, debiéndose favorecer siempre aquellas lecturas que favorezcan la realización del principio democrático en su máxima expresión. *Contrario sensu,* aquellas otras que afecten su núcleo esencial o que incluso limiten su aplicación a nuevos escenarios han de excluirse.

2. **Principio de autonomía de las entidades territoriales**

En materia de organización y estructura del Estado, la Constitución de 1991 introdujo el principio de autonomía de las entidades territoriales en sus artículos 1 y 287, último que lo desarrolló en los siguientes términos:

> […] ARTICULO 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos:
> 1. Gobernarse por autoridades propias.
> 2. Ejercer las competencias que les correspondan.
> 3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
> 4. Participar en las rentas nacionales […]

En tales términos, la autonomía territorial se refiere a un cierto grado de libertad e independencia que se les concede a las autoridades administrativas del nivel local con el fin de que ejerzan un autogobierno de los asuntos que les conciernen. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la autonomía territorial puede entenderse como el poder de dirección política y administrativa que, en virtud del principio democrático, se le atribuye a cada entidad territorial a efectos de que gestione sus propios intereses.

La trascendencia de este principio dentro del esquema organizacional del Estado que introdujo la Constitución de 1991 es de vital importancia ya que permite acercar la acción estatal al ciudadano y a las necesidades particulares de cada comunidad, lo que sin duda alguna redunda en el fortalecimiento de la legitimidad de aquel.

De acuerdo con ello, el núcleo esencial de la autonomía territorial está dado por el derecho que tienen las entidades territoriales a ejercer las competencias que le han sido atribuidas a efectos de asumir un rol activo, a través de sus propias autoridades, en la administración y el gobierno de las materias que despiertan un interés local.

En la sentencia C-517 de 1992, el máximo juez constitucional se ocupó de analizar el alcance de cada uno de los derechos que según el artículo 187 superior definen el contenido mínimo de este principio y que, en tal condición, constituyen un límite intocable para el legislador:

derecho a la autonomía territorial de las entidades territoriales (núcleo esencial)	**alcance del derecho**
A gobernarse por autoridades propias	[…] se ejerce mediante el voto directo de los habitantes del respectivo territorio y de él se deriva la facultad de que gozan las autoridades electas para definir el ejercicio de la autonomía territorial y dentro de los límites del principio de unidad nacional, los destinos de la respectiva entidad. Con este fin se han creado mecanismos de participación ciudadana, como los contemplados en los artículos 40 y 103 de la Constitución Nacional. […] la elección de las autoridades propias y los mecanismos de participación popular son elementos especiales de la descentralizacion política que dota a la entidad del derecho, dentro del principio de unidad, de manejar los asuntos que conciernan a su territorio y a su población de manera autónoma. Vale decir, de definir, con criterio político, la viabilidad de asuntos de interés público dentro de los límites del ente territorial […]
A ejercer las competencias que les correspondan	[…] En general son la Constitución y la Ley Orgánica del Ordenamiento Territorial las encargadas de definir tales competencias. Así, a falta de esta última, en principio los entes territoriales tienen derecho a ejercer las competencias a las que se refiere la Carta […] De acuerdo con lo anterior es posible afirmar que las autoridades municipales tienen la atribución política de decidir

	cuales son las obras que demanda el progreso social y cuales no, así como cuales son las medidas que llevan a promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural. Si en la evaluación de conveniencia de determinadas medidas, el interés del municipio se enfrenta a un interés departamental o nacional, la tarea será, en virtud de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, resolver el conflicto en cada caso concreto […]
A administrar sus recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones	[…] los impuestos nacionales deben ser creados por la ley, los departamentales por ordenanzas y los municipales por medio de acuerdos, sin que exista ninguna razón constitucional para que una ley grave a la población de un municipio o departamento para el cumplimiento de las funciones específicas de éste o aquel. Ahora bien, los departamentos y municipios se encuentran sujetos al marco legal en la creación de sus tributos propios en virtud del principio de unidad nacional […]
A participar en las rentas nacionales	[…] la propia Constitución establece el situado fiscal, acompañado de un importante principio según el cual "No se podrán descentralizar responsabilidades sin la previa asignación de recursos fiscales suficientes para atenderlas". (Art. 356 C. N.) […]

Finalmente, aunque el artículo 287 constitucional no hace mención expresa a tal atribución, la sentencia C-517 de 1992 destacó como otra de las prerrogativas de las entidades territoriales, radicada específicamente en las asambleas departamentales y concejos municipales, la de adoptar los respectivos planes y programas de desarrollo económico, social y de obras públicas.

Visto lo anterior, es importante señalar que el aludido principio de autonomía debe ser interpretado y aplicado en armonía con el principio de unidad, lo que implica entender que el poder que se le concede a las entidades territoriales no es absoluto y soberano pues debe ejercerse dentro de unos límites constitucional y legalmente establecidos, que se explican en el reconocimiento de la superioridad del Estado unitario.

Respecto de la tensión que puede generarse entre estos dos principios, la Corte Constitucional ha señalado que debe resolverse buscando un equilibrio por medio del «[…] establecimiento de limitaciones recíprocas en la atribución de competencias a los distintos niveles territoriales, de conformidad con los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad contemplados en el Art. 288 de la Constitución, en la forma que establezca la ley […]»[74].

Ahora bien, para determinar los casos en que en las relaciones entre la Nación y las entidades territoriales se desconoce el núcleo esencial del principio de autonomía que rige para estas últimas, la jurisprudencia constitucional ha estructurado lo que se conoce como un test de vaciamiento de competencias[75].

El primer paso para realizar dicha evaluación consiste en identificar si el ente territorial ha sido despojado del control y manejo de la actividad administrativa que por disposición constitucional o legal le compete. Ahora bien, la pérdida del poder de direccionamiento propio de la entidad no basta para predicar un vaciamiento de competencias pues, en segundo lugar, será necesario establecer si la limitación impuesta al órgano respectivo tiene alguna repercusión en su objeto institucional y, por último, tendrá que definirse si el desplazamiento de funciones goza de justificación y razonabilidad, pues en caso de que se advierta que obedece a necesidades o finalidades constitucionalmente legítimas, la restricción resultará admisible.

3. **Caso concreto**

Los demandantes coincidieron en señalar que las normas acusadas vulneran el principio democrático pues prever que la vacante del empleo de personero debe cubrirse con quien ocupe el primer puesto de la lista implica omitir la deliberación y el proceso de participación ciudadana que merece una elección de tal naturaleza.
De otro lado, estimaron transgredido el principio de autonomía de las entidades territoriales, aspecto frente al cual argumentaron que se presentó un vaciamiento de las competencias constitucionalmente atribuidas a los concejos territoriales en la elección de servidores públicos que no son de carrera.
La censura que en ese sentido formularon los señores José Ignacio Arango Bernal y otro debe resolverse en forma desfavorable toda vez que ya fue objeto de pronunciamiento por la Corte Constitucional en la citada sentencia C-105 de 2013, en la que se concluyó que el hecho de que los personeros municipales fuesen elegidos «[…] previo concurso público de méritos […]» no transgrede los principios constitucionales antedichos.
Al ser el concurso público de méritos que regulan los actos demandados un desarrollo de aquel que consagra el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012, esta Corporación no puede más que someterse a la decisión judicial en la que se declaró la exequibilidad de dicha norma por los reproches señalados.
Así, el presunto desconocimiento del principio democrático se descartó en la sentencia C-105 de 2013 bajo el entendido de que afirmar que su respeto depende de que las corporaciones públicas puedan deliberar para decidir discrecional y libremente a la persona que debe ocupar el cargo de personero municipal porque sus miembros representan y actúan en nombre de la voluntad general, parte de una noción restringida de aquel principio que olvida que el concurso de méritos materializa los postulados de la democracia participativa y de la sustancial.
La primera de ellas se garantiza al permitir que cualquier persona que cumpla con los requisitos para el ejercicio del cargo haga parte del respectivo proceso de selección, al igual que con la consagración de mecanismos que efectivicen la publicidad y transparencia de aquel, a efectos de que la ciudadanía pueda realizar el seguimiento y control respectivo. De otro lado, que el sistema de provisión de los personeros municipales sea el concurso público realiza la democracia sustantiva pues así se asegura el respecto por derechos fundamentales como la igualdad, la participación en la función pública y el debido proceso.
Ahora bien, en lo que se refiere al cargo de nulidad que estudió la Corte Constitucional en aquella sentencia por violación del principio de autonomía de las entidades territoriales, es preciso señalar que se encontró probado en la medida en que el texto original del artículo 35 de la citada Ley 1551 de 2012 le asignó la realización del concurso público de méritos a la Procuraduría General de la Nación.
El máximo juez constitucional concluyó que de esta forma se vulneraba el derecho consagrado en el artículo 187, conforme con el cual debe respetarse el ejercicio de las competencias que le correspondan a las entidades territoriales, conclusión a la que llegó luego de aplicar el test de vaciamiento de competencias.
Sobre el particular, consideró que, por vía legal, se había trasladado la etapa fundamental del proceso de selección de personeros municipales a una entidad del orden nacional como lo es la Procuraduría General de la Nación, a pesar de que constitucionalmente se asignó dicha atribución a los concejos municipales. Además, precisó que esa transferencia de funciones afectaba seriamente el objeto institucional de dichas corporaciones públicas[76].
Con base en estos argumentos, la Corte Constitucional sostuvo que, precisamente a efectos de respetar el principio de autonomía de las entidades territoriales, la responsabilidad de dirigir y conducir los concursos públicos de méritos para la elección de personero municipal debía ser ejercida por los concejos municipales y no por el Ministerio Público, razón por la cual decidió declarar la inexequibilidad de la expresión «[…] que realizará la Procuraduría General de la Nación […]», contenida inicialmente en el Inciso 1, y de los incisos 2, 4 y 5 del Artículo 35 de la Ley 1551 de 2012.

En conclusión, los artículos 4 del Decreto 2485 de 2014 y el 2.2.27.4 del Decreto 1083 de 2015 no desconocen el principio democrático ni el de autonomía de las entidades territoriales.

Decisión

Por lo anterior, la Subsección A denegará las pretensiones de la demanda consistentes, la principal, en que se declare totalmente nulo el Decreto 2485 de 2014 y parcialmente el Decreto 1083 de 2015 en lo que se refiere a su Título 27 (artículos 2.2.27.1 al 2.2.27.6) y la subsidiaria, referida a la nulidad de los artículos 4 del Decreto 2485 de 2014 y 2.2.27.4 del Decreto 1083 de 2015.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Denegar las pretensiones de las demandas instauradas por los señores David Alonso Roa Salguero en contra del Departamento Administrativo de la Función Pública y José Ignacio Arango Bernal en contra de esta última entidad y de la Nación, Ministerio del Interior, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático «Justicia Siglo XXI».

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

[1] Los procesos 11001-03-25-000-2015-01089-00 (4824-2015) y 11001-03-25-000-2016-00001-00 (0001-2016) fueron acumulados mediante auto del 15 de noviembre de 2016 (Ff. 88 y 89, cuaderno principal del expediente 4824-2015).

[2] Presentó la demanda en ejercicio del medio de control de nulidad por inconstitucionalidad consagrado en el artículo 135 del CPACA, sin embargo su trámite fue adecuado en auto del 15 de febrero de 2016 al de nulidad simple (Ff. 16-20, cuaderno principal del expediente 0001-2016).

[3] Radicado 11001-03-25-000-2016-00001-00 (expediente 0001-2016).

[4] Radicado 11001-03-25-000-2015-01089-00 (expediente 4824-2015).

[5] Ff. 8-37, cuaderno principal del expediente 4824-2015.

[6] Ff. 5-13, cuaderno principal del expediente 0001-2016.

[7] Ff. 68-74, cuaderno principal del expediente 4824-2015.

[8] Ff. 75-82, cuaderno principal del expediente 4824-2015.

[9] Ff. 30-36, cuaderno principal del expediente 0001-2016.

[10] Fue reconocido en el expediente como tercero interviniente en calidad de coadyuvante del demandante a través de auto del 27 de julio de 2017 (Ff. 103-105, cuaderno medidas cautelares).

[11] La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias; la relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo», porque es guía y ajuste de esta última. Hernández Gómez William, actualmente Consejero de Estado, Sección Segunda (2015). Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB.

[12] Ff. 127-129, cuaderno principal expediente 4824-2015.

[13] Ff. 123-126, cuaderno principal expediente 4824-2015.

[14] Ff. 130-135, cuaderno principal expediente 4824-2015.

[15] Artículo 5 de la Ley 909 de 2004.

[16] El artículo 21 inciso 1 de la Ley 909 de 2004 prevé que «[…] Los empleos de carrera administrativa se proveerán en período de prueba o en ascenso con las personas que hayan sido seleccionadas mediante el sistema de mérito, según lo establecido en el Título V de esta ley […]».

[17] Respecto de esta etapa del proceso de selección, el numeral 5 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 señala lo siguiente: «[…] Período de prueba. La persona no inscrita en carrera administrativa que haya sido seleccionada por concurso será nombrada en período de prueba, por el término de

seis (6) meses, al final de los cuales le será evaluado el desempeño, de acuerdo con lo previsto en el reglamento. Aprobado dicho período al obtener evaluación satisfactoria el empleado adquiere los derechos de la carrera, los que deberán ser declarados mediante la inscripción en el Registro Público de la Carrera Administrativa. De no obtener calificación satisfactoria del período de prueba, el nombramiento del empleado será declarado insubsistente. El empleado inscrito en el Registro Público de Carrera Administrativa que supere un concurso será nombrado en período de prueba, al final del cual se le actualizará su inscripción en el Registro Público, si obtiene calificación satisfactoria en la evaluación del desempeño laboral. En caso contrario, regresará al empleo que venía desempeñando antes del concurso y conserva su inscripción en la carrera administrativa. Mientras se produce la calificación del período de prueba, el cargo del cual era titular el empleado ascendido podrá ser provisto por encargo o mediante nombramiento provisional […]».

[18] Además de aquellos que expresamente la Constitución ha identificado como tales (189-1; 189-2; 189-13; 266; 305-5), son de libre nombramiento y remoción los empleos que así defina el legislador atendiendo a criterios como (i) la confianza cualificada que requiere el desempeño de las funciones asignadas; (ii) un contenido funcional del empleo que se traduzca en responsabilidades de dirección, conducción y orientación institucional y (iii) la ubicación del cargo en el nivel jerárquico de la respectiva entidad. Al respecto puede consultarse el artículo 5 la Ley 909 de 2004.

[19] El artículo 21 inciso 2 de la Ley 909 de 2004 señala que «[…] Los empleos de libre nombramiento y remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento establecido en esta ley […]».

[20] El ordenamiento jurídico se vale de dos mecanismos para establecer los empleos públicos que corresponden a esta modalidad. El primero, que integra los criterios orgánico y funcional, se encuentra descrito en el inciso 1.º del artículo 5 del Decreto 3135 de 1968, con apoyo en el cual es viable afirmar que son trabajadores oficiales las personas que presten servicios de construcción y sostenimiento de obras públicas en los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y establecimientos públicos. El segundo responde a la libertad de configuración del legislador cuando dispone que las personas que presten sus servicios a determinadas entidades (Empresas industriales y comerciales del Estado, entes universitarios autónomos, empresas de servicios públicos domiciliarios; corporaciones autónomas regionales; empresas sociales del Estado) ostenten la condición de trabajadores oficiales.

[21] Artículo 21 de la Ley 909 de 2004.

[22] Sentencia C-288 del 20 de mayo de 2014.

[23] Es importante anotar que a pesar de que los empleos de elección popular están llamados a ejercerse durante un lapso definido, éstos constituyen una categoría diferente de la de empleo de periodo fijo, lo que denota la imprecisión en la que incurrió el legislador en el artículo 5 de la Ley 909 de 2004 al consagrar esta tipología de cargos.

[24] El mérito es un principio transversal a la Constitución de 1991. El hecho de que las calidades intelectuales, personales, académicas y laborales aparezcan como criterios esenciales en la provisión de los empleos públicos, juega tanto a favor de los trabajadores como en beneficio del Estado, último que de esta forma logra atender de la mejor manera las necesidades del servicio y los intereses de la comunidad.

[25] Al respecto, la sentencia C-105 de 2013 (expediente D-9237 y D-9238) señaló que «[…] la obligatoriedad de este sistema en los cargos de carrera no excluye su utilización en aquellos que no tienen este carácter. Por el contrario, como según el texto constitucional el concurso es la regla general, las excepciones que se establezcan en el derecho positivo deben estar respaldadas y justificadas en los principios y fines del propio ordenamiento constitucional. En segundo lugar, la Carta Política no solo avala este tipo de procedimiento para la elección de funcionarios de libre nombramiento y remoción y de los que se encuentran sometidos a un período fijo (como los personeros), sino que, además, sus finalidades justifican su aplicación […]»

[26] En estos casos la provisión compete a una autoridad administrativa de representación popular, como el presidente de la República, los gobernadores, los alcaldes, las asambleas departamentales y los concejos distritales o municipales.
[27] Esta Corporación tuvo la oportunidad de pronunciarse recientemente sobre la materia al conocer de la demanda interpuesta en contra de los Acuerdos 001 y 002 de 2019, expedidos por los presidentes de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, a efectos de reglamentar el concurso de méritos para la elección del registrador nacional del estado civil. Así, en sentencia del 28 de octubre de 2019 (radicado 11001031500020190048800, expediente 3641-2019), esta Subsección destacó que el proceso de selección previsto en el caso de aquel funcionario es un verdadero concurso público de méritos. Además, indicó que los artículos 126 y 266 de la Constitución Política deben interpretarse armónicamente en el entendido de que los principios de transparencia, publicidad, participación ciudadana y equidad de género que consagra el primero de tales preceptos para las convocatorias públicas de los funcionarios elegidos por corporaciones públicas, al ser principios constitucionales, también resultan aplicables al proceso de selección del registrador nacional.
[28] Sobre las diversas modalidades bajo las cuales puede llevarse a cabo un proceso de selección, la Corte Constitucional precisó lo siguiente en la sentencia C-123 de 2013 (expediente D-9243): «[…] algunos procesos de selección se valen de medios distintos del concurso para establecer las condiciones de los postulados al ejercicio de cargos públicos. Surge de lo anterior que los procesos de selección entre varios aspirantes son de variada índole, no obstante lo cual las distintas vías conducentes a escoger a quienes han de acceder al desempeño de cargos públicos tienen un común denominador, cual es el propósito de asegurar que finalmente resulte seleccionado el candidato que, en concurrencia con los demás y habiéndose sometido al mismo proceso de selección, haya demostrado poseer las mejores condiciones, atendidos los requerimientos del cargo al que se aspire […]».
[29] Así lo establece el artículo 27 de la Ley 909 de 2004 cuando regula el concurso público de méritos como mecanismo de provisión de los empleos públicos de carrera.
[30]**Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.**
[31] Según el numeral 1 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 «[…] es norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los participantes […]».
[32] El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 dispone que «[…] tiene como objetivo atraer e inscribir el mayor número de aspirantes que reúnan los requisitos para el desempeño de los empleos objeto del concurso […]».
[33] Artículo 31, numeral 3 de la Ley 909 de 2004.
[34] Artículo 31, numeral 4 de la Ley 909 de 2004.
[35] Artículo 31, numeral 5 de la Ley 909 de 2004.
[36] Corte constitucional, sentencia T-040-1995, expediente D-652.
[37] Corte constitucional, sentencia T-610-2017, expediente T-6177660.
[38] El inciso en comento prevé que «[…] Salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley […]».
[39] Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil; expediente 2274.
[40] Debe entenderse que dicho concepto comprende tanto a los servidores públicos como a los particulares investidos de funciones administrativas.
[41] ARTICULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
[42] ARTICULO 6. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. (esto es legalidad formal).
[43] ARTICULO 121. Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley.
[44] ARTICULO 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente …
[45] ARTICULO 123. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.
Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento…
[46] ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.
[47] Corte Constitucional, sentencia C-014 del 21 de enero de 1993.
[48] Artículo 114 y 150, numerales 1 y 2 de la Constitución Política.
[49] La norma superior ha dispuesto la existencia de reserva de ley en materia de derechos fundamentales, administración de justicia, servicios públicos, organización de la administración pública, impuestos, entre otros.
[50] En su libro «Lecciones de derecho administrativo», el profesor Luciano Parejo Alfonso define la reserva de ley como una «[…] técnica de delimitación de ámbitos materiales a favor de los órganos con competencia constitucional para dictar Leyes, de tal suerte que la regulación de dichos ámbitos debe producirse en primera instancia, mediante Leyes en sentido formal o, en todo caso, y con alguna limitación, por normas que, aún emanadas del Gobierno correspondiente, tienen rango y fuerza de ley […]» (Editoriales: Tirant lo Blanch y Universidad Externado de Colombia; tercera edición; Bogotá; 2010; p. 96).
[51] Es importante anotar que el numeral 10 del artículo 150 superior no incluye expresamente las leyes marco como uno de los supuestos en los que aplica la cláusula de reserva de ley, en su lugar, se contempla la prohibición de conferir facultades extraordinarias al Gobierno para expedir las leyes de que trata el numeral 20 de la misma norma, esto es, las que se ocupan de la creación de los servicios administrativos y técnicos de las Cámaras. No obstante lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha aclarado que la remisión que hace el numeral 10 al 20 del artículo 150 de la Constitución es producto de un lamentable descuido pues en la votación final de la norma se retiró el numera 15, de manera que el numeral relativo a las leyes marco, que antes era el 20, pasó a ser el 19.
[52] Luciano Parejo Alfonso; «Lecciones de derecho administrativo»; Editoriales: Tirant lo Blanch y Universidad Externado de Colombia; tercera edición; Bogotá; 2010; pp. 96-97.
[53] Sentencia C-219 del 19 de abril de 2017, Corte Constitucional, expediente D-11662.
[54] Sobre la importancia de no predicar la aplicación generalizada de la reserva de ley, el profesor Héctor Santaella Quintero señala que «[…] Solo un examen detallado del texto constitucional permite determinar con precisión qué asuntos han sido reservados. Dicho análisis permitirá distinguir tanto las reservas de ley formal como de ley material y las reservas de ley ordinaria de las

reservas de leyes especiales o cualificadas […]». *Del principio de legalidad al principio de juridicidad: implicaciones para la potestad normativa de la administración de una transición constitucionalmente impuesta;* En «La constitucionalización del derecho administrativo: XV Jornadas Internacionales de derecho administrativo»; Universidad Externado de Colombia; 2014; Bogotá; p. 111. En esa misma línea, en la nota al pie número 96 de dicho artículo indica lo siguiente: «[…] ¿Para qué reservar algo en particular si la totalidad está reservada Por esto no tiene sentido la equiparación que a veces se observa entre la cláusula general del parlamento y la reserva de ley. Como señala MERKL., "el sentido de la reserva legal es que la forma legal se impone para la formulación del derecho de un cierto contenido, pero no para todo el derecho".
[55] Algunos ejemplos son la Ley 1751 de 2015 (derecho a la salud); Ley 1755 de 2015 (derecho de petición); Ley 1618 de 2013 (derechos de las personas con discapacidad).
[56] Ley 270 de 1996, Estatutaria de administración de justicia.
[57] Ley 130 de 1994, Por la cual se dicta el estatuto básico de los partidos y movimientos políticos, se dictan normas sobre su financiación y la de las campañas electorales y se dictan otras disposiciones. Al igual que la Ley 1475 de 2011, por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones.
[58] Ley 1909 de 2018, por medio de la cual se adopta el estatuto de la oposición política y algunos derechos a las organizaciones políticas independientes.
[59] Ley 134 de 1994, por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana.
[60] Ley 137 de 1994, Por la cual se reglamentan los Estados de Excepción en Colombia.
[61] Es aquella que comprende los valores, principios y derechos fundamentales previstos en el texto superior.
[62] La Constitución española adopta un criterio semejante cuando dispone en su artículo 53 que «1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a) […]» (subraya la Sala).
[63] Es aquella en la cual se establece, entre otras, la estructura organizacional del Estado, al igual que las competencias y potestades básicas otorgadas a sus diferentes órganos y autoridades.
[64] ARTICULO 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
[65] Tal es el caso, a manera de ejemplo, del régimen de explotación de los recursos no renovables que prevé el artículo 360 superior, de conformidad con el cual «[…] La explotación de un recurso natural no renovable causará, a favor del Estado, una contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte. La ley determinará las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables. Mediante otra ley, a iniciativa del Gobierno, la ley determinará la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios […]».
[66] Sentencia C-037 del 26 de enero de 2000, Corte Constitucional, expediente D-2441.
[67] Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 21 de octubre de 2010, Radicación 11001-03-25-000-2005-00125-00(5242-05), Actor: Asociación Antioqueña de Empresas Sociales del Estado.

[68] Sentencia del 3 de diciembre de 2007, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2003-00014-01, expediente 24715.
[69] En el caso de los llamados reglamentos «constitucionales autónomos» debido a que es la propia Constitución la que directamente atribuye la competencia o potestad regulatoria, no puede predicarse algún tipo de sujeción a la ley. Por ello se ha sostenido que la relación entre dichos actos administrativos y la ley, en lugar de estar sometida a una jerarquía, se caracteriza por un criterio de distribución de competencias normativas que ha efectuado la propia carta política. Por su parte, en el caso de los decretos que reglamentan una ley marco, se predicará subordinación entre estos y la ley que desarrollan, pero no respecto de las demás leyes, con las cuales existirá una relación horizontal en la escala jerárquica.
[70] Artículo 6.º de la Constitución Política.
[71] Artículo 2.º *ibidem*.
[72] Corte Constitucional, sentencia C-089 de 1994; expediente.
[73] Sobre el particular, puede consultarse la sentencia C-105 de 2013, expedientes D-9237 y D-9238.
[74] Corte Constitucional, sentencia C-554 de 2007, expediente D-6677.
[75] Al respecto puede consultarse la sentencia C-105 de 2013.
[76] En segundo lugar, este traslado funcional afecta el objeto institucional de los concejos. En efecto, estos órganos tienen tres tipos de roles: de un lado, cumplen funciones de tipo normativo, cuando regulan materias para el funcionamiento de los municipios y distritos, como el uso del suelo, la defensa del patrimonio ecológico y cultural, la prestación de los servicios o la estructura de la administración, entre otras; por otro lado, desempeñan funciones de índole política, relacionadas con el control de la administración municipal o distrital; y finalmente, funciones relacionadas con la designación de servidores municipales o distritales, en el entendido de que uno de los componentes fundamentales de la autonomía de las entidades territoriales radica, justamente, en el derecho a gobernarse por autoridades propias, y a que el control de la conducta oficial y la promoción de los derechos humanos, sea ejercido por órganos del mismo nivel territorial.

RV: CONTESTACIÓN DE DEMANDA , PROCESO 2021 - 00272-00 - PERDIDA DE ENVESTIDURA

Secretaria General Tribunal Administrativo - Seccional Villavicencio
<sgtadmvcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mar 10/08/2021 15:13

Para: Gina Paola Rodriguez Gomez <grodrigg@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Iser Leonardo Tejeiro Quintero <itejeirq@cendoj.ramajudicial.gov.co>

3 archivos adjuntos (6 MB)

contestacion DEMANDA pdf .pdf; FALLO DE IMPUGNACION DE TUTELA DE PATRICIA MORERA - demanda.pdf; ACTA No 134 DICIEMBRE 18- 2020 - pagina 25.PDF;

De: Gildardo Santos Chaparro <santoschaparro1220@hotmail.com>
Enviado: martes, 10 de agosto de 2021 3:02 p. m.
Para: Secretaria General Tribunal Administrativo - Seccional Villavicencio <sgtadmvcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: CONTESTACIÓN DE DEMANDA , PROCESO 2021 - 00272-00 - PERDIDA DE ENVESTIDURA

BUENAS TARDES, ADJUNTO AL PRESENTE CORREO, ESCRITO DE CONTESTACION DE DEMANDA Y SUS ANEXOS, ENCONTRANDOME EN EL TÉRMINO DE CONTESTACION DE LA MISMA COFORME A LA LEY 2080 DE 2021.

Acacias, 10 de Agosto de 2021.

Honorable Magistrada
NOHRA EUGENIA GALEANO PARRA
Tribunal Administrativo Mixto de Villavicencio
E. S. D.

Asunto: **Contestación Demanda Perdida de Investidura**.
Radicado: 50001-23-33-000-2021-00272-00.
Demandantes: Wilmer Orlando Carvajal Olaya, Orlando Granados Acevedo, Héctor Reyes Rativa y Jhonny Andrés Bastos Hernández.
Demandado: Gildardo Santos Chaparro

Respetada Magistrada,

GILDARDO SANTOS CHAPARRO, mayor de edad, domiciliado y residente en Acacías, concejal en ejercicio, identificado con la cédula de ciudadanía Nº. 86052242 de Villavicencio, obrando en representación propia, procedo a contestar la demanda formulada ante usted por los señores demandantes, de la siguiente manera.

A LOS HECHOS

1. Es cierto.
2. Parcialmente Cierto, teniendo en cuenta que el proceso de elección de la secretaria para el año 2021, dentro de los considerandos conforme a nuestro reglamento interno y la constitución, inició como este corresponde: bajo una **CONVOCATORIA PUBLICA,** y no un concurso de méritos, como pretenden señalar, reglas de juego que al parecer trataron de cambiar en el transcurso del proceso con resoluciones modificatorias.
3. Parcialmente Cierto, pues aún cuando es verdad que la resolución N° 73 modificó la N°48, la misma se motivó en el fallo que profirió este alto tribunal en el Proceso de Nulidad Electoral N° 50001-23-33-000-2020-00028-00, Magistrada Ponente NELCY VARGAS TOVAR, fallo en el cual se declaró la Nulidad electoral y se tomaron por parte de la mesa directiva medidas para adecuar la elección de la secretaria al procedimiento que en la providencia se menciona, el cual es el contenido en el artículo 126 constitucional e incluso invocó la ley 1904 de 2018, por analogía, es decir un proceso de elección **POR CONVOCATORIA PUBLICA**, lo que si es cierto es que en la resolución 73 nuevamente parte de los hoy demandantes a pesar de citar la norma antes

mencionada, vuelven a intentar llevarnos en uno de los apartes a adelantar un proceso de concurso de méritos, cuando aquella no cabe para el caso concreto.

4. Es cierto.
5. Es cierto.
6. Es parcialmente cierto, la mesa directiva en efecto si nombró una comisión accidental, más el tráfico de influencia que aquí manifiestan probado, es un simple supuesto que no se prueba de ninguna manera, una vez que no existió tal, como lo que aducen los demandantes.
7. Es cierto.
8. Es totalmente falso, una mera especulación y una afirmación totalmente carente de soporte jurídico al decir que 8 concejales calificamos a 4 participantes con 1 y a una sola persona con 100 buscando efectuar algún hecho irregular. En mi caso la decisión de calificación a la participante Patricia Morera Anaya, obedeció en principio a que dicha señora en la entrevista expuso fue una condición particular de su vida privada y la de su familia, lo que a mi parecer no consideré profesional; mientras que mi calificación por la participante Katherine Arenas, obedeció a sus respuestas con precisión, resueltas en la entrevista, el carácter que dejó denotar, su seguridad y capacidad para el desempeño del cargo, por lo demás las mismas reglas de la convocatoria permitían que se calificara de 1 a 100, bajo el criterio de percepción personal.

   En cuanto al por qué no llenamos el campo de observaciones, sencillamente porque el entonces presidente manifestó en la sesión que el hacerlo era optativo, en lo particular no vi la necesidad de hacerlo y como no existía la obligación, simplemente no lo hice, es de aclarar su señoría, frente a algunas de las afirmaciones malintencionadas en la demanda lo siguiente:

   - No es cierto que los 8 demandados hayamos votado por 4 personas con 1 o que las calificaciones sean calcadas de alguien.
   - Al momento de calificar, el entonces presidente, hoy demandante manifestó que debíamos votar de 1 a 100, según el criterio individual de cada concejal, lo cual realicé como lo enuncié.
   - No existían criterios dados por las resoluciones o por la mesa directiva para decidir la calificación, por lo tanto no se puede decir que falté a alguno de ellos.
   - No era obligatorio llenar el campo de observaciones, por lo cual no lo hice.
   - De las calificaciones efectuadas se tenía la posibilidad de interponer recurso, el cual solamente fue presentado por la señora Katherine Arenas, es decir las demás aceptaron el resultado de las calificaciones de la entrevista.

- NO CONOCIA NI HABIA TENIDO TRATO ALGUNO CON LA SEÑORITA KATHERINE ARENAS.
- Katherine Arenas no aceptó el cargo, por lo que ni siquiera ella obtuvo beneficio alguno, como lo es el laboral.

9. Es cierto.
10. No es cierto que hubiese algún tipo de confabulación, ello no existe más allá del imaginario de los demandantes, en mi caso, mi calificación en la entrevista obedeció a mi criterio personal, y de esta misma forma ejercí mi derecho al voto, de manera personal y secreta, por quien me produjo mayor convencimiento, sobre las cualidades de quien debería ocupar ese cargo, en lo personal lo que más me llamó la atención de la participante Katherine Arenas, es que era profesional en derecho (carrera que estoy culminando también) lo que me pareció muy atractivo y útil para la corporación. Ahora su señoría, si era o no obligatorio votar por la Señora Patricia Morera, es de tener presente que para los casos de convocatorias públicas no es obligación que quien obtenga el mayor puntaje en las distintas etapas sea quien resulte electa, como lo ha manifestado el Honorable Consejo de Estado, en el Concepto Sala de Consulta C.E. 2274 de 2015 Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=69373 .

11. Es falso, los demandantes aseguran que yo , Gildardo santos Chaparro, manifesté que votaría por la señora Patricia Morera Anaya, cuando yo solo pronuncié el nombre de dicha señora (esto por cierta presión que se sentía en el recinto, ejercida por algunos compañeros, en torno al apoyo hacia dicha participante) pero pronuncié su nombre sin decir en ningún momento que votaría por ella (como lo puede corroborar el acta de ese día, que trascribe tal cual lo expresado por mi), y en cuanto a los 7 votos marcados por quienes nos demandan, si deja ver algún tipo de acuerdo sobre el respaldo a la señora Patricia Morera Anaya, así que, si de acuerdos para favorecer a alguien se trata, no hay uno más demostrado en este proceso, que el hecho de que 7 concejales además de expresar públicamente que votarían por una misma aspirante, también hayan decidido los mismos 7, marcar el voto por dicha aspirante.
12. Es parcialmente cierto, el sentido del fallo de primera instancia no fue por el voto secreto o los votos marcados, sino porque la señora juez le dio interpretación de concurso a una convocatoria, es claro y notorio que los demandados dentro de su escrito se han dedicado a contar verdades a medias lo cual nos deja inferir su mala intención, pues aún cuando es cierto que la señora Patricia Morera, impetró una acción constitucional que le concedió el amparo en primera instancia, al conocer el superior jerárquico la

misma en segunda instancia, el funcionario judicial revocó la primera decisión, los demandantes no pueden probar la causal invocada por una única razón ,y es que la conducta no existió, reitero que no conocía a la señorita Katherine Arenas, ni tuve contacto alguno con ella en el transcurso del proceso de la convocatoria, además dicha participante ni siquiera aceptó el cargo, por tanto se cae por su propio peso el tal tráfico de influencias, al que hacen alusión.

A LAS PRETENSIONES

1. Negar por improcedentes e inexistencia de la conducta bajo la cual se solicita la perdida de investidura, toda vez que la elección de la secretaria es un derecho y un deber que me asiste como concejal y no existe elemento alguno que permita probar lo afirmado por los demandantes.

2. Negar por improcedente e inexistencia del hecho en los mismos términos que manifesté anteriormente.

PRUEBAS

1. Acta N°5 por medio de la cual se dio a conocer la lista de elegibles resultante de la **CONVOCATORIA PÚBLICA** para la elección de la secretaria.
2. Sentencia Proceso de Nulidad Electoral N° 50001-23-33-000-2020-00028-00, Magistrada Ponente **NELCY VARGAS TOVAR**
3. **TUTELA IMPUGNACIÓN** (revocan primera instancia)
4. **ACTA DEL DIA 18 DE DICEMBRE (**pagina 25**)**

ANEXOS

1. Los referenciados dentro del acepte de pruebas.

EXCEPCIONES

1. Excepción genérica Ruego a la señora magistrada, decretar de oficio, cualquier excepción que advierta, o que resulte probada dentro del proceso. Ha hecho carrera en la doctrina y principalmente en la jurisprudencia, al amparo de la reivindicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, que las circunstancias fácticas constitutivas de “excepción” que se pruebe dentro del trámite procesal, se declararan en la respectiva sentencia, por lo que se eleva esta respetuosa solicitud, en el ejercicio de mi defensa técnica.

EXCEPCIONES DE MERITO O DE FONDO

1. **INEXISTENCIA DE LA CONDUCTA:** El Honorable Consejo de Estado ha manifestado que para que se configure la conducta de TRAFICO DE INFLUENCIAS DEBIDAMENTE COMPROBADO, deben presentarse elementos como lo son:

    A. Que se trate de persona que ostente la calidad de Congresista o concejal: para el caso en concreto, efectivamente soy concejal del Municipio de Acacías, electo para el periodo 2020-2023.
    B. Que se invoque esa calidad o condición: ¿ante quien, en donde y de qué manera según los demandantes se presentó dicha invocación?, ello es imposible de probar por la única razón de que ello jamás se presentó, siempre me he caracterizado por mi apego a la constitución, la ley y nuestro reglamento interno, así como la independencia de cada una de mis decisiones, por lo cual nunca he pretendido influenciar en alguna persona por mi calidad de concejal y mucho menos permito que traten de ejercer cualquier presión sobre mis decisiones.
    C. Que se reciba, haga dar o prometer para sí o para un tercero dinero o dádiva, con las salvedades o excepciones contempladas en la Ley 5ª de 1992, en cuanto a las gestiones de los congresistas en favor de sus regiones: ¿Cuál fue la dadiva o el dinero, cual fue el beneficio que según los demandantes recibí o me hice prometer o que persona lo recibió o se lo prometieron?, igualmente esta condición es imposible de probarse puesto que nunca he ejercido mi investidura o desplegado cualquier tipo de acción que contravenga la ley a cambio de un beneficio indebido, por lo cual insto a que la contraparte pruebe sus afirmaciones y no se dediquen a pretender instrumentalizar el aparato judicial basado en suposiciones y conjeturas sin ningún acervo probatorio que respalden sus falsas acusaciones, solo por diferencias políticas que puedan haber.
    D. Que sea con el fin de obtener beneficio de un servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer: nuevamente cuestiono ¿Cuál es el beneficio que según los demandantes obtuve? Siendo reiterativo que tal beneficio no existe, es producto de la imaginación.

2. **CUMPLIMIENTO DE UN DEBER CONSTITUCIONAL Y LEGAL:** contrario a lo que afirman los mismos demandantes que la elección de la secretaria se adelantó conforme al artículo 125 constitucional el cual crea los concursos de mérito, es pertinente manifestar lo siguiente:

    A. las resoluciones desde la 48 hasta la 77 desarrollan el artículo 126 constitucional tanto así que cada una de ellas despliega la elección

por **CONVOCATORIA PUBLICA** desde sus considerandos siendo usada de manera extraña en la resolución N°48 por única vez un método de elección distinto como lo es el concurso público de méritos; que en la resolución N°73 que modifica la anterior es consecuencia directa del fallo judicial proferido por este mismo Tribunal en el Proceso de Nulidad Electoral N° 50001-23-33-000-2020-00028-00, Magistrada Ponente **NELCY VARGAS TOVAR**, y en la resolución, dos de los que hoy son demandantes eran Presidente y Primer Vicepresidente, en esta hacen mención directa del artículo 126 constitucional y la ley 1904 de 2018, la cual rige la **Convocatoria Pública** para la elección de los Contralores, así mismo en la resolución N°77 que sacaron un día antes de la elección reiteran que la elección de la secretaria general del concejo **se deberá llevar a cabo mediante una CONVOCATORIA PUBLICA** y que por no estar reglada como concurso debe regirse como ya lo mencioné, ¿cómo es que hoy día quienes firmaron esas resoluciones y que tenían la responsabilidad del proceso de elección dicen que se debió elegir a quien obtuvo las mejores calificaciones por tratarse de un concurso de méritos?, es incomprensible que se pretenda desconocer la realidad jurídica, ahora si se trataba de un concurso de méritos, ¿porque el entonces Presidente, permitió que hubiese votación?, en los concursos de mérito no hay esa discrecionalidad, pues con los resultados el presidente de la corporación procede a declarar quien fue el ganador según hayan obtenido las distintas calificaciones, no hay oportunidad de votar por ningún participante, por eso me sorprende por completo esta demanda y los argumentos aducidos.

B. Elección por CONVOCATORIA PUBLICA: El Congreso de la Republica mediante el acto legislativo 02 de 2015 modifico el artículo 126 de la Constitución en el sentido de crear para los funcionarios de elección de las corporaciones que no tienen concurso reglado deberá efectuarse la misma mediante una CONVOCATORIA PUBLICA, al respecto de las diferencias entre una y otra el Honorable Concejo de Estado, se ha pronunciado en distintas oportunidades mencionando las similitudes y diferencias entre una y otra, tal como lo hizo en la sentencia de única instancia 11001-03-25-000-2016-00001-00 Consejero Ponente WILLIAM HERNANDEZ GOMEZ, (http://www.suin-juriscol.gov.co/clp/contenidos.dll/ConsejoEstado/30038693?fn=document-frame.htm$f=templates$3.0) en la cual mencionan que:

"…El análisis que antecede permite concluir que en los procesos que se adelantan bajo la modalidad del concurso público, la escogencia del participante atiende a la aplicación

rigurosa y exclusiva del principio del mérito, sin que pueda existir otro parámetro al cual obedezca tal decisión.

De otro lado, aparece el sistema de convocatoria pública como un proceso de selección que involucra instrumentos de diferente naturaleza**. Así, integra un componente meritocrático al disponer la aplicación de pruebas como una de sus etapas, pero también contempla uno de orden discrecional porque, a diferencia de lo que sucede en el concurso público, los resultados obtenidos no son concluyentes de la elección. Esta última se realiza por un órgano colegiado mediante la votación que hagan sus integrantes de una lista de elegibles cuyo orden no condiciona la decisión.**

Lo anterior evidencia que, aunque este procedimiento prevé una primera fase clasificatoria en la que se aplican herramientas que responden exclusivamente al principio de mérito, como lo son las pruebas que permiten la conformación de aquel listado, en la elección final **hay un importante margen de libertad para el nominador que le da la posibilidad de valorar y escoger entre los candidatos.**

La aplicación de la convocatoria pública como modalidad de proceso de selección se contempló para la provisión de los siguientes cargos:

- **Los servidores públicos que deban ser escogidos por las corporaciones públicas (Artículo 126 C.P. modificado mediante el Acto Legislativo 2 de 2015, artículo 2[38]).**

- Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, quienes son elegidos por la respectiva Corporación, previa audiencia pública, de lista de diez elegibles enviada por el Consejo Superior de la Judicatura, tras una convocatoria pública reglada por la ley (Artículo 231 C.P.).

- Los siete magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial son escogidos por el Congreso en pleno, así: cuatro de ellos de ternas enviadas por el Consejo Superior de la Judicatura y los tres restantes, de ternas enviadas por el presidente de la República, en ambos casos previa convocatoria pública reglada (Artículo 257A C.P.).

- El contralor general de la República es elegido por el Congreso en pleno de lista de elegibles conformada por convocatoria pública con base en lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución (Artículo 267 C.P.).

- Los Contralores departamentales, distritales y municipales, quienes son elegidos por las asambleas departamentales, concejos municipales y distritales, de terna conformada por quienes obtienen los mayores puntajes en convocatoria pública realizada conforme a la ley (Artículo 272 C.P.).

En concepto del 10 de noviembre de 2015[39], la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación se ocupó de estudiar los antecedentes del Acto Legislativo 02 de 2015. Dicho pronunciamiento explicó las razones por las cuales, en el caso de los servidores públicos electos por corporaciones públicas, la reforma constitucional en cuestión optó por consagrar un sistema de convocatoria pública, en lugar de un concurso público de méritos. Sobre el particular señaló la referida Sala:

> […] Se entendió que si se adoptaba un concurso público de méritos como tal, se obligaba al organismo nominador a nombrar de acuerdo con el orden de clasificación de los aspirantes, lo que se consideró como una reducción indebida de la autonomía de las corporaciones públicas. Por tanto, se dijo, era necesario acudir a un sistema transparente, público, objetivo y basado en el mérito, pero que fuera distinto al concurso público en cuanto permitiera al organismo elector escoger entre los varios candidatos que superaran la etapa de selección […]

En relación con las diferencias existentes entre estos procesos de selección, el referido concepto sostuvo que la convocatoria pública «[…] **comparte en lo sustancial los elementos propios del concurso público de méritos, salvo por el hecho de que no existe un orden de elegibilidad dentro de la lista de seleccionados** […]».

De conformidad con lo señalado, la Sala concluye que, los procesos de selección que regula, por un lado, el artículo 125 superior y, por otro, los artículos 126, 231, 257A, 267 y 272 *ibidem* no resultan equiparables. Mientras que en los primeros, esto es, en los concursos públicos existe un orden obligatorio de escogencia entre los aspirantes que superan las respectivas pruebas según como se haya conformado la lista de elegibles, en las convocatorias públicas se conserva cierto grado de valoración que permite seleccionar a cualquiera que se encuentre en dicha lista, con independencia del puesto ocupado o el orden allí establecido.

Sin embargo, esto no significa que sean radicalmente opuestos. De hecho, en esencia, tanto la convocatoria pública como el concurso público de méritos son procesos de selección del empleo público que deben basarse en el respeto de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, celeridad, publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y mérito.

La Ley 909 de 2004 señaló en su artículo 2 que el mérito «[…] es un elemento sustantivo de los procesos de selección del personal que integra la función pública […]» y, seguidamente, dispuso que su aplicación puede ajustarse a los empleos públicos de libre nombramiento y remoción. Esto significa que todo empleo público que sea provisto mediante un proceso de selección o en virtud de la facultad discrecional consagrada para los cargos de libre nombramiento y remoción debe tener en cuenta la satisfacción del principio del mérito al momento de elegir a la persona que ha de ocuparlo.

La diferencia estará en la rigurosidad con la que, dependiendo de la forma de provisión del empleo, debe evaluarse el mérito…”

Conforme a lo manifestado por los Honorables Consejeros de Estado, en una elección regida por Convocatoria Publica **NO** es obligatorio que quien obtenga el mayor puntaje dentro de las pruebas sea elegida para el cargo, siendo que por el factor discrecional puede resultar cualquier persona que se encuentra dentro de la misma, por ello su señoría el argumento que supuestamente me puse de acuerdo con algún compañero para calificar en algún sentido y de esta manera elegir a alguien en el cargo de secretaria general de la corporación se cae por su propio peso, pues en las **CONVOCATORIAS PUBLICAS** ese no es un factor determinante,

en lo particular puedo asegurarle que mis actuaciones siempre se han tomado de manera particular según mi más íntima convicción de quien debe ocupar ese cargo sin tener en cuenta ningún otro factor, y siendo respetuoso de los conceptos de mis compañeros.

Finalmente, honorable magistrada, bajo el entendido que la pérdida de la investidura es una acción pública, que da origen a un proceso de carácter jurisdiccional y sancionatorio de propósito ético, con consecuencias políticas, en el sentido específico de quitar parte de los derechos políticos de los ciudadanos, que castiga la violación de un régimen especial creado para los congresistas y los miembros de las corporaciones públicas de elección popular, que tiene por fundamento la protección y la preservación del principio de representación y de la dignidad en el ejercicio del cargo que confiere el voto popular.

En el caso particular, donde pretende la parte demandante, se declare la pérdida de investidura del suscrito como Concejal del municipio de Acacias, sin siquiera existir prueba mínima, que este ciudadano, elegido popularmente, por los habitantes del municipio, valiéndose de dicha investidura, haya pretendido un tráfico de influencias, para que finalmente se eligiera a la señora Katherine Arenas, porque, como se acotó anteriormente, fue un proceso, que se surtió con el lleno de los requisitos legales, en donde cada uno de nosotros como concejales, luego de escuchar a las aspirantes, decidimos por mayoría, que cumplía con los requisitos y expectativas, para ser la secretaría general de esta colegiatura, sin más razones ni interés, que el poder contar con la persona que se consideró, por su perfil, por la forma como se desenvolvió en la entrevista, por sus conocimientos, que era quien más se acercaba a lo que se buscaba para este cargo.

Por lo anterior, Honorable Magistrada, enterado de su amplísimo conocimiento y manera de impartir justicia, solicito de forma respetuosa, al no comprobarse la existencia del tráfico de influencias por parte del suscrito, se proceda a **NEGAR** en su totalidad las pretensiones de la demanda, por carecer de certeza y de elementos probatorios.

NOTIFICACIONES El suscrito se notificará de las decisiones que se profieran en la dirección: santoschaparro1220@hotmail.com, y celular: 3204352371NOTIFICACIONES

El suscrito se notificará de las decisiones que se profieran en la dirección:

santoschaparro1220@hotmail.com, y celular: 3204352371

cordialmente,

__FIRMA ELÉCTRONICA__

GILDARDO SANTOS CHAPARRO

CC 8602242 de Villavicencio

ACTA No. 134
(diciembre 18 de 2020)

QUE TRATA DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS– META, CONFORME LO ESTABLECEN EL ARTICULO 8 DEL DECRETO 2796 DE 1994, LEYES 136 DE 1994, 617 DEL 2000 Y 1551 DE 2012. CONVOCADAS MEDIANTE DECRETO 235 DE DICIEMBRE 11 DE 2020. LA CUAL SE REALIZO EL DÍA VIERNES DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE 2020.

En Acacías siendo las nueve y quince (9:15) de la mañana del dieciocho (18) del mes de diciembre del año 2020, en el salón de sesiones del Honorable Concejo Municipal de Acacías –Meta, se reunieron sus integrantes bajo la presidencia del Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, y como secretaria general (e) la señora DIGNORY CLAVIJO ORTIZ

El presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, presenta un cordial saludo a los Concejales y a las demás personas que hacen presencia el dia de hoy, luego solicita a la secretaria general hacer el llamado a lista.

La secretaria general (e) DIGNORY CLAVIJO ORTIZ, procede a llamar a lista y verificar el quórum, así

CONCEJALES PRESENTES

LILIANA MARCELA BAQUERO TORRES
JHONNY ANDRES BASTO HERNANDEZ
WILMER ORLANDO CARVAJAL OLAYA
FARLEY CARVAJAL REY
ANDRES MAURICIO CHAVEZ QUEVEDO
ZULMA YOLIMA DIAZ DIAZ
JOSE JAIR ECHEVERRY OSPINA
JHONNY STEVENSON GIRALDO ARAGON
ORLANDO GRANADOS ACEVEDO
ARNOLD MAURICIO PINILLA TRIANA

VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS
HECTOR REYES RATIVA
LUIS CARLOS RICHAR RODRIGUEZ CORTES
GILDARDO SANTOS CHAPARRO
ALEXANDER VALERO

Hecho el llamado a lista con la asistencia de quince (15) Concejales, se le informa al presidente que hay quórum para deliberar y decidir.

El presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, solicita a la secretaria general dar lectura al orden del día propuesto así:

ORDEN DEL DÍA

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM.
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA.
3. RESPUESTA A RECLAMACIONES ELECCION Y POSESION DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS VIGENCIA 2021.
4. CONDECORACIONES
5. PROPOSICIONES Y VARIOS

DESARROLLO:

PRIMER PUNTO: LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUÓRUM: La secretaria general informa que se encuentran presentes los Concejales enunciados al inicio de la sesión, por lo que hay quórum para deliberar y decidir

SEGUNDO PUNTO: DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA. El presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO está abierta la discusión sobre el orden del dia.

Se le concede el uso de la palabra al Concejal FARLEY CARVAJAL REY saluda a los presentes, señor presidente queria antes de la discusión y los oficios presentados de las reclamaciones, se agregara un punto en el orden del día que figurara como revisión,

método de elección de secretaria general del Concejo y discusión de concepto jurídico, puesto que no tengo la claridad señor presidente como va ser el método de elección y para ello quisiera esbozar algunos conceptos que hemos consultado, solicito se haga la proposición y de manera nominal.

Hace uso de la palabra el presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, sigue abierta la discusión sobre el orden del día para incluir un punto nuevo en el orden del día.

El Concejal Presidente ORLANDO GRANADOS ACEVEDO solicita al Concejal FARLEY CARVAJAL como quedaría el punto.

El Concejal FARLEY CARVAJAL REY, revisión método elección secretaria general del Concejo y discusión de conceptos jurídicos.

Tiene el uso de la palabra el Concejal ALEXANDER VALERO, saluda a la comunidad presente. Presidente tengo la inquietud de que realmente dentro de las sesiones extraordinarias solamente se puede tocar para lo que fuimos citados y dentro de ello no está lo de las condecoraciones me pone eso a mí en duda porque solamente las extraordinarias dice solamente para lo que fuimos citados y aparece en el orden del día ese apunte.

Tiene el uso de la palabra el presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, le da el uso de la palabra a los Concejales que van a ser la condecoración.

Tiene el uso de la palabra el Concejal JHONNY STEVENSON GIRALDO ARAGON, buenos días a los presentes, a título personal considero que no estamos cometiendo ningún error puesto que la aprobación de esas condecoraciones fue aprobada en una plenaria acá lo único que se va ser es entregar unas condecoraciones ya aprobadas no veo que estemos haciendo algo para lo cual no nos hayan convocado simplemente vamos a hacer la entrega de unas condecoraciones que ya fueron aprobadas y revisadas por esta corporación pública esa es mi posición al respecto.

Se le concede el uso de la palabra al Concejal GILDARDO SANTOS CHAPARRO buenos días, dejar claridad porque queda en el ambiente entonces que el Concejo se está oponiendo a las condecoraciones no señor, las condecoraciones ya están aprobadas diferente es que se haga como se ha hecho en las otras condecoraciones que han hecho los compañeros, que el recinto se presta claro y lo tienen que llevar

acabo ahorita pero inmediatamente termine la sesión nuestra, que no quede dentro del orden del día, es solamente eso porque las extraordinarias son para temas especificos a que fuimos citados y no fuimos citados a entrega de condecoraciones es así de sencillo, entonces las condecoraciones se tienen que llevar a acabo inmediatamente terminemos el tema del orden del día y proposiciones y varios.

El presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO solicita al Concejal GILDARADO SANTOS como quedaría la proposición para la modificación, el Concejal Gildardo santos manifiesta terminada la sesión.

Tiene el uso de la palabra el Concejal presidente ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, entonces sigue abierta la discusión sobre el orden del día en el cual con la modificación presentada por el Concejal FARLEY CARVAJAL de incluir un tercer punto y el cuarto punto de elección pasaría el tercero a ser cuarto y el del Concejal FARLEY CARVAJAL pasa a ser tercero porque excluimos el punto cuarto de condecoraciones y esa como bien lo manifestó el Concejal GLDARDO SANTOS las condecoraciones ya están aprobadas por plenaria por unanimidad simplemente los reconocimientos se van a hacer una vez terminemos la sesión pasaremos al proceso de condecoraciones el orden del día quedaría así :

ORDEN DEL DÍA

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA
3. REVISIÓN MÉTODO DE ELECCIÓN SECRETARIA DEL CONCEJO Y DISCUSIÓN DE CONCEPTOS JURIDICOS.
4. RESPUESTA A RECLAMACIONES, ELECCION Y POSESIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS –META, VIGENCIA 2021.
5. PROPOSICIONES Y VARIOS

El presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, sigue abierta la discusión sobre el orden del día aviso que se va cerrar, queda cerrada, se abre la votación podemos votarla en bloque si alguien quiere votar negativo levanta la mano, está abierta la votación, aviso que se va cerrar, queda cerrada. Siendo aprobado.

Se le solicita a la secretaria general (e) continuar con el siguiente punto de orden del día

TERCER PUNTO: REVISION METODO ELECCION SECRETARIA DEL CONCEJO Y DISCUSION DE CONCEPTOS JURIDICOS. El presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, está abierta la discusión sobre el tercer punto.

Hace uso de la palabra el Concejal ANDRES MAURICIO CHAVEZ QUEVEDO, saluda a los presentes me voy a permitir leer que así es más fácil **Ref.**: *Observación Proceso de Convocatoria Pública Elección Secretaría General del Concejo. Cordial saludo, en mi calidad de Concejal designado por usted señor presidente en la comisión accidental de verificación de la convocatoria pública para la elección de la secretaría General del Concejo, debo manifestar que una vez realizadas los respectivos análisis del proceso adelantado, veo con preocupación que a la comisión no se les permitió ser parte de la etapa de la prueba de conocimiento, ni la oportunidad para revisar oportunamente la calificación de la entrevista realizada a las participantes, hechos estos que considero graves pues lo único que se nos autorizó como todos son testigos fue colocar una firma en la parte trasera de las respectivas calificaciones sin que se nos permitiera conocer su contenido en el momento, de igual modo pareciera que con suma preocupación parecer no se tiene claro y yo creo que por eso es que surge este punto señor presidente la forma en que se va a tomar la decisión estamos ante una CONVOCATORIA PÚBLICA y así lo dice las resoluciones pero en la parte final del considerando el tema de elección a diferencia de las resoluciones que sacaron el 90% de los Concejos del país en el cual hablaba claramente cómo se iba a llevar la elección aquí no se disipo ese tipo de duda y pued3e dar margen para pensar que estamos ante un CONCURSO PÚBLICO, y aunque son claras las similitudes igualmente son claras las diferencias entre ellas así mismo la resolución la resolución 78 del 2020, me puse a revisarla haciendo el estudio de esto y encuentro para mi sorpresa que se enuncia el parágrafo transitorio del artículo 12 de la ley 1904 de 2018,el cual a su vez fue derogado por el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019, motivo por el cual si bien es cierto debemos elegir secretaria general mediante una convocatoria pública tal como lo indica nuestro reglamento interno en su artículo 50 que dice que quien ocupe que quien ocupe este cargo será elegido por el Concejo, por un año de la lista de elegibles la cual en ese momento dice lista de admitidos el reglamento interno ustedes lo denominaron lista de elegibles previa convocatoria pública con principios de mérito, por lo cual es la plenaria de la corporación quien tiene el derecho final de elegir a quien ocupe el cargo para el período ya señalado, hacer lo contrario sería exponernos de manera injustificada a que la Corporación sea demandada y nos puedan echar para atrás nuevamente el proceso de elección, tal como ocurrió este año. Por ello en consecuencia con el planteamiento antes mencionado, quiero resaltar lo dicho por el*

Honorable Consejo de Estado, por medio de la Sala de Consulta, Consejero Ponente DR ÁLVARO NAMEN VARGAS, Concepto Sala de Consulta C.E. 2274 de 2015. "CONVOCATORIA PUBLICA – "Diferencias y similitudes con el concurso público de méritos Como ha quedado planteado, el Acto Legislativo 2 de 2015 adoptó el sistema de "convocatoria pública" como regla general para la elección de servidores públicos por parte de las corporaciones públicas, frente a lo cual cabe preguntarse si se trata de una figura igual o diferente a la del "concurso público de méritos" que ya estaba prevista en la Constitución Política como regla general para el reclutamiento de funcionarios públicos (artículo 125). Esto porque si fueran términos equivalentes la consulta se resolvería fácilmente mediante la aplicación directa y sin restricciones de las normas legales que regulan actualmente el concurso público de méritos. Pues bien, según la Ley 909 de 2004 (régimen general del empleo público), el concurso público de méritos es un procedimiento de selección de servidores públicos basado en la libre concurrencia, la publicidad, la transparencia, la objetividad, la eficiencia, la eficacia, la confiabilidad y el mérito: como quiera que su objetivo es la búsqueda de las personas más capacitadas e idóneas para el ejercicio del cargo ofrecido, lo cual se relaciona directamente con los derechos fundamentales a la igualdad y a la participación en el ejercicio y conformación del poder público, es el procedimiento aplicable en todos aquellos casos en que la ley, excepcionalmente, no haya previsto una forma diferente de vinculación al empleo público (artículo 125 C.P.). (...) De acuerdo con la misma Ley 909 de 2004 y de otras leyes especiales que regulan concursos de méritos para la provisión de diversos empleos públicos, los concursos siguen en esencia unas etapas básicas de convocatoria y reclutamiento, evaluación de condiciones objetivas y subjetivas de los candidatos, y conformación de listas de elegibles. Además, como ha reiterado la jurisprudencia, es característica esencial del concurso que la lista de elegibles se ordene estrictamente de acuerdo con el resultado del procedimiento de selección (regla de mérito), de modo que quien obtiene la mejor calificación adquiere el derecho a ser nombrado en el respectivo cargo.(...) Ahora bien, en el caso consultado los debates legislativos dan cuenta de que el Acto Legislativo 2 de 2015 al utilizar la expresión "convocatoria pública" optó por un mecanismo de elección que si bien se funda en los mismos principios básicos de los concursos públicos (incluso en cuanto al criterio de mérito), se diferencia de estos en que al final del proceso de selección las corporaciones públicas conservan la posibilidad de valorar y escoger entre los candidatos que han sido mejor clasificados. Se entendió que, si se adoptaba un concurso público de méritos como tal, se obligaba al organismo nominador a nombrar de acuerdo con el orden de clasificación de los aspirantes, lo que se consideró como una reducción indebida de la autonomía de las corporaciones públicas. Por tanto, se dijo, era necesario acudir a un sistema transparente, público, objetivo y

basado en el mérito, pero que fuera distinto al concurso público en cuanto permitiera al organismo elector escoger entre los varios candidatos que superaran la etapa de selección (...) De este modo, además de que literalmente se trata de expresiones distintas y que el nuevo artículo 126 Constitucional alude a una y otra como figuras separadas al señalar que la convocatoria aplicará "salvo los concursos regulados por la ley", la Sala observa que los antecedentes del Acto Legislativo 2 de 2015 ratifican que el constituyente derivado quiso diferenciar la convocatoria pública del concurso público de méritos del artículo 125 de la Constitución Política, particularmente porque en los procesos de elección mediante convocatoria pública no existe un orden obligatorio de escogencia entre los candidatos que superan las etapas de selección, tal como ocurre en los concursos de méritos. Así pues, el sistema de convocatoria pública mantiene un grado mínimo de valoración o discrecionalidad política en cabeza de las corporaciones públicas para escoger entre quienes se encuentran en la "lista de elegibles", aspecto que constituye el elemento diferenciador entre la convocatoria pública de los artículos 126,178A, 231, 257, 267 y 272 de la Constitución Política, y el concurso público de méritos a que alude el artículo 125 de la misma Carta. Sin embargo, en lo demás (publicidad de la convocatoria, reclutamiento de los mejores perfiles, transparencia, aplicación de criterios objetivos y de mérito, etc.) puede decirse que no existen diferencias sustanciales entre uno y otro mecanismo de selección de servidores públicos. "Tomando como relación lo dicho por la Sala de Consulta, la respectiva lista de elegibles enviada en la noche anterior a mi correo será, la fuente de la cual partiré para tomar una decisión personal y consciente sobre el perfil de la persona que deseo nos acompañe en el período 2021 como secretaria general del Concejo municipal de Acacías. Gracias.

Hace uso de la palabra el Concejal GILDARDO SANTOS CHAPARRO, como lo dijera el compañero MAURICIO CHAVEZ, simplemente señor presidente en la sesión pasada que se habló del tema cuando el mismo compañero Mauricio le pidió claridad sobre este sumerce muy acucioso hizo mención de una parte de la sentencia y pues yo también quiero hacer lectura de una parte de la sentencia puesto que lo que sumerce hizo alusión fue algo que expreso algo en su momento el ministerio publico pero que como tal no tiene fuerza vinculante entonces me permito leer lo que si al respecto dice: sin embargo con la expresión de la ley 1955 de 2019 por el cual se expide el plan nacional de desarrollo 2018 – 2020 se derogo el parágrafo transitorio del artículo 12 de la ley 1904 de 2018 el cual como ya se estableció imponía a las corporaciones públicas la obligación de aplicar por analogía que fue de lo que sumerce hizo alusión que dijo el ministerio publico el proceso de elección del contralor general de la república para la elección de los demás servidores públicos que fueran atribuidas

a las corporaciones públicas y otro aparte que quiero resaltar es: sin embargo ello no implica que el proceso de selección quede desamparado legalmente pues para ello se debe dar aplicación a lo dispuesto en la ley 136 de 1994 y el reglamento interno de la corporación que para este caso son los que delimitan el proceso de selección del secretario general de corporaciones públicas dentro del marco de los principios trasparencia, publicidad, participación y equidad de género como ya se ha mencionado y en ultimas señor presidente y compañeros considero y es claro que el Concejo tiene la discrecionalidad para elegir secretaria de esta lista de elegibles entonces simplemente lo único que quiero es invitar al apego del reglamento interno, gracias.

Concejal FARLEY CARVAJAL REY hace su intervención, presidente simplemente hacer una pequeña aclaración frente al tema de la elección que estamos adelantando la convocatoria para la elección de secretaria general del Concejo municipal para el periodo 2021 para esto quisiera indicar que si bien es cierto hay una sensación como se ha llevado el concurso o la convocatoria como bien indico el Dr. CHAVEZ en la lectura que hizo de la sentencia del concepto de la sala de consulta 2274 en la que enmarca muy bien con claridad la diferencia entre lo que es una convocatoria y un concurso de méritos para eso me permití solicitar ese punto para demarcar muy bien puesto que en algunos apartes de esta convocatoria se han dado figuras similares a las del concurso, un concurso es bien distante y diferente a lo que nos corresponde en esta corporación, puesto que el concurso publico de méritos da como un único ganador y es automáticamente pasa a ser elegido situación distante y diferente a lo que nos atañe puesto que nosotros realizamos es una convocatoria de la cual resulta una lista de elegibles como lo dice en repetidas ocasiones el reglamento interno y la ley 136 y la misma resolución 73 que usted emitió señor presidente nos indica creo que en el numeral octavo si no estoy mal la conformación de la lista de elegibles cuando hay una lista de elegibles no puede existir otra interpretación máxime que es la lista de donde va salir el elegido, una lista de elegibles todos los que la conforman deben ser elegibles, quien lo elige el Concejo municipal en su plenaria aquí no podemos caer en el error de que porque alguno tiene un puntaje mayor ese es el principal no señor eso se da en la carrera administrativa todos sabemos llámese para los concursos de los cargos en propiedad eso lo tenemos muy claro ustedes aquí saben de personas que duraron hasta 15 y 18 años en el cargo pero estaban en provisionalidad, hubo concurso para ese cargo alguien lo gano y el primero de una vez llega y desplaza al de 17 años de experiencia por el concurso publico de méritos entonces ahí el primer puesto si tiene el privilegio igual en la rama judicial, pero recordaran que hay situaciones diferentes y distantes en la convocatoria se hace la entrevista en los concursos públicos de méritos de la rama judicial ya no hacen entrevista quiero que haya claridad

de que no nos podemos confundir que aquí nosotros mantenemos como plenaria la independencia para marcar y para definir quién es la secretaria para el año 2021 en eso quiero hacer también una lectura, concepto de la sala de consulta del Consejo de Estado 2274 del que leyó MAURICIO CHAVEZ, en otro aparte dice: ahora bien en el caso consultado los debates legislativos dan cuenta que el acto legislativo 2 de 2015 al utilizar la expresión convocatoria pública opto por un mecanismo de elección que si bien se funda en los mismos principios básicos de los concursos públicos *"incluso en cuanto al criterio de mérito" se diferencian de estos y al final del proceso de selección las corporaciones públicas conservan la posibilidad de valorar y escoger entre los candidatos que han sido mejor clasificados. Se entendió que si adoptaba un concurso público de méritos como tal se obligaba al organismo nominador a nombrar de acuerdo con el orden de clasificación de los aspirantes lo que se consideró como una reducción indebida de la autonomía de las corporaciones públicas por tanto se dijo que era necesario acudir a un sistema trasparente público y basado en el mérito pero que fuera distinto al concurso público en canto permitirá al organismo elector escogeré entre los varios candidatos que superan la etapa de selección"* con esto quiero dejar en claro que frente a esta figura es que nos encontramos ya creo que anoche a los correos nos llegó la lista de elegibles conformada por 5 candidatas, claro yo algo que el veo que sobra es los puntajes porque todas las 5 son elegibles hoy vamos a hacer esa elección por mayorías aquí en el Concejo municipal, quería también insistir frente a una proposición que hice el día 16 de diciembre quiero simplemente dejarlo en el aire nuevamente, en el aparte donde nos indica el artículo 37 de la ley 136 del 94 el ultimo inciso indica lo siguiente en casos de falta absoluta como la que nos encontramos en este momento, en este momento no tenemos secretaria en este momento hay una falta absoluta hace más de 10 días en casos de falta absoluta abra una nueva elección para el resto del periodo y eso me deja a mi preocupado puesto que debimos haber adelantado todas las actuaciones tendientes a que se eligiera secretaria para el restante del 2020, claro sé que me van a decir los términos no alcanzan y donde dice en que articulo dice que cuando queden 20 días no hagan la elección en eso si quiero ser taxativo como es la norma, desafortunadamente gústenos o no en Colombia dice que si causa un omisión de 40 o 60 usted no le puede meter 70 porque la ley no le da, entonces si aquí le leo el articulo y hasta donde tengo entendido esta mañana verifique y no ha sido derogado entonces está vigente el artículo 37 y se lo repito en casos de falta absoluta habrá nueva elección para el resto del periodo ya después dice que la ausencia temporal eso no nos compete quiero dejar esta claridad por que el día 16 la hice y no tuvo resonancia, quiero indicar que me sujetare a este procedimiento que acabo de hacer exposición y que MAURICIO CHAVEZ, GILDARDO SANTOS en consonancia pienso que estamos en la misma directriz no veo posibilidad ni asidero

que se vaya a tomar una posición diferente o distante de esta porque lo que nos compete a los Concejos municipales es hacer una convocatoria como ya se hizo llegar a la conclusión de la lista de elegibles y de esa lista de elegibles elegir el secretario general del Concejo municipal para el año 2021.

Hace uso de la palabra la Concejala ZULMA YOLIMA DIAZ DIAZ un cordial saludo a los presentes, presidente básicamente recoger las inquietudes de lo que han manifestado los Concejales que han expuesto el tema, finalmente lo que se quiere es que este proceso de elección de secretaria se haga conforme al apego a la norma, lo que tenemos nosotros indicado tanto en nuestro marco legal como ene le reglamento interno porque si bien sabemos hubo una nulidad del proceso de elección de la secretaria anterior por una vocal pues cuanto más puede estar sujeto este proceso por tema de procedimiento precisamente, lo que se quiere finalmente es que se actué conforme a lo que tenemos normado y que esto también nos quede como un tema para tener en cuenta en las próximas resoluciones porque la resolución no es clara la forma o el procedimiento de elección cosa que si se estuvo analizando en otras resoluciones que emitieron otros Concejos a nivel nacional donde explícitamente queda tan claro qué lugar para este tema o estos momentos de debate sino que ya es muy clara la forma del procedimiento básicamente es eso señor presidente que la intención es evitarle al Concejo posibles de mandas a futuro por procesos que no se hagan conforme y al apego a la norma.

El Concejal JHONNY STEVENSON GIRALDO ARAGON hace uso de la palabra, con respecto a la discusión del día de hoy igual que los compañeros tenemos dudas, inquietudes con respecto a la forma como se va llevar a cabo la elección que método se va utilizar para designar a quien va ser la secretaria(o) del Concejo municipal para la vigencia 2021, la ley 136 en sus artículos del 35 al 37 habla de que los Concejos municipales elegirán secretario(a) de la corporación y se reeligiera a criterio de la corporación después vamos al reglamento interno y el artículo 50 dice que el Concejo municipal elegirá secretario (a) de la lista de admitidos o podría decirse lista de elegibles los Concejos municipales como lo manifiesta la Concejala ZULMA DIAZ de Medellín, Armenia, Caldas y muchos más lo tiene supremamente claro que se debe establecer unas etapas para revisar que los requisitos establecidos por la ley y la hoja de vida se cumplen a cabalidad pero que en consecuencia se elegirá mediante plenaria, mediante votación de la plenaria y cuando uno habla de lista de elegibles pues entiende por sentido natural por lógica común de que es un listado que las personas que lo integran tienen la posibilidad de ser elegidos, y aquí como lo hemos manifestado todos queremos que se nos aclare y se nos explique de manera concreta

y especifica la forma como se va desarrollar la sala de decisión cuarta del tribunal administrativo la magistrada ponente Nelcy Vargas expreso lo siguiente: "sin embargo con la expedición de la ley 1955 del 2019 por el cual se expide el plan anual de desarrollo 2018 - 2022 se derogo el parágrafo transitorio del artículo 12 de la ley 1904 del 2018, el cual como ya se estableció imponía a las corporaciones públicas la obligación de aplicar por analogía el proceso de elección de contralor general de la república para la elección de los demás servidores públicos que fueron que fueron atribuidos a las corporaciones públicas lo anterior los Concejos municipales tienen a su cargo la elección de distintos servidores públicos entre ellos la elección de secretario general de la corporación la cual pende del reglamento interno, de cada corporación sin dejar de lado que dicha elección debe estar presidida por mandato constitucional una convocatoria pública con apego y restricto a los principio de trasparencia, publicidad, participación y equidad de género encontrándose un vacio normativo respecto al procedimiento que se debe surtir para la elección de los secretarios generales de las corporaciones públicas pues a la fecha no se ha regulado dicho trámite sin embargo ello no implica que el proceso de selección quede desamparado legalmente pues para ello se debe dar aplicación a lo dispuesto en la ley 136 de 1994 y el reglamento interno de la corporación que para este caso son los del proceso de elección del secretario general de las corporaciones públicas dentro del marco de los principio de trasparencia, publicidad, participación y equidad de género como se ha mencionado, también es claro y es supremamente importante dejar constancia y precisar que la plenaria de este Concejo le dio facultades a la mesa directiva para que adelantara una convocatoria y no un concurso y eso tiene que ser supremamente claro, también en determinado caso que acudiéramos a la analogía en el artículo tercero de la ley 1904 ordena ir a votación de la misma manera así como se dice popularmente todos los caminos conducen a roma todas las jurisprudencia, la ley nos dicen que nosotros como Concejo municipal si bien es cierto tenemos que adelantar toda una convocatoria pública y los aspirantes de ben cumplir con unos requisitos de ley es la corporación en pleno quien debe elegir dentro de la lista de elegibles una de secretario de la respectiva corporación quería dejar constancia de estas anotaciones para enriquecer la discusión y para poder llegar a un feliz término.

Hace uso de la palabra el Concejal VICTOR JULIO RAMOS, saluda a los presentes, del articulo 35 y 37 de la ley 136 de 1994 nos faculta para elegir al secretario general del Concejo municipal es preciso recordar entonces que la ley 48 del 17 de noviembre de 2020 por medio de la cual se realiza una convocatoria para la elección de la secretaria general del Concejo municipal de Acacias impuso las normas del juego para cumplir el objeto antes mencionado, apenas trascurridos unos pocos días el

tribunal administrativo del meta en sala de la magistrada ponente Dra. Nelcy Vargas Tovar emitió una sentencia resolviendo de fondo la nulidad electoral instaurada por el señor José Enrique Molina Rojas y en contra de este Concejo municipal y la señora Leidy Alexandra Romero Urueña en resumidas cuentas dicha sentencia a la cual no tiene recurso de apelación alguno al ser un proceso de única instancia decreto la nulidad parcial del acta de sesión 02 del 3 de enero de 2020 en lo que respecta a la elección de la señora Alexandra Romero Urueña como secretaria general del Concejo municipal de Acacías y para el periodo 2020, por otra parte la Mesa Directiva con fecha del 1 de diciembre emitió la resolución 073 por medio de la cual se modifica la resolución 48 del 2020 introduciendo modificaciones relacionadas con la convocatoria y citando como agente derecho a los redantes para un concepto jurídico que ve como abro paréntesis (que de conformidad con lo anterior se hace la necesidad de dar aplicación analógica a la ley 1904 de 2018 y ajustar la convocatoria a fin de dar cumplimiento en lo impuesto en los aplicables al caso concreto de la elección de secretaria general del Concejo municipal de Acacías), la anterior afirmación no es compatiente de todo por este servidor en el entendido que la ley 1955 del 2019 articulo 335 declara o deroga que el parágrafo transitorio de la ley 121904 del 2018 que es el fundamento legal que nos impone la necesidad a hacer analogía y procedimiento para elegir el Contralor General de la República y la secretaria general del Concejo municipal a su vez haciendo una claridad juiciosos y demostró siempre las legalidad que emane de estos recintos suscrito, consulto el concepto 1535 del 2020 emitido por el departamento administrativo de la posición dentro del cual manifiesta, abro paréntesis (por tal motivo la aplicación analógica de la ley 1904 de 2018 para elección de secretaria general del Concejo municipal sujeto de la oratoria y por tanto los integrantes del Concejo municipal se efectuará teniendo en cuenta lo siguiente la ley 136 del 94 y el artículo 31 que habla del reglamento los Concejales expedirán un reglamento interno para el funcionamiento de lo cual se incluyen entre otras las referentes a las comisiones a la actuación de los Concejales a la validez de las convocatorias y las sesiones en su artículo 35 elección de funcionarios, los Concejos se instalaran y elegirán a sus funcionarios de su competencia en los primeros días del mes de enero correspondiente a la iniciación de su periodo constitucional previo celebramiento de fecha con 3 días de anticipación en los casos de falta absoluta la elección podrá hacerse en cualquier periodo en sesiones ordinarias o extraordinarias que para el efecto lo convoque el alcalde ahora bien el reglamento interno del Concejo municipal de Acacías –Meta en su artículo 50 manifiesta y da intrusiones precisas para el nombramiento y elección de este funcionario en todo caso si la honorable mesa directiva considera que se debe dar aplicación a la ley 1904 del 2018 pese a lo que antes pudo manifestar este servidor le ruego a usted y estricta aplicación pues el

artículo tercero de la citada ley manifiesta lo siguiente elección de Contralor General de la Nación de la República de Colombia en la lista de 10 elegibles previamente por la comisión definirán por esta ley el congreso elegir al Contralor General de la República en el primer mes de sesiones ordinarias por mayoría absoluta de los votos de sus miembros y para un periodo institucional de igual al de Presidente de la Republica, parágrafo en caso de que ninguno de los candidatos tenga la mayor absoluta se rehará una segunda votación entre los dos candidatos que estuvieron en las más altas votaciones, esa era mi intervención señor Presidente, gracias.

Tiene el uso de la palabra la Concejala LILIANA MARCELA BAQUERO TORRES quisiera compartir con los compañeros decirles que nosotros como comisión accidental radicamos un informe el 4 de diciembre pues que ha estado a disposición estamos en una convocatoria pública, yo cada vez que he venido a la secretaria pues me han facilitado la información pertinente pero sin embargo quisiera contarles que en medio de ese informe que nosotros hicimos y resaltar también que las participantes y agradecerles a ellas que hayan decidido participar en este proceso pero nosotros tenemos todas son muy buenas, quisiera resaltar para que si alguno no conoce el perfil de las personas que están ahí si bien es cierto el único acercamiento que tuvimos como tal en plenaria fueron 3 preguntas que se hicieron en la entrevista, quisiera resaltar de las aspirantes que están en el momento que continúan en el proceso en primer lugar a Patricia Morera Anaya ella es técnica en administración pública y gobierno, curso secretariado ejecutivo de gerencia, tiene curso en contabilidad básica, curso canales de participación en foros de PQR, estrategias de cero papel, estrategia tecnológica verde, curso de herramientas de interacción, curso de manejo del sitio Web, Curso de accesibilidad y demás, esta participante es técnico en administración pública, en segundo lugar esta Katherine Arenas Álvarez ella anexa soportes de estudio como título profesional de abogada para ilustrar a la plenaria, en tercer lugar esta la aspirante Johana Patricia Ovalle ella tiene estudios en tecnólogos en administración de finanzas y negocios internacionales, curso de estrategias pedagógicas y demás anexados en la hoja de vida para resumir en primer lugar es tecnóloga en administración de finanzas y negocios internacionales, en cuarto lugar está la aspirante Angélica Alejandra Ordoñez ella anexa estudios de técnico en operación de reservas y ventas de productos turísticos, certificación de estudios superiores, trabajadora social cursando el 92% de los créditos académicos y demás cursos anexados a la hoja de vida y en quinto lugar tenemos a Lizet Katherine Rodríguez ella anexa soportes como técnico laboral auxiliar administrativo en salud y demás certificaciones anexadas a la hoja de vida, está el documento para quien quiera mirar la experiencia laboral todas son realmente personas muy buenas, decir por otra

que si bien es cierto este proceso en mi caso particular lo veo es como un proceso atípico porque sale una resolución y en medio de la resolución que abre la convocatoria pues en el trascurso se da de nuestra secretaria declaran la nulidad y veo y de toda manera resalto la intención de la mesa directiva de sacar una nueva resolución tratando de ajustarse a ciertos lineamientos que se dan dentro de esa sentencia para tratar de evitar de que el proceso quede jurídicamente de una mejor manera, si bien es cierto e escuchado algunos compañeros hablaban de una ley que fue derogada efectivamente en la sentencia lo dice sin embargo para mi cuando están haciendo la sustentación creo que definitivamente y lo manifiesto en la plenaria yo sí creo que el proceso se ajusta al artículo 126 Constitucional que estamos nosotros cumpliendo una función Constitucional no podemos dejar al Concejo municipal sin secretaria y que siento que el proceso si bien es cierto al ser derogado dicho parágrafo que hablan que se hacía similitud al proceso de Contralor en la misma sentencia nos hablan que efectivamente es de acuerdo a lo que diga la Constitución de acuerdo a lo que diga la ley 136 del 94 y lo que diga nuestro reglamento, resaltar que el reglamento es importante desde ya para decirle a la plenaria que hay que modificarlo, hay que ajustarlo porque la verdad es que no desarrolla bien el proceso como se debe hacer y actualmente queda claro de que no hay una ley específica a donde nos diga puntualmente cuales son las etapas, cual es el procedimiento y por eso creo que estamos todos nosotros acá creo que todos los 15 tenemos esa dualidad no tenemos claro lo que hay que hacer, pero sabemos que queremos cumplir con la Constitución y con esa función Constitucional que tenemos que es de elegir secretario, en mi caso particular voy a proceder en su momento a votar creyendo firmemente que este proceso que se hizo no está contrariando ninguna ley ni el reglamento y que creo que se garantizaron los principios que nos enmarca la Constitución como es el principio de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección.

Se le concede el uso de la palabra al Concejal JHONNY STEVENSON GIRALDO ARAGON presidente como lo manifestaron los compañeros dentro del orden del día dentro de este punto que se encuentra en el orden del día para que usted por favor nos haga claridad a las inquietudes que hemos manifestado, gracias.

Hace uso de la palabra el presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO continuamos en la discusión del tercer punto,

Se le concede el uso de la palabra al Concejal VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS señor presidente quiero que las intervenciones de los compañeros que han venido

interviniendo sobre el proceso de la secretaria general del Concejo queden tal en el acta como se ha venido manifestando que no vaya a cambiar ningún punto ninguna o ningún si ningún no.

Hace uso de la palabra el presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, así será y así ha sido durante todo el año esa ha sido una particularidad nueva en esta Mesa Directiva por primera vez en la historia del Concejo de Acacías las actas se han trascrito textualmente de los audios ninguna intervención se ha suprimido nada ni una sola palabra y así se hará hasta el último día y esperamos que así se siga haciendo. Quiero manifestarles a los Concejales que efectivamente si es facultad del Concejo elegir la secretaria y es discrecionalidad de cada Concejal definir por quién vota pero como lo establece el reglamento interno la elección para estos procesos se hace de manera secreta igual cualquier Concejal está en libertad de anunciar su voto entonces declaramos la suficiente ilustración del tercer punto, se le solicita a la secretaria dar lectura al siguiente punto del orden del día.

CUARTO PUNTO: RESPUESTA A RECLAMACIONES ELECION Y POSESION DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS VIGENCIA 2021. Hace uso de la palabra el presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, en ese orden de ideas me permito secretaria pedirle que aliste la urna y los votos mientras voy dando contestación a las reclamaciones, me permito informarle a la plenaria como primera medida que se radico una petición de información el día de ayer a las 11:08 pm por parte de una de las PARTICIPANTES ANGÉLICA ALEJANDRA ORDOÑEZ OSORIO dice lo siguiente:

Honorable Concejo municipal de Acacías está el email de ella, Asunto: solicitud de copia de prueba de conocimiento y resultados de entrevista. Honorables Concejales, por medio del presente, y como admitida en el proceso de convocatoria desarrollada para la elección de la secretaria general del Concejo de Acacias – Meta, de manera atenta y respetuosa me permito solicitar copia de la prueba de conocimiento desarrolla el día 11 de diciembre de 2020 y su respectiva calificación, además copia de la evaluación efectuada por los Concejales respecto de la entrevista presentada el día 16 de diciembre de 2020. Solicito que la información requerida sea allegada al correo al3jiita15@gmail.com toda vez que resido en otro Departamento y no es posible desplazarme hasta el despacho de la Corporación. No siendo más por el momento me suscribo de ustedes, no sin antes agradecerles su gentil atención. Con el respeto debido del honorable Concejo firma Angélica Alejandra Ordoñez Osorio.

Como estamos en respuesta a reclamaciones se ha determinado por parte de la Mesa Directiva por favor secretaria hacerle llegar las respectivas copias que solicita la

concursante en todo su derecho de la prueba de conocimientos con su respectiva calificación y hacerle llegar copia de la evaluación de la entrevista por parte de cada uno de los Concejales.

Siguiente reclamación *Katherine Arenas Álvarez dice lo siguiente: Acacías 17 de diciembre de 2020 señores Concejo municipal de Acacías Meta, mesa directiva 2020 comisión accidental verificación de cumplimiento de requisitos exigidos para la convocatoria elección de secretario general del Concejo municipal 2021. Plenaria del Concejo municipal REF. Elección de secretario general del Concejo municipal 2021. ASUNTO. Reclamación sobre publicaciones del consolidado de resultados obtenidos y otro. Apreciados señores. KATHERINE ARENAS ALVAREZ, mujer y mayor de edad, identificada con la C.C. No. Me voy a abstener de leer el número de la cedula de Bogotá D.C. por medio del presente documento y en mi calidad de participante dentro del proceso de la referencia, muy gentilmente permito dentro del término de ley interponer reclamación con fundamento en los siguientes hechos.*

1. *El pasado 17 de noviembre de 2020, la mesa directiva del Concejo municipal de Acacías emitió la resolución No, 48 de la fecha anteriormente mencionada, cuyo objeto era "POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UNA CONVOCATORIA PARA LA ELECCION DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS".*
2. *El 27 de noviembre de 2020, con la intención de hacer parte de dicha convocatoria, presenté la documentación exigida, la cual es (solicitud dirigida al Concejo municipal determinando el cargo al cual se postula, hoja de vida formato único de la función pública, copia del documento identificación, copia del diploma de bachiller y/o acta de grado, certificaciones de experiencia laboral, antecedentes fiscales, judiciales y disciplinarios, certificación de contar con disponibilidad inmediata para asumir el cargo de secretaria general del Concejo municipal, declaración juramentada de no está inmersa en inhabilidad o incompatibilidad para ejercer el cargo, declaración juramentada de bienes y rentas de la función pública, copia de estudios complementarios), los cuales certifican el título de profesional en derecho.*
3. *El día (30) de noviembre del año en curso, la comisión accidental emitió lista de admitidos y no admitidos para la convocatoria de elección de secretario(a) general del Concejo municipal -2021, la cual dio como resultado un total de (06) aspirantes admitidos de (10) presentados, dentro de los cuales se encuentra la suscrita.*

4. *El día (01) de diciembre de 2020, la mesa directiva del Concejo municipal emitió la resolución No. 73 del 01 de diciembre de 2020. Modificando el contenido y la estructura del procedimiento tendiente a la elección del secretario(a) general del Concejo municipal.*
5. *Haciendo alusión a un concurso en el que se indica ser de gran importancia el mérito, siendo este predominante para el resultado final desdibujando con esto la figura de la convocatoria.*
6. *La nueva resolución está sustentada en la aplicación analógica de la ley 1904/2018, pero la mesa directiva actúa en contravía a la ley pues el parágrafo transitorio del artículo 12 de la citada ley fue derogado por el artículo 333 de la ley 1955/2019.lo que evidencia una ilegalidad de la resolución en mención.*
7. *Causa falsa motivación el hecho de que se tome como fundamento dentro de la resolución No. 073 los alegatos de conclusión realizados por parte del ministerio público, no teniendo estos un carácter vinculante y además están abiertamente derogados por la precitada ley.*

Pretensiones

1. *Solicitar al honorable Concejo municipal, la suspensión provisional de la convocatoria pública en curso, hasta tanto no se subsane la resolución No, 73 de 2020, que modifico la resolución No, 48 de 2020, en cuanto a que esta se fundamentó en lo establecido por el parágrafo transitorio del artículo 12 de la ley 1904 de 2018, el cual fue derogado por el artículo 333 de la ley 1955 de 2019.*
2. *Una vez se subsane la resolución No, 073 de 2020, se continúe con el cronograma establecido para la elección y posesión del secretario general del Concejo municipal, de acuerdo a lo reglado por el artículo 35 de la ley 136 de 1994, y lo adoptado por el acuerdo 427 de 2016, mediante el cual se establece, el reglamento interno del Concejo municipal de Acacías, artículo 50.*
3. *Cumplido lo anterior se someta a votación de acuerdo a la lista de elegibles por parte de la plenaria del Concejo municipal, y en el entendió que estamos frente a una convocatoria pública y no un concurso de méritos.*
4. *Las demás que considere la honorable plenaria*

Fundamentos de derecho

- *Acuerdo 427 del 2016, mediante el cual se establece el reglamento interno del Concejo municipal de Acacías, artículo 50.*
- *Ley 1955 del 2019, artículo 333*

- *Ley 136 de 1994, articulo 35 y 37*
- *Concepto 153521 de 2020, departamento administrativo de la función pública.*

Notificaciones
La suscrita las recibirá en el correo electrónico cita el correo y numero celular cita el número de celular por razone de reserva me omito leer el número de celular atentamente, KATHERINE ARENAS ALVAREZ con copia procuraduría regional provincial del Meta.

Esta fue la reclamación presentada por la aspirante KATHERINE ARENAS ALVAREZ al respecto de conformidad con el cronograma y dando respuestas a las reclamaciones nos permitimos contestar la reclamación.

Acacías 18 de diciembre de 2020 señorita KATHERINE ARENAS ALVAREZ numero de cedula, dirección electrónica, numero de celular el que está en la reclamación.
Asunto, respuesta reclamación radicada el 17 de diciembre de 2020 a las 5: 04 pm. De conformidad con lo establecido en la resolución 073 de 2020, la mesa directiva se permite dar respuesta a la reclamación radicada el día 17 de diciembre de 2020, en los siguientes términos. Con ocasión a su reclamación la mesa directiva del Concejo municipal expidió la resolución 077 de 2020 "por medio del cual se ajusta y modifica la resolución 073 de 2020 y se dictan otras disposiciones en el marco de la convocatoria para la elección de la secretaria general del Concejo municipal de Acacías" la cual puede ser consultada en la página web de la corporación www.Concejo-Acacias-meta.gov.co. Que de conformidad con lo expuesto en su escrito, la mesa directiva atiende parcialmente sus observaciones y ajusta la resolución 073 de 2020, garantizando así la estricta aplicación con criterios de mérito de la elección de secretaria general del Concejo municipal sin otro particular firman presidente, primer vicepresidente, segundo vicepresidente de la mesa directiva.

Me voy a permitir dar lectura a la resolución 077 con la cual se acepta parcialmente una reclamación.

RESOLUCIÓN No. 77 (17 DE DICIEMBRE DE 2020).
"POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA Y MODIFICA LA RESOLUCIÒN 073 DE 2020 Y SE DICTAN OTRAS DIPOSCIONES EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS".

LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS – META, en uso de las facultades constitucionales y legales, en especial las contenidas en el Acuerdo Municipal No. 427 de 2016 y mediante proposición del día viernes 13 de Nov. de 2020.

CONSIDERANDO

Que el Concejo Municipal es una Corporación politico administrativa con autonomía administrativa y presupuestal, la cual tienen tiene establecida funciones precisas de conformidad con lo señalado en el art. 313 de la CN, la ley 136 de 1994 y la ley 1551 de 2012.

Que como corporación politico administrativa la Corporación ejerce funciones administrativas, presupuestales, y de recurso humano entre otras propias del cumplimiento de su misión y visión institucional.

Que en sesión plenaria del día 13 de Nov. De 2020 se autorizó a la mesa directiva del Concejo Municipal para que adelantará la respectiva convocatoria para la elección de la secretaria general del Concejo Municipal para la vigencia 2021.

Que mediante resolución 048 de 2020 se realizó la Convocatoria para la elección de la Secretaria General del Concejo Municipal, determinando los respectivos requisitos y procedimiento para su elección.

Que mediante resolución 073 de 2020 se realizó modificación a la resolución 048 de 2020 y expuso la necesidad de incluir prueba de conocimientos que permitiera la valoración de las capacidades intelectuales de los participantes.

Que mediante reclamación presentada por la señorita KATHERINE ARENAS ALVAREZ, manifestó que en los considerandos de la resolución 073 de 2020 se hace énfasis en la aplicación analógica de la ley 1904 de 2018, la cual según la reclamante el PARAGRAFO TRANSITORIO del art. 12 de la ley 1904 de 2018 se encuentra derogada por el art. 333 de la ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo).

Que, revisada la norma, se tiene que la disposición enunciada por la reclamante no obedece a la derogatoria del enunciado PARAGRAFO, sin embargo, se evidencia con acierto que dicha norma efectivamente fue derogada por el art. 336 de la ley 1955 de 2019.

Que así mismo se hace necesario suprimir de los considerandos de la resolución 073 de 2020 la expresión: "Que de conformidad con lo anterior se hace de imperiosa necesidad dar aplicación analógica a la ley 1904 de 2018 y ajustar la convocatoria a fin de dar cumplimiento a tal disposición en lo aplicable al caso concreto de Elección de Secretaria General del Concejo Municipal de Acacías" (negrilla fuera del texto).

Que conforme lo anterior se hace necesario suprimir de los considerandos lo peticionado por la reclamante a fin de corregir el yerro de forma plasmado en la resolución 073 de 2020. Advirtiendo que de conformidad con lo establecido en el art. 45 de la ley 1437 de 2011 denominada CORRECCION DE ERRORES FORMALES, se determina: En cualquier

tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabra. En ningún caso la corrección dará lugar a cambio en el sentido material de las decisiones, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda. (Subrayado fuera de texto). Por lo que se hará posible atender las recomendaciones de la reclamante.

Que dicha modificación y supresión de los considerandos no incide de manera alguna en el resultado final de la convocatoria, por tratarse de un asunto de mera forma plasmado en los considerandos del acto administrativo, ni mucho menos en el procedimiento adelantado en el proceso de elección.

Que revisado el contenido de la resolución 073 de 2020 no se observa aplicación de disposición alguna y/o especifica de la ley 1904 de 2018 que permita inferir que la convocatoria adelantada en virtud de la resolución 048 de 2020 se basa en el desarrollo normativo y de la aplicación de la norma citada.

Que así mismo la misma resolución 073 de 2020 señala el aspecto FUNDAMENTAL de la modificación realizada el cual tenía como propósito "Reviste de Gran Importancia siendo el Mérito el factor Predominante en el proceso de selección de la secretaria General del Concejo Municipal teniendo en cuenta la idoneidad de los aspirantes para el ejercicio de las funciones".

Que dicho argumento encuentra su respaldo en el artículo 126 de la Constitución Política el cual dispone: SALVO LOS CONCURSOS REGULADOS POR LA LEY, LA ELECCION DE SERVIDORES PÚBLICOS ATRIBUIDA A CORPORACIONES PÚBLICAS DEBERÁ ESTAR PRECEDIDA DE UNA CONVOCATORIA PÚBLICA REGLADA POR LA LEY, EN LA QUE SE FIJEN LOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN LOS PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD, TRANSPARENCIA, PARTICIPACION CIUDADANA, EQUIDAD DE GENERO Y CRITERIOS DE MÈRITO PARA SU SELECCIÒN.

Que la resolución 048 de 2020 y 073 de 2020 contienen los elementos, etapas y aspectos suficientes que garantizan que la secretaria del Concejo Municipal sea seleccionada en virtud al MERITO como principio pilar constitucional para el acceso a cargos públicos y como lo contempla el art. 50 del reglamento interno del Concejo Municipal.

Que, si bien la elección de la Secretaria General no está reglada, de la anterior norma se desprende que LA ELECCIÒN DE SERVIDORES PÚBLICOS deberá estar precedida una CONVOCATORIA PÚBLICA, la cual deberá como así lo dispone el art. 50 del Acuerdo 427 de 2016 "con principio de mérito" (comillas, negrilla y subrayado fuera de texto).

Que Mediante proposición presentada el 13 de Noviembre de 2020, se tiene que la mesa directiva fue facultada por la plenaria de la corporación para adelantar el proceso que permitiera la selección de la secretaria General del Concejo Municipal: proposición Presentada por el Concejal WILMER CARVAJAL y complementada por el presidente de la corporación: la cual fue aprobada por unanimidad en los siguientes términos: "otorgar facultades amplias y plenas a la Mesa Directiva para que adelante de conformidad con la ley el concurso para la elección de Secretaria General del Concejo para la vigencia 2021".

Que la plenaria del Concejo Municipal, si bien tenía la facultad de reelegir a la secretaria general de manera directa, este optó por la realización de una convocatoria pública dando facultades amplias y plenas a la mesa directiva para desarrollar el mismo.

Que el Consejo de Estado en sentencia Radicado 2015-01053-00 Consejera Ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ del Veinticinco (25) de abril de dos mil diecinueve (2019). Señalo:

La Convocatoria, es el primer paso del procedimiento de selección y consiste en un llamado que hace la Administración a quienes reúnan determinadas calidades o condiciones para incorporarse a un empleo público de carrera administrativa. En ella se consagran las bases o reglas del concurso, las cuales dependen, entre otras, del tipo de concurso, de las necesidades del servicio, y de la naturaleza de los cargos por proveer. En términos generales, las convocatorias deben contener: (a) el tiempo límite de inscripciones, (b) los documentos que debe presentar el candidato para su inscripción, (c) el lugar en donde se reciben éstas, (d) la identificación de los cargos ofertados al público, (e) las funciones asignadas a dichos empleos, (f) la remuneración de los mismos, (g) los requisitos de estudios y experiencia para el desempeño de los empleos ofertados, así como la forma como se compensan esas exigencias, (g) la clase de exámenes, pruebas o instrumentos de selección que se van a realizar a los concursantes, con la indicación del sitio, fecha y hora en que se llevarán a cabo tales pruebas, (h) la fecha en que se publicarán los resultados, y los recursos que proceden contra los mismos, (i) en fin, todos aquellos factores que habrá de evaluarse dentro del concurso. La convocatoria es norma reguladora de todo concurso público de méritos y obliga tanto a la administración como a los participantes, es decir, es ley para las partes. Así, la convocación garantiza a los aspirantes, en el evento de que cumplan las exigencias estatuidas, igualdad de oportunidades para acceder a ocupar cargos públicos, y el derecho a concursar en igualdad de condiciones. que de la resolución 048 y 073 de 2020, se observa que la Mesa Directiva dispuso de todos y cada uno de los aspectos que señala el consejo de estado, frente al contenido de la convocatoria realizada para el cargo de elección de Secretaria General del Concejo Municipal.

Frente a la Convocatoria: En Sentencia de Unificación: SU-446 DE 2011, Magistrado. Ponente: JORGE IGNACIO PRETELT del 26 de mayo de 2011 PRECISÓ:

La convocatoria es "la norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los participantes", y como tal impone las reglas que son obligatorias para todos, entiéndase administración y administrados-concursantes. Por tanto, como en ella se delinean los parámetros que guiarán el proceso, los participantes, en ejercicio de los principios de buena fe y confianza legítima, esperan su estricto cumplimiento. La Corte Constitucional ha considerado, entonces, que el Estado debe respetar y observar todas y cada una de las reglas y condiciones que se imponen en las convocatorias, porque su desconocimiento se convertiría en una trasgresión de principios axiales de nuestro ordenamiento constitucional, entre otros, la transparencia, la publicidad, la imparcialidad, así como el respeto por las legítimas expectativas de los concursantes. En consecuencia, las normas de la convocatoria sirven de auto vinculación y autocontrol porque la administración debe "respetarlas y que su actividad, en cuanto a la selección de los aspirantes que califiquen para acceder al empleo o empleos correspondientes, se encuentra previamente regulada" Así mismo mediante sentencia T-180 DE 2015 Magistrada. Ponente JORGE IVAN PALACIO PALACIO de fecha 16 de abril de 2015 la honorable Corte Constitucional señaló: La convocatoria se convierte en una expresión del principio de legalidad tanto para oferentes como para inscritos, de tal forma que incumplir las directrices allí estipuladas contraviene no solo los derechos de los aspirantes, sino aquel valor superior al cual está sujeto toda actuación pública. Dicho, en otros términos, el acto administrativo que la contenga funge como norma del concurso de méritos, por lo cual todos los intervinientes en el proceso deben someterse aquel so pena de trasgredir el orden jurídico imperante.
En mérito de lo anteriormente expuesto la mesa directiva:
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Suprimir el siguiente texto o enunciado de los considerandos de la resolución 073 de 2020 expedida por la mesa directiva del Concejo Municipal.
Expuso que, respecto de lo reglado en el inciso 4 del artículo 126 constitucional, el departamento administrativo de la función pública pregunto a la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado si para el procedimiento de la elección de los secretarios de los Concejos municipales, se debía aplicar la ley 136 de 1994 referente a la organización y el funcionamiento de los municipios o se debía aplicar, por analogía la ley 1904 de 2018. Que establece las reglas de la convocatoria pública previa a la elección de contralor general de la republica 13 tribunal administrativo del meta Nulidad electoral 50001-23-33-000-2020-00028-00 demandante: José Enrique Molina Rojas; demandado: Leidy Alexandra Romero Urueña y otro. Por el congreso de la república, frente a lo cual la mencionada sala respondió, que, para la elección de los secretarios de los Concejos municipales, se debe aplicar la analogía prevista en el parágrafo transitorio del artículo 12 de la ley 1904 de 2018,

por tanto, tienen aplicación las disposiciones de esta ley que resulten pertinentes a dicha elección, mientras el congreso la regula.
(...) Consejo de Estado en su sala consultiva, el departamento administrativo de la función pública, en el concepto 000861 de fecha 3 de enero de 2019, dentro del radicado No. 20196000000861, indico exactamente igual procedimiento como mandado a la corporación municipal, para la elección de su secretario general.
Que de conformidad con lo anterior se hace la imperiosa necesidad dar aplicación analógica a la ley 1904 de 2018 y ajustar la convocatoria a fin de dar cumplimiento a tal disposición en lo aplicable al caso concreto de elección de secretaria general del Concejo municipal de Acacías,
***ARTICULO SEGUNDO:** El proceso de elección y posesión de la secretaría obedecerá única y exclusivamente al **MERITO** atendiendo lo preceptuado en el art. 50 del Acuerdo 427 de 2016, y en cumplimiento de los principios de igualdad, oportunidad, transparencia, objetividad, participación, equidad de género, libre concurrencia, imparcialidad e idoneidad, adelantado durante la convocatoria.*
***ARTICULO TERCERO**: Las demás estipulaciones contenidas en la resolución 048 y 073 de 2020 se mantienen vigentes.*
*Se expide la presente a los 17 días del mes de diciembre de 2020.**COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE** firma la Mesa Directiva.*

De esta manera quedan agotadas las reclamaciones fueron esas dos solicitudes que fueron radicadas por favor secretaria vamos a pasar al registro de votación y vamos a abrir la votación se le solicita a la secretaria alistar la urna le entregamos a cada Concejal un voto y cada Concejal lo hará de manera secreta como lo establece el reglamento interno si algún Concejal quiere anunciar su voto está en su derecho de realizarlo.

Antes de iniciar el llamado a lista me voy a permitir recordarles a los Concejales el acta No, 5 que trata de la publicación de resultados obtenidos y publicación de la lista de elegibles de conformidad con la resolución 048 y 073 de 2020 por medio de la cual se realiza una convocatoria para la elección de secretaria general del Concejo municipal de Acacías consolidación de resultados obtenidos por los aspirantes dentro del proceso de selección de secretaria general del Concejo municipal vigencia 2021, lista de elegibles en estricto orden de resultados obtenidos durante las pruebas realizadas.

1. Patricia Morera Anaya total convocatoria 92.15
2. Katherine Arenas Álvarez total convocatoria 90.99
3. Angélica Alejandra Ordoñez total convocatoria 87.61
4. Liceth Katherine Rodríguez total convocatoria 87.10
5. Johana Patricia Ovalle Rojas total convocatoria 75.94

ARNOLD MAURICIO PINILLA TRIANA
VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS
HECTOR REYES RATIVA
LUIS CARLOS RICHAR RODRIGUEZ CORTES
GILDARDO SANTOS CHAPARRO
ALEXANDER VALERO

Hecho el llamado a lista con la asistencia de quince (15) Concejales, se le informa al presidente que hay quórum para deliberar y decidir.

El presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO manifiesta, estábamos en el punto de elección de secretaria general del periodo 2021 tiene el uso de la palabra la comisión escrutadora para que nos dé el resultado final.

Hace uso de la palabra el Concejal WILMER ORLANDO CARVAJAL señor presidente nosotros la comisión escrutadora de la elección de la convocatoria de la secretaría general del Concejo municipal de Acacías vigencia 2021 integrada por los Concejales JOSE JAIR ECHEVERRY OSPINA, ARNOLD MAURICIO PINILLA TRIANA, y el suscritito WILMER ORLANDO CARVAJAL OLAYA queremos declarar oficialmente a Katherine Arenas Álvarez como secretaria general del Concejo municipal para el periodo 2021 todo esto para que se realice por presidencia su respectiva posesión, presidente pero además la comisión escrutadora solicita a la Mesa Directiva se dé traslado a la Fiscalía y Procuraduría para que inicie una investigación en la diferencia de los votos aclarados por los Concejales a favor de la señora Patricia Morera Anaya y en la urna solo aparecen 7 votos que esta sea dada en custodia los votos en un sobre cerrado que va guardar la mesa directiva y también señor presidente pedimos que se notifique a la señora Patricia Morera de los respectivos resultados para que presente los recursos a que tenga derecho, gracias señor presidente.

El presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, gracias a la comisión escrutadora de esta manera ha sido declarada por la comisión escrutadora oficialmente a la señora Katherine Arenas y se hará lo pertinente a petición de la comisión escrutadora para correr traslado a los diferentes organismos de control para que inicie las investigaciones a que haya lugar disciplinarias y penales con respecto a la diferencia de los votos anunciados con respecto a los votos depositados en la urna de esta manera oficialmente damos por concluido el proceso de elección de secretaria entonces le pedimos por favor secretaria para que notifique a la señora Katherine Arenas para que

Este es el resultado final de conformidad con el concurso, en este momento procedemos a hacer la votación, designamos la comisión escrutadora Concejales WILMER CARVAJAL, JAIR ECHEVERRY y ARNOLD PINILLA. Por favor abrimos el registro de votación por favor secretaria hacer el llamado a lista y vamos votando uno por uno.

La secretaria general (e), procede a hacer el llamado a cada uno de los Concejales para que depositen su voto, así:

LILIANA MARCELA BAQUERO TORRES	
JHONNY ANDRES BASTO HERNANDEZ	Quiero dejar constancia mi voto es por la señora Patricia Morera Anaya.
WILMER ORLANDO CARVAJAL OLAYA	Para hacer aclaración de mi voto debido a la confiabilidad del concurso que se realizó por Patricia Morera Anaya.
FARLEY CARVAJAL REY	
ANDRES MAURICIO CHAVEZ QUEVEDO	
ZULMA YOLIMA DIAZ DIAZ	
JOSE JAIR ECHEVERRY OSPINA	Patricia Morera Anaya
JHONNY STEVENSON GIRALDO ARAGON	
ORLANDO GRANADOS ACEVEDO	Mi voto lo anuncio es por Patricia Morera Anaya.
ARNOLD MAURICIO PINILLA TRIANA	Es por la señora Patricia Morera Anaya
VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS	
HECTOR REYES RATIVA	Anuncio mi voto por la señora Patricia Morera Anaya.

LUIS CARLOS RICHAR RODRIGUEZ CORTES — Por la señora Patricia Morera Anaya.

GILDARDO SANTOS CHAPARRO — Para dejar constancia Patricia Morera Anaya.

ALEXANDER VALERO

La secretaria general encargada informa que está hecho el llamado a lista.

El presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO solicita hacer el respectivo escrutinio, le solicita a la comisión escrutadora dar el resultado, teniendo en cuanta que hay dos Katherines por favor verifique con los apellidos que este bien.

El Concejal WILMER ORLANDO CARVAJAL OLAYA integrante de la comisión escrutadora manifiesta presidente 8 votos son por Katherine Arenas y 7 por Patricia Morera Anaya.

El presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO teniendo en cuanta que de conformidad con los votos que los Concejales cantaron hubo 8 Concejales que cantaron el voto y que pidieron que en el acta quedara Patricia Morera Anaya voy a decretar un receso para que la comisión escrutadora tome una decisión, se decreta un receso de 30 minutos, siendo las 11:00 a.m..

Siendo las 11:25 am se levanta el receso, se le solicita a la secretaria general (e) hacer el respectivo llamado a lista y verificación del quorum.

CONCEJALES PRESENTES
LILIANA MARCELA BAQUERO TORRES
JHONNY ANDRES BASTO HERNANDEZ
WILMER ORLANDO CARVAJAL OLAYA
FARLEY CARVAJAL REY
ANDRES MAURICIO CHAVEZ QUEVEDO
ZULMA YOLIMA DIAZ DIAZ
JOSE JAIR ECHEVERRY OSPINA
JHONNY STEVENSON GIRALDO ARAGON
ORLANDO GRANADOS ACEVEDO

adelante el procedimiento de ley la compra de estampillas y todo el proceso y cuenta con 15 días hábiles para tomar posesión del cargo.

Se le solicita a la secretaria general (e) dar lectura al punto del orden del día

QUINTO PUNTO: PROPOSICIONES Y VARIOS. El presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO manifiesta tiene que comprar estampillas, actualizar hojas de vida y hacer todo ese procedimiento para poder tomar posesión.

Hace uso de la palabra el Concejal **ANDRES MAURICIO CHAVEZ** presidente me parece muy bien la decisión que toma la respectiva comisión la aplaudo al igual que voy a solicitarle a la ganadora del concurso declarada la señora Katherine Arenas y a la próxima mesa directiva que inicia en unos pocos días que se corra traslado disciplinariamente también de este tema a los Concejales que hayan mencionado su voto, toda vez que el articulo 85 modos de votación en su numeral tercero dice votación secreta es aquella en la que no se permite identificar como vota el Concejal las rectificaciones solo serán procedentes cuando el número de votos recogidos no sea igual al de los votantes aquí estamos como queriendo pintar entre buenos y malos y que pena presidente pero así no son las cosas y la voluntad de las mayorías se debe respetar así como me tocaba respetarla a mi cuando estaba en las minorías.

El presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, y se ha respetado la voluntad de las mayorías tanto así que ha sido elegida la señora Katherine que obtuvo 8 votos no entiendo porque tal vez me escucho mal el Concejal una recomendadita una limpieza de oídos porque tal vez anuncie a otra persona anuncie a Katherine Arenas como secretaría general damos por finalizada la sesión del día de hoy.

No habiendo más proposiciones y varios, agotado el orden del día, se da por terminada la sesión del día de hoy viernes (18) de diciembre del 2020, siendo las 11:28 a.m., se convoca el miércoles 23 de diciembre a las 7:00 a.m.

ORLANDO GRANADOS ACEVEDO
Presidente Concejo Municipal

DIGNORY CLAVIJO ORTIZ
Secretaria General (e) Concejo Mpal

Elaboró y digitó: Lucila Rodríguez Rodríguez
Contratista

SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS MEDIANTE DECRETO No. 235 DE DICIEMBRE 11 DE 2020.

VIERNES DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE 2020

ORDEN DEL DÍA

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA
3. RESPUESTA A RECLAMACIONES, ELECCION Y POSESIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACIAS –META, VIGENCAI 2021.
4. CONDECORACIONES
5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS MEDIANTE DECRETO No. 235 DE DICIEMBRE 11 DE 2020.

VIERNES DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE 2020

ORDEN DEL DÍA

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA
3. REVISIÓN MÉTOOD DE ELECCIÓN SECRETARIA DEL CONCEJO Y DISCUSIÓN DE CONCEPTOS JURIDICOS.
4. RESPUESTA A RECLAMACIONES, ELECCION Y POSESIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACIAS –META, VIGENCAI 2021.
5. PROPOSICIONES Y VARIOS.

SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS MEDIANTE DECRETO No. 235 DE DICIEMBRE 11 DE 2020.

VIERNES DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE 2020

CONTROL DE ASISTENCIA

LILIANA MARCELA BAQUERO TORRES

JHONNY ANDRES BASTO HERNANDEZ

WILMER ORLANDO CARVAJAL OLAYA

FARLEY CARVAJAL REY

ANDRES MAURICIO CHAVEZ QUEVEDO

ZULMA YOLIMA DIAZ DIAZ

JOSE JAIR ECHEVERRY OSPINA

SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS MEDIANTE DECRETO No. 235 DE DICIEMBRE 11 DE 2020.

VIERNES DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE 2020

CONTROL DE ASISTENCIA

JHONNY STEVENSON GIRALDO ARAGON

ORLANDO GRANADOS ACEVEDO

ARNOLD MAURICIO PINILLA TRIANA

VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS

HECTOR REYES RATIVA

LUIS CARLOS RICHAR RODRIGUEZ CORTES

GILDARDO SANTOS CHAPARRO

ALEXANDER VALERO

JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE ACACIAS, META
Acacias, Meta, veinticinco (25) de febrero de dos mil veintiuno (2021)

I-. OBJETO POR DECIDIR

La impugnación interpuesta por los concejales del Municipio de Acacías -Meta, **Zulma Yolima Díaz Díaz, Víctor Julio Ramos Cubillos** y **Liliana Marcela Baquero Torres,** contra el fallo de primera instancia proferida el 6 de enero de 2021 por el **Juzgado Promiscuo Municipal de Guamal, Meta,** dentro de la acción de tutela promovida por la señora **Patricia Morera Anaya**, identificada con cédula de ciudadanía No 55.058.856, contra el **Concejo Municipal de Acacías, Meta,** por la presunta vulneración de los derechos al debido proceso, igualdad, trabajo y acceso a los cargos públicos por concurso de méritos.

II-. SÍNTESIS DE LA DEMANDA

1.- De la tutela

La accionante fundamenta la acción de tutela en los siguientes hechos:

-. El Concejo de Municipal accionado, apertura convocatoria por medio de la Resolución No 048 de 2020, modificada mediante Resolución No 073 de 2020, para la elección de Secretaria General del Concejo para la vigencia 2021.

-. Se postuló y concursó por el empleo convocado, presentando las pruebas que correspondían según el cronograma de la convocatoria realizada.

-. El 16 de diciembre de 2020, la plenaria del Concejo Municipal accionado, realizó la entrevista como bien estaba señalado en la Convocatoria, con anterioridad, se habían establecido con precisión las reglas de la prueba, forma de calificación de 1 a 100, las cuales debían estar soportadas y sustentadas por parte de los evaluadores (concejales).

-. Los evaluadores (concejales) faltaron a su deber objetivo, imparcial y transparente, toda vez que al momento de calificar las entrevistas se pusieron de acuerdo, con el único propósito de beneficiar a la aspirante **Katherine Arenas Álvarez**; afirmación que soporta con las hojas de calificación, donde 8 concejales le pusieron 100 a la aspirante mencionada, sin exponer las razones por las cuales le daban el máximo puntaje permitido.

-. Igualmente, se pusieron de acuerdo -considera que no debe tomarse como mera coincidencia- que los mismos ocho concejales la calificaron a ella -**Patricia Morera**- con 1, la mínima calificación permitida.

-. Una vez finalizadas las pruebas -evaluaciones de las hojas de vida, de conocimientos y entrevista- la mesa directiva expidió la correspondiente lista de elegibles, atendiendo la consolidación de resultados.

-. El 18 de diciembre de 2020, la plenaria del Concejo Municipal adelantó la respectiva elección del cargo de secretaria general, sesión en la que también se presentan irregularidades, tales como:

a.- Una vez expedida la Lista de Elegibles, los concejales debían, en virtud de la convocatoria, elegir el primero de la lista que, para este caso, obedecía a ella -**Patricia Morera Anaya.**

b.- Al momento de la votación, efectivamente 8 concejales -**Wilmer Orlando Carvajal Olaya, Jhonny Andrés Basto Hernández, José Jair Echeverry Ospina, Héctor Reyes Rativa, Luis Carlos Richard Rodríguez, Orlando Granados Acevedo, Arnold Mauricio Pinilla Triana** y **Gildardo Santos Chaparro**- manifestaron a viva voz, mediante el uso de la palabra al momento de votar, que su voto era por ella -**Patricia Morera Anaya;** así que, de los 15 votos posibles, ella tenía 8.

c.- Al momento de contar los votos, por extrañas circunstancias, la comisión escrutadora contó 8 votos en favor de **Katherine Arenas Álvarez** y 7 en favor de **Patria Morera**, hecho contrario a lo expuesto por los concejales al momento de votar.

-. La comisión escrutadora y la mesa directiva declararon elegida a **Katherine Arenas Álvarez** como secretaria general para la vigencia 2021.

-. La situación presentada en la entrevista, la forma de calificación en la prueba de evaluación de 8 concejales, la cual fue realizada sin argumentos serios, parcializados y amañados, con un claro y notorio direccionamiento de lo que iba a ser la elección plenaria, su actuar doloso y mal intencionado en el resultado del proceso de selección, aún mas grave el hecho que 8 concejales manifestaran su intención de voto por **Patricia Morera**, y luego, la comisión escrutadora solo cuenta 7 votos, todos ellos, son hechos que vulneran sus derechos fundamentales.

-. El Concejo no respetó los principios al mérito, al no elegir a la primera de la lista de elegibles.

- Con base en dichos precedentes, la accionante solicita que:

-. Se protejan sus derechos derechos al debido proceso, igualdad, trabajo y acceso a los cargos públicos por concurso de méritos, vulnerados por el **Concejo Municipal de Acacías -Meta.**

-. Se ordene al Concejo Municipal accionado respetar la lista de elegibles proferida al interior del Concurso de Méritos para el nombramiento de la secretaria general de ese órgano colegiado.

-. Se ordene al Concejo Municipal elegir como secretaria general de ese órgano colegiado a quien ocupó el primer puesto del concurso de méritos adelantado.

2-. Respuesta de las accionadas y vinculadas.

Con ocasión de la vacancia judicial iniciada el 19 de diciembre de 2020, el Consejo Seccional de la Judicatura del Meta emitió el Acuerdo No CSJMET202-107 del 28 de octubre de 2020, con el cual asignó turno para dicho periodo al **Juzgado Promiscuo Municipal de Guamal, Meta,** autoridad judicial que, finalmente, avocó el conocimiento de la acción de tutela, mediante providencia del 22 de diciembre de 2020, y emitió el fallo que ahora se revisa.

En el auto admisorio se dispuso la notificación de la entidad accionada Concejo Municipal de Acacías, Meta.

Posteriormente, mediante providencia del 24 de diciembre de 2020, el a quo dispuso la vinculación de la **Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC-**; de cada uno de los concejales: **Liliana Marcela Baquero Torres, Jhonny Andrés Bastón Hernández, Wilmer Orlando Carvajal Olaya, Ferley Carvajal Rey, Andrés Mauricio Chávez Quevedo, Zulma Yolima Diaz Díaz, José Jair Echeverry Ospina, Jhonny Stevenson Giraldo Aragón, Orlando Granados Acevedo, Arnold Mauricio Pinilla Triana, Víctor Julios Ramos Cuvillos, Héctor Reyes Rativa, Luis Carlos Richar Rodríguez Cortes, Gildardo Santos Chaparro** y **Alexander Valero**, y, de cada una de las aspirantes del Concurso de Méritos par nombrar secretario general del Concejo Municipal accionado, ellas son, **Katherine Arenas Álvarez, Johana Patricia Ovalle Rojas, Angelica Alejandra Ordoñez Osorio** y **Lizeth Katherine Rodríguez Prieto.**

2.1.- Respuesta de la concursante Angelica Alejandra Ordoñez Osorio.

La participante del Concurso para nombrar el secretario general del Concejo Municipal accionado, frente a los hechos expuestos por la accionante, expuso lo siguiente:

"PRIMERO: CIERTO, la corporación apertura una convocatoria para la elección de la Secretaria General de ese organismo.

SEGUNDO: NO ME CONSTA, sin embargo, como se observa en las pruebas aportadas se observa el nombre de la accionante dentro de las listas y resultados de las etapas de la convocatoria como también, aparece mi nombre como concursante.

TERCERO: ES CIERTO, EL 16/Dic/2020, se llevó a cabo la entrevista de las concursantes que realizamos la prueba, estableciéndose las reglas de la misma en la Resolución No. 073 de 2020, en especial la forma de calificación de 1 a 100 donde los evaluadores debían soportar sus calificaciones de manera objetiva, sin razones políticas, sin distinción de residencia y forma de presentación de la prueba, como sucedió en mi caso que, me discriminaron por residir en otro municipio y haber presentado la entrevista de forma virtual (evaluadores 7, 6 y 3) el resto se abstuvieron a soportar las respuestas.

Es de resaltar que, los evaluadores se encontraban evidentemente inclinados y divididos ante dos (2) candidaturas, es decir, por la accionante la Sra. Moreno Anaya y la Sra. Arena Alvares, lo anterior se prueba con sólo el analizar los resultados de las calificaciones de los evaluadores que, se precavieron a calificar con los resultados mas bajos a quienes no contábamos con acompañamiento político, como fue en mi caso que participe con la legitima confianza de poder hacer parte de un concurso trasparente y no irregular e parcializado como realmente sucedió.

CUARTO: ES CIERTO PARCIALMENTE, es totalmente cierto que, los evaluadores faltaron a la forma de evaluar de manera responsable, imparcial, objetiva y con mayor énfasis con Transparencia a la entrevista de quienes participamos en ella con la legitima confianza de encontrar una oportunidad y no una mera formalidad de llenar espacios para justificar el actuar de un Concejo dividido políticamente ante dos candidatas la Sra. Moreno Anaya y la Sra. Arena Alvares.

Confianza que se quebranta con la forma en que se calificó y por no haberse considerado la experiencia y formación académicas de quienes nos postulamos como es mi caso la única profesional con sólo la falta de la graduación.

QUINTO: ES CIERTO, El concejo violo con flagrancia los principios de imparcialidad, moralidad y selección objetiva no de la Sra. Moreno Anaya y la Sra. Arena Alvares, si no de quienes participamos creyendo en la meritocracia.

SEXTO: ES CIERTO, pero se expidió de forma irregular.

SÉPTIMO: NO ME CONSTA, no me permitieron llegar a esa instancia, luego que era evidente la inclinación del concejo ante las concursantes Sra. Moreno Anaya y la Sra. Arena Alvares, sin embargo, esto es una prueba más de que la división política de la corporación que vulnero los Derechos no de la accionante sino de quienes participamos creyendo en el mérito.

OCTAVO: NO ME CONSTA.

NOVENO: ES CIERTO, aclarando que, la forma de calificación sólo dio muestra de división política e inclinación ante dos candidatas la Sra. Moreno Anaya y la Sra. Arena Alvares, defraudando verdaderamente a quienes participamos creyendo en la meritocracia.

DÉCIMO: No es un hecho es una afirmación, lo cierto es que, el concurso desde su inicio estuvo direccionado hacia dos candidatas la Sra. Moreno Anaya y la Sra. Arena Alvares, y quienes creíamos en la meritocracia estamos condenados al fracaso, como es mi caso que cuento con la mejor preparación académica y cuento en experiencia suficiente para el cargo."

Con base en los precedentes, la concursante, vinculada a la presente acción de tutela, solicita en su contestación lo siguiente:

"1. ACCEDER a proteger los Derechos Fundamentales de manera PARCIAL en protección de Derechos consolidados de quienes los que hasta el momento tenemos aspiraciones legítimas para ser elegidos por haber pasado las diferentes etapas con éxito,

2. ORDENAR al Concejo de Acacias Meta, realice nuevamente la etapa de entrevistas a todos concursantes con la OBLIGACIÓN de la corporación para que la califique bajo las reglas de la Resolución No. 073 de 2020.

3. ORDENAR al Concejo de Acacias Meta, realice me realice la entrevista de manera virtual por ser una ciudadana residente del Municipio de Zarzal (V), y debido a la distancia y el crecimiento y el peligro de contagio de Sars-Corv2."

2.2.- Respuesta de la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC.

El apoderado de la Comisión señala que, en el caso de esa entidad se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva.

2.3.- Respuesta del concejal Andrés Mauricio Chávez Quevedo.

El Concejal, vinculado a la presente acción de tutela, manifestó que de acuerdo al reglamento interno del Concejo Municipal, Acuerdo 427 del 2016, artículo 50, y, artículo 2° del Acto Legislativo 02 del 2015, la forma de elección del cargo de secretaria general de ese órgano colegiado, es mediante la figura de Convocatoria, y, no de Concurso de Méritos; razón por la cual, hace énfasis en la diferencia entre estas dos figuras, advirtiendo que, en el marco de la primera no es obligación del Concejo elegir quien ocupe el primer puesto, pues ello ocurre es en los concursos de méritos.

En ese sentido, solicita que, se denieguen las pretensiones de la accionante, por cuanto carecen de fundamento, además, acceder a las mismas, sentaría un

precedente equivocado, máxime, cuando los nombramientos del cargo de secretario general de los Concejos Municipales del orden nacional, se realizan a través de Convocatoria Pública, y, de la lista de elegibles resultante de las pruebas realizadas, los concejales tienen la potestad de elegir a quienes en su discrecionalidad decidían, esto, por cuanto los Concejos son órganos Político-Administrativos.

2.4.- Respuesta del concejal Farley Carvajal Rey.

El concejal solicitó que se restituyera el derecho adquiridos por la señora **Katherine Arenas Alvares,** quien fue elegida por el Concejo Municipal de Acacías, Meta, como secretaria general, quien superó todas las pruebas y hace parte de la lista de legibles resultante de la Convocatoria adelantada por ese órgano; también, pidió que se negaran las pretensiones de la accionante, quien confunde Convocatoria Pública con Concurso Público de Méritos.

III-. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El juzgado de conocimiento, mediante fallo del 6 de enero de 2021, resolvió lo siguiente:

> *"PRIMERO: CONCEDER la acción de tutela instaurada por PATRICIA MORERA AMAYA por las razones dadas en la parte motiva de esta providencia.*
>
> *SEGUNDO: Ordenar a los integrantes del Concejo Municipal de Acacias Meta, al Presidente del Concejo Municipal de Acacias Meta que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación del presente fallo, procedan a nombrar en el cargo de secretaria general del concejo municipal de Acacias Meta para el período 2021 a la señora PATRICIA MORERA ANAYA, quien obtuvo el mayor puntaje en el proceso de méritos convocado para el efecto según consolidación de resultados de la lista de elegibles.-*
>
> *TERCERO: Notifíquese a la accionante, a los integrantes del Concejo Municipal de Acacias, al presidente del Concejo Municipal de Acacias, a las personas participantes de la convocatoria, al Departamento Administrativo del Servicio Civil, y a las demás involucrados en los hechos el contenido de este fallo por el medio más expedito."*

IV-. IMPUGNACIÓN

Como en el presente caso se formularon varias impugnaciones contra el fallo de primera instancia, todas ellas con el objetivo que se revocara la decisión, y en su lugar, se negaran las pretensiones de la accionante, por no existir transgresión de los derechos fundamentales alegados, se hará alusión a cada una de ellas de la siguiente manera:

4.1.- Impugnación de la concejal Zulma Yolima Díaz Díaz:

La concejal fundamentó su recurso en tres puntos, a saber:

a.- Criterios para la elección del secretario del Concejo Municipal.

Para el caso concreto, de conformidad con lo determinado en el artículo 50 del Acuerdo 427 de 2016, a través del cual se establece el Reglamento Interno del Concejo Municipal de Acacías, "*El secretario general será elegido por el concejo para un período legal de un (1) año, de la lista de admitidos previa convocatoria pública con criterios de mérito*". Asimismo, la Resolución N°18 del 05 de marzo de 2020, expedida por la actual Mesa directiva, mediante la cual actualizo y ajustó el Manual de funciones y competencias, en cuanto al cargo de Secretario General del Concejo Municipal de Acacías, estableció que *"El cargo de Secretaria General del Concejo será elegido por los Concejales del Municipio de Acacías, previa convocatoria realizada, verificación de requisitos mínimos establecidos y entrevista pública ante la plenaria donde se surtirá finalmente el proceso de elección".*

En ejercicio de las anteriores facultades, la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Acacías expidió la Resolución 048 del 17 de noviembre de 2020 "Por medio de la cual se realiza una convocatoria para la elección de la Secretaria General del Concejo Municipal de Acacías", la cual fue modificada por la Resolución 073 del 1 de diciembre de 2020 y la Resolución 077 del 17 de diciembre de 2020.

En las referidas resoluciones se establecieron las reglas de la Convocatoria Pública para la elección del Secretario General del Concejo, dentro de los cuales está:

1. Requisitos y documentos.
2. Pruebas, puntaje y ponderación.
3. Etapas de la estructura del proceso.
4. Cronograma del proceso.
5. Principios orientadores del proceso.
6. Empleo convocado.
7. Naturaleza del cargo.
8. Funciones.
9. Reclamaciones.

Como se puede observar, en la convocatoria pública para la elección del Secretario General del Concejo municipal de Acacías, se cumplieron con los criterios de mérito que establece el artículo 126 de la Constitución Política y de acuerdo al alcance dado por el Consejo de Estado, el cual estableció*: "Se podría decir entonces que la convocatoria pública, como está consagra en el artículo 126 Superior, es un nivel intermedio entre ese tipo de procedimientos en los que no necesariamente se debe designar*

a quien ocupe el primer lugar en una lista de elegibles – como sí ocurre en los concursos de mérito–, pero que, en todo caso, sí requiere de la fijación de unos procedimientos y requisitos mínimamente reglados –lo cual se evidencia en menor medida en los avisos de invitación– que consulten criterios de mérito".

Como se puede observar, con la convocatoria se buscó establecer la capacidad e idoneidad de la persona que fuera a ocupar el cargo de Secretario General a través del estudio de las (i) calidades académicas, (ii) la experiencia y (iii) las competencias.

b.- Diferencia entre el concurso público de mérito y la convocatoria pública.

Si bien el mecanismo de convocatoria consagrado en la Carta y el concurso público tienen como común denominador el "mérito", uno y otro no son equiparables, pues, mientras este último es la regla general, el primero constituye un procedimiento exceptivo y, por tal, con características propias.

Sobre este punto el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, a través del concepto de noviembre diez (10) de 2015, radicación No. 2274, expediente No. 11001-03-06-000-2015-0182-00, C.P. Álvaro Namen Vargas, sobre la diferencia entre el concurso público de mérito y la convocatoria pública, se pronunció en los siguientes términos:

> *"en el caso consultado los debates legislativos dan cuenta de que el Acto Legislativo 2 de 2015 al utilizar la expresión "convocatoria pública" optó por un mecanismo de elección que si bien se funda en los mismos principios básicos de los concursos públicos (incluso en cuanto al criterio de mérito), se diferencia de estos en que al final del proceso de selección las corporaciones públicas conservan la posibilidad de valorar y escoger entre los candidatos que han sido mejor clasificados. Se entendió que, si se adoptaba un concurso público de méritos como tal, se obligaba al organismo nominador a nombrar de acuerdo con el orden de clasificación de los aspirantes, lo que se consideró como una reducción indebida de la autonomía de las corporaciones públicas. Por tanto, se dijo, era necesario acudir a un sistema transparente, público, objetivo y basado en el mérito, pero que fuera distinto al concurso público en cuanto permitiera al organismo elector escoger entre los varios candidatos que superaran la etapa de selección. (...) el constituyente derivado quiso diferenciar la convocatoria pública del concurso público de méritos del artículo 125 de la Constitución Política, particularmente porque en los procesos de elección mediante convocatoria pública no existe un orden obligatorio de escogencia entre los candidatos que superan las etapas de selección, tal como ocurre en los concursos de méritos. (...) Sin embargo, en lo demás (publicidad de la convocatoria, reclutamiento de los mejores perfiles, transparencia, aplicación de criterios objetivos y de mérito, etc.) puede decirse que no existen diferencias sustanciales entre uno y otro mecanismo de selección de servidores públicos".*

De lo anterior se concluye que una de las principales diferencias entre el concurso público de mérito y la convocatoria pública está en la etapa de elección, ya que en el

primero el nominador obligatoriamente debe elegir a la persona que haya ocupado el primer lugar en la lista de elegibles, mientras que en el segundo no existe un orden obligatorio de selección, lo anterior, atendiendo el principio de autonomía de las corporaciones públicas.

c.- Error en los criterios jurídicos que sustentan el fallo de primera instancia.

Dentro de los argumentos que sustentan la sentencia de primera instancia de la tutela de la referencia, el juez constitucional establece:

> *"Se tiene el concepto a nivel jurisprudencial que la lista de elegibles es el acto administrativo que conforma y adopta una entidad, que el mismo otorga una posición a los elegibles en estricto orden de mérito, y esta posición de ubicación se crea a partir de los resultados obtenidos en el proceso de selección para la provisión de un empleo, en el caso concreto se trata para proveer el cargo de secretaria general del concejo municipal de Acacias por el año 2021 en cuyo listado figura la accionante en el primer puesto con un puntaje según la tabla que obra en el proceso y es la misma que se transcribió en esta sentencia de tutela, puntaje que corresponde al valor numérico de 92.15."*

Asimismo, el juez de tutela expresó lo siguiente:

> *"Para el despacho judicial es claro entonces, que las corporaciones públicas en este caso el ente accionado no puede transgredir derechos fundamentales de la concursante, por lo tanto, la lista de elegibles es un acto administrativo de carácter particular que debe ser utilizada para proveer los cargos convocados. El fin de la lista de elegibles es el tener por parte del nominador el resultado de la participación en el concurso de méritos, en la que de manera ordenada se indican las personas que alcanzaron los mejores resultados en las diferentes pruebas realizadas para acceder a los respectivos cargos ofertados. De acuerdo a la Jurisprudencia Constitucional la provisión de cargos debe tener en cuenta el orden establecido en el correspondiente registro de elegibles, so pena de afectar diversos derechos fundamentales".*

Al estudiar el fallo de primera instancia, se observa que el sustento jurídico que utiliza el juez está relacionado con el concurso público de mérito, que como se explicó anteriormente, difiere del alcance de la convocatoria pública que deben adelantar las corporaciones públicas para la elección de los servidores públicos de acuerdo a lo establecido en el artículo 126 de la Constitución Política de Colombia.

Así las cosas, yerra el juez de tutela al concluir que la persona que ocupó el primer lugar en la lista de elegibles como resultado de la convocatoria pública debe ser obligatoriamente elegido como secretario general del concejo municipal, ya que mantener esta tesis, es equiparar la convocatoria pública con el concurso público de méritos, lo cual desconoce el espíritu del artículo 126 de la Constitución Política, que como se citó anteriormente, que no es otro que crear un mecanismo de elección que si bien se funda en los mismos principios básicos de los concursos públicos

(incluso en cuanto al criterio de mérito), se diferencia de estos en que al final del proceso de selección las corporaciones públicas conservan la posibilidad de valorar y escoger entre los candidatos que han sido mejor clasificados, en atención de principio de autonomía de las corporaciones públicas, que en últimas, fue lo que hizo el Concejo de Acacías.

En conclusión, la recurrente considera que, el **Concejo Municipal de Acacías Meta,** no le vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, al principio de confianza legítima y acceso a cargos públicos invocados por la accionante, y tutelados por el juez de primera instancia, toda vez que como se ha explicado en el presente documento, la referida Corporación actuó de acuerdo con la discrecionalidad que le otorga el artículo 126 de la Constitución Política, en atención al principio de autonomía.

4.2.- Impugnación del presidente del Concejo Municipal de Acacías -Meta.

El presidente del Concejo accionado, formuló recurso de impugnación, fundamentando el mismo en que, atendiendo a las consideraciones esbozadas por el *a quo* sobre la decisión adoptada, es fundamental establecer la clara diferencia sobre el sentido esencial de la Convocatoria Pública, y el hilo conductor que determina la brecha existente con el denominado Concurso de Méritos, porque no puede considerarse que ambos son iguales, porque son disímiles, en el aspecto del orden de elegibilidad, y que la estructura del proceso, en el caso específico, puede determinarse el procedimiento por parte de la Corporación Pública, por cuanto, se ciñe al reglamento interno del Concejo, y si en el mismo no reza de forma específica, el acto administrativo de Convocatoria lo determinará, situación que es distinta en un concurso, que, en su mayoría, están reglados, por ejemplo, los concursos de carrera de régimen especial, caso que no es asunto a tratar en este recurso.

El problema jurídico que es derrotero del sustento de la impugnación a la decisión adoptada en primera instancia por el Juzgador en relación a decidir conforme a que se emitió una lista de elegibles por parte de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Acacías, y apreciando que la señora **Patricia Morera Anaya**, es quien ocupaba el primer lugar, debía ser ella, quien fuese elegida, situación jurídica que cercenaba totalmente el derecho al voto por los Concejales, y afecta profundamente el ejercicio constitucional de ámbito político sobre la elección de funcionarios, toda vez que, si se mantiene dicha regla de elegir en el orden estricto, se entraría en el campo de un concurso de méritos, desdibujando el sentido de la norma cuando el Legislador expidió el Acto Legislativo 02 de 2015, sembró una clara diferenciación entre convocatoria pública y el concurso de méritos, y precisó que si bien ambos

comparten los principios orientadores, y el criterio de mérito es piedra angular, el primero, la convocatoria permite un radio de acción por los miembros de una corporación pública, como lo es el Concejo Municipal de Acacías, para decidir mediante votación secreta quien debe ser la Secretaria General del Concejo, por esto, no es dable restarle dicha autonomía que guarda la entidad político-administrativa.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 136 de 1994, *"El Concejo Municipal elegirá un secretario para un periodo de un año, reelegible a criterio de la corporación y su primera elección se realizará en el primer periodo legal respectivo."*.

Esta disposición establece que corresponde al Concejo realizar la elección de su secretario. Sin embargo, la norma no previó ningún trámite o procedimiento para el efecto, razón por la que se entendía que la corporación pública tenía discrecionalidad y autonomía para fijar la forma en la que realizaría la designación. Sin embargo, a raíz de la expedición del Acto Legislativo 2 de 2015 las funciones electorales asignadas a las corporaciones públicas deben ejecutarse de acuerdo con lo establecido en el artículo 126 Superior.

Por tanto, no cabe duda de que por disposición constitucional desde el año 2015 las designaciones a cargo de las corporaciones públicas, entre las cuales se encuentran los concejos municipales deben estar precedidas de una convocatoria pública regulada por la ley, entidad que debe ceñirse a los postulados ahí expuestos.

El juzgador reitera y cita la Sentencia T-502-2010/ Concurso de Méritos de la Corte Constitucional, aduciendo que descarta de plano que el Concejo Municipal tenga la autonomía para elegir a la Secretaría General conforme una lista de elegibles, sin que sea de obligatorio cumplimiento designar a la persona ubicada en el primer lugar de la lista, y procede a citar la sentencia referida en este párrafo, la cual plasma el caso sobre un concurso de méritos, lo cual es, totalmente distinto a la convocatoria pública para elección de funcionarios como la Secretaria General del Concejo, donde los Concejales les asiste el derecho en plenaria de realizar votación como órgano político que es, y asimismo, derivado del resultado elegir a quien consideren idóneo basado en el mérito, por tanto, la referencia jurisprudencial no es admisible para el caso concreto.

4.3.- Impugnación de la concejal Liliana Marcela Baquero Torres.

En el escrito de impugnación, la concejal también hace referencia a la diferencia entre Convocatoria Pública y Concurso de Méritos, señala la normatividad aplicable al caso de elección del secretario general del Concejo Municipal de Acacías, Meta, explica la naturaleza del cargo, cita cada uno de los Actos Administrativos que

deben ser tenidos en cuenta al momento de decidir el caso tutelado, resume cada uno de las fases de la Convocatoria aquí cuestionada y hace énfasis en la legalidad de la elección del cargo convocado.

Con base en lo anterior, concluye que, no se materializa la violación de derechos fundamentales invocados por la accionante y erro el a quo al desestimar las razones expuestas en la contestación de la tutela, al dar por hecho que del proceso de selección realizado para el cargo convocado aplicaba la modalidad de concurso de méritos y se obligaba al concejo a elegir al primero de la lista de elegibles. Desconociendo el alcance que el legislador mediante acto legislativo le quiso dar al diferenciar la forma de proveer el cargo de secretaria general de una corporación pública. Al no haberse materializado violación alguna a los derechos fundamentales impetrados por la accionante, en cambio si los derechos de la accionante tienen límites que podrían a raíz de la decisión errada del A quo al realizar una indebida interpretación y aplicación del mérito en convocatoria pública, vulnera los derechos que le genero la elección de la secretaria a la concursante elegida por la corporación.

V-. RAZONAMIENTOS QUE FUNDAMENTAN LA CONCLUSIÓN

1-. Problema Jurídico

Con fundamento en la decisión cuestionada y las razones expuestas por los concejales recurrentes, corresponde a este juzgador resolver si se debe revocar el fallo de primera instancia, que concedió el amparo constitucional deprecado por la señora **Patricia Morera Anaya**, y, ordenó su nombramiento como secretaria general del **Concejo Municipal de Acacías -Meta,** y en su lugar, negar la acción de tutela, atendiendo que existió error por parte del a quo al no diferenciar entre Concurso de Méritos y Convocatoria Pública.

Sin embargo, previo a resolver el problema jurídico anterior, debe el despacho analizar sí la acción de tutela es procedente para resolver de fondo la controversia suscitada entre los participantes de una Convocatoria Pública y el órgano colegiado que convoca, atendiendo que en dichos eventos existen otros medios de defensa judicial.

2-. Sobre la procedencia de la acción de tutela cuando existen otros medios de defensa judicial.

Conforme al artículo 86 de la Constitución y a lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la Acción de Tutela, de manera general, ésta tiene como objeto la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas *"cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la*

omisión de cualquier autoridad pública" o, de un particular en las condiciones determinadas en dichas normas. Procede siempre y cuando no exista otro medio judicial de defensa idóneo, es decir, tanto o más eficaz que la acción de tutela para lograr la garantía efectiva del derecho vulnerado o amenazado, a menos que se ejerza como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Es, además, un mecanismo subsidiario; en cuanto que solo resulta procedente cuando se carece de otro medio judicial ordinario para el efecto de su protección. No obstante, excepcionalmente, pero de manera transitoria procede así exista otro instrumento judicial ordinario cuando se trata de evitar un perjuicio irremediable, de forma que de no ser recurriendo a ella, tal perjuicio se consumaría irreversiblemente.

2.1.- Análisis del caso concreto - Procedencia de la acción de tutela para intervenir en el proceso de selección del cargo de secretario general de un Concejo Municipal.

Acorde con la documental aportada se tiene:

-. La Mesa Directiva del **Concejo Municipal de Acacías -Meta,** profirió la Resolución No 48 del 17 de noviembre de 2020 *"Por medio del cual se realiza una Convocatoria para la elección de la secretaria general del Concejo Municipal de Acacías"* (Fls. 134 al 139).

-. La Mesa Directiva del **Concejo Municipal de Acacías -Meta,** profirió la Resolución No 73 del 1° de diciembre de 2020 *"Por medio de la cual modifica la Resolución 48 de 2020 "Por medio de la cual se realiza una Convocatoria para la elección de la secretaria general del Concejo Municipal de Acacías"* (Fls. 140 al 145).

-. La Mesa Directiva del **Concejo Municipal de Acacías -Meta,** profirió la Resolución No 77 del 17 de diciembre de 2020 *"Por medio de la cual se ajusta y modifica la Resolución 073 de 2020 y se dictan otras disposiciones en el marco de la Convocatoria para la elección de la secretaria general del Concejo Municipal de Acacías"* (Fls. 20 al 24).

-. En la Convocatoria para la elección de la secretaria general del Concejo Municipal accionado fueron admitidas las concursantes: **Patricia Morera Anaya, Katherine Arena Álvarez, Johana Patricia Ovalle Rojas, Angelica Alejandra Ordoñez Osorio** y **Lizeth Katherine Rodríguez Prieto** (Fl. 25).

-. Que mediante Acta No 5 el Concejo Municipal accionado emitió el consolidado de Resultados obtenido por las aspirantes dentro del proceso de selección de la secretaria general, dentro de la cual se publicaron los resultados en orden, de la siguiente manera:

LISTA DE ELEGIBLES EN ESTRICTO ORDEN DE RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE LAS PRUEBAS REALIZADAS

ORDEN	IDENTIFICACION DE LOS ASPIRANTES		PONDERACION DE PUNTAJES			CONSOLIDACION RESULTADO FINAL			
NUM.	NOMBRE COMPLETO DEL ASPIRANTE	NUM. CEDULA	CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	ESTUDIOS ADICIONALES	EXPERIENCIA	TOTAL PARCIALIDAD	PRUEBA CONOCIMIENTOS 5%	PRUEBA ENTREVISTA 5%	TOTAL CONVOCATORIA 100
1	Patricia Morera Anaya	55.058.656	60	10	10	80	7,5	4,65	92,15
2	Katherine Arenas Alvarez	1.030.564.899	60	10	10	80	5	5,99	90,99
3	Angélica Alejandra Ordoñez O	1.112.626.153	60	10	10	80	5,5	2,11	87,61
4	Lizeth Katherine Rodríguez P.	1.122.134.161	60	10	10	80	5,5	1,60	87,10
5	Johana Patricia Ovalle Rojas	40.434.906	60	10	0	70	4,7	1,94	75,94

ORLANDO GRANADOS ACEVEDO
Presidente Concejo Municipal

HECTOR REYES RATIVA
1ER Vicepresidente

ARNOLD MAURICIO PINILLA TRIANA
2DO Vicepresidente

-. Que el 18 de diciembre de 2021 se llevó a cabo la etapa de la Convocatoria denominada *"Elección y Posesión secretario (a) general del Concejo Municipal"*, en donde los diferentes concejales emitieron de forma escrita y secreta su voto por cada una de las aspirantes inscritas en la Lista de Elegibles publicada por la Mesa Directiva del órgano accionado.

Ahora, como se ha dicho, la accionante centra la acción de tutela en el hecho que, pese haber ocupado, por mérito, el primer lugar en la lista de elegibles, no obstante, en la elección surtida el 18 de diciembre de 2021, los miembros del Concejo Municipal, que en su mayoría habían votado por ella, finalmente, optaron por elegir a la segunda aspirante inscrita, vulnerando con ello sus derechos al debido proceso, igualdad, trabajo y acceso a los cargos públicos por concurso de méritos.

Empero, debe el despacho señalar que, frente a las controversias suscitadas entre los participantes de una Convocatoria Pública y el órgano colegiado que convoca, existen otros medios de defensa judicial, siendo el idóneo y eficaz el denominado medio de control de *"Nulidad Electoral"*, consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011 -Código Contencioso Administrativo- el cual establece lo siguiente:

> *"ARTÍCULO 139. NULIDAD ELECTORAL. Cualquier persona podrá pedir la nulidad de los actos de elección por voto popular o por cuerpos electorales, así como de los actos de nombramiento que expidan las entidades y autoridades públicas de todo orden. Igualmente podrá pedir la nulidad de los actos de llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones públicas."*

A este respecto llama la atención del despacho, una de las pruebas aportadas por la recurrente -concejal- **Liliana Baquero**, quien allega la providencia proferida el 19 de noviembre de 2020 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, en donde se: *"... profiere sentencia por escrito de única instancia dentro del proceso de nulidad electoral instaurado por JOSÉ ENRIQUE MOLINA ROJAS contra*

el acto de elección de la Secretaria General del Concejo Municipal de Acacías (Meta), señora LEIDY ALEXANDRA ROMERO URUEÑA para el periodo 2020, contenido en el Acta de Sesión Plenaria No. 002 del 03 de enero de 2020."

Como se observa, dentro de dicho proceso de Nulidad Electoral también se discute la elección de la secretaria general del **Concejo Municipal de Acacías, Meta**, para el periodo 2020, trámite procesal dentro del cual se resuelve lo siguiente:

> **PRIMERO: DECLARAR** la nulidad parcial del Acta de Sesión No. 02 del 03 de enero de 2020 del Concejo Municipal de Acacías-Meta, en lo que respecta a la elección de la señora LEIDY ALEXANDRA ROMERO URUEÑA, como Secretaria General del Concejo Municipal de Acacías para el periodo 2020.
>
> **SEGUNDO:** Contra la presente decisión no procede recurso de apelación, al tratarse de un proceso de única instancia.
>
> **TERCERO: NOTIFICAR** esta decisión al demandante, señor JOSÉ ENRIQUE MOLINA ROJAS, a los demandados, Concejo Municipal de Acacías-Meta y la señora LEIDY ALEXANDRA ROMERO URUEÑA y a la agente del Ministerio Público, de conformidad con el artículo 289 del CPACA.
>
> **CUARTO:** Ejecutoriada esta providencia, archívense las diligencias.

En ese sentido, debe concluir el despacho que dicho medio de control resulta idóneo y eficaz para resolver el problema jurídico planteado por la accionante en el presente trámite constitucional, legitimando la improcedencia de la acción por existir otro medio de defensa judicial.

Además, debe atenderse que, en este evento, la acción constitucional no se interpone como "*mecanismo transitorio"* para evitar un perjuicio irremediable, por tanto, no existe justificación o razón alguna para inaplicar el numeral 1°, artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 el cual reza que la acción de tutela no procederá *"Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante."*

En esencia, se reitera que no se evidencia que los mecanismos ordinarios de defensa judicial no sean idóneos para garantizar una solución adecuada a la controversia planteada. Por el contrario, como se expresó, pretermitiendo acudir ante el juez natural se busca por esta vía sustituirlo.

En igual sentido, debe advertirse a la parte accionante que el primer análisis que se surte al interior de la acción de tutela, radica en la procedencia del mecanismo constitucional, determinando para ello si se cumplen con los requisitos de subsidiaridad e inmediatez, por tanto, en caso que no se encuentre acreditado uno de

ellos, como sucede en el caso concreto en donde no se acreditó el cumplimiento del requisito de subsidiaridad, corresponde al Juez Constitucional declarar la improcedencia de la acción, sin que para ello requiera realizar un análisis profundo de los hechos expuestos en la acción de tutela

Conforme a las razones expuestas se revocará el fallo proferido en primera instancia, que concedió la acción de tutela impetrada por la señora Patricia Morera Anaya y, en su lugar, se negará por improcedente el amparo constitucional deprecado.

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE ACACIAS, META, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, actuando como juez constitucional,

R E S U E L V E:

Primero-. Revocar el fallo de primera instancia proferido el 6 de enero de 2021 por el **Juzgado Promiscuo Municipal de Guamal, Meta,** por las razones expuestas.

Segundo-. En su lugar, **negar** por improcedente el amparo constitucional deprecado por la señora **Patricia Morera Anaya**, identificada con cédula de ciudadanía No 55.058.856.

Tercero-. Comuníquese lo resuelto, tanto al Juez *a quo* como a las partes, por los medios más expeditos y eficaces.

NOTIFÍQUESE Y ENVÍESE A LA H. CORTE CONSTITUCIONAL PARA SU EVENTUAL REVISIÓN-.

El Juez,



DIDIER LÓPEZ QUICENO

RV: contestacion DDA LILIANA BAQUERO RADICADO: 50001-23-33-000-2021-00272-00

Secretaria General Tribunal Administrativo - Seccional Villavicencio <sgtadmvcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mar 10/08/2021 17:36

Para: Gina Paola Rodriguez Gomez <grodrigg@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Iser Leonardo Tejeiro Quintero <itejeirq@cendoj.ramajudicial.gov.co>

7 archivos adjuntos (21 MB)

ACTA No 132 DE DICIEMBRE 12 DE 2020.PDF; INFORME COMISION. SECRETARIA 2021.pdf; IMPUGMACION DE TUTELA - CONCEJAL ACACIAS LILIANA MARCELA BAQUERTO TORRES.docx; ACTA No 133 DE DICIEMBRE 16 DE 2020.PDF; SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA O-275-2019.docx; Acuerdo No. 427 Diciembre 9 de 2016.PDF; CONTESTACION DDA LILIANA BAQUERO.pdf;

De: LILIANA BAQUERO TORRES <liliconcejal@gmail.com>
Enviado: martes, 10 de agosto de 2021 4:32 p. m.
Para: Secretaria General Tribunal Administrativo - Seccional Villavicencio <sgtadmvcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>; LILIANA BAQUERO TORRES <liliconcejal@gmail.com>
Asunto: contestacion DDA LILIANA BAQUERO RADICADO: 50001-23-33-000-2021-00272-00

Cordial saludo:

me permito dentro del término presentar demanda al proceso de referencia, con los soportes y anexos respectivos.

Dios les bendiga

,

LILIANA MARCELA BAQUERO TORRES
CONCEJALA DE ACACIAS

Acacias, 05 de agosto de 2021

Honorable Magistrados
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META
H. MP. DRA NOHORA EUGENIA GALEADO PARRA
Villavicencio - Meta
E. S. D.

Asunto: **CONTESTACIÓN DEMANDA PERDIDA DE INVESTIDURA**.

RADICADO: 50001-23-33-000-2021-00272-00
ACCIONANTES: Wilmer Olaya, Orlando Granados, Héctor Reyes y Jhonny Bastos.
ACCIONADOS: Víctor Ramos, Farley Carvajal, Mauricio Chávez, Jhonny Giraldo, Alexander Valero, Zulma Diaz, Liliana Baquero y Gildardo Santos.

Respetada Magistrada:

La suscrita **LILIANA MARCELA BAQUERO TORRES**, mayor de edad, domiciliada en Acacías, identificada con Cédula de ciudadanía No 40219134 de Villavicencio - Meta, Concejala en ejercicio del Municipio de Acacías, obrando en representación propia, me permito contestar la demanda de **PERDIDA DE INVESTIDURA** en la cual soy uno de los demandados, proceso con radicado: **N° 50001-23-33-000-2021-00272-00,** en los siguientes términos:

1. PRETENSIONES:

Desde ahora me opongo a todas y cada una de las pretensiones, por cuanto los actores carecen de fundamentos de hecho y de derecho frente a las mismas, de tal suerte que sus pretensiones no están llamadas a prosperar y por ende, en su lugar, solicito respetuosamente denegar en su totalidad las suplicas de la misma y exonerarme de toda responsabilidad con fundamento a lo expresado previamente, complementado con las razones y fundamentos que se expresan a continuación en la presente contestación.

2. HECHOS:

AL HECHO 1: Es cierto. Se anexa el acuerdo 427 de 2016 Reglamento interno del Concejo Municipal, en su artículo 50, cabe precisar que dispone, que el secretario general será elegido por el Concejo para un periodo de 1 año, de una lista de admitidos previa CONVOCATORIA PUBLICA con principios de Mérito. Durante el proceso de elección de secretaria me limite a cumplir este artículo.

AL HECHO 2 y 3: Es parcialmente cierto. De acuerdo a las siguientes precisiones, en primer lugar, se le dieron facultades a la mesa directiva según el articulo 50 del acuerdo 427 de 2026 reglamento del Concejo de Acacías, es claro que es para adelantar una **CONVOCATORIA PUBLICA** con principios de mérito para la elección del cargo de Secretaria General del Concejo Municipal de Acacías. Para lo cual se expidieron 3 resoluciones

El Concejo Municipal en uso de sus atribuciones legales, mediante acta número 118 de 13 de noviembre de 2020 se aprobó en plenaria mediante proposición otorgar facultades amplias y plenas a la mesa directiva para que adelantara de conformidad con la el proceso para elección de secretaria general de la vigencia 2021. Desde este momento, la responsabilidad de adelantar el proceso se entrega a la mesa directiva de la corporación, para lo cual la mesa directiva expidió tres resoluciones N. 48, 73 y 77. para llevar a cabo dicho proceso así:

1.

RESOLUCIÓN No. 48
(17 DE NOVIEMBRE DE 2020)

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UNA CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÒN DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS"

2.

RESOLUCION N. 73
(01 de Diciembre de 2020)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION 48 DE 2020 "POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UNA CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÒN DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACIAS"

3.

RESOLUCIÓN No. 77
(17 DE DICIEMBRE DE 2020)

"POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA Y MODIFICA LA RESOLUCIÒN 073 DE 2020 Y SE DICTAN OTRAS DIPOSCIONES EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÒN DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACIAS"

Por lo tanto si se va a mirar la normatividad que aplica a la convocatoria realizada, es necesario tener en cuenta no solo uno o dos artículos de las resoluciones, si no todo el contexto normativo, empezando por del artículo 126 de nuestra constitución, puesto que desde allí parte la diferencia entre el sistema a aplicar que en este caso siempre actué con el firme convencimiento de que aplicaba el artículo 126 Constitucional puesto que se trata de una elección de servidor público atribuida a una CORPORACIÓN PÚBLICA (secretario general del Concejo) y la forma de aplicar el principio de mérito en medio de uso de su autonomía dada a las Corporaciones Públicas, contrario a los demandantes que por lo visto creen que para esta elección aplica un CONCURSO PUBLICO DE MERITOS, pues se debatió por algunos compañeros frente a las dudas que tenían, reitero mi elección y actuar en todo el proceso fue respecto de una convocatoria pública y en este sentido interprete y aplique el mérito en el proceso cuestionado.

Como lo diferencia claramente y aclara en Concepto Sala de Consulta C.E. 2274 de 2015 Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil…. "Además, como ha reiterado la jurisprudencia, es característica esencial del concurso que la lista de elegibles se ordene estrictamente de acuerdo con el resultado del procedimiento de selección (regla de mérito), de modo que quien obtiene la mejor calificación adquiere el derecho a ser nombrado en el respectivo cargo. (…) Ahora bien, en el caso consultado los debates legislativos dan cuenta de que el Acto Legislativo 2 de 2015 al utilizar la expresión "**CONVOCATORIA PÚBLICA**" optó por un mecanismo de elección que si bien se funda en los mismos principios básicos de los concursos públicos (incluso en cuanto al criterio de mérito), se diferencia de estos en que al final del proceso de selección las corporaciones públicas conservan la posibilidad de valorar y escoger entre los candidatos que han sido mejor clasificados. Se entendió que si se adoptaba un concurso público de méritos como tal, se obligaba al organismo nominador a nombrar de acuerdo con el orden de clasificación de los aspirantes, lo que se consideró como una reducción indebida de la autonomía de las corporaciones públicas. Por tanto, se dijo, era necesario acudir a un sistema transparente, público, objetivo y basado en el mérito, pero que fuera distinto al concurso público en cuanto permitiera al organismo elector escoger entre los varios candidatos que superaran la etapa de selección. (…) De este modo, además de que literalmente se trata de expresiones distintas y que el nuevo artículo 126 Constitucional alude a una y otra como figuras separadas (al señalar que la convocatoria aplicará "salvo los concursos regulados por la ley"), la Sala observa que los antecedentes del Acto Legislativo 2 de 2015 ratifican que el constituyente derivado quiso diferenciar la convocatoria pública del concurso público de méritos del artículo 125 de la Constitución Política, particularmente porque en los procesos de elección mediante convocatoria pública no existe un orden obligatorio de escogencia entre los candidatos que superan las etapas de selección, tal como ocurre en los concursos de méritos. Así pues, el sistema de convocatoria pública mantiene un grado mínimo de valoración o discrecionalidad política en cabeza de las corporaciones públicas para escoger entre quienes se encuentran en la "lista de elegibles", aspecto que constituye el elemento diferenciador entre la convocatoria pública de los artículos 126, 178A, 231, 257, 267 y 272 de la Constitución Política, y el concurso público de méritos a que alude el artículo 125 de la misma Carta.."

AL HECHO 4: No me consta, pues, no puedo hacer afirmaciones sobre la expectativa personal de los participantes en la convocatoria. Por otra parte, me permito solicitar sea tenido en cuenta las reclamaciones efectuadas por 2 participantes en la convocatoria y las respectivas respuestas, las cuales se pueden evidenciar en el acta N. 134 de 2020 del concejo Municipal (anexa) de las páginas 15 a la 23. Donde la mesa directiva modifico una resolución y se puede evidenciar las preocupaciones de la aspirante Katherine Arenas, frente a desdibujar la convocatoria, entre otros.

AL HECHO 5: No me consta. Asumo que fue así pues hice parte de la comisión para evaluar las hojas de vida, pero no estuve presente ni hice parte de la elaboración de preguntas de prueba de conocimiento, no sé cómo fue la cadena de custodia y mucho menos de la forma de calificación, ni quien puntualmente califico las pruebas y calificación de las mismas. Tan solo sé que el presidente Orlando Granados según la página 3 del acta N.132 del Concejo que se anexa, nos informa a la plenaria que el día de ayer (11 de diciembre) se realizó la prueba de conocimientos..."

AL HECHO 6: No es cierto. En el entendido que puntualmente la designación que se me dio según el articulo quinto de la Resolución N.48 por medio de la cual se realiza una convocatoria para la elección de secretaria general del Concejo Municipal de Acacías dice textualmente:

ARTICULO QUINTO: Designación comisión accidental para la verificación de cumplimiento de requisitos exigidos: Desígnese a los concejales: **ANDRES MAURICIO CHAVEZ QUEVEDO, LILIANA MARCELA BAQUERO TORRES y JHONNY ANDRES BASTO HERNANDEZ.**

Dando cumplimiento a la designación se presento el respectivo informe, el cual anexo como prueba. Titulado: INFORME DE COMISION. SECRETARIA 2021. Lo anterior también se rindió informe en plenaria como consta en anexo del acta N.134 de 2020,. en las páginas 13 y 14.

Por otra parte, me parece una Falacia, irresponsable e incoherente la afirmación que se hace en esta demanda en este hecho: " los mencionados concejales ratificaron con su firma en el reverso de los formatos de calificación y/o votación realizada, por lo que puede demostrarse que bajo su firma y refrendación los formatos anexos a la presente demanda reflejan la verdad del proceso y el TRAFICO DE INFLUENCIAS"

De lo anterior me permito puntualizar lo siguiente:

En primer lugar, el presidente de la corporación designo una comisión escrutadora a los concejales WILMER CARVAJAL, JAIR EHCEVERRY Y ARNOLD PINILLA como consta en el acta N. 134 de 2020, párrafo 1 de la pagina 24 para el escrutinio de los votos de elección de secretaria.

En segundo lugar respecto de las entrevistas, tan solo que nos pidieron a 3 concejales que firmáramos al respaldo los formatos de calificación, para mayor garantías y que no fueran

hacer cambiados físicamente las hojas, de lo anterior quiero manifestar que si firme los formatos al reverso, como son testigos los de plenaria y asistentes en el recinto, pues fue una solicitud en público que realizo el compañero FARLEY CARVAJAL, el presidente dio la orden, procedí a cumplirla al no ver nada de malo, sentí brindaba mayor transparencia al proceso, se realizó en medio de la sesión en la plenaria, pero nunca ví, ni observe las respuestas, pues tan solo firmamos las hojas al respaldo los tres concejales, incluso las hojas todas estaban dobladas en doble o cuatro, no se podía observar, las firmamos los concejales JHONNY BASTOS, MAURICIO CHAVEZ Y LILIANA BAQUERO. Mi firma se puede observar al respaldo de los formatos de calificación que se anexaron a la demanda. Según lo que se pidió por parte del concejal Farley Carvajal que quedo en el acta N0 133 de 2020 del Concejo Municipal pagina 12 último párrafo y primero de la pagina 13 que se anexa.

Hecho las anteriores aclaraciones reitero, me parece una falacia e irresponsabilidad afirmar que de lo anterior se refleja un TRAFICO DE INFLUIENCIAS.

En la sesión del día de elección se sentía un ambiente de confusión, como se puede observar en las actas previas a la elección de secretaria, algunos compañeros parecían estar confundidos respecto de la forma de elección de la secretaria, frente a la aplicación del principio del mérito como se puede evidenciar en la siguiente ilustración tomada de acta 132 del Concejo Acacias 2020.

AL HECHO 7: Es parcialmente cierto, si se presentaron las aspirantes el 16 de diciembre, aclarando que dieron respuesta ante la plenaria de unas preguntas, mas no que los interrogantes fueran planteados por la plenaria, por que yo no participe en la elaboración de las preguntas a las diferentes aspirantes, no sabia que se les preguntaría, eso fue una actuación de la mesa directiva. En mi caso al igual que varios compañeros nos enteramos de manera instantánea como iban realizando las preguntas a cada una de las aspirantes y ellas respondían.

Las preguntas se supone, fueron realizadas por la mesa directiva dando cumplimiento a la resolución No 73 del 01 de siembre de 2020 por medio de la cual se modificó la convocatoria para la elección de secretaria del concejo Municipal de Acacías, la cual se anexa, dicha resolución fue expedida por la mesa directiva. En su articulo primero habla de las PRUEBAS, PUNTAJE Y PONDERACION. En los parágrafos 1 y 2 dice:

PARAGRAFO 1. La elaboración de las pruebas de Conocimientos, será única y exclusivamente de manejo de la mesa directiva quien deberá acatar los principios de objetividad, transparencia, imparcialidad y publicidad, en la elaboración de las pruebas, garantizando el protocolo de seguridad, control, cuidado y manejo de las mismas.

PARAGRAFO 2. Las preguntas de las pruebas de entrevista, será única y exclusivamente de manejo de la mesa directiva quien deberá elaborar las preguntas bajo el cumplimiento de los principios de objetividad, transparencia, imparcialidad y publicidad. Las preguntas de entrevista se expondrán únicamente el día de la realización de la prueba.

AL HECHO 8: Es totalmente falso. Es una afirmación de los demandantes que además de irresponsable, carece de soporte probatorio, atenta contra mi dignidad y buen nombre**,** al concluir "que ocho 8 concejales no tuvieron ningún principio de imparcialidad, ni actuaron de buena fe para dar su calificación" me permito precisar lo siguiente:

La No 73 del 01 de siembre de 2020 por medio de la cual se modificó la convocatoria para la elección de secretaria del concejo Municipal de Acacías, la cual se anexa, dicha resolución fue expedida por la mesa directiva. En su artículo primero habla de las PRUEBAS, PUNTAJE Y PONDERACION, de este se tiene en el literal E, define los parameros para la PRUEBA DE ENTREVISTA, indica que:

PUNTAJE: 10% DEL VALOR TOTAL DE LA PRUEBA: El aspirante presentará entrevista en el lugar fecha y hora señaladas. En la entrevista la mesa directiva diseñará 3 preguntas abiertas relacionadas el cargo, sus funciones administrativas y la disposición sobre el cumplimiento de las funciones.

Cada Concejal tendrá la obligación de calificar cada pregunta en un rango de 1 a 100 sin incluir decimales. El total de los resultados se ponderara de forma global y se obtendrá el resultado, correspondiendo este al 10% del total de la Prueba.

Ilustración 1recorte Resolution N.73 de 2020 Concejo de Acacías, pagina 4. indicaciones de prueba entrevista.

De lo anterior se puede observar que se dio un rango de calificación de puntaje de 1 a 100, el cual sustento mas adelante. Somos 15 concejales, cada uno el puntaje de calificación equivaldría a 1/15, califique según mi criterio al querer la persona que considere según sus respuestas la mas acorde a las exigencias del cargo de Secretaria General del Concejo.

De al aspirante ANGELICA ALEJANDRA ORDOÑEZ: Aseguro que en el concejo Municipal no existía la comisión Legal para la equidad de la mujer y en realidad si existe, no me gustaría una secretaria general del concejo que asegure cosas que no son reales, puede tener problemas ella o hacer tener problemas a la corporación o a sus integrantes, mas cuando es secretaria de las sesiones y da fe de lo que sucede en las mismas. Por lo anterior, la califique con 1.

De la señora PATRICIA MORERA ANAYA, considero que el cargo de secretaria del concejo es de suma importancia y estratégico para el desarrollo de las funciones del Concejo, también considero que la persona que debe desempeñar el cargo debe tener cualidades como agilidad mental en la comprensión y contestación de preguntas, dado que es la que certifica lo que se sucede en as sesiones, debe contestar preguntas en plenos debates, atender el público. Entonces para mi la señora Patricia se le hizo la pregunta numero 1, que siento era de fácil comprensión y en mi forma de analizar no le dio respuesta puntual a la pregunta en cuanto a **cómo podría contribuir al mejoramiento de los procesos administrativos del Concejo de Acacías**. Si la pregunta hubiera sido ¿cuente parte de su vida personal? La calificación hubiera sido diferente. Por lo anterior, la califique con 1.

De la señora LICET KATERINE RODRIGUEZ: Considero que el cargo de secretaria del concejo es de suma importancia y estratégico para el desarrollo de las funciones del Concejo, también considero que la persona que debe desempeñar el cargo debe tener cualidades como agilidad mental en la comprensión y contestación de preguntas, dado que es la que certifica lo que se sucede en as sesiones, debe contestar preguntas en plenos debates, atender el público. Entonces para mi la señora Patricia se le hizo la pregunta número 1, que siento era de fácil comprensión y en mi forma de analizar no le dio respuesta puntual dicha pregunta en cuanto a **cómo podría contribuir al mejoramiento de los procesos administrativos del Concejo de Acacía**s. Por lo anterior, la califique con 1.

De la aspirante JOHANA PATRICIA OVALLE: Percibí que no tiene claro que el alcalde no tiene la facultad de dar ordenes al Concejo Municipal, ni a la secretaria de la corporación, ni a los concejales, no tiene claro la autonomía de la corporación y eso para mi percepción es vital para el buen ejercicio del cargo de secretaria general del Concejo Municipal del Acacias. Por lo anterior, la califique con 1.

De la aspirante KATERINE ARENAS ALVAREZ**:** la percibí con liderazgo, como una persona eficiente, que entiende debe actuar de acuerdo a lineamientos, reglamento, leyes, entiende que se debe actuar pensando en la comunidad y pro del municipio, tiene claro la independencia y autonomía de la corporación frente al alcalde municipal. Por lo anterior, la califique con 100. Me pareció la persona más idónea para el cargo.

Por otra parte, Como consta en el acta 133 del 16 de diciembre, pagina 21, finalizadas las entrevistas e intervenciones de cada una de las 5 participantes que se presentaron, el presidente nos dio a los concejales 5 minutos para que hiciéramos la evaluación, quiere decir que contábamos con 1 minuto para calificar y llenar el formato de calificación de entrevista de las 5 participantes. De lo anterior puedo manifestar que aunque hubiera querido hacer algunas observaciones respecto de la calificación de las entrevistas, el tiempo no me alcanzó. Notece señora juez, que 1 minuto por cada participante y a su vez eran 3 preguntas quiere decir que tenia 20 segundos para calificar cada pregunta, poner observaciones en esos tiempos dados para mí se convirtió en algo imposible.

Al final en el último párrafo de la página 20 del acta N.133 de 2020 la cual se anexa, se puede observar lo que indica el presidente una vez finalizada la intervención de entrevista de la ultima aspirante.

Hace uso de la palabra el presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, de esta manera damos por finalizada la participación de las 5 candidatas a ser secretaria general para la vigencia 2021, Katherine si gusta se puede sentar halla en las graderías o si ustedes ya gustan se pueden retirar la publicación de los resultados como está según el cronograma se hará en horas de la tarde una vez se tenga un consolidado, a partir de este momento los Concejales cuentan con 5 minutos para que hagan la respectiva evaluación, por favor secretaria recogemos las evaluaciones e el sobre de custodia lo sellamos y se le entrega al jurídico para hacer la respectiva

Ilustración 2Recorte acta N. 133 de 2020 del concejo municpal pag. 20

Continuando el anterior, en la página 21 primer párrafo nos reitera "cuentan con 5 minutos para que hagan la evaluación", reitero nadie esta obligado a lo imposible, en mi maso no me alcanzaron los 5 minutos para evaluar a las 5 participantes, cada una 3 pregunta, marcar la hoja, firmarla y no pude escribir observaciones.

consolidación, a partir de este momento cuentan con 5 minutos para que hagan la evaluación.

Ilustración 3recorte acta 133 de 2020 Concejo Municipal pag. 21

Ahora, en el ejercicio como Concejala, estoy acostumbrada a que se requiere de una buena concentración y agilidad porque muchos procesos son de ejecución rápida incluso algunos de manera instantánea como ejemplo poder participar en los debates, hacer interpelaciones, proponer una moción de orden, de procedimiento, pedir una réplica, por eso trate hice la calificación en esos 5 minutos, además que me parecía con con un tiempo corto y en plena sesión pública de plenaria, tanto para los participantes como para mí me generaría mayor grado de transparencia.

*respecto de que los formatos de calificación de la entrevista entregados a cada concejal, traían la columna de observaciones, esto con el fin de que cada concejal pudiera sustentar su voto.

Me permito traer un recorte del acta No 133 de 2020 del Concejo, anexa, se puede ver el final de la pagina 6

si no está presente la entrevistada, igual el Concejal puede dejar queda dentro de la hoja de vida la evaluación que se va entregar está el cuadro de observaciones para que el Concejal si desea escribir algunas observaciones en las cuales sustente su calificación si el Concejal no quiere simplemente da la calificación de cada una de las

Me permito traer un recorte del acta No 133 de 2020 del Concejo, anexa, ver del inicio de la pagina 6

5 participantes y no está obligado a que tenga que dejar alguna observación esa es más o menos la metodología.

De lo anterior, nótese señora juez que el mismo presidente nos dio las indicaciones de que las observaciones no eran obligatorias, si no optativas, en mi caso y mas como lo dije hace unos párrafos el tiempo no me alcanzó. No se puede decir que el hecho de no haber puesto observaciones es una mala conducta, o indicio de una mala conducta y mucho menos de contribuir a un reflejo de trafico de influencias.

AL HECHO 9: Es cierto

AL HECHO 10: No es cierto. Son suposiciones de los demandantes, falacias que carecen de acervo probatorio, no entiendo de adonde sacan el termino confabulación, que insisto atentan contra mi dignidad y buen nombre. Al respecto puedo decir que fui coherente en la forma de calificar la entrevista pues vote por la persona que estaba dentro de la lista de elegibles y considere tenia el mejor perfil y capacidades para ocupar el cargo. Vote convencida de estar frente a una convocatoria pública, que el cargo de secretaria le aplica a las corporaciones publicar según art. 126 de la Constitución Nacional, que cualquiera de las personas en esa lista podía haber sido elegida, la que obtuviera la mayor cantidad de votos en democracia en la elección.

AL HECHO 11: no me costa, se que varios compañeros pronunciaron el nombre de la señora Patricia Morera Anaya, pero asumí que según el reglamento del concejo la elección de funcionarios es de manera secreta, mediante papeleta y se escribe un nombre. Por eso en todo momento le di validez a los resultados brindados por la comisión escrutadora de acuerdo a las papeletas depositadas en la urna. Ahora, asegurar quien o quienes de mis compañeros votaron por determinada candidata seria una irresponsabilidad de mi parte.

En materia de votación me permito puntualizar lo siguiente: el acuerdo 427 de 2016 que se anexa, Reglamento del Concejo Municipal de Acacias, en el capítulo cuarto donde regla el tema de votaciones en su artículo 84. **REGLAS EN MATERIAS DE VOTACIONES**. Nos indica entre otros aspectos lo siguiente:

- Cada concejal tiene derecho a un voto (procedí a votar una única vez)
- En casos de elecciones, los Concejales deberán votar por uno de los candidatos o en blanco (vote por una de las 5 candidatas)
- Inciso 3 del artículo 84 precisa puntualmente **"En toda votación el número de votos debe ser igual al número de Concejales presentes al momento de ejercer este derecho; si el resultado no coincide, el presidente anulará la elección y ordenará su repetición"**, en el caso puntual, (según la asistencia del acta en el momento de la sesión donde se procedió a elegir secretaria para el periodo 2021, del 18 de diciembre de 2020, en el momento de la votación, quince (15) concejales ejercieron su derecho al voto, mediante papeleta que previamente fue entregada a cada concejal por la secretaria general del Concejo, todos procedimos según el llamado a lista por orden alfabético, a introducir la papelera con un nombre escrito en ella, según el acta Nº 134 de las sesiones

del Concejo Municipal, la comisión escrutadora conto 7 votos por la señora PATRICIA MORERA ANAYA y 8 votos por la señora KATHERINE ARENAS ALVAREZ; por ende, el total de votos sacados de la urna fueron quince (15), reportados por la comisión escrutadora. La votación es válida y se declaró oficialmente la secretaria electa para el cargo de secretaria general del Concejo Municipal, acto administrativo actualmente valido.

Por otra parte, es claro que la forma de votación fue mediante papeleta escrita, dando cumplimiento al artículo 88 del acuerdo 427 Reglamento interno del Concejo Municipal de Acacías (el cual se anexa como prueba), donde define; REGLAS ESPECIALES EN MATERIA DE ELECCIÓN DE FUNCIONARIOS:
"El acto de elección de funcionarios…, el presidente abrirá la votación secreta. Cada votante escribirá en su papeleta el nombre de uno de los candidatos al cargo por proveer y la depositará en la urna dispuesta para el efecto, en el orden de llamado a lista por el secretario…"

Dando aplicación a lo anterior, en dicha elección votaron 15 Concejales que hicimos uso de nuestro derecho a votar y cabe resaltar que fue tan secreta que al día de hoy no se sabe con certeza quienes de los 15 concejales votaron por determinada aspirante al cargo de secretaria, tan solo se sabe que se llego a un consenso en democracia, pues cada uno voto y salió electa la señora KATERINE ARENAS ALVAREZ por que la comisión escrutadora, reporto 8 papeletas escritas con su respectivo nombre. Como consta en el acta N. 134 del 18 de diciembre de 2021 del Concejo. Que se anexa dentro del material probatorio.

Lo anterior esta soportado en el artículo 85 del acuerdo 427 reglamento del Concejo Municipal, donde nos habla de los modos de votación, en el Numeral 3. VOTACIÓN SECRETA, la define
Como es aquella que no se permite identificar como vota el concejal, las rectificaciones solo serán procedentes cuando el número de votos recogidos no sean iguales a los votantes...

Quedando claro que el modo de votación fue mediante papeleta escrita, que los votos válidos fueron de manera escrita y se contaron por la comisión escrutadora, que votaron 15 Concejales y la comisión escrutadora conto 15 papeletas escritas, de donde salió el resultado de la secretaria electa.

AL HECHO 12: No es cierto. En el entendido que la señora PATIRICIA MORERA ANAYA si presento tutela, pero que se impugno el fallo y quedo en firme la elección de la señora KATHERIE ARENAS ALVARES. Pero considero que esa tutela no es prueba de un tráfico de influencias interno como lo afirman erróneamente los demandantes. Me permito anexar: Copia de admisión de tutela de la señora Patricia Morera Anaya. (2 folios), Fallo de Tutela de la Señora Patricia Morera Anaya.(22 folios) y Fallo de impugnación de la tutela de la señor Patricia Morera Anaya. (16 folios).

CUARTO PUNTO: PROPOSICIONES Y VARIOS. Hace uso de la palabra el presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, se les informa a los Concejales que estamos en el proceso de elección de secretaria general ayer se adelantó la prueba de conocimientos hay 5 aspirantes en concurso el día lunes se publicara la consolidación de los resultados y para el 18 es la entrevista.

Hace uso de la palabra el Concejal ANDRES MAURICIO CHAVEZ QUEVEDO, presidente ayer alguien me planteo el siguiente interrogante y duda que creo que es sana hacérnosla todos, me dijo estuve leyendo la sentencia que saco en el fallo que nos sacó a Alexandra y me decía tengan cuidado porque lo que plantean es que no es concurso público para elección sino convocatoria pública, lo planteo como siempre planteo mis interrogantes aquí delante de todos para que sean tenidas en cuenta y de pronto el jurídico nos pueda sacar en estos días y si me gustaría que la pudiéramos revisar presidente si es convocatoria o es concurso, porque si es convocatoria la forma de decisión habría que revisarla.

Ilustración 4 recorte acta 132 de 12 diciembre 2020 Concejo Acacías pag.3.

Al igual que dichas dudas se reflejan en el acta No 134 de 2020, la cual se anexa, en la proposición del concejal Farley Carvajal Rey en incluir dentro del orden del día el punto tercero el cual fue votado por unanimidad de los presentes, el cual hace referencia a "Revisión método de elección de secretaria del concejo y discusión de conceptos jurídicos". En el desarrollo de dicho punto intervinieron los concejales Farley Carvajal Rey, Andrés mauricio Chávez, Gildardo Santos Chaparro, Zulma Yolima Díaz, Jhonny Giraldo, Victor Ramos y Liliana Baquero.

3. EXCEPCIONES

1. Excepción genérica

Ruego al señor Juez, decretar de oficio, cualquier excepción que advierta, o que resulte probada dentro del proceso. Ha hecho carrera en la doctrina y principalmente en la jurisprudencia, al amparo de la reivindicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, que las circunstancias fácticas constitutivas de "excepción" que se pruebe dentro del tramite procesal, se declararan en la respectiva sentencia, por lo que se eleva esta respetuosa solicitud, en el ejercicio de mi defensa técnica.

4. FUNDAMENTOS FACTICOS Y JURIDICOS DE LA DEFENSA

4.1 Inexistencia de la causal de pérdida de investidura deprecada. Atipicidad de la conducta - Tráfico de influencias

La mayoría de los hechos expuestos en la demanda se fundan en simples apreciaciones subjetivas de los demandantes, que no demuestran la configuración de los elementos configurativos del hipotético tráfico de influencias que den lugar a decretar la perdida de investidura que se han establecido en diferentes sentencias del Consejo de estado, como es el tráfico de influencias, no se puede ajustar la tipicidad de la conducta. Dentro de la demanda en el numeral III, enmarcan las supuestas conductas sustento del tráfico de influencias como son imparcialidad, buna fe, y confianza legitima, al efectuar la calificación de entrevista y el incumplimiento del principio del merito al no respetar la lista de elegibles y haber elegido a quien ocupo el segundo lugar, desconociendo los méritos de quien ocupo el primer lugar.

Reitero no existe material probatorio que ajuste los supuestos hipotéticos de los demandantes a los requisitos exigidos por la normatividad aplicable a la perdida de investidura por causal de tráfico de influencias, más cuando erróneamente se pretende hacer ver que para la elección de secretaria general se aplica el concurso público de méritos y que se debe votar en estricto orden, cuando en este caso actúe aplicando el articulo 126 de la Constitución Nacional.

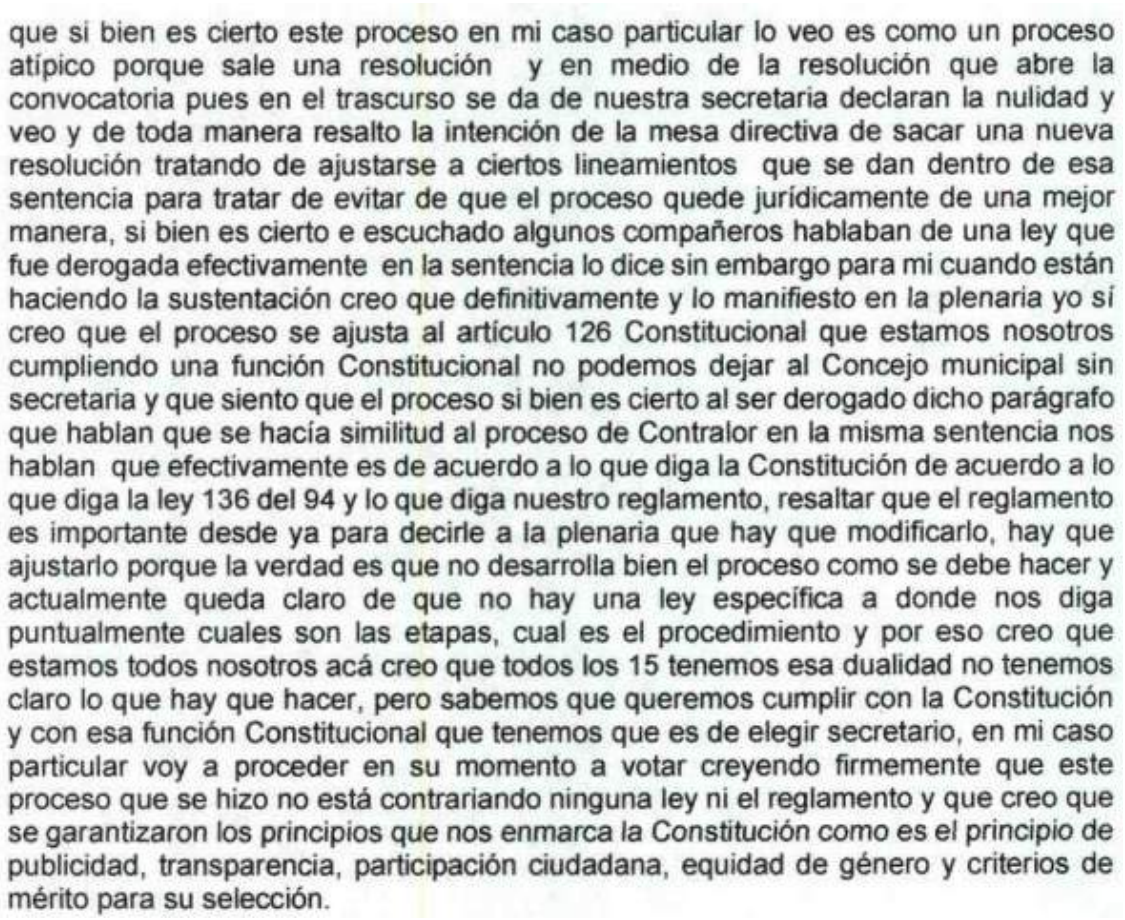
4.2 Ausencia de los elementos propios de la causal invocada e inexistencia de pruebas que soporten los cargos. Atipicidad de la conducta endilgada.

Una vez analizados los hechos fundamento de la acción de pérdida de investidura por tráfico de influencias, no se han probado la totalidad de los elementos propios configurativos de dicha causal según la jurisprudencia del Consejo de Estado.

El material probatorio, no demuestra la configuración de los elementos configurativos del hipotético tráfico de influencias que den lugar a Perdida de investidura, que demuestre que ejercí, o ejercieron sobre mi alguna influencia, tampoco existe prueba de haber recibido , o que hiciera dar o prometer para mi o para un tercero dinero o dádiva y mucho menos que se anteponga la investidura de Concejal con el fin de obtener beneficio de un servidor público en el caso de elección de secretaria del Concejo Municipal Acacías para el periodo 2021.

4.3 Ausencia de responsabilidad subjetiva

En mi caso, todo el tiempo actúe convencida de estar dando estricto cumplimiento al articulo 126 de nuestra constitución como es una convocatoria pública, que es un deber nuestro elegir secretaria general y que quería que fuera la persona con mejores condiciones para ocupar dicho cargo, dado lo estratégico que es para el cumplimiento de las funciones del concejo Municipal, como se puede evidenciar en mi intervención antes de realizar la elección en el acta N0. 134 de diciembre 2020 del Concejo páginas 13 y 14, la cual se anexa, me permito presentar un aparte:



que si bien es cierto este proceso en mi caso particular lo veo es como un proceso atípico porque sale una resolución y en medio de la resolución que abre la convocatoria pues en el trascurso se da de nuestra secretaria declaran la nulidad y veo y de toda manera resalto la intención de la mesa directiva de sacar una nueva resolución tratando de ajustarse a ciertos lineamientos que se dan dentro de esa sentencia para tratar de evitar de que el proceso quede jurídicamente de una mejor manera, si bien es cierto e escuchado algunos compañeros hablaban de una ley que fue derogada efectivamente en la sentencia lo dice sin embargo para mi cuando están haciendo la sustentación creo que definitivamente y lo manifiesto en la plenaria yo sí creo que el proceso se ajusta al artículo 126 Constitucional que estamos nosotros cumpliendo una función Constitucional no podemos dejar al Concejo municipal sin secretaria y que siento que el proceso si bien es cierto al ser derogado dicho parágrafo que hablan que se hacía similitud al proceso de Contralor en la misma sentencia nos hablan que efectivamente es de acuerdo a lo que diga la Constitución de acuerdo a lo que diga la ley 136 del 94 y lo que diga nuestro reglamento, resaltar que el reglamento es importante desde ya para decirle a la plenaria que hay que modificarlo, hay que ajustarlo porque la verdad es que no desarrolla bien el proceso como se debe hacer y actualmente queda claro de que no hay una ley específica a donde nos diga puntualmente cuales son las etapas, cual es el procedimiento y por eso creo que estamos todos nosotros acá creo que todos los 15 tenemos esa dualidad no tenemos claro lo que hay que hacer, pero sabemos que queremos cumplir con la Constitución y con esa función Constitucional que tenemos que es de elegir secretario, en mi caso particular voy a proceder en su momento a votar creyendo firmemente que este proceso que se hizo no está contrariando ninguna ley ni el reglamento y que creo que se garantizaron los principios que nos enmarca la Constitución como es el principio de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección.

Ilustración 5recorte intervención concejala Liliana Baquero Acta 134 de 2020.

LEY 1881 DE 2018 Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas (aplicable a Concejales), e su ARTÍCULO 1o. <Artículo modificado por el artículo 4 de la Ley 2003 de 2019. Establece que **el proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva**. La Corte Constitucional en sentencia[1] manifiesta que el análisis de responsabilidad que realiza el juez en el proceso sancionatorio de pérdida de investidura es subjetivo, pues en un Estado de Derecho los juicios que implican un reproche sancionador, por regla general, no pueden operar bajo un sistema de responsabilidad objetiva, y las sanciones que se adopten en ejercicio del ius puniendi deberán **verificar la ocurrencia de una conducta regulada en la ley (principio de legalidad o tipicidad), contraria al ordenamiento jurídico (principio de antijuridicidad) y culpable**.

De lo anterior puedo afirmar que actué de buena fe y convencido cumplir en todo momento la constitución y la ley, por lo tanto, reitero una vez mas que no existió ningún tráfico de influencias y se debe denegar la perdida de investidura endilgada.

[1] Sentencia SU474/20 Acción de Tutela instaurada por Libardo Enrique García Guerrero contra la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado

4.4 Ausencia de causa para demandar e inexistencia del hecho.

El tráfico de influencias al tenor de lo señalado en el artículo 183, numeral 5 de la Constitución Política, debe estar debidamente comprobado, lo cual exige que el tráfico de influencias esté debidamente comprobado, por tanto indica que es necesario que se presenten pruebas idóneas para establecer que los actos relacionados con el hipotético tráfico de influencias se han realmente presentado y configurado, lo cual con el material probatorio que se adjunta en la demanda no se demuestra y por lo tanto no se debe decretar la perdida de investidura.

Por otra parte, la sentencia AC-11349 de la consejera ponente Olga Ines Navarrete, precisa que el tráfico de influencias presupone anteponer la investidura en este caso de Concejal ante un servidor público, quien bajo ese influjo psicológico realiza una actividad que no haría de no ser por la calidad de quien se lo solicita. De allí que se trata de una relación de doble envío, donde el concejal gracias a su investidura crea en el destinatario de su influencia la decisión de realizar lo solicitado.

También dice que lo esencial de la conducta es que en este caso concejal, gracias a su condición obtiene de un servidor público para sí o para un tercero, dinero, dadiva, o la promesa de ellos, sin causa licita.

En sentencia del 30 de agosto de 2005[2] **la corporación contenciosa reitera que el tráfico de influencias debe estar debidamente comprobado**, que este presupone invocar la calidad de congresista en este caso conejal, ante un servidor público, con el fin de que este realice determinada actividad, la cual no llevaría a cabo de no ser por el resultado que produce utilizar tal investidura.

Con base en el anterior razonamiento y no estando demostrado en el caso debatido que en mi condición de Concejal, que hice uso de la investidura y menos aún que prevaliéndome de ella, le pedí a otro servidor público o particular la realización de una actividad configurativa de tráfico de influencias, por lo tanto no se estructura la causal alegada por los demandantes y por tanto debe negarse el decreto de perdida de investidura.

Esta posición es reiterada, entre otra sentencia del 2012[3], donde se precisa que sobre la configuración de la causal de perdida de investidura por tráfico de influencias la sala plena de dicha corporación, ha precisado que es una prohibición constitucional que se tipifica cuando:

- Existe un sujeto activo que ostenta la calidad de Congresista al momento de realizar la conducta cuestionada, e invoca esa condición, ante un servidor público para obtener de él un beneficio de su parte, respecto de un asunto que sea de su

[2] Consejo de Estado, Sentencia del 30 de agosto de 2005, rad. 11001-03-15-000-2005-00446-00(PI), C.P Alejandro Ordoñez M..

[3] Consejo de Estado, Sentencia del 29 de mayo de 2012 , rad. 11001-03-15-000-2011-01378-00(PI), C.P. Susana Buitrago V.

competencia; o cuando bajo el mismo supuesto de hecho el congresista recibe, hace dar o prometer para si mismo o para un tercero dinero o dadiva en situaciones que estén relacionadas con las funciones propias de su cargo.

- Hay un sujeto pasivo de la acción, ante quien el Congresista antepone su condición, que realiza la acción que le es requerida llevar a cabo, la cual de ordinario no haría de no ser por la calidad de quien se lo solicita. Lo anterior en el caso debatido, no está demostrado, sencillamente por no ocurrió.
- Se constata que la actuación del Congresista se trata de una gestión. Recomendación o exigencia, realizada en virtud de la relación que tiene con el servidor público, o por su influencia en él; y además porque existe interés en el resultado de la actuación.

Por otra parte, La administración pública tiene por fundamento la búsqueda constante de la satisfacción del interés general. Así, está consagrado en el artículo primero de la Constitución Política de Colombia de 1991. Por esta razón, el legislador penal identificó la necesidad de reprochar cualquier conducta que se oriente a la satisfacción de intereses personales en contravía del rol que se precisa de quienes ejercen una función pública. De esta manera, se afecta la administración pública cuando el poder se desvía para la satisfacción de intereses personales, dentro de los argumentos de la demanda no se evidencia ningún interés personal de mi parte en ninguno de los procesos que he participado.

"La tipificación del tráfico de influencias tiene como propósito evitar que intereses ajenos al buen servicio y al bien común prevalezcan en la actividad de la administración, garantizando que las funciones de los agentes del Estado se realicen con estricto sometimiento a la Constitución y la Ley, así como con la orientación de cumplir y promover los fines de las autoridades".

5. FUNDAMENTOS FACTICOS Y JURIDICOS

De la causal contemplada en el numeral 5º del artículo 183 de la Constitución Política.- Ni la Constitución Política ni la Ley definen el tráfico de influencias invocado en el presente asunto, sin embargo, la jurisprudencia de esta Corporación ha expresado de manera reiterada que el incurrir en él, "presupone anteponer la investidura de congresista ante un servidor público, quien, bajo tal influjo sicológico, realiza una actividad que no adelantaría de no ser por la calidad de quien se lo solicita. Consiste en una relación de doble envío en donde el congresista, gracias a la investidura que posee, crea en el destinatario de su influencia la decisión de realizar el hacer solicitado"

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, al fijar los alcances de la causal de pérdida de investidura invocada, ha señalado como presupuestos para que esta se configure, los siguientes:

a) Que la persona que ejerce la influencia ostente la calidad de Congresista, la cual se adquiere a partir de la posesión en el cargo.
b) Que se invoque esa calidad o condición ante el servidor público sin tener en consideración el orden jerárquico de este.

c) Que se reciba, haga dar o prometer para sí o para un tercero dinero o dádiva, con las salvedades o excepciones contempladas en la Ley 5 de 1992, en cuanto a las gestiones de los congresistas en favor de sus regiones;
d) Que se anteponga la investidura con el fin de obtener beneficio de un servidor público en asunto que éste encuentre conociendo o haya de conocer en su condición. [4]

La disposición constitucional exige que el tráfico de influencias esté debidamente comprobado, lo anterior indica que es necesario que se presenten pruebas idóneas para establecer que los actos relacionados con el hipotético tráfico de influencias sean realmente presentado, lo cual con el material probatorio que se adjunta en la demanda no se demuestra y por lo tanto no se debe decretar la pérdida de investidura.

Solicito por tratarse de la misma elección de secretaria se tengan en cuenta todos los argumentos radicados de mi parte en la impugnación al fallo de tutela que interpuso la aspirante PATRICIA MORERA ANAYA ante la elección de secretaria 2021. El cual anexo en 33 folios, especialmente porque se hace una diferenciación de la naturaleza del cargo de secretaria general de la corporación, la aplicación del articulo 126 de la Constitución Nacional de Colombia, la discrecionalidad de las corporaciones Publicas al elegir de una lista el cargo de secretaria y la aplicación del principio de mérito en convocatoria, jurisprudencia al respecto, entre otros. Con el fin que en la decisión se tenga encueta la diferenciación de la aplicación del mérito y naturaleza del cargo de elección de secretaria que difiere del concurso público de méritos como es el de elección de personero. La sentencia que se anexa y refiere a continuación:

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá, D. C., nueve (09) de diciembre de dos mil diecinueve (2019)
Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001-03-25-000-2015-01089-00 (4824-2015)
11001-03-25-000-2016-00001-00 (0001-2016) (ACUMULADO)
Demandantes: JOSÉ IGNACIO ARANGO BERNAL Y OTRO
Demandados: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y OTRO
Temas: Concurso público y abierto de méritos para elección de personeros municipales.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA O-275-2019

[4] Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 8 de marzo de 2008. Radicación No. 11001-03-15-000-2007-01054-00(PI). Consejera Ponente: Susana Buitrago Valencia. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 17 de abril de 2007. Radicación No. 11001- 03-15-000-2006-00192-00 (PI). Consejero Ponente: Reinaldo Chavarro Buriticá.

6. MEDIOS DE PRUEBA

Solicito de manera respetuosa se tengan como medio de pruebas documentales los siguientes documentos que me permito allegar con el presente escrito, toda vez que son conducentes, pertinentes y necesarias en haciendo uso del derecho de defensa y contradicción.

- Acuerdo 427 de 2016 reglamento interno del Concejo Municipal de Acacías (76 folios)
- Informe de comisión secretaria 2021 (5 folios)
- ACTA No 132 DE DICIEMBRE 12 DE 2020 (12 folios)
- ACTA N0 134 DE DICEIMBRE 2020(31 Folios)
- Copia de admisión de tutela de la señora Patricia Morera Anaya. (2 folios)
- Fallo de Tutela de la Señora Patricia Morera Anaya.(22 folios)
- Fallo de impugnación de la tutela de la señor Patricia Morera Anaya. (16 folios)
- Acta 134 del Concejo Municipal 2020.(31 folios).
- IMPUGMACION DE TUTELA - CONCEJAL ACACIAS LILIANA MARCELA BAQUERTO TORRES (33folios)
- SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA O-275-2019

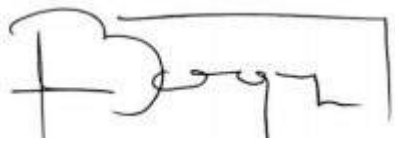
7. ANEXOS

- Los documentos enunciados en el Acápite de las pruebas.

8. NOTIFICACIONES

El suscrita se notificará de las decisiones que se profieran en la dirección: carrera 17ª n. 10 - 46 barrio jardín – Acacías- Meta, email: liliconcejal@gmail.com y celular: 3008716561

Cordialmente,



_____

LILIANA MARCELA BAQUERO TORRES
CC. 40219134 de Villavicencio - Meta

ACUERDO No. 427
(Diciembre 9 de 2016)

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS-META

En ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, especialmente las previstas en el artículo 313 de la constitución política de 1991, los articulos 31, 32 y 71 de la ley 136 de 199, Ley 1431 de 2011, ley 974 de 2005, 1557 de 2015 y demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO

Que el Artículo 31º de la ley 136 de 1994 establece que los concejos expedirán un reglamento interno para su funcionamiento en el cual se incluyan, entre otras, las normas referentes a las comisiones, a la actuación de los concejales y la validez de las convocatorias y de las sesiones.

Que el actual Reglamento Interno del Concejo Municipal de Acacías data del año 2008.

Que durante esto 8 años, se han expedido normas que obligan a ajustar el actual Reglamento Interno.

Que para una mejor consulta y manejo se hace necesario adoptar un nuevo Reglamento Interno y derogar el existente.

Por lo anteriormente expuesto:

ACUERDA

ARTÍCULO 1º. Adóptese el presente Reglamento Interno del Concejo Municipal de Acacías, cuyo contenido será el siguiente:

TÍTULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES

CAPITULO I
EL CONCEJO COMO CORPORACION ADMINISTRATIVA Y POPULAR.

ARTÍCULO 2º.- DEFINICIÓN, INTEGRACIÓN Y PERÍODO. El Concejo Municipal de Acacías es una Corporación Político Administrativa de elección popular, integrada por quince (15) concejales elegidos por un periodo constitucional de cuatro (4) años y reelegibles indefinidamente, quienes representan al pueblo, y que en el ejercicio de sus funciones, deberán actuar en bancadas y cuyas decisiones estarán ajustadas a la Constitución Política, Actos Legislativos, Leyes, Decretos, Ordenanza, Acuerdos y demás normas relacionadas con el ejercicio de estas corporaciones y de sus integrantes.

ARTÍCULO 3º.- AUTONOMÍA. El Concejo Municipal, como suprema autoridad Municipal es autónomo en materia administrativa y presupuestal.

ARTÍCULO 4º.- ATRIBUCIONES. El Concejo Municipal ejercerá en pleno las atribuciones, funciones y competencias establecidas en la constitución política de 1991, acto legislativo 01 de 2009 y en Decreto Ley 1333 de 1986, Ley 136 de 1994, Ley 974 de 2005, Ley 1148 de 2007, Ley 1368 de 2009, 1431 de 2011, 1551 de 2012, la ley 1557 de 2015 y demás normas jurídicas vigentes, especialmente en materia normativa y de control político.

ARTÍCULO 5º.- FUNCIONES CONSTITUCIONALES. Son funciones constitucionales del Concejo, las siguientes:

1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Municipio.
2. Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico, social y de obras públicas.

3. Autorizar al Alcalde para celebrar contratos y ejercer pro témpore, precisas funciones de las que corresponden al Concejo.
4. Votar de conformidad con la Constitución y la Ley los tributos y los gastos locales.
5. Dictar a iniciativa del Alcalde las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos.
6. Determinar a iniciativa del Alcalde la estructura de la administración Municipal y las funciones de sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear a iniciativa del Alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta.
7. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda.
8. Elegir Personero para el periodo que fije la ley y los demás funcionarios que ésta determine.
9. Dictar las normas necesarias para el control, preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultura del municipio.
10. Las demás que la Constitución y la Ley le asignen.
11. Citar y requerir a los secretarios del despacho del Alcalde para que concurran a las sesiones. Las citaciones deberán hacerse con una anticipación no menor de cinco (5) dias y formularse en cuestionario escrito. En caso de que los Secretarios no concurran, sin excusa aceptada por el Concejo Municipal, este podrá proponer moción de censura. Los Secretarios deberán ser oídos en la sesión para la cual fueron citados, sin perjuicio de que el debate continúe en las sesiones posteriores por decisión del Concejo. El debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario y deberá encabezar el orden del día de la sesión.
12. Proponer moción de Observación respecto de los Secretarios del Despacho del Alcalde por asuntos relacionados con funciones propias del cargo o por desatención a los requerimientos y citaciones del Concejo Municipal o Municipal. La moción de observación deberá ser propuesta por la mitad más uno de los miembros que componen el Concejo Municipal. La votación se hará entre el tercero y el décimo día siguientes a la terminación del debate, con audiencia pública del funcionario respectivo. Su aprobación requerirá el voto afirmativo de las dos terceras partes de los miembros que integran la Corporación. Una vez aprobada, se enviara la decisión a Alcalde para que tome la decisión que considere. Si fuere rechazada, no podrá presentarse otra sobre la misma materia a menos que la motiven hechos nuevos. La

renuncia del funcionario respecto del cual se haya promovido moción de observación no obsta para que la misma sea aprobada conforme a lo previsto en este artículo.

ARTÍCULO 6º.- ATRIBUCIONES LEGALES[1]. Son atribuciones legales del Concejo Municipal, las siguientes:

1. Disponer lo referente a la policía en sus distintos ramos, sin contravenir las leyes y ordenanzas, ni los decretos del Gobierno Nacional o del Gobernador respectivo.
2. Exigir los informes escritos o citar a los secretarios de la Alcaldía, Directores de departamentos administrativos o entidades descentralizadas Municipales, al Personero, así como a cualquier funcionario Municipal, excepto el Alcalde, para que en sesión plenaria hagan declaraciones orales sobre asuntos relacionados con la marcha del municipio.
3. Invitar a los diferentes funcionarios del Orden Departamental, así como a los representantes legales de los organismos descentralizados y de los establecimientos públicos del orden nacional, con sedes en el respectivo departamento o municipio, en relación con temas de interés local.
4. Reglamentar la autorización al Alcalde para contratar, señalando los casos en que requiere autorización previa del Concejo.
5. Autorizar al Alcalde para delegar en sus subalternos o en las juntas administradoras locales algunas funciones administrativas distintas de las que dispone esta Ley.
6. Determinar la nomenclatura de las vías públicas y de los predios o domicilios.
7. Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas, de conformidad con la ley.
8. Velar por la preservación y defensa del patrimonio cultural.
9. Organizar la personería y dictar las normas necesarias para su funcionamiento.
10. Dictar las normas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, el cual deberá corresponder al plan Municipal o distrital de desarrollo, teniendo especial atención con los planes de desarrollo de los organismos de acción comunal definidos en el presupuesto participativo y de conformidad con las normas orgánicas de planeación.

[1] Ley 1551 de 2012.

11. A iniciativa del Alcalde, establecer la forma y los medios como el municipio puede otorgar los beneficios establecidos en el inciso final de los Art. 13, 46 y 368 de la Constitución Política.
12. Aquellas funciones normativas del municipio para las cuales no se haya señalado si la competencia corresponde al Alcalde o al Concejo se entenderá asignada a esta Corporación, siempre y cuando no contrarié la Constitución y la Ley.
13. Ejercer funciones normativas del municipio para las cuales no se haya señalado si la competencia corresponde al Alcalde o al Concejo, y se entenderá asignadas a esta Corporación, siempre y cuando no contrarien la Constitución y la Ley
14. Elegir Secretario General del Concejo.
15. Durante los periodos de sesiones, autorizar al Alcalde para salir del país, previo informe de la comisión que va a cumplir.
16. Fijar el monto de los viáticos del Alcalde para Comisiones dentro del país.
17. Aceptar la renuncia del Presidente del Concejo y de los Concejales.
18. Resolver la apelación de los proyectos de acuerdo rechazados por falta de unidad de materia.
19. Hacer el seguimiento y exigir el cumplimiento a la Administración de los acuerdos vigentes.
20. Fijar un rubro destinado a la capacitación del personal que presta su servicio en la administración Municipal.
21. Garantizar el fortalecimiento de la democracia participativa y de los organismos de acción comunal.
22. Citar a control especial a los Representantes Legales de las empresas de servicios públicos domiciliarios, sean públicas o privadas, para que absuelvan inquietudes sobre la prestación de servicios públicos domiciliarios en el respectivo Municipio o Distrito. Si La empresa de servicios públicos domiciliarios por intermedio de su representante legal no atienda las solicitudes o citaciones del control especial emanadas de los Concejo Municipal, se enviara a la Superintendencia de los Servicios Públicos Domiciliarios solicitud para que adelante una investigación administrativa e imponga las sanciones procedentes establecidas por la ley. Lo anterior sin perjuicio de las demás acciones legales o Constitucionales procedentes.
23. De conformidad con el numeral 3° del artículo 313 de la Constitución Política, el Concejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre la autorización al Alcalde para contratar en los siguientes casos:
    a. Contratación de empréstitos.

b. Contratos que comprometan vigencias futuras.
c. Enajenación y compraventa de bienes inmuebles.
d. Enajenación de activos, acciones y cuotas partes.
e. Concesiones.
f. Las demás que determine la Ley.

Parágrafo: En caso de que el Alcalde requiera facultades en cualquiera de los casos anteriores, deberá presentar un proyecto de acuerdo que contenga en forma específica como serán utilizadas dichas facultades.

Se negara la solicitud cuando se presenta en forma general o amplia y/o no se haya informado la utilización de la Autorización anterior.

24. Las demás que le atribuyan la Constitución y las Leyes.

ARTÍCULO 7º.- DECISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL. Las principales decisiones del Concejo Municipal se plasman mediante ACUERDO. Este es un acto administrativo obligatorio para las autoridades y los particulares en la jurisdicción del territorio Municipal. Otras decisiones de menor categoría podrán ser adoptadas mediante RESOLUCIONES Y PROPOSICIONES suscritas de la Mesa Directiva y el Secretario de la Corporación, según la naturaleza del acto.

ARTÍCULO 8º.- SEDE. El Concejo Municipal sesionará ordinariamente y por derecho propio, durante los periodos señalados por la ley y extraordinariamente por convocatoria del Alcalde en la cabecera Municipal y en el recinto oficialmente señalado para tal efecto, es decir en la carrera 14 No. 13-30, primer piso del Palacio Municipal.

Cuando se trata de asuntos que afecten específicamente a una vereda o barrio, el Concejo Municipal podrá hacer presencia allí cuando se convocare a cabildo abierto o a sesiones especiales en virtud a la ley 152 de 1994 y la ley 388 de 1997, 1557 de 2015 para lo cual deberá instalarse en el recinto y clausurarse en el mismo con sujeción a los preceptos de la ley estatutaria de los mecanismos de participación ciudadana y las demás que considere la Corporación.

ARTÍCULO 9º.- INVALIDEZ DE LAS REUNIONES[2]. Toda reunión de miembros del Concejo Municipal que con el propósito de ejercer funciones propias de la

[2] artículo 24 de la ley 136 de 1994

Corporación, se efectúe fuera de las condiciones legales o reglamentarias, carecerá de validez, y a los actos que realicen no podrá dárseles efecto alguno, y quienes participen en las deliberaciones serán sancionados conforme a las leyes.

ARTÍCULO 10°.- QUÓRUM DELIBERATORIO Y DECISORIO ORDINARIO. En cumplimiento de la disposición normativa contenida en el artículo 148 de la Constitución Política de 1991, las normas sobre quórum y mayorías decisorias previstas para el Congreso de la República, regirán también para el Concejo Municipal de Acacías, en consecuencia, en el Concejo Municipal regirá tanto el quórum deliberativo como el decisorio. Mediante el primero, podrá abrir sus sesiones y deliberar con la asistencia de por lo menos una cuarta parte de sus miembros, pero las decisiones únicamente podrán tomarse con la asistencia de la mayoría de los integrantes de la Corporación, lo cual constituye el quórum decisorio. En la plenaria y en las Comisiones Permanentes, las decisiones se tomarán por mayoría de los votos de los asistentes, salvo que la constitución o la ley exijan expresamente una mayoría especial.

ARTÍCULO 11°.- QUORUM DECISORIO: La aprobación de los proyectos de acuerdo referente a las normas orgánicas del presupuesto Municipal, plan general de desarrollo del municipio, plan básico de ordenamiento territorial (PBOT), reglamento interno del Concejo, la aceptación o rechazo de las objeciones a los acuerdos por inconveniencias y de derecho formuladas por el Alcalde, la recomposición de las Comisiones Permanentes y las demás que señale la Constitución y la Ley, requerirán de los votos favorables de la mayoría de los miembros que integran las Comisiones Permanentes respectivas y de los miembros que integran la Corporación, excepto la moción de censura que requerirá del voto favorable de los dos tercios de los miembros de la Corporación.

CAPÍTULO II
PRINCIPIOS RECTORES Y CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN

ARTÍCULO 12°.- PRINCIPIOS RECTORES. Las actuaciones de los Concejales y las bancadas a las que éstos pertenezcan, deberán desarrollarse con sujeción a los principios generales de la función administrativa contenida en el artículo 209 de la Constitución Política y los artículos, 3° del código contencioso administrativo y 5° de la ley 136 de 1994.

ARTÍCULO 13°.- REGLAS DE INTERPRETACIÓN DEL REGLAMENTO. La interpretación de las disposiciones reglamentarias aquí contenidas habrá de

realizarse según el sentido lógico y literal de las palabras. Con todo, en tratándose de disposiciones que presenten dificultades interpretativas se tendrán en cuenta las reglas de interpretación normativa contenidas en los artículos 25 a 32 del Código Civil Colombiano en lo que resulten pertinentes, así como también en caso de no encontrarse disposición aplicable se tendrá en cuenta las disposiciones contenidas en la Ley 5 de 1992.

ARTÍCULO 14°.- APLICACIÓN DE PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO. Cuando frente a situaciones fácticas particulares, el presente Reglamento no proporcione disposiciones normativas aplicables, se acudirá a las normas que regulen casos, materias o procedimientos semejantes y, en su defecto, a la doctrina constitucional y los principios generales del derecho. En todo caso de incompatibilidad entre la constitución, las leyes y el presente reglamento, se aplicarán las disposiciones superiores.

CAPÍTULO III
DEL CONCEJO Y LAS BANCADAS

ARTÍCULO 15°.- DEFINICIÓN. Para los efectos del presente Acuerdo, de conformidad con el artículo 1 de la Ley 974 2005, ratificado por la ley 1551 de 2012, los miembros del Concejo Municipal elegidos por un mismo partido, movimiento social o grupo significativo de ciudadanos, constituyen una bancada en la respectiva Corporación. Cada Concejal pertenecerá exclusivamente a la bancada del partido, movimiento político, social o grupo significativo de ciudadanos por el cual fue elegido.

Parágrafo. Son los partidos y movimientos políticos los competentes para determinar de manera general, los asuntos de conciencia y establecer un régimen disciplinario, que incluirá la gradualidad y las sanciones correspondientes por el incumplimiento a la obligación de actuar en bancadas al interior del Concejo Municipal.

ARTÍCULO 16°.- NOTIFICACIÓN DE BANCADAS. Las bancadas del Concejo Municipal deberán notificarse a la entrada en vigencia del presente acuerdo. En los siguientes periodos legales ordinarios o extraordinarios, se notificarán el primer día de sesiones. En tal circunstancia, deberán informar por escrito a la Presidencia y a la Secretaria General de la Corporación, la relación de los Concejales que integran las bancadas y el nombre de quienes hayan sido

designados como voceros de las mismas, asi como los nombres de quienes les designan otras actividades directivas al interior de dichas bancadas. El vocero de cada bancada, recibirá el nombre de coordinador.

ARTÍCULO 17º.- ACTUACIÓN EN BANCADAS. En cumplimiento de lo estipulado en el articulo 2 de la Ley 974 de 2005, los miembros de cada bancada actuarán en grupo y coordinadamente y emplearán mecanismos democráticos para tomar sus decisiones al interior del Concejo Municipal, en todos los temas que los Estatutos de los respectivos partidos o movimiento político no establezcan como de conciencia.

ARTÍCULO 18º.- FACULTADES DE LAS BANCADAS. Son facultades de las bancadas existentes en el Concejo Municipal de Acacías, las siguientes:

1. Promover citaciones, debates e intervenir en ellos a través de sus respectivos voceros.
2. Participar con voz en las sesiones plenarias del Concejo.
3. Intervenir a través de sus voceros en las sesiones en las que se discutan y se voten proyectos de acuerdo.
4. Hacer interpelaciones.
5. Solicitar votaciones nominales y en bloque.
6. Solicitar verificaciones de quórum.
7. Solicitar mociones de orden, de suficiente ilustración y las demás establecidas en el presente reglamento.
8. Postular candidatos.
9. Votar la moción de censura que requerirá del voto favorable de los dos tercios de los miembros de la Corporación.

Parágrafo: Lo anterior sin perjuicio, de las facultades o atribuciones que por virtud del Reglamento del Concejo se les confiere de manera individual a los concejales, para participar con voz en las sesiones plenarias de la respectiva Corporación

ARTÍCULO 19º.- INTERVENCIONES[3]. Durante las sesiones plenarias o de comisión permanente, las bancadas podrán hacer uso de la palabra máximo hasta en dos (2) oportunidades por tema. En cada caso, la intervención de la bancada no podrá ser 20 minutos la cual se realizará a través del vocero determinado para el efecto, permitiéndose intervenciones de otros miembros de la bancada, dentro del mismo tiempo asignado a cada bancada.

ARTÍCULO 20º.- USO DE LA PALABRA[4]. Para hacer uso de la palabra se requiere autorización previa de la Presidencia. La Mesa Directiva fijará el tiempo de las intervenciones de cada uno de los oradores teniendo en cuenta la extensión del proyecto y la complejidad de la materia.

El uso de la palabra se concederá con sujeción al siguiente orden: (tener en cuenta art 97 C:N)

1. En el trámite de proyectos de acuerdo, a los ponentes para la respectiva sustentación, hasta por Veinte (20) minutos
2. A los voceros y los miembros de las bancadas, hasta por quince Veinte (20) minutos por grupo. Cuando la bancada represente al menos el veinte por ciento de las curules, el tiempo de intervención podrá ampliarse hasta por (10) minutos más
3. A los oradores en el orden en que se hubieren inscrito ante la Secretaria General. Ninguna intervención individual, en esta instancia, podrá durar más 10 minutos
4. Los servidores públicos que tengan derecho a intervenir lo harán las veces y el tiempo que la Mesa Directiva considere, dependiendo de la extensión y complejidad de la materia.
5. Los voceros de las bancadas podrán intervenir por segunda vez y se cerrará las intervenciones.

PARÁGRAFO 1. Ningún orador podrá referirse a un tema diferente del que se encuentra en discusión, y su desconocimiento obligará a la Presidencia a llamar la atención y suspender el derecho para continuar en la intervención.

---

[3] ARTÍCULO 10 ley 974 de 2005. El articulo 97 de la Ley 5ª de 1992

[4] Art 10 ley 974 de 2005

PARÁGRAFO 2. Todos los oradores deben solicitar la palabra ante la presidencia de la Corporación, harán uso de la palabra por una sola vez en la discusión de un tema.

PARÁGRAFO 3. En la discusión o modificación de una proposición no se requiere inscripción previa, pero no podrán intervenir más de dos (2) veces, a excepción del autor o de quien proponga otra sustitutiva y los voceros de las bancadas.

ARTÍCULO 21°.- NÚMERO DE INTERVENCIONES. No se podrá intervenir por más de dos veces en la discusión de un proyecto de acuerdo, proposición o en su modificación, con excepción del autor del mismo o de los voceros de las bancadas, y no se podrá hablar más de una vez cuando se trate de:

1. Proposiciones para alterar o diferir el orden del dia.
2. Mociones y Cuestiones de orden.
3. Proposiciones de suspensión o que dispongan iniciar o continuar en el orden del dia.
4. Apelaciones o revocatoria de lo resuelto por la Presidencia.

ARTÍCULO 22°.- PROGRAMACIÓN PREFERENTE. Los proyectos de acuerdo o proposiciones presentados a nombre de una bancada, se programaran de manera preferente en el orden del dia de las Comisiones o en la plenaria, sobre las que hayan presentado a titulo personal los Concejales miembros de la Corporación.

ARTÍCULO 23°.- CONSTANCIAS: Cualquier Concejal podrá dejar constancia verbal o escrita de su posición sobre todos los proyectos de acuerdos que se tramiten, si así lo considera.

ARTÍCULO 24°.- FUNCIÓN NORMATIVA DEL USO DE LA PALABRA. Cuando se traten de proyecto de acuerdo, se observarán las siguientes reglas tendientes a la racionalización de las intervenciones en el uso de la palabra:

1. El ponente o coordinador ponente, según sea el caso, dispondrá de 20 minutos para que sustente su informe. En caso de ponencia de minorias, la ponencia alternativa podrá exponerse por el mismo tiempo que la ponencia principal.

2. En el caso de ponencias colectivas, los demás ponentes podrán hacer uso de la palabra hasta por 20 minutos que se distribuirán entre ellos, procurando la intervención de todas las bancadas que tienen representación de la ponencia.
3. Los voceros de los partidos que no hayan intervenido, podrán intervenir sin el requisito de inscripción previa, de conformidad con lo establecido con el inciso final del artículo 10 de la Ley de Bancadas.
4. Los inscritos con la antelación debida, podrán hacer uso de la palabra hasta por 5 minutos.
5. No obstante, en caso de que se presente la discusión separada del articulado, se abrirán las inscripciones y los oradores podrán intervenir hasta por 5 minutos a juicio de la Presidencia, según el número de inscritos.

CAPITULO IV
ESTRUCTURA ORGANICA DEL CONCEJO

ARTÍCULO 25°- ESTRUCTURA ORGÁNICA INTERNA. En ejercicio de sus funciones normativas y de control politico, el Concejo Municipal de Acacías, con sujeción a las disposiciones legales vigentes, determina la siguiente estructura orgánica.

1. **Plenaria:** Conformada por la totalidad de los Concejales de la Corporación, facultada para la elección del órgano de dirección y de gobierno denominado Mesa Directiva, asi como al Secretario General y los integrantes de las Comisiones Permanentes.

2. **Mesa Directiva:** Es el órgano de dirección y de gobierno. Está integrada por los siguientes miembros elegidos por la plenaria de la Corporación para periodos fijos de un (1) año: Un Presidente, un primer vicepresidente y un segundo vicepresidente.

3. **Comisiones Permanentes:** Son aquellas que cumplen funciones especializadas y específicas de acuerdo a la materia, conforme lo disponga la ley y el presente reglamento.

TITULO II
CONCEJO PLENO

CAPITULO I
INSTALACION POSESIÓN. PERIODO DE SESIONES. ACTAS. PUBLICIDAD.

ARTÍCULO 26°.- SESIONES DE INAGURACION. De conformidad con el articulo 8 del Decreto 2796 de 1994, el Concejo se instalará públicamente en el recinto oficial, el día dos (2) de enero correspondiente a la iniciación de su periodo legal a las 4: 00 pm y se ocuparán exclusivamente de la elección de los funcionarios que le corresponde, mesa directiva y Comisiones Permanentes para los efectos mencionados, se reunirá máximo hasta el 10 enero, fecha en la cual clausurará este tipo de sesiones.

Establecido al menos el quórum deliberatorio, los miembros presentes se constituirán en junta preparatoria, la que será presidida por el concejal a quien corresponda el primer lugar por orden alfabético y de apellidos. Si hubiere dos o más concejales cuyos apellidos los coloque en igualdad de condiciones preferirá el orden alfabético de su nombre.

Actuará como Secretario provisional hasta que se elija Secretario en propiedad, el Secretario General del Concejo del periodo inmediatamente anterior, quien previamente a la sesión inaugural, obtendrá de la autoridad electoral la lista de los Concejales electos, para su debida identificación; en ausencia de aquel, actuará como secretario ad hoc el Concejal designado por el Presidente de la junta preparatoria.

Asi las cosas, se dará inicio al proceso de acreditación de los Concejales electos, la cual se llevará a cabo primeramente ante el Presidente de la junta preparatoria y posteriormente ante el Presidente en propiedad. Los documentos que acreditan su condición, serán revisados por la comisión de acreditación documental que se designe para el efecto.

A continuación, todos los miembros presentes se pondrán de pie, para dar respuesta a la siguiente pregunta formulada por el Presidente provisional:

"¿Declaran los honorables concejales presentes instalado constitucionalmente el Concejo Municipal y abiertas su sesiones?".

Parágrafo. Si por fuerza mayor o caso fortuito no se pudiese llevar a cabo la instalación en la fecha antes mencionada se hará tan pronto como fuere posible.

ARTÍCULO 27°.- POSESIÓN DEL PRESIDENTE Y DE LOS CONCEJALES. Instalado el Concejo, el Presidente provisional jurará ante los miembros presentes de la Corporación, diciendo en voz alta las palabras siguientes:

"Invocando la protección de Dios, juro ante esta Honorable Corporación cumplir y defender la Constitución Política y las Leyes de la república, las ordenanzas y los acuerdos y desempeñar fielmente los deberes del cargo"

Acto seguido, el Presidente provisional tomará el juramento de rigor a los Concejales presentes, el que se entenderá prestado por todo el período constitucional; estos contestarán afirmativa a la siguiente pregunta:

"Invocando la protección de Dios, ¿Juran cumplir y defender la Constitución Política y las leyes de la República, las ordenanzas, los acuerdos y desempeñar fielmente a los deberes de cargo?" a lo que los Concejales responden Si Juro.

Si hubiere quórum decisorio, la Corporación procederá a elegir Presidente, primer Vicepresidente y segundo Vicepresidente, en forma separada, quienes conformarán la Mesa Directiva. El Presidente electo, acto seguido, se posesionará ante la plenaria y lo juramentará el Presidente provisional y asumirá funciones de manera inmediata, y proseguirá con la elección del primer y segundo Vicepresidente, a quienes juramentará y posesionará.

Los dignatarios de la Mesa Directiva para el segundo, tercer y cuarto año de sesiones, se elegirán en cualquier día del último periodo de sesiones ordinarias o en su prorrogas y se posesionarán y juramentarán ante la plenaria de forma inmediata.

Todos prestarán juramento en los siguientes términos: "Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las Leyes".

Parágrafo 1. El Presidente del Concejo instalará y clausurará las sesiones ordinarias y extraordinarias del Concejo Municipal con la presencia del señor Alcalde o su delegado, sin que su ausencia impida ni vicie el acto. En estas sesiones al dar inicio y cierre las sesiones se entonarán el Himno Nacional, departamental y Municipal.

Parágrafo 2. En las sesiones de instalación y clausura se podrán adelantar debates de control político y discusiones de proyectos de acuerdo, a excepción de la sesión inaugural del Concejo Municipal en el periodo constitucional.

ARTÍCULO 28.- PERIODO DE SESIONES. El Concejo Municipal sesionará ordinariamente y por derecho propio en la cabecera Municipal y en el recinto señalado oficialmente para tal efecto, por derecho propio y máximo una vez por día así:

A. **PERIODO ESPECIAL** es el comprendido del el 02 al 10 de enero del primer periodo después de elegidos y se ocupara de la elección de funcionarios.
B. El **PRIMER PERIODO** legal será: entre el primero y el último dia de febrero
C. **EL SEGUNDO** periodo legal será del 1° al 31 de mayo
D. **EL TERCER** periodo legal será del 1° al 30 de agosto,
E. **EL CUARTO** periodo legal será del 1° al 30 de Noviembre

Si por cualquier causa el Concejo Municipal no pudiere reunirse en las fechas indicadas, lo hará tan pronto como fuere posible dentro del periodo legal correspondiente.

Parágrafo 1: Se entiende por periodo constitucional el establecido en el Art. 312 de la Constitución Política y los periodos legales los señalados por la Ley 136 de 1994. Cada periodo ordinario podrá ser prorrogado por diez (10) días calendario más, a voluntad de la plenaria del Concejo Municipal.

Parágrafo 2: El Concejo Municipal sesionará extraordinariamente por convocatoria que haga el Alcalde Municipal, por el término que éste le fije y en oportunidades que no coincidan con el periodo especial o los periodos ordinarios, para que se ocupe exclusivamente de los asuntos que el Alcalde someta a su consideración.

ARTÍCULO 29°.- ACTAS. De las sesiones del Concejo y sus Comisiones Permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las Comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas.

Abierta la sesión, el Presidente someterá a discusión y aprobación, previa lectura, si los miembros de la Corporación lo consideran necesario, el acta de la sesión

anterior. No obstante el acta debe ser puesta previamente en conocimiento de los de los miembros de la Corporación, bien por su publicación en la gaceta del Concejo bien mediante reproducción por cualquier otro medio mecánico y/o electrónico, que disponga en municipio para estos efectos

ARTÍCULO 30º- PUBLICIDAD[5]**.** El Concejo debe informar a los ciudadanos sobre sus actividades, utilizando cualquier medio masivo impreso, radial o sistema electrónico de archivo y transmisión de datos, pagina web. En todo caso, cuyo director será el Secretario General de la Corporación. En dicho medio de información serán publicadas las resoluciones que para el efecto del reconocimiento de honorarios a los concejales expida la mesa directiva.

CAPITULO II
CONTROL POLITICO. DELEGACIONES. PROHIBICIONES

ARTÍCULO 31º.- FUNCIONES DE CONTROL POLÌTICO[6]**.** El Concejo Municipal, respecto de la administración Municipal, podrá ejercer las siguientes funciones de control político:

1. Citar con anticipación no menor de cinco (5) días hábiles, a los Secretarios de Despacho, Directores de Departamentos Administrativo, representantes legales de entidades descentralizadas, Institutos y demás funcionarios del orden Municipal, designados para periodos fijos, incluyendo al Personero. La citación debe contener el cuestionario que debe ser absuelto haciendo referencia a asuntos propios del cargo del respectivo funcionario; sobre este cuestionario versará el debate y su procedimiento será conforme a este reglamento.

2. Solicitar informaciones escritas a toda entidad y autoridades Municipales.

3. Proponer moción de censura respecto de los secretarios de despacho del Alcalde por asuntos relacionados con funciones propias del cargo o por desatención a los requerimientos y citaciones del Concejo Municipal en virtud al acto legislativo 01 de 2007.

---

[5] Art 27 ley 1551 de 2012 Los Concejos deberán publicar sus actos a través del medio que consideren oportuno, siempre y cuando ellos garanticen la efectividad de su difusión a la comunidad

[6] Acto Constitucional No. 01 de 2007

La Moción de censura es un procedimiento que se adelanta por el Concejo Municipal cuando las actuaciones o medidas adoptadas por un funcionario, no satisfacen los fines de la función pública en general y en especial los intereses del Municipio y como tal de su comunidad.

La Moción de censura procede contra:

A. Secretarios de Despacho del Municipio.
B. Directores y/o Jefes de Oficinas Asesoras de Despacho de Municipio.
C. Gerentes y/o Directores de Entidades Descentralizadas del Orden Municipal.
D. Gerentes y/o Directores de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado del Orden Municipal.

El Concejo Municipal podrá proponer moción de censura respecto a los funcionarios señalados anteriormente por asuntos relacionados con funciones propias del cargo o por desatención a los requerimientos y citaciones del Concejo Municipal y además:

A. Incumplimiento injustificado por una sola vez, e incumplimiento justificado hasta por tres (3) ocasiones, a la citación que le efectuó el Concejo Municipal a cualquiera de los funcionarios enunciados en el Artículo anterior
B. Responder el cuestionario con argumentos imprecisos, incoherentes o falsos o de manera evasiva o incompleta.
C. No ejecutar el presupuesto dentro del periodo correspondiente y sin justa causa o ejecutarlo por fuera de los marcos legales y/o reglamentarios.
D. Omitir o efectuar de manera ineficaz o ineficiente los mecanismos de Control Interno.
E. Cuando por negligencia o incompetencia, intereses personales y/o de terceros las actividades del Plan de Desarrollo que le competen al funcionario citado, se atrasen, paralicen, se desvien de sus fines o se demeriten en sus aspectos cuantitativos o cualitativos.
F. Cuando por su negligencia o incompetencia, intereses personales y/o de terceros, no se utilicen los recursos destinados por entidades nacionales o internacionales, gubernamentales o no gubernamentales, privadas o de cualquier orden a la implementación o ejecución de programas y proyectos.
G. Todas aquellas decisiones que por acción u omisión den lugar a infracciones la Constitución, la Ley, Las Ordenanzas o los Acuerdos.

Si de las respuestas del cuestionario objeto de una citación, se identifica una o más de las causales antes descritas, sin que a juicio de la Corporación sustenten una justificación, se podrá proponer al final del debate la Moción de censura.

PARAGRAFO 1: Los funcionarios deberán ser oídos en la sesión para la cual fueron citados, sin perjuicio de que el debate continúe en las sesiones posteriores por decisión del Concejo. El debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario y deberá encabezar el orden del día de la sesión.

La Moción de censura deberá ser propuesta por la mitad más uno de los miembros de la Corporación, expresando las razones en que se sustentan para proponerla.

PARAGRAFO 2: La propuesta puede ser efectuada en Comisiones Permanentes, en Plenaria.

Propuesta y aprobada la Moción de censura el Presidente de la Corporación convocará a sesión para efectos de su aprobación o improbación, la cual deberá efectuarse entre el tercero y el décimo día siguiente a la terminación del debate en el cual se presentó la propuesta, con audiencia pública del funcionario respectivo.

PARAGRAFO 3: La aprobación de la Moción de censura requerirá del voto afirmativo de las dos terceras partes de los miembros de la Corporación.

PARAGRAFO 4: En caso de ser aprobada la moción de censura, el funcionario quedará separado de su cargo La renuncia del funcionario al que se le promueva moción de censura no es obstáculo para que esta sea aprobada por la Corporación.

PARAGRAFO 5: Si la Moción de censura fuere rechazada, no podrá proponerse otra sobre la misma materia a menos que sea motivada por hechos nuevos.

Si los hechos objeto de la Moción de censura lo ameritan se nombrará una subcomisión de investigación.

Una vez recibida la propuesta de Moción de censura y demás documentos, al Secretario le corresponderá:

A. Abrir el expediente, el cual radicará con número, fecha, nombre del Concejal o Concejales que solicitaron la citación, nombre y cargo del funcionario citado. En este expediente deberán contenerse todas actuaciones que se generen en el transcurso de esta actuación.
B. Solicitar de inmediato al Personero Municipal, información sobre investigaciones que se adelanten en su despacho, respecto a los temas relacionados en el cuestionario.

Este funcionario contestará dentro de los dos (2) dias hábiles siguientes al recibo de la solicitud, indicando fecha de iniciación de preliminares o disciplinario materia de la investigación, estado en que se encuentra y última actuación.

ARTÍCULO 32°.- CITACIONES. Para el cumplimiento de la función de control político, podrá presentar las proposiciones que estime convenientes, según el tema, en las Comisiones Permanentes o en la plenaria, citando a los funcionarios mediante proposición escrita y aprobada, la cual se notificará al dia siguiente a través de la Secretaria.

En el desarrollo de la citación para el control político, las intervenciones se harán conforme al Artículo 35° de este reglamento.

Parágrafo 1[7]**.** El funcionario citado responderá y radicará en Secretaria dentro de los tres (3) dias hábiles siguientes a la notificación de la citación, un medio magnético de la respuesta, un original impreso y firmado con los anexos respectivos y una copia y una copia para cada concejal.

Parágrafo 2: Para dar inicio al desarrollo de la citación, debe estar presente el Concejal o alguno de los miembros de la bancada, y tendrán que permanecer en el recinto y escuchar atentamente la exposición de los citados, so pena de no poder intervenir en las conclusiones del debate.

ARTÍCULO 33°.- CITACIONES NO REALIZADAS. Si la bancada citante no se hace presente a la sesión, la citación no puede adelantarse y no podrán citar nuevamente al funcionario para tratar los mismos temas hasta treinta (30) dias

[7] Acto legislativo 01 de 2007 art 6 numera 12Una vez aprobada, el funcionario quedará separado de su cargo. Si fuere rechazada, no podrá presentarse otra sobre la misma materia a menos que la motiven hechos nuevos. La renuncia del funcionario respecto del cual se haya promovido moción de censura no obsta para que la misma sea aprobada conforme a lo previsto en este artículo.

calendario después, a menos que mediaren razones cabalmente aceptadas por la Corporación.

ARTÍCULO 34º. PLURALIDAD DE CITACIONES. Sólo tratándose de asuntos similares o conexos en la materia a debatir, podrán citarse varios funcionarios para la misma sesión

ARTÍCULO 35º.- DEBATES DE CONTROL POLÍTICO. En los debates que se lleven en el Concejo en función de control político, se observarán las siguientes reglas preferentes:

1- Para promover citaciones o debates de control político, deberá haber por lo menos una bancada o concejal responsable de la citación, que tendrá derecho a designar uno o varios ponentes que intervendrán hasta por veinte (20) minutos.
   De igual forma, varias bancadas podrán agruparse como una sola para efectos de adelantar debates de control político. Con todo, la coadyuvante de una bancada a otra no concederá a la coadyuvante los derechos de la bancada citante, de suerte que en estos eventos será menester determinar concretamente el nombre de la bancada citante.
2. La administración Municipal dispondrá de un tiempo máximo de una hora que podrá distribuirse proporcionalmente entre el número de servidores públicos citados.
3. Posteriormente se escucharan las posiciones del o de los voceros que para el respectivo debate designen las bancadas no citantes, las cuales podrán extenderse máximo hasta por 30 minutos. Cuando la bancada represente al menos el veinte por ciento de las curules, el tiempo de intervención podrá ampliarse hasta por 10 minutos más.
4. A continuación intervendrán los oradores debidamente inscritos, hasta por un periodo máximo de 10 minutos. La Presidencia podrá modificar el tiempo de la intervención dependiendo del número de inscripciones programadas, pero en ningún caso las intervenciones podrán durar menos de 5 minutos.
5. En ese punto, la Administración Municipal podrá intervenir nuevamente hasta por espacio de 10 minutos, que podrá prorrogarse por el mismo tiempo a juicio de la Presidencia.
6. Finalmente, el vocero de la bancada citante y el de las no citantes, si a bien lo consideran, dispondrán de 10 minutos adicionales para rendir su informe de conclusiones y presentar proposiciones a consideración de la Corporación.

7. Realizado lo anterior la Presidencia dará por terminada la cesión de Control Político.

ARTÍCULO 36°.- INFORMES. Rendirán informes escritos al Concejo Municipal sobre la gestión adelantada:

1. El Alcalde Municipal en la primera sesión ordinaria de cada año, y al regresar de Comisiones dentro y fuera del país.
2. Los Secretarios de despacho y Representantes legales de Entidades Descentralizados del municipio directas o indirectas, todas éstas con sus filiales y subsidiarias, y entidades de 2° grado o asociaciones entre entidades públicas, donde el Municipio tenga participación, dentro de los diez (10) primeros días del tercer período de sesiones de cada año.
3. El Personero dentro de los diez (10) primeros días del segundo período de sesión de cada año.
4. Las Comisiones Accidentales que estudien asuntos específicos asignados por la Presidencia, contaran a criterio de la presidencia con un término máximo de quince (15) días calendario, contados a partir de la notificación de su designación. Cuando requieran un término mayor para el cumplimiento de su misión, deben solicitar prórroga a la presidencia antes del vencimiento del plazo máximo en forma motivada, indicando el término que requieren para cumplir la labor. Podrán presentar informes parciales en forma verbal o escrita. Si en la prórroga no presentan informe alguno la presidencia designará una nueva comisión, si las circunstancias lo ameritan.
5. Los Concejales designados por la Mesa Directiva para asistir a eventos dentro o fuera de la ciudad o del país en representación de la Corporación, presentarán informe a la plenaria dentro de los quince (15) calendario a la terminación de la comisión

Parágrafo: Los informes rendidos por escrito presentados por los servidores públicos y señalados en los numerales 2° y 3° deberán ser sustentados por sus titulares dentro de los diez días siguientes a fecha de dicha presentación en sesión especial de plenaria, previa convocatoria efectuada por la Mesa Directiva de la Corporación.

ARTÍCULO 37°.- DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS. El Concejo también podrá delegar alguna o algunas de sus funciones en el Alcalde, sobre materia precisa y por tiempo determinado, confiriéndole mediante Acuerdo Municipal las respectivas

facultades extraordinarias, cuando la necesidad lo exija o las conveniencias públicas lo aconsejen.

En todo caso, en cualquier evento de delegación, habrán de cumplirse las reglas que sobre el particular establece la Ley 489 de 1998 y todas aquellas otras normas que la modifiquen o complementen.

ARTÍCULO 38°.- PROHIBICIONES. Conforme a lo preceptuado por el artículo 41 de la Ley 136 de 1994, le es prohibido al Concejo:

1. Obligar a los habitantes, sean domiciliados o transeúntes, a contribuir con dineros o servicios para fiestas o regocijos públicos.

2. Aplicar o destinar los bienes y rentas Municipales a objetos distintos del servicio público.

3. Intervenir en asuntos que no sean de su competencia, por medio de Acuerdos o de Resoluciones.

4. Dar votos de aplauso o de censura a actos oficiales. Con todo, la podrá pedir la revocación de los que estime ilegales o inconvenientes, exponiendo los motivos en que se funde.

5. Privar a los vecinos de otros municipios de los derechos, garantías o protección de que disfruten los de su propio municipio.

6. Decretar actos de proscripción o persecución contra personas naturales o jurídicas.

7. Decretar auxilios o donaciones a favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado.

8. Tomar parte en el trámite o decisión de asuntos que no son de su competencia.

TITULO III
DIGNATARIOS

CAPITULO ÚNICO
MESA DIRECTIVA. COMITÉ DE COORDINACIÓN POLÍTICA.

ARTÍCULO 39°.- PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA. El Concejo Municipal tendrá un Presidente, un Primer Vicepresidente y un Segundo Vicepresidente, elegidos para un periodo legal de un (1) año, quienes en conjunto integran la Mesa Directiva.

ARTÍCULO 40°.- ELECCIÓN DEL PRESIDENTE. Será Presidente de la Corporación, el Concejal que obtenga la mayoría simple de los votos de los Concejales asistentes a la Plenaria que conformen quórum decisorio. En un eventual empate entre dos o más candidatos, se repetirá la votación hasta por tres veces, y de persistir el empate, se procederá a dirimirlo por sorteo entre los candidatos empatados en la misma sesión. El presidente que esté ejerciendo establecerá el mecanismo de dicho sorteo.

Parágrafo 1. El primer y segundo Vicepresidente se elegirá por separado y con el mismo procedimiento aplicado en la elección de Presidente.

ARTÍCULO 41°.- FUNCIONES DEL PRESIDENTE. Al Presidente le corresponderá:

1. Convocar, presidir y dirigir las sesiones plenarias del Concejo.
2. Actuar en representación del Concejo en los actos y actividades que le correspondan.
3. Liderar la representación política del Concejo Municipal.
4. Suscribir con el Secretario las actas de plenaria y los proyectos de acuerdos aprobados en segundo debate.
5. Ser el nominador de los funcionarios del Concejo que por competencia le corresponda.
6. Juramentar y/o dar posesión a los Concejales, Vicepresidentes, Secretario General, Personero Municipal y funcionarios del Concejo.
7. Cuidar que los Concejales concurran puntualmente a las sesiones, requiriendo con apremio si fuere el caso, la presencia de los ausentes que no estén legalmente excusados, y mantener el orden interno.

8. Cumplir y hacer cumplir el reglamento, y decidir las cuestiones o dudas que se presenten sobre la aplicación del mismo. Contra esta decisión, cualquier Concejal puede apelar ante la Plenaria y ésta adoptar otra posición.
9. Disponer el reparto de los proyectos de acuerdo presentados a consideración de la Corporación.
10. Rechazar las iniciativas que no se avengan con el principio de unidad de materia, pero sus decisiones serán apelables ante la plenaria de la Corporación.
11. Designar ponentes de los proyectos de acuerdo y coordinador de ponentes cuando fueren dos o más los designados dos o más para un mismo proyecto.
12. Requerir a los Presidentes de las Comisiones Permanentes o de las Comisiones Accidentales para que presenten sus informes dentro de los términos legales o en el que se les haya fijado.
13. Sancionar y publicar los proyectos de acuerdo cuando la plenaria rechazare las objeciones por inconveniencia presentadas por el Alcalde y éste no los sancionare dentro del término legal de ocho (8) días hábiles.
14. Llevar la debida representación de la Corporación y fomentar las buenas relaciones interinstitucionales.
15. Designar las Comisiones Accidentales que demande la Corporación.
16. Dar curso, fuera de la sesión, a las comunicaciones y demás documentos o mensajes recibidos.
17. Cuidar que el Secretario y los demás empleados de la Corporación cumplan debidamente sus funciones y deberes.
18. Disponer las medidas conducentes para hacer efectiva la suspensión provisional de un Concejal, dispuesta por la jurisdicción contenciosa administrativa, o la suspensión provisional del desempeño de funciones dentro de un proceso disciplinario o penal.
19. Tomar las medidas conducentes para hacer efectiva la decisión de la autoridad judicial competente en relación con la declaratoria de nulidad de la elección de un Concejal o la declaratoria de interdicción.
20. Recibir la renuncia presentada por un Concejal, con indicación de la fecha a partir de la cual se quiere hacer.
21. Dar posesión al Concejal que entre a reemplazar a uno de los titulares, así como al Secretario y a los subalternos si los hubiere.
22. Llamar al candidato que deba llenar una vacancia absoluta de un Concejal, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la declaratoria, para que tome posesión del cargo vacante, de conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política.

23. Hacer efectivas las sanciones impuestas por los órganos de control fiscal y administrativo competentes, a los Concejales y empleados de la Corporación.
24. Presidir la Mesa Directiva.
25. Actuar como ordenador de gasto del presupuesto de la Corporación, con sujeción a la ley orgánica del presupuesto.
26. Celebrar a nombre de la Corporación los contratos legalmente autorizados, con observancia de las normas contenidas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Publica.
27. Decidir por fuera de la sesión plenaria el curso que debe darse a las comunicaciones y demás documentos que se reciban.
28. Solicitar a las entidades públicas o privadas en nombre del Concejo Municipal los documentos e informes que se requieran para el cumplimiento de las funciones que corresponde a su cargo.
29. Formular ante las autoridades competentes las consultas que juzgue pertinentes para la buena marcha de la Corporación.
30. Vigilar el funcionamiento del Concejo Municipal en todos los órdenes y coordinar con el Comandante de la Policía, la seguridad al interior del Concejo.
31. Resolver los derechos de petición que se presenten ante la Corporación, así como los que se dirijan ante los demás miembros y que hagan referencia exclusivamente a actuaciones o decisiones tomadas por el Concejo.
32. Presentar al término de su gestión, un informe sobre la labor cumplida.
33. Designar y/o distribuir a su criterio las oficinas, los vehículos y demás bienes de uso de la Corporación.
34. Las demás dispuestas por la Constitución y la ley.

ARTÍCULO 42°.- FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES DEL PRESIDENTE. La falta absoluta del Presidente del Concejo determinará la celebración de una nueva elección por el resto del periodo, en tanto que las temporales serán suplidas por el Primer Vicepresidente y si no es posible, por el Segundo Vicepresidente.

ARTÍCULO 43°.- RECURSO EN VÍA GUBERNATIVA. Las decisiones tomadas por el Presidente a nombre de la Corporación son apelables ante la Plenaria.

ARTÍCULO 44°.- FUNCIONES DE LOS VICEPRESIDENTES. Las funciones de los Vicepresidentes consisten en formar parte de la Mesa Directiva y en su orden,

reemplazar al Presidente en sus faltas temporales y las demás que les encomiende el Presidente o la Mesa Directiva.

El Primer Vicepresidente hará las veces del Presidente en sus faltas transitorias o a petición de éste.

ARTÍCULO 45°.- DE LA MESA DIRECTIVA. La plenaria elegirá para el periodo de un (1) año calendario la Mesa Directiva del Concejo Municipal.

Parágrafo 1. Ningún Concejal podrá ser reelegido en dos periodos consecutivos en la respectiva Mesa Directiva.

Parágrafo 2. El o los partidos que se declaren en oposición al Alcalde, tendrán participación en la primera vicepresidencia del Concejo.

Parágrafo 3. La Mesa Directiva y el Presidente serán los encargados de definir la agenda general del Concejo Municipal, la cual ha de ser concertada con los coordinadores, jefes o voceros de las bancadas con presencia en la Corporación.

ARTÍCULO 46°.- FUNCIONES DE LA MESA DIRECTIVA. Como órgano de orientación y dirección del Concejo Municipal, le corresponde:

1. Elaborar el proyecto del presupuesto anual del Concejo y enviarlo al Alcalde para su consideración e incorporación en el proyecto de acuerdo definitivo sobre rentas y gastos del municipio.
2. Vigilar el funcionamiento de las Comisiones y velar por el cumplimiento oportuno de las actividades encomendadas.
3. Autorizar Comisiones oficiales de concejales fuera de la sede del Concejo, siempre que no impliquen utilización de dineros del tesoro público.
4. Expedir mociones de duelo y de reconocimiento cuando ellas sean conducentes.
5. Aceptar la renuncia, conceder licencia, vacaciones y permisos al personero, con fundamento en la atribución conferida en el artículo 172 de la Ley 136 de 1994.
6. Suscribir las resoluciones para el efecto de reconocimiento de honorarios a los Concejales por su asistencia comprobada a las sesiones plenarias, y ordenar su publicación en el medio oficial de información del Concejo (art. 65 de la Ley 136 de 1994)
7. Recibir la renuncia del Presidente de la Corporación.

8. Darle cumplimiento a las sanciones disciplinarias impuestas por los partidos y movimientos políticos a los Concejales de las bancadas con presencia en la Corporación.
9. Acreditar a los voceros de las bancadas para efectos de determinar las intervenciones de las mismas en las sesiones en las que se voten proyectos de acuerdo o se adelanten procesos de control político, según las reglas de procedimiento determinadas procedentemente.
10. Garantizar que en cada comisión permanente tenga presencia al menos un miembro de las diferentes bancadas que tenga presencia en la Corporación, cuando existan suficientes integrantes en la misma.
11. Las demás establecidas en la ley o el presente reglamento.

Parágrafo. Durante los periodos de sesiones, la Mesa Directiva se reunirá por lo menos una vez a la semana, a la hora y el dia que sea convocada por su Presidente. Sus decisiones se tomarán por mayoría y de cada reunión deberá quedar constancia en acta.

ARTÍCULO 47º.- COMITÉ DE COORDINACIÓN POLÍTICA. Conformado por el Presidente de la Corporación, quien lo preside, y los voceros o coordinadores de las bancadas. Se reunirá por lo menos una vez al mes para el desarrollo de las siguientes funciones:

1. Proponer la agenda de trabajo de la Corporación.
2. Coordinar con la Presidencia el orden del dia de las sesiones plenarias a celebrar.
3. Promover y ejecutar acciones de concertación política.

TITULO IV
DEBERES Y DERECHOS DE LOS CONCEJALES

CAPITULO PRIMERO
DE LOS DEBERES

ARTÍCULO 48º.- DEBERES. Como todo servidor público, el Concejal tiene el deber de acatar la Constitución y las leyes de la República, siendo responsable por su infracción, por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Especialmente tendrá los siguientes deberes:

1. Asistir a las sesiones de plenaria y de las Comisiones a que pertenezca.
2. Respetar el presente reglamento.
3. Guardar secreto sobre los asuntos que demanden reserva.
4. Abstenerse de invocar su condición de concejal para la obtención de algún provecho personal indebido.
5. Utilizar adecuadamente los bienes y recursos asignados para el desempeño de su función.
6. Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por razón del servicio.
7. Ejercer sus funciones consultando permanentemente los intereses del bien común.
8. Abstenerse de incurrir en alguna de las causales de pérdida de la investidura, previstas en el artículo 48 de la Ley 617 de 2000.
9. Declarar bajo juramento el monto de sus bienes y rentas, antes de tomar posesión del cargo y al retirarse del mismo.
10. Poner en conocimiento de la Corporación las situaciones de carácter moral o económico que lo inhiban para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración, conforme al artículo 70 de la Ley 136 de 1994, así como las incompatibilidades en que pueda estar incurso.
11. Actuar exclusivamente en la bancada del partido o movimiento político por el cual fue elegido y con sujeción a los parámetros de actuación que determinen aquella, salvo en los asuntos determinados como de conciencia

CAPITULO SEGUNDO
DE LOS DERECHOS

ARTÍCULO 49°.- DERECHOS. El concejal tiene los siguientes derechos principales:

1. A voz durante las sesiones, conforme al reglamento.
2. A voto, tanto en la plenaria como en la comisión permanente a que pertenezca.
3. A citar en ejercicio del control político que corresponde a la Corporación, a los funcionarios que autoriza la ley.
4. A formar parte de una comisión permanente.
5. Al reconocimiento y pago de honorarios por su asistencia comprobada a las sesiones plenarias de la Corporación, conforme a la reglamentación legal.

6. A ser afiliado por el sector central del municipio al sistema contributivo de seguridad social en salud y ARP, en su condición de servidor público y conforme a los artículos 157 y concordantes de la Ley 100 de 1993
7. A un seguro de vida y a la atención médico asistencial personal, de conformidad con los artículos 66, 68 y 69 de la Ley 136 de 1994 y la ley 1148 de 2007 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional contenida en la sentencia C-043 de 2003.
8. Al reconocimiento de transporte[8] en los casos en que resida en zona rural y deba desplazarse hasta la cabecera Municipal para asistir a las sesiones plenarias o de comisión, teniendo en cuenta el acuerdo aprobado para tal efecto
9. A ejercer individualmente las actividades propias de su dignidad de conformidad con la Constitución Política, la Ley 136 de 1994 y la Ley 974 de 2005.

TITULO V
SECRETARIO GENERAL

CAPITULO ÚNICO
DESIGNACIÓN. REQUISITOS. PERIODO. FUNCIONES.

ARTÍCULO 50°.- DESIGNACIÓN, REQUISITOS Y PERIODOS. El secretario general será elegido por el Concejo para un periodo legal de un (1) año, de lista de admitidos previa convocatoria pública con principios de mérito, pude ser reelegido a criterio de la Corporación. Deberá acreditar los requisitos exigidos por la Ley 136 de 1994.

La primera elección de este funcionario se realizará dentro de los diez (10) primeros días del mes de enero correspondiente a la iniciación del periodo constitucional. Para los años siguientes del mismo periodo constitucional, tendrá lugar durante el último periodo ordinario de sesiones o en su prórroga, o en su defecto en sesiones extraordinarias que para el efecto convoque el Alcalde. Se posesionará y juramentará ante el Presidente de la Corporación y asumirá funciones a partir de su posesión.

[8] según el Artículo 67 ley 1368 de 2009.

Siempre que se haga una elección después de haberse iniciado un período, se entiende hecha sólo para el resto del período en curso.

ARTÍCULO 51°.- FUNCIONES GENERALES. Es el jefe administrativo de los empleados al servicio de la Corporación, Secretario de la misma y de las Comisiones. En tal condición le corresponde la organización y dirección del talento humano para el cumplimiento de la misión de la Corporación.

ARTÍCULO 52°.- FUNCIONES ESPECÍFICAS. Son funciones específicas y deberes del Secretario General de la Corporación, las siguientes:

1. Asistir a todas las sesiones, tanto de plenaria como de las Comisiones Permanentes.
2. Llevar y firmar junto con el Presidente las actas de las sesiones plenarias. Igual procedimiento se cumplirá con las actas de las sesiones de Comisiones.
3. Dar lectura a los proyectos, proposiciones, documentos y mensajes que deban ser leídos en sesión plenaria y en las Comisiones.
4. Informar sobre los resultados de toda clase de votación que se cumpla en la Corporación.
5. Notificar las citaciones e invitación aprobadas por la Corporación.
6. Elaborar las comunicaciones oficiales que deban ser enviadas por el Presidente o por la Mesa Directiva.
7. Informar al Presidente sobre todos los documentos y mensajes dirigidos a la Corporación, acusar oportunamente su recibo, y mantener organizado y actualizado un registro de entrega y devolución de los mismos y de los enviados a las Comisiones.
8. Recibir y dar trámite a todo documento o petición que llegue al Concejo con destino a la Secretaría General de la Corporación.
9. Recibir y radicar los proyectos de acuerdo y repartirlos a cada uno de los Concejales y a la Comisión correspondiente para su trámite en primer debate.
10. Llevar los siguientes libros: el de registro de intereses privados de los Concejales de que trata el artículo 70, inciso segundo, de la Ley 136 de 1994, y el de registro de participación ciudadana a que se refiere el artículo 77 de la misma ley.
11. Preservar, cuidar y dar buen uso a todos los documentos a cargo de la Secretaría General.
12. Dirigir el órgano de publicación del Concejo.

13. Registrar y certificar la asistencia de los Concejales a las sesiones plenarias.
14. Recibir la inscripción de constitución de las bancadas de partidos y movimientos políticos del Concejo Municipal y dar a conocer a la plenaria los documentos constitutivos de las mismas.
15. Responder por la preservación y conservación de bienes muebles e inmuebles así como el inventario general que sea propiedad o este a cargo del Concejo Municipal, además responder por el archivo del Concejo Municipal.
16. Rendir oportunamente los informes a los diferentes entes de control.
17. Los demás deberes que le señale la Corporación, la mesa directiva o el presidente que sea concordantes con la naturaleza del cargo.

Parágrafo. Las faltas absolutas del Secretario General se suplen con una nueva elección en el menor tiempo posible. La mesa directiva convocara a la plenaria para la nueva elección en cualquier momento. En caso de falta temporal, la Mesa Directiva dispondrá lo pertinente.

TITULO VI
COMISIONES

CAPITULO PRIMERO
CLASES DE COMISIONES

ARTÍCULO 53.- COMISIONES ACCIDENTALES. Además de las Comisiones Permanentes, el Concejo podrá integrar Comisiones Accidentales. El Presidente nombrará Comisiones Accidentales para el cumplimiento de asuntos especificos como protocolo, asuntos de ética, acreditación documental, transmisión de mensajes, escrutinio de las votaciones internas, primer debate a proyectos cuando no se hayan constituido las Comisiones Permanentes, estudio de objeciones, presentación de informes a la plenaria sobre asuntos de interés para la Corporación, entre otros. Sin perjuicio de lo anterior, serán funciones especificas de las Comisiones Accidentales, las siguientes:

- Recibir sectores de la comunidad para el conocimiento de situaciones y problemas relacionados con el Municipio en sus diferentes aspectos.
- Presentar a la plenaria del Concejo o a las Comisiones Permanentes informe escrito sobre la gestión adelantada.

- Escrutar el resultado de las votaciones.
- Recibir dignatarios o personalidades que invite el Concejo Municipal.
- Presentar informe escrito sobre las objeciones del Alcalde Municipal a los proyectos de acuerdo.
- Preparar proyectos de acuerdo de especial interés para la Corporación y el Municipio.
- Llevar a cabo las funciones que le sean asignadas por el respectivo Presidente de la Corporación y de las Comisiones Permanentes.

Parágrafo. Dichas Comisiones deberán ser integradas por dos (2) Concejales, máximo cinco (5) asegurando la representación de las diferentes bancadas. En su designación, el Presidente definirá el termino para la presentación del informe sobre el tema, el cual deberá ser por escrito y radicado en la Secretaria General para su lectura en plenaria.

CAPÍTULO SEGUNDO
COMISIONES PERMANENTES

ARTÍCULO 54°.- NÚMERO, INTEGRACIÓN Y FUNCIONES, El Concejo tendrá tres (3) Comisiones Permanentes, integradas así: Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo integrada por cinco (5) miembros; Comisión Segunda Permanente del Presupuesto y Hacienda Pública integrada por cinco (5) miembros, Comisión Tercera Permanente Administrativa y de Gobierno integrada por cinco (5) miembros. En estas Comisiones Permanentes se surtirá el primer debate a los proyectos de acuerdo que por competencia le sean remitidos por la Secretaria General de la Corporación.

Cualquier comisión permanente podrá citar a persona natural o jurídica para que en sesión especial rinda declaraciones orales o escritas, sobre hechos relacionados directamente con asuntos de interés público, investigados por la misma, lo anterior con fundamento legal en el artículo 40 de la Ley 136 de 1994.

Todo concejal deberá hacer parte de una Comisión permanente durante el respectivo periodo constitucional.

Parágrafo 1. Los reemplazos de los Concejales harán parte de la Comisión permanente a que pertenece o pertenecía el titular de la curul.

Parágrafo 2. Las funciones de Secretario de las Comisiones las cumplirá el Secretario General, sin embargo en caso de imposibilidad la comisión nombrara AD-HOC.

Parágrafo 3. En los eventos en que las Comisiones Permanentes no se hayan integrado, los informes serán rendidos por Comisiones Accidentales nombradas para el efecto por la Presidencia de la Corporación.

Parágrafo 4: Para el desarrollo de sus funciones, las Comisiones Permanentes, en lo no contemplado en el presente acuerdo, se regirán por lo estipulado en la Constitución y las Leyes, especialmente el reglamento del congreso.

ARTÍCULO 55°.- ELECCIÓN[9]: Las Comisiones Permanentes deben ser integradas y elegidas por voto secreto, cada comisión estará integrada por cinco (5) concejales, cada concejal debe pertenecer a una comisión permanente y en ningún caso hará parte de dos (2) Comisiones Permanentes.

Para la elección de las Comisiones se presenta las planchas con los nombres de los concejales para cada comisión, cada plancha debe presentar la integración de las tres (3) Comisiones Permanentes, luego la presidencia del Concejo someterá a votación las planchas, todas a la vez, la plancha que obtenga la mayoria de los votos será la ganadora.

Cada comisión permanente elegirá el dia de su instalación un presidente y un vicepresidente que ejercerán el cargo durante un año

Al presidente le corresponde dirigir los debates y señalar el dia y la hora para la reunión de la comisión sin que pueda coincidir con el horario de la plenaria.

ARTÍCULO 56°.- MATERIA DE ESTUDIO DE LAS COMISIONES. Las Comisiones Permanentes se dedicarán en sus deliberaciones al examen de los temas especializados que le sean propios en materia normativa y de control

[9] articulo 3 de la Ley 1431 de 2011. VOTACION SECRETA No permite identificar la forma como vota el Congresista. Las rectificaciones solo serán procedentes cuando el número de votos recogidos no sean igual al de los votantes.
Esta votación solo se presentará en los siguientes eventos:
a) Cuando se deba hacer elección

político, al análisis y evaluación de los informes que deben rendir los funcionarios de la administración, aprobar o negar en primer debate los proyectos de acuerdo que sean sometidos a su consideración y a la realización de los debates que hayan sido aprobados en la Comisión sobre asuntos propios de su competencia.

Parágrafo: Los asuntos que por su naturaleza no estén claramente definidos como responsabilidad de una comisión permanente quedarán a disposición del Presidente de la Corporación para su asignación.

ARTÍCULO 57°.- SESIONES CONJUNTAS DE COMISIONES PERMANENTES. Dos Comisiones Permanentes sesionarán de manera conjunta cuando se trate de tramitar proyectos de acuerdo u otros asuntos relacionados con la competencia de ambas, y cuya materia lo exija. Las Comisiones Permanentes deberán ser convocadas a sesión conjunta por el Presidente de la Corporación quien la presidirá.

Parágrafo. Si una de las Comisiones Permanentes en sesión conjunta no aprueba un proyecto de acuerdo, este se considerará negado y se procederá a su archivo.

ARTÍCULO 58°.- MATERIAS OBJETO DE LA COMISIÓN PRIMERA PERMANENTE DEL PLAN DE DESARROLLO Y BIENES. Para el ejercicio de sus funciones normativas y de control político, será la encargada de los siguientes asuntos:

1. Plan de desarrollo del municipio.
2. Plan básico de ordenamiento territorial.
3. Plan vial y de movilidad, transito, transporte y seguridad.
4. Organización y funcionamiento de las veedurías ciudadanas, la descentralización, la desconcentración y el control social de los servicios públicos.
5. Reglamentación del uso del suelo y el espacio público del municipio.
6. Desarrollo fisico de las áreas rurales del municipio.
7. División del territorio Municipal.
8. Planeación y asesorías a las Juntas de Acción Comunal en la elaboración del Plan de Desarrollo Económico y Social.
9. Preservación y defensa del patrimonio ecológico, los recursos naturales y del medio ambiente.

10. Vigilancia y control de la prestación de los servicios públicos domiciliarios y del transporte público y seguridad ciudadana.
11. Divulgación, fomento y pedagogía de los procesos de participación y cultura ciudadana.
12. Ejercer la vigilancia y control de las actividades de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda establecidas en el artículo 187 de la Ley 136 de 1994.
13. Estudio de facultades pro témpore al Alcalde del Municipio en las materias antes relacionadas.
14. organización de la personería reglamento interno del Concejo y determinación de la estructura orgánica del mismo
15. Las demás que sean asignadas por el Presidente de la Corporación.

ARTÍCULO 59°.- MATERIAS OBJETO DE LA COMISIÓN SEGUNDA PERMANENTE DE PRESUPUESTO Y HACIENDA PÚBLICA. Para el ejercicio de sus funciones normativas y de control político, será la encargada de los siguientes asuntos:

1. Plan de inversiones del municipio y el componente financiero que contengan los planes de desarrollo económico y social y de obras públicas.
2. Establecimiento, reforma o eliminación de tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas, extensiones tributarias, sistemas de retención y anticipos.
3. Normas orgánicas del presupuesto y expedición anual del presupuesto de rentas y gastos.
4. Los recursos de gastos e inversión para el municipio.
5. Definición de las escalas de remuneración para las distintas categorías de empleos de la administración Municipal.
6. Cupo global de endeudamiento.
7. Estudio de las facultades pro témpore al Alcalde Municipal sobre materias de competencia de esta Comisión.
8. Examen del balance general y demás estados contables del municipio, presentados por el Alcalde, firmados por el Secretario de Hacienda y presentación al Concejo Municipal de sus conclusiones.
9. Examen del informe sobre el estado de las finanzas del municipio y análisis de las políticas económicas adoptadas por la Administración.
10. Las demás que sean asignadas por el Presidente de la Corporación

ARTÍCULO 60°.- MATERIAS OBJETO DE LA COMISIÓN TERCERA PERMANENTE ADMINISTRATIVA Y DE GOBIERNO. Para el ejercicio de sus funciones normativas y de control político, será la encargada de los siguientes asuntos:

1. Regulación, preservación y defensa del patrimonio cultural.
2. Estudio de facultades pro témpore al Alcalde sobre materias de competencia de esta Comisión.
3. Estructura de la Administración Central y sus funciones, creación y supresión de empleos, creación, constitución, supresión, transformación y fusión de establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales, sociedades de economía mixta y participación del municipio en otras entidades de carácter asociativo.
4. Educación, salud, bienestar social, deporte, recreación, turismo y cultura ciudadana.
5. Organizaciones sindicales, comunitarias y sociales.
6. Derechos humanos.
7. Las demás que sean asignadas por el Presidente de la Corporación.

TÍTULO VII
SESIONES

CAPITULO PRIMERO
REUNIONES. CITACIONES. ORDEN INTERNO

ARTÍCULO 61°.- CLASES DE SESIONES. El Concejo podrá sesionar bajo las siguientes modalidades:

1°. PLENARIA. Es la reunión de la mayoría de los Concejales para tratar asuntos que por Constitución y la Ley son de su competencia. Sus modalidades son:

a. Sesión inaugural. Es aquella con que se inicia cada nuevo periodo constitucional del Concejo.
b. Sesión de instalación. Es aquella sesión con la que se inicia todo periodo legal.

c. Sesión de clausura. Corresponde a la última sesión plenaria de la Corporación en cada periodo ordinario y la última de las sesiones extras.
d. Sesión reservada. Es la que se realiza sin asistencia ni participación de la comunidad, por requerirlo el asunto que haya de tratarse o lo disponga la Mesa Directiva o cuando en tal sentido se apruebe una proposición.
e. Sesión especial. Cuando el Concejo se reúne a solicitud de la comunidad con el lleno de los requisitos señalados por la Ley para tratar únicamente los asuntos para la cual fue convocada.
f. Cabildo abierto. Cuando el Concejo se reúne previo el lleno de los requisitos establecidos en las normas correspondientes.

2º. SESION DE COMISIÓN PERMANENTE. Es aquella en que se surte el primer debate a los proyectos de acuerdo y se tratan aquellos asuntos que la Corporación determine pertinentes en cumplimiento de sus funciones.

3º. SESIÓN DE COMISIÓN ACCIDENTAL. Es aquella que surte el primer debate cuando no se hayan conformado las Comisiones Permanentes. También es aquella que se reúne para estudiar asuntos específicos que le asigne la Presidencia.

ARTÍCULO 62º.- SESIONES. El Concejo Municipal sesionará de manera ordinaria y extraordinaria en el recinto oficial, en los periodos descritos en el Artículo 28º de este reglamento. Para tal efecto, todos los días de la semana son hábiles, tanto para la plenaria como para las Comisiones. Los horarios para las sesiones son los siguientes, a no ser que la plenaria por proposición los modifique en forma temporal:

1. De lunes a viernes de 7:00 AM a 10:30 am, la sesión se iniciará con un número no inferior al 25% de sus miembros, teniendo como máximo plazo las 7:30 AM para la conformación del quórum decisorio a fin de aprobar el respectivo orden del día. De no darse esta condición, se levanta la sesión.
2. Sábados, domingos y festivos, de 8:00 AM a 11:30 AM, la sesión se iniciará con un número no inferior al 25% de sus miembros, teniendo como máximo plazo las 8:30 AM para la conformación del quórum decisorio a fin de aprobar el respectivo orden del día. De no darse esta condición, se levanta la sesión.

La propuesta para declarar sesión permanente será votada por la plenaria sin lugar a discusión previa.

Las Comisiones Permanentes sesionarán válidamente para ejercer sus funciones normativas y de control político en todo tiempo y momento dentro del periodo constitucional. No podrán sesionar mientras haya sesión plenaria.

Las sesiones de las Comisiones Permanentes durarán máximo cuatro (4) horas a partir del momento en que el Presidente las declarare abiertas, pero podrán declararse de sesión permanente cuando consideren necesario.

Durante el desarrollo de las sesiones, el Presidente tanto de plenaria como de las Comisiones, podrá declarar los recesos por el término que considere necesario.

Cada periodo de sesiones ordinarias podrá prorrogarse hasta por diez días (10) calendario más. Esta prórroga se decidirá mediante proposición presentada por cualquier concejal y aprobada por la mayoría simple de la plenaria.

Parágrafo 1: El horario establecido en el presente artículo podrá ser modificado por la plenaria.

Parágrafo 2: Después de 3 horas y media de sesión se debe declarar sesión permanente para que los actos sean válidos, de no hacerlo los actos después de 3 horas y media no serán válidos.

ARTÍCULO 63°.- CITACIONES: La citación a las sesiones plenarias y a las Comisiones, deberán hacerla los Presidentes. Al finalizar la sesión debe informar el día y la hora de la siguiente reunión, o en su defecto, a través de la Secretaría General de manera expresa y oportuna, dejando constancia de la misma.

Parágrafo 1: Cuando se trate de elección de funcionarios, de Mesa Directiva o Comisiones Permanentes, la citación se hará con tres (3) días de anticipación, ya sea de manera verbal en una sesión o por escrito o por un medio electrónico a través de la Secretaría General.

Parágrafo 2: Cuando el Concejo no este sesionando y se convoque para citar a sesiones plenarias y de comisión, el Presidente a través de la Secretaria General, notificara por escrito a los concejales y en caso de no ser posible se realizara de

manera expresa y oportuna, dejando constancia de la misma, en todo caso la citación se hará con tres (3) días de anticipación.

ARTÍCULO 64°.- SESIONES FUERA DE LA SEDE. Con el voto afirmativo de la mayoría simple de los Concejales miembros de la plenaria o de las Comisiones Permanentes, se podrá sesionar fuera de la sede oficial para atender asuntos de interés para la comunidad, en el sitio que se determine en la proposición que se apruebe para tal fin, la cual deberá contener los asuntos a tratar. El Presidente de la plenaria o comisión permanente podrá objetar la sesión fuera del Concejo por razones comprobables de seguridad o por que el sitio no ofrezca las garantías de protección para los honorables concejales.

ARTÍCULO 65°.- ORDEN INTERNO. Al recinto destinado a la realización de las sesiones del Concejo, solo podrán ingresar los miembros de la Corporación, quienes participen con derecho a voz en sus deliberaciones, funcionarios invitados y citados, el personal administrativo y de seguridad, así como periodistas. La Presidencia podrá autorizar el ingreso de otras autoridades y de particulares cuando no se afecte el normal desarrollo de las sesiones.

Los Concejales tendrán en el recinto sus sillas dispuestas por bancadas, en el orden que lo determine la Mesa Directiva.

La comunidad podrá ingresar libremente a las sesiones y ocupar su lugar en las graderías destinadas para las barras, sin embargo, el Presidente regulará su ingreso cuando las circunstancias lo exijan y ejercerá el control necesario. Durante la sesión, podrá pedir que guarden compostura y silencio, mandar salir a los perturbadores, e incluso ordenar el despeje de las barras.

Para el mantenimiento del orden, el Presidente impondrá al Concejal, funcionario o ciudadano que falte al respeto debido a la Corporación o ultrajare de palabra a cualquiera de sus miembros, según la gravedad de la falta, alguna de estas sanciones:

1. Llamamiento al orden.
2. Declaración pública de haber faltado al orden y al respeto debido.
3. Suspensión en el uso de la palabra. (Esta decisión es Apelable ante la Plenaria)
4. Suspensión del derecho a continuar interviniendo en el debate o en la sesión.

5. Desalojo inmediato del recinto. Si no acata lo ordenado (Esta decisión es Apelable ante la Plenaria)

Parágrafo. Sin excepción, ninguna persona podrá portar armas en el recinto del Concejo. También estará prohibido ingerir bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas o fumar, como también el ingresar en ropa deportiva (pantaloneta).

ARTÍCULO 66°.- ORDEN DE LAS SESIONES. Llegada la hora para iniciar la sesión convocada, el Presidente ordenará al Secretario General llamar a lista. Si se verifica el quórum decisorio ordenará dar lectura al orden del dia.

Si llegada la hora fijada para iniciar la sesión no se encuentra presente el Presidente, la instalación la podrá hacer en su orden, el Primer o Segundo Vicepresidente. Si estuvieren ausentes todos los miembros de la Mesa Directiva, la instalación de la sesión la hará el Concejal que por orden alfabético se encuentre primero en la lista.

Si por haberse turbado el orden de la sesión, fuere conveniente diferir el tratamiento de un asunto previo en la agenda del dia, el Presidente podrá disponer su aplazamiento hasta la sesión siguiente. Esta decisión es susceptible de apelación inmediata ante la plenaria, por cualquier Concejal.

En relación con el orden en el que deberán adelantarse las sesiones, se considerarán como faltas de los Concejales, las siguientes:

1. El desconocimiento de los deberes que impone este reglamento.

2. El cometer actos de desorden e irrespeto en el recinto de sesiones.

3. No presentar las ponencias en los plazos señalados, salvo excusa legítima.

ARTÍCULO 67°.- SESIONES EXTRAORDINARIAS. El Concejo Municipal sesionará extraordinariamente por convocatoria que haga el Alcalde Municipal y por el término que éste le fije. Durante el periodo de sesiones extraordinarias el Concejo únicamente se ocupará de los asuntos que el Alcalde someta a su consideración, sin perjuicio de que ejerza las funciones inherentes a su naturaleza y las de control político que le corresponde en todo tiempo.

CAPITULO SEGUNDO
ORDEN DEL DIA

ARTÍCULO 68°.- ORDEN DEL DÍA. La serie de asuntos que se someten en cada sesión a la discusión y decisión del Concejo, tanto en plenaria como en sus Comisiones Permanentes, se llama Orden del Día, el cual seguirá el siguiente orden y orientación:

1. Llamado a lista y verificación de quórum.
2. Oración.
3. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.
4. Lectura, discusión y aprobación de actas.
5. Debates e intervención de funcionarios citados.
6. Intervención de invitados y representantes de la comunidad.
7. Trámite de proyectos de acuerdo apelados.
8. Trámite de proyectos objetados por el Alcalde.
9. Proyectos de trámite especial.
10. Informe de las Comisiones Permanentes.
11. Proyectos de acuerdo para segundo debate.
12. Elección y posesión de funcionarios, Mesa Directiva y Comisiones permanente.
13. Informe de Comisiones especiales y accidentales.
14. Lectura de documentos y comunicaciones.
15. Proposiciones y asuntos varios.

Parágrafo 2. El orden del día puede ser modificado solo por una vez, mediante propuesta de uno de los Concejales asistentes, por la respectiva plenaria o comisión permanente. Para que pueda darse este evento, debe haber transcurrido una hora después de su aprobación.

Parágrafo 3. Cuando se vayan a incluir en el orden del día proyectos de acuerdo para segundo debate, la presidencia a través de la Secretaria lo anunciará en la plenaria con no menos de un día de antelación.

Parágrafo 4. Cuando en una sesión no se agote el orden del día aprobado, los puntos pendientes deberán evacuarse con prelación en la sesión siguiente, teniendo en cuenta las prioridades de ley, como son llamado a lista y verificación del quórum, aprobación del orden del día y aprobación de actas.

CAPITULO TERCERO
DEBATES

ARTÍCULO 69°.- CONCEPTO. El debate es el sometimiento a discusión de cualquier proyecto o proposición sobre cuya adopción deba resolver la plenaria o una de sus Comisiones Permanentes. La presidencia declara abierto el debate y permite su desarrollo cuando exista quórum deliberativo. Las decisiones sólo pueden tomarse con la mayoría requerida, con el cual termina el debate.

ARTÍCULO 70°.- INTERVENCIONES. En todos los casos y sin excepción, para hacer uso de la palabra, se requiere autorización previa de la presidencia. Se concederá con sujeción al orden establecido en este reglamento.

ARTÍCULO 71°.- INTERPELACIÓN. Es la solicitud al orador para que conceda el uso de la palabra, exclusivamente para la formulación de preguntas o aclaración de algún aspecto que aquel esté tratando. Requiere de la autorización de la presidencia.

La interpelación tendrá una duración máxima e improrrogable de dos (2) minutos. Si excede este límite o no se refiere a una solicitud de aclaración o pregunta, o no fuere concisa y pertinente, el Presidente le retirará la autorización para interpelar y dispondrá que el orador continúe su exposición.

El orador podrá solicitar al Presidente no conceder la autorización de interpelación hasta tanto termine su intervención. En ningún caso se concederá más de dos (2) interpelaciones al orador.

ARTÍCULO 72°.- DERECHO DE RÉPLICA. En todo debate se garantizará el derecho de réplica cuando se expresen juicios de valor, inexactitudes o comentarios contra la dignidad de una persona, grupo político, preceptos religiosos, morales u otro del mismo orden. Al aludido o titular del derecho de réplica, se le concederá el uso de la palabra hasta por tres (3) minutos.

ARTÍCULO 73°.- MOCIONES. Es una proposición especial que presenta uno o varios concejales durante la discusión de un asunto, que el Presidente debe decidir de manera inmediata.

ARTÍCULO 74°.- MOCIÓN DE ORDEN. Cuando exista dispersión en el tratamiento del tema correspondiente al orden del día, cualquier Concejal podrá solicitar moción de orden con el fin de que las intervenciones se centren en el tema específico.

ARTÍCULO 75°.- MOCIÓN DE PROCEDIMIENTO. Cuando se considere que en el curso de la sesión no se están observando algunos procedimientos establecidos, cualquier Concejal podrá solicitar moción de procedimiento con el fin de que la sesión se ajuste estrictamente al reglamento de la Corporación

ARTÍCULO 76°.- MOCION DE SUFICIENTE ILUSTRACION. CUANDO UN CONCEJAL considere que el tema en discusión del orden del día ha sido debatido ampliamente por las bancadas interesadas en el tema, podrá solicitar moción de suficiente ilustración, así hubiere oradores inscritos, con el fin de que se suspendan las intervenciones sobre el mismo y se entre a votar de inmediato.

ARTÍCULO 77°.- MOCION DE ACLARACION DE VOTO. Es el derecho que tiene todo concejal para fundamentar las razones o circunstancias en las cuales tomo la decisión respectiva.

ARTÍCULO 78°.- PROPOSICIONES. Uno o más Concejales pueden presentar de manera verbal o escrita una proposición. El autor o el vocero de los proponentes podrán hacer uso de la palabra para sustentarla. Las proposiciones en plenaria o en Comisiones Permanentes podrán ser:

1. Principal: Es la que se presenta por primera vez a consideración y decisión de la plenaria o de una comisión.
2. Supresivas: Cuando se propone suprimir total o parcialmente uno o más artículos de un proyecto de acuerdo, el contenido de un informe, ponencia o una proposición.
3. Aditivas: Cuando se propone adicionar los artículos de un proyecto de acuerdo, o el texto de informe, ponencia o proposición.
4. Sustitutivas: Cuando se propone sustituir el título, atribuciones o el articulado de un proyecto de acuerdo, el texto de un informe o una proposición. Se discute y se vota primero, si es aprobada, la inicial queda negada y viceversa. No podrá haber ninguna proposición sustitutiva de la sustitutiva. Aprobada la sustitutiva desaparece la principal.
5. Divisivas: Cuando se propone dividir un artículo o capítulo de un proyecto de acuerdo o el texto de un informe, ponencia o proposición.

6. Asociativas: Cuando se propone reunir artículos o capítulos de un proyecto de acuerdo o ponencia.
7. Transpositivas: Cuando se propone cambiar de ubicación uno o varios títulos o artículos de un proyecto o ponencia.
8. De citación: Cuando se propone citar para debate a funcionarios o autoridades de la administración Municipal. Las proposiciones de citación que versen sobre temas, asuntos o materias similares deberán ser acumuladas para ordenar y ser más productivas a la programación y el desarrollo de los debates, cuando así lo disponga el Presidente de la Corporación o la comisión. Debe ir acompañada del respectivo cuestionario, la fecha y la hora de citación.
9. De reconocimiento: Cuando se propone exaltar y reconocer la vida y obra de personas naturales o jurídicas. Éste tipo de proposiciones solamente podrá presentarse ante la plenaria de la Corporación.
10. Modificativa: Es la que aclara la principal. Puede ser mediante la variación de su redacción sin cambiar el contenido material, o dividiendo o reuniendo sus temas para su mayor comprensión o claridad, o por otro procedimiento similar. No será admisible la proposición modificativa de otra modificativa. Aprobada la modificativa, se tendrá por rechazado el artículo o texto original. Por el contrario, negada una proposición modificativa, continuará abierta la discusión sobre la original.

ARTÍCULO 79°.- PROHIBICIONES. Durante las sesiones ordinarias y extraordinarias, en el uso de la palabra no se podrá:

1. Referirse a un tema diferente al que se encuentra en discusión. El desconocimiento de este deber obligará a la Presidencia a llamar la atención y/o suspender el uso de la palabra.

2. Dar lectura a discursos escritos, salvo notas o apuntes tomados para auxiliar la memoria.

3. Hablar más de una vez cuando se trate de proposiciones para alterar o diferir el orden del día, apelaciones por lo resuelto en la Presidencia, revocatorias o proposiciones para que un proyecto regrese a primer debate.

4. Colocar grabaciones en la sesión sin previa autorización del Presidente.

ARTÍCULO 80º.- USO DE LA PALABRA DE FUNCIONARIOS. Los funcionarios citados o invitados por la Corporación hablaran en el momento en que el Presidente de la plenaria o de las Comisiones Permanentes les conceda el uso de la palabra. Lo harán únicamente para referirse al tema debatido y tendrán para ello hasta quince (15) minutos. Si estiman que necesitan más tiempo, deberán solicitar autorización al Presidente para continuar con el tema a tratar. En este caso el Presidente de la plenaria o la comisión permanente fijará el tiempo adicional para su intervención.

En las sesiones de control político, al funcionario citado deberá concedérsele el uso de la palabra para que se refiera a cada uno de los puntos controvertidos en el debate.

ARTÍCULO 81.- USO DE LA PALABRA DE INVITADOS Y COMUNIDAD. Para efectos de foros, debates de control político, la comunidad invitada a la Corporación hablará en el momento en que el presidente de la plenaria o de las Comisiones Permanentes les conceda el uso de la palabra. Lo harán únicamente para referirse al tema y tendrá para ello hasta cinco (5) minutos. Si estiman que necesitan más tiempo, deberán solicitar autorización del presidente para continuar con el tema a tratar, en cuyo caso el Presidente de la plenaria o de la Comisión permanente fijará el tiempo adicional para su intervención.

ARTÍCULO 82º.- INCUMPLIMIENTO DE UNA CITACIÓN. Si el funcionario citado reglamentariamente para un debate incumple la citación sin justa causa, no radica el informe o es presentado extemporáneamente, o no de respuesta completa y veraz al cuestionario, el Presidente del Concejo o de las Comisiones permanente, oficiosamente deberá dar traslado al organismo competente para que realice la correspondiente investigación disciplinaria, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 3 del Artículo 31º de este Reglamento, sobre la moción de censura.

Parágrafo. El funcionario citado no podrá delegar su asistencia, salvo por justa causa debidamente comprobada. Se entiende por justa causa la calamidad pública o doméstica, la grave perturbación del orden público, la enfermedad debidamente certificada y los periodos legales de vacaciones.

ARTÍCULO 83.- GRABACIÓN Y TRASCRIPCIÓN DE LAS SESIONES. Las sesiones del Concejo podrán ser grabadas en su totalidad. La grabación y la digitación del contenido de las grabaciones será responsabilidad del Secretario General de la Corporación, la grabación es un apoyo magnetofónico para la

elaboración final del Acta, la cual una vez transcrita será leída y aprobada en la respectiva plenaria junto con sus modificaciones, la grabación no constituye parte integral del acta ya que es un apoyo para la elaboración final de la misma. La trascripción de las actas aprobadas debe conservarse en las condiciones de archivo apropiadas con copia de seguridad y bajo el cuidado del Secretario General de la Corporación. Su propósito será el de atender las solicitudes o consultas que eleven los Concejales, las autoridades competentes o personas interesadas.

CAPITULO CUARTO
VOTACIONES

ARTÍCULO 84º.- REGLAS EN MATERIA DE VOTACIONES. Cada Concejal tiene derecho a un voto, el cual deberá reflejar las posiciones adoptadas por la bancada a la que pertenece. El voto es irrenunciable, pues una vez cerrada la discusión de un proyecto de acuerdo o de una proposición, los Concejales están obligados a votar afirmativa o negativamente, salvo por razones de conciencia o excusa con autorización de la Plenaria cuando manifieste tener conflicto de interés en el asunto que se debate.

En casos de elecciones, los Concejales deberán votar por uno de los candidatos o en blanco.

En toda votación el número de votos debe ser igual al número de Concejales presentes al momento de ejercer este derecho; si el resultado no coincide, el presidente anulará la elección y ordenará su repetición.

Mientras se halle en curso una votación, no se concederá el uso de la palabra.

Parágrafo. Se considera como voto en blanco la papeleta depositada en la urna que no contenga escrito alguno o cuando asi se expresa y el voto nulo es el que contiene más de un nombre, un nombre ilegible o uno distinto al de las personas por las cuales se está votando.

ARTÍCULO 85º.- MODOS DE VOTACIÓN[10]. En el Concejo, tanto en plenaria como en las Comisiones Permanentes, se podrá votar:

1. **Ordinaria,** Se utilizará para los casos señalados en este artículo y se efectúa dando los Concejales, con la mano, un golpe sobre el pupitre.

El Secretario informará sobre el resultado de la votación, y si no se pidiere en el acto la verificación, se tendrá por exacto el informe.

Si se pidiere la verificación por algún Concejal para dicho efecto podrá emplearse cualquier procedimiento que acredite el sentido del voto de cada Concejal y el resultado total de la votación, lo cual se publicará Íntegramente en el acta de la sesión.

Se podrán adoptar por el modo de votación ordinaria antes descrito:

a) Consideración y aprobación del orden del día y propuestas de cambios, modificaciones o alteración del mismo.
b) Consideración y aprobación de actas de las sesiones.
c) Suspensión o prórroga de la sesión, declaratoria de la sesión permanente o levantamiento de la sesión por moción de duelo o circunstancia de fuerza mayor.
d) Declaratoria de sesión reservada.
e) Declaratoria de sesión informal.
f) Declaración de suficiente ilustración.
g) Mociones o expresiones de duelo, de reconocimiento o de rechazo o repudio. Así como saludos y demás asuntos de orden protocolario.
h) Proposiciones de cambio o traslado de Comisiones que acuerden o soliciten sus respectivos integrantes.
i) Resolución de las apelaciones sobre las decisiones del presidente o la mesa directiva de la Corporación o de las Comisiones.
j) Proposiciones para citaciones de control político. Información general o de control público o para la realización de foros o audiencias públicas.
k) Decisiones sobre apelación de un proyecto negado o archivado en comisión.
l) Decisión sobre excusas presentadas por servidores públicos citados por las Comisiones o por la plenaria.

[10] ley 1431 de 2011

m) Tampoco se requerirá de votación nominal y pública cuando en el trámite de un proyecto de Acuerdo exista unanimidad por parte de la respectiva comisión o plenaria para aprobar o negar todo o parte del articulado de un proyecto, a menos que esa forma de votación sea solicitada por alguno de sus miembros. Si la unanimidad no abarca la totalidad del articulado se someterán a votación nominal y pública las diferentes proposiciones sobre los artículos respecto de los cuales existan discrepancias.
n) El titulo de los proyectos siempre que no tenga propuesta de modificación.
o) La pregunta sobre si el Concejo quiere que un proyecto sea acuerdo Municipal.
p) La pregunta sobre si declara válida una elección realizada por el Concejo.
q) Los asuntos de mero trámite. entendidos como aquellos que. haciendo o no parte de la función constitucional y legal. no corresponden al debate y votación de los textos de los proyectos de Acuerdo y los no prescritos que puedan considerarse

Parágrafo 1. La verificación de la votación ordinaria debe surtirse por el mismo procedimiento que la votación nominal y pública, es decir deberá arrojar el resultado de la votación y el sentido del voto de cada Concejal. Se llamará a lista y cada Concejal anunciará de manera verbal su voto si o no

Parágrafo 2°. Aceptado o negado un impedimento a un concejal en el trámite de un proyecto de Acuerdo en comisión, no será necesario volver a considerarse en la Plenaria de la Corporación a menos que se presenten circunstancias nuevas que versen los fundamentos del mismo.

2. **Votación Nominal.** Como regla general las votaciones serán nominales y públicas, con las excepciones que determine la ley o aquellas que la modifiquen o adicionen.

En esta modalidad, cada Concejal será llamado por el Secretario en orden alfabético de apellido y contestará individualmente en voz alta "SI" o "NO", o "NEGATIVO" o "POSITIVO" La votación nominal la ordena el Presidente cuando cualquier Concejal lo solicite

El resultado de la votación nominal se consignara en el acta, con expresión del nombre de los Concejales que votaron por el "SI" y quienes votaron por el "No".

3. Votación Secreta.

Es aquella en la que no se permite identificar como vota el Concejal. Las rectificaciones sólo serán procedentes cuando el número de votos recogidos no sean igual al de los votantes.

Ésta modalidad el Secretario llamará a cada Concejal en orden alfabético por apellido y procederá depositando en una urna la respectiva papeleta marcada con la leyenda "Sí" o "No". Sólo se empleará cuando se deba hacer una elección

Previamente el Presidente designará una comisión escrutadora.

ARTÍCULO 86°.- VOTACIÓN DE PROYECTOS DE ACUERDO. Un proyecto de acuerdo podrá ser votado en bloque o en conjunto, tanto en plenaria como en comisión permanente, con base en el entendido de que todos los miembros de la Corporación conozcan el documento con sus soportes y anexos. Igualmente, si la mayoría de la plenaria o comisión permanente mediante proposición lo aprueba, podrá votarlo de manera separada en todas sus partes. La solicitud puede provenir de un Concejal o del el autor de la iniciativa.

ARTÍCULO 87°.- EMPATES. En caso de empate en la votación de un proyecto o proposición, se procederá a una segunda votación en la misma sesión o en la inmediatamente siguiente, según lo disponga la presidencia. De presentarse nuevamente el empate, se entenderá negada la iniciativa. Si el empate se produce para una elección, está se repetirá y si el empate subsiste se decidirá por la suerte.

ARTÍCULO 88.- REGLAS ESPECIALES EN MATERIA DE ELECCION DE FUNCIONARIOS[11]. El acto de elección funcionarios de competencia del Concejo se citará con tres (3) dias calendario de anticipación conforme a la ley. En la fecha y la hora indicada, el presidente abrirá la votación secreta. Cada votante escribirá en su papeleta el nombre de uno de los candidatos al cargo por proveer y la depositará en la urna dispuesta para el efecto, en el orden de llamado a lista por el secretario.

[11] Articulo 35 ley 136 de 1994

Previamente, el Presidente designará una comisión escrutadora encargada de contar las papeletas depositadas e informar el resultado, indicando el número de votos obtenidos por cada uno de los candidatos, los votos en blanco, los votos nulos y el total de los votos. Entregado el resultado, la presidencia declarará legalmente elegido para el cargo o dignidad de que se trate, al candidato que ha obtenido la mayoria de votos, e inmediatamente se le tomara el juramento de rigor. Si se debe acreditar requisitos, se dispondrá su posesión para otra oportunidad en términos legales.

Parágrafo.- Con el fin de prevenir acusaciones o demandas, los Concejales, al hacer una elección tendrán en consideración las prohibiciones de que tratan los artículos 126 y 292 de la Constitución Política y 49 de la ley 617 del 2000.

TITULO VIII
PROCESO NORMATIVO

CAPITULO I
ACUERDOS MUNICIPALES

ARTÍCULO 89°.- INICIATIVA[12]. La presentación de los proyectos de acuerdo ante la Secretaria del Concejo, deberá hacerse en un (1) original, y una copia para cada concejal y un (1) medio magnético y/o electrónico que contenga la totalidad del documento radicado. Contendrá su texto distribuido en titulo, encabezamiento, y la parte dispositiva o articulado; irán acompañados de la correspondiente exposición de motivos y conservarán el principio de unidad de materia.

Sin el cumplimiento de estos requisitos, la presidencia devolverá el proyecto para su corrección.

Son titulares de la iniciativa cualquiera de los Concejales individualmente considerados o agrupados en bancadas, asi como también el Alcalde y en las materias relacionadas con sus atribuciones, también tiene iniciativa el Personero.

---

12 Articulo 71 ley 136 de 1994

Los proyectos de acuerdo también pueden ser de iniciativa popular como medio de participación ciudadana, conforme a la respectiva ley estatutaria[13]. Un grupo de ciudadanos que representen no menos del diez por ciento (10%)[14] del censo electoral vigente en el municipio, podrán presentar proyectos de acuerdo.

MATERIAS QUE PUEDEN SER OBJETO DE INICIATIVA POPULAR NORMATIVA[15]. Solo pueden ser materia de iniciativa popular normativa, aquellas que sean de la competencia de esta Corporación.

No se podrán presentar iniciativas populares normativas ante el Concejo, sobre las siguientes materias:

a) Las que sean de iniciativa exclusiva del Gobierno, de los gobernadores o de los Alcaldes;

b) Presupuestales, fiscales o tributarias;

c) Relaciones internacionales;

d) Concesión de amnistías o indultos;

e) Preservación y restablecimiento del orden público.

TRÁMITE ANTE EL CONCEJO DE LAS PROPUESTAS DE INICIATIVA NORMATIVA DE ORIGEN POPULAR,[16] Cuando se haya expedido la certificación que trata la ley 1557 de 2015, la Registraduría correspondiente

---

13 Articulo 18 ley 1757 de 2015 ARTÍCULO 18. MATERIAS QUE PUEDEN SER OBJETO DE INICIATIVA POPULAR LEGISLATIVA Y NORMATIVA, REFERENDO O CONSULTA POPULAR. Solo pueden ser materia de iniciativa popular legislativa y normativa, consulta popular o referendo ante las corporaciones públicas, aquellas que sean de la competencia de la respectiva Corporación o entidad territorial.

No se podrán presentar iniciativas populares legislativas y normativas o consultas populares ante el Congreso, las asambleas, los Concejos o las juntas administradoras locales, sobre las siguientes materias:

a) Las que sean de iniciativa exclusiva del Gobierno, de los gobernadores o de los Alcaldes; b) Presupuestales, fiscales o tributarias; c) Relaciones internacionales; d) Concesión de amnistías o indultos; e) Preservación y restablecimiento del orden público.

14 Articulo 9 literal c ley 1757 de 2015 Para presentar una iniciativa popular normativa de competencia de entidades territoriales se requiere el apoyo de un número de ciudadanos igual o superior al 10% del Censo Electoral vigente en la entidad territorial

15 Articulo 18 de la ley 1757 de 2015

16 Articulo 19 de la ley 1757 de 2015

enviará Al Concejo el articulado, la exposición de motivos de iniciativa normativa de origen popular. El nombre de la iniciativa, el de sus promotores y voceros, así como el texto del proyecto de articulado y su exposición de motivos, deberán ser divulgados en la publicación oficial del Concejo o la alcaldía.

PARÁGRAFO 1o. Cuando para continuar con el proceso de una iniciativa de participación ciudadana pueda generarse el archivo de la misma por vencimiento de la legislatura, el Concejo deberá darle curso a la iniciativa en la siguiente legislatura, dentro de los cinco primeros días del inicio de la misma.

La iniciativa popular normativa será estudiada de conformidad con lo establecido en el reglamento interno y se aplicarán las disposiciones establecidas en el artículo 163 de la Constitución Política para los proyectos que hayan sido objeto de manifestación de urgencia.

En el caso de iniciativas normativas, los términos serán improrrogables y su estudio será prioritario en el orden del día. En el caso en que la iniciativa sea negada en comisión, podrá ser apelada por el comité promotor en los términos del reglamento interno de la respectiva Corporación ante la plenaria.

PARÁGRAFO 2o. Quien sea reconocido como promotor de los mecanismos de participación ciudadana, cuyo propósito sea el de derogar, modificar o crear una norma, deberá ser convocado a todas las sesiones en que se tramite el proyecto y tendrá en ellas los mismos derechos, salvo el del voto, que la ley o el reglamento confiere a los miembros de esta Corporación.

Para presentar una iniciativa popular normativa de competencia de entidades territoriales se requiere el apoyo de un número de ciudadanos igual o superior al 10% del Censo Electoral vigente en la entidad territorial

Solo podrán ser presentadas por iniciativa del Alcalde[17] los proyectos acuerdos que versen sobre las siguientes materias:

1. Planes de desarrollo y de ordenamiento territorial.
2. Presupuesto anual de rentas y gastos.

---

[17] artículos 313- 6 y 315 – 5 de la Constitución Política y 71 de la Ley 136 de 1994,

3. Estructura de la administración Municipal, las funciones de sus dependencias y las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos.
4. Establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales
5. Sociedades de economía mixta.
6. Celebración de contratos.
7. Facultades temporales y precisas al Alcalde, de aquellas que corresponden al Concejo.
8. Las demás que determinen la constitución o la ley.

Parágrafo. El Alcalde, antes de su aprobación en plenaria, podrá coadyuvar en el impulso de cualquier proyecto de su iniciativa que curse en el Concejo cuando las circunstancias lo justifiquen.

ARTÍCULO 90°.- DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: Una vez recibido, radicado y clasificado el proyecto de acuerdo en la Secretaría, será remitido en el menor tiempo posible a la comisión permanente respectiva y a cada uno de los Concejales.

ARTÍCULO 91°.- DESIGNACION DE PONENTES. DESIGNACION DE PONENTES. Corresponde al Presidente de la Corporación designar los ponentes para primer y segundo debata para cada proyecto, pudiendo ser el mismo o distinto para el primer y segundo debate. Podrá designar varios ponentes y un coordinador de los mismos, señalará un término para la presentación de las ponencias entre uno (1) y diez (10) dias calendario si el proyecto contiene hasta 10 articulos, hasta a 15 dias si contiene más de 10 articulos. Estos términos se podrán prorrogar por una sola vez hasta la mitad del tiempo inicialmente concedido. En caso de incumplimiento se procederá a su reemplazo.

Se publicará una lista con los nombres de los concejales negligentes en la presentación de las ponencias.

Parágrafo 1°. Los términos que habla el presente articulo se empezara a contar una vez se le haga saber mediante acto administrativo y entregue copia del proyecto de Acuerdo al Concejal que ha sido designado como ponente por el Presidente de la Corporación.

Parágrafo 2°. Antes de presentarse ponencia para primer debate, el proyecto podrá ser retirado por su autor. En los demás eventos se requerirá la aceptación de la comisión respectiva o de la plenaria.

Parágrafo 3°. Las ponencias para primer y segundo debate que deberán ser entregadas por escrito, serán publicadas a través de un medio idóneo

ARTÍCULO 92°.- ACUMULACIÓN DE PROYECTOS. Sólo en primer debate y antes de rendirse ponencia, el proyecto o proyectos de acuerdo que se refieran a un mismo tema, podrán ser remitidos con nota explicativa por el Presidente de la comisión al ponente del proyecto en estudio, quien a su juicio podrá acumularlos. Si ya los proyectos cursaren simultáneamente, en las mismas condiciones, podrán acumularse por decisión de la presidencia.

ARTÍCULO 93°.- REQUISITOS LEGALES. Todo proyecto para ser acuerdo Municipal, debe cumplir los requisitos siguientes:

1. Aprobación en primer debate en la comisión permanente respectiva.
2. Aprobación en segundo debate en la plenaria de la Corporación.
3. Sanción ejecutiva por parte del Alcalde.
4. Publicación o promulgación en el medio oficial.

CAPITULO SEGUNDO
PRIMER DEBATE

ARTÍCULO 94°.- PRESENTACIÓN DE LA PONENCIA Y APERTURA DEL DEBATE. La ponencia para primer debate será radicada en Secretaría y deberá ir acompañada de un medio magnético que la contenga, se incorporará al expediente del proyecto de acuerdo y se distribuirá por un medio idóneo a los Concejales miembros de la respectiva comisión permanente.

En la sesión de la comisión permanente, leída la ponencia, se someterá a discusión la proposición con que termina. Aprobada esta, se continuará con el trámite en el siguiente orden: título, encabezado y articulado.

ARTÍCULO 95°.- DISCUSIÓN. En la discusión de la ponencia, el ponente intervendrá para dar explicaciones, aclarar los temas debatidos y ordenar el

trabajo. Se considerarán las modificaciones propuestas por el ponente, y las que puedan ser presentadas por concejales o autoridades Municipales con derecho a voz.

El presidente podrá ordenar los debates por artículos, grupo de artículos, materia o atendiendo a las enmiendas presentadas, según lo aconseje la naturaleza del proyecto, la conexidad entre las pretensiones y la mayor claridad.

ARTÍCULO 96°.- ENMIENDAS. Podrán presentarse enmiendas por cualquier concejal hasta el cierre de la discusión verbal o mediante escrito dirigido a la presidencia de la respectiva comisión. Esta podrá referirse a la totalidad del proyecto, proponiendo un cambio en su orientación o principios o un texto alternativo, o referirse a una o varias disposiciones del articulado, con el fin de suprimirlas, modificarlas o adicionarlas. En ambos casos, la enmienda deberá estar fundamentada en motivo de conveniencia, y si es posible, en razones jurídicas. Las enmiendas no admitidas en comisión podrán ser puestas en consideración en plenaria en segundo debate, dentro de la discusión de la ponencia, si así lo solicitare el concejal proponente, a efectos de incorporarse o negarse en el texto del proyecto.

ARTÍCULO 97°.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA[18]. Toda persona natural o jurídica podrá presentar observaciones escritas sobre cualquier proyecto de acuerdo cuyo estudio y examen se esté adelantando en una de las Comisiones Permanentes, previa fijación de día, hora y duración de las intervenciones por la mesa directiva[19].

ARTÍCULO 98°.- PROYECTO APROBADO. Cerrado el debate y aprobado el proyecto y en lapso no superior a dos (2) dias después de surtido el primer debate, el Presidente de la comisión y con la firma del Secretario, radicaran en la Corporación el informe de la comisión para efecto del segundo debate.

ARTÍCULO 99°.- PROYECTO NO APROBADO. Los proyectos que no recibieron aprobación en el primer debate, serán archivados y para que el Concejo se pronuncie nuevamente sobre ello deben presentarse nuevamente. Sin embargo,

---

18 ARTÍCULO 74 ley 1757 de 2015. FORMAS DE PARTICIPACIÓN. En cumplimento del derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político en las Corporaciones Públicas, además de los mecanismos de participación contemplados en la Constitución y la ley, estas promoverán la participación ciudadana, entre otras, a través de las siguientes formas: participación ciudadana en aspectos normativos de acuerdo a las disposiciones del artículo 155 de la Constitución Política; sesión abierta; propuestas ciudadanas para el ejercicio del control político y sesiones de comunidades educativas.

19 artículo 77 de la Ley 136 de 1994

de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 73 de la ley 136 de 1994, dicho proyecto podrá ser considerado por el Concejo por solicitud del autor, de cualquier otro concejal, del gobierno Municipal o del vocero de los proponentes en el caso de la iniciativa popular, presentando recurso en la misma sesión en que fue negado el proyecto, el Presidente de la Comisión lo remitirá al Presidente de la Corporación, quien integrara una comisión accidental para el estudio del caso. Esta comisión presentará el respectivo informe en un plazo no superior a cinco (5) días calendario ante la plenaria, la que decidirá si acoge o rechaza la apelación. Si ocurriere lo primero, la Presidencia remitirá el proyecto a otra comisión permanente para que surta el trámite de primer debate; en el segundo caso se procederá a su archivo.

CAPITULO TERCERO
SEGUNDO DEBATE

ARTÍCULO 100º.- INICIACIÓN DEL DEBATE. Tres días después de su aprobación en la comisión respectiva[20], la plenaria considerara el proyecto en segundo debate, previa radicación en Secretaria y reparto de la ponencia a cada uno de los concejales. En este evento, después de leído el informe de la comisión y la o las ponencias por el Secretario, el coordinador de ponente o el ponente explicarán el significado y alcance del proyecto. A continuación podrán tomar la palabra los Concejales, y las autoridades Municipales con derecho a voz.

ARTÍCULO 101º.- ENMIENDAS. Se admitirán en la plenaria las enmiendas que no impliquen un cambio sustancial.

ARTÍCULO 102º.- APROBACIÓN. Antes de declararse la suficiente ilustración y una vez terminen de intervenir los concejales inscritos, podrá concederse el uso de la palabra a los funcionarios de la administración Municipal, al personero, según el caso, si así lo solicitaren en un tiempo no superior a (10) minutos a consideración del presidente. El Presidente declara la suficiente ilustración y someterá a votación el contenido del proyecto. Aprobado éste, preguntará a la Corporación si quiere que el proyecto aprobado se convierta en acuerdo Municipal.

---

[20] Articulo 73 ley 136 de 1994

La secretaria dentro de los cinco (5) dias hábiles siguientes, remitirá al Alcalde para la sanción ejecutiva del proyecto de acuerdo aprobado. Si el Alcalde no objetare dicho proyecto, lo sancionará como acuerdo y ordenará su promulgación. El acuerdo sancionado será publicado en la Gaceta Municipal dentro de los diez (10) días calendario siguiente.

El proyecto votado negativamente por la plenaria, al entenderse rechazado, se archivará, y deberá ser presentado nuevamente

ARTÍCULO 103°.- SECUENCIA NUMERICA DE LOS ACUERDOS. Los acuerdos debidamente sancionados y publicados, al igual los proyectos de acuerdo que se radiquen en la secretaria del Concejo tendrán secuencia numérica indefinida, establecida a partir del año 2008.

ARTÍCULO 104°.- REVISIÓN DE LOS ACUERDOS POR EL GOBERNADOR. Dentro de los cinco (5) dias hábiles siguientes a la sanción, el Alcalde enviará copia del acuerdo al Gobernador del Departamento para que cumpla con la atribución del numeral 10 del artículo 305 de la Constitución Política; en consecuencia el Gobernador por motivo de inconstitucionalidad o de ilegalidad, podrá remitir los acuerdos al Tribunal Administrativo para que decida sobre su validez. La revisión no suspende los efectos jurídicos de los acuerdos.

Los acuerdos son de obligatorio cumplimiento mientras no sean derogados, suspendidos o anulados por la jurisdicción contenciosa administrativa.

TITULO IX
DE LAS OBJECIONES

CAPITULO PRIMERO
MOTIVOS. PLAZOS

ARTÍCULO 105°.- MOTIVOS. Los proyectos de acuerdo aprobados por el Concejo podrán ser objetados por el Alcalde por los siguientes motivos:

1. Por considerarlos inconvenientes (objeción de inconveniencia).

2. Por estimarlos contrarios a la constitución política o al ordenamiento jurídico del país (objeción de derecho).

ARTÍCULO 106°.- PLAZOS. El Alcalde dispone de cinco (5) días hábiles para resolver con objeciones un proyecto de no más de veinte artículos, de diez (10) días hábiles cuando el proyecto sea de veintiuno a cincuenta artículos y hasta de veinte (20) días cuando el proyecto exceda los cincuenta artículos.

CAPITULO SEGUNDO
TRAMITE DE LAS OBJECIONES

ARTÍCULO 107°.- DEVOLUCIÓN CON OBJECIONES: Si el Concejo se encuentra sesionando, el proyecto devuelto será incluido por la Mesa Directiva en el orden del día de la siguiente sesión plenaria, en la cual el Presidente nombrará una comisión accidental para que estudie los argumentos del Alcalde en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles. Si el Concejo estuviese en receso, el Alcalde lo convocará a sesiones extraordinarias en la semana siguiente a la presentación de las objeciones, por un término no superior a cinco (5) días hábiles.

ARTÍCULO 108°.- OBJECIONES POR INCONVENIENCIA. La plenaria puede proponer que las objeciones sean declaradas fundadas, parcialmente fundadas o infundadas.

Si la plenaria declara las objeciones fundadas, el proyecto se archivará. Si decide declarar las objeciones infundadas o parcialmente fundadas, el proyecto una vez corregido, según el caso, será devuelto y el Alcalde deberá sancionarlo dentro de los ocho (8) días hábiles, si el Alcalde omite el cumplimiento de sus obligaciones, el Presidente del Concejo procederá a sancionar y promulgar el acuerdo correspondiente.

ARTÍCULO 109°.- OBJECIONES DE DERECHO. Para las objeciones jurídicas se seguirá el mismo procedimiento dispuesto en el artículo inmediatamente anterior. Si la plenaria declara las objeciones fundadas, el proyecto se archivará. Si declara las objeciones parcialmente fundadas, se harán las correcciones pertinentes siguiendo las orientaciones del Alcalde. Acto seguido el proyecto le será devuelto para su sanción. Si declara las objeciones infundadas, el proyecto regresará al Alcalde, quien dentro de los diez (10) días hábiles siguientes lo remitirá al

Tribunal Administrativo para su decisión, acompañado de una exposición de motivos de las objeciones.

Si el proyecto objetado fuere el de presupuesto, deberá enviarlo al Tribunal Administrativo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recibo, y esta Corporación se pronunciara dentro de los veinte días hábiles siguientes. Mientras el tribunal decide, regirá el proyecto de presupuesto presentado oportunamente por el Alcalde, bajo su directa responsabilidad[21]

Si las objeciones son declaradas fundadas por el Tribunal Administrativo, el proyecto se archivará y si son declaradas infundadas, el Alcalde sancionará el proyecto dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación del Tribunal. Pero si es considerado parcialmente viciado, así lo indicará al Concejo para que se reconsidere y lo rehaga, oído el respectivo Secretario administrativo y financiero del municipio; cumplido este trámite, será devuelto a Tribunal para fallo definitivo.

TITULO X
CABILDO ABIERTO

ARTÍCULO 110º.- PETICIÓN DEL CABILDO ABIERTO: En cada periodo de sesiones ordinarias Por proposición aprobada en plenaria a petición de uno o varios concejales o por iniciativa de un número no inferior al cinco por mil de los ciudadanos del censo electoral del municipio, el Concejo podrán celebrar cabildos abiertos en los que, se considerarán los asuntos que los residentes soliciten sean estudiados, siempre y cuando sean de competencia del Concejo. Es obligación del Alcalde asistir al cabildo abierto[22].

MATERIAS DEL CABILDO ABIERTO[23]. Podrán ser materias del cabildo abierto cualquier asunto de interés para la comunidad. En caso de que la comunidad cite al Alcalde respectivo deberá adjuntar a las firmas el cuestionario que formulará al funcionario, el cual debe ser remitido por el presidente de la Corporación, con mínimo cinco (5) días de antelación a la celebración del cabildo. El cuestionario deberá versar únicamente sobre asuntos de competencia del funcionario citado.

---

21 Decreto 111 de 1996, art.109.

22 Articulo 22 ley 1757 de 2015

23 Articulo 23 ley 1757 de 2015

PARÁGRAFO. A través del Cabildo Abierto no se podrán presentar iniciativas de ordenanza, acuerdo o resolución local.

PRELACIÓN. En los cabildos abiertos se tratarán los temas en el orden en que fueron presentados ante la respectiva secretaría. En todo caso el Cabildo Abierto deberá celebrarse a más tardar un mes después de la radicación de la petición.

PARÁGRAFO. Si la petición fue radicada cuando la respectiva Corporación no se encontraba en sesiones ordinarias, el cabildo deberá realizarse en el siguiente periodo de sesiones ordinarias.

ARTÍCULO 111°.- DIFUSIÓN DEL CABILDO.

DIFUSIÓN DEL CABILDO. El Concejo dispondrán la amplia difusión de la fecha, el lugar y de los temas que serán objeto del cabildo abierto. Para ello, antes de la fecha de vencimiento para la fecha de inscripción de los participantes ordenarán la publicación de dos convocatorias en un medio de comunicación de amplia circulación y cuando fuere posible, a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones, con diferencia no menor de diez (10) días entre una y otra.

ARTÍCULO 112° ASISTENCIA Y VOCERÍA. A los cabildos abiertos podrán asistir todas las personas que tengan interés en el asunto. Además del vocero podrán intervenir, por la misma duración a la que tienen derecho por reglamento los respectivos miembros de la Corporación, quienes se inscriban a más tardar tres (3) días antes de la realización del cabildo en la secretaría respectiva, presentando para ello un resumen escrito de su intervención.

Luego de las intervenciones de la comunidad, el Alcalde dará respuesta a sus inquietudes. Una vez surtido este trámite, los miembros de la Corporación podrán hacer uso de la palabra en los términos que establece el reglamento.

PARÁGRAFO. Cuando los medios tecnológicos lo permitan, los cabildos abiertos serán transmitidos en directo a través de Internet o a través de los mecanismos que estime conveniente la mesa directiva[24].

---

[24] Artículo 26 ley 1757 de 2015

ARTÍCULO 113º.- CITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN. Por solicitud ciudadana derivada de la convocatoria al cabildo abierto, podrá citarse a funcionarios Municipales, con cinco (5) días de anticipación, para que concurran al cabildo y para que respondan, oralmente o por escrito, sobre hechos relacionados con el tema del cabildo. La desatención a la citación sin justa causa, será causal de mala conducta[25].

ARTÍCULO 114º.- OBLIGATORIEDAD DE LA RESPUESTA. Una semana después de la realización del cabildo se realizará una sesión a la cual serán invitados todos los que participaron en él, en la cual se expondrán las respuestas razonadas a los planteamientos y solicitudes presentadas por los ciudadanos, por parte del mandatario y de la Corporación, según sea el caso.

Cuando se trate de un asunto relacionado con inversiones públicas Municipales, la respuesta deberá señalar el orden de prioridad de las mismas dentro del presupuesto y los planes correspondientes[26].

Si las respuestas dadas por los funcionarios incluyen compromisos decisorios, estos serán obligatorios y las autoridades deberán proceder a su ejecución, previo cumplimiento de las normas constitucionales y legales.

SESIONES FUERA DE LA SEDE. Cuando se trate de asuntos que afecten específicamente al municipio, la sesión de la Corporación podrá realizarse en el sitio en que la mesa directiva y el vocero estimen conveniente de manera concertada[27].

REGISTRO DE LOS CABILDOS ABIERTOS. La Secretaría General de la Corporación deberá llevar un registro de cada cabildo abierto, los temas que se abordaron, los participantes, las memorias del evento y la respuesta de la Corporación. Copia de este registro se enviará al Consejo Nacional de Participación y al Consejo Nacional Electoral[28].

---

[25] Artículo 27 ley 1757 de 2015

[26] Artículo 28 ley 1757 de 2015

[27] Artículo 29 ley 1757 de 2015

[28] Artículo 30 ley 1757 de 2015

TITULO XI
OTRAS DISPOSICIONES

ARTÍCULO 115º.- EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES POR VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE BANCADAS. Las sanciones en firme impuestas a los Concejales por los partidos que avalan la bancada correspondiente, se ejecutarán mediante resolución de la Mesa Directiva de la Corporación que se notificará personalmente al disciplinado.

ARTÍCULO 116º.- MEDIOS. Todos los Concejales y funcionarios del Concejo procurarán obtener un correo electrónico, para efectos de satisfacer el principio de la eficiencia en las actuaciones administrativas. Al efecto, deberán ejercer sus funciones teniendo en cuenta la legislación de comercio electrónico, contenidas en la Ley 527 de 1999.

ARTÍCULO 117º.- DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO. Todas las actividades de las Comisiones Permanentes que no estén específicamente descritas para ellas, se aplicarán en lo pertinente, lo establecido en este reglamento para la plenaria. Igualmente y en lo pertinente, se acogerá y aplicará el reglamento interno del Congreso de la República sobre los asuntos que no estén reglados para esta Corporación en el presente reglamento.

ARTÍCULO 118º.- CONFLICTO DE INTERESES. Cuando para los concejales exista interés directo en una decisión porque le afecta de alguna manera a él, o a su cónyuge o compañera o compañero permanente, a alguno de sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho, deberán declararse impedidos a participar en los debates o votaciones respectivas.

No existirán conflictos de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten a un Concejal en igualdad de condiciones que a la ciudadania en general.

ARTÍCULO 119. SUPLENCIAS, FALTAS Y VACANTES. Los miembros de las Corporaciones Públicas de elección popular no tendrán suplentes. Solo podrán ser reemplazados en caso de muerte, incapacidad física absoluta para el ejercicio del cargo, declaración de nulidad de la elección, renuncia justificada, y aceptada por la Corporación, sanción disciplinaria consistente en destitución, pérdida de investidura, condena penal o medida de aseguramiento por delitos distintos a las

relacionadas con pertenencia, promoción o financiación a o por grupos armados ilegales, de narcotráfico, delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad o cuando el miembro de una Corporación pública decida presentarse por un partido distinto según lo planteado en el parágrafo transitorio 1º del artículo 107 de la Constitución Política.

En tales casos, el titular será reemplazado por el candidato no elegido que, según el orden de inscripción o votación obtenida, le siga en forma sucesiva y descendente en la misma lista electoral. Como consecuencia de la regla general establecida en el presente artículo, no podrá ser reemplazado un miembro de una Corporación pública de elección popular a partir del momento en que le sea proferida orden de captura, dentro de un proceso penal al cual se le vinculare formalmente, por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación a o por grupos armados ilegales, de narcotráfico o delitos de lesa humanidad. La sentencia condenatoria producirá como efecto la pérdida definitiva de la curul, para el partido al que pertenezca el miembro de la Corporación pública.

No habrá faltas temporales, salvo cuando las mujeres, por razón de licencia de maternidad deban ausentarse del cargo. La renuncia de un miembro de Corporación pública de elección popular, cuando se le haya iniciado vinculación formal por delitos cometidos en Colombia o en el exterior, relacionados con pertenencia, promoción o financiación a o por grupos armados ilegales, de narcotráfico o delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad, generará la pérdida de su calidad de congresista, diputado, concejal o edil, y no producirá como efecto el ingreso de quien corresponda en la lista. Las faltas temporales no darán lugar a reemplazos.

Cuando ocurra alguna de las circunstancias que implique que no pueda ser reemplazado un Concejal, para todos los efectos de conformación de quórum, se tendrá como número de miembros la totalidad de los integrantes de la Corporación con excepción de aquellas curules que no puedan ser reemplazadas.

TITULO XII
VIGENCIA

ARTÍCULO 120°.- VIGENCIA. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación, deroga el acuerdo 002 de 2008 y todas las disposiciones que le sean contrarias.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Honorable Concejo Municipal, a los Nueve (9) días del mes de Diciembre del año 2016.

HELMUTH JOHAN LEAO CASTILLO PÉREZ
Presidente Concejo Municipal

RUTH MIREYA MARTINEZ GONZALEZ
Secretaria General Concejo Municipal

EL PRESIDENTE Y SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ACACIAS – META

HACEN CONSTAR

Que el Acuerdo No. **427** de fecha Nueve (9) de Diciembre de 2016 "**POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES**", surtió los dos debates reglamentarios según el Artículo 73 de la Ley 136 de 1994, surtiendo el primer debate el día Lunes Cinco (5) del mes de Diciembre de Dos mil Dieciséis (2.016) en la Comisión Primera del Plan de Desarrollo y el segundo debate el día Viernes Nueve (9) del mes de Diciembre del año Dos mil Dieciséis (2.016) en Plenaria.

Se expide en la ciudad de Acacias-Meta, a los Doce (12) días del mes de Diciembre del año dos mil dieciséis (2016).

HELMUTH JOHAN LEAO CASTILLO PÉREZ
Presidente Concejo Municipal

RUTH MIREYA MARTINEZ GONZALEZ
Secretaria General Concejo Municipal

TABLA DE CONTENIDO

ACUERDO No. 427 DE 2016

Pag.

ARTÍCULO 1º. 2
TÍTULO I. DISPOSICIONES PRELIMINARES 2
CAPITULO I. EL CONCEJO COMO CORPORACION ADMINISTRATIVA Y POPULAR. 2
ARTÍCULO 2º. 2
ARTÍCULO 3º.- AUTONOMÍA 2
ARTÍCULO 4º.- ATRIBUCIONES. 2
ARTÍCULO 5º.- FUNCIONES CONSTITUCIONALES 2
ARTÍCULO 6º.- ATRIBUCIONES LEGALES 4
ARTÍCULO 7º.- DECISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL 6
ARTÍCULO 8º.- SEDE. 6
ARTÍCULO 9º.- INVALIDEZ DE LAS REUNIONES. T 7
ARTÍCULO 10º.- QUÓRUM DELIBERATORIO Y DECISORIO ORDINARIO. 7
ARTÍCULO 11º.- QUORUM DECISORIO 7
CAPÍTULO II. PRINCIPIOS RECTORES Y CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN 7
ARTÍCULO 12º.- PRINCIPIOS RECTORES 7
ARTÍCULO 13º.- REGLAS DE INTERPRETACIÓN DEL REGLAMENTO. 8
ARTÍCULO 14º.- APLICACIÓN DE PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO. 8
CAPÍTULO III. DEL CONCEJO Y LAS BANCADAS 8
ARTÍCULO 15º.- DEFINICIÓN. 8
ARTÍCULO 16º.- NOTIFICACIÓN DE BANCADAS 9
ARTÍCULO 17º.- ACTUACIÓN EN BANCADAS. 9

ARTÍCULO 18º.- FACULTADES DE LAS BANCADAS 9

ARTÍCULO 19º.- INTERVENCIONES. 10

ARTÍCULO 20º.- USO DE LA PALABRA 10

ARTÍCULO 21º.- NÚMERO DE INTERVENCIONES. 11

ARTÍCULO 22º.- PROGRAMACIÓN PREFERENTE. 11

ARTÍCULO 23º.- CONSTANCIAS 11

ARTÍCULO 24º.- FUNCIÓN NORMATIVA DEL USO DE LA PALABRA 11

CAPITULO IV. ESTRUCTURA ORGANICA DEL CONCEJO 12

ARTÍCULO 25º- ESTRUCTURA ORGÁNICA INTERNA. 12

TITULO II. CONCEJO PLENO 13

CAPITULO I. INSTALACION POSESIÓN. PERIODO DE SESIONES. ACTAS. PUBLICIDAD 13

ARTÍCULO 26º.- SESIONES DE INAGURACION. 13

ARTÍCULO 27º.- POSESIÓN DEL PRESIDENTE Y DE LOS CONCEJALES. 14

ARTÍCULO 28.- PERIODO DE SESIONES. 15

ARTÍCULO 29º.- ACTAS. 15

ARTÍCULO 30º- PUBLICIDAD. 16

CAPITULO II. CONTROL POLITICO. DELEGACIONES. PROHIBICIONES 16

ARTÍCULO 31º.- FUNCIONES DE CONTROL POLÌTICO 16

ARTÍCULO 32º.- CITACIONES 19

ARTÍCULO 33º.- CITACIONES NO REALIZADAS. 20

ARTÍCULO 34º. PLURALIDAD DE CITACIONES. 20

ARTÍCULO 35º.- DEBATES DE CONTROL POLÍTICO 20

ARTÍCULO 36º.- INFORMES 21

ARTÍCULO 37º.- DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS. 22

ARTÍCULO 38º.- PROHIBICIONES 22

TITULO III. DIGNATARIOS 22

CAPITULO ÚNICO. MESA DIRECTIVA. COMITÉ DE COORDINACIÓN POLÍTICA 22

ARTÍCULO 39º.- PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA..... 23
ARTÍCULO 40º.- ELECCIÓN DEL PRESIDENTE. 23
ARTÍCULO 41º.- FUNCIONES DEL PRESIDENTE. 23
ARTÍCULO 42º.- FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES DEL PRESIDENTE..... 25
ARTÍCULO 43º.- RECURSO EN VÍA GUBERNATIVA. 25
ARTÍCULO 44º.- FUNCIONES DE LOS VICEPRESIDENTES. 25
ARTÍCULO 45º.- DE LA MESA DIRECTIVA..... 26
ARTÍCULO 46º.- FUNCIONES DE LA MESA DIRECTIVA..... 26
ARTÍCULO 47º.- COMITÉ DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 27
TITULO IV. DEBERES Y DERECHOS DE LOS CONCEJALES..... 27
CAPITULO PRIMERO. DE LOS DEBERES..... 27
ARTÍCULO 48º.- DEBERES. 27
CAPITULO SEGUNDO. DE LOS DERECHOS 28
ARTÍCULO 49º,- DERECHOS. 28
TITULO V. SECRETARIO GENERAL..... 29
CAPITULO ÚNICO. DESIGNACIÓN. REQUISITOS. PERIODO. FUNCIONES..... 29
ARTÍCULO 50º.- 29
ARTÍCULO 51º.- FUNCIONES GENERALES..... 30
ARTÍCULO 52º.- FUNCIONES ESPECÍFICAS. 30
TITULO VI. COMISIONES 31
CAPITULO PRIMERO. CLASES DE COMISIONES..... 311
ARTÍCULO 53.- COMISIONES ACCIDENTALES..... 31
CAPÍTULO SEGUNDO. COMISIONES PERMANENTES 32
ARTÍCULO 54º.- NÚMERO, INTEGRACIÓN Y FUNCIONES. 32
ARTÍCULO 55º.- ELECCIÓN. 33
ARTÍCULO 56º.- MATERIA DE ESTUDIO DE LAS COMISIONES..... 33
ARTÍCULO 57º.- SESIONES CONJUNTAS DE COMISIONES PERMANENTES..... 34

ARTÍCULO 58º.- MATERIAS OBJETO DE LA COMISIÓN PRIMERA PERMANENTE DEL PLAN DE DESARROLLO Y BIENES. 34

ARTÍCULO 59º.- MATERIAS OBJETO DE LA COMISIÓN SEGUNDA PERMANENTE DE PRESUPUESTO Y HACIENDA PÚBLICA 35

ARTÍCULO 60º.- MATERIAS OBJETO DE LA COMISIÓN TERCERA PERMANENTE ADMINISTRATIVA Y DE GOBIERNO. 35

TÍTULO VII. SESIONES 36

CAPITULO PRIMERO. REUNIONES. CITACIONES. ORDEN INTERNO 36

ARTÍCULO 61º.- CLASES DE SESIONES. 36

ARTÍCULO 62º.- SESIONES. 37

ARTÍCULO 63º.- CITACIONES. 38

ARTÍCULO 64º.- SESIONES FUERA DE LA SEDE 39

ARTÍCULO 65º.- ORDEN INTERNO. 39

ARTÍCULO 66º.- ORDEN DE LAS SESIONES. 40

ARTÍCULO 67º.- SESIONES EXTRAORDINARIAS. 40

CAPITULO SEGUNDO. ORDEN DEL DIA 41

ARTÍCULO 68º.- ORDEN DEL DÍA. 41

CAPITULO TERCERO. DEBATES 41

ARTÍCULO 69º.- CONCEPTO. 42

ARTÍCULO 70º.- INTERVENCIONES. 42

ARTÍCULO 71º.- INTERPELACIÓN. 42

ARTÍCULO 72º.- DERECHO DE RÉPLICA. 42

ARTÍCULO 73º.- MOCIONES. 42

ARTÍCULO 74º.- MOCIÓN DE ORDEN. 43

ARTÍCULO 75º.- MOCIÓN DE PROCEDIMIENTO 43

ARTÍCULO 76º.- MOCION DE SUFICIENTE ILUSTRACION 43

ARTÍCULO 77º.- MOCION DE ACLARACION DE VOTO. 43

ARTÍCULO 78º.- PROPOSICIONES 43
ARTÍCULO 79º.- PROHIBICIONES 44
ARTÍCULO 80º.- USO DE LA PALABRA DE FUNCIONARIOS. 45
ARTÍCULO 81.- USO DE LA PALABRA DE INVITADOS Y COMUNIDAD 45
ARTÍCULO 82º.- INCUMPLIMIENTO DE UNA CITACIÓN 45
ARTÍCULO 83.- GRABACIÓN Y TRASCRIPCIÓN DE LAS SESIONES. 45
CAPITULO CUARTO. VOTACIONES 46
ARTÍCULO 84º.- REGLAS EN MATERIA DE VOTACIONES. 46
ARTÍCULO 85º.- MODOS DE VOTACIÓN. 47
ARTÍCULO 86º.- VOTACIÓN DE PROYECTOS DE ACUERDO 49
ARTÍCULO 87º.- EMPATES 49
ARTÍCULO 88.- REGLAS ESPECIALES EN MATERIA DE ELECCION DE FUNCIONARIOS. 49
TITULO VIII. PROCESO NORMATIVO 50
CAPITULO I. ACUERDOS MUNICIPALES 50
ARTÍCULO 89º.- INICIATIVA. 50
ARTÍCULO 90º.- DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO 53
ARTÍCULO 91º.- DESIGNACION DE PONENTES. DESIGNACION DE PONENTES. 53
ARTÍCULO 92º.- ACUMULACIÓN DE PROYECTOS 54
ARTÍCULO 93º.- REQUISITOS LEGALES. 54
CAPITULO SEGUNDO. PRIMER DEBATE 54
ARTÍCULO 94º.- PRESENTACIÓN DE LA PONENCIA Y APERTURA DEL DEBATE 54
ARTÍCULO 95º.- DISCUSIÓN. 54
ARTÍCULO 96º.- ENMIENDAS. 55
ARTÍCULO 97º.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 55
ARTÍCULO 98º.- PROYECTO APROBADO. 55
ARTÍCULO 99º.- PROYECTO NO APROBADO. 55
CAPITULO TERCERO. SEGUNDO DEBATE 56

ARTÍCULO 100º.- INICIACIÓN DEL DEBATE. 56
ARTÍCULO 101º.- ENMIENDAS. S 56
ARTÍCULO 102º.- APROBACIÓN.. 56
ARTÍCULO 103º.- SECUENCIA NUMERICA DE LOS ACUERDOS. 57
ARTÍCULO 104°.- REVISIÓN DE LOS ACUERDOS POR EL GOBERNADOR. 57
TITULO IX. DE LAS OBJECIONES 57
CAPITULO PRIMERO. MOTIVOS. PLAZOS 57
ARTÍCULO 105º.- MOTIVOS. 57
ARTÍCULO 106º.- PLAZOS. 58
CAPITULO SEGUNDO. TRAMITE DE LAS OBJECIONES 58
ARTÍCULO 107º.- DEVOLUCIÓN CON OBJECIONES 58
ARTÍCULO 108º.- OBJECIONES POR INCONVENIENCIA. 58
ARTÍCULO 109º.- OBJECIONES DE DERECHO 58
TITULO X. CABILDO ABIERTO 59
ARTÍCULO 110º.- PETICIÓN DEL CABILDO ABIERTO 59
ARTÍCULO 111º.- DIFUSIÓN DEL CABILDO. 60
ARTÍCULO 112º ASISTENCIA Y VOCERÍA 60
ARTÍCULO 113º.- CITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 61
ARTÍCULO 114º.- OBLIGATORIEDAD DE LA RESPUESTA. 61
TITULO XI. OTRAS DISPOSICIONES 62
ARTÍCULO 115º.- EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES POR VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE BANCADAS. .. 62
ARTÍCULO 116º.- MEDIOS. 62
ARTÍCULO 117º.- DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO. 62
ARTÍCULO 118º.- CONFLICTO DE INTERESES. 62
ARTÍCULO 119. SUPLENCIAS, FALTAS Y VACANTES. 62
TITULO XII. VIGENCIA 64
ARTÍCULO 120º.- VIGENCIA. 64

1003.21

ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS (META)
(14 de Diciembre de 2016)

ACTO DE SANCION

De conformidad con el Articulo 76 y Artículo 81 de la Ley 136 del 1994, se sanciona y se ordena la publicación del presente Acuerdo No.427 del 9 de Diciembre de 2016 **"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACIAS"** se envía copia al señor Gobernador del Departamento del Meta, para su correspondiente revisión y control de legalidad.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUZ GRACIELA MORENO ROLDAN
Alcaldesa Municipal (e)

DORA PATRICIA MORENO REYES
Secretaria de Gobierno Municipal

CAROL MAGALY GUEVARA ROJAS
Proyectó:

CONTROL CONSTITUCIONAL ... 10 ARTICULO 305 DE LA C.N.
GERENCIA DE CON...

Hoy catorce (14) de diciembre de 2016; siendo las 10:00 am; se fija el ACUERDO Nº 427 DE 2016: **"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACIAS".**

DORA PATRICIA MORENO REYES
Secretaria de Gobierno Municipal

Se publica conforme al articulo 81 de la ley 136 de 1994, el dia 14 de diciembre de 2016, siendo las 10:00 a.m.

DORA PATRICIA MORENO REYES
Secretaria de Gobierno Municipal

Proyectó: Sandra P. Quevedo C.
Secretaria

Presentación
Nuestro municipio
Acacías le informa
Contratación
Normatividad
Sistema general de regalías
Otras entidades del municipio
Órganos de control
Instancias de participación ciudadana
Rendición de cuentas
Transparencia y acceso a información pública
Para niños y niñas

Normatividad

Normas vigentes

ACUERDO No. 427 del 9 de Diciembre del 2016, Se adopta el reglamento interno del concejo municipal de Acacías y se dictan otras disposiciones.

Año de expedición: 2016

Sector:

Por medio del cual se adopta el reglamento interno del concejo municipal de Acacias y se dictan otras disposiciones.

Descargar ACUERDO No. 427 del 9 de Diciembre del 2016, Se adopta el reglamento interno del concejo municipal de Acacías y se dictan otras disposiciones.
Tipo de archivo: TXT
Tamaño:
log

> Normatividad vigente
> Proyecto de normas municipales

Fecha de última actualización: 16 de Diciembre de 2016

Acacías, 25 de Noviembre de 2016

CONCEJO MUNICIPAL DE ACACIAS
RECIBIDO
HORA 8:30 am
FECHA NOV-30-2016
FIRMA

Señores
HONORABLES CONCEJALES
La ciudad

REFERENCIA: EXPOSICION DE MOTIVOS "proyecto de acuerdo No. 492 de 2016 "**POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".**

En atención a lo establecido en la ley 136 de 1994 en el **Artículo 31°.- establece lo siguiente** *Reglamento.* Los concejos expedirán un reglamento interno para su funcionamiento en el cual se incluyan, entre otras, las normas referentes a las comisiones, a la actuación de los concejales y la validez de las convocatorias y de las sesiones.

Que el actual Reglamento Interno del Honorable Concejo Municipal data del Acuerdo 002 del año 2008.

Que desde la expedición del Reglamento Interno el Congreso de la República ha expedido una serie de disposiciones legales no contempladas en el Reglamento Interno del Concejo Municipal y es necesario realizar las modificaciones y/o actualizaciones de conformidad con el ordenamiento jurídico..

Que en el actual reglamento interno tiene aspectos que se presentan en el desarrollo de la sesiones y no están regulados y son de la esfera de su competencia dicha regulación.

Así las cosas se pone a consideración la iniciativa de un nuevo reglamento para el Honorable Concejo Municipal.

Cordialmente;

MESA DIRECTIVA.

HELMUTH JOHAN LEAO CASTILLO PEREZ
Presidente Honorable Concejo Municipal de Acacias.

JOSE IGNACIO SERRATO CORTES
Primer Vicepresidente

FABIO MARTIN JARA AGUDELO
Segundo Vicepresidente

ACTA No. 132
(diciembre 12 de 2020)

QUE TRATA DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS– META, CONFORME LO ESTABLECEN EL ARTICULO 8 DEL DECRETO 2796 DE 1994, LEYES 136 DE 1994, 617 DEL 2000 Y 1551 DE 2012. CONVOCADAS MEDIANTE DECRETO 235 DE DICIEMBRE 11 DE 2020. LA CUAL SE REALIZO EL DÍA SABADO DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2020.

En Acacias siendo las ocho y treinta (8:30) de la mañana del doce (12) del mes de diciembre del año 2020, en el salón de sesiones del Honorable Concejo Municipal de Acacías –Meta, se reunieron sus integrantes bajo la presidencia del Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, y como secretaria general (e) la señora DIGNORY CLAVIJO ORTIZ

El presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, presenta un cordial saludo a los Concejales y a las demás personas que hacen presencia el día de hoy, luego solicita a la secretaria general hacer el llamado a lista.

La secretaria general (e) DIGNORY CLAVIJO ORTIZ, procede a llamar a lista y verificar el quórum, así

CONCEJALES PRESENTES
LILIANA MARCELA BAQUERO TORRES
JHONNY ANDRES BASTO HERNANDEZ
WILMER ORLANDO CARVAJAL OLAYA
FARLEY CARVAJAL REY
ANDRES MAURICIO CHAVEZ QUEVEDO
ZULMA YOLIMA DIAZ DIAZ
JOSE JAIR ECHEVERRY OSPINA
JHONNY STEVENSON GIRALDO ARAGON
ORLANDO GRANADOS ACEVEDO
ARNOLD MAURICIO PINILLA TRIANA
VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS
HECTOR REYES RATIVA

LUIS CARLOS RICHAR RODRIGUEZ CORTES
GILDARDO SANTOS CHAPARRO
ALEXANDER VALERO

Hecho el llamado a lista con la asistencia de quince (15) Concejales, se le informa al presidente que hay quórum para deliberar y decidir.

El presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, solicita a la secretaria general dar lectura al orden del día propuesto así:

ORDEN DEL DÍA

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA.
3. INSTALACION SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS POR EL ACALDE MUNICIPAL MEDIANTE DECRETO No. 235 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2020.
4. PROPOSICIONES Y VARIOS

DESARROLLO:

PRIMER PUNTO: LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUÓRUM: La secretaria general informa que se encuentran presentes los Concejales enunciados al inicio de la sesión, por lo que hay quórum para deliberar y decidir

SEGUNDO PUNTO: DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA. Interviene el presidente Concejal ORLANDO GRANADOS pone en consideración el orden del día leído, se abre la discusión, sigue abierta la discusión anuncio que se va a cerrar, se cierra, se abre la votación, anuncio que se va a cerrar, se cierra, siendo aprobado por unanimidad.

TERCER PUNTO: INSTALACION SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS POR EL ALCALDE MUNICIPAL MEDIANTE DECRETO No. 235 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2020. La secretaria general (e) procede a dar lectura al decreto No. 235 del 11 de diciembre de 2020 con los considerandos.

Hace uso de la palabra el presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, con la lectura del decreto No. 235 donde se cita al concejo municipal a las sesiones extraordinarias para que se ocupe de unos proyectos de acuerdo el No. 627 y 628 y la secretaria(o) general para la vigencia 2021 declaramos formalmente instaladas las sesiones extraordinarias.

CUARTO PUNTO: PROPOSICIONES Y VARIOS. Hace uso de la palabra el presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, se les informa a los Concejales que estamos en el proceso de elección de secretaria general ayer se adelantó la prueba de conocimientos hay 5 aspirantes en concurso el día lunes se publicara la consolidación de los resultados y para el 18 es la entrevista.

Hace uso de la palabra el Concejal ANDRES MAURICIO CHAVEZ QUEVEDO, presidente ayer alguien me planteo el siguiente interrogante y duda que creo que es sana hacérnosla todos, me dijo estuve leyendo la sentencia que saco en el fallo que nos sacó a Alexandra y me decia tengan cuidado porque lo que plantean es que no es concurso público para elección sino convocatoria pública, lo planteo como siempre planteo mis interrogantes aquí delante de todos para que sean tenidas en cuenta y de pronto el jurídico nos pueda sacar en estos días y si me gustaría que la pudiéramos revisar presidente si es convocatoria o es concurso, porque si es convocatoria la forma de decisión habría que revisarla.

Tiene el uso de la palabra el presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, igual vale la sugerencia se la plantearemos al jurídico y si hay que hacer alguna modificación estamos dentro de los términos para poderla realizar, le informo a la plenaria que según la cronología del proceso está programado para el día 16 de diciembre está programada la entrevista de los participantes y para el día 18 la elección y posesión.

Hace uso de la palabra el Concejal JHONNY GIRALDO saluda a los presentes, para hacer una proposición que el viernes 18 de diciembre se incluya dentro del orden del día entregar los reconocimientos que los Concejales ARNOLD PINILLA, LILIANA BAQUERO y el suscrito.

Hace uso de la palabra el presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, está abierta la discusión sobre la proposición presentada por el Concejal JHONNY GIRALDO para que el 18 de diciembre dentro del orden del día se incluya otorgar unos reconocimientos a unas personalidades que ya fueron aprobados por plenaria, está

abierta la discusión sobre la proposición presentada, aviso que se va cerrar, queda cerrada, se abre la votación, aviso que se va cerrar, queda cerrada, siendo aprobado.

No habiendo más proposiciones y varios, agotado el orden del día, se da por terminada la sesión del día de hoy sábado (12) de diciembre del 2020, siendo las 8:45 a.m., se convoca el miércoles 16 de diciembre a las 7:00 am.

ORLANDO GRANADOS ACEVEDO
Presidente Concejo Municipal

DIGNORY CLAVIJO ORTIZ
Secretaria General (e) Concejo Mpal

L.R.R.
Elaboró y digitó: Lucila Rodriguez Rodriguez
Contratista

SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS MEDIANTE DECRETO No. 235 DE DICIEMBRE 11 DE 2020.

SÁBADO DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2020

ORDEN DEL DÍA

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA
3. INSTALACIÓN DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS POR EL ALCALDE MUNICIPAL MEDIANTE DECRETO No. 235 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2020.
4. PROPOSICIONES Y VARIOS.

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS	CÓDIGO: PGA-200-01.04
		FECHA: OCTUBRE 2015
	MODELO ESTANDAR DE CONTL INTERNO - MECI GESTION DOCUMENTAL	VERSIÓN: 01

SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS MEDIANTE DECRETO No. 235 DE DICIEMBRE 11 DE 2020.

SÁBADO DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2020

CONTROL DE ASISTENCIA

LILIANA MARCELA BAQUERO TORRES

JHONNY ANDRES BASTO HERNANDEZ

WILMER ORLANDO CARVAJAL OLAYA

FARLEY CARVAJAL REY

ANDRES MAURICIO CHAVEZ QUEVEDO

ZULMA YOLIMA DIAZ DIAZ

JOSE JAIR ECHEVERRY OSPINA

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS	CÓDIGO: PGA-200-01.04
		FECHA: OCTUBRE 2015
	MODELO ESTANDAR DE CONTL INTERNO - MECI GESTION DOCUMENTAL	VERSIÓN: 01

SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS MEDIANTE DECRETO No. 235 DE DICIEMBRE 11 DE 2020.

SÁBADO DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2020

CONTROL DE ASISTENCIA

JHONNY STEVENSON GIRALDO ARAGON

ORLANDO GRANADOS ACEVEDO

ARNOLD MAURICIO PINILLA TRIANA

VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS

HECTOR REYES RATIVA

LUIS CARLOS RICHAR RODRIGUEZ CORTES

GILDARDO SANTOS CHAPARRO

ALEXANDER VALERO

ALCALDÍA DE Acacías
Camino de oportunidad.

CONCEJO MUNICIPAL
RECIBIDO
HORA 4:51 PM
FECHA 11/12/2020
FIRMA Dignoy Clojo

NIT 892001457-3

1000

DECRETO N° 235
(DICIEMBRE 11 DE 2020)

"POR MEDIO DEL CUAL SE CONVOCA A SESIONES EXTRAORDINARIAS AL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS- META"

EL ALCALDE MUNICIPAL DE ACACÍAS- META

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales, especialmente las establecidas en el artículo 315 de la Constitución Política y lo previsto en el artículo 23 y 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 29 la Ley 1551 de 2012 y

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 315º determina como atribuciones del Alcalde en el numeral 5º, "Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del municipio".

Que de conformidad con el parágrafo segundo del Artículo 23º de la Ley 136 de 1994, los Alcaldes podrán convocar al Concejo Municipal a sesiones extraordinarias en oportunidades diferentes, para que se ocupen exclusivamente de los asuntos que se sometan a su consideración.

Que el Señor Presidente del Concejo Municipal, ORLANDO GRANADOS ACEVEDO en oficio calendado el 07 de diciembre de 2020, solicita se convoque a sesiones extraordinarias al Concejo Municipal para que se cumpla con el proceso de elección de la secretaria general del concejo, de conformidad con las Resoluciones 048 de 2020, modificada por la Resolución 073 de 2020.

Que el artículo 73 de la Ley 136 de 1994 establece que para que un proyecto sea Acuerdo, debe aprobarse en dos debates celebrados en distintos días.

Que el Artículo 91 ibidem, modificado por el artículo 29º de la Ley 1551 de 2012 establece en el literal A:

1. Presentar los proyectos de acuerdo que juzgue convenientes para la buena marcha del municipio.

2. Presentar oportunamente los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social con inclusión del componente de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario y de obras públicas, que deberá estar coordinado con los planes departamentales y nacionales.

4. Colaborar con el Concejo para el buen desempeño de sus funciones; presentarles informes generales sobre su administración en la primera sesión ordinaria de cada año, y convocarlo a sesiones extraordinarias en las que sólo se ocupará de los temas y materias para los cuales fue citado".

ALCALDÍA DE Acacías
Camino de oportunidad.

NIT 892001457-3

1000

Que la Administración Municipal encontrándose dentro del término legal requiere darle trámite a tres iniciativas de proyectos de acuerdo para la buena marcha de la administración municipal y el Concejo Municipal.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA

ARTÍCULO PRIMERO: CONVOCATORIA: Convóquese y cítese a sesiones extraordinarias al Concejo Municipal de Acacías - Meta por el periodo comprendido entre el 12 de diciembre al 23 de diciembre de 2020.

ARTÍCULO SEGUNDO: **MATERIAS DE SESIONES EXTRAORDINARIAS**: Durante las sesiones extraordinarias se estudiara los Proyectos de Acuerdo Municipal que se enuncian a continuación, y deberá realizarse la elección de la Secretaria General del Concejo para la vigencia 2021:

627 - "POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA POLITICA PÚBLICA DE EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS Y SE DICTAN OTRA DISPOSICIONES."

628 - "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO MUNICIPAL No. 454 DE 2017- ESTATUTO TRIBUTARIO MUNICIPAL"

- ELECCIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACIAS PARA LA VIGENCIA 2021.

ARTÍCULO TERCERO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y publicación.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en el Municipio de Acacías Meta, a los once (11) días del mes de diciembre de 2020.

EDUARDO CORTES TRUJILLO
Alcalde Municipal

Revisó: Lisith Meliza Aguilar Sanabria
Proyectó: Roger Alexander Acero Rojas

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS	CÓDIGO: PGA-200-01.04
		FECHA: OCTUBRE 2015
	MODELO ESTANDAR DE CONTL INTERNO - MECI GESTION DOCUMENTAL	VERSIÓN: 01

ENTREGA COPIAS PROYECTOS DE ACUERDOS Nrs. 627 y 628 DE 2020, CON EXPOSICION DE MOTIVOS, Y ANEXOS

Acacías, diciembre 12 de 2020

LILIANA MARCELA BAQUERO TORRES

JHONNY ANDRES BASTO HERNANDEZ

WILMER ORLANDO CARVAJAL OLAYA

FARLEY CARVAJAL REY

ANDRES MAURICIO CHAVEZ QUEVEDO

ZULMA YOLIMA DIAZ DIAZ

JOSE JAIR ECHEVERRY OSPINA

JHONNY STEVENSON GIRALDO ARAGON

ORLANDO GRANADOS ACEVEDO

ARNOLD MAURICIO PINILLA TRIANA

VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS

HECTOR REYES RATIVA

LUIS CARLOS RICHAR RODRIGUEZ CORTES

GILDARDO SANTOS CHAPARRO

ALEXANDER VALERO

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS	CÓDIGO: PGA-200-01.06
		FECHA: OCTUBRE 2015
	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI GESTION DOCUMENTAL	VERSIÓN: 01

CITACIÓN No. 05 DEL 2020

HONORABLES CONCEJALES

En cumplimiento de mis funciones como Presidente de esta Honorable Corporación y de acuerdo a la Constitución Nacional y el Reglamento Interno del Concejo Municipal Acuerdo 427 de 2016, me permito citarlos a SESIONES EXTRAORDINARIAS convocadas mediante Decreto No. 235 de diciembre 11 de 2020, emanado por el Alcalde Municipal Licenciado Eduardo Cortes Trujillo, durante 12 días, contados a partir del día sábado doce (12) de diciembre de 2020.

Por lo anterior, me permito citarlos a la sesión de instalación el día sábado doce (12) de diciembre de 2020., en el horario de las 8:00 a.m., de conformidad al artículo 62 del Reglamento Interno.

Acacías - Meta, diciembre 11 de 2020.

ORLANDO GRANADOS ACEVEDO
Presidente Concejo Mpal

Anexo: Decreto 235 de diciembre 11 de 2020 (en 2 folios)

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS	CÓDIGO: PGA-200-01.06
		FECHA: OCTUBRE 2015
	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI GESTION DOCUMENTAL	VERSIÓN: 01

CITACIÓN No. 05 DEL 2020

LILIANA MARCELA BAQUERO TORRES

JHONNY ANDRES BASTO HERNANDEZ

WILMER ORLANDO CARVAJAL OLAYA

FERLEY CARVAJAL REY

ANDRES MAURICIO CHAVEZ QUEVEDO

ZULMA YOLIMA DIAZ DIAZ

JOSE JAIR ECHEVERRY OSPINA

JHONNY STEVENSON GIRALDO ARAGON

ARNOLD MAURICIO PINILLA TRIANA

VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS

HECTOR REYES RATIVA

LUIS CARLOS RICHAR RODRIGUEZ CORTES

GILDARDO SANTOS CHAPARRO

ALEXANDER VALERO

ACTA No. 133
(diciembre 16 de 2020)

QUE TRATA DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS– META, CONFORME LO ESTABLECEN EL ARTICULO 8 DEL DECRETO 2796 DE 1994, LEYES 136 DE 1994, 617 DEL 2000 Y 1551 DE 2012. CONVOCADAS MEDIANTE DECRETO 235 DE DICIEMBRE 11 DE 2020. LA CUAL SE REALIZO EL DÍA MIERCOLES DIECI SEIS (16) DE DICIEMBRE DE 2020.

En Acacías siendo las siete y veinte ocho (7:28) de la mañana del dieciséis (16) del mes de diciembre del año 2020, en el salón de sesiones del Honorable Concejo Municipal de Acacías –Meta, se reunieron sus integrantes bajo la presidencia del Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, y como secretaria general (e) la señora DIGNORY CLAVIJO ORTIZ

El presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, presenta un cordial saludo a los Concejales y a las demás personas que hacen presencia el día de hoy, luego solicita a la secretaria general hacer el llamado a lista.

La secretaria general (e) DIGNORY CLAVIJO ORTIZ, procede a llamar a lista y verificar el quórum, así

CONCEJALES PRESENTES
JHONNY ANDRES BASTO HERNANDEZ
WILMER ORLANDO CARVAJAL OLAYA
FARLEY CARVAJAL REY
ANDRES MAURICIO CHAVEZ QUEVEDO
ZULMA YOLIMA DIAZ DIAZ
JOSE JAIR ECHEVERRY OSPINA
ORLANDO GRANADOS ACEVEDO
ARNOLD MAURICIO PINILLA TRIANA
HECTOR REYES RATIVA
LUIS CARLOS RICHAR RODRIGUEZ CORTES

Hecho el llamado a lista con la asistencia de nueve (9) Concejales, se le informa al presidente que hay quórum para deliberar y decidir.

El presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, solicita a la secretaria general dar lectura al orden del día propuesto así:

ORDEN DEL DÍA

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA
3. ENTREVISTA A LAS ASPIRANTES ADMITIDAS EN LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCION DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS VIGENCIA 2021.
4. PROPOSICIONES Y VARIOS

DESARROLLO:

PRIMER PUNTO: LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUÓRUM: La secretaria general informa que se encuentran presentes los Concejales enunciados al inicio de la sesión, por lo que hay quórum para deliberar y decidir

SEGUNDO PUNTO: DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA. Interviene el presidente Concejal ORLANDO GRANADOS pone en consideración el orden del día leído.

Hace uso de la palabra el Concejal ANDRES MAURICIO CHAVEZ, presidente es una pequeña duda y es porque estuve leyendo conforme salió la sentencia de Alexandra y nos habla de que es una convocatoria y todo el tema y quiero que me aclare el tema si es convocatoria y si lo que se va ser ahorita es una entrevista y cuál es el ponderado que se va sacar porque leyendo la convocatoria quiero hacer la aclaración para que quede la constancia presidente, leyendo la sentencia y unos conceptos aquí se trata que ninguno nos metamos en problemas veo que hay una diferencia entre convocatoria y concurso es la parte decisiva y final.

Hace uso de la palabra el Concejal FARLEY CARVAJAL REY buenos días, de la sesión pasada me queda la incognito presentada por el Concejal MAURICIO

CHAVEZ, puesto que seria bien distante y diferente la una de la otra en eso quisiera que le diéramos claridad pero además presidente me asalta otra duda, si la Dra. Alexandra secretaria del Concejo declararon nulo el nombramiento, pienso que debió haberse inmediatamente convocado a elecciones a concurso para el tema de la secretaria del 2020 es bien cierto que muy posiblemente los términos no hubiese podido un tema exprés pero no hay una norma que nos diga cuando faltan 25 días entonces se siga en interlineal mientras se nombra la del otro año pienso que aquí tendrían que existir dos concursos uno para suplir la del 2020 y la del 2021, tengo esa duda sabemos que nos pueden estar vigilando desde la parte externa como así paso este año entonces no quiero que quedara ese vacío, si hubiera pasado en mayo o en junio hubiéramos tenido que realizar una convocatoria para elegir el restante del tiempo, aquí no veo una norma que lo respalde mi constancia es para que porque no realizamos la convocatoria de lo restante del 2020, gracias.

El presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, sigue abierta la discusión Se deja constancia de la asistencia de los Concejales, JHONNY STEVENSON GIRALDO ARAGON, GILDARDO SANTOS CHAPARRO, VICTOR RAMOS, ALEXANDER VALERO.

Hace uso de la palabra el Concejal JHONNY GIRALDO, saluda a los presentes, para dejar una constancia a cerca de la duda que se manifiesta sobre la diferencia de concurso y convocatoria pública, de igual manera pedir que se nos explique cómo va el tema del proceso de elección de personero municipal, gracias.

El presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO manifiesta sigue abierta la discusión del orden del día aviso que se va a cerrar, queda cerrada la discusión, se abre la votación, anuncio que se va a cerrar, se cierra, siendo aprobado por unanimidad.

TERCER PUNTO: ENTREVISTA A LAS ASPIRANTES ADMITIDAS EN LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCION DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS VIGENCIA 2021. Tiene el uso de la palabra el presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEEVDO, Concejal MAURICIO CHAVEZ le trasmití su inquietud al asesor jurídico y el me hace una sentencia de unificación de jurisprudencia sobre el tema del magistrado ponente Jorge Ignacio Pretelt quien básicamente en la sentencia dice: la convocatoria es " la norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los participantes", y como tal impone

las reglas que son obligatorias para todos, entiéndase administración y administrados-concursantes. Por tanto, como en ella se delinean los parámetros que guiaran el proceso, los participantes, en ejercicio de los principios de buena fe y confianza legítima, esperan su estricto cumplimiento. La corte constitucional ha considerado, entonces, que el estado debe respetar y observar todas y cada una de las reglas y condiciones que se imponen en las convocatorias, porque su desconocimiento se convertiría en una trasgresión de los principios axiales de nuestro ordenamiento constitucional, entre otros la trasparencia, la publicidad, la imparcialidad, así como el respeto por las legítimas expectativas de los concursantes en consecuencia, las normas de la convocatoria sirven de auto- vinculación y autocontrol porque la administración debe "respetarlas y que su actividad, en cuanto a la selección de los aspirantes que califique para acceder al empleo o empleos correspondientes, se encuentra previamente regulada" y también hay una sentencia de tutela del magistrado Jorge Iván Palacios en la cual establece: la convocatoria se convierte en un expresión del principio de legalidad tanto para oferentes como para los inscritos, de tal forma que incumplir las directrices allí estipuladas contraviene no solo los derechos de los aspirantes, sino aquel valor superior al cual está sujeto toda actuación pública. Dicho, en otros términos, el acto administrativo que la contenga funge como norma del concurso de méritos, por lo cual todos los intervinientes en el proceso deben someterse aquel so pena de trasgredir el orden jurídico imperante. Creo que con estas dos sentencias queda definido el tema Concejal MAURICIO CHAVEZ.

Tiene el uso de la palabra el Concejal ANDRES MAURICIO CHAVEZ QUEVEDO, siendo consecuente con mi profesión y con mi área de especialidad siempre se ha dicho todo acto jurídico emanado por el Concejo que es un acto administrativo tiene presunción de legalidad y este carácter vinculante y eso no lo estoy poniendo en duda en ningún momento lo que usted está leyendo, mi inquietud realmente es una cosa es concurso público de méritos y otra cosa es convocatoria pública de méritos y eso es lo que me tiene intranquilo.

El presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, lee la parte de la sentencia de tutela la convocatoria utiliza las dos expresiones que es convocatoria y concurso de méritos y es válido en el debate se trata de enriquecer y que los procesos estén fortalecidos dice: la convocatoria se convierte en una expresión de principio de legalidad dicho en otros términos el acto administrativo que la contenga funge como norma del concurso de méritos, utiliza las dos expresiones ya queda a interpretación de cada uno de lo que quieran.

Hace uso de la palabra el Concejal FARLEY CARVAJAL REY quiero anunciar es que las implicaciones no es de terminología, es el tema si es convocatoria, la convocatoria nos arroja una lista de elegibles a diferencia que el concurso nos arroja un ganador entonces al enunciar la como convocatoria en mi entender es que se arrojaría una lista de elegibles de los cuales todos van a tener diferente puntaje de los cuales el Concejo municipal elegiría, pues quisiera simplemente que se indicara el tema si el ganador es la secretaria del Concejo o de los 3 o 4 últimos que estén de ahí vamos a elegir nosotros, gracias.

Tiene el uso de la palabra el presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, Resolución 48, 17 de noviembre de 2020 por medio de la cual se realiza una convocatoria para la elección de la secretaria general del Concejo de Acacías, el título es el que da la inducción de lo que se va desarrollar en todo el acto administrativo, lo que se está realizando es una convocatoria en ese orden de ideas se hicieron todas las pruebas, se hizo la recepción de hojas de vida, se hizo la evaluación de las mismas de hojas de vida a través del comité evaluador el cual está conformado por la Concejala LILIANA BAQUERO, MAURICIO CHAVEZ Y JHONNY ANDRES BASTO se hizo la respectiva publicación de las hojas de vida, hubo una sola reclamación es esa publicación, reclamación que fue absuelta por el mismo comité de manera favorable a la peticionaria en el entendido que un soporte de la hoja de vida no había sido tenido en cuenta dentro de la evaluación e inicialmente había sido rechazada esa hoja de vida, el comité evaluador acepto esa hoja de vida dentro de la convocatoria, después vino la etapa de la prueba de conocimiento la cual también se desarrolló con todos los protocolos necesarios de custodia teniendo en cuenta que la resolución 48 fue modificada por la resolución No. 73 estableció y descargo esa responsabilidad de la prueba de conocimientos en la mesa directiva en ese orden de ideas la mesa directiva realizo las prueba de conocimientos bajo los estrictos controles de seguridad de la misma, aquí estuvieron las 5 candidatas una de ellas venía de Cali, Buga vino solo a presentar la prueba ella ese día radico una solicitud para que la entrevista de hoy se hiciera de manera virtual lo cual en aras de garantizar todos los derechos su petición fue resuelta de manera favorable, ella a las 8:30 am se conectara de manera virtual para acceder a la entrevista, termino la prueba de conocimiento se hizo al respectiva evaluación y publicación de los mismos no se presentó ninguna reclamación sobre la prueba de conocimiento y el proceso está en la etapa de entrevista, una vez se desarrolle la entrevista tal como lo dice el cronograma en la resolución No 73, el cronograma establece para el día de hoy entrevista a todos los participantes admitidos para el día 16 publicación de resultados obtenidos y publicación de la lista de elegibles, en ese orden de ideas, contestarle la pregunta al Concejal FARLEY en ese orden de

ideas una vez publicado realizada la entrevista se hará el consolidado y se deberá hacer la publicación de lista de elegibles el cual debe salir según el cronograma el día de hoy una vez hecha la publicación tendrán el día de mañana para hacer las reclamaciones que consideren pertinentes y el día 18 de diciembre está programada la elección, ya en la elección es un mandato legal y constitucional de los Concejos municipales elegir personero, secretaria, para la elección cada Concejal será autónomo de definir a quien va elegir, cada Concejal dará la publicación y serán los Concejales los que tendrán que elegir, se deja la constancia de la Concejala LILIANA BAQUERO, en ese orden de ideas la convocatoria que se había realizado esta con base en esos términos, en la resolución No. 048 y la No. 73 me permito leer el título de la resolución No. 73 " por medio de la cual se modifica la resolución No. 46 de 2020 por medio de la cual se realiza una convocatoria para la elección de la secretaria general del Concejo municipal, les adelanto algo pero la idea es que estén ellas, para que la resolución, ponerlos en contexto, la resolución No. 48 y la No. 73 establecen que el procedimiento estará en cabeza de la mesa directiva la mesa directiva dispuso 1. Una elaboración de tres preguntas atendiendo una sentencia de la corte constitucional en las entrevistas que básicamente la misma metodología que utilizamos para la elección de personero, hacer una pregunta que se hizo en la selección de personero de manera general para poder contextualizar algunos temas porque lo que ha dicho la corte en la sentencia que se reviso es que las entrevistas no pueden ser con preguntas taxativas sino que simplemente las personas que hacen las entrevistas en este caso los Concejales simplemente se puedan hacer una idea general tanto de la personalidad, como de su perfil profesional del entrevistado, bajo ese concepto la mesa directiva preparo 3 preguntas que están en custodia de la secretaria general esa preguntas se destaparan aquí, lo que ha dispuesto la mesa directiva es que como hay una persona que se va conectar para la entrevista desde Buga y esperamos que las otras 4 hagan presencia, la idea es la misma metodología que se utilizó cuando estuvo el concurso de personero, las 4 que van a estar presencial las vamos a dejar en la oficina de la presidencia e iniciaríamos la entrevista con la que está conectada de manera virtual, se les da un máximo de tres minutos la que va pasando le hacemos las tres preguntas de una vez y así hasta agotar las 5 entrevistadas, en la calificación está dispuesto la resolución que es en números enteros de 1 a 100 como se hizo en el tema de personero es prácticamente la misma metodología el mismo sistema de calificación no hay que utilizar decimales, cero seria si no está presente la entrevistada, igual el Concejal puede dejar queda dentro de la hoja de vida la evaluación que se va entregar está el cuadro de observaciones para que el Concejal si desea escribir algunas observaciones en las cuales sustente su calificación si el Concejal no quiere simplemente da la calificación de cada una de las

5 participantes y no está obligado a que tenga que dejar alguna observación esa es más o menos la metodología.

Pasando al planteamiento que hizo el Concejal JHONNY STEVENSON GIRALDO decirle que el concurso de Personero ya les había manifestado que teníamos la propuesta financiera de la ESAP que estaba en treinta y dos millones cuatrocientos ochenta y cinco mil pesos, la solicitud de la ESAP fue resulta favorablemente la ESAP nos pidió que hiciéramos todo el proceso contractual a través de la plataforma secop dos, hemos venido haciendo esa implementación no es fácil hay que enviarlo a Colombia compra eficiente, una solicitud ya se hizo ellos la devolvieron diciendo que tocaba subsanar algunos elemento que faltaban se subsanaron, luego la ESAP y la plataforma volvieron e hicieron un requerimiento de otro documento y todavía no nos han habilitado con la plataforma Secop dos en ese entendido la comunicación que hemos tenido permanente con la ESAP, ustedes bien lo saben en el meta el único municipio de tercera categoría es Acacias, los demás de cuarta, quinta y sexta creo que ellos ya están adelantando concurso, a Acacias nos tienen incluidos en una plataforma de concurso con capitales estaríamos con Armenia, Manizales, con capitales al mismo nivel es lo que nos han dicho ellos, la ESAP nos ha tenido un poco de paciencia y nos han dicho que están esperando, eso iba hasta antier, antes de ayer ya la ESAP en vista que habían inconvenientes con el Secop II talvez en decisión administrativa decidido en Bogotá de la ESAP habilitar el Secop I, en vista que había inconvenientes que el secop II no agilizaba para que los Concejos pudieran hacer su inscripción a la plataforma entonces la ESAP decidió habilitar el Secop I en ese orden de ideas inmediatamente ayer procedimos a firmar los documentos y enviarlos a la ESAP, el certificado de disponibilidad presupuestal todo lo que requiere un contrato de esta modalidad de contratación directa ya fueron enviados a la ESAP es decir Concejal JHONNY GIRALDO que en este momento los papeles están en manos de la ESAP los tienen ya firmados y refrendados para que no los devuelvan así ya quedaría para que la ESAP proceda con el concurso hasta ahí va la etapa, también en ese tema les adelanto en el tema de personero para el día de ayer estaba programado una audiencia pública en la procuraduría general de la nación de una demanda de nulidad y restablecimiento de derecho que instauraron contra el Concejo municipal Raúl el instauro ante la procuraduría una conciliación administrativa estaba programada para ayer 15, el Concejo municipal se enteró a través de las redes sociales más exactamente del conuco de Gilberto Díaz quien publicaba esos, nosotros llamamos a la procuraduría y hablamos directamente con la Dra. Adriana Gutiérrez Hernández, hablamos con ella y efectivamente le hicimos saber que nunca fuimos notificados para esa audiencia en ese orden de ideas la procuradora nos manifestó a través del jurídico

que ella creía y suponía que la alcaldía había notificado los canales de información de la alcaldía hacia el Concejo no fluyeron, entonces le dijimos a la procuradora que jamás fuimos notificados en ese orden de ideas la procuradora decidió cancelar la audiencia quedo de paso aprovecho para notificar al presidente electo para el día 4 de enero deberá el presidente asistir a esa audiencia en la cual el concursante Raúl solicita una indemnización de setenta millones de pesos aproximadamente por daños y perjuicios obviamente que cuando el solicito eso no había salido la sentencia que salió favorable para el Concejo y la posición de una vez para informarle al presidente Víctor Ramos que la posición de esta mesa directiva es no entrar a desarrollar ninguna negociación porque ya hay una sentencia que fue muy clara que es la sentencia que acaba de proferir el tribunal administrativo del meta donde negó una solicitud de perdida de envestidura contra los conejales del municipio de Acacias en el entendido que supuestamente habíamos destinado de manera indebida para el pago del personero en esa sentencia hay dos apartes muy importantes Concejal RAMOS para que os tenga en cuenta en ese día de la audiencia 1. El ministerio público fue muy claro y muy tajante en dos aspectos en su intervención en esa sentencia, 1. Manifestó y dejo claro que el concurso como estaba debía acabarse en esta sentencia ya el procurador fue muy claro y dijo que el concurso debía acabarse por todos los vicios de ilegalidad aquí vale la pena hacer un reconocimiento al trabajo porque durante la sentencia se hace un acápite muy importante al trabajo investigativo que hizo el Concejal FARLEY y JHONNY y el Concejal BASTO ahí a sentencia deja en claro de que hubo una falsedad en documento, en ese orden de ideas el procurador deja en claro en su intervención de que el concurso debería acabarse para que lo tengan en cuenta el día de la audiencia en la etapa que se encontrara es decir que así estuviese lista de elegibles cosa que nunca sucedió nunca se publicó, nunca salió y nunca hubo consolidado esos dos aspectos es importantes que los tengan claro y el procurador en esa sentencia afirma y ratifica que el concurso debería acabarse en la etapa que se encontrara porque uno de los argumentos del Dr. Raúl es de que había lista de elegibles y que él tenía un derecho adquirido, la procuraduría deja muy claro que el concurso debería acabarse en la etapa que se encontrara y a renglón seguido dice el procurador interviniente dice de haberse materializado el concurso y haberse elegido es decir que si hubiéramos elegido al Dr. Raúl quien ahora está pidiendo una indemnización que si hubiésemos materializado cabria una demanda de nulidad contra la elección como ya ha sucedido en muchos casos del país con esta misma empresa y por su puesto con los efectos colaterales contra los Concejales que hubiésemos hecho la elección en su momento como se quiso que se hiciera el día 10 de enero es decir el procurador en esa intervención en esa sentencia es muy claro es muy tajante y le da la razón a los 11 Concejales que en su momento a través de la resolución No, 25 del mes de mayo

que revoco la resolución No. 112 del 2019 actuamos de manera con estricto apego a la ley en esa misma sentencia ahora que dijo el tribunal que es muy importante recordar también para que lo manifiesten en la audiencia Concejal VICTOR y es que primero fue audiencia de sala plena es decir, 5 magistrados fueron los que de manera unánime tomaron la decisión que dijeron los magistrados en esa sentencia muy claramente que revisado toda la actuación 1. Es claro que no hubo una destinación indebida de recursos si ya os magistrados dicen con apego a la ley y ya hubo una sentencia que no hubo una destinación indebida de recursos mal hace ahora el señor Raúl a reclamar una indemnización de setenta millones de pesos como primera medida, 2.que dijeron los magistrados se observa dentro del proceso palabra utilizadas por la magistrada un amplio despliegue por querer hacer las cosas con estricto apego a la ley es claro Concejal VICTOR que con base en esa sentencia el día 4 de enero no tiene ninguna razón ningún fundamento la reclamación que está haciendo el señor Raúl y por lo tanto de una vez de parte de esta mesa directiva se rechace cualquier tipo de conciliación en aras de que la sentencia es muy clara y les dio la razón a los 11 Concejales que en su momento tomamos la decisión de revocar un proceso de concurso que ya no lo decimos nosotros ahora si hay una sentencia se hizo con serias falencias que ya están demostradas dentro el proceso en ese orden de ideas queda claro que el actuar del Concejo ha sido así, en aras que las concursantes ya retomando el punto del orden del día estaban convocadas para las 8:40 a.m.

Hace uso de la palabra el Concejal VICTOR JULIO RAMOS buenos días a los presentes, señor presidente es para dejar una claridad y quede tal cual como lo voy a informar en el acta, sobre el tema de elección de secretaria con relación al nombramiento y elección de la secretaria general del Concejo municipal el artículo 50 del reglamento interno de esta Corporación municipal manifiesta "siempre que se haga una elección después de haberse iniciado un periodo se entiende hecha solo para el resto del periodo en curso como puede llegar a ser aquí el presente ejercicio". esa era mi claridad.

Hace uso de la palabra el presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, tal cual como lo manifesté las niñas están citadas para las 8:45 am, son las 8:10 am vamos a decretar un receso de 30 minutos con eso nos empalmamos de una vez con ellas para iniciar la etapa de la entrevista se le solicita a Alan enviarle el enlace a la niña de Buga y a las 8: 45 am se levanta el receso.

Siendo las 8:50 se levanta el receso, se le solicita a la secretaria (e) hacer el llamado a lista y verificación del quorum.

CONCEJALES PRESENTES
JHONNY ANDRES BASTO HERNANDEZ
WILMER ORLANDO CARVAJAL OLAYA
FARLEY CARVAJAL REY
ANDRES MAURICIO CHAVEZ QUEVEDO
ZULMA YOLIMA DIAZ DIAZ
JOSE JAIR ECHEVERRY OSPINA
JHONNY STEVENSON GIRALDO ARAGON
ORLANDO GRANADOS ACEVEDO
ARNOLD MAURICIO PINILLA TRIANA
VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS
HECTOR REYES RATIVA
LUIS CARLOS RICHAR RODRIGUEZ CORTES
GILDARDO SANTOS CHAPARRO
ALEXANDER VALERO

Hecho el llamado a lista con la asistencia de catorce (14) Concejales, se le informa al presidente que hay quórum para deliberar y decidir.

El presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, solicita a la secretaria general (e) confirmar el punto del orden del día.

TERCER PUNTO: ENTREVISTA A LAS ASPIRANTES ADMITIDAS EN LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCION DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS VIGENCIA 2021. Hace uso de la palabra el presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO saluda a la comunidad presente, se permite hacer el respectivo llamado a lista de las aspirantes Katherine Arenas Álvarez, Lizet Catherine Rodríguez Prieto, Patricia Morera Anaya, Johana Patricia Ovalle Rojas, Angélica Alejandra Ordoñez Osorio, estando las 5 candidatas presentes me voy a permitir explicarles y ponerlas en contexto la metodología y el procedimiento, se deja la constancia de la asistencia de la Concejala LILIANA BAQUERO me permito ponerlas en contexto de la metodología o el proceso que se va desarrollar para la entrevista son 5 candidatas por reglamento del concurso estaba dispuesto que la mesa directiva diseñara el procedimiento del mismo, lo que ha dispuesto la mesa directiva es lo siguiente, se van a desarrollar 3 preguntas las cuales ustedes deberán contestar de manera simultánea, haremos un sorteo para que de ustedes las cuatro quien va de primeras por disposición y como la niña Angélica

Alejandra esta de manera virtual a ella le vamos a hacer la entrevista de primeras porque si ella queda de segundas o terceras escucharía las preguntas y se puede llevar una idea más contextualizada de las preguntas, ustedes las 4 que están presencial van a ingresar a la oficina de la presidencia ahí van a estar las cuatro ahí se les va poner música para que no puedan escuchar el ambiente del recinto y puedan escuchar las preguntas y las vamos a ir llamando una por una después de Angélica a medida que van contestando ahí se pueden ubicar en las sillas y pueden escuchar las demás respuestas o la que se quiera retirar lo puede hacer no van a poder tener celulares ahí adentro, sin embargo Lucila que es asistente del Concejo las va a acompañar en la oficina, cuando estén adentro no pueden manipular celulares porque la entrevista está siendo trasmitida por Facebook lite no pueden tener sus celulares porque se podrían conectar y podrían ver cuáles son la preguntas, son 3 preguntas, yo les leo la primera pregunta y ustedes tienen un máximo de 3 minutos para contestarla pueden contestarla en un minuto o en dos pero máximo tres una vez ustedes la contesten ya pueden decir ya termine o siguiente pregunta como gusten y les formulo de una vez la siguiente pregunta, y a los Concejales se les va entregar la hoja de evaluación cada Concejal va tener una planilla de estas, el Concejal tiene un cuadro de observaciones si el Concejal quiere hacer uso de ese cuadro puede colocar las observaciones que considere y al frente el Concejal le dará la calificación, la calificación tiene que ser de 1 a 100 números enteros no puede haber decimales y tampoco Concejales pueden haber tachones ni enmendaduras, si algún Concejal dentro del desarrollo de la evaluación considera que tuvo algún inconveniente o quiere corregir algo durante el desarrollo de la evaluación me dice y le cambiamos la planilla y anulamos la que tiene, una vez termine la evaluación y el Concejal entregue la planilla se le entregara en custodia a la secretaria y ella lo hará al respectivo al asesor jurídico que es quien está llevando todo el proceso esas son las condiciones, vamos a proceder al sorteo para ustedes las 4 para que se ubiquen en la oficina de presidencia y así las vamos llamando una por una.

Cada Concejal firma su planilla, la calificación de cada Concejal es privada, cada Concejal entrega su evaluación, si algún Concejal o alguna de las niñas quiere conocer su resultado ella realizara su oficio ella diciendo quiero saber que me califico cada Concejal yo no puedo conocer usted que califico y que observaciones le hizo cada uno porque es privado es su pensamiento y es lo que dice la sentencia que revisamos es la impresión que se llevó de cada una de las niñas.

Hace uso de la palabra el Concejal FARLEY CARVAJAL REY, presidente en aras de la transparencia me gastaría que quedaran plasmados como siempre se ha hecho por

lo menos la elección de presidente de una vez se hizo públicamente aquí que quede evidenciado los votos porque me asalta la preocupación y tengo derecho a ello de que una vez sean guardados los votos pueda suceder alguna situación no trasparente, en aras de la trasparencia que se hiciera aquí una verificación de cada uno de los votos, porque irse halla a mí me generaría dudas me gustaría que se diera un poco de trasparencia ene se tema.

Interviene el presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, les recuerdo que no estamos votando no hay votos individuales estamos es calificando son dos cosas muy diferentes, si estuviésemos votando como se hace unas mesa directiva pues claro habría una comisión escrutadora estamos es calificando y es el mismo proceso que se hizo para la elección de Personero tal cual la misma metodología el presidente procede a llamar a las aspirantes Lizet Katherine, Patricia Morera, Johana Patricia Ovalle y Katherine Arenas son las 4 que están presentes, ya dijimos que la que va de primeras es Angélica.

Hace uso de la palabra el Concejal JHONNY STEVENSON GIRALDO, para buscarle una salida a los que plantea el Concejal FARLEY CARVAJAL yo haría la proposición como lo reza el reglamento interno de que la plenaria del Concejo municipal es la máxima instancia de la Corporación que dentro de ese proceso de verificación de los votos de la evaluación que se va realizar el día de hoy pus además de la mesa directiva se integren otros corporados para que ele generen tranquilidad al Concejal FARLEY CARVAJAL.

Hace uso de la palabra el presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, no hay ningún problema Concejal hay una comisión accidental que está encargada de la verificación no hay ningún inconveniente, en este momento declaramos la suficiente ilustración en materia de la entrevista. Me permito irlas llamando y vienen y san un papelito para saber en qué turno les toco. El nombre que saque va de segundas, el orden de intervenciones seria primera Angélica Alejandra, segunda Johana patricia Ovalle, tercera Patricia Morena Anaya, cuartas Katherine Arenas Álvarez Lizet Katherine Rodríguez Prieto, hechas todas las aclaraciones, las observaciones se le solicita a las 4 niñas que ingresen a la oficina de presidencia. Se le solicita a Dignory que le entregue a cada Concejal el cuadro de evaluación.

Se le concede el uso de la palabra al Concejal FARLEY CARVAJAL REY, presidente en aras de la transparencia y acogiendo sus planteamientos que posibilidad habría lo hago a manera de proposición con todo respeto de que 3 Concejales distintos y

diferentes a los enunciados en la comisión accidental pudieran firmar los 15 votos de cada Concejal en aras de la transparencia para que no haya lugar a equivocos de que es que después a que entregamos los votos alguien lo quiso cambiar después en la urna entonces tres Concejales llevan la firma diferente a los otros 3 que están en la comisión y pienso que so la daría un sello de seguridad.

Interviene el presiente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, le digo Concejal que ya las reglas del concurso estaban prediseñadas en la resolución, entonces cualquier modificación puede contaminar el concurso hay na comisión accidental que es la encargada de todo el procedimiento, sin más preámbulos y no hay lugar a más intervenciones porque en este momento Concejales vamos a iniciar con las preguntas, se procede a llamar a ANGÉLICA ALEJANDRA ORDOÑEZ se le indica son 3 preguntas tiene 3 minutos para contestar máximo cada pregunta, la primera pregunta dice así:

¿DESDE SU EXPERIENCIA DE VIDA PERSONAL Y PROFESIONAL COMO PODRÍA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVO DEL CONCEJO DE ACACIAS?.

Se le dan 3 minutos.

Hace su intervención ANGELICA ALEJANDRA ORDOÑEZ saluda a los presentes, considero que desde mi experiencia de vida y el de mi experiencia profesional teniendo en cuenta que en este momento trabajo en una personería municipal que es un ente de control y que tengo formación como trabajadora social considero que podria contribuir a la Corporación a través de la proyección de esa apuesta participativa que se tiene, estuve observando que dentro su misión y su visión se proyecta mucho el hecho de trabajar con trasparencia apostando a la democracia y a la participación y considero que desde los saberes que he adquirido en mi proceso porque también en un consejo de juventud y me he forjado dentro de esos principios que se apuesta en la Corporación considero que podría ayudar y haciendo un análisis de todo el tema del acuerdo 427 que tiene la Corporación identifique que dentro de las comisiones hace falta el tema de la actualización a la adición de la comisión de la equidad de la mujer que contemplan la ley 1981 y considero que como profesional del trabajo social podria contribuir a los aportes que pueda dar al honorable Concejo para que se pueda establecer este tema en la proyección de la equidad de la mujer que es algo muy importante. Gracias.

El presidente ORLANDO GRANADOS ACEVEDO procede a realizarle la segunda pregunta:

EL CONCEJO MUNICIPAL ES UNA CORPORACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA DE ELECCIÓN POPULAR Y SU PRINCIPAL FUNCIÓN ES LA DEL EJERCICIO DEL CONTROL POLÍTICO A LA ADMINISTRACIÓN, LA PREGUNTA SERÍA ¿CUÁL ES SU PERCEPCIÓN SOBRE LA IMAGEN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACIAS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES BUENA, MALA, REGULAR Y PORQUE?

Hace uso de la palabra ANGELICA ALEJANDRA ORDOÑEZ responde así: considero que el Concejo municipal de Acacias tiene una buena gestión y una buena ejecución de sus funciones y una videncia es este proceso que está desarrollando porque aunque como ustedes saben yo vivo en el departamento del valle y considero que el hecho que se permita que una persona que vive en otro departamento tenga la posibilidad de presentar una entrevista virtual y que se le brinde esa trasparencia y esa se seguridad de que hay una garantía para que pueda participar con confianza eso es una muestra de que eso es un proceso eficiente y frente al tema de control político considero que es algo importante y se contempla también en el ejercicio del reglamento interno del Concejo porque evidencia que en realidad hay un compromiso y algo que puedo resaltar en ese control político es que vincula mucho el hecho de que las personas también puedan vincularse a ese ejercicio de control y vigilancia que se hace a la administración y a la gestión pública, gracias.

El presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, procede a realizar la tercera pregunta:

EN EL EVENTO QUE TUVIESE QUE TOMAR UNA DECISIÓN ADMINISTRATIVA SOBRE UNA MISMA ORDEN IMPARTIDA 1. POR EL EJECUTIVO MUNICIPAL ALCALDE Y LA OTRA POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN LA PREGUNTA ES ¿CUÁL SERÍA SU DECISIÓN Y/O INCLINACIÓN FRENTE A ACATAR UNA DE LAS DOS Y POR QUÉ?

Hace uso de la palabra ANGELICA ALEJANDRA ORDOÑEZ responde así: bueno creo que mi decisión estaría orientada hacia la orden que me de él presidente del Concejo porque es la cabeza de la Corporación y la persona que es mi jefe inmediato teniendo en cuenta el compromiso que tengo al adquirir el cargo y lo que contempla dentro del reglamento interno pues tendría que tener esa pertenencia y ese compromiso con la responsabilidad que adquirí como secretaria del Concejo pues debo tener esa

responsabilidad para ejercer mis funciones y responder a esas órdenes que se me dan desde el Concejo y desde el presidente que es mi jefe inmediato, gracias.

Hace uso de la palabra el presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, muy amable de esta manera Angélica gracias y si quiere permanecer conectada bien pueda durante el desarrollo de las demás compañeras, ahora llamamos a JOHANA PATRICIA OVALLE.

El presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO saluda a Johana, tal como se le explico se le van a formular 3 preguntas le formulo la primera pregunta cuando usted considere la según da y luego la tercera, la primera pregunta dice:

¿DESDE SU EXPERIENCIA DE VIDA PERSONAL Y PROFESIONAL COMO PODRÍA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVO DEL CONCEJO DE ACACIAS?.

Hace uso de la palabra JOHANA PATRICIA OVALLE responde así: considero que tengo conocimientos ampliaos en Excel es una forma de poder organizar toda la información, he trabajado en empresas donde siempre se generan informes quincenales, mensuales por lo cual puedo tomar la información organizarla para presentarla de una mejor manera a la persona a ustedes el Concejo como la estén solicitando, personalmente considero que cuento con estas habilidades para poder aplicar al cargo.

El presidente ORLANDO GRANADOS ACEVEDO procede a realizarle la segunda:

EL CONCEJO MUNICIPAL ES UNA CORPORACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA DE ELECCIÓN POPULAR Y SU PRINCIPAL FUNCIÓN ES LA DEL EJERCICIO DEL CONTROL POLÍTICO A LA ADMINISTRACIÓN, LA PREGUNTA SERÍA ¿CUÁL ES SU PERCEPCIÓN SOBRE LA IMAGEN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACIAS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES BUENA, MALA, REGULAR Y PORQUE?

Hace uso de la palabra JOHANA PATRICIA OVALLE responde así: personalmente nunca había aplicado a ningún cargo público creo que es una percepción buena normalmente siempre tenemos que mejorar, siempre hay que hacer las cosas mejor normalmente la gente siempre piensa que nada está bien a nadie le gustan las cosas a mi parecer creo que ha sido buena ha venido desarrollando buenas labores se ha visto personalmente creo que sí.

El presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, procede a realizar la tercera pregunta:

EN EL EVENTO QUE TUVIESE QUE TOMAR UNA DECISIÓN ADMINISTRATIVA SOBRE UNA MISMA ORDEN IMPARTIDA 1. POR EL EJECUTIVO MUNICIPAL ALCALDE Y LA OTRA POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN LA PREGUNTA ES ¿CUÁL SERÍA SU DECISIÓN Y/O INCLINACIÓN FRENTE A ACATAR UNA DE LAS DOS Y POR QUÉ?

Hace uso de la palabra JOHANA PATRICIA OVALLE responde así: acataría la orden que me dan directamente del Concejo porque son los que harán el análisis me dicen este es el proceso que tiene que hacer es el que se debe acatar, si el alcalde me está dando una orden en mis conocimientos que tengo creería primero debe haber pasado aquí por un con censo para que se pueda realizar.

Hace uso de la palabra el presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, muy amable JOHANA, si gusta puede sentarse en las graderías o si gusta retirarse también lo puede hacer llamamos a PATRICIA MORERA ANAYA, le voy a formular 3 preguntas le formulo la primera tiene 3 minutos para contestar tan pronto me diga le formulo la segunda y luego la tercera. la primera pregunta dice así:

¿DESDE SU EXPERIENCIA DE VIDA PERSONAL Y PROFESIONAL COMO PODRÍA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVO DEL CONCEJO DE ACACIAS?.

Se le dan 3 minutos.

Hace uso de la palabra la señora PATRICIA MORERA ANAYA, saluda a los presentes, en cuanto a mi experiencia de vida personal me considero muy afortunada, tengo una familia muy bonita uno de mis dos hijos tengo un niño con síndrome de Down mis hijos me han enseñado a salir adelante mis hijos son mi motor mis hijos me han enseñado a ser una gran persona principalmente mi niño especial por el siento que estoy aquí frente a ustedes para muchas familias es vergonzoso tener un niño especial que pena no lo muestro no le digo a nadie que tengo un niño especial pero para nosotros no señores Concejales es un orgullo él nos trasmite mucha alegría mucho amor, ternura, en cuanto a mi vida profesional señores Concejales soy técnica en administración pública, labore en la alcaldía de Acacias casi durante 8 años en la

oficina de recurso humano la oficina de personal tengo conocimiento señores Concejales sobre actos administrativos de nombramiento, tengo conocimiento de vacaciones, cesantías tengo conocimiento sobre derechos de petición, archivo, conocimiento sobre certificaciones laborales, insuficiencias de personal, tengo c conocimientos sobre afiliaciones a la seguridad social y también se por qué y para que se hace un manual de funciones.

El presidente ORLANDO GRANADOS ACEVEDO procede a realizarle la segunda pregunta:

EL CONCEJO MUNICIPAL ES UNA CORPORACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA DE ELECCIÓN POPULAR Y SU PRINCIPAL FUNCIÓN ES LA DEL EJERCICIO DEL CONTROL POLÍTICO A LA ADMINISTRACIÓN, LA PREGUNTA SERÍA ¿CUÁL ES SU PERCEPCIÓN SOBRE LA IMAGEN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACIAS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES BUENA, MALA, REGULAR Y PORQUE?

Hace uso de la palabra la señora PATRICIA MORERA ANAYA, mi percepción es buena el Concejo municipal a lo largo del año ha adelantado de vetes de control político en la lucha muy importantes muchos por favor uno de ellos en la lucha contra la corrupción vemos el caso de la alimentación escolar, vemos el caso de los mercados durante la pandemia considero señores Concejales que la imagen que tiene el Concejo municipal ante la opinión pública es muy buena.

El presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, procede a realizar la tercera pregunta:

EN EL EVENTO QUE TUVIESE QUE TOMAR UNA DECISIÓN ADMINISTRATIVA SOBRE UNA MISMA ORDEN IMPARTIDA 1. POR EL EJECUTIVO MUNICIPAL ALCALDE Y LA OTRA POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN LA PREGUNTA ES ¿CUÁL SERÍA SU DECISIÓN Y/O INCLINACIÓN FRENTE A ACATAR UNA DE LAS DOS Y POR QUÉ?

Hace uso de la palabra la señora PATRICIA MORERA ANAYA, realmente acataría la orden del presidente porque el presidente en este caso es el jefe inmediato mío además que el Concejo municipal es autónomo, el Concejo municipal es independiente de la administración municipal, lo considero así.

Hace uso de la palabra el presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, gracias, si gusta se puede sentar en las graderías o si desea se puede retirar bien pueda, llamamos a la cuarta aspirante KATERINE ARENAS ALVAREZ. Como les dije le voy a formular 3 preguntas tiene 3 minutos para contestarlas la primera pregunta es la siguiente:

¿DESDE SU EXPERIENCIA DE VIDA PERSONAL Y PROFESIONAL COMO PODRÍA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVO DEL CONCEJO DE ACACIAS?.

Hace uso de la palabra la señora KATERINE ARENAS ALVAREZ, podría aportar la eficiencia el liderazgo que debe tener una persona en este cargo podría ceñirme a los lineamientos que tiene el Concejo de manera interna, pero aportando en agilizar los procesos que quizás queden atascados contribuyendo de la mejor manera actuando con trasparencia para los fines que tenga el Concejo y desde mi liderazgo y desde lo que yo pueda aportar ciñéndome siempre a los lineamientos sería eso básicamente.

El presidente ORLANDO GRANADOS ACEVEDO procede a realizarle la segunda pregunta:

EL CONCEJO MUNICIPAL ES UNA CORPORACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA DE ELECCIÓN POPULAR Y SU PRINCIPAL FUNCIÓN ES LA DEL EJERCICIO DEL CONTROL POLÍTICO A LA ADMINISTRACIÓN, LA PREGUNTA SERÍA ¿CUÁL ES SU PERCEPCIÓN SOBRE LA IMAGEN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACIAS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES BUENA, MALA, REGULAR Y PORQUE?

Hace uso de la palabra la señora KATERINE ARENAS ALVAREZ, yo considero que el Concejo ha estado trabajando en lo que podido observar a estado trabajando en iniciar su periodo gestionando los proyectos a que haya lugar en aras de ayudar a la comunidad y en aras de poder garantizar que se obre con total trasparencia dentro del municipio que tanto la alcaldía como los diferentes entes institucionales pues se ciñan al reglamento y a las leyes y lo más importante es siempre obrar en pro de la comunidad y en pro del municipio.

El presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, procede a realizar la tercera pregunta:

EN EL EVENTO QUE TUVIESE QUE TOMAR UNA DECISIÓN ADMINISTRATIVA SOBRE UNA MISMA ORDEN IMPARTIDA 1. POR EL EJECUTIVO MUNICIPAL ALCALDE Y LA OTRA POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN LA PREGUNTA ES ¿CUÁL SERÍA SU DECISIÓN Y/O INCLINACIÓN FRENTE A ACATAR UNA DE LAS DOS Y POR QUÉ?

Hace uso de la palabra KATERINE ARENAS ALVAREZ siempre que una disparidad entre estas dos personas o entre estas dos entidades siempre debo estar ceñida a lo que la mesa del Concejo directivo en este caso el presidente del Concejo y de la Corporación me puedan indicar tengo que ir acorde a los lineamientos que este me indique porque haría parte de la Corporación no podría estar contrariando los deberes o las directrices que me imparta esta Corporación.

Hace uso de la palabra el presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, muchas gracias si puede sentarse en las graderías o si desea retirarse no hay ningún inconveniente, llamamos a nuestra quinta aspirante LICET KATERINE RODRIGUEZ PRIETO, seria 3 preguntas ya sabe las condiciones máximo 3 minutos puede contestarla en uno o dos como usted a bien lo considere, la primera pregunta es la siguiente:

¿DESDE SU EXPERIENCIA DE VIDA PERSONAL Y PROFESIONAL COMO PODRÍA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVO DEL CONCEJO DE ACACIAS?.

Hace uso de la palabra LICET KATERINE RODRIGUEZ saluda a los presentes, gracias por la oportunidad que nos brindaron básicamente mi vida laboral ha sido enfocada en el sector publico pienso que acá puedo obtener mayor experiencia, yo trabaje 4 años en la alcaldía del Dorado soy de halla y tengo la certeza de que todo lo que yo he adquirido personal y profesionalmente ha sido lo que puedo ahorita en este ámbito trasmitirles.

El presidente ORLANDO GRANADOS ACEVEDO procede a realizarle la segunda pregunta:

EL CONCEJO MUNICIPAL ES UNA CORPORACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA DE ELECCIÓN POPULAR Y SU PRINCIPAL FUNCIÓN ES LA DEL EJERCICIO DEL CONTROL POLÍTICO A LA ADMINISTRACIÓN, LA PREGUNTA SERÍA ¿CUÁL ES

SU PERCEPCIÓN SOBRE LA IMAGEN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACIAS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES BUENA, MALA, REGULAR Y PORQUE?

Hace uso de la palabra LICET KATERINE RODRIGUEZ muy buena desde mi concepto personal tuve la oportunidad de estudiar el reglamento interno y dentro de ello hablaban que la Corporación maneja tanto acuerdos, decretos, ordenanzas y toda normatividad que puede ser esencial para la comunidad el pueblo, ellos trabajan en pro de los beneficios mancomunadamente con la alcaldía municipal y son unos beneficios muy importantes, la plenaria que es conformada por todos pueden realizar dentro de sus funciones digamos la lectura de los proyectos de acuerdo y decidir que está bien y que es apropiado para el pueblo, me parece que es algo excelente, gracias.

El presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, procede a realizar la tercera pregunta:

EN EL EVENTO QUE TUVIESE QUE TOMAR UNA DECISIÓN ADMINISTRATIVA SOBRE UNA MISMA ORDEN IMPARTIDA 1. POR EL EJECUTIVO MUNICIPAL ALCALDE Y LA OTRA POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN LA PREGUNTA ES ¿CUÁL SERÍA SU DECISIÓN Y/O INCLINACIÓN FRENTE A ACATAR UNA DE LAS DOS Y POR QUÉ?

Tiene 3 minutos.

Hace uso de la palabra LICET KATERINE RODRIGUEZ pienso que como lo dije anteriormente esto es algo de trabajar mancomunadamente en equipo en realidad las cosa y las decisiones antes que las tome al alcalde deben pasar por la Corporación y debe ser una elección popular y pienso que trabajando en equipo se llegan a mejores resultados, gracias.

Hace uso de la palabra el presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, de esta manera damos por finalizada la participación de las 5 candidatas a ser secretaria general para la vigencia 2021, Katherine si gusta se puede sentar halla en las graderías o si ustedes ya gustan se pueden retirar la publicación de los resultados como está según el cronograma se hará en horas de la tarde una vez se tenga un consolidado, a partir de este momento los Concejales cuentan con 5 minutos para que hagan la respectiva evaluación, por favor secretaria recogemos las evaluaciones e el sobre de custodia lo sellamos y se le entrega al jurídico para hacer la respectiva

consolidación, a partir de este momento cuentan con 5 minutos para que hagan la evaluación.

CUARTO PUUNTO: PROPOSICIONES Y VARIOS. El Concejal MAURICIO CHAVEZ solicita que se sesione el 18 a las 9:00 am

El presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, para sesionar el viernes 18 a las 9 am se abre la discusión sobre la proposición presentada por el Concejal CHAVEZ, sigue abierta la proposición aviso que se va cerrar queda cerrada, se abre la votación aviso que se va cerrar, queda cerrada siendo aprobado.

No habiendo más proposiciones y varios, agotado el orden del dia, se da por terminada la sesión del día de hoy miércoles (16) de diciembre del 2020, siendo las 9:36 a.m., se convoca el viernes 18 de diciembre a las 9:00 am.

ORLANDO GRANADOS ACEVEDO
Presidente Concejo Municipal

DIGNORY CLAVIJO ORTIZ
Secretaria General (e) Concejo Mpal

L. R. R.
Elaboró y digitó: Lucila Rodríguez Rodríguez
Contratista

8:10 recoge inicia

77

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS	CÓDIGO: PGA-200-01.04
		FECHA: OCTUBRE 2015
	MODELO ESTANDAR DE CONTL INTERNO - MECI GESTION DOCUMENTAL	VERSIÓN: 01

SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS MEDIANTE DECRETO No. 235 DE DICIEMBRE 11 DE 2020.

MIÉRCOLES DIECISEIS (16) DE DICIEMBRE DE 2020

ORDEN DEL DÍA

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA
3. ENTREVISTA A LAS ASPIRANTES ADMITIDAS EN LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACIAS, 2021.
4. PROPOSICIONES Y VARIOS.

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS	CÓDIGO: PGA-200-01.04
		FECHA: OCTUBRE 2015
	MODELO ESTANDAR DE CONTL INTERNO - MECI GESTION DOCUMENTAL	VERSIÓN: 01

SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS MEDIANTE DECRETO No. 235 DE DICIEMBRE 11 DE 2020.

MIÉRCOLES DIECISEIS (16) DE DICIEMBRE DE 2020

CONTROL DE ASISTENCIA

LILIANA MARCELA BAQUERO TORRES

JHONNY ANDRES BASTO HERNANDEZ

WILMER ORLANDO CARVAJAL OLAYA

FARLEY CARVAJAL REY

ANDRES MAURICIO CHAVEZ QUEVEDO

ZULMA YOLIMA DIAZ DIAZ

JOSE JAIR ECHEVERRY OSPINA

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS	CÓDIGO: PGA-200-01.04
		FECHA: OCTUBRE 2015
	MODELO ESTANDAR DE CONTL INTERNO - MECI GESTION DOCUMENTAL	VERSIÓN: 01

SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS MEDIANTE DECRETO No. 235 DE DICIEMBRE 11 DE 2020.

MIÉRCOLES DIECISEIS (16) DE DICIEMBRE DE 2020

CONTROL DE ASISTENCIA

JHONNY STEVENSON GIRALDO ARAGON

ORLANDO GRANADOS ACEVEDO

ARNOLD MAURICIO PINILLA TRIANA

VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS

HECTOR REYES RATIVA

LUIS CARLOS RICHAR RODRIGUEZ CORTES

GILDARDO SANTOS CHAPARRO

ALEXANDER VALERO

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS	CÓDIGO: PGA-200-01.04
		FECHA: OCTUBRE 2015
	MODELO ESTANDAR DE CONTL INTERNO - MECI GESTION DOCUMENTAL	VERSIÓN: 01

ENTREGA FOTOCOPIAS PROYECTO DE ACUERDO No. 626 DE 2020, CON EXPOSICION DE MOTIVOS, CONSIDERANDOS, ANEXOS.

LILIANA MARCELA BAQUERO TORRES

JHONNY ANDRES BASTO HERNANDEZ

WILMER ORLANDO CARVAJAL OLAYA

FARLEY CARVAJAL REY

ANDRES MAURICIO CHAVEZ QUEVEDO

ZULMA YOLIMA DIAZ DIAZ

JOSE JAIR ECHEVERRY OSPINA

JHONNY STEVENSON GIRALDO ARAGON

ORLANDO GRANADOS ACEVEDO

ARNOLD MAURICIO PINILLA TRIANA

VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS

HECTOR REYES RATIVA

LUIS CARLOS RICHAR RODRIGUEZ CORTES

GILDARDO SANTOS CHAPARRO

ALEXANDER VALERO

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS	CÓDIGO: PGA-200-01.04
		FECHA: OCTUBRE 2015
	MODELO ESTANDAR DE CONTL INTERNO - MECI GESTION DOCUMENTAL	VERSIÓN: 01

ENTREGA FOTOCOPIAS PROYECTO DE ACUERDO No. 625 DE 2020, CON EXPOSICION DE MOTIVOS, CONSIDERANDOS, ANEXOS.

LILIANA MARCELA BAQUERO TORRES

JHONNY ANDRES BASTO HERNANDEZ

WILMER ORLANDO CARVAJAL OLAYA

FARLEY CARVAJAL REY

ANDRES MAURICIO CHAVEZ QUEVEDO

ZULMA YOLIMA DIAZ DIAZ

JOSE JAIR ECHEVERRY OSPINA

JHONNY STEVENSON GIRALDO ARAGON

ORLANDO GRANADOS ACEVEDO

ARNOLD MAURICIO PINILLA TRIANA

VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS

HECTOR REYES RATIVA

LUIS CARLOS RICHAR RODRIGUEZ CORTES

GILDARDO SANTOS CHAPARRO

ALEXANDER VALERO

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS	CÓD: PGD. 200-08.01 FECHA: OCTUBRE 2015
	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI GESTION DOCUMENTAL	VERSIÓN: 01

Acacías, 4 de diciembre de 2020

Señor
ORLANDO GRANADOS ACEVEDO
PRESIDENTE - CONCEJO MUNICIPAL DE ACACIAS
Ciudad,

Cordial saludo:

Con el ánimo de dar cumplimiento a la designación realizada en la resolución N. 048 expedida por la **MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACIAS – META**, en su articulo quinto, Designación de la comisión accidental para la verificación de los requisitos exigidos.

Nos permitimos puntualizar lo siguientes respecto a los aspirantes:

1. Aspirante **Patricia Morera Anaya, c.c.** 55.058.856, cumple con el requisito de titulo Bachiller Académico.

- Anexa soportes de experiencia laboral así:

Certificación laboral como Técnico operativo código 314 Grado uno, Nivel técnico: Inicio 19 de enero de 2015 al 05 de octubre de 2020 - Certificado CPS DOAC 356 de 2014 Apoyo a actividades archivísticas: inicio 17 de octubre de 2014 al 31 de Diciembre de 2014. Certificado CPS DOAC 133 DE 2013 APOYO TECNICO PARA EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO, ESCANEO SISTEMATIZACION Y ARCHIVO: del 08 de marzo de 2013 al 7 de junio de 2013, Certificado CPS DOAC 189 de 2013: LEVANTAMIENTO SCANEO, SISTEMATIZACION Y ARCHIVO: DE 18 de junio de 2013 al 31 de diciembre de 2013 - CERTIFICACION AISLADORES DE COLOMBIA LTDA, Cargo Asistente administrativo 15 de Enero de 2012 al 20 de diciembre de 2012 - CERTIFICACION MANTENIMIENTO Y CONTROLES DEL LLANO E.U. CARGO. Técnico Administrativo grado I. del 11 de enero de 2011 al 14 de mayo de 2011 - CERTIFICACION MANTENIMIENTO Y CONTROLES DEL LLANO E.U. cargo: Técnico Administrativo Grado I, del 18 de mayo de 2010 al 31 de diciembre de 2010.

- Anexa los siguientes soportes de estudios:

Técnico en administración pública y gobierno - Curso secretariado ejecutivo de gerencia - Curso en contabilidad básica - Curso canales de participación Foros PQR, chat - Estrategia cero papel - Estrategia tecnología Verde - Curso herramientas de interacción - Curso Manejo del Sitio Web - Curso accesibilidad y usabilidad - Seguridad de la Información - Curso correcto uso de los equipos de cómputo - Interoperabilidad y Colaboración interinstitucional - Curso Datos abiertos - Curso ley 1712 de 2014 - Tramites y Servicios Municipales en Línea - Curso reciclaje tecnológico - Curso sistema integrado de gestión - Curso virtual pasivocol 5,0 -Seminario Encuentro Regional de Servidores públicos - Seminario Participación ciudadana y Derechos Humanos - Seminario Gestión Documental -

2. Aspirante **Katherine Arenas Álvarez, c.c.** 1.030.584.899 cumple con el requisito de título Bachiller Académico.

- Anexa soportes de experiencia laboral así:

Certificación laboral como Coordinadora operativa y asesora Jurídica del 03 de Mayo de 2016 (fecha expedición de la certificación 16 de Marzo de 2020) - Certificación Laboral Manpower - Cargo Asistente Administrativo desde 05 de enero de 2014 al 22 de Junio de 2015 - Certificación RAFAEL ERNESTO JIMENEZ, Cargo AUXILIAR ADMINISTRATIVA desde el 01 de Marzo de 2008 al 30 de Abril de 2009.

- Anexa los siguientes soportes de estudios: Titulo profesional de abogada

3. Aspirante Johana Patricia Ovalle Rojas c.c. 40.434.908, cumple con el requisito de título Bachiller Académico.

- Anexa soportes de experiencia laboral así:

Certificación: BRAYAN ALEXIS VERGARA MARTINEZ cargo: Administrador y Representante de Servicio al Cliente, desde el 01 de Febrero de 2017 al 30 de Diciembre de 2019 (certificación presenta incongruencia entre la fecha de terminación y la fecha de expedición) - Certificación: PERSOM S.A.S. cargo BACK OFFICE desde 15 de octubre de 2014 al 30 de enero de 2015. Certificación OCUPAR TEMPORALES S.A. del 18 de febrero de 2015 al 12 de Febrero de 2016 y del 16 de febrero de 2016 al 16 de enero de 2017, CERTIFICACION TELEPERFORMANCE COLOMBIA S.A.S. Cargo ASESOR DE SERVICIOS de 15 de Noviembre de 2011 al 17 de Julio de 2014. - Certificación ORGANIZACION SERDAN - MISION TEMPORAL LTDA cargo. AUXILIAR AGILIZADOR, del 17 de Marzo de 2011 al 7 de Abril de 2011, - Certificación ACCION S.A. Cargo Agente AV

villas Contac Center, desde el 08 de Octubre de 2009, hasta el 31 de Marzo de 2010. Certificación EXRAS S.A. cargo Auxiliar de Oficina desde el 02 de Febrero de 2009 al 15 de Junio de 2009. Certificado PROTECCION S.A. APRENDIZ del 02 de Enero de 2008 al 01 de Julio de 2008.

- Anexa los siguientes soportes de estudios:

Tecnólogo en Administración de Finanzas y Negocios Internacionales - Curso Estrategias pedagógicas para el Desarrollo del Pensamiento - Curso Inducción a procesos pedagógicos - Curso manejo de Herramientas Microsoft Office 2016, - Curso Cuentas Contables, Curso Administración documental.

4. Aspirante Angélica Alejandra Ordoñez Osorio c.c. 1.112.629.153, cumple con el requisito de título Bachiller Técnico.

- Anexa soportes de experiencia laboral así:

Certificación, Personería Municipal del Zarzal, cargo CPS auxiliar administrativo - Asesora Social en la Personería, desde el 02 de enero de 2020 a la fecha (10 Meses y 18 días), certificación, Personería Municipal del Zarzal, cargo CPS Auxiliar Administrativo, desde el 02 de Julio de 2019 al 31 de diciembre de 2019 (5 meses y 29 días) - Certificación Prácticas Personería Municipal de Zarzal, desde el 01 de agosto de 2018 al 31 de diciembre de 2018.

- Anexa los siguientes soportes de estudios:

Técnico en operación de reservas y ventas de productos turísticos - Certificación de estudios superiores TRABAJADORA SOCIAL cursando el 92% de los créditos académicos. - Curso Virtual integridad, transparencia y lucha contra la corrupción - DIPLOMADO Control Social - Seminario Régimen Disciplinario del Servidor Público - Curso Planeación Participativa y Control Social - Foro Derechos Humanos, Quindío al Derecho - Curso Virtual Veedurías Ciudadanas - Curso, Política Pública con Enfoque Diferencial, - Curso Virtual Servidor Público.

5. Aspirante Lizeth Katherine Rodríguez Prieto c.c. 1.122.134.161, cumple con el requisito de Bachiller técnico con especialidad en producción Agropecuaria.

- Anexa soportes de experiencia laboral así:

Certificación: PROYECTOS VIALES, Cargo Auxiliar Administrativa, desde 28 de Septiembre de 2012 al 28 de Mayo de 2013, Certificación: Municipio del Dorado (secretaria de Gobierno. Cargo Auxiliar Administrativo (provisionalidad) desde el 05 de enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016, Certificación CPS, Fortalecimiento

de la Sec. de Gobierno, desde 01 de febrero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017, Certificación CPS, Fortalecimiento de la Sec. de Gobierno, desde 12 de Enero de 2018 al 11 de Julio de 2018, Certificación CPS, Fortalecimiento de la Sec. de Gobierno, desde 19 de Julio de 2018 al 18 de Diciembre de 2018. Certificación MARIA ALEJANDRA GARZON, cargo: Apoyo a la Ejecución del Contrato 018 de 2018, desde el 25 de Enero de 2018 al 24 de Julio de 2018. Certificación CPS, Fortalecimiento de la Sec. de Gobierno, desde 04 de Febrero de 2019 al 03 de Junio de 2019. Certificación CPS, Fortalecimiento de la Sec. de Gobierno, desde 21 de Junio 2019 al 20 de Noviembre de 2019. Certificación CPS, Acompañamiento y Seguimientos de Comités institucionales y otras actividades, desde el 13 de Febrero de 2020 al 12 de diciembre de 2020.

- Anexa los siguientes soportes de estudios:

Técnico laboral Auxiliar Administrativo en Salud, Diplomatura en Seguridad Industrial HSE para el sector Petrolero, , - Técnico laboral en seguridad Industrial Petrolera, - Licenciada en pedagogía Infantil, Curso en Salud Ocupacional, Curso humanización de los Servicios de Salud, Curso gestión y educación ambiental, Seminario Atención al Usuario y Comunicación Asertiva, Curso Documentación Contable para la Prestación de Servicios, Seminario Liderazgo Gerencial, - Diplomado para la vida y la Reconciliación, Curso Administración de Recursos Humanos.

CONCLUSIÒN

Verificados los requisitos mínimos exigidos para ocupar el cargo y contestado dentro del término la reclamación interpuesta se confirma la siguiente lista de aspirantes admitidos:

NOMBRE COMPLETO DEL ASPIRANTE	NUM. IDENTIDAD
Patricia Morera Anaya	55.058.856
Katherine Arenas Álvarez	1.030.584.899
Johana Patricia Ovalle Rojas	40.434.908
Angélica Alejandra Ordoñez Osorio	1.112.629.153
Lizeth Katherine Rodriguez Prieto	1.122.134.161

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS	CÓD: PGD. 200-08.01
		FECHA: OCTUBRE 2015
	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI GESTION DOCUMENTAL	VERSIÓN: 01

TABLA DE PONDERACIÓN

NOMBRE COMPLETO DEL ASPIRANTE	NUM. IDENTIDAD	ESUDIO BASICO	CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	ESTUDIOS ADICIONALES	EXPERIENCIA
Patricia Monora Anaya	55.058.856	Bachiller Académico	60	10	10
Katherine Arenas Álvarez	1.030.584.899	Bachiller Académico	60	10	10
Johana Patricia Ovalle Rojas	40.434.908	Bachiller Académico	60	10	0
Angélica Alejandra Ordoñez Osorio	1.112.629.153	Bachiller Técnico	60	10	10
Lizeth Katherine Rodriguez Prieto	1.122.134.161	Bachiller técnico con especialidad en producción Agropecuaria	60	10	10

COMISIÓN:

JHONNY ANDRES BASTO HERNANDEZ

ANDRES MAURICIO CHAVEZ

LILIANA MARCELA BAQUERO TORRES

MESA DIRECTIVA

ORLANDO GRANADOS ACEVEDO

HECTOR REYES RATIVA

ARNOLD MAURICIO PINILLA TRIANA

Señora
JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL DE GUAMAL
E. S. D.

Rad.- Recurso de Impugnación
FALLO ACCION DE TUTELA.-No 503184089001-2020-00202-00
ACCIONANTE: PATRICIA MORERA AMAYA
ACCIONADO: CONCEJO MUNICIPAL DE ACACIAS –META-

LILIANA MARCERLA BAQUERO TORRES, mayor y vecina del municipio de Acacías, identificada tal como aparece al pie de mi correspondiente firma, en mi condición de Concejal del municipio de Acacías y accionada en la Acción de Tutela de la referencia, por medio del presente escrito me permito presentar y sustentar impugnación al fallo de primera instancia de Acción de Tutela por la presunta vulneración al debido proceso, igualdad, al trabajo, acceso a cargos públicos por concurso de méritos.

Lo anterior, dado a que el Fallo carece de fundamento y no se ajusta a derecho por lo tanto solcito muy respetuosamente sea revocado y sustento mi desacuerdo frente a la decisión adoptada, por las siguientes razones:

Sentencia impugnada:

La acción de tutela promovida por la señora Patricia Morera Anaya promovida en contra del Concejo Municipal de Acacías Meta por considerar que le están vulnerando el debido proceso, a la igualdad, el derecho al trabajo y el acceso a cargos públicos a través del mérito. Dado a que se presentó a la convocatoria para la elección de secretaria general del Concejo Municipal para la vigencia 2021, se postuló y concursó para el empleo convocado, presentando las pruebas que fueron programadas dentro del cronograma de la convocatoria.

Una vez finalizadas las pruebas y evaluado cada proceso: hoja de vida, prueba de conocimiento, entrevista, el Concejo expidió la lista del personal elegible quedando la señora Morera Anaya en primer lugar según puntaje de 92.

El 18 de diciembre de 2020 la plenaria del Concejo Municipal de Acacías adelantó la respectiva elección para el cargo de secretaria general en donde la comisión escrutadora y la mesa directiva declaro elegida como secretaria general a la señora KATHERINE ARENAS ALVAREZ para el cargo convocado quedando pendiente la posesión.

No aplica, la sentencia SU-913/2009 de concurso de Notario al caso de elección de secretaria general

Dentro de los argumentos que se resumen en el fallo de tutela, expuestos por la señora Morera Anaya la actora expone que el órgano demandado expidió la lista de elegibles donde se demuestra que el primer lugar lo ocupa la accionante. También, hace alusión a una sentencia de la Corte constitucional SU-913/2009, "cuando la administración asigna a un concursante puntaje al finalizar cada una de las fases que comprende el concurso, expide un acto administrativo de carácter particular y concreto, en la medida que surte efecto inmediato, directo y subjetivo respecto del destinatario, lo mismo ocurre cuando se consolida dichos resultados mediante la conformación de una lista de elegibles.¨ cabe precisar que la SU-913/2009 hace referencia al concurso de Méritos de Notarios en observancia al artículo 131 superior "El nombramiento en propiedad de los Notarios se hará mediante concurso de mérito, es un cargo de carrera en donde se le debe dar estricto cumplimiento al orden de lista obtenido por el concurso de Merito so pena de lesionar derechos fundamentales del que obtuvo el primer lugar en la lista de elegibles. Es importante precisar que el cardo de Notario es muy diferente al cargo de secretaria general del Concejo Municipal, que es un cargo de periodo fijo y que por disposición Constitucional según art. 126 debe proveerse mediante CONVOCATORIA PUBLICA y ser elegido por la corporación en este caso Concejo Municipal de Acacías.,

Naturaleza del cargo de secretaria General de las Corporaciones Públicas

Según el art. 312 de la Constitución Política en cada Municipio habrá una corporación Político Administrativa elegida popularmente para periodos de 4 años que se denominara Concejo Municipal, determinándose en el artículo 313 ídem y 32 de la ley 136 de 1994 las funciones que corresponden al Concejo, destacándose que el artículo 31 de la ley 136 de 1994, se fijó como una de sus funciones la de expedir el reglamento interno para su funcionamiento. También la Carta Política fijo para las Corporaciones Públicas entre otras atribuciones, elegir a servidores públicos en los siguientes términos:

Inicialmente es importante destacar que, el Acto Legislativo 02 de 2015[1] señala lo siguiente:

"ARTÍCULO 2°. El artículo 126 de la Constitución Política quedará así:

Los servidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente.

(…)

*Salvo los concursos regulados por la ley, l**a elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una CONVOCATORIA PÚBLICA reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección.***

Como puede observarse, el Acto Legislativo 02 de 2015, atribuyó al Legislador la competencia para reglar las convocatorias públicas que precederán la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas y determinar el procedimiento correspondiente.

La Ley 136 de 1994, "*Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios"*, establece:

*"**ARTÍCULO 31º.- Reglamento.** Los concejos expedirán un reglamento interno para su funcionamiento en el cual se incluyan, entre otras, las normas referentes a las comisiones, a la actuación de los concejales y la validez de las convocatorias y de las sesiones."*

*"**ARTÍCULO 35º.- Elección de funcionarios**. Los concejos se instalarán y elegirán a los funcionarios de su competencia en los primeros diez días del mes de enero correspondiente a la iniciación de sus períodos constitucionales, previo señalamiento de fecha con tres días de anticipación. En los casos de faltas absolutas, la elección podrá hacerse en cualquier período de sesiones ordinarias o extraordinarias que para el efecto convoque el alcalde.*

Siempre que se haga una elección después de haberse iniciado un período, se entiende hecha sólo para el resto del período en curso."

*"**ARTÍCULO 37. SECRETARIO**. El Concejo Municipal elegirá un secretario para un **período de un año**, **reelegible** a criterio de la corporación y su primera elección se realizará en el primer período legal respectivo.*

En los municipios de las categorías especial deberán acreditar título profesional. En la categoría primera deberán haber terminado estudios universitarios o tener título de nivel tecnológico. En las demás categorías deberán acreditar título de bachiller o acreditar experiencia administrativa mínima de dos años.

En casos de falta absoluta habrá nueva elección para el resto del período y las ausencias temporales las reglamentará el Concejo." (Subrayado nuestro)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la ley 136 de 1994, el secretario del Concejo Municipal corresponde a un empleo de período fijo y, en tal sentido, ostenta la calidad de empleado público de período fijo dentro la respectiva Corporación Municipal, por lo tanto, dada la naturaleza jurídica del mencionado empleo, la elección de la persona que ocupa el mismo se realiza en los términos indicados en el artículo 37 transcrito.

No obstante, la norma no hace referencia al procedimiento para realizar dicha elección, por cuanto el empleo se deberá proveer conforme al reglamento interno que para el efecto haya expedido el Concejo Municipal. Como lo expresa puntualmente el **Concepto 183301 de 2020 Departamento Administrativo de la Función Pública.**

Disposiciones del reglamento Interno del Concejo Acuerdo 417 de 2016 para la Elección de secretario General de la Corporación

TITULO V
SECRETARIO GENERAL

CAPITULO ÚNICO
DESIGNACIÓN. REQUISITOS. PERIODO. FUNCIONES.

ARTÍCULO 50°.- DESIGNACIÓN, REQUISITOS Y PERIODOS. El secretario general será elegido por el Concejo para un periodo legal de un (1) año, de lista de admitidos previa convocatoria pública con principios de mérito, pude ser reelegido a criterio de la Corporación. Deberá acreditar los requisitos exigidos por la Ley 136 de 1994.

La primera elección de este funcionario se realizará dentro de los diez (10) primeros días del mes de enero correspondiente a la iniciación del periodo constitucional. Para los años siguientes del mismo periodo constitucional, tendrá lugar durante el último periodo ordinario de sesiones o en su prórroga, o en su defecto en sesiones extraordinarias que para el efecto convoque el Alcalde. Se posesionará y juramentará ante el Presidente de la Corporación y asumirá funciones a partir de su posesión.

Siempre que se haga una elección después de haberse iniciado un período, se entiende hecha sólo para el resto del período en curso.

ARTÍCULO 51°.- FUNCIONES GENERALES. Es el jefe administrativo de los empleados al servicio de la Corporación, Secretario de la misma y de las Comisiones. En tal condición le corresponde la organización y dirección del talento humano para el cumplimiento de la misión de la Corporación.

ARTÍCULO 52°.- FUNCIONES ESPECÍFICAS. Son funciones específicas y deberes del Secretario General de la Corporación, las siguientes:

1. Asistir a todas las sesiones, tanto de plenaria como de las Comisiones Permanentes.
2. Llevar y firmar junto con el Presidente las actas de las sesiones plenarias. Igual procedimiento se cumplirá con las actas de las sesiones de Comisiones.
3. Dar lectura a los proyectos, proposiciones, documentos y mensajes que deban ser leídos en sesión plenaria y en las Comisiones.
4. Informar sobre los resultados de toda clase de votación que se cumpla en la Corporación.
5. Notificar las citaciones e invitación aprobadas por la Corporación.
6. Elaborar las comunicaciones oficiales que deban ser enviadas por el Presidente o por la Mesa Directiva.
7. Informar al Presidente sobre todos los documentos y mensajes dirigidos a la Corporación, acusar oportunamente su recibo, y mantener organizado y actualizado un registro de entrega y devolución de los mismos y de los enviados a las Comisiones.

8. Recibir y dar trámite a todo documento o petición que llegue al Concejo con destino a la Secretaría General de la Corporación.
9. Recibir y radicar los proyectos de acuerdo y repartirlos a cada uno de los Concejales y a la Comisión correspondiente para su trámite en primer debate.
10. Llevar los siguientes libros: el de registro de intereses privados de los Concejales de que trata el artículo 70, inciso segundo, de la Ley 136 de 1994, y el de registro de participación ciudadana a que se refiere el artículo 77 de la misma ley.
11. Preservar, cuidar y dar buen uso a todos los documentos a cargo de la Secretaría General.
12. Dirigir el órgano de publicación del Concejo.
13. Registrar y certificar la asistencia de los Concejales a las sesiones plenarias.
14. Recibir la inscripción de constitución de las bancadas de partidos y movimientos políticos del Concejo Municipal y dar a conocer a la plenaria los documentos constitutivos de las mismas.
15. Responder por la preservación y conservación de bienes muebles e inmuebles así como el inventario general que sea propiedad o este a cargo del Concejo Municipal, además responder por el archivo del Concejo Municipal.
16. Rendir oportunamente los informes a los diferentes entes de control.
17. Los demás deberes que le señale la Corporación, la mesa directiva o el presidente que sea concordantes con la naturaleza del cargo.

Parágrafo. Las faltas absolutas del Secretario General se suplen con una nueva elección en el menor tiempo posible. La mesa directiva convocara a la plenaria para la nueva elección en cualquier momento. En caso de falta temporal, la Mesa Directiva dispondrá lo pertinente.

Para contextualizar las normas jurídicas que aplican puntualmente al cargo de secretaria General del Concejo Municipal de Acacías es importante resaltar que el 19 de noviembre de 2020 el Tribunal Administrativo del Meta dicto **sentencia TAM004 20 – 11-212** del medio de control de nulidad electoral, donde el demandante es JOSE ENRRIQUE MOLINA ROJAS y demandando el CONCEJO MUNICIPAL DE ACACIAS y LEIDY ALEXANDRA ROMERO URUEÑA, con magistrada ponente Nelly Vargas Tovar, en donde se declara la nulidad parcial del acta de sesión N. 02 del 3 de enero de 2020 del CONCEJO MUNICIAPL DE ACACIAS –META, en lo que respecta a la elección de la señora LEIDY ALEXANDRA ROMERO URUEÑA para el periodo 2020. En dicha sentencia TAM004 20 – 11-212 después de hacer un

análisis de las normas que aplican a la elección del cargo de secretaria generales de las corporaciones Públicas se determina que la leu 1955 de 2019 por la cual se expide el plan nacional de desarrollo 2018 – 2022 derogo el parágrafo transitorio del artículo 12 de la ley 1904 de 2018 en donde se imponía la las corporaciones públicas la obligación de aplicar por analogía el proceso de elección de contralor General de la Republica para la elección de los demás servidores públicos que fueran atribuidos a las corporaciones públicas.

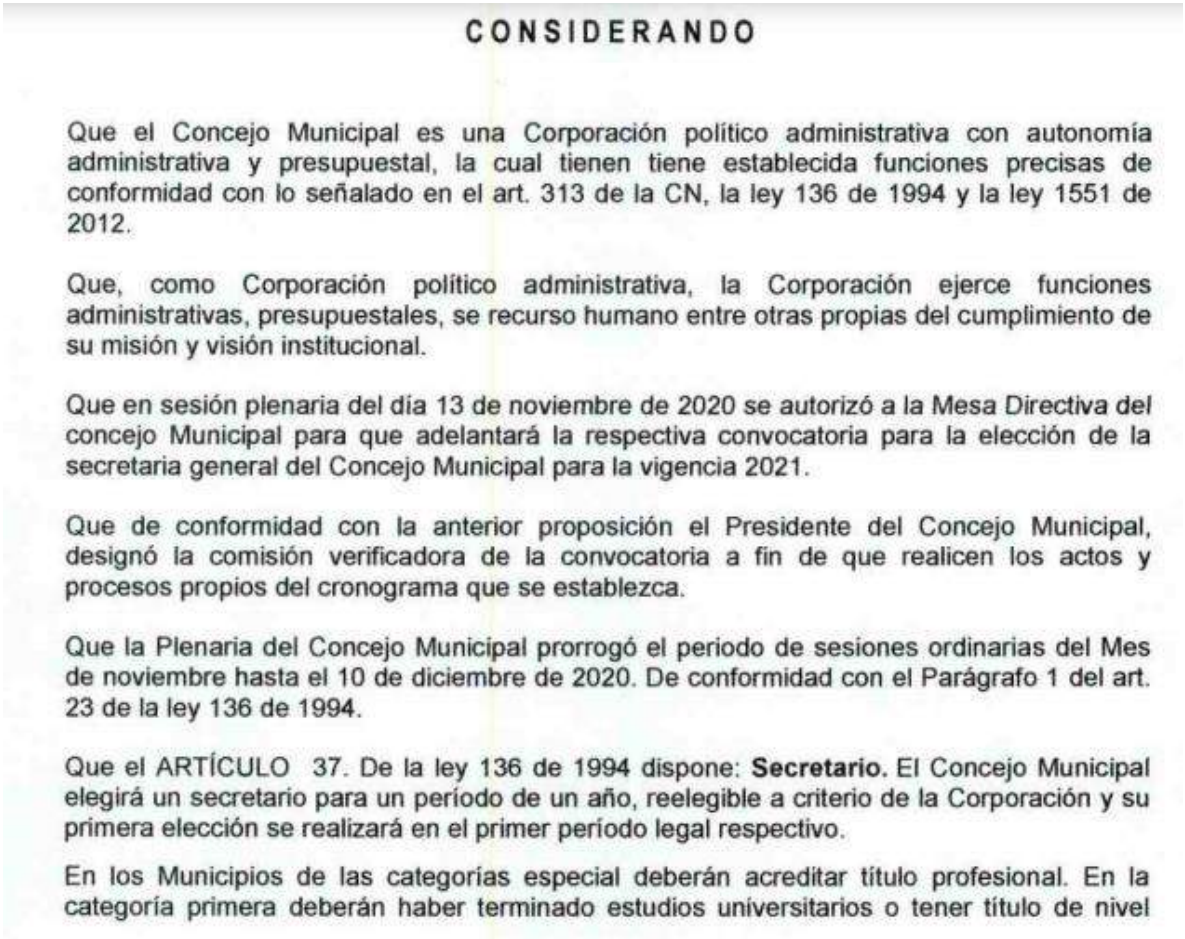
Conclusión de la normatividad que aplica para el caso concreto elección del cargo de secretario general objeto de la presente tutela

De lo anterior y en concordancia con la sentencia TAM004 20 – 11-212 se puede concluir que el Concejo Municipal de Acacias Meta tiene la función de elegir secretario general del Concejo para lo cual debe dar aplicación al artículo 126 de la Constitución Política, la ley 136 de 1994 y el reglamento interno de la corporación.

Actos administrativos relevantes del caso Tutelado que obran dentro del material probatorio en el proceso

Descendiendo al caso concreto, se evidencia que la mesa directiva del Concejo Municipal de Acacías Expidió la resolución N. 48 del 17 de noviembre de 2020 titulada: POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UNA CONVOCATORIA PARA LA ELECCION DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACIAS.

Dentro de las motivaciones de dicha resolución se puntualiza textualmente lo siguiente:



CONSIDERANDO

Que el Concejo Municipal es una Corporación político administrativa con autonomía administrativa y presupuestal, la cual tienen tiene establecida funciones precisas de conformidad con lo señalado en el art. 313 de la CN, la ley 136 de 1994 y la ley 1551 de 2012.

Que, como Corporación político administrativa, la Corporación ejerce funciones administrativas, presupuestales, se recurso humano entre otras propias del cumplimiento de su misión y visión institucional.

Que en sesión plenaria del día 13 de noviembre de 2020 se autorizó a la Mesa Directiva del concejo Municipal para que adelantará la respectiva convocatoria para la elección de la secretaria general del Concejo Municipal para la vigencia 2021.

Que de conformidad con la anterior proposición el Presidente del Concejo Municipal, designó la comisión verificadora de la convocatoria a fin de que realicen los actos y procesos propios del cronograma que se establezca.

Que la Plenaria del Concejo Municipal prorrogó el periodo de sesiones ordinarias del Mes de noviembre hasta el 10 de diciembre de 2020. De conformidad con el Parágrafo 1 del art. 23 de la ley 136 de 1994.

Que el ARTÍCULO 37. De la ley 136 de 1994 dispone: **Secretario.** El Concejo Municipal elegirá un secretario para un período de un año, reelegible a criterio de la Corporación y su primera elección se realizará en el primer período legal respectivo.

En los Municipios de las categorías especial deberán acreditar título profesional. En la categoría primera deberán haber terminado estudios universitarios o tener título de nivel

Figure 1 Tomada de la resolución N. 48 de 2020 del Concejo Municipal

Nótese señor Juez, la parte motiva de la re4solucion N.48 siempre se habla de que el Concejo Municipal adelantará la respectiva convocatoria para la elección de secretaria General del concejo 2021, que se designó una comisión verificadora de la convocatoria, incluso de la cual hice parte, en el entendido de que se quería cumplir con lo establecido en el artículo 226 de la constitución política y el reglamento de la corporación.

Por otra parte, nótese que en RESULVE artículo primero de la resolución N. 48 de 2020 dice "Se convoca a los ciudadanos interesados **en participar en la convocatoria para proveer el cargo de Secretaria General del Concejo Municipal** de Acacías – Meta …" como se observa de figura tomada de la resolución:

ARTÍCULO PRIMERO. CONVOCATORIA. - Se convoca a los ciudadanos interesados en participar en la convocatoria para proveer el Cargo de Secretaria General del Concejo Municipal de Acacías – Meta.

PARAGRAFO: REQUISITOS Y DOCUMENTACIÒN
Para ser elegido Secretaria(o) General del Concejo Municipal el aspirante deberá acreditar:

1. Título de bachiller o acreditar experiencia administrativa mínima de dos años.

Junto con la inscripción deberá allegar la siguiente información:

a) Solicitud dirigida al Concejo Municipal determinando el cargo al cual se postula.
b) Hoja de Vida – Formato Único de la Función Pública
c) Copia del documento de identificación
d) Copia del diploma de bachiller y/o acta de grado
e) En caso de no acreditar la condición de bachiller, el aspirante deberá Acreditar experiencia laboral mínima de dos años en experiencia administrativa. La cual deberá contener: Tiempo de duración, tipo de contrato, fecha de inicio y fecha de terminación, nombre de jefe inmediato y/o Rep. legal de la entidad, correo electrónico y número telefónico de la entidad de verificación. Relación detallada de funciones.
f) Antecedentes Judiciales, fiscales y disciplinarios (expedidos con una antelación no superior a 30 días)
g) Certificación de contar con disponibilidad inmediata para asumir el cargo de Secretaria(o) General del Concejo Municipal a partir del 01 de enero de 2021.
h) Declaración juramentada de no estar inmersa(o) en inhabilidad o incompatibilidad para ejercer el cargo de Secretaria General del Concejo Municipal.
i) Declaración Juramentada de bienes y rentas Función Pública
j) Copia de estudios complementarios (si los tiene) requisito no obligatorio.
k) Copia de experiencia laboral adicional (si los tiene) requisito no obligatorio.

Artículo segundo resolución 48 de 2020: PUNTAJE Y PONDERACION

En el literal a puntualiza: Cumplimiento del 100% de los requisitos establecidos en el parágrafo del artículo primero de **la presente convocatoria** se asignara el 60% del total de la prueba..

ARTICULO SEGUNDO: PUNTAJE Y PONDERACIÒN:

a) Cumplimiento del 100% de los requisitos establecidos en el PARAGRAFO del Artículo Primero de la presente convocatoria se asignará el 60% del total de la prueba.
b) Estudios adicionales a los requeridos 10%
c) Experiencia adicional al mínimo requerido 10%
d) Entrevista 20% del valor de la prueba.

Nota 1: las calificaciones dadas a cada etapa serán calculadas sobre 100 puntos. Sin Incluir decimales.

Nota 2: En caso de empate este se dirimirá por los estudios adicionales que ostenten los participantes.

Figure 2tomada de la resolución 48 de 2020 del Conejo Municipal

Artículo Tercero de la resolución 48 de 2020 Estructura del proceso: **la convocatoria para la elección de secretaria general** del concejo Municipal de Acacias tendrá las siguientes etapas:

ARTICULO TERCERO: ESTRUCTURA DEL PROCESO. – La convocatoria para la elección de Secretaria(o) General del Concejo Municipal de Acacías – Meta, tendrá las siguientes etapas:

1. Aviso de invitación y convocatoria
2. Inscripción o reclutamiento
3. Verificación de requisitos mínimos y publicación de la lista de admitidos y no admitidos
4. Reclamaciones y respuesta a reclamaciones
5. Publicación listado definitivo de admitidos y No admitidos
6. Entrevista
7. Publicación de resultados Consolidados (Lista de Elegibles)
8. Reclamaciones y Respuesta a reclamaciones
9. Elección y Posesión Secretaria General del Concejo Municipal

ARTÍCULO CUARTO der la resolución 448 de 2020: CRONOGRAMA DEL PROCESO: en el cronograma del presente concurso se describen cada una de las etapas..

Nótese su señoría, que se incluye la palabra concurso, al respecto es importante resaltar que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la palabra concurso significa: . **concurrencia** (ll conjunto de personas), Competición, prueba entre varios candidatos para conseguir un premio. en mi interpretar no le vi ningún inconveniente. **Como se muestra en la siguiente figura:**

ARTICULO CUARTO: CRONOGRAMA DEL PROCESO. - En el cronograma del presente concurso se describen cada una de las etapas previstas en el presente artículo, incluyendo las reclamaciones por inadmisión y el término para resolverlas en cada caso.

ETAPA	FECHA
Publicación de convocatoria: Cartelera del Concejo Municipal y página www.concejo-Acacías-meta.gov.co	17 DE NOVIEMBRE DE 2020
INSCRIPCIÓN Y RECLUTAMIENTO de aspirantes: Radicación de hojas de vida de los aspirantes la cual debe ser presentada personalmente por el aspirante con todos los soportes: En caso de no poder radicar personalmente su hoja de vida, la persona que radique la hoja de vida del aspirante deberá contar con autorización expresa para ello. Cra 14 N. 13 – 30 1er piso Palacio Municipal, oficina Concejo Municipal.	DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE HASTA LAS 6:00 PM
Verificación de requisitos mínimos y publicación de la lista de admitidos y no admitidos: Cartelera del Concejo Municipal y página: www.concejo-Acacías-meta.gov.co.	30 DE NOVIEMBRE
Presentación de reclamaciones por no admisión Cra 14 N. 13 – 30 1er piso Palacio Municipal.	01 y 02 DE DICIEMBRE DE 2020 HASTA LAS 3:00 PM
Publicación listado definitivo de admitidos y no admitidos: Cartelera del Concejo Municipal y página: www.concejo-Acacías-meta.gov.co	3 DE DICIEMBRE DE 2020
Entrevista a los aspirantes que alleguen la documentación requerida y cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria. Cartelera del Concejo Municipal y página www.concejo-Acacías-meta.gov.co	4 de Diciembre de 2020
Presentación de reclamaciones al correo concejo@Acacías.gov.co	5 de Diciembre hasta las 6:00 pm
Respuesta a las reclamaciones: www.concejo-Acacías-meta.gov.co	9 de DICIEMBRE de 2020
Elección y Posesión Secretaria(o) General del Concejo Municipal vigencia 2021.	10 de DICIEMBRE de 2020

Figure 3 Tomado de la resolución 48 de 2020

ARTIVULO QUINTO RESOLUCION 48 DE 2020: Designación de comisión accidental para la verificación de los requisitos exigidos: de la cual fui designada por el presidente del Concejo y todo el tiempo actué con el firme convencimiento de estar desarrollando esta designación en medio de una CONVOCATORIA de acuerdo al artículo 126 de la Constitución Política y el reglamento artículo 50. Del acuerdo 427 de 2016 del Concejo Municipal.

ARTICULO SEXTO: PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PROCESO:

ARTICULO SEXTO: PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PROCESO. - En todas sus etapas, el Concurso Público de Méritos mediante el cual será escogido la (el) Secretaria(o) General del Concejo Municipal de Acacías - Meta, atenderá los principios de libre concurrencia e igualdad en el ingreso, publicidad, objetividad, transparencia, especialización, imparcialidad, confiabilidad, eficacia y eficiencia.

Es preciso analizar este artículo puesto que el A-quo en las consideraciones para dictar sentencia fue el único artículo de la resolución 48 de 2020 del concejo Municipal que dio relevancia, el título del artículo sexto, es: **PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PROCESO.** A continuación, dice textualmente: "en todas sus etapas, el Concurso Público de Méritos mediante el cual será escogido el secretario… Adelantara los principios de…"

Nótese su señoría, que la resolución 48 de 2020, en todo su contenido hace referencia a una CONVOCATORIA a excepción del artículo SEXTO que nombra concurso publico de méritos. Ver cuadro Resumen de la resolución 48 de 2020. y de acuerdo al artículo 126 de la constitución política que vale la pena reiterar taxativamente parte de su contenido, porque aplica al caso**:** **"…***Salvo los concursos regulados por la ley, la* ***elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas*** *deberá estar precedida de una* ***CONVOCATORIA PÚBLICA*** *reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que* ***garanticen los principios*** *de* ***publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección****.."*

Ítem Resolución 48 de 2020	Hace referencia	Hace referencia
TITULO	Convocatoria	"POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UNA CONVOCATORIA PARA LA ELECCION DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACIAS"
CONSIDERANDOS	Convocatoria	LA MOTIVACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO
ARTÍCULO PRIMERO	Convocatoria	SE CONVOCA A LOS CIUDADADOS A PARTICIPAR A UNA CONVOCATORIA PARA PROVEER EL CARGO, INCLUYE PARAGRAFO DE REQUISITOS Y DOCUENTACION…
ARTICULO SEGUNDO	Convocatoria	PUNTAJE Y PONDERACION
ARTICULO TERCERO	Convocatoria	ESTRUCTURA DEL PROCESO
ARTICULO CUARTO	Convocatoria	CRONOGRAMA DEL PROCESO

ARTICULO QUINTO	Convocatoria	COMISION ACCIDENTAL VERIFICACION DE REQUISITOS
ARTICULO SEXTO	Concurso publico de Merito	PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PROCESO
ARTICULO SEPTIMO	Convocatoria	EMPLEO CONVOCADO
ARTICULO OCTAVO	Convocatoria	NATURALEZA DEL CARGO
ARTICULO NOVENO	Convocatoria	FUNCIONES DEL CARGO
ARTICULO DECIMO	Convocatoria	RECLAMACIONES
ARTICULO DECIMO PRIMERO	Convocatoria	FECHA DE EXPEDICION
FIRMA: MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO DE ACACIAS		

Figure 4 cuadro resumen de la resolución 48 de 2020 expedida por la mesa directiva del Concejo Municipal de Acacias

Nótese su señoría, que la resolución 48 de 2020 es la resolución que abre la convocatoria para proveer el cargo, se convierte en ley para las partes, por eso la importancia de dar por no escrito en el artículo sexto la referencia a concurso publico de mérito o en su defecto sea aplicado en el entendido que se refiere a criterios de mérito, puesto que de admitir que por ese artículo la accionante de por hecho que se realizó un CONCURSO PUBLICODE MERITOS para la elección del cargo convocado sería manifiestamente contrario al artículo 126 de la Constitución Política (C.P) que nos habla que para el caso de elección de secretaria aplica una CONVOCATORIA y define taxativamente sus principios. Que en mi forma de inferir y por el título del artículo sexto de la resolución 48 de 2020 título: Principio orientadores del proceso: aplicaría reitero taxativamente lo dispuesto en el artículo superior 126 de la C.P.

Es tan importante para dilucidar gran parte de la viabilidad de las pretensiones de la tutela de la señora Morera Anaya y de la solicitud de impugnación del fallo del A-quo precisar las diferencias entre Convocatoria Pública y Concurso Publico de Merito que a continuación se exponen:

Diferencia entre convocatoria pública y Concurso Público de Méritos

Como bien lo dice el A-quo en sus consideraciones “estima este despacho Judicial que en todo proceso de aspiración para conseguir un trabajo debe existir el respeto a las reglas por parte del organismo estatal y de la jurisprudencia de las altas cortes tanto en la etapa de la convocatoria como en el proceso de la selección…” por lo tanto, me permito traer algunos apartes, pido disculpas porque es un poco extenso, pero para mayor ilustración es mejor traer parte de las consideraciones en dicha sentencia por que explica 1. **Clasificación del empleo público y su provisión, sintetiza en un cuadro las características anotadas según la tipología de empleos públicos, 2**. **Provisión de**

empleos públicos mediante procesos de selección, Sistema De Convocatoria Pública, servidores públicos electos por corporaciones públicas la reforma constitucional opto por consagrar un SISTEMA DE CONVOCATORIA en lugar de UN CONCURSO PUBLICO DE MERITOS (Acto legislativo 02 de 2015), cuadro resumen de rigurosidad de dependiendo de la provisión del empleo debe evaluarse el mérito, . Y textualmente así:

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A, Consejero ponente: Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ, Bogotá, D. C., nueve (09) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), Referencia: NULIDAD, Radicación: 11001-03-25-000-2015-01089-00 (4824-2015), 11001-03-25-000-2016-00001-00 (0001-2016) (ACUMULADO), Demandantes: JOSÉ IGNACIO ARANGO BERNAL Y OTRO Demandados: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y OTRO, Temas: Concurso público y abierto de méritos para elección de personeros municipales., SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA O-275-2019

CONSIDERACIONES

8. **Cuestiones preliminares**

1. **Clasificación del empleo público y su provisión**

El artículo 40, numeral 7, de la Constitución Política consagra el derecho de acceso a cargos públicos, el cual ha sido entendido como la garantía que le asiste a todo ciudadano de participar en un determinado proceso de selección para aspirar a un empleo público, una vez cumplidos los requisitos previstos para tal fin. Asimismo, dentro de la esfera de protección de tal derecho, a quien ha sido nombrado y posesionado en un cargo de dicha naturaleza debe garantizársele no ser removido arbitrariamente de este, al igual que las condiciones necesarias para el normal desempeño de sus funciones.

La Corte Constitucional ha destacado la categoría de derecho fundamental que ostenta aquel en la medida en que, al promover la participación ciudadana en la conformación, ejercicio y control del poder político, permite lograr la efectividad de la democracia participativa.

Ahora bien, la forma de acceso al empleo público dependerá de la tipología dentro de la cual pueda enmarcarse el cargo respectivo. Los criterios de clasificación del personal al servicio de la administración pública se encuentran contenidos esencialmente en los artículos 123 y 125 superiores. De acuerdo con el primero de ellos, es posible establecer una categoría general denominada «servidores públicos», dentro de la que están comprendidos 1) los miembros de las corporaciones públicas; 2) los trabajadores oficiales; y 3) los empleados públicos.

Por su parte, el artículo 125 *ibidem* consagra como tipos de empleo público los (i) de carrera; (ii) de libre nombramiento y remoción; (iii) de elección popular; (iv) de trabajador oficial y (v) los demás que determinen la Constitución y la ley, últimos dentro de los cuales pueden identificarse los

empleos de periodo fijo; los temporales; y aquellos cuyas funciones deban ser ejercidas en las comunidades indígenas [15].

Cada uno de estos estos empleos es provisto de diferente forma según la tipología a la que respondan. Así, el sistema de provisión de los cargos de carrera está dado por el concurso público [16], el cual constituye la regla general pues ha de aplicar a los empleos de dicha naturaleza y a cualquier otro, cuando la Constitución o la ley no hayan determinado uno distinto. En tales eventos, una vez elegida la persona que ha de ocupar el puesto conforme a las reglas del concurso, esta debe ser nombrada en periodo de prueba [17] por un término de seis meses, al final del cual se le evalúa el desempeño. Si la calificación es satisfactoria se entenderá aprobado el periodo de prueba y, en consecuencia, el concursante adquiere los derechos de carrera respecto del empleo ofertado.

De otro lado, la característica esencial de los cargos de libre nombramiento y remoción [18] es la discrecionalidad de que goza el nominador a efectos de vincular y retirar al servidor público de la administración. El nombramiento de estos servidores públicos es de naturaleza ordinaria [19] en la medida en que basta el acto que así lo disponga y la aceptación por parte del funcionario designado, quien previamente deberá haber acreditado el lleno de los requisitos exigidos para desempeñar el empleo.

Los empleos de elección popular, por su parte, son aquellos cuya provisión debe surtirse con el candidato que el pueblo haya elegido para el periodo institucionalmente establecido, a través del ejercicio del derecho al voto.

Ahora, los trabajadores oficiales [20] son servidores que se vinculan laboralmente a la administración pública mediante un contrato de trabajo que regula la prestación del servicio bajo condiciones especiales que difieren de aquellas previstas en la parte individual del CST.

Por último, se encuentran los demás cargos públicos que consagre la Constitución o la ley, categoría dentro de la cual aparecen los empleos temporales[21] como aquellos que se crean para (i) cumplir funciones que no son desempeñadas por el personal de la planta de la entidad por resultar ajenas a las actividades de las que esta se ocupa permanentemente, (ii) desarrollar programas o proyectos de duración determinada, (iii) suplir necesidades de personal por una sobrecarga de trabajo que se origine en hechos excepcionales, y (iv) desarrollar labores de consultoría y asesoría institucional.

La provisión de estos cargos, de acuerdo con la interpretación constitucional realizada en sentencia C-288 de 2014, debe efectuarse, en primer lugar, con la lista de elegibles vigente para la provisión de empleos de carácter permanente. Si ello no resulta posible por faltar de dicha lista, debe dársele prioridad a quienes, encontrándose en carrera administrativa, reúnan los requisitos para el cargo y trabajen en la misma entidad, mediante la realización de un proceso de selección en el que se garantice la libre concurrencia y en el que la escogencia del servidor público tenga «[…] en cuenta exclusivamente factores objetivos como: el grado de estudios, la puntuación obtenida en evaluaciones de Estado como las pruebas ICFES, ECAES, Saber Pro y Saber, la experiencia en el cumplimiento de funciones señaladas en el perfil de competencias y otros factores directamente relacionados con la función a desarrollar […]»[22].

La ley se ocupó igualmente de crear los empleos de periodo fijo, los cuales han sido diseñados para que su provisión sea por un lapso previamente determinado [23]. En estos la provisión tiene lugar, en unos casos, a través del ejercicio de una facultad discrecional de selección y, en otros, mediante

una convocatoria pública reglada en la que deben fijarse requisitos y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito.

Por otro lado, dentro de los tipos de empleo público creados por disposición legal se encuentran aquellos cuyas funciones deben ser ejercidas en las comunidades indígenas, los cuales se someten a la autonomía que se le reconoce a estos pueblos, última que les confiere la potestad para darse sus propias autoridades, al igual que la competencia para establecer normas y procedimientos propios.

Finalmente, es importante señalar que, aunque en principio la naturaleza del cargo público define su forma de provisión en los términos anotados, es factible que, en algunos empleos que no son de carrera, las vacantes sean provistas a través de la realización de un concurso público de mérito. En otras palabras, a pesar de que este último es el proceso de selección obligatorio para los empleos de carrera, no es exclusivo de estos, porque también es viable que la Constitución o la ley dispongan su aplicación para cargos de otra índole.

Se ha abierto paso a esta posibilidad bajo el entendido de que el concurso público es la forma de provisión del empleo que materializa en mayor medida el mérito. En ese sentido, siendo este un principio rector de la función pública [24] que concreta otros principios como los de transparencia, moralidad, imparcialidad e igualdad, toda vez que permite asegurar que aquella sea desarrollada por los mejores y más capacitados funcionarios, la consagración del concurso público para la provisión de empleos, diferentes a los de carrera, aunque no es forzoso, sí resulta razonable y ajustado a derecho.

Según la regla jurisprudencial sentada por la Corte Constitucional [25] en la materia, excepción hecha de los cargos elegidos a través del ejercicio del derecho al voto [26], en el caso de los empleos públicos sometidos a un periodo fijo y de los de libre nombramiento y remoción, el concurso público aparece como un proceso de selección admisible, aunque no obligatorio. Ello sucede, por ejemplo, con la elección del registrador Nacional del estado civil, el que a pesar de tratarse de un empleo de periodo, por disposición del artículo 266 de la Carta Política, debe ser « […] escogido por los Presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, mediante concurso de méritos organizado según la ley […]» [27].

Las características anotadas según la tipología de empleos públicos pueden sintetizarse en el siguiente esquema:

		provision	**nombramiento**	**carácter**
EMPL	**Carrera**	Proceso de selección: Concurso público	Periodo de prueba	Principio general
	libre nombramiento y remoción	Facultad discrecional, salvo que la ley prevea la realización de concurso público	Ordinario, previo cumplimiento de requisitos.	Excepcional

EOSPÚBLICOS	**elección popular**		Ejercicio del derecho al voto	N/A Toma posesión del cargo	Excepcional
	trabajadores oficiales		Libertad contractual	N/A Contrato de trabajo	Excepcional
	los demás que determinen la c.p. o la ley	**periodo fijo**	Facultad discrecional	Acto de nombramiento previo cumplimiento de requisitos	Excepcional
			Proceso de selección: Convocatoria pública	Acto de nombramiento previo cumplimiento de requisitos	
			Proceso de selección: concurso público expresamente consagrado en la Constitución o la ley	Acto de nombramiento previo cumplimiento de requisitos	
		temporal	Lista de elegibles. En su defecto, proceso de selección interno	Acto de nombramiento previo cumplimiento de requisitos	
		aquellos cuyas funciones deban ser ejercidas en comunidades indígenas	Autonomía indígena: Potestad para darse autoridades propias y competencia para establecer normas y procedimientos propios		

2. **Provisión de empleos públicos mediante procesos de selección**

Lo visto hasta ahora enseña que para proveer los cargos de carrera y algunos de periodo fijo, el ordenamiento jurídico ha consagrado los procesos de selección, los cuales aluden a un conjunto de etapas que tiene como propósito evaluar la capacidad e idoneidad de los aspirantes a un determinado empleo público para ejercer las funciones y asumir las responsabilidades propias de éste, con el fin de escoger a aquel que ha de desempeñar el cargo en cuestión.

El concepto «proceso de selección» da cuenta de una categoría amplia o, si se quiere a un género, dentro del cual es factible identificar especies como el concurso público de méritos que según se anotó constituye la regla general en la provisión de empleos, la convocatoria pública y cualquier otra clase de procedimiento que se ajuste a la caracterización anotada[28].

Visto lo anterior, es importante ahondar en la distinción existente entre el «concurso público de méritos» y «la convocatoria pública» pues a pesar de que ambos constituyen tipos de proceso de selección, cada uno tiene características propias y responde a dinámicas especiales.

En el ámbito de la función pública, el **concurso de méritos** puede definirse como un proceso de selección para el desempeño del empleo público, llevado a cabo con plena garantía de los principios de transparencia, objetividad e igualdad, en el que la escogencia del aspirante que habrá de ocuparlo se realiza **exclusivamente con base en el mérito**, entendido este como el reconocimiento que le corresponde a una persona en razón de las capacidades, competencias y aptitudes que ha demostrado tener para el desempeño del contenido funcional del cargo de que se trate.

De esta forma, cuando la provisión del empleo se encuentra sometida a concurso público, siendo el mérito el único criterio por el que debe regirse la escogencia del empleado público, queda descartado cualquier mecanismo que represente para el empleador facultades discrecionales de selección de los aspirantes, pues aun cuando estas últimas no implicarían *per se* arbitrariedad, sí afectarían la exigencia de aplicación exclusiva de tal criterio.

Respecto de las etapas que han de surtirse en este tipo de procesos de selección, el artículo 31 de la Ley 909 de 2004[30] señaló que son (i) la convocatoria [31], (ii) el reclutamiento [32], (iii) la aplicación de pruebas o instrumentos de selección [33], (iv) la conformación de lista de elegibles [34] y (v) el período de prueba [35].

En particular, es oportuno precisar los alcances de dos etapas: (i) de «pruebas o instrumentos de selección» y (ii) «conformación de las listas de elegibles». Veamos:

El propósito de la primera de ellas es el de evaluar la capacidad, idoneidad y cumplimiento de las aptitudes de los concursantes en relación con las calidades necesarias para ejercer efectivamente el contenido funcional del empleo público de que se trate.

Los resultados objetivos de las pruebas aplicadas son los que determinan el orden en que debe elaborarse el listado que contiene el nombre de las personas que habrán de ser designadas en las plazas vacantes, así lo indica el artículo 31, numeral 4, de la Ley 909 de 2004, que a su vez prevé que con la lista « […] y en estricto orden de mérito se cubrirán las vacantes […]». Al respecto, la corte Constitucional ha indicado lo siguiente:

[…] quien ocupe el primer lugar, de acuerdo con el puntaje obtenido, será el ganador y excluirá a los demás, en orden descendente. Si se procede de otro modo, habría que preguntarse, como lo hace el demandante, **¿para qué el concurso de méritos y calidades, si el nominador puede elegir al candidato de sus preferencias** […] (negrilla fuera del texto original)

En similar sentido, en T-610 de 2017, el máximo juez constitucional señaló que:

[…] las etapas y pruebas de una convocatoria deben dirigirse a identificar las destrezas, aptitudes, experiencia, idoneidad, suficiencia, entre otras cualidades, calidades, competencias y capacidades de los candidatos. Una vez estas habilidades han sido calificadas de manera objetiva, **sólo aquél con mayor mérito debe ser designado en el respectivo cargo, con exclusión de los demás concursantes** […][37] (negrilla fuera del texto original)

El análisis que antecede permite concluir que en los procesos que se adelantan bajo la modalidad del concurso público, la escogencia del participante atiende a la aplicación rigurosa y exclusiva del principio del mérito, sin que pueda existir otro parámetro al cual obedezca tal decisión.

SISTEMA DE CONVOCATORIA PÚBLICA

De otro lado, aparece el sistema de convocatoria pública como un proceso de selección que involucra instrumentos de diferente naturaleza. Así, integra un componente meritocrático al disponer la aplicación de pruebas como una de sus etapas, **pero también contempla uno de orden discrecional porque, a diferencia de lo que sucede en el concurso público, los resultados obtenidos no son concluyentes de la elección. ESTA ÚLTIMA SE REALIZA POR UN ÓRGANO COLEGIADO MEDIANTE LA VOTACIÓN QUE HAGAN SUS INTEGRANTES DE UNA LISTA DE ELEGIBLES CUYO ORDEN NO CONDICIONA LA DECISIÓN.**

Lo anterior evidencia que, aunque este procedimiento prevé una primera fase clasificatoria en la que se aplican herramientas que responden exclusivamente al principio de mérito, como lo son las pruebas que permiten la conformación de aquel listado, en la elección final hay un importante margen de libertad para el nominador que le da la posibilidad de valorar y escoger entre los candidatos.

La aplicación de la convocatoria pública como modalidad de proceso de selección se contempló para la provisión de los siguientes cargos:

- Los servidores públicos que deban ser escogidos por las corporaciones públicas (Artículo 126 C.P. modificado mediante el Acto Legislativo 2 de 2015, artículo 2[38]).
- Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, quienes son elegidos por la respectiva Corporación, previa audiencia pública, de lista de diez elegibles enviada por el Consejo Superior de la Judicatura, tras una convocatoria pública reglada por la ley (Artículo 231 C.P.).
- Los siete magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial son escogidos por el Congreso en pleno, así: cuatro de ellos de ternas enviadas por el Consejo Superior de la Judicatura y los tres restantes, de ternas enviadas por el presidente de la República, en ambos casos previa convocatoria pública reglada (Artículo 257A C.P.).
- El contralor general de la República es elegido por el Congreso en pleno de lista de elegibles conformada por convocatoria pública con base en lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución (Artículo 267 C.P.).

- Los Contralores departamentales, distritales y municipales, quienes son elegidos por las asambleas departamentales, concejos municipales y distritales, de terna conformada por quienes obtienen los mayores puntajes en convocatoria pública realizada conforme a la ley (Artículo 272 C.P.).

SERVIDORES PUBLICOS ELECTOS POR CORPORACIONES PUBLICAS LA REFORMA CONSTITUCIONAL OPTO POR CONSAGRAR UN SISTEMA DE CONVOCATORIA en lugar de UN CONCURSO PUBLICO DE MERITOS (Acto legislativo 02 de 2015)

En concepto del 10 de noviembre de 2015[39], la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación se ocupó de estudiar los antecedentes del Acto Legislativo 02 de 2015. Dicho pronunciamiento explicó las razones por las cuales, en el caso de los servidores públicos electos por corporaciones públicas, la reforma constitucional en cuestión optó por consagrar un sistema de convocatoria pública, en lugar de un concurso público de méritos. Sobre el particular señaló la referida Sala:

[…] Se entendió que si se adoptaba un concurso público de méritos como tal, se obligaba al organismo nominador a nombrar de acuerdo con el orden de clasificación de los aspirantes, lo que se consideró como una reducción indebida de la autonomía de las corporaciones públicas. Por tanto, se dijo, era necesario acudir a un sistema transparente, público, objetivo y basado en el mérito, pero que fuera distinto al concurso público en cuanto permitiera al organismo elector escoger entre los varios candidatos que superaran la etapa de selección […]

En relación con las diferencias existentes entre estos procesos de selección, el referido concepto sostuvo que la convocatoria pública «[…] comparte en lo sustancial los elementos propios del concurso público de méritos, salvo por el hecho de que no existe un orden de elegibilidad dentro de la lista de seleccionados […]».

De conformidad con lo señalado, la Sala concluye que, los procesos de selección que regula, por un lado, el artículo 125 superior y, por otro, los artículos 126, 231, 257A, 267 y 272 *ibidem* no resultan equiparables. Mientras que en los primeros, esto es, en los concursos públicos existe un orden obligatorio de escogencia entre los aspirantes que superan las respectivas pruebas según como se haya conformado la lista de elegibles, en las convocatorias públicas se conserva cierto grado de valoración que permite seleccionar a cualquiera que se encuentre en dicha lista, con independencia del puesto ocupado o el orden allí establecido.

Sin embargo, esto no significa que sean radicalmente opuestos. De hecho, en esencia, tanto la convocatoria pública como el concurso público de méritos son procesos de selección del empleo público que deben basarse en el respeto de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, celeridad, publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y mérito.

La Ley 909 de 2004 señaló en su artículo 2 que el mérito « […] es un elemento sustantivo de los procesos de selección del personal que integra la función pública […]» y, seguidamente, dispuso que

su aplicación puede ajustarse a los empleos públicos de libre nombramiento y remoción. Esto significa que todo empleo público que sea provisto mediante un proceso de selección o en virtud de la facultad discrecional consagrada para los cargos de libre nombramiento y remoción debe tener en cuenta la satisfacción del principio del mérito al momento de elegir a la persona que ha de ocuparlo.

CUADRO RESUMEN DE RIGUROSIDA DE DEPENDIENDO DE LA PROVISION DEL EMPLEO DEBE EVALUARSE EL MERITO.

La diferencia estará en la rigurosidad con la que, dependiendo de la forma de provisión del empleo, debe evaluarse el mérito. De acuerdo con ello y con la caracterización que se ha hecho hasta ahora, es posible esquematizar de la forma en la que sigue las escalas o grados de severidad con la que, en cada caso, debe calificarse tal criterio:

sistema de provisión del empleo público	**método de evaluación del mérito**	**graduación de la evaluación del mérito**
Concurso público	Aplicación de pruebas o instrumentos de selección	Estricta
Convocatoria pública	Aplicación de pruebas o instrumento de selección + Buen juicio del nominador	Intermedia
Facultad discrecional	Buen juicio del nominador	Leve

Legalidad del acto de elección del cargo convocado.

Dentro de los considerandos, el A-quo de la sentencia de tutela objeto de impugnación preciso que solo examinará la legalidad del acto de elección del cargo convocado, hizo énfasis en que la lista de elegibles en un documento que se encuentra en firme y por ser el consolidado del proceso ejecutado, es más que suficiente para que este juzgado haga su pronunciamiento en fallo de tutela y realice las apreciaciones correspondientes para la decisión que adopte.

Reproduce parte del acta N.5 que trata de la publicación de resultados obtenidos y publicación de lista de elegibles

Otro del considerando en la sentencia del fallo de tutela del A-quo es El artículo 2 de la resolución N. 077 del 17 de diciembre de 2020 establece lo siguiente:

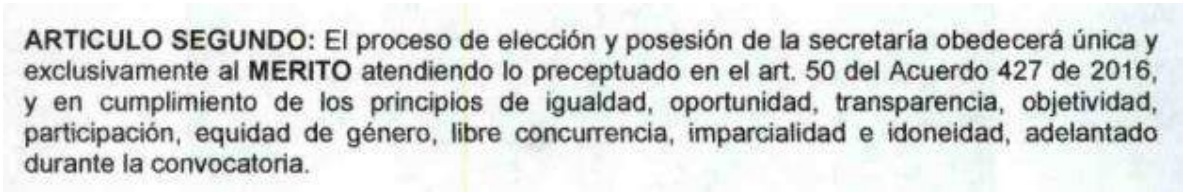
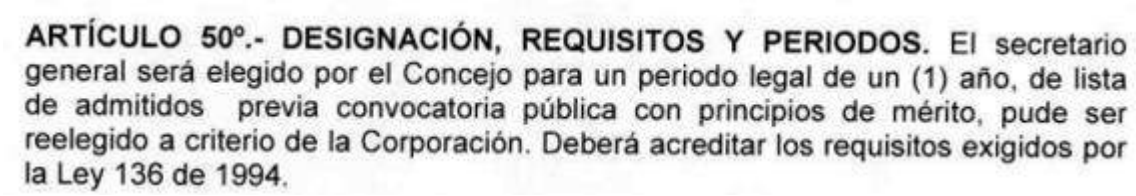


Figure 5 Tomada de la resolución 077 del 17 de diciembre expedida por la Mesa directiva del Consejo Municipal

Para realizar una precisiones sobre el articulo SEGUNDO Res. 077 del 2020, como hace mención al artículo 50 del reglamento del Concejo Art. 50 acuerdo 427 de 2016, se evidencia en la siguiente figura:



Se puede verificar del material probatorio que soporta el proceso de tutela que en el acta n.5 como bien lo relaciona el A-quo se conformó una lista de elegibles, dentro de la cual hay que resaltar que al inicio del proceso se presentaron 10 aspirantes, que 3 fueron no admitidas como se puede verificar en el listado de admitidos y no admitidos publicado, 2 renunciaron a continuar en el proceso finalmente 5 personas superaron todas las etapas previstas en el cronograma y criterios de mérito implementados.

Según la naturaleza del cargo, y teniendo en cuenta las consideraciones antes mencionadas se tiene que en el proceso de elección de secretaria se adelantó una Convocatoria Pública de acuerdo al art. 126 de la C.P y según el CONSEJO DE ESTADO, anterior mente se extrajeron algunos apartes por considerasen importantes para precisar alcance del acto legislativo 02 de 2015 SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA O-275-2019, " De conformidad con lo señalado, la Sala concluye que, los procesos de selección que regula, por un lado, el artículo 125 superior y, por otro, los artículos 126, 231, 257A, 267 y 272 *ibidem* no resultan equiparables. Mientras que en los primeros, esto es, en los concursos públicos existe un orden obligatorio de escogencia entre los aspirantes que superan las respectivas pruebas según como se haya conformado la lista de elegibles, en las convocatorias públicas se conserva cierto grado de valoración que permite seleccionar a cualquiera que se encuentre en dicha lista, con independencia del puesto ocupado o el orden allí establecido.

Nótese su señoría, que esa lista de elegibles que surge del proceso de la convocatoria y aplicando criterios de mérito en las diferentes pruebas, quiere decir que cualquiera de las 5 personas tiene el mérito y las capacidades y requisitos mínimos de ley para ocupar el cargo convocado mediante la convocatoria 048 de 2020 expedida por la mesa directiva del Concejo Municipal de Acacías.

Ahora, cuando el día de la elección los Concejales del Municipio de Acacías, dando cumplimiento al deber de elegir secretario general de la corporación y derecho a materializar dicha elección, se realiza la respectiva votación y eligen por mayoría de votos a la señora KATHERINE ARENAS ALVAREZ quien la comisión escrutadora declaro electa como secretaria general del Concejo Municipal, no se produce ninguna violación al principio del mérito y mucho menos irrespetar la lista de elegibles en firme, tan solo que según la naturaleza del cargo convocado y órgano elector una corporación pública según alcance de acto legislativo 02 de 2015 que modifico artículo 126 de la C.P se realiza mediante convocatoria y brinda como ya se puntualizó según el CONSEJO DE ESTADO la en las convocatorias públicas se conserva cierto grado de valoración que permite seleccionar a cualquiera que se encuentre en dicha lista, con independencia del puesto ocupado o el orden allí establecido.

Por lo tanto, se respetó la lista de elegibles, dado que se eligió una de las 5 integrantes de la lista, de lo contrario si sería desconocer la convocatoria y la Constitución política, el reglamento del concejo acuerdo 427 de 2016 art. 50 y en especial el derecho constitucional al debido proceso, el PRINCIPIO DE LEGALIDAD-Exige que la actividad estatal tenga como fundamento la constitución para el caso puntual aplicación art, 126 C.P.

ADMINISTRACION PUBLICA-Principio de moralidad y elección de secretaria general objeto de tutela

Es importante resaltar el principio de moralidad en el actuar en mi calidad de Concejala del Municipio de Acacías – Meta y que participe en el proceso de selección mediante convocatoria Pública del cargo objeto de tutela de la señora Morera Anaya. Como servidora pública tengo el deber de cumplir y defender la Constitución desempeñando lo que ordena la ley, ejerciendo mis funciones de la forma prevista por la Carta, la Ley y el Reglamento, Como bien lo define en la Sentencia C-826/13:

"…Acerca del principio de moralidad en el ámbito de los deberes jurídicos de la administración pública, recuerda la Corte que el artículo 6° de la Constitución Política señala que los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones… Lo anterior, expresado con otras palabras, quiere significar que los servidores públicos están obligados a hacer solo lo que les está permitido por la ley, de manera que cuando hay omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones están sobrepasando lo que por orden constitucional les está permitido ejecutar…

…este principio es extensible a toda la actividad estatal, en virtud de los artículos 1° y 2° superiores. El principio de moralidad en la administración pública cobija todas las actuaciones de los funcionarios del Estado y de los particulares que cumplen funciones públicas.

La jurisprudencia constitucional ha puesto de relieve que en la Constitución se establecieron múltiples instrumentos encaminados a asegurar **el respeto del principio de moralidad**, en cuanto el texto superior señala claros mandatos destinados a asegurar el cumplimiento transparente e imparcial de las funciones públicas (arts. 83, 122, 123, 124, 125, **126**, 127,128, 291, 292 C.P.."

Es mi deber puntualizar que en el marco del principio de moralidad, aclarar que en el desarrollo tanto de comisión accidental para verificar los requisitos mínimos de la convocatoria, como en el cumplimiento de mi deber de concejal de elegir secretaria general del Concejo Municipal de Acacías di estricto cumplimiento al artículo 126 de la Constitución Política, la ley 136 de 1994 y reglamento interno en lo referente a la elección de secretaria general, a la resolución 048 de 2020 y 073 y 077 expedidas por la mesa directiva del Concejo Municipal en el marco de la Convocatoria para la elección de secretaria del 2021 de la corporación accionada.

De la solicitud de la accionante me permito reiterar como ya lo realicé en la contestación de tutela en su debida oportunidad, pero, que no fue tenida en cuenta por el A-quo

De las pretensiones solicitadas en la Tutela, **solicito se denieguen, en este caso de impugnación se revoquen todas y cada una de las concedidas por el A-quo a la Accionante señora Morera Anaya en el fallo de primera instancia, dado que carecen de sustento jurídico, la accionante pretende que el concejo elija como si fuera un CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Y puesto que es claro que el concejo Municipal de Acacías, danto aplicación a la CONVOCATORIA PÚBLICA** realizada podía votar por cualquiera de las aspirantes de la lista de elegibles publicada y en firme, en medio de uso de su **autonomía dada a las Corporaciones Públicas**. Como lo diferencia claramente y aclara en **Concepto Sala de Consulta C.E. 2274 de 2015 Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil… "**Además, como ha reiterado la jurisprudencia, es característica esencial del concurso que la lista de elegibles se ordene estrictamente de acuerdo con el resultado del procedimiento de selección (regla de mérito), de modo que quien obtiene la mejor calificación adquiere el derecho a ser nombrado en el respectivo cargo. (…) Ahora bien, en el caso consultado los debates legislativos dan cuenta de que el Acto Legislativo 2 de 2015 al utilizar la expresión "convocatoria pública" optó por un mecanismo de elección que si bien se funda en los mismos principios básicos de los concursos públicos (incluso en cuanto al criterio de mérito), **se diferencia de estos en que al final del proceso de selección las corporaciones públicas conservan la posibilidad de valorar y escoger entre los candidatos que han sido mejor clasificados**. Se entendió que si se adoptaba un concurso público de méritos como tal, se obligaba al organismo nominador a nombrar de acuerdo con el orden de clasificación de los aspirantes, lo que **se consideró como una reducción indebida de la autonomía de las corporaciones públicas**. Por tanto, se dijo, era necesario acudir a un sistema transparente, público, objetivo y basado en el mérito, pero que fuera distinto al concurso público en cuanto permitiera al organismo elector escoger entre los varios candidatos que superaran la etapa de selección. (…) De este modo, además de que literalmente se trata de expresiones distintas y que el nuevo artículo 126 Constitucional alude a una y otra como figuras separadas (al señalar que la convocatoria aplicará "salvo los concursos regulados por la ley"), la Sala observa que los antecedentes del Acto Legislativo 2 de 2015 ratifican que el constituyente derivado quiso diferenciar la convocatoria pública del concurso público de méritos del artículo 125 de la Constitución Política, particularmente porque en los procesos de elección mediante convocatoria pública no existe un orden obligatorio de escogencia entre los candidatos que superan las etapas de selección, tal como ocurre en los concursos de méritos. Así pues, el **sistema de convocatoria pública mantiene un grado mínimo de valoración o discrecionalidad política en cabeza de las corporaciones públicas para escoger entre quienes**

se encuentran en la "lista de elegibles", aspecto que constituye el elemento diferenciador entre la convocatoria pública de los artículos 126, 178A, 231, 257, 267 y 272 de la Constitución Política, y el concurso público de méritos a que alude el artículo 125 de la misma Carta..."

Sumado a los argumentos anteriormente expuestos, considero que las consideraciones expuestas por el A-quo, incluyendo las sentencias que enuncia aplican para concurso público de mérito, desconociendo la naturaleza puntual del cargo de secretaria general del Concejo Municipal, que es un cado de periodo fijo, que aplica la normatividad antes relacionada.

Por consiguiente, se hace imperiosa la necesidad de aceptar la impugnación a la tutela del A-quo, retrotraer en el efecto devolutivo los actos que realizaron para dar imperioso cumplimiento de parte del Concejo Municipal, levantar las medidas cautelares y proceder a nombrar a la señora KATHERINE ARENAS ALVAREZ como la elegida en derecho, en virtud del principio de legalidad y debido proceso a posesionarse como secretaria general del concejo municipal para el 2021 y cesar su vulneración a derechos adquiridos.

Por otra parte, expresar muy respetuosamente que en el desarrollo de la sesión donde se dio estricto cumplimiento al fallo de tutela del A-quo donde se concedió la acción de tutela a la señora PATRICIA MORERA ANAYA y Ordeno a los integrantes del Concejo Municipal de Acacias Meta , al presidente del Conejo Municipal que en el término de 48 horas procediera a nombrar en el cago a la accionante para el cargo de secretaria general del concejo para el periodo 2021 sentía que se vulneraban derechos especialmente a la señora KATHERIBE ARENAS ALVAREZ y a la corporación con el derecho a elegir de acuerdo a la constitución y naturaleza del cargo, algo presuntamente similar a fraude a la ley, como lo define Sentencia T-073/19 en:

ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE TUTELA-Caso en que una persona jurídica considera vulnerados sus derechos por un fallo de tutela al creer que la providencia fue producto de una situación de fraude

FRAUDE A LA LEY-Definición

Un comportamiento puede calificarse como fraudulento cuando la actuación, que en apariencia se ajusta a la prescripción normativa, en la realidad conlleva una situación manifiestamente contraria a un principio del ordenamiento superior. De este modo, el fraude se presenta como un supuesto de infracción indirecta de la ley, por dos razones. Por una parte, los actos realizados en fraude a la ley no impiden la debida aplicación de la norma que se hubiese tratado de eludir. Por otra, producen una situación que atenta contra el orden constitucional y los principios que inspiran el reconocimiento de un derecho previsto por una disposición particular, la cual es empleada para obtener el resultado no deseado por el legislador. La esencia de la institución del fraude a la ley es, precisamente, contribuir a la coherencia del derecho, al ajuste entre las reglas y principios que las fundamentan y limitan, a evitar que se produzcan ciertas consecuencias contrarias a principios jurídicos, con independencia de la intención o motivo que condujeron al actor a la aplicación irregular que se censura.

INEXISTENCIA DE VULNERACION DE DERECHOS FUNDAMENTALES A LA ACIONANTE

La accionante enuncia que pone acción de tutela por violación al debido proceso, a la igualdad, al trabajo y acceso a cargos públicos a través del mérito, a continuación se analiza y desvirtúa cada uno de los derechos considerados por el A-quo vulnerados a la impetrante por el Concejo Municipal de Acacías.

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

El presente asunto no es un evento en el que sea necesario conjurar un perjuicio irremediable, por cuanto no concurren los elementos del derecho al debido proceso protegidos en concursos de méritos que den cuenta de una amenaza *cierta* y *probable*

Según, SENTENCIAS T-225 DE 1993, SU-544 DE 2001 Y SU-772DE 2014, La jurisprudencia constitucional ha señalado que el respeto al debido proceso involucra *"los derechos de defensa, contradicción y controversia probatoria, el derecho de impugnación, y la garantía de publicidad de los actos de la Administración"*

Según SENTENCIA T-604 DE 2013, esto significa el deber de la entidad administradora del concurso de:

(i) fijar de manera precisa y concreta las condiciones, pautas y procedimientos del concurso,

(ii) presentar un cronograma definido para los aspirantes

(iii) desarrollar el concurso con estricta sujeción a las normas que lo rigen y, en especial, a las que se fijan en la convocatoria,

(iv) garantizar *"la transparencia del concurso y la igualdad entre los participantes,*

(v) asegurar que *"los participantes y otras personas que eventualmente puedan tener un interés en sus resultados, tienen derecho a ejercer control sobre la forma como se ha desarrollado*

(vi) no someter a los participantes a una espera indefinida y con dilaciones injustificadas

En tales términos, la Corte ha indicado que la acción de tutela procede únicamente ante la necesidad de *"adoptar las medidas que se requieran para que las personas que se consideren afectadas por las irregularidades detectadas en un concurso, puedan disfrutar de su derecho*.

En el asunto sub examine, el concejo Municipal expidió las resoluciones 048, 073 y 077 que dan las pautas para desarrollar la convocatoria, entre estos el cronograma, se desarrolló el concurso con estricta sujeción a las normas que lo rigen en especial al artículo 126 de la C.P con criterios de mérito de acuerdo a la naturaleza del cargo convocado, todos los actos se publicaron en cartelera y en la página web del Concejo Municipal, se disponía de canales de comunicación disponibles, tanto es así que la concursante Morera Anaya, inicialmente no había salido en la lista de admitidos, presento recurso en el término y se le dio contestación oportuna y quedo oficialmente entre los 4 concursantes admitidos en desarrollo de la convocatoria. Soportes que me permito anexar como pruebas, el cronograma se desarrolló sin dilataciones injustificadas y dentro de los parámetros legales. Diferente es que la accionante y el A-quo realicen aseveraciones que se actuó indebidamente porque se dio aplicabilidad a la naturaleza del cargo se efectuó la elección en el entendido que aplica la convocatoria pública de mérito y brinda un margen de discrecionalidad al elegir de la lista de elegibles sin orden estricto de puntuación.

DERECHO A LA IGUALDAD

El artículo 13 de la C.P dispone que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, por lo cual deben recibir el mismo trato y gozan de iguales derechos, libertades y oportunidades, adicionalmente no podrán ser sometidas a ninguna clase de discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. La corte constitucional a determinado que el derecho a la igualdad tiene dos dimensiones 1. Formal o ante la ley y material o de trato. En el desarrollo del proceso no se fundamentó la existencia real de trato desigual a los participantes.

DERECHO AL TRABAJO

El articulo 25 superior dispuso "… el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del estado, toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas… la Corte

Constitucional desato su importancia en al menos tres dimensiones: 1. Como garantía de las condiciones mínimas de subsistencia puesto que de esta forma la persona puede obtener un sustento económico para cubrir dignamente las necesidades básica personales y de su núcleo, 2. Es un presupuesto de autonomía personal en la medida en que protege la potestad del individuo para auto determinarse y con ello tener un modelo de vida acorde con sus intereses, convicciones, inclinaciones y deseos, y 3. Promueve la realización personal como quiera que le permite al individuo el ejercicio y desarrollo de sus habilidades aptitudes, al igual que sentirse útil y tener un reconocimiento social. Circunstancias que no se argumentaron ni se encuentra probada en el proceso de tutela interpuesto por la señora Morera Anaya. Tan solo se hace énfasis en que si no se elegía el primero de la lista se vulneraba el principio del mérito, desconociendo la normatividad que aplica para la convocatoria pública que le permite escoger del listado de elegibles según el mérito la persona que por mayoría de votos la corporación considere pertinente, en la lista de elegibles contrario a lo que argumenta la accionante todas las personas que hacen parte de la lista tienen igualdad de oportunidades para ser elegida, solo una vez elegida se materializa un acto de carácter particular y concreto que genera derechos y obligaciones para la persona y la entidad accionada., en cumplimiento del alcance que el legislador quiso darle en el inciso 4 del artículo 126 modificado por el acto legislativo 02 de 2015 al diferenciarlo del concurso publico de méritos.

DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA CONFIANZA LEGITIMA. -

En principio constitucional de la confianza legítima tiene fundamento en el principio de la Buena Fe, previsto en el artículo 83 de la Constitución y a partir de allí la Corte Constitucional, la definió así. "consiste en que la administración por medio de una conducta uniforme hace entender al administrado que la actuación es tolerada. Es decir, que las acciones de la administración durante un tiempo prudencial hacer nacer en el administrado la expectativa de que su comportamiento se ajusta a derecho:" Más adelante la Corte añade los elementos para que pueda configurarse la Confianza Legítima. "El principio de la confianza legítima, particularmente se basa en tres presupuestos: (i) la necesidad de preservar de la menara perentoria el interés público, (ii) una desestabilización cierta y evidente entre la administración y los administrados; y (iii) la necesidad de adoptar medidas por un periodo transitorio que adecuen la actual a la nueva realidad. De esta forma, el principio de la buena fe, en su dimensión de confianza legítima, compele a las autoridades y a los particulares

a conservar coherencia en sus actuaciones, un respeto por los compromisos adquiridos y una garantía de estabilidad y durabilidad de la situación que objetivamente permita esperar el cumplimiento de las reglas propias del tráfico jurídico." (subrayado y resaltos míos)

De acuerdo a lo anterior, no se vulneró el derecho fundamental de la Confianza Legítima por cuanto dichos procesos, en años anteriores y como lo determina la Constitución, la ley, el reglamento y la jurisprudencia deben ser realizados mediante convocatoria pública y no como lo determina el fallo de primera instancia, como Concurso de méritos. En el anterior concepto pudo ocurrir que el operador judicial en el fallo de primero instancia, a pesar de la norma constitucional (art. 126), la ley (136 de 1994), el reglamento del Concejo (Acuerdo 427 de 2016) y los diferentes actos administrativos de la mesa directiva del concejo, de invitación a participar de los interesados al cargo de secretario general del Concejo de Acacías, siempre manifestaban la realización por convocatoria pública y en último acto administrativo lo tomaron las palabras concurso de méritos, en lugar de "principio de mérito", por posible error gramatical o mala fe de los miembros de la mesa directiva que presumiblemente perseguían un interés personal, que son hechos distintos.

En consecuencia, de preservar el derecho fundamental de la Confianza legítima, en el presente caso, se podría generar hacia futuro la extralimitación de funciones a los concejales al modificar de manera tácita la convocatoria pública para la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones pública, como está establecido, y que aún no ha sido reglada por la ley.

DERECHO AL ACCESO A CARGOS PUBLICOS A TRAVES DEL MERITO

Este derecho constitucional fue regulado en el artículo 40 superior, numeral 7, ".. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación del ejercicio y control del poder político. Par hacer efectivo este derecho puede…7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad, la ley reglamentará esta excepción y determinar los casos a los cuales ha de aplicarse.

Este derecho se materializa en la garantía que le asiste a todo ciudadano de una vez cumplidos los requisitos previstos en una determinada convocatoria pública, presentarse a concursar y reflejar la materialización de la democracia

participativa. Dentro de los requisitos que la Corte constitucional a señalado en su alcance para l ámbito de protección e este derecho, esta 1. La posesión de las personas que han cumplido con los requisitos para acceder a un cargo, 2. La prohibición de establecer requisitos adicionales para entrar a tomar posesión de un cargo, cuando el ciudadano a cumplido a cabalidad con las exigencias establecidas, 3 la facultad de elegir de entre las opciones disponibles aquella que más se acomoda a las preferencias de quien ha participado y ha sido seleccionado en dos o más concursos, 4. La prohibición de remover de manera ilegítima (ilegitimidad derivada del debido proceso) a una persona que ocupe un cargo público.

En el caso puntual no se encuentra sustentado jurídicamente violación el derecho al acceso a pargos públicos a través del mérito, puesto que como ya se explicó al diferenciar el concurso publico de mérito y la convocatoria y el grado de aplicación del mérito varia al escoger de la lista de elegibles previa aplicación de las pruebas y parámetros establecidos, para el caso concreto las 5 personas que conformaron la lista de elegibles es porque tienen mérito para ocupar el cargo y desarrollar sus funciones con el fin del cumplimiento de los fines esenciales del estado, por otra parte tan solo que en el momento de la elección solo la candidata elegida por la corporación pública obtiene el derecho particular y concreto de ser nombrada y posesionada en el cargo, para este caso es la señorita KATERINE ALVAREZ.

EN CONCLUSION NO SE MATERIALIZA LA VIOLACION DE DERECHOS FUNDAMENTALES INVOCADOS POR LA ACCIONANTE Y HERRO EL AQUO AL DESESTIMAR LAS RAZONES EXPUESTAS EN LA CONTESTACION DE A TULTELA DE LA CONCEJALA LILIANA BAQUERO. AL DAR POR HECHO QUE DEL PROCESO DE SELECCIÓN REALIZADO PARA EL CARGO CONVOGADO APLICABA LAMODALIDAD DE CONCURSO DE MERITOS Y SE OBLIGABA AL CONCEJO A ELEGIR AL PRIMERO DE LA LISTA DE ELEGIBLES. Desconociendo el alcance que el legislador mediante acto legislativo le quiso dar al diferenciar la forma de proveer el cargo de secretaria general de una corporación pública. Al no haberse materializado violación alguna a los derechos fundamentales impetrados por la accionante, en cambio si los derechos de la accionante tienen límites que podrían a raíz de la decisión errada del A-quo al realzar una indebida interpretación y aplicación del mérito en

convocatoria pública, vulnera los derechos que le genero la elección de la secretaria a la concursante elegida por la corporación.

Por todo lo anterior mente expuesta:

Solicito de manera respetuosa su señoría : tener en cuenta la contestación a la tutela que se realice en oportunidad legal y las consideraciones sustentadas en este recurso de impugnación, realizado con el fin de que se sustente la solicitud de Revocar el fallo de primera instancia de la tutela de referencia, concederlo en términos de efecto devolutivo, dejar sin efecto todas las actuaciones administrativas que se hayan adelantado con posterioridad a la elección de la señora KATHERINE ARENAS ALVAREZ y como consecuencia reiniciar la convocatoria de mérito en el estado en que se encontraba antes de conceder efectos de la tutela de referencia con la finalidad de proveer el cargo objeto de la convocatoria en el menor tiempo posible.

NOTIFICACIONES

Email: liliconcejal@gmail.com, carrera 17ª n. 10 46 barrio jardín. Acacías – Meta, celular 3008716561

ANEXOS

- ✓ RECURSO PRESENTADO POR LA ACCIONANTE PATRICIA MORERA ANAYA
- ✓ CONTESTACON AL RECURSO PRESENTADO
- ✓ Sentencia T-425/19 ACCION DE TUTELA FRENTE A ACTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE CONCURSO DE MERITOS-Improcedencia por cuanto no se evidenció un perjuicio irremediable y la actuación de la administración no fue irrazonable ni desproporcionada
- ✓ SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA O-275-2019 CONSEJO DE ESTADO nueve (09) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) Referencia: NULIDAD
- ✓ SENTENCIA: TAM004 20-11-212 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META MEDIO DE CONTROL: NULIDAD ELECTORAL, DEMANDANTE: JOSÉ ENRIQUE MOLINA ROJAS, DEMANDADO: CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS-META y LEIDY

De usted,

Cordialmente,

LILIANA MARCELA BAQUERO TORRES
CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE ACACIAS 2019-2023
CELULAR 3008716561

Fecha Providencia	09/12/2019
Fecha de notificación	09/12/2019

Sala: Sala de lo Contenciosos Administrativo
Subsección: null
Consejero ponente: William Hernández Gómez
Norma demandada: Decreto 2485 de 2014, así como del Título 27 del Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, artículos 2.2.27.1 al 2.2.27.6., por medio de los cuales «se fijan los estándares mínimos para el concurso público y abierto de méritos para elección de personeros municipales
Demandante: JOSÉ IGNACIO ARANGO BERNAL Y OTRO
Demandado: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y OTRO

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá, D. C., nueve (09) de diciembre de dos mil diecinueve (2019)
Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001-03-25-000-2015-01089-00 (4824-2015)
11001-03-25-000-2016-00001-00 (0001-2016) (ACUMULADO)
Demandantes: JOSÉ IGNACIO ARANGO BERNAL Y OTRO
Demandados: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y OTRO
Temas: Concurso público y abierto de méritos para elección de personeros municipales.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA O-275-2019

1. **ASUNTO**

La Sala dicta la sentencia que en derecho corresponda en los procesos judiciales[1] tramitados en virtud del medio de control de nulidad de que trata el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 que ejercieron los señores (i) David Alonso Roa Salguero[2] en contra del Departamento Administrativo de la Función Pública[3] y (ii) José Ignacio Arango Bernal en contra de esta última entidad y de la Nación, Ministerio del Interior y de Justicia[4].

2.DEMANDAS

2. **PROCESO 11001-03-25-000-2015-01089-00 (4824-2015)[5]**

1. **Pretensiones**

Principal: Que se declare la nulidad del Decreto 2485 de 2014, así como del Título 27 del Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, artículos 2.2.27.1 al 2.2.27.6., por medio de los cuales «se fijan los estándares mínimos para el concurso público y abierto de méritos para elección de personeros municipales».
Subsidiaria: Que se declare la nulidad del artículo 4 del Decreto 2485 de 2014, compilado en el artículo 2.2.27.4 del mencionado Decreto 1083 de 2015.

1. **Normas violadas y concepto de violación**

En la demanda se invocaron como normas vulneradas el preámbulo y los artículos 1, 2, 40, 189-11, 150, 287 y 313-8 de la Constitución Política; 2, inciso 4, del Acto Legislativo 2 de 2005; 35, inciso 1, de la Ley 1551 de 2012; y 37 de la Ley 1437 de 2011.
Como concepto de violación, manifestó que los actos demandados incurrían en las siguientes causales de nulidad:

- **Falta de competencia por existir reserva de ley:** Adujo que los actos administrativos demandados adolecen de este vicio porque la regulación del proceso de elección de personeros municipales es una materia sometida a reserva de ley.

Al respecto, explicó que así lo disponen los artículos (i) 313 superior, numeral 8, que prevé que a los concejos municipales les corresponde «Elegir personero para el periodo que fije la ley y los demás funcionarios que esta determine»; (ii) 35 de la Ley 1551 de 2012, que modificó el 170 de la Ley 136 de 1994, según el cual los personeros deben elegirse «[…] previo concurso público de méritos de conformidad con la ley vigente […]»; (iii) artículo 2, inciso 4, del Acto Legislativo 02 de 2015, que dispuso que «[…] la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley […]». Además, señalo que así lo sostuvo la Corte Constitucional en sentencia C-105 de 2013.

- **Falta de competencia por exceso en el ejercicio de la facultad reglamentaria y desconocimiento de normas superiores en que debía fundarse:** Puntualmente en lo que se refiere al artículo 4 del Decreto 2485 de 2014, la demanda precisó que vulnera el principio democrático porque si la vacante del empleo de personero debe proveerse con quien ocupe el primer puesto de la lista, ello implica omitir la deliberación necesaria que merece un proceso de elección de tal naturaleza, confundiéndolo abiertamente con aquellos previstos para los empleos de carrera.

En punto a este reproche, indicó que el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012, que modificó el 170 de la Ley 136 de 1994, no reguló en modo alguno que la vacante se ocuparía con la persona que quede en el primer puesto de la lista. De ello emerge que, a través del acto acusado, el Gobierno Nacional se extralimitó en el ejercicio de la facultad reglamentaria, desnaturalizando la intención que tuvo la Ley 1551 de 2012 de favorecer el debate democrático y la participación ciudadana a través de los concejos municipales, en un proceso novedoso que, si bien pretendía privilegiar el mérito, nunca buscó vaciar de competencia a dichas corporaciones para elegir al personero municipal.
En línea con lo anterior, adujo que, para encontrar un punto de equilibrio entre las competencias de los concejos municipales y distritales, por un lado, y el mérito en la escogencia de personeros, por el otro, la lista de elegibles debería permitir la preselección de varios candidatos entre quienes obtuvieron los más altos puntajes a efectos de que, entre ellos, los concejales abran un diálogo democrático fruto del cual puedan elegir a quien debe ocupar el cargo. Agregó que la anterior situación se traducía en el desconocimiento del principio de autonomía de las entidades territoriales.

2. **PROCESO 11001-03-25-000-2016-00001-00 (0001-2016)[6]**

1. **Pretensiones**

Primera: Que se declare la nulidad parcial del artículo 2.2.27.4. del Decreto 1083 de 2015, respecto de la expresión «con la persona que ocupe el primer puesto de la lista».
Segunda: Que se declare que los concejos municipales podrán elegir a quien consideren de la lista de elegibles que arroje el proceso de selección en concurso público de méritos.

1. **Normas violadas y concepto de violación**

El demandante estimó vulnerados los artículos 313, numeral 8, de la Constitución Política; 35 y 170 de la Ley 136 de 1994, este último modificado por el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012.
Como concepto de violación, expresó que el acto administrativo parcialmente acusado resulta nulo debido a la **falta de competencia por exceso en el ejercicio de la facultad reglamentaria y desconocimiento de normas superiores en que debía fundarse**. Al respecto, indicó que el artículo 313 superior, numeral 8, dispone que el concejo municipal elegirá al personero municipal, lo que supone de conformidad con el significado de dicho verbo que la corporación pública debe tener la facultad de seleccionar entre varias opciones a la persona que ocupará el cargo, lo que no se garantiza con la norma demandada puesto que su contenido desnaturaliza ese proceso de selección a un simple acto protocolario en el que los concejales se ven obligados a dar su voto al candidato que se ubique primero en la lista de elegibles.
En línea con lo anterior, manifestó que en este caso se configurarían los supuestos que la Corte Constitucional precisó en sentencia C-105 de 2013 para predicar un vaciamiento de las competencias constitucionalmente atribuidas a los órganos de las entidades territoriales en la elección de servidores públicos que no son de carrera.
3.CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

3. **PROCESO 11001-03-25-000-2015-01089-00 (4824-2015)**

Nación, Ministerio del Interior[7]
Se opuso a la prosperidad de las pretensiones con apoyo en las siguientes consideraciones:
En primer lugar, indicó lo complejo que resulta definir los límites de la competencia del ejecutivo cuando ejerce función reglamentaria, destacando en ese sentido la facilidad con la que cualquier desarrollo podría calificarse, *prima facie,* como una alteración del núcleo esencial del derecho o la figura regulada.
Asimismo, llamó la atención en cuanto a que el término «ley» no debe entenderse necesariamente como la voluntad del legislador pues una lectura más amplia del concepto permite incluir las diferentes manifestaciones normativas.
De otro lado, afirmó que el contenido de los actos administrativos demandados no es novedoso, siendo una reproducción de principios que ya se habían contemplado en normas superiores que regulan lo relativo al concurso de méritos, tales como las Leyes 443 de 1998 y 909 de 2004.
Agregó que es precisamente el silencio de ciertas normas, en este caso de la Ley 1551 de 2012, el que exige la intervención de ejecutivo por medio del uso de la potestad reglamentaria.
Con base en ello, sostuvo que los decretos acusados se enmarcan dentro del término «ley» establecido en los artículos 2 del Acto Legislativo 2 de 2015 y 35 de la Ley 1551 de 2012, por lo que no resultaba viable predicar el quebrantamiento del principio de reserva legislativa.
De igual manera, negó que aquellos actos hubieran creado supuestos normativos ajenos a las normas reglamentadas o que en su expedición el ejecutivo hubiese extralimitado el ejercicio de su facultad reglamentaria, último punto frente al cual resaltó que las funciones técnicas que le corresponden a las entidades demandadas se encuentran en armonía con las temáticas que desarrolló la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012.
Aunado a lo anterior, puso de presente que la Sala de Consulta y Servicio Civil, por medio de concepto del 3 de agosto de 2014 (expediente 2261-14), ratificó la vigencia del Decreto 2485 de 2014, de la Ley 1551 de 2012 y del tipo de elección que esta prevé en relación con los personeros.
En cuanto a los reproches que formuló la demanda frente al artículo 4 del Decreto 2485 de 2015, señaló que estos se desvirtúan con sustento en la sentencia C-105 de 2013, en la que la Corte Constitucional negó que la exigencia de un concurso público de méritos para elegir a los personeros municipales contraviniese el principio democrático. Indicó también que la providencia hizo énfasis en la necesidad de que la elección de cargos de esa naturaleza se encuentre

precedida de un procedimiento que garantice que el funcionario electo sea imparcial y ajeno a vínculos de orden político.
Por último, en punto a la alegada afectación de la autonomía de los entes territoriales, adujo que esta resulta constitucionalmente aceptable cuando su limitación deviene proporcionada y razonable en virtud de la necesidad de salvaguardar principios que en el caso concreto resultan superiores.
Departamento Administrativo de la Función Pública[8]
Se opuso a la prosperidad de las pretensiones por considerar que el demandante no había logrado desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados. Como fundamento de esta posición, señaló que el Gobierno Nacional se encontraba facultado para que en desarrollo de la Ley 1551 de 2012, fijara los estándares mínimos del concurso público y abierto de méritos en aras de elegir los personeros municipales, máxime cuando dicha reglamentación, además de ajustarse al artículo 313-8 de la Constitución, al artículo 35 de la citada Ley y a la sentencia C-105 de 2013, en nada afecta la autonomía de las entidades territoriales, ni vacía la competencia de los concejos municipales en lo que se refiere al control y direccionamiento efectivo del concurso.
Adicionalmente, sostuvo que el Consejo de Estado ya se había pronunciado sobre la problemática jurídica planteada a través de la Sala de Consulta y Servicio Civil, quien en Conceptos 2261 de 2015, 2274 de 2015 y 2283 de 2016 sostuvo que los personeros deben ser nombrados en estricto orden de mérito como resultado de un concurso abierto y público.
Finalmente, precisó que no existen fundamentos para colegir la vulneración del artículo 313-8 superior toda vez que este no ordena que los personeros sean elegidos por un sistema de ternas u otra figura semejante, con el consecuente desconocimiento de las listas de elegibles conformadas en los procesos meritocráticos.

3. **PROCESO 11001-03-25-000-2016-00001-00 (0001-2016)**

Departamento Administrativo de la Función Pública[9]
La entidad formuló oposición a las pretensiones de la demanda con apoyo en los mismos argumentos que presentó en el proceso con radicado 11001-03-25-000-2015-01089-00 (4824-2015).

4. **INTERVENCIÓN DE TERCEROS**

Delio Andrés Vargas Guerrero[10]
Se vinculó al proceso en calidad de coadyuvante de la parte demandante por considerar que el Decreto 2485 de 2014 y el Título 27 del Decreto 1083 de 2015 están viciados de nulidad al incurrir en las causales de falta de competencia y violación de normas superiores. Con tal fin, estimó vulnerados el preámbulo y los artículos 1, 2, 40, 189-11, 150, 287 y 313-8 de la Constitución Política; 2, inciso 4, del Acto Legislativo 2 de 2005; y 35, inciso 1, de la Ley 1551 de 2012.

5. **DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL**

En el marco de la parte oral del proceso bajo la Ley 1437 de 2011, la principal función de la audiencia inicial es la de precisar el objeto del proceso y de la prueba. En esta etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma, de la contestación o de la reconvención. Además, se conciertan las principales decisiones que guiarán el juicio.
Con fundamento en lo anterior, se resumen los puntos más importantes de la audiencia inicial, a modo de antecedentes:

[…] EXCEPCIONES PREVIAS O MIXTAS (art. 180-6 CPACA)

Las demandadas no propusieron ninguna excepción previa ni mixta. Por su parte, el despacho no encontró probada ninguna otra de las enlistadas en el artículo 100 del CGP ni de las enunciadas en el numeral 6 del artículo 180 del CPACA.
Decisión notificada en estrados.
[…]

FIJACIÓN DEL LITIGIO (art. 180-7 CPACA)[11]

[…] Del análisis de las pretensiones, el concepto de violación de ambas demandas y las contestaciones, el despacho, de manera provisional, fijó los siguientes **problemas jurídicos**, que se contraen a determinar si los actos demandados son nulos por las causales de violación de las normas en que debían fundarse y por falta de competencia, así:
Primero: ¿La materia objeto de los actos administrativos acusados está sometida a reserva de ley y, por ende, es totalmente nulo el Decreto 2485 de 2014 y parcialmente el Decreto 1083 de 2015, al haberse expedido por las entidades demandadas
Segundo: ¿El Ministerio del Interior y el Departamento Administrativo de la Función Pública excedieron el ejercicio de la facultad reglamentaria a través de los artículos 4 del Decreto 2485 de 2014 y el 2.2.27.4 del Decreto 1083 de 2015
Tercero: ¿Son nulos los artículos 4 del Decreto 2485 de 2014 y el 2.2.27.4 del Decreto 1083 de 2015 por desconocimiento del principio democrático y el de autonomía de las entidades territoriales
Interrogados el apoderado del Ministerio de Interior y el Ministerio Público frente a los problemas jurídicos planteados, manifestaron estar conformes.
Decisión notificada en estrados […]

6.ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

David Alonso Roa Salguero[12]

En sus alegatos de conclusión reiteró brevemente que el acto administrativo demandado debe declararse nulo toda vez que desconoce la facultad que tienen los concejos municipales para elegir discrecionalmente al personero, por disposición del artículo 313 superior, numeral 8.

Departamento Administrativo de la Función Pública[13]

En esta etapa procesal confirmó los argumentos expuestos en la contestación de la demanda relativos a sostener que los actos acusados son el reflejo de un adecuado y riguroso desarrollo de lo que establecen el artículo 313 numeral 8 de la Constitución Política, la Ley 1551 de 2012 y las reglas que la jurisprudencia constitucional ha sentado en materia de concursos de personeros. En tales condiciones, afirmó, los cuestionamientos de los demandantes resultan infundados.

Ministerio del Interior[14]

En sus alegatos de conclusión se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, para lo cual reprodujo lo expuesto en la contestación de aquella.

7. **MINISTERIO PÚBLICO**

No se pronunció en esta oportunidad procesal.

8. CONSIDERACIONES

8. **Cuestiones preliminares**

1. **Clasificación del empleo público y su provisión**

El artículo 40, numeral 7, de la Constitución Política consagra el derecho de acceso a cargos públicos, el cual ha sido entendido como la garantía que le asiste a todo ciudadano de participar en un determinado proceso de selección para aspirar a un empleo público, una vez cumplidos los

requisitos previstos para tal fin. Asimismo, dentro de la esfera de protección de tal derecho, a quien ha sido nombrado y posesionado en un cargo de dicha naturaleza debe garantizársele no ser removido arbitrariamente de este, al igual que las condiciones necesarias para el normal desempeño de sus funciones.

La Corte Constitucional ha destacado la categoría de derecho fundamental que ostenta aquel en la medida en que, al promover la participación ciudadana en la conformación, ejercicio y control del poder político, permite lograr la efectividad de la democracia participativa.

Ahora bien, la forma de acceso al empleo público dependerá de la tipología dentro de la cual pueda enmarcarse el cargo respectivo. Los criterios de clasificación del personal al servicio de la administración pública se encuentran contenidos esencialmente en los artículos 123 y 125 superiores. De acuerdo con el primero de ellos, es posible establecer una categoría general denominada «servidores públicos», dentro de la que están comprendidos 1) los miembros de las corporaciones públicas; 2) los trabajadores oficiales; y 3) los empleados públicos.

Por su parte, el artículo 125 *ibidem* consagra como tipos de empleo público los (i) de carrera; (ii) de libre nombramiento y remoción; (iii) de elección popular; (iv) de trabajador oficial y (v) los demás que determinen la Constitución y la ley, últimos dentro de los cuales pueden identificarse los empleos de periodo fijo; los temporales; y aquellos cuyas funciones deban ser ejercidas en las comunidades indígenas[15].

Cada uno de estos estos empleos es provisto de diferente forma según la tipología a la que respondan. Así, el sistema de provisión de los cargos de carrera está dado por el concurso público[16], el cual constituye la regla general pues ha de aplicar a los empleos de dicha naturaleza y a cualquier otro, cuando la Constitución o la ley no hayan determinado uno distinto. En tales eventos, una vez elegida la persona que ha de ocupar el puesto conforme a las reglas del concurso, esta debe ser nombrada en periodo de prueba[17] por un término de seis meses, al final del cual se le evalúa el desempeño. Si la calificación es satisfactoria se entenderá aprobado el periodo de prueba y, en consecuencia, el concursante adquiere los derechos de carrera respecto del empleo ofertado.

De otro lado, la característica esencial de los cargos de libre nombramiento y remoción[18] es la discrecionalidad de que goza el nominador a efectos de vincular y retirar al servidor público de la administración. El nombramiento de estos servidores públicos es de naturaleza ordinaria[19] en la medida en que basta el acto que así lo disponga y la aceptación por parte del funcionario designado, quien previamente deberá haber acreditado el lleno de los requisitos exigidos para desempeñar el empleo.

Los empleos de elección popular, por su parte, son aquellos cuya provisión debe surtirse con el candidato que el pueblo haya elegido para el periodo institucionalmente establecido, a través del ejercicio del derecho al voto.

Ahora, los trabajadores oficiales[20] son servidores que se vinculan laboralmente a la administración pública mediante un contrato de trabajo que regula la prestación del servicio bajo condiciones especiales que difieren de aquellas previstas en la parte individual del CST.

Por último, se encuentran los demás cargos públicos que consagre la Constitución o la ley, categoría dentro de la cual aparecen los empleos temporales[21] como aquellos que se crean para (i) cumplir funciones que no son desempeñadas por el personal de la planta de la entidad por resultar ajenas a las actividades de las que esta se ocupa permanentemente, (ii) desarrollar programas o proyectos de duración determinada, (iii) suplir necesidades de personal por una sobrecarga de trabajo que se origine en hechos excepcionales, y (iv) desarrollar labores de consultoría y asesoría institucional.

La provisión de estos cargos, de acuerdo con la interpretación constitucional realizada en sentencia C-288 de 2014, debe efectuarse, en primer lugar, con la lista de elegibles vigente para la provisión de empleos de carácter permanente. Si ello no resulta posible por faltar de dicha lista, debe dársele prioridad a quienes, encontrándose en carrera administrativa, reúnan los requisitos para el cargo y trabajen en la misma entidad, mediante la realización de un proceso de selección

en el que se garantice la libre concurrencia y en el que la escogencia del servidor público tenga «[…] en cuenta exclusivamente factores objetivos como: el grado de estudios, la puntuación obtenida en evaluaciones de Estado como las pruebas ICFES, ECAES, Saber Pro y Saber, la experiencia en el cumplimiento de funciones señaladas en el perfil de competencias y otros factores directamente relacionados con la función a desarrollar […]»[22].

La ley se ocupó igualmente de crear los empleos de periodo fijo, los cuales han sido diseñados para que su provisión sea por un lapso previamente determinado[23]. En estos la provisión tiene lugar, en unos casos, a través del ejercicio de una facultad discrecional de selección y, en otros, mediante una convocatoria pública reglada en la que deben fijarse requisitos y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito.

Por otro lado, dentro de los tipos de empleo público creados por disposición legal se encuentran aquellos cuyas funciones deben ser ejercidas en las comunidades indígenas, los cuales se someten a la autonomía que se le reconoce a estos pueblos, última que les confiere la potestad para darse sus propias autoridades, al igual que la competencia para establecer normas y procedimientos propios.

Finalmente, es importante señalar que, aunque en principio la naturaleza del cargo público define su forma de provisión en los términos anotados, es factible que, en algunos empleos que no son de carrera, las vacantes sean provistas a través de la realización de un concurso público de mérito. En otras palabras, a pesar de que este último es el proceso de selección obligatorio para los empleos de carrera, no es exclusivo de estos, porque también es viable que la Constitución o la ley dispongan su aplicación para cargos de otra índole.

Se ha abierto paso a esta posibilidad bajo el entendido de que el concurso público es la forma de provisión del empleo que materializa en mayor medida el mérito. En ese sentido, siendo este un principio rector de la función pública[24] que concreta otros principios como los de transparencia, moralidad, imparcialidad e igualdad, toda vez que permite asegurar que aquella sea desarrollada por los mejores y más capacitados funcionarios, la consagración del concurso público para la provisión de empleos, diferentes a los de carrera, aunque no es forzoso, sí resulta razonable y ajustado a derecho.

Según la regla jurisprudencial sentada por la Corte Constitucional[25] en la materia, excepción hecha de los cargos elegidos a través del ejercicio del derecho al voto[26], en el caso de los empleos públicos sometidos a un periodo fijo y de los de libre nombramiento y remoción, el concurso público aparece como un proceso de selección admisible, aunque no obligatorio. Ello sucede, por ejemplo, con la elección del registrador Nacional del estado civil, el que a pesar de tratarse de un empleo de periodo, por disposición del artículo 266 de la Carta Política, debe ser «[…] escogido por los Presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, mediante concurso de méritos organizado según la ley […]»[27].

Las características anotadas según la tipología de empleos públicos pueden sintetizarse en el siguiente esquema:

		provisión	**nombramiento**	**carácter**
EMPLEOS PÚB	**carrera**	Proceso de selección: Concurso público	Periodo de prueba	Principio general
	libre nombramiento y remoción	Facultad discrecional, salvo que la ley prevea la realización de concurso público	Ordinario, previo cumplimiento de requisitos.	Excepcional
	elección popular	Ejercicio del derecho al voto	N/A Toma posesión del cargo	Excepcional
	trabajadores oficiales	Libertad contractual	N/A	Excepcional

L I C O S				Contrato de trabajo	
	los demás que determinen la c.p. o la ley	**periodo fijo**	Facultad discrecional	Acto de nombramiento previo cumplimiento de requisitos	Excepcional
			Proceso de selección: Convocatoria pública	Acto de nombramiento previo cumplimiento de requisitos	
			Proceso de selección: concurso público expresamente consagrado en la Constitución o la ley	Acto de nombramiento previo cumplimiento de requisitos	
		temporal	Lista de elegibles. En su defecto, proceso de selección interno	Acto de nombramiento previo cumplimiento de requisitos	
		aquellos cuyas funciones deban ser ejercidas en comunidades indígenas	Autonomía indígena: Potestad para darse autoridades propias y competencia para establecer normas y procedimientos propios		

2. **Provisión de empleos públicos mediante procesos de selección**

Lo visto hasta ahora enseña que para proveer los cargos de carrera y algunos de periodo fijo, el ordenamiento jurídico ha consagrado los procesos de selección, los cuales aluden a un conjunto de etapas que tiene como propósito evaluar la capacidad e idoneidad de los aspirantes a un determinado empleo público para ejercer las funciones y asumir las responsabilidades propias de éste, con el fin de escoger a aquel que ha de desempeñar el cargo en cuestión.
El concepto «proceso de selección» da cuenta de una categoría amplia o, si se quiere a un género, dentro del cual es factible identificar especies como el concurso público de méritos que según se anotó constituye la regla general en la provisión de empleos, la convocatoria pública y cualquier otra clase de procedimiento que se ajuste a la caracterización anotada[28].
Visto lo anterior, es importante ahondar en la distinción existente entre el «concurso público de méritos» y «la convocatoria pública» pues a pesar de que ambos constituyen tipos de proceso de selección, cada uno tiene características propias y responde a dinámicas especiales.
En el ámbito de la función pública, el **concurso de méritos** puede definirse como un proceso de selección para el desempeño del empleo público, llevado a cabo con plena garantía de los principios de transparencia, objetividad e igualdad, en el que la escogencia del aspirante que habrá de ocuparlo se realiza **exclusivamente[29] con base en el mérito**, entendido este como el reconocimiento que le corresponde a una persona en razón de las capacidades, competencias y aptitudes que ha demostrado tener para el desempeño del contenido funcional del cargo de que se trate.
De esta forma, cuando la provisión del empleo se encuentra sometida a concurso público, siendo el mérito el único criterio por el que debe regirse la escogencia del empleado público, queda descartado cualquier mecanismo que represente para el empleador facultades discrecionales de

selección de los aspirantes, pues aun cuando estas últimas no implicarían *per se* arbitrariedad, sí afectarían la exigencia de aplicación exclusiva de tal criterio.
Respecto de las etapas que han de surtirse en este tipo de procesos de selección, el artículo 31 de la Ley 909 de 2004[30] señaló que son (i) la convocatoria[31], (ii) el reclutamiento[32], (iii) la aplicación de pruebas o instrumentos de selección[33], (iv) la conformación de lista de elegibles[34] y (v) el período de prueba[35].
En particular, es oportuno precisar los alcances de dos etapas: (i) de «pruebas o instrumentos de selección» y (ii) «conformación de las listas de elegibles». Veamos:
El propósito de la primera de ellas es el de evaluar la capacidad, idoneidad y cumplimiento de las aptitudes de los concursantes en relación con las calidades necesarias para ejercer efectivamente el contenido funcional del empleo público de que se trate.
Los resultados objetivos de las pruebas aplicadas son los que determinan el orden en que debe elaborarse el listado que contiene el nombre de las personas que habrán de ser designadas en las plazas vacantes, así lo indica el artículo 31, numeral 4, de la Ley 909 de 2004, que a su vez prevé que con la lista «[…] y en estricto orden de mérito se cubrirán las vacantes […]». Al respecto, la corte Constitucional ha indicado lo siguiente:

> […] quien ocupe el primer lugar, de acuerdo con el puntaje obtenido, será el ganador y excluirá a los demás, en orden descendente. Si se procede de otro modo, habría que preguntarse, como lo hace el demandante, **¿para qué el concurso de méritos y calidades, si el nominador puede elegir al candidato de sus preferencias [36]** […] (negrilla fuera del texto original)

En similar sentido, en T-610 de 2017, el máximo juez constitucional señaló que:

> […] las etapas y pruebas de una convocatoria deben dirigirse a identificar las destrezas, aptitudes, experiencia, idoneidad, suficiencia, entre otras cualidades, calidades, competencias y capacidades de los candidatos. Una vez estas habilidades han sido calificadas de manera objetiva, **sólo aquél con mayor mérito debe ser designado en el respectivo cargo, con exclusión de los demás concursantes** […][37] (negrilla fuera del texto original)

El análisis que antecede permite concluir que en los procesos que se adelantan bajo la modalidad del concurso público, la escogencia del participante atiende a la aplicación rigurosa y exclusiva del principio del mérito, sin que pueda existir otro parámetro al cual obedezca tal decisión.
De otro lado, aparece el sistema de convocatoria pública como un proceso de selección que involucra instrumentos de diferente naturaleza. Así, integra un componente meritocrático al disponer la aplicación de pruebas como una de sus etapas, pero también contempla uno de orden discrecional porque, a diferencia de lo que sucede en el concurso público, los resultados obtenidos no son concluyentes de la elección. Esta última se realiza por un órgano colegiado mediante la votación que hagan sus integrantes de una lista de elegibles cuyo orden no condiciona la decisión.
Lo anterior evidencia que, aunque este procedimiento prevé una primera fase clasificatoria en la que se aplican herramientas que responden exclusivamente al principio de mérito, como lo son las pruebas que permiten la conformación de aquel listado, en la elección final hay un importante margen de libertad para el nominador que le da la posibilidad de valorar y escoger entre los candidatos.
La aplicación de la convocatoria pública como modalidad de proceso de selección se contempló para la provisión de los siguientes cargos:

- Los servidores públicos que deban ser escogidos por las corporaciones públicas (Artículo 126 C.P. modificado mediante el Acto Legislativo 2 de 2015, artículo 2[38]).

- Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, quienes son elegidos por la respectiva Corporación, previa audiencia pública, de lista de diez elegibles

enviada por el Consejo Superior de la Judicatura, tras una convocatoria pública reglada por la ley (Artículo 231 C.P.).

- Los siete magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial son escogidos por el Congreso en pleno, así: cuatro de ellos de ternas enviadas por el Consejo Superior de la Judicatura y los tres restantes, de ternas enviadas por el presidente de la República, en ambos casos previa convocatoria pública reglada (Artículo 257A C.P.).

- El contralor general de la República es elegido por el Congreso en pleno de lista de elegibles conformada por convocatoria pública con base en lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución (Artículo 267 C.P.).

- Los Contralores departamentales, distritales y municipales, quienes son elegidos por las asambleas departamentales, concejos municipales y distritales, de terna conformada por quienes obtienen los mayores puntajes en convocatoria pública realizada conforme a la ley (Artículo 272 C.P.).

En concepto del 10 de noviembre de 2015[39], la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación se ocupó de estudiar los antecedentes del Acto Legislativo 02 de 2015. Dicho pronunciamiento explicó las razones por las cuales, en el caso de los servidores públicos electos por corporaciones públicas, la reforma constitucional en cuestión optó por consagrar un sistema de convocatoria pública, en lugar de un concurso público de méritos. Sobre el particular señaló la referida Sala:

> […] Se entendió que si se adoptaba un concurso público de méritos como tal, se obligaba al organismo nominador a nombrar de acuerdo con el orden de clasificación de los aspirantes, lo que se consideró como una reducción indebida de la autonomía de las corporaciones públicas. Por tanto, se dijo, era necesario acudir a un sistema transparente, público, objetivo y basado en el mérito, pero que fuera distinto al concurso público en cuanto permitiera al organismo elector escoger entre los varios candidatos que superaran la etapa de selección […]

En relación con las diferencias existentes entre estos procesos de selección, el referido concepto sostuvo que la convocatoria pública «[…] comparte en lo sustancial los elementos propios del concurso público de méritos, salvo por el hecho de que no existe un orden de elegibilidad dentro de la lista de seleccionados […]».

De conformidad con lo señalado, la Sala concluye que, los procesos de selección que regula, por un lado, el artículo 125 superior y, por otro, los artículos 126, 231, 257A, 267 y 272 *ibidem* no resultan equiparables. Mientras que en los primeros, esto es, en los concursos públicos existe un orden obligatorio de escogencia entre los aspirantes que superan las respectivas pruebas según como se haya conformado la lista de elegibles, en las convocatorias públicas se conserva cierto grado de valoración que permite seleccionar a cualquiera que se encuentre en dicha lista, con independencia del puesto ocupado o el orden allí establecido.

Sin embargo, esto no significa que sean radicalmente opuestos. De hecho, en esencia, tanto la convocatoria pública como el concurso público de méritos son procesos de selección del empleo público que deben basarse en el respeto de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, celeridad, publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y mérito.

La Ley 909 de 2004 señaló en su artículo 2 que el mérito «[…] es un elemento sustantivo de los procesos de selección del personal que integra la función pública […]» y, seguidamente, dispuso que su aplicación puede ajustarse a los empleos públicos de libre nombramiento y remoción. Esto significa que todo empleo público que sea provisto mediante un proceso de selección o en virtud de la facultad discrecional consagrada para los cargos de libre nombramiento y remoción debe

tener en cuenta la satisfacción del principio del mérito al momento de elegir a la persona que ha de ocuparlo.
La diferencia estará en la rigurosidad con la que, dependiendo de la forma de provisión del empleo, debe evaluarse el mérito. De acuerdo con ello y con la caracterización que se ha hecho hasta ahora, es posible esquematizar de la forma en la que sigue las escalas o grados de severidad con la que, en cada caso, debe calificarse tal criterio:

sistema de provisión del empleo público	**método de evaluación del mérito**	**graduación de la evaluación del mérito**
Concurso público	Aplicación de pruebas o instrumentos de selección	Estricta
Convocatoria pública	Aplicación de pruebas o instrumento de selección + Buen juicio del nominador	Intermedia
Facultad discrecional	Buen juicio del nominador	Leve

Ahora bien, es importante anotar que en todo caso la aplicación de las pruebas o instrumentos de selección habrá de realizarse por la ESAP o universidades debidamente acreditadas ante el Ministerio de Educación, a fin de garantizar el mérito y los principios constitucionales antes descritos.

3. **Sentencia C-105 de 2013: Naturaleza del proceso de selección para la provisión del cargo de personero municipal**

La sentencia C-105 de 2013 declaró la constitucionalidad parcial del inciso 1 del artículo 35 de la Ley 1551 de 2012 en cuanto contempló que los personeros municipales deben elegirse por las corporaciones públicas «previo concurso de méritos».
Las principales razones de la Corte Constitucional que sustentan su decisión se resumen así: (i) la trascendencia de la función de promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos asignada a los personeros; (ii) los personeros cumplen la función de veeduría y vigilancia de la conducta de los servidores públicos del orden territorial; (iii) por tanto, la escogencia o designación debe ser ajena a los elementos discrecionales que puedan comprometer la independencia e imparcialidad del personero municipal.
Con base en ello, concluyó que en el caso de los personeros municipales es perfectamente aplicable la regla jurisprudencial que admite el concurso de méritos como sistema de provisión de empleos que no son de carrera, no porque su elección a través de dicho mecanismo resulte imperativa, sino porque su adopción constituye una posibilidad dentro del margen de libertad de configuración que ostenta el legislador.
La anterior decisión, en lo se refiere a la exequibilidad de la expresión anotada, hizo tránsito a cosa juzgada constitucional relativa, de lo que se desprende su carácter vinculante y obligatorio para esta Corporación. En ese sentido, si el máximo intérprete de la Constitución ya realizó una lectura respecto de la forma en que actualmente se encuentra regulada la provisión del cargo de personero municipal, para concluir que esta se realiza a través de concurso público, en consecuencia, este es el criterio al que obligatoriamente debe ceñirse esta Sala.

8. Problemas jurídicos

Se advierte que no hay necesidad de hacer ajustes a los problemas jurídicos que, fruto del diálogo y la concertación con las partes, se plantearon de manera provisional en la etapa de fijación del litigio de la audiencia inicial. Por lo tanto, los interrogantes que corresponde resolver son los siguientes:

1. ¿La materia objeto de los actos administrativos acusados está sometida a reserva de ley y, por ende, es totalmente nulo el Decreto 2485 de 2014 y parcialmente el Decreto 1083 de 2015, al haberse expedido por las entidades demandadas

2. ¿El Ministerio del Interior y el Departamento Administrativo de la Función Pública excedieron el ejercicio de la facultad reglamentaria a través de los artículos 4 del Decreto 2485 de 2014 y el 2.2.27.4 del Decreto 1083 de 2015

3. ¿Son nulos los artículos 4 del Decreto 2485 de 2014 y el 2.2.27.4 del Decreto 1083 de 2015 por desconocimiento del principio democrático y el de autonomía de las entidades territoriales

Primer problema jurídico

¿La materia objeto de los actos administrativos acusados está sometida a reserva de ley y, por ende, es totalmente nulo el Decreto 2485 de 2014 y parcialmente el Decreto 1083 de 2015, al haberse expedido por las entidades demandadas

A efectos de resolver este interrogante, la Sala se ocupará de estudiar lo concerniente a (i) la competencia como presupuesto de validez del acto administrativo; (ii) la reserva de ley; y (iii) el caso concreto.

1. **La competencia como presupuesto de validez del acto administrativo**

El proceso de formación y expedición de un acto administrativo corresponde a la administración[40], como sujeto activo al que se le ha asignado la competencia necesaria para adoptar decisiones unilaterales por medio de las cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas.

De acuerdo con ello, para que esa manifestación de voluntad estatal sea válida se requiere, entre otros, que al sujeto de quien emana le haya sido atribuida, vía constitucional, legal o reglamentaria, la facultad de tomar dicha decisión. Esto es lo que en la teoría del acto administrativo se conoce como competencia, que no es otra cosa que la capacidad jurídica que se predica de los sujetos particulares en el derecho privado.

Así pues, la competencia administrativa se determina a partir de la identificación de funciones, deberes, responsabilidades, obligaciones y facultades que le ha asignado el ordenamiento jurídico a los servidores públicos y a los particulares que ejercen funciones **administrativas**, pues no de otra forma se puede delimitar el campo de acción dentro del cual le es dado desenvolverse a una autoridad administrativa.

A efectos de garantizar derechos fundamentales como el debido proceso y la seguridad jurídica, las normas que fijan competencias deben ser expresas, claras y anteriores a la expedición del acto administrativo de que se trate, lo que demuestra la íntima conexión que tiene el concepto objeto de estudio con el principio de legalidad y que el fundamento constitucional de ambas figuras reside en los artículos 2[41], 6[42], 121[43], 122[44] 123.2[45], 209[46] superiores.

En ese orden de ideas, dado que la competencia permite que las decisiones de la administración se encuentren revestidas de legalidad, el acto administrativo estará viciado de nulidad en aquellos casos en que se profiere por un sujeto que carece de capacidad jurídica para actuar, esto es, sin una competencia atribuida por el ordenamiento. Es por ello que el artículo 137 del CPACA consagra la falta de este requisito como uno de los vicios invalidantes de los actos administrativos, al señalar que toda persona podrá solicitar que se anulen aquellos que «hayan sido expedidos […] sin competencia».

Como puede observarse, la falta de competencia es un vicio externo al acto administrativo debido a que no se afinca en el contenido de este, en su motivación o finalidad, sino en el sujeto que lo

expide pues lo que se advierte en tales casos es que el derecho positivo no consagra una facultad que le permita fungir al Estado como autoridad normativa.
Ahora, es importante tener en consideración que la asignación de competencias a la administración pública atiende a diferentes factores que pueden identificarse como el funcional, el material, el territorial y, en algunos casos, el temporal. La expedición de un acto administrativo en ausencia de cualquiera de ellos da lugar a la anulabilidad de la decisión.
El primero de estos criterios (funcional) se refiere al ejercicio de atribuciones según el grado jerárquico que, dentro de la estructura organizacional de la administración pública, ostenta el servidor público o particular investido de funciones administrativas. El material, por su parte, supone que el acto administrativo proferido sea el desarrollo de una competencia efectivamente asignada a la autoridad que lo expidió. El factor territorial parte de reconocer que debe haber una división del territorio que permita delimitar el espacio geográfico en el que la autoridad administrativa se encuentra habilitada para el desempeño de sus funciones. Por último, el temporal es un parámetro que aplica en determinados casos en los que el ordenamiento jurídico impone un límite de tiempo para que la administración pueda ejercer su poder decisorio.
Finalmente, en relación con las normas que deben considerarse a efectos de estudiar la competencia como presupuesto de validez de los actos administrativos, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:

> […] la valoración del ejercicio de una competencia, esto es, la definición acerca de si un órgano estatal obró o no de conformidad con las reglas que la fijan, debe hacerse necesariamente mediante el cotejo con los preceptos vigentes al tiempo en que se efectivizó, dado que por constituir éstos su fuente de validez son los que determinan la regularidad de su ejercicio. [...][47]

2. **Principio de reserva de ley**

Como primera medida, es preciso señalar que el trasfondo histórico de este principio reside en el constitucionalismo revolucionario francés, el cual, al concebir la ley como máxima expresión de la soberanía popular, le confirió preeminencia en el ordenamiento jurídico. Esto hizo que en sistemas normativos como el colombiano, de marcada influencia francesa, sin desconocer la actual supremacía constitucional, se predicara la existencia de una cláusula general de competencia en cabeza del Congreso de la República[48], la cual lo faculta para ejercer su función de producción normativa en cualquier ámbito, salvo que se trate de alguno que, por expresa disposición del constituyente, debe ser regulado por la administración a través del reglamento.
Ahora bien, además de aquella cláusula general de competencia en favor del Congreso, en ciertos casos, la Constitución[49] ha previsto la exigencia de que la regulación de un determinado asunto se realice a través de una fuente del derecho en particular que, en este caso, es la ley. Esto es lo que se conoce como el principio de reserva de ley que, en otras palabras, da cuenta de un condicionamiento con ocasión del cual la configuración de ciertos temas solo puede realizarse mediante la expedición de (i) una ley en sentido formal, es decir aquella que surge del legislador ordinario o (ii) por disposiciones que sin haber surgido en el seno del Congreso de la República, tienen rango de ley al expedirse por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió aquel[50].
En el ordenamiento jurídico colombiano este último supuesto encuentra una limitación importante en el texto del artículo 150 superior, numeral 10, el cual identifica los siguientes asuntos que por ser de competencia exclusiva del legislador no pueden ser regulados a través de la concesión de facultades extraordinarias:

1. La expedición de códigos.

2. La expedición de leyes estatutarias.

3. La expedición de leyes orgánicas.

4. El decreto de impuestos.

5. La expedición de leyes marco a las que hace referencia el numeral 19 del artículo 150 superior, esto es, normas generales en las que se prevén los objetivos y criterios a los que debe someterse el Gobierno con el fin de organizar el crédito público; regular el comercio exterior y señalar el régimen de cambio internacional; modificar las disposiciones del régimen de aduanas; regular la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con recursos captados del público; fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos; regular el régimen de prestaciones sociales mínimas para los trabajadores oficiales y modificar la estructura de ministerios, departamentos administrativos y demás organismos de la administración nacional[51].

Visto lo anterior, en los casos en que tiene aplicación la reserva de ley no se encuentra permitido regular la materia por medio de preceptos de inferior jerarquía o fuerza normativa, como lo son los reglamentos. En esos términos, el principio en cuestión constituye una garantía esencial de los estados modernos hacia sus asociados, si se tiene en cuenta que los asuntos sujetos a reserva legal involucran temas de gran importancia e interés social y económico que, en tal virtud, deben positivarse como resultado de una amplia deliberación que garantice el principio democrático, lo que le otorga legitimidad a la norma de derecho resultante.
Es importante resaltar la forma en que la reserva de ley constituye un límite inquebrantable a la potestad reglamentaria pues, habiéndose reservado un asunto al legislador, no es dable que la administración entre a regular los aspectos centrales de la materia en cuestión. Esto no significa que se excluya el reglamento porque, una vez expedida la ley, podrán dictarse aquellos que se conocen como reglamentos ejecutivos o *secundum legem*, los cuales gozarán de validez en la medida en que tengan una adecuada cobertura legal, esto es, en cuanto se dediquen a ejecutar o desarrollar la ley a la que se encuentran inmediatamente ligados. Esto quiere decir que en aquellos casos solo habrá espacio para el reglamento, en la medida en que previamente haya una habilitación legal.
Sobre el particular, el profesor Luciano Parejo Alfonso enseña lo siguiente:

> […] La **finalidad** entonces de la técnica de la reserva de Ley se circunscribe, en principio, a **subordinar el acceso a una materia** perteneciente al campo por ella acotado y, por tanto, la intervención reguladora de normas inferiores (de rango reglamentario), **a la ocupación previa de esa materia por una Ley** con el contenido (variable) que la CE quiere (en virtud, justamente, del tipo de reserva de Ley) que sea establecido precisamente por el órgano parlamentario. Una vez que la Ley haya fijado –mediante una regulación propia- los contenidos requeridos por la norma constitucional, **pueden llamar a otras normas** (reglamentarias) **a colaborar con ella** –para complementar aquella regulación- y en todo caso, producirse la normación reglamentaria de desarrollo […][52]

En el evento de no haberse previsto una reserva de ley, la respectiva regulación se podrá realizar a través del reglamento siempre y cuando se tenga la competencia para el efecto y se respete el contenido de disposiciones superiores, de manera que no se trastorne el sistema de fuentes. En ese sentido, la reserva legal es un mecanismo constitucional que permite proteger el reparto de competencias entre el legislador y la administración pública o, si se quiere, entre la ley y el reglamento.
En relación con la materia objeto de estudio, el máximo tribunal constitucional ha distinguido entre dos clases de reserva de ley, así:

> […] i) Una, *material*, que la conforma el conjunto de supuestos o materias sobre las cuales la Constitución exige una regulación de rango legal. Este tipo de reserva supone que los temas que no han sido reglados por la ley, no pueden ser regulados por normas reglamentarias.

> Sin embargo, debe precisarse que excepcionalmente el Presidente de la República a través de una norma con fuerza de ley, como legislador extraordinario con facultades expresamente otorgadas, pueda reglamentar el tema correspondiente. (ii) Otra, *formal*, que significa que cualquier materia, por intrascendente que sea, que haya sido regulada en la ley, no puede ser modificada por un reglamento. En razón a las materias restringidas o a los trámites especiales exigidos, sólo el Congreso está facultado para realizar la regulación […][53]

Lo anunciado hasta ahora indica que, en los eventos en que por disposición expresa del constituyente la competencia es exclusiva del legislador no es admisible el vaciamiento de las facultades atribuidas a este mediante la expedición de normas que carezcan de rango y fuerza legal. No obstante, surge el interrogante de cómo identificar tales hipótesis, pues lo cierto del caso es que el uso constitucional de la palabra ley no es unívoco.

Así, en ocasiones la norma superior se refiere a la ley en un sentido formal que se define a través de un criterio orgánico como aquel precepto expedido por el Congreso o, al menos, que tiene rango y fuerza de ley formal. En otras ocasiones la Constitución alude a la ley en un sentido material, es decir, una disposición con carácter jurídico vinculante, con independencia del órgano que haya dispuesto su producción.

Ante la dificultad que puede representar esta ambivalencia a efectos de determinar si existe reserva de ley o no, la Subsección A considera que en cada caso particular será necesario definir el alcance de la expresión «ley» contenido en la norma objeto de revisión.

Mal podría pensarse que todas las cuestiones pasibles de ser regladas por la ley están sujetas a reserva legal pues ello desnaturalizaría la esencia de esta institución. Así, mientras que la cláusula de competencia del legislador constituye una regla general que le permite a este ocuparse de cualquier materia que no haya sido asignada privativamente a la administración, la reserva de ley aparece como una excepción que obedece a la especial trascendencia que la norma de normas le ha otorgado a un determinado asunto.

Es por ello que, en lugar de predicar la aplicación generalizada de tal reserva en todo uso que haga la Constitución de la palabra ley, conviene adoptar una posición que opte por estudiar, en cada caso concreto, si a la luz del ordenamiento jurídico la regulación de la temática en particular solo puede efectuarse a través un precepto con fuerza y rango de ley[54], para lo cual el intérprete debe tener en cuenta los siguientes criterios:

Configuración	**Casuística**
Materias sometidas a **reserva de ley** por disposición del artículo 150 superior, norma competencial del Congreso de la República.	**(i)** Códigos (Competencia exclusiva del legislador ordinario – art.150 #10). **(ii)** La estructura de la administración nacional; la creación, supresión o fusión de ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades del orden nacional, señalando sus objetivos y estructura orgánica; la reglamentación de la creación y funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales; la creación o autorización para la constitución de empresas industriales y comerciales del estado y sociedades de economía mixta. **(iii)** El ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia a cargo del Gobierno. **(iv)** Las autorizaciones al Gobierno para celebrar contratos, negociar empréstitos y enajenar bienes nacionales. **(v)** El decreto de impuestos (Competencia exclusiva del legislador ordinario – art.150 #10). **(vi)** La expedición de leyes marco (Competencia exclusiva del legislador ordinario – art.150 #10) en asuntos de crédito público;

	comercio exterior y régimen de cambio internacional; régimen de aduanas; actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con recursos captados del público; régimen salarial y prestacional de los empleados públicos; régimen de prestaciones sociales mínimas para los trabajadores oficiales; estructura de ministerios, departamentos administrativos y demás organismos de la administración nacional **(vii)** La apropiación o adjudicación y recuperación de tierras baldías. **(viii)** Cuestiones relativas al Banco de la República y a las funciones de su Junta Directiva. **(ix)** La intervención económica en asuntos de que trata el artículo 334 superior como explotación de recursos naturales, uso del suelo; producción, distribución, utilización y consumo de los bienes; y en los servicios públicos y privados. **(x)** La prestación de servicios públicos. **(xi)** El ejercicio de funciones públicas. **(xii)** La propiedad industrial, patentes y marcas y las otras formas de propiedad intelectual.
Reserva de ley orgánica (Art. 151 CP) Competencia exclusiva del legislador ordinario (Art.150 #10)	**(i)** Reglamentos del Congreso y de cada una de las Cámaras (Art. 151 CP). **(ii)** Normas sobre preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones y del plan general de desarrollo (Arts. 151, 342 y 352 CP). **(iii)** Normas sobre asignación de competencias normativas a las entidades territoriales (Art. 151 CP). **(iv)** Ordenamiento territorial (Arts. 150 #4, 288, 297, 307 y 329 CP)
Reserva de ley estatutaria (Art. 152 CP) Competencia exclusiva del legislador ordinario (Art.150 #10)	**(i)** Derechos y deberes fundamentales, así como procedimientos y recursos para su protección[55]. **(ii)** Administración de justicia[56]. **(iii)** Organización y régimen de partidos y movimientos políticos[57]; estatuto de la oposición y las funciones electorales[58]. **(iv)** Instituciones y mecanismos de participación ciudadana[59]. **(v)** Estados de excepción[60]. **(vi)** Igualdad electoral entre candidatos a la Presidencia de la República.

Respecto de las demás alusiones que haga el texto constitucional al término «ley», la Sala considera que la ubicación de la norma respectiva al interior de la Carta Política puede servir como pauta para dilucidar el sentido en que se ha utilizado aquel concepto.

Parte dogmática de la Constitución[61]	Si las decisiones esenciales para la sociedad y el Estado deben reservarse a la actividad de producción normativa del legislador, goza de toda lógica que los asuntos comprendidos en la parte dogmática del texto superior, al integrar los elementos que orientan y legitiman la actividad estatal, queden sometidos a tal reserva la mayoría de las veces, salvo que de la interpretación sistemática del texto y de la jurisprudencia constitucional pueda concluirse lo contrario. Por eso, en principio, en estos casos, aplica una especie de **indicio de reserva legal**, debiéndose entender que, por regla general, el término «ley» es usado en un sentido formal, es decir, como aquel precepto de carácter

	vinculante que resulta luego de haberse agotado el respectivo trámite legislativo o aquel que, habiéndose expedido por el Gobierno Nacional, tiene rango y fuerza de ley[62].
Parte orgánica de la Constitución[63]	El carácter instrumental de la parte orgánica de la norma de normas, que tiene razón de ser solo en cuanto sirva a la aplicación y realización de los principios, valores y derechos contemplados en su parte dogmática, hace que no resulte imperativa la intervención exclusiva del legislador en las materias allí comprendidas, salvo que de la interpretación sistemática del texto y de la jurisprudencia constitucional pueda concluirse lo contrario. Por eso, en estos casos, opera un **indicio de ausencia de reserva legal**, debiéndose entender que, por regla general, cuando la Carta Política utiliza la expresión «ley» se refiere a su sentido material, es decir, como cualquier tipo de precepto de carácter vinculante, con independencia de su rango y fuerza normativa.

De esta forma, que la disposición de que se trate pertenezca a la parte dogmática o a la orgánica de la Constitución sirve de indicio para presumir la existencia o no de reserva de ley. Sin embargo, esta proposición, lejos de constituir una regla absoluta, aparece como un simple criterio orientador que tendrá que ser valorado en armonía con la norma de que se trate y esta, a su vez, interpretarse sistemáticamente a la luz del texto superior.

Por ello, definir si el constituyente dispuso o no que el tema en particular fuese regulado en forma privativa por el legislador, dependerá de la valoración que se haga en cada caso concreto, evaluación que, en todo caso, deberá llegar a una respuesta afirmativa cuando logre establecerse que se trata de un asunto que, luego de ser estudiado a la luz de la carta política y de la jurisprudencia constitucional, puede catalogarse como de **especial trascendencia** por su **íntima conexión** con el modelo de Estado Social de Derecho y con la satisfacción de los fines esenciales del Estado[64], del interés general o de principios transversales como el democrático o de separación de poderes[65].

Finalmente, es importante destacar la existencia de ciertos eventos en los que entender que la Constitución alude a la «ley» como norma jurídica con rango y fuerza de tal resultaría contrario a aquella pues una lectura de la disposición respectiva de cara al ordenamiento jurídico no deja otra opción que concluir que el término ley fue usado en un sentido material, esto es, aludiendo a todo tipo de disposición jurídicamente vinculante sin que interese su naturaleza.

A título simplemente enunciativo, tal es el caso del artículo 4 cuando señala que «[…] Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades […]»; el 6 que dispone que «[…] Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes […]»; y el 13 según el cual «[…] Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley […]». Mal podría pensarse que, en ese mismo orden, los ciudadanos y residentes en Colombia únicamente están obligados al cumplimiento de las leyes expedidas por el Congreso; que la responsabilidad de los particulares solo surge ante la violación de las normas que ha proferido el legislador; o que el derecho a la igualdad solo se puede exigir respecto de aquellas últimas.

3. **Caso concreto**

Para el demandante José Ignacio Arando Bernal, el Decreto 2485 de 2014 y el Título 27 del Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, artículos 2.2.27.1 al 2.2.27.6., deben ser declarados nulos porque la materia de que se ocupan se encuentra sometida a reserva de ley, última que en su criterio está consignada en las siguientes normas:

- El artículo 313 constitucional, numeral 8, que prevé que a los concejos municipales y distritales les corresponde «Elegir personero para el periodo que fije la ley y los demás funcionarios que esta determine»;

- El artículo 35 de la Ley 1551 de 2012, que modificó el 170 de la Ley 136 de 1994, según el cual los personeros deben elegirse «[…] previo concurso público de méritos de conformidad con la ley vigente […]»;

- El artículo 2, inciso 4, del Acto Legislativo 02 de 2015, que modificó el artículo 126 superior al disponer que «[…] la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley […]».

Lo primero que advierte la Sala es que, como se anunció, la reserva de ley es una figura que tiene aplicación gracias a la consagración expresa que efectúa el constituyente, sin que resulte viable considerar que sea el mismo legislador quien la establezca. Esta consideración conduce a descartar el reproche por el presunto desconocimiento del artículo 35 de la Ley 1551 de 2012.
Ahora bien, con el fin de esclarecer si los artículos constitucionales 313, numeral 8, y 126, inciso 4, implican una reserva de ley que fue desconocida con la expedición de los actos demandados, es preciso recordar la materia que fue objeto de regulación mediante estos últimos. Así, el Decreto 2485 de 2014, cuyo contenido es reproducido en el Título 27 del Decreto 1083 de 2015, artículos 2.2.27.1 al 2.2.27.6., se encarga de fijar los estándares mínimos para el concurso público y abierto de méritos para la elección de personeros municipales.
En ese sentido, lo que en esencia disponen las normas en cuestión es que el concurso sea adelantado por los concejos municipales o distritales atendiendo a criterios de objetividad, transparencia, imparcialidad, publicidad e idoneidad de los aspirantes. Así mismo, prevén como etapas del concurso la convocatoria, el reclutamiento y las pruebas; regulan los mecanismos de publicidad; el uso de la lista de elegibles, al igual que la posibilidad de celebrar convenios interadministrativos para la realización parcial de los concursos y el diseño de las pruebas a ser aplicadas.
Visto lo anterior, en lo que se refiere al artículo 313 de la Constitución Política, cuyo numeral 8 señala que corresponde a los concejos municipales «[…] Elegir Personero para el período que fije la ley […]», se observa que no sería viable predicar un vaciamiento de competencias por violación de una reserva legal porque el precepto constitucional no admite duda en cuanto a que aquello que debe definir la «ley», más allá de la acepción en que se esté usando la palabra, es el «periodo» de los personeros municipales o distritales, entendido como el lapso o término para el cual han de ser elegidos, asunto que en modo alguno fue abordado en los actos administrativos objeto de la actual demanda.
Queda entonces por analizar si el inciso 4 del artículo 126 de la Constitución Política, modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 2 de 2015, consagra una reserva de ley y, en caso afirmativo, si esta fue vulnerada por el Ministerio del Interior y el Departamento Administrativo de la Función Pública. Según la norma en cuestión:

> […] Salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección […] (Subrayas fuera del texto original)

De acuerdo con la explicación ofrecida en las anotaciones preliminares, la disposición en la que el señor José Ignacio Arango Bernal pretende fundamentar la ilegalidad de los actos administrativos demandados no es aplicable a los personeros municipales pues, según se explicó, la provisión de este tipo de cargos debe efectuarse mediante concurso público, proceso de selección que difiere del de convocatoria pública, contemplada en el Acto Legislativo 2 de 2015.

En tales condiciones, no es factible predicar una alegada falta de competencia por existencia de reserva de ley cuando el asunto del que se ocupan los decretos acusados no se rige por la norma constitucional en la que, a voces de la demanda, se establece la reserva en comento.
En conclusión, con la expedición del Decreto 2485 de 2014 y del Título 27 del Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, artículos 2.2.27.1 al 2.2.27.6., el Ministerio del Interior y el Departamento Administrativo de la Función Pública no infringieron el principio de reserva de ley por desconocimiento de lo dispuesto en los artículos 126 y 313 constitucionales, y el 35 de la Ley 1551 de 2012. En ese sentido, las entidades demandadas podían hacer uso de su facultad de producción normativa a través del reglamento, respetando el contenido y la estructura jerárquica del sistema de fuentes, cuestión que pasa a estudiarse a continuación.
Segundo problema jurídico
¿El Ministerio del Interior y el Departamento Administrativo de la Función Pública excedieron el ejercicio de la facultad reglamentaria a través de los artículos 4 del Decreto 2485 de 2014 y el 2.2.27.4 del Decreto 1083 de 2015

1. **Ejercicio de la potestad reglamentaria**

Uno de los rasgos característicos del sistema jurídico colombiano es la organización jerárquica que se le ha otorgado a los diferentes tipos de normas que lo integran, organización que supone la existencia de una estructura escalonada, si se quiere piramidal, en la que cada categoría normativa tiene características propias que influyen directamente en el rango que se les otorga y, por consiguiente, en la relación de subordinación predicable entre unas y otras. Todo ello responde a una teleología particular que no es otra que permitir la construcción sistemática, coherente y racional del ordenamiento jurídico.
El hecho de que esta estructura jerárquica no aparezca definida explícitamente en la Constitución Política no es óbice para afirmar su existencia ya que a lo largo de este cuerpo normativo pueden encontrarse sendas disposiciones que dan cuenta de la primacía o sujeción que se le confiere a cada tipología. Así, por ejemplo, el artículo 4.º superior, prevé que «[…] La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales […]».
De esta forma, se ha entendido que la Constitución y las normas convencionales que se integren al ordenamiento jurídico, ocupan el nivel más alto dentro de este, seguidas en orden por las leyes que debe expedir el Congreso con sujeción a aquellas y por los actos administrativos, los que de acuerdo a la categoría en la que puedan clasificarse deberán obedecimiento a la Constitución y a la ley, o en algunos casos, solo a la primera.
Dicha estratificación normativa se convierte en un criterio de validez que ha sido explicado en los siguientes términos por la Corte Constitucional:

> […] La unidad del sistema jurídico, y su coherencia y armonía, dependen de la característica de ordenamiento de tipo jerárquico de que se reviste. La jerarquía de las normas hace que aquellas de rango superior, con la Carta Fundamental a la cabeza, sean la fuente de validez de las que les siguen en dicha escala jerárquica. Las de inferior categoría, deben resultar acordes con las superiores, y desarrollarlas en sus posibles aplicaciones de grado más particular. En esto consiste la connotación de sistema de que se reviste el ordenamiento, que garantiza su coherencia interna. La finalidad de esta armonía explícitamente buscada, no es otra que la de establecer un orden que permita regular conforme a un mismo sistema axiológico, las distintas situaciones de hecho llamadas a ser normadas por el ordenamiento jurídico […][66]

Establecido lo anterior, resulta claro que las facultades de producción normativa de la administración tienen un límite incuestionable en el contenido de las normas respecto de las cuales pueda predicarse una superioridad jerárquica, asunto que se definirá atendiendo a la tipología del reglamento.

Así, tratándose de los reglamentos (i) expedidos por el presidente de la República en ejercicio de la potestad reglamentaria que le atribuye el artículo 189-11 superior; de los (ii) reglamentos que desarrollan leyes habilitantes y de los (iii) reglamentos expedidos por otras autoridades administrativas en asuntos especializados de su competencia, se ha dicho que su propósito es complementar la ley en la medida en que sea necesario para lograr su cumplida aplicación, cuando se requiera por ejemplo, precisar definiciones o aclarar etapas del procedimiento previsto en aquella. En ese orden de ideas, si lo que se busca es permitir la ejecución de la ley, esta facultad no apareja la interpretación, modificación, limitación o ampliación de los contenidos legislativos, como tampoco el modo de encuadrar las distintas situaciones jurídicas en los supuestos que contiene[67].

En este punto resulta relevante, de conformidad con el objeto del presente proceso, explicar que los reglamentos que desarrollan leyes habilitantes son aquellos que se profieren en ejercicio de una competencia asignada directamente por la Constitución con sometimiento, por disposición de la misma carta suprema, a una norma legal que faculte el desarrollo de dicha atribución. Se trata entonces de normas superiores que establecen potestades normativas en cabeza de la administración utilizando las expresiones «de conformidad», «de acuerdo» o «según la ley».

Ahora bien, en relación con los límites a la potestad reglamentaria de la administración frente a los tres tipos de normas reglamentarias que se señalaron, el Consejo de Estado ha precisado lo siguiente:

> […] en nuestro orden, la potestad reglamentaria es la facultad constitucional que se atribuye de manera permanente al Gobierno Nacional para expedir un conjunto de disposiciones jurídicas de carácter general y abstracto para la debida ejecución de la ley, a través de las cuales desarrolla las reglas y principios en ella fijados y la completa en aquellos detalles y pormenores necesarios que permiten su aplicación, pero que en ningún caso puede modificar, ampliar o restringir en cuanto a su contenido o alcance. El reglamento, como expresión de esta facultad originaria del Ejecutivo es, pues, un acto administrativo de carácter general que constituye una norma de inferior categoría y complementaria de la ley; su sumisión jerárquica a ésta (sic) en la escala normativa (principio de jerarquía normativa piramidal) es indiscutible y absoluta, toda vez que se produce en los ámbitos y espacios que la ley le deja y respecto de aquello que resulte necesario para su cumplida ejecución, sin que pueda suprimir los efectos de los preceptos constitucionales o legales ni contradecirlos, motivo por el cual si supera o rebasa el ámbito de aplicación de la ley e incursiona en la órbita de competencia del Legislador compromete su validez y, por tanto, deberá ser declarado nulo, de conformidad con lo ordenado por el numeral 2 del artículo 237 de la Constitución Política. El poder reglamentario se encuentra limitado en función a la necesidad de la cumplida ejecución de la ley y, como lo ha manifestado la jurisprudencia, la extensión de esta competencia es inversamente proporcional a la extensión de la ley, es decir, cuanto mayor sea el campo disciplinado por la ley, menor será el que corresponde al decreto reglamentario […][68] (Subrayas fuera del texto original)

Así pues, para el ejercicio de la atribución de producción normativa, la administración debe limitarse a desarrollar las disposiciones respecto de las cuales sea posible predicar una relación de jerarquía, en algunos casos será la Constitución, en otros también la ley e incluso algunos preceptos reglamentarios[69]. De esta forma, cuando sea viable establecer esa subordinación normativa, el reglamento no puede introducir normas que no se desprendan natural y lógicamente de las disposiciones superiores, ampliar o restringir el sentido de estas, como tampoco puede suprimirlas o cambiarlas ni reglamentar materias que estén reservadas a ellas, pues en tales eventos excedería sus competencias.

En ese sentido, es importante señalar que a pesar de que en la acción de simple nulidad se ejerce el control de legalidad de la norma reglamentaria, también es cierto que, de encontrar que el reglamento no se ajusta a los preceptos constitucionales, habrá de declararse su nulidad, habida cuenta de que el ejercicio de la potestad reglamentaria no solo está atado a la ley que desarrolla,

sino también, a los postulados superiores contenidos en la Constitución Política[70], así como a los fines del Estado Social de Derecho[71], a los cuales no puede ser ajeno en el desarrollo de sus funciones.

2. **Caso concreto**

Los demandantes consideraron que, a través de los actos administrativos demandados, el Ministerio del Interior y el Departamento Administrativo de la Función Pública excedieron lo indicado en el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012, que modificó el 170 de la Ley 136 de 1994, pues a su modo de ver este último no estableció en modo alguno que la vacante de personero municipal se ocuparía con la persona que quede en el primer puesto de la lista.
Para resolver este interrogante, basta remitirse a las consideraciones efectuadas en desarrollo del primer problema jurídico pues allí quedó establecido que la Corte Constitucional, en sentencia C-105 de 2013, resolvió declarar exequible el inciso 1 del artículo 35 de la Ley 1551 de 2012 en cuanto contempló que los personeros municipales deben elegirse por las corporaciones públicas, «previo concurso de méritos».
Así las cosas, es plausible concluir que, respecto de este tipo de empleos, opera el precedente constitucional que admite el concurso público como proceso de selección aplicable a funcionarios que no son de carrera. Al hacer parte de una sentencia de constitucionalidad, dicha interpretación se integra al contenido del precepto legal en comento, luego no es viable para el Consejo de Estado desatender el texto normativo admitiendo, como pretenden los demandantes, que la elección de personeros municipales evada el estricto orden en que debe aplicarse la lista de elegibles, lo que implicaría, según la caracterización ampliamente explicada, que su elección se realice a través de convocatoria pública y no mediante el concurso público de méritos.
En conclusión, el Ministerio del Interior y el Departamento Administrativo de la Función Pública no excedieron el ejercicio de la facultad reglamentaria a través de los artículos 4 del Decreto 2485 de 2014 y el 2.2.27.4 del Decreto 1083 de 2015, al disponer que la vacante del empleo de personero se cubrirá con quien ocupe el primer puesto de la lista.
Tercer problema jurídico
¿Son nulos los artículos 4 del Decreto 2485 de 2014 y el 2.2.27.4 del Decreto 1083 de 2015 por desconocimiento del principio democrático y el de autonomía de las entidades territoriales

1. **Principio democrático**

La Constitución Política, desde el mismo preámbulo y en su artículo 1, consagra la democracia como uno de los principios fundamentales del Estado colombiano y, seguidamente, en su artículo 2, establece como uno de los fines estatales esenciales «[…] facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación […]».
La teleología a la que responde este principio no es otra que garantizar el involucramiento y participación de los ciudadanos en el diseño y funcionamiento de las instituciones públicas, lo cual resulta factible gracias a una serie de mecanismos y derechos que instituyó la carta política en atención al modelo de Estado Social de Derecho adoptado.
De esta forma, la democratización de la función pública aparece como uno de los principios más importantes en nuestro ordenamiento jurídico pues sobre él descansa toda la estructura institucional y normativa. En efecto, el nutrido contenido de este principio le otorga un alcance amplio que no se restringe a la intervención ciudadana en materia electoral, sino que impacta, además, ámbitos sociales, comunitarios, familiares e individuales.
Es por ello que las manifestaciones del principio en cuestión son abundantes y pueden encontrarse a lo largo y ancho de la Constitución Política. A manera de ejemplo y por nombrar solo unas

cuantas, es factible identificar como expresiones de dicho mandato la diversidad étnica y cultural (artículo 7); el respeto por la autodeterminación de los pueblos (artículo 9); el derecho a la igualdad (artículo 13); el derecho a la libertad de conciencia, cultos y expresión (artículos 18, 19 y 20); el de petición (artículo 23); el de reunión (artículo 37); los diferentes mecanismos de participación ciudadana que consagra el artículo 40 como el derecho de acceso a cargos públicos; la acción de tutela (artículo 86); la posibilidad de que grupos significativos de ciudadanos presenten proyectos de ley o de reforma constitucional (artículo 155), entre muchas otras.

Con base en ello, la Corte Constitucional ha indicado que el principio democrático por el que propende la Carta Política es universal y expansivo, características a las que se ha referido en los siguientes términos:

> […] es universal en la medida en que compromete variados escenarios, procesos y lugares tanto públicos como privados y también porque la noción de política que lo sustenta se nutre de todo lo que vitalmente pueda interesar a la persona, a la comunidad y al Estado y sea por tanto susceptible de afectar la distribución, control y asignación del poder social. El **principio democrático**es expansivo pues su dinámica lejos de ignorar el conflicto social, lo encauza a partir del respeto y constante reivindicación de un mínimo de democracia política y social que, de conformidad con su ideario, ha de ampliarse progresivamente conquistando nuevos ámbitos y profundizando permanentemente su vigencia, lo que demanda por parte de los principales actores públicos y privados un denodado esfuerzo para su efectiva construcción […][72]

Ahora bien, dicha Corporación también ha destacado que las diversas formas en las que opera el principio democrático permite sostener que el constituyente no se adhirió a un modelo específico de democracia, sino que quiso consagrar un esquema en el que pudieran articular y armonizar los diferentes tipos de democracia, que en la sentencia C-105 de 2013 caracterizó así[73]:

democracia	**alcance**
Sustancial	Se enfoca en un el contenido mínimo de los derechos fundamentales, normalmente reconocidos en textos constitucionales, como eje central de la organización política y social, lo que significa que la voluntad popular, incluso aquella que se manifieste a través de un sistema de organización político debe someterse a aquellos.
Deliberativa	Lo valioso del ejercicio democrático no está en la decisión misma sino en los procedimientos a través de los cuales se encausan el debate y el diálogo públicos.
Representativa	Hace énfasis en el ejercicio de la voluntad popular a través de representantes que son elegidos mediante el derecho al voto.
Participativa	Resalta la importancia de que los ciudadanos intervengan directamente en los escenarios políticos, sociales y económicos para propender por la gestión de sus propios intereses.

Finalmente, es importante señalar que la trascendencia innegable de este mandato para el adecuado funcionamiento del modelo estatal colombiano hace que se erija como un parámetro esencial a la hora de estudiar la validez de una determinada norma, debiéndose favorecer siempre aquellas lecturas que favorezcan la realización del principio democrático en su máxima expresión. *Contrario sensu,* aquellas otras que afecten su núcleo esencial o que incluso limiten su aplicación a nuevos escenarios han de excluirse.

2. **Principio de autonomía de las entidades territoriales**

En materia de organización y estructura del Estado, la Constitución de 1991 introdujo el principio de autonomía de las entidades territoriales en sus artículos 1 y 287, último que lo desarrolló en los siguientes términos:

> […] ARTICULO 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos:
> 1. Gobernarse por autoridades propias.
> 2. Ejercer las competencias que les correspondan.
> 3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
> 4. Participar en las rentas nacionales […]

En tales términos, la autonomía territorial se refiere a un cierto grado de libertad e independencia que se les concede a las autoridades administrativas del nivel local con el fin de que ejerzan un autogobierno de los asuntos que les conciernen. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la autonomía territorial puede entenderse como el poder de dirección política y administrativa que, en virtud del principio democrático, se le atribuye a cada entidad territorial a efectos de que gestione sus propios intereses.

La trascendencia de este principio dentro del esquema organizacional del Estado que introdujo la Constitución de 1991 es de vital importancia ya que permite acercar la acción estatal al ciudadano y a las necesidades particulares de cada comunidad, lo que sin duda alguna redunda en el fortalecimiento de la legitimidad de aquel.

De acuerdo con ello, el núcleo esencial de la autonomía territorial está dado por el derecho que tienen las entidades territoriales a ejercer las competencias que le han sido atribuidas a efectos de asumir un rol activo, a través de sus propias autoridades, en la administración y el gobierno de las materias que despiertan un interés local.

En la sentencia C-517 de 1992, el máximo juez constitucional se ocupó de analizar el alcance de cada uno de los derechos que según el artículo 187 superior definen el contenido mínimo de este principio y que, en tal condición, constituyen un límite intocable para el legislador:

derecho a la autonomía territorial de las entidades territoriales (núcleo esencial)	**alcance del derecho**
A gobernarse por autoridades propias	[…] se ejerce mediante el voto directo de los habitantes del respectivo territorio y de él se deriva la facultad de que gozan las autoridades electas para definir el ejercicio de la autonomía territorial y dentro de los límites del principio de unidad nacional, los destinos de la respectiva entidad. Con este fin se han creado mecanismos de participación ciudadana, como los contemplados en los artículos 40 y 103 de la Constitución Nacional. […] la elección de las autoridades propias y los mecanismos de participación popular son elementos especiales de la descentralizacion política que dota a la entidad del derecho, dentro del principio de unidad, de manejar los asuntos que conciernan a su territorio y a su población de manera autónoma. Vale decir, de definir, con criterio político, la viabilidad de asuntos de interés público dentro de los límites del ente territorial […]
A ejercer las competencias que les correspondan	[…] En general son la Constitución y la Ley Orgánica del Ordenamiento Territorial las encargadas de definir tales competencias. Así, a falta de esta última, en principio los entes territoriales tienen derecho a ejercer las competencias a las que se refiere la Carta […] De acuerdo con lo anterior es posible afirmar que las autoridades municipales tienen la atribución política de decidir

	cuales son las obras que demanda el progreso social y cuales no, así como cuales son las medidas que llevan a promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural. Si en la evaluación de conveniencia de determinadas medidas, el interés del municipio se enfrenta a un interés departamental o nacional, la tarea será, en virtud de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, resolver el conflicto en cada caso concreto […]
A administrar sus recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones	[…] los impuestos nacionales deben ser creados por la ley, los departamentales por ordenanzas y los municipales por medio de acuerdos, sin que exista ninguna razón constitucional para que una ley grave a la población de un municipio o departamento para el cumplimiento de las funciones específicas de éste o aquel. Ahora bien, los departamentos y municipios se encuentran sujetos al marco legal en la creación de sus tributos propios en virtud del principio de unidad nacional […]
A participar en las rentas nacionales	[…] la propia Constitución establece el situado fiscal, acompañado de un importante principio según el cual "No se podrán descentralizar responsabilidades sin la previa asignación de recursos fiscales suficientes para atenderlas". (Art. 356 C. N.) […]

Finalmente, aunque el artículo 287 constitucional no hace mención expresa a tal atribución, la sentencia C-517 de 1992 destacó como otra de las prerrogativas de las entidades territoriales, radicada específicamente en las asambleas departamentales y concejos municipales, la de adoptar los respectivos planes y programas de desarrollo económico, social y de obras públicas.

Visto lo anterior, es importante señalar que el aludido principio de autonomía debe ser interpretado y aplicado en armonía con el principio de unidad, lo que implica entender que el poder que se le concede a las entidades territoriales no es absoluto y soberano pues debe ejercerse dentro de unos límites constitucional y legalmente establecidos, que se explican en el reconocimiento de la superioridad del Estado unitario.

Respecto de la tensión que puede generarse entre estos dos principios, la Corte Constitucional ha señalado que debe resolverse buscando un equilibrio por medio del «[…] establecimiento de limitaciones recíprocas en la atribución de competencias a los distintos niveles territoriales, de conformidad con los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad contemplados en el Art. 288 de la Constitución, en la forma que establezca la ley […]»[74].

Ahora bien, para determinar los casos en que en las relaciones entre la Nación y las entidades territoriales se desconoce el núcleo esencial del principio de autonomía que rige para estas últimas, la jurisprudencia constitucional ha estructurado lo que se conoce como un test de vaciamiento de competencias[75].

El primer paso para realizar dicha evaluación consiste en identificar si el ente territorial ha sido despojado del control y manejo de la actividad administrativa que por disposición constitucional o legal le compete. Ahora bien, la pérdida del poder de direccionamiento propio de la entidad no basta para predicar un vaciamiento de competencias pues, en segundo lugar, será necesario establecer si la limitación impuesta al órgano respectivo tiene alguna repercusión en su objeto institucional y, por último, tendrá que definirse si el desplazamiento de funciones goza de justificación y razonabilidad, pues en caso de que se advierta que obedece a necesidades o finalidades constitucionalmente legítimas, la restricción resultará admisible.

3. **Caso concreto**

Los demandantes coincidieron en señalar que las normas acusadas vulneran el principio democrático pues prever que la vacante del empleo de personero debe cubrirse con quien ocupe el primer puesto de la lista implica omitir la deliberación y el proceso de participación ciudadana que merece una elección de tal naturaleza.
De otro lado, estimaron transgredido el principio de autonomía de las entidades territoriales, aspecto frente al cual argumentaron que se presentó un vaciamiento de las competencias constitucionalmente atribuidas a los concejos territoriales en la elección de servidores públicos que no son de carrera.
La censura que en ese sentido formularon los señores José Ignacio Arango Bernal y otro debe resolverse en forma desfavorable toda vez que ya fue objeto de pronunciamiento por la Corte Constitucional en la citada sentencia C-105 de 2013, en la que se concluyó que el hecho de que los personeros municipales fuesen elegidos «[…] previo concurso público de méritos […]» no transgrede los principios constitucionales antedichos.
Al ser el concurso público de méritos que regulan los actos demandados un desarrollo de aquel que consagra el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012, esta Corporación no puede más que someterse a la decisión judicial en la que se declaró la exequibilidad de dicha norma por los reproches señalados.
Así, el presunto desconocimiento del principio democrático se descartó en la sentencia C-105 de 2013 bajo el entendido de que afirmar que su respeto depende de que las corporaciones públicas puedan deliberar para decidir discrecional y libremente a la persona que debe ocupar el cargo de personero municipal porque sus miembros representan y actúan en nombre de la voluntad general, parte de una noción restringida de aquel principio que olvida que el concurso de méritos materializa los postulados de la democracia participativa y de la sustancial.
La primera de ellas se garantiza al permitir que cualquier persona que cumpla con los requisitos para el ejercicio del cargo haga parte del respectivo proceso de selección, al igual que con la consagración de mecanismos que efectivicen la publicidad y transparencia de aquel, a efectos de que la ciudadanía pueda realizar el seguimiento y control respectivo. De otro lado, que el sistema de provisión de los personeros municipales sea el concurso público realiza la democracia sustantiva pues así se asegura el respecto por derechos fundamentales como la igualdad, la participación en la función pública y el debido proceso.
Ahora bien, en lo que se refiere al cargo de nulidad que estudió la Corte Constitucional en aquella sentencia por violación del principio de autonomía de las entidades territoriales, es preciso señalar que se encontró probado en la medida en que el texto original del artículo 35 de la citada Ley 1551 de 2012 le asignó la realización del concurso público de méritos a la Procuraduría General de la Nación.
El máximo juez constitucional concluyó que de esta forma se vulneraba el derecho consagrado en el artículo 187, conforme con el cual debe respetarse el ejercicio de las competencias que le correspondan a las entidades territoriales, conclusión a la que llegó luego de aplicar el test de vaciamiento de competencias.
Sobre el particular, consideró que, por vía legal, se había trasladado la etapa fundamental del proceso de selección de personeros municipales a una entidad del orden nacional como lo es la Procuraduría General de la Nación, a pesar de que constitucionalmente se asignó dicha atribución a los concejos municipales. Además, precisó que esa transferencia de funciones afectaba seriamente el objeto institucional de dichas corporaciones públicas[76].
Con base en estos argumentos, la Corte Constitucional sostuvo que, precisamente a efectos de respetar el principio de autonomía de las entidades territoriales, la responsabilidad de dirigir y conducir los concursos públicos de méritos para la elección de personero municipal debía ser ejercida por los concejos municipales y no por el Ministerio Público, razón por la cual decidió declarar la inexequibilidad de la expresión «[…] que realizará la Procuraduría General de la Nación […]», contenida inicialmente en el Inciso 1, y de los incisos 2, 4 y 5 del Artículo 35 de la Ley 1551 de 2012.

En conclusión, los artículos 4 del Decreto 2485 de 2014 y el 2.2.27.4 del Decreto 1083 de 2015 no desconocen el principio democrático ni el de autonomía de las entidades territoriales.

Decisión

Por lo anterior, la Subsección A denegará las pretensiones de la demanda consistentes, la principal, en que se declare totalmente nulo el Decreto 2485 de 2014 y parcialmente el Decreto 1083 de 2015 en lo que se refiere a su Título 27 (artículos 2.2.27.1 al 2.2.27.6) y la subsidiaria, referida a la nulidad de los artículos 4 del Decreto 2485 de 2014 y 2.2.27.4 del Decreto 1083 de 2015.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Denegar las pretensiones de las demandas instauradas por los señores David Alonso Roa Salguero en contra del Departamento Administrativo de la Función Pública y José Ignacio Arango Bernal en contra de esta última entidad y de la Nación, Ministerio del Interior, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático «Justicia Siglo XXI».

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

[1] Los procesos 11001-03-25-000-2015-01089-00 (4824-2015) y 11001-03-25-000-2016-00001-00 (0001-2016) fueron acumulados mediante auto del 15 de noviembre de 2016 (Ff. 88 y 89, cuaderno principal del expediente 4824-2015).

[2] Presentó la demanda en ejercicio del medio de control de nulidad por inconstitucionalidad consagrado en el artículo 135 del CPACA, sin embargo su trámite fue adecuado en auto del 15 de febrero de 2016 al de nulidad simple (Ff. 16-20, cuaderno principal del expediente 0001-2016).

[3] Radicado 11001-03-25-000-2016-00001-00 (expediente 0001-2016).

[4] Radicado 11001-03-25-000-2015-01089-00 (expediente 4824-2015).

[5] Ff. 8-37, cuaderno principal del expediente 4824-2015.

[6] Ff. 5-13, cuaderno principal del expediente 0001-2016.

[7] Ff. 68-74, cuaderno principal del expediente 4824-2015.

[8] Ff. 75-82, cuaderno principal del expediente 4824-2015.

[9] Ff. 30-36, cuaderno principal del expediente 0001-2016.

[10] Fue reconocido en el expediente como tercero interviniente en calidad de coadyuvante del demandante a través de auto del 27 de julio de 2017 (Ff. 103-105, cuaderno medidas cautelares).

[11] La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias; la relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo», porque es guía y ajuste de esta última. Hernández Gómez William, actualmente Consejero de Estado, Sección Segunda (2015). Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB.

[12] Ff. 127-129, cuaderno principal expediente 4824-2015.

[13] Ff. 123-126, cuaderno principal expediente 4824-2015.

[14] Ff. 130-135, cuaderno principal expediente 4824-2015.

[15] Artículo 5 de la Ley 909 de 2004.

[16] El artículo 21 inciso 1 de la Ley 909 de 2004 prevé que «[…] Los empleos de carrera administrativa se proveerán en período de prueba o en ascenso con las personas que hayan sido seleccionadas mediante el sistema de mérito, según lo establecido en el Título V de esta ley […]».

[17] Respecto de esta etapa del proceso de selección, el numeral 5 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 señala lo siguiente: «[…] Período de prueba. La persona no inscrita en carrera administrativa que haya sido seleccionada por concurso será nombrada en período de prueba, por el término de

seis (6) meses, al final de los cuales le será evaluado el desempeño, de acuerdo con lo previsto en el reglamento. Aprobado dicho período al obtener evaluación satisfactoria el empleado adquiere los derechos de la carrera, los que deberán ser declarados mediante la inscripción en el Registro Público de la Carrera Administrativa. De no obtener calificación satisfactoria del período de prueba, el nombramiento del empleado será declarado insubsistente. El empleado inscrito en el Registro Público de Carrera Administrativa que supere un concurso será nombrado en período de prueba, al final del cual se le actualizará su inscripción en el Registro Público, si obtiene calificación satisfactoria en la evaluación del desempeño laboral. En caso contrario, regresará al empleo que venía desempeñando antes del concurso y conserva su inscripción en la carrera administrativa. Mientras se produce la calificación del período de prueba, el cargo del cual era titular el empleado ascendido podrá ser provisto por encargo o mediante nombramiento provisional […]».

[18] Además de aquellos que expresamente la Constitución ha identificado como tales (189-1; 189-2; 189-13; 266; 305-5), son de libre nombramiento y remoción los empleos que así defina el legislador atendiendo a criterios como (i) la confianza cualificada que requiere el desempeño de las funciones asignadas; (ii) un contenido funcional del empleo que se traduzca en responsabilidades de dirección, conducción y orientación institucional y (iii) la ubicación del cargo en el nivel jerárquico de la respectiva entidad. Al respecto puede consultarse el artículo 5 la Ley 909 de 2004.

[19] El artículo 21 inciso 2 de la Ley 909 de 2004 señala que «[…] Los empleos de libre nombramiento y remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento establecido en esta ley […]».

[20] El ordenamiento jurídico se vale de dos mecanismos para establecer los empleos públicos que corresponden a esta modalidad. El primero, que integra los criterios orgánico y funcional, se encuentra descrito en el inciso 1.º del artículo 5 del Decreto 3135 de 1968, con apoyo en el cual es viable afirmar que son trabajadores oficiales las personas que presten servicios de construcción y sostenimiento de obras públicas en los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y establecimientos públicos. El segundo responde a la libertad de configuración del legislador cuando dispone que las personas que presten sus servicios a determinadas entidades (Empresas industriales y comerciales del Estado, entes universitarios autónomos, empresas de servicios públicos domiciliarios; corporaciones autónomas regionales; empresas sociales del Estado) ostenten la condición de trabajadores oficiales.

[21] Artículo 21 de la Ley 909 de 2004.

[22] Sentencia C-288 del 20 de mayo de 2014.

[23] Es importante anotar que a pesar de que los empleos de elección popular están llamados a ejercerse durante un lapso definido, éstos constituyen una categoría diferente de la de empleo de periodo fijo, lo que denota la imprecisión en la que incurrió el legislador en el artículo 5 de la Ley 909 de 2004 al consagrar esta tipología de cargos.

[24] El mérito es un principio transversal a la Constitución de 1991. El hecho de que las calidades intelectuales, personales, académicas y laborales aparezcan como criterios esenciales en la provisión de los empleos públicos, juega tanto a favor de los trabajadores como en beneficio del Estado, último que de esta forma logra atender de la mejor manera las necesidades del servicio y los intereses de la comunidad.

[25] Al respecto, la sentencia C-105 de 2013 (expediente D-9237 y D-9238) señaló que «[…] la obligatoriedad de este sistema en los cargos de carrera no excluye su utilización en aquellos que no tienen este carácter. Por el contrario, como según el texto constitucional el concurso es la regla general, las excepciones que se establezcan en el derecho positivo deben estar respaldadas y justificadas en los principios y fines del propio ordenamiento constitucional. En segundo lugar, la Carta Política no solo avala este tipo de procedimiento para la elección de funcionarios de libre nombramiento y remoción y de los que se encuentran sometidos a un período fijo (como los personeros), sino que, además, sus finalidades justifican su aplicación […]»

[26] En estos casos la provisión compete a una autoridad administrativa de representación popular, como el presidente de la República, los gobernadores, los alcaldes, las asambleas departamentales y los concejos distritales o municipales.
[27] Esta Corporación tuvo la oportunidad de pronunciarse recientemente sobre la materia al conocer de la demanda interpuesta en contra de los Acuerdos 001 y 002 de 2019, expedidos por los presidentes de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, a efectos de reglamentar el concurso de méritos para la elección del registrador nacional del estado civil. Así, en sentencia del 28 de octubre de 2019 (radicado 11001031500020190048800, expediente 3641-2019), esta Subsección destacó que el proceso de selección previsto en el caso de aquel funcionario es un verdadero concurso público de méritos. Además, indicó que los artículos 126 y 266 de la Constitución Política deben interpretarse armónicamente en el entendido de que los principios de transparencia, publicidad, participación ciudadana y equidad de género que consagra el primero de tales preceptos para las convocatorias públicas de los funcionarios elegidos por corporaciones públicas, al ser principios constitucionales, también resultan aplicables al proceso de selección del registrador nacional.
[28] Sobre las diversas modalidades bajo las cuales puede llevarse a cabo un proceso de selección, la Corte Constitucional precisó lo siguiente en la sentencia C-123 de 2013 (expediente D-9243): «[…] algunos procesos de selección se valen de medios distintos del concurso para establecer las condiciones de los postulados al ejercicio de cargos públicos. Surge de lo anterior que los procesos de selección entre varios aspirantes son de variada índole, no obstante lo cual las distintas vías conducentes a escoger a quienes han de acceder al desempeño de cargos públicos tienen un común denominador, cual es el propósito de asegurar que finalmente resulte seleccionado el candidato que, en concurrencia con los demás y habiéndose sometido al mismo proceso de selección, haya demostrado poseer las mejores condiciones, atendidos los requerimientos del cargo al que se aspire […]».
[29] Así lo establece el artículo 27 de la Ley 909 de 2004 cuando regula el concurso público de méritos como mecanismo de provisión de los empleos públicos de carrera.
[30]**Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.**
[31] Según el numeral 1 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 «[…] es norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los participantes […]».
[32] El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 dispone que «[…] tiene como objetivo atraer e inscribir el mayor número de aspirantes que reúnan los requisitos para el desempeño de los empleos objeto del concurso […]».
[33] Artículo 31, numeral 3 de la Ley 909 de 2004.
[34] Artículo 31, numeral 4 de la Ley 909 de 2004.
[35] Artículo 31, numeral 5 de la Ley 909 de 2004.
[36] Corte constitucional, sentencia T-040-1995, expediente D-652.
[37] Corte constitucional, sentencia T-610-2017, expediente T-6177660.
[38] El inciso en comento prevé que «[…] Salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley […]».
[39] Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil; expediente 2274.
[40] Debe entenderse que dicho concepto comprende tanto a los servidores públicos como a los particulares investidos de funciones administrativas.
[41] ARTICULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
[42] ARTICULO 6. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. (esto es legalidad formal).
[43] ARTICULO 121. Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley.
[44] ARTICULO 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente …
[45] ARTICULO 123. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.
Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento…
[46] ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.
[47] Corte Constitucional, sentencia C-014 del 21 de enero de 1993.
[48] Artículo 114 y 150, numerales 1 y 2 de la Constitución Política.
[49] La norma superior ha dispuesto la existencia de reserva de ley en materia de derechos fundamentales, administración de justicia, servicios públicos, organización de la administración pública, impuestos, entre otros.
[50] En su libro «Lecciones de derecho administrativo», el profesor Luciano Parejo Alfonso define la reserva de ley como una «[…] técnica de delimitación de ámbitos materiales a favor de los órganos con competencia constitucional para dictar Leyes, de tal suerte que la regulación de dichos ámbitos debe producirse en primera instancia, mediante Leyes en sentido formal o, en todo caso, y con alguna limitación, por normas que, aún emanadas del Gobierno correspondiente, tienen rango y fuerza de ley […]» (Editoriales: Tirant lo Blanch y Universidad Externado de Colombia; tercera edición; Bogotá; 2010; p. 96).
[51] Es importante anotar que el numeral 10 del artículo 150 superior no incluye expresamente las leyes marco como uno de los supuestos en los que aplica la cláusula de reserva de ley, en su lugar, se contempla la prohibición de conferir facultades extraordinarias al Gobierno para expedir las leyes de que trata el numeral 20 de la misma norma, esto es, las que se ocupan de la creación de los servicios administrativos y técnicos de las Cámaras. No obstante lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha aclarado que la remisión que hace el numeral 10 al 20 del artículo 150 de la Constitución es producto de un lamentable descuido pues en la votación final de la norma se retiró el numera 15, de manera que el numeral relativo a las leyes marco, que antes era el 20, pasó a ser el 19.
[52] Luciano Parejo Alfonso; «Lecciones de derecho administrativo»; Editoriales: Tirant lo Blanch y Universidad Externado de Colombia; tercera edición; Bogotá; 2010; pp. 96-97.
[53] Sentencia C-219 del 19 de abril de 2017, Corte Constitucional, expediente D-11662.
[54] Sobre la importancia de no predicar la aplicación generalizada de la reserva de ley, el profesor Héctor Santaella Quintero señala que «[…] Solo un examen detallado del texto constitucional permite determinar con precisión qué asuntos han sido reservados. Dicho análisis permitirá distinguir tanto las reservas de ley formal como de ley material y las reservas de ley ordinaria de las

reservas de leyes especiales o cualificadas […]». *Del principio de legalidad al principio de juridicidad: implicaciones para la potestad normativa de la administración de una transición constitucionalmente impuesta;* En «La constitucionalización del derecho administrativo: XV Jornadas Internacionales de derecho administrativo»; Universidad Externado de Colombia; 2014; Bogotá; p. 111. En esa misma línea, en la nota al pie número 96 de dicho artículo indica lo siguiente: «[…] ¿Para qué reservar algo en particular si la totalidad está reservada Por esto no tiene sentido la equiparación que a veces se observa entre la cláusula general del parlamento y la reserva de ley. Como señala MERKL., "el sentido de la reserva legal es que la forma legal se impone para la formulación del derecho de un cierto contenido, pero no para todo el derecho".
[55] Algunos ejemplos son la Ley 1751 de 2015 (derecho a la salud); Ley 1755 de 2015 (derecho de petición); Ley 1618 de 2013 (derechos de las personas con discapacidad).
[56] Ley 270 de 1996, Estatutaria de administración de justicia.
[57] Ley 130 de 1994, Por la cual se dicta el estatuto básico de los partidos y movimientos políticos, se dictan normas sobre su financiación y la de las campañas electorales y se dictan otras disposiciones. Al igual que la Ley 1475 de 2011, por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones.
[58] Ley 1909 de 2018, por medio de la cual se adopta el estatuto de la oposición política y algunos derechos a las organizaciones políticas independientes.
[59] Ley 134 de 1994, por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana.
[60] Ley 137 de 1994, Por la cual se reglamentan los Estados de Excepción en Colombia.
[61] Es aquella que comprende los valores, principios y derechos fundamentales previstos en el texto superior.
[62] La Constitución española adopta un criterio semejante cuando dispone en su artículo 53 que «1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a) […]» (subraya la Sala).
[63] Es aquella en la cual se establece, entre otras, la estructura organizacional del Estado, al igual que las competencias y potestades básicas otorgadas a sus diferentes órganos y autoridades.
[64] ARTICULO 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
[65] Tal es el caso, a manera de ejemplo, del régimen de explotación de los recursos no renovables que prevé el artículo 360 superior, de conformidad con el cual «[…] La explotación de un recurso natural no renovable causará, a favor del Estado, una contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte. La ley determinará las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables. Mediante otra ley, a iniciativa del Gobierno, la ley determinará la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios […]».
[66] Sentencia C-037 del 26 de enero de 2000, Corte Constitucional, expediente D-2441.
[67] Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 21 de octubre de 2010, Radicación 11001-03-25-000-2005-00125-00(5242-05), Actor: Asociación Antioqueña de Empresas Sociales del Estado.

[68] Sentencia del 3 de diciembre de 2007, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2003-00014-01, expediente 24715.
[69] En el caso de los llamados reglamentos «constitucionales autónomos» debido a que es la propia Constitución la que directamente atribuye la competencia o potestad regulatoria, no puede predicarse algún tipo de sujeción a la ley. Por ello se ha sostenido que la relación entre dichos actos administrativos y la ley, en lugar de estar sometida a una jerarquía, se caracteriza por un criterio de distribución de competencias normativas que ha efectuado la propia carta política. Por su parte, en el caso de los decretos que reglamentan una ley marco, se predicará subordinación entre estos y la ley que desarrollan, pero no respecto de las demás leyes, con las cuales existirá una relación horizontal en la escala jerárquica.
[70] Artículo 6.º de la Constitución Política.
[71] Artículo 2.º *ibidem*.
[72] Corte Constitucional, sentencia C-089 de 1994; expediente.
[73] Sobre el particular, puede consultarse la sentencia C-105 de 2013, expedientes D-9237 y D-9238.
[74] Corte Constitucional, sentencia C-554 de 2007, expediente D-6677.
[75] Al respecto puede consultarse la sentencia C-105 de 2013.
[76] En segundo lugar, este traslado funcional afecta el objeto institucional de los concejos. En efecto, estos órganos tienen tres tipos de roles: de un lado, cumplen funciones de tipo normativo, cuando regulan materias para el funcionamiento de los municipios y distritos, como el uso del suelo, la defensa del patrimonio ecológico y cultural, la prestación de los servicios o la estructura de la administración, entre otras; por otro lado, desempeñan funciones de índole política, relacionadas con el control de la administración municipal o distrital; y finalmente, funciones relacionadas con la designación de servidores municipales o distritales, en el entendido de que uno de los componentes fundamentales de la autonomía de las entidades territoriales radica, justamente, en el derecho a gobernarse por autoridades propias, y a que el control de la conducta oficial y la promoción de los derechos humanos, sea ejercido por órganos del mismo nivel territorial.

RV: CONTESTACIÓN DEMANDA PERDIDA DE INVERSTIDURA RADICADO: 50001 23 33 000 2021 00272 00

Secretaria General Tribunal Administrativo - Seccional Villavicencio
<sgtadmvcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Lun 09/08/2021 11:04

Para: Iser Leonardo Tejeiro Quintero <itejeirq@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: Gina Paola Rodriguez Gomez <grodrigg@cendoj.ramajudicial.gov.co>

3 archivos adjuntos (16 MB)

RESPUESTA A DEMANDA PERDIDA DE INVESTIDURA.pdf; IMPUGNACIÓN ACCIÓN DE TUTELA (1).pdf; 12. FALLO SEGUNDA INSTANCIA TUTELA.pdf;

50001233300020210027200

Radicación: 50001-23-33-000-2021-00272-00
Medio de control: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Demandantes: WILMER OLAYA CARVAJAL, ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, HÉCTOR REYES RATIVA Y JHONNY ANDRES BASTO HERNÁNDEZ
Demandados: VÍCTOR JULIO RAMOS CUBILLOS, FARLEY CARVAJAL REY, ANDRÉS MAURICIO CHÁVEZ QUEVEDO, JHONNY STEVENSON GIRALDO ARAGÓN, ALEXANDER VARELO, ZULMA YOLIMA DIAZ, LILIANA MARCELA BAQUERO TORRES Y GILDARDO SANTOS CHAPARRO
Mag. Galeano

El Señor VÍCTOR JULIO RAMOS CUBILLOS, en nombre propio allega contestación de la demanda y realizar proposición de excepciones

---

De: victor ramos <victorramossld1a@hotmail.com>
Enviado: lunes, 9 de agosto de 2021 10:48 a. m.
Para: Secretaria General Tribunal Administrativo - Seccional Villavicencio <sgtadmvcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: CONTESTACIÓN DEMANDA PERDIDA DE INVERSTIDURA RADICADO: 50001 23 33 000 2021 00272 00

Doctores
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META.
NOHRA EUGENIA GALEANO PARRA- Ponente_
Villavicencio -Meta

Medio de Control:	PERDIDA DE INVESTIDURA.
RADICADO:	50001 23 33 000 2021 00272 00
DEMANDANTE:	WILMER OLAYA CARVAJAL, ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, HECTOR REYES RATIVAY JHONNY ANDRES BASTO HERNANDEZ
DEMANDADO:	VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS Y OTROS

Acacias, 09 de agosto 2021

Doctores
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META.
NOHRA EUGENIA GALEANO PARRA- Ponente_
Villavicencio -Meta

Medio de Control:	**PERDIDA DE INVESTIDURA.**
RADICADO:	50001 23 33 000 2021 00272 00
DEMANDANTE:	WILMER OLAYA CARVAJAL, ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, HECTOR REYES RATIVAY JHONNY ANDRES BASTOS HERNANDEZ
DEMANDADO:	VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS Y OTROS

ASUNTO: Contestación de demanda

VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS, domiciliado en Acacias-Meta, identificado con la cédula de ciudadanía No. **17.420.608** de Acacias-Meta, Concejal del Municipio de Acacias, para el periodo 2020-2023; obrando a nombre propio; respetuosamente procedo a contestar la demanda en el proceso de la referencia dentro del término legal y oportuno, en los términos que a continuación se indican:

FRENTE A LOS HECHOS

Respecto a los hechos enunciados como fundamento fáctico de la demanda en el proceso de referencia, me permitiré hacer los siguientes pronunciamientos:

HECHO 1: Es CIERTO. Con la claridad que la plenaria del concejo municipal faculto de manera expresa bajo las disposiciones del articulo 50 de acuerdo 427 del 2016 "Reglamento Interno" es decir, que existe la obligación de la mesa directiva de adelantar una **CONVOCATORIA PUBLICA** y generar una lista de admitidos, que según esta disposición el Concejo Municipal está facultado para realizar una votación secreta de manera libre para su elección.

HECHO 2: Es parcialmente cierto, teniendo en cuenta el encabezado de la misma Resolución No 48 de 17 de noviembre de 2020, establece **"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UNA CONVOCATORIA PARA LA ELECCION DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO DE ACACIAS"**.
Asimismo, en los considerando el inciso tres establece nuevamente la expresión "Que en la sesión plenaria del dia 13 de nov. De 2020, se autorizó a la mesa directiva del concejo

municipal para que adelantara la respectiva convocatoria para la elección de la secretaria general".

Es decir, que si la mesa directiva actuó como lo manifiesta los demandantes, estableciendo una CONCURSO DE MERITOS para la elección de la secretaria General, estaría en total oposición en primer lugar el articulo 50 de acuerdo 427 de 2016 y la delegación expresa hecha por la plenaria, si se tiene en cuenta que la delegación fue expresa para adelantar una CONVOCATORIA PUBLICA.

Cabe recordar, que el Acto Legislativo 02 de 2015, mediante el cual se modificó el artículo 126 "salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores publico atribuida a corporaciones publica deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que garantice los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de méritos para su selección"
De esta manera a lo largo de la misma resolución se establece que el proceso que se va adelantar para la elección de secretaria es una "CONVOCATORIA PUBLICA.". La expresión que resalta de los demandantes hace relación al Mérito como principio rector del artículo 126 de la Constitución Política, no como procedimiento para la elección de la Secretaria General del Concejo Municipal.

HECHO 3: Es cierto, pero nuevamente, sigue siendo una interpretación errónea de los demandantes, o uso malintencionado de la mesa directiva de exceder la facultad otorgada por la plenaria.

Asimismo, caber aclarar antes de la expedición de la Resolución 77 de 2020, se expidió la Resolución 73 del 2020, que en sus considerandos estableció la aplicación de la Ley 1904 de 2018, norma que al momento de su publicación se encontraba derogada por el artículo 333 de la Ley 1955 de 2019, con fundamento en esta norma derogada se incluyó en el cronograma la prueba de conocimiento, dicha resolución tuvo que ser nuevamente modificada por la observación de una de las participantes de la Convocatoria Pública.

Pero la mesa directiva al modificarla con la resolución 77 de 2020, suprimieron el texto derogado de las consideraciones, pero mantuvieron la prueba de conocimiento con el fin de generar confusión y falta de claridad en el proceso de selección de la Secretaria General del Concejo.

HECHO 4: es cierto, y como lo manifiesta el demandante fue una Convocatoria y se cumplieron los criterios de mérito, de acuerdo con la convocatoria pública.

HECHO 5: es cierto, pero cabe recordar que esta Prueba de Conocimiento no se contempló desde la parte inicial del proceso con la Resolución 48 de 2020, sino que fue introducida al proceso bajo la aplicación de una norma derogada en la Resolución 73 de 2020, sin que esta fuera subsanada en su totalidad con la resolución 77 de 2020, por lo tanto, quedo incluida la prueba dentro del proceso, pero por un yerro jurídico de la mesa directiva.

HECHO 6: la primera parte es cierta, pero en segundo párrafo es una conclusión emitida por el demandante, que no resulta coherente con el hecho inicialmente plantado, es decir que no existe relación entre la premisa y la conclusión planteada, por lo tanto, no prueba de manera alguna la "TRAFICO DE INFLUENCIA".

HECHO 7: es cierto,

HECHO 8: Es parcialmente cierto, toda vez que las conclusiones y valoraciones hechas por el demandante no son prueba de la existencia del presunto Tráfico de Influencia. Es decir, está claramente establecido que no existió el hecho generador de la conducta antijurídica, que se me intenta endilgar por parte de los demandantes, lo que se desplego fue el uso de una facultad legitima de mi labor como Concejal.

HECHO 9: No es cierto, toda vez que no se adelantó un Concurso de Méritos, sino una convocatoria pública de acuerdo a la facultad delegada por la plenaria del concejo a la mesa directiva conformada para la época de los hechos por los demandantes. Esta era una Lista de Admitidos, frente a la cual los concejales estaban facultados para elegir por votación secreta a la Secretaria General del Concejo Municipal de Acacias; y no en la obligación de Posesionar a la de mayor puntaje.

HECHO 10: No es cierto; toda vez que esto no prueba la confabulación de los 8 demandados, sino todo lo contrario, teniendo en cuenta que son los 7 concejales que hicieron el voto público y luego suscribieron el voto, fueron los que realmente generaron la confabulación, al ponerse de acuerdo para votar a favor de PATRICIA MORERA ANAYA, por qué de que otra manera se entiende que estos 7 concejales, firmaron los votos, sino fue con un acuerdo previo para su elección.

Hay que tener en cuenta que yo realice mi votación con la plena convicción que se trataba de una convocatoria pública con una lista de admitidos y no una lista era una lista de elegibles con su correspondiente orden de elegibilidad, en tal caso, no se hubiera podido proceder con la Votación Secreta, sino al nombramiento y posesión del primero en la lista de elegibles, desconociendo flagrantemente el mandato del articulo 50 de acuerdo 427 de 2016, el cual claramente establece una Lista de Admitidos frente al que opera el derecho de votación de los Concejales.

HECHO 11: No es un hecho, es una apreciación subjetiva del demandante, que no prueban de forma alguna el tráfico de influencia dentro de los concejales acá demandado, son conjeturas que saca sin tener una prueba, pero si prueba el acuerdo existió entre ocho concejales que anunciaron el voto por PATRICIA MORENO y de los cuales uno falto a la confabulación, la forma de refrendar el acuerdo entre ellos, fue la firma del voto según lo manifiesta el demandante.

HECHO 12: es parcialmente cierto, si se tiene en cuenta que, en segunda instancia, el juez revoco la decisión de primera instancia y ordeno nombrar nuevamente a la señora KATERINE ARENAS, quien no acepto su nombramiento, por lo tanto, se prueba que no hubo tráfico de influencias a su favor de nadie, si la Secretaria General electa manifestó

que no quería aceptar el nombramiento, lo que prueba que jamás existió confabulación máxime si la supuesta beneficiada del tráfico de influencias renuncio a su nombramiento.

EXCEPCION DE MERITO

PRIMERA: INDUCCIÓN DOLOSA AL ERROR POR PARTE LA MESA DIRECTIVA DEL PERIODO 2020 : por cuanto a lo largo de esta contestación de la Demanda, se ha probado de manera fehaciente la intención dolosa de los integrantes de la Mesa directiva hoy demandantes de crear confusión no solo en los concejales para la votación, sino en todos los participantes de la CONVOCATORIA PUBLICA, al incluir etapas adicionales como la PRUEBA DE CONOCIMIENTO o LISTA DE ELEGIBLES, después de iniciado el proceso con fundamento en normas derogadas.

Al incluir intencionalmente elementos del Concurso de Méritos como la supuesta Lista de elegibles y no la Lista de admitidos, en contravía del artículo 50 de acuerdo 427 del 2016: "DESIGANACION REQUISITOS Y PERIODO. El secretario general será elegido por el Concejo para un periodo legal de un (1) año, de lista de admitidos previa convocatoria pública con principio de mérito..."

En la continua intención de inducir al error a los Concejales del Municipio de Acacias, genero las Acciones de Tutelas, con decisiones dilatoria en el nombramiento de la Secretaria que generaron un degaste administrativo al Concejo Municipal en adelantar un proceso para la elección de una Secretaria General, que, por la falta de claridad y transparencia de la mesa directiva, no se logro la elección y nombramiento de la Secretaria General del Concejo.

a Ley 1904 de 2018 hace referencia a que la forma de elección del Contralor General de la República serviría de fundamento para la elección de funcionarios por las Corporaciones Públicas, sin embargo, dicha Ley fue objeto de DEROGATORIA por la Ley 1955 de 2019, por tanto, en el caso concreto no es viable juridicamente darle aplicación, en esta medida, la Resolución No. 073 de 2020 la Mesa Directiva incurrió en un yerro jurídico afectando el principio de legalidad y evocando normas sin vigencia en el tiempo, por tal motivo, procedieron a expedir la Resolución No. 77 de 17 de Diciembre de 2020, en la cual atendiendo la reclamación de una de las aspirantes al cargo, proceden a emitir este acto administrativo suprimiendo considerandos fundamentados en la Ley 1904 de 2018, sin embargo, debe discreparse que en la Resolución No. 73, **incluyeron la prueba de conocimiento teniendo por aplicación analógica la norma ya enunciada**, y que este hecho modificó la estructura del proceso, situación que en la Resolución No. 77 se afirma que la supresión del considerando de la norma derogada, no resulta reflejada su aplicación en el acto administrativo, simplemente es una enunciación, lo cual no es cierto, está demostrado y se infiere claramente que la aplicación de una **prueba de conocimiento** fue con base en la ley derogada, lo cual se mantuvo en la Resolución No. 77, aduciendo que no está ligado a la ley referida, y pues que dicho procedimiento puede resultar viable conforme a que la Corporación es quien establece la forma de la convocatoria, pero, lo que no se quiere es que la CONVOCATORIA PÚBLICA termine equiparándose sustancialmente a un CONCURSO DE MÉRITOS, en cuanto a que, la etapa de selección corresponda a

una lista de elegibles que la Corporación deba elegir a quien por orden estricto ocupe el primer puesto, porque no es la naturaleza ni la esencia de la CONVOCATORIA PÚBLICA, ya el Consejo de Estado y en sede de consulta el Departamento Administrativo de la Función Pública ha decantado el asunto, expresando que la elección de funcionarios por las Corporaciones Públicas, en el caso, de la Secretaria General del Concejo, para un periodo legal de un (01) año, el Concejo conserva una autonomía que está sustentada en el ámbito político- administrativo, de tal manera que, se considera que la lista de elegibles es quienes han cumplido con los criterios y requisitos mínimos exigidos, y de dicha lista podrán votar (VOTO SECRETO), de acuerdo con el Reglamento Interno, para elegir la aspirante que deseen conforme una mayoría de votos, considerada en la mitad más 1 del cociente electoral, para esto, le concluyo su señoría que: NO ES OBLIGACIÓN QUE EN EL MARCO DE UNA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA ELECCIÓN DE FUNCIONARIOS (SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO) POR PARTE DE LA CORPORACIÓN, EN PLENARIA, DEBA ELEGIR QUIEN OCUPE EL PRIMER PUESTO, RESULTADO DE LA PONDERACIÓN DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS, COMO EXPERIENCIA, ESTUDIOS Y PRUEBA DE CONOCIMIENTO; SE GUARDA TOTAL DISCRECIONALIDAD PARA QUE LOS CONCEJALES PUEDAN EJERCER SU VOTO Y ELEGIR A QUIEN DE LA LISTA CONSIDEREN IDÓNEA PARA OCUPAR EL CARGO.

SEGUNDA: INEXISTENCIA DEL HECHO GENERADOR DE LA CONDUCTA PUNIBLE:

En el cuerpo de la demanda presentada ni dentro de las pruebas aportadas los demandantes lograron probar el hecho generador del supuesto TRÁFICO DE INFLUENCIAS, toda vez que el Trafico de Influencias está regulado entre los artículos 428 y 430 del Código Penal "*El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, incurrirá en las penas de prisión de seis meses a dos años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de cinco a nueve años. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se impondrán en su mitad superior.*"

No se probó cual funcionario público influyo en el otro, teniendo en cuenta que no aporto prueba de algún tipo de acuerdo entre los concejales. Asimismo, no aportó pruebas que pudieran demostrar el beneficio económico para sí o para un tercero, si se tiene en cuenta que la Secretaria Electa KATERINE ARENA ALVAREZ, debido a la falta de claridad y transparencia del proceso orquestado desde la mesa directiva del periodo 2020, decidió renunciar al su derecho de ser nombrada como Secretaria General. lo que derivó en que el Concejo Municipal de Acacias iniciara un nuevo proceso para proveer este cargo de Secretaria General.

Es claro que la causal establecida de Perdida de Investidura según el número 4 del artículo 55 de la ley 136 de 1994, exige que el tráfico de influencias esté "**debidamente comprobado**", requisito que no cumplieron los demandantes dentro del proceso que hoy nos ocupa.

TERCERO: CUMPLIMIENTO DE UN DEBER CONSTITUCIONAL DE MI EJERCICION LEGITIMO DE CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE ACACIAS.

Mi conducta desplegada dentro del proceso de elección de la secretaria General, obedeció al cumplimiento de un deber CONSTITUCIONAL con el ACTO LEGISLATIVO 02 DE 2015, que en su artículo 2 modifica el artículo 126 "Salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá ser precedida de una convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen los requisitos y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección.

Ley 136 de 1994 "ARTÍCULO 31.- Reglamento. Los concejos expedirán un reglamento interno para su funcionamiento en el cual se incluyan, entre otras, las normas referentes a las comisiones, a la actuación de los concejales y la validez de las convocatorias y de las sesiones.

ARTÍCULO 35.- Elección de funcionarios. Los concejos se instalarán y elegirán a los funcionarios de su competencia en los primeros diez días del mes de enero correspondiente a la iniciación de sus periodos constitucionales, previo señalamiento de fecha con tres días de anticipación. En los casos de faltas absolutas, la elección podrá hacerse en cualquier período de sesiones ordinarias o extraordinarias que para el efecto convoque el alcalde."

artículo 50 de acuerdo 427 del 2016: "DESIGANACION REQUISITOS Y PERIODO. El secretario general será elegido por el Concejo para un periodo legal de un (1) año, de lista de admitidos previa convocatoria pública con principio de mérito..."

Por lo anterior, es la prueba clara la intención dolosa de inducir al error durante el proceso de Selección por parte de la mesa Directiva, con el fin de regirlo como como Concurso de Méritos, siendo estas actuaciones completamente contrarias a derecho, por lo tanto, mi deber como Concejal del Municipio de Acacias, fue actuar bajo del mandato superior de las normas de raigambre constitucional y legal que son de obligatorio cumplimiento, sin que existiera un abuso de poder o un tráfico de influencias, en la cual no existe la prueba ni siquiera de un posible beneficiario.

Dejando un lado, que la Mesa Directiva se ocupó de atribuciones para diseñar, elaborar y aplicar la prueba de conocimientos, al igual que, las preguntas de la entrevista, el Concejo Municipal de Acacias en plenaria le asistia el derecho y deber de realizar la calificación en un rango de 1 a 100, con total libertad de que asignar el puntaje a cada aspirante, de forma individual cada concejal, sin necesidad de justificar o argumentar el puntaje (valor) dado a cada aspirante, por cuanto, gozan de total autonomía respetando el principio de legalidad, debido proceso, transparencia, moralidad, y los demás que le son del cargo del servidor público, por esta razón, dada la esfera política, su decisión concierne a un ámbito objetivo y desde su esfera personal en un juicio racional, por ende, no debe ni le asiste el deber de enunciar a viva voz la razón de su calificación, este asunto, debe quedar clarificado, por

cuanto, nunca de la votación existía dicho deber, y que en las actas quedó constancia del puntaje dado a cada aspirante.

la comisión escrutadora es la única facultada para contar los votos y declara de acuerdo al escrutinio quien fue la ganadora, como efectivamente lo hizo declarando que la señora KATERINE ARENAS ALVAREZ con 8 votos, los únicos válidos y contabilizados por la comisión. Es importante resaltar que las manifestaciones verbales dentro de la sesión a favor o en contra de una participante, no tiene la fuerza vinculante en la elección, toda vez que esta se hace a través del único mecanismo designado para ellos que es articulo 85 No 3 del Acuerdo Municipal 427 de 2016.

CUARTA: ERROR EN LOS CONCEPTOS DE CONCURSO DE MERITO Y CONVOCATORIA PUBLICA

Es fundamental establecer la clara diferencia sobre el sentido esencial de la CONVOCATORIA PÚBLICA, y el hilo conductor que determina la brecha existente con el denominado CONCURSO DE MÉRITOS, porque no puede considerarse que ambos son iguales, porque son disímiles, en el aspecto del orden de elegibilidad, y que la estructura del proceso, en el caso específico, puede determinarse el procedimiento por parte de la Corporación Pública, por cuanto, se ciñe al reglamento interno del Concejo, y si en el mismo no reza de forma específica, el acto administrativo de Convocatoria lo determinará, situación que es distinta en un concurso, que en su mayoría están reglados, por ejemplo, los concursos de carrera de régimen especial, caso que no es asunto a tratar en este recurso.

El problema jurídico que es derrotero del sustento de la impugnación a la decisión adoptada en primera instancia por el Juzgador en relación a decidir conforme a que se emitió una lista de elegibles por parte de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Acacías, y apreciando que la señora PATRICIA MORERA ANAYA, es quien ocupaba el primer lugar, debía ser ella, quien fuese elegida, situación jurídica que cercenaba totalmente el derecho al voto por los Concejales, y afecta profundamente el ejercicio constitucional de ámbito político sobre la elección de funcionarios, toda vez que, si se mantiene dicha regla de elegir en el orden estricto, se entraría en el campo de un concurso de méritos, desdibujando el sentido de la norma cuando el Legislador expidió el Acto Legislativo 02 de 2015, sembró una clara diferenciación entre convocatoria pública y el concurso de méritos, y precisó que si bien ambos comparten los principios orientadores, y el criterio de mérito es piedra angular, el primero, la convocatoria permite un radio de acción por los miembros de una corporación pública, como lo es el Concejo Municipal de Acacías, para decidir mediante votación secreta quien debe ser la Secretaria General del Concejo, por esto, no es dable restarle dicha autonomía que guarda la entidad político-administrativa.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 136 de 1994, "El Concejo Municipal elegirá un secretario para un período de un año, reelegible a criterio de la corporación y su primera elección se realizará en el primer período legal respectivo.".

Esta disposición establece que corresponde al Concejo realizar la elección de su secretario. Sin embargo, la norma no previó ningún trámite o procedimiento para el efecto, razón por la que se entendía que la corporación pública tenía discrecionalidad y autonomía para fijar la forma en la que realizaría la designación. Sin embargo, a raíz de la expedición del Acto Legislativo 2 de 2015 las funciones electorales asignadas a las corporaciones públicas deben ejecutarse de acuerdo con lo establecido en el artículo 126 Superior.

Por tanto, no cabe duda de que por disposición constitucional desde el año 2015 las designaciones a cargo de las corporaciones públicas, entre las cuales se encuentran los concejos municipales deben estar precedidas de una convocatoria pública regulada por la ley, entidad que debe ceñirse a los postulados ahí expuestos.

Teniendo en cuenta el pronunciamiento realizado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Quinta, con el excelentísimo Consejero de Estado Dr. Luis Alberto Álvarez Parra, señalo en el contenido de la sentencia que:

Es oportuno reiterar que esta Sección ha señalado que mientras no se expida la ley correspondiente, las corporaciones tienen cierto grado de discrecionalidad para realizar la designación respectiva; discrecionalidad que no significa arbitrariedad y que en todo caso implica que la designación debe estar precedida de una convocatoria pública, que no se asimila a un concurso de méritos, la cual, a su vez, deberá estar guiada y permeada por los principios constitucionales, toda vez que estos tienen aplicación directa.

Veamos su señoría que, conforme a la Ley 136 de 1994, en su artículo 35, consagra que el Concejo Municipal es el ente facultado para elegir a los funcionarios de su competencia entre los que se encuentra el Secretario; no obstante, la norma no contempla la forma de elección la cual está dada por el reglamento interno, sin perjuicio que el procedimiento ya fue regulado en la ley de régimen municipal, por cuanto el empleo se deberá proveer conforme al reglamento interno que para el efecto haya expedido el Concejo Municipal, de tal manera que, en el reglamento interno del Concejo Municipal de Acacías no preceptúa el procedimiento y estructura del proceso para la elección de Secretaria del Concejo Municipal, así las cosas, el procedimiento se estipuló a través de los actos administrativos de la CONVOCATORIA PÚBLICA.

Que en el acápite anterior, fue imperioso establecer que aunque la Mesa Directiva hizo énfasis en una norma derogada (LEY 1904 DE 2018), e incluyó una prueba de conocimiento dentro de la estructura del proceso de la convocatoria pública, y se mantuvo en la Resolución No. 77 de 2020 la aplicación de la prueba de conocimiento por parte de la Mesa Directiva, nunca se le dio la connotación de concurso de méritos, y cabe distinguir que aunque se dé aplicación al "criterio de mérito" que tiene fundamento constitucional en el artículo 126 de la Constitución Política objeto de reforma mediante Acto Legislativo 02 de 2015, entiéndase que el mérito es un eje definitorio de la Carta Política, y está impreso en los procesos de convocatoria y concurso de méritos para empleo, indistinto de la forma

como se realice el proceso de elección, así que, el uso de la expresión mérito, no es equiparable a concurso de méritos, aclaración que se sirve dar para comprensión de la accionante y de las partes interesadas en el trámite de este amparo constitucional.

Ahora bien, sabido es que, salvo en lo que atañe a la designación del Secretario de los concejos municipales, no se ha expedido la ley que regula la convocatoria pública a la que alude el artículo 126 constitucional.

Fíjese que el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo emitió por medio de la Sala de Consulta, Consejero Ponente Dr. Álvaro Namen Vargas, en el concepto de Consulta C.E. 2274 del año 2.015 se refirió a la CONVOCATORIA PÚBLICA, precisando similitudes y discrepancias frente al concurso de méritos, y encierra que:

El Acto Legislativo 02 de 2015 estableció la convocatoria pública como regla general para elección de servidores públicos por las corporaciones públicas, y que el concurso de méritos cuya reglamentación trata la ley 909 de 2004 y otras leyes especiales para cada ramo, la forma de elección en el concurso establece un orden de elegibilidad o lista de elegibles, y se ordena estrictamente de acuerdo con el resultado del procedimiento de selección, de modo que, quien se encuentre en el primer rango, es quien deba ser otorgado el cargo al cual aspiró; distinto lo es, en el caso de la "CONVOCATORIA PÚBLICA", que si bien se funda en los mismos principios básicos de los concursos públicos, los cuales son inherentes al criterio de mérito, no resulta aplicable el mismo procedimiento de selección, por cuanto, varía en los criterios de evaluación y ponderación, que serán los dados por cada Corporación atendiendo las normas generales que regulan el marco de idoneidad para el cargo que se convoca, y en la etapa final de selección del aspirante al cargo, las Corporaciones Públicas conservan la potestad de valorar y escoger entre los candidatos que han sido mejor calificados, sin que sea imperativo el primero en lista, toda vez que, en el ejercicio político-administrativo le asiste la facultad de deliberar y escoger el aspirante que mejor convenga, y esto conforme a la autonomía que goza la misma corporación, por su esencia que guarda desde la noción constitucional.
Como ha quedado planteado, el Acto Legislativo 2 de 2015 adoptó el sistema de "convocatoria pública" como regla general para la elección de servidores públicos por parte de las corporaciones públicas, frente a lo cual cabe preguntarse si se trata de una figura igual o diferente a la del "concurso público de méritos" que ya estaba prevista en la Constitución Política como regla general para el reclutamiento de funcionarios públicos (artículo 125). Esto porque si fueran términos equivalentes la consulta se resolvería fácilmente mediante la aplicación directa y sin restricciones de las normas legales que regulan actualmente el concurso público de méritos.

Pues bien, según la Ley 909 de 2004 (régimen general del empleo público), el concurso público de méritos es un procedimiento de selección de servidores públicos basado en la libre concurrencia, la publicidad, la transparencia, la objetividad, la eficiencia, la eficacia, la confiabilidad y el mérito; como quiera que su objetivo es la búsqueda de las personas más capacitadas e idóneas para el ejercicio del cargo ofrecido, lo cual se relaciona directamente con los derechos fundamentales a la igualdad y a la participación en el ejercicio y conformación del poder público, es el procedimiento aplicable en todos aquellos casos en

que la ley, excepcionalmente, no haya previsto una forma diferente de vinculación al empleo público (artículo 125 C.P.). (...) De acuerdo con la misma Ley 909 de 2004 y de otras leyes especiales que regulan concursos de méritos para la provisión de diversos empleos públicos, los concursos siguen en esencia unas etapas básicas de convocatoria y reclutamiento, evaluación de condiciones objetivas y subjetivas de los candidatos, y conformación de listas de elegibles.

Además, como ha reiterado la jurisprudencia, es característica esencial del concurso que la lista de elegibles se ordene estrictamente de acuerdo con el resultado del procedimiento de selección (regla de mérito), de modo que quien obtiene la mejor calificación adquiere el derecho a ser nombrado en el respectivo cargo. (...) Ahora bien, en el caso consultado los debates legislativos dan cuenta de que el Acto Legislativo 2 de 2015 al utilizar la expresión "convocatoria pública" optó por un mecanismo de elección que si bien se funda en los mismos principios básicos de los concursos públicos (incluso en cuanto al criterio de mérito), se diferencia de estos en que al final del proceso de selección las corporaciones públicas conservan la posibilidad de valorar y escoger entre los candidatos que han sido mejor clasificados. (Subrayado y negrilla fuera del texto). Se entendió que, si se adoptaba un concurso público de méritos como tal, se obligaba al organismo nominador a nombrar de acuerdo con el orden de clasificación de los aspirantes, lo que se consideró como una reducción indebida de la autonomía de las corporaciones públicas. Por tanto, se dijo, era necesario acudir a un sistema transparente, público, objetivo y basado en el mérito, pero que fuera distinto al concurso público en cuanto permitiera al organismo elector escoger entre los varios candidatos que superaran la etapa de selección. (...)

De este modo, además de que literalmente se trata de expresiones distintas y que el nuevo artículo 126 Constitucional alude a una y otra como figuras separadas (al señalar que la convocatoria aplicará "salvo los concursos regulados por la ley"), la

Sala observa que los antecedentes del Acto Legislativo 2 de 2015 ratifican que el constituyente derivado quiso diferenciar la convocatoria pública del concurso público de méritos del artículo 125 de la Constitución Política, particularmente porque en los procesos de elección mediante convocatoria pública no existe un orden obligatorio de escogencia entre los candidatos que superan las etapas de selección, tal como ocurre en los concursos de méritos. Así pues, el sistema de convocatoria pública mantiene un grado mínimo de valoración o discrecionalidad política en cabeza de las corporaciones públicas para escoger entre quienes se encuentran en la "lista de elegibles", aspecto que constituye el elemento diferenciador entre la convocatoria pública de los artículos 126, 178A, 231, 257, 267 y 272 de la Constitución Política, y el concurso público de méritos a que alude el artículo 125 de la misma Carta. Sin embargo, en lo demás (publicidad de la convocatoria, reclutamiento de los mejores perfiles, transparencia, aplicación de criterios objetivos y de mérito, etc.) puede decirse que no existen diferencias sustanciales entre uno y otro mecanismo de selección de servidores públicos.

Siguiendo la línea jurisprudencial el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, con ponencia del Consejero Lucy Jeannette Bermúdez, para el año 2.017, sostuvo que:

Para esta Sección, por un lado, la ausencia de una ley que regule la convocatoria pública no constituye un obstáculo insalvable para que los operadores jurídicos la lleven a cabo, pues hasta que el legislador llene tal vacío las corporaciones nominadoras cuentan con la autonomía suficiente para determinar sus parámetros en cada caso. Y, por otro lado, también se infiere que dicha autonomía no puede desconocer, entre otros, los principios consagrados en el mismo artículo 126 de la Constitución, es decir, la "publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito" para la selección del servidor de que se trate. En otras palabras, es la ley la que debe determinar la forma en la que ha de realizarse la convocatoria de que trata el referido artículo constitucional. Sin embargo, a falta de esta, la corporación nominadora cuenta con un margen de autonomía que, en todo caso, está limitado por los principios enunciados en el párrafo anterior. Se podría decir entonces que la convocatoria pública, como está consagra en el artículo 126 Superior, es un nivel intermedio entre ese tipo de procedimientos en los que no necesariamente se debe designar a quien ocupe el primer lugar en una lista de elegibles – como sí ocurre en los concursos de mérito– , pero que, en todo caso, sí requiere de la fijación de unos procedimientos y requisitos mínimamente

reglados – lo cual se evidencia en menor medida en los avisos de invitación – que consulten criterios de mérito. (Subrayado y negrilla fuera del texto)

Como se ha expuesto, su señoría la CONVOCATORIA PÚBLICA adelantada por el Concejo Municipal de Acacias, obedeció a las reglas propias de una convocatoria, respetando los postulados establecidos en el artículo 126 de la norma superior, y de la Ley 136 de 1994, y ante la falta de procedimiento reglado, con la expedición de los actos administrativos referidos anteriormente por parte de la Mesa Directiva en ejercicio de las facultades conferidas por la plenaria, se estableció una estructura del proceso y criterios de evaluación para luego realizar elección en plenaria, según documenta los actos administrativos.

De esta manera, es imperante y en una labor acuciosa ruego al señor Juez examinar de fondo que la CONVOCATORIA PÚBLICA, permite que se tenga al autonomía por los Honorables Concejales de decidir mediante VOTO SECRETO, conforme el reglamento interno de elegir a la aspirante que cumpla con la idoneidad, sin que ello, sea de obligatorio cumplimiento ceñirse a elegir a la persona que ocupe en el primer puesto del orden de la lista de elegibles, porque no es un concurso de méritos, como ya quedo decantado en sentencias del Consejo de Estado, y se reitera la consonancia jurídica que debe mantenerse por la línea jurisprudencial que se ha trazado en el ordenamiento jurídico colombiano.

PRUEBAS.

1. . Impugnación del fallo de Tutela de Primera Instancia.
2. Fallo de tutela de Segunda Instancia

FRENTE A LAS PRETENSIONES

De conformidad con los hechos expuesto solicito muy respetosamente señor juez:

PRIMERO: Manifiesto al despacho que en nombre propio me opongo a todas y cada una de las declaraciones y condenas solicitadas en las pretensiones de esta demanda toda vez que como quedará demostrado en el proceso no hay lugar a ellas conforme las razones expresadas y explicadas en la contestación a los hechos de la demanda.

SEGUNDO: Condenar concejales **JHONNY ANDRES BASTOS HERNANDEZ, ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, HECTOR REYES RATIVA, WILMER CARVAJAL OLAYA**, como parte demandante dentro del proceso de la referencia, al pago de costas del proceso.

Del Señor Juez,

VÍCTOR JULIO RAMOS CUBILLOS
Presidente del Concejo Municipal de Acacias

Acacías, 12 de Enero de 2021.

Doctora,
MARTHA ESPERANZA SÁNCHEZ VARGAS
Juez Promiscuo Municipal de Guamal-Meta

REF. IMPUGNACIÓN DE FALLO DE TUTELA.
RAD. 503184089001-2020-00202-00.
ACCIONANTE: PATRICIA MORERA ANAYA.
ACCIONADO: CONCEJO MUNICIPAL DE ACACIAS- META.

VÍCTOR JULIO RAMOS CUBILLOS, en mi calidad de Presidente del Honorable Concejo del Municipio de Acacías, estando dentro del término procesal para presentar escrito de impugnación contra la decisión emitida en primera instancia en sede de tutela, me permito presentar los hechos y fundamentos para disentir de la decisión adoptada por el A quo.

SOBRE LOS HECHOS

Para fines procesales, es imperante dar a conocer el procedimiento que se desarrolló en virtud de la Convocatoria, observando que, de los hechos relacionados en el contenido de la decisión distan de la realidad en relación con ciertos aspectos que haré denotar así:

Los hechos que el Aquo relaciona, fueron objeto de verificación y corroboración mediante las pruebas documentales aportadas por la accionante, el accionado y los vinculados, de esta manera, cabe aclarar que el Concejo Municipal en plenaria confirió facultades a la mesa directiva vigencia 2020 para que conforme al reglamento interno para la elección de Secretaria General del Concejo se emitiera el acto administrativo de **CONVOCATORIA PÚBLICA**, teniendo en cuenta, los principios de legalidad, transparencia, mérito, entre otros, así lo dispuesto, la mesa directiva expidió la **RESOLUCIÓN No. 048 de 17 de Noviembre de 2020,** la cual fue objeto de modificación parcial mediante la **RESOLUCIÓN No. 073 del 01 de Diciembre de 2020.**

En el acto administrativo Resolución No. 073 se adicionó citándose el fundamento legal de la Ley 1904 de 2018, dando aplicación por analogía, y por esto, hicieron un

ajuste al procedimiento de la Convocatoria, en cuanto a, darle el mismo tratamiento sustancial y procedimental que preceptuaba dicha norma, por esta razón, incluyeron una prueba de conocimiento con asignación de un puntaje, denominando, una lista de elegibles, lo cual conllevó a modificar los criterios de puntaje y ponderación, y las etapas del proceso, decisión adoptada por la Mesa Directiva.

Es necesario, hacer precisión que, la Ley 1904 de 2018 hace referencia a que la forma de elección del Contralor General de la República serviría de fundamento para la elección de funcionarios por las Corporaciones Públicas, sin embargo, dicha Ley fue objeto de DEROGATORIA por la Ley 1955 de 2019, por tanto, en el caso concreto no es viable jurídicamente darle aplicación, en esta medida, la Resolución No. 073 de 2020 la Mesa Directiva incurrió en un yerro jurídico afectando el principio de legalidad y evocando normas sin vigencia en el tiempo, por tal motivo, procedieron a expedir la **Resolución No. 77 de 17 de Diciembre de 2020,** en la cual atendiendo la reclamación de una de las aspirantes al cargo, proceden a emitir este acto administrativo suprimiendo considerandos fundamentados en la Ley 1904 de 2018, sin embargo, debe discreparse que en la Resolución No. 73, incluyeron la prueba de conocimiento teniendo por aplicación analógica la norma ya enunciada, y que este hecho modificó la estructura del proceso, situación que en la Resolución No. 77 se afirma que la supresión del considerando de la norma derogada, no resulta reflejada su aplicación en el acto administrativo, simplemente es una enunciación, lo cual no es cierto, está demostrado y se infiere claramente que la aplicación de una prueba de conocimiento fue con base en la ley derogada, lo cual se mantuvo en la Resolución No. 77, aduciendo que no está ligado a la ley referida, y pues que dicho procedimiento puede resultar viable conforme a que la Corporación es quien establece la forma de la convocatoria, pero, lo que no se quiere es que la CONVOCATORIA PÚBLICA termine equiparándose sustancialmente a un CONCURSO DE MÉRITOS, en cuanto a que, la etapa de selección corresponda a una lista de elegibles que la Corporación deba elegir a quien por orden estricto ocupe el primer puesto, porque no es la naturaleza ni la esencia de la CONVOCATORIA PÚBLICA, ya el Consejo de Estado y en sede de consulta el Departamento Administrativo de la Función Pública ha decantado el asunto, expresando que la elección de funcionarios por las Corporaciones Públicas, en el caso, de la Secretaria General del Concejo, para un período legal de un (01) año, el Concejo conserva una autonomía que está sustentada en el ámbito político- administrativo, de tal manera que, se considera que la lista de elegibles es quienes han cumplido con los criterios y requisitos mínimos exigidos, y de dicha lista podrán *votar (VOTO SECRETO), de acuerdo con el Reglamento*

Interno, para elegir la aspirante que deseen conforme una mayoría de votos, considerada en la mitad más 1 del cuociente electoral, para esto, le concluyo su señoría que: **NO ES OBLIGACIÓN QUE EN EL MARCO DE UNA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA ELECCIÓN DE FUNCIONARIOS (SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO) POR PARTE DE LA CORPORACIÓN, EN PLENARIA, DEBA ELEGIR QUIEN OCUPE EL PRIMER PUESTO, RESULTADO DE LA PONDERACIÓN DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS, COMO EXPERIENCIA, ESTUDIOS Y PRUEBA DE CONOCIMIENTO; SE GUARDA TOTAL DISCRECIONALIDAD PARA QUE LOS CONCEJALES PUEDAN EJERCER SU VOTO Y ELEGIR A QUIEN DE LA LISTA CONSIDEREN IDÓNEA PARA OCUPAR EL CARGO.**

Dejando un lado, que la Mesa Directiva se ocupó de atribuciones para diseñar, elaborar y aplicar la prueba de conocimientos, al igual que, las preguntas de la entrevista, el Concejo Municipal de Acacías en plenaria le asistía el derecho y deber de realizar la calificación en un rango de 1 a 100, con total libertad de que asignar el puntaje a cada aspirante, de forma individual cada concejal, sin ***necesidad de justificar o argumentar el puntaje (valor) dado a cada aspirante***, por cuanto, gozan de total autonomía respetando el principio de legalidad, debido proceso, transparencia, moralidad, y los demás que le son del cargo del servidor público, por esta razón, dada la esfera política, su decisión concierne a un ámbito objetivo y desde su esfera personal en un juicio racional, por ende, no debe ni le asiste el deber de enunciar a viva voz la razón de su calificación, este asunto, debe quedar clarificado, por cuanto, nunca de la votación existía dicho deber, y que en las actas quedó constancia del puntaje dado a cada aspirante.

Respecto al literal a) del acápite del resumen fáctico del fallo de tutela, la enunciación por parte de los Concejales a viva voz en el desarrollo de la plenaria, donde manifestaron que ellos votarían por la señora PATRICIA MORERA ANAYA, tal hecho acaecido no resulta ser parte del proceso de elección, es una situación anormal realizada por los Concejales, quienes en su libertad lo decidieron hacer, pero no corresponde al procedimiento que establece el Reglamento Interno, tampoco a lo regulado en los actos administrativos expedidos para la Convocatoria, por cuanto, el **VOTO ES SECRETO**, y como mecanismo de participación y elección sólo se da mientras uso de papeleta donde se consigna la intención del voto, y no debe señalarse quién es el que realiza el voto; lo que permite concluir que, dicho acto ocurrido no es del rigor de la ley ni ajustado a las normas procedimentales, así que,

no puede tomarse como prueba para ser valorada en sede de tutela para la protección de los derechos incoados.

Se insiste su señoría Ad quem, que sobre lo narrado en el literal b), no puede servir de fundamento probatorio el hecho que los Concejales manifestaron en número de 8 personas querer votar por la señora PATRICIA MORERA ANAYA, claro es que no es prueba ni existe la obligación a que los Concejales que lo manifestaron, cuando ejercen su voto secreto puedan escoger otra persona, y solamente el VOTO plasmado en la papeleta es el VÁLIDO, y suficiente para determinar quién es la persona elegida en consenso de plenaria, por tanto, no es posible que el hecho de que un número plural de personas manifiesten el deseo de votar por una aspirante, cuando tal hecho no es admisible en un proceso de elección, toda vez que, debe mantenerse en secreto el VOTO, y en vista de ello, son quince (15) los Concejales que ejercieron el VOTO, y el resultado asigno 8 votos a la aspirante KATHERINE ARENAS ÁLVAREZ, y siete votos a favor de PATRICIA MORERA ANAYA, hecho que para la Comisión Escrutadora está ajustado al debido proceso, transparencia, y en relación al proceso electoral, el número de potenciales votantes comprende su totalidad, por tanto, hay equilibrio de los votantes, y se considera válida la elección realizada, en razón que, como ya se ha insistido es una CONVOCATORIA PÚBLICA, y la Corporación Pública, como ente político-administrativo tiene discrecionalidad para elegir a quien de acuerdo con el mérito y la idoneidad consideren que debe ser quien ocupe el cargo.

SUSTENTACIÓN DE LA IMPUGNACIÓN

Atendiendo a las consideraciones esbozadas por el Aquo sobre la decisión adoptada, su señoría Ad quem, es fundamental establecer la clara diferencia sobre el sentido esencial de la CONVOCATORIA PÚBLICA, y el hilo conductor que determina la brecha existente con el denominado CONCURSO DE MÉRITOS, porque no puede considerarse que ambos son iguales, porque son disímiles, en el aspecto del orden de elegibilidad, y que la estructura del proceso, en el caso específico, puede determinarse el procedimiento por parte de la Corporación Pública, por cuanto, se ciñe al reglamento interno del Concejo, y si en el mismo no reza de forma específica, el acto administrativo de Convocatoria lo determinará, situación que es distinta en un concurso, que en su mayoría están reglados, por ejemplo, los concursos de carrera de régimen especial, caso que no es asunto a tratar en este recurso.

El problema jurídico que es derrotero del sustento de la impugnación a la decisión adoptada en primera instancia por el Juzgador en relación a decidir conforme a que se emitió una lista de elegibles por parte de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Acacías, y apreciando que la señora PATRICIA MORERA ANAYA, es quien ocupaba el primer lugar, debía ser ella, quien fuese elegida, **situación jurídica que cercenaba totalmente el derecho al voto por los Concejales, y afecta profundamente el ejercicio constitucional de ámbito político sobre la elección de funcionarios**, toda vez que, si se mantiene dicha regla de elegir en el orden estricto, se entraría en el campo de un concurso de méritos, desdibujando el sentido de la norma cuando el Legislador expidió el Acto Legislativo 02 de 2015, sembró una clara diferenciación entre convocatoria pública y el concurso de méritos, y precisó que si bien ambos comparten los principios orientadores, y el criterio de mérito es piedra angular, el primero, la convocatoria permite un radio de acción por los miembros de una corporación pública, como lo es el Concejo Municipal de Acacías, para decidir mediante votación secreta quien debe ser la Secretaria General del Concejo, por esto, no es dable restarle dicha autonomía que guarda la entidad político-administrativa.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 136 de 1994, *"El Concejo Municipal elegirá un secretario para un periodo de un año, reelegible a criterio de la corporación y su primera elección se realizará en el primer periodo legal respectivo.".*

Esta disposición establece que corresponde al Concejo realizar la elección de su secretario. Sin embargo, la norma no previó ningún trámite o procedimiento para el efecto, razón por la que se entendía que la corporación pública tenía discrecionalidad y autonomía para fijar la forma en la que realizaría la designación. Sin embargo, a raíz de la expedición del Acto Legislativo 2 de 2015 las funciones electorales asignadas a las corporaciones públicas deben ejecutarse de acuerdo con lo establecido en el artículo 126 Superior.

Por tanto, no cabe duda de que por disposición constitucional desde el año 2015 las designaciones a cargo de las corporaciones públicas, entre las cuales se encuentran los concejos municipales deben estar precedidas de una convocatoria pública regulada por la ley, entidad que debe ceñirse a los postulados ahí expuestos.

Teniendo en cuenta el pronunciamiento realizado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Quinta, con el excelentísimo Consejero de Estado Dr. Luis Alberto Álvarez Parra, señalo en el contenido de la sentencia que:

Es oportuno reiterar que esta Sección ha señalado que mientras no se expida la ley correspondiente, las corporaciones tienen cierto grado de discrecionalidad para realizar la designación respectiva; discrecionalidad que no significa arbitrariedad y que en todo caso implica que la designación debe estar precedida de una convocatoria pública, que no se asimila a un concurso de méritos, la cual, a su vez, deberá estar guiada y permeada por los principios constitucionales, toda vez que estos tienen aplicación directa.

Veamos su señoría que, conforme a la Ley 136 de 1994, en su artículo 35, consagra que el Concejo Municipal es el ente facultado para elegir a los funcionarios de su competencia entre los que se encuentra el Secretario; no obstante, la norma no contempla la forma de elección la cual está dada por el reglamento interno, sin perjuicio que el procedimiento ya fue regulado en la ley de régimen municipal, por cuanto el empleo se deberá proveer conforme al reglamento interno que para el efecto haya expedido el Concejo Municipal, de tal manera que, en el reglamento interno del Concejo Municipal de Acacías no preceptúa el procedimiento y estructura del proceso para la elección de Secretaria del Concejo Municipal, así las cosas, el procedimiento se estipuló a través de los actos administrativos de la CONVOCATORIA PÚBLICA.

Que en el acápite anterior, fue imperioso establecer que aunque la Mesa Directiva hizo énfasis en una norma derogada (LEY 1904 DE 2018), e incluyó una prueba de conocimiento dentro de la estructura del proceso de la convocatoria pública, y se mantuvo en la Resolución No. 77 de 2020 la aplicación de la prueba de conocimiento por parte de la Mesa Directiva, nunca se le dio la connotación de **concurso de méritos,** y cabe distinguir que aunque se dé aplicación al "criterio de mérito" que tiene fundamento constitucional en el artículo 126 de la Constitución Política objeto de reforma mediante Acto Legislativo 02 de 2015, entiéndase que el **mérito** es un eje definitorio de la Carta Política, y está impreso en los procesos de convocatoria y concurso de méritos para empleo, indistinto de la forma como se realice el proceso de elección, así que, el uso de la expresión mérito, no es equiparable a concurso de méritos, aclaración que se sirve dar para comprensión de la accionante y de las partes interesadas en el trámite de este amparo constitucional.

Ahora bien, sabido es que, salvo en lo que atañe a la designación del Secretario de los concejos municipales, no se ha expedido la ley que regula la convocatoria pública a la que alude el artículo 126 constitucional.

Fíjese que el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo emitió por medio de la Sala de Consulta, Consejero Ponente Dr. Álvaro Namen Vargas, en el concepto de Consulta C.E. 2274 del año 2.015 se refirió a la CONVOCATORIA PÚBLICA, precisando similitudes y discrepancias frente al concurso de méritos, y encierra que:

El Acto Legislativo 02 de 2015 estableció la convocatoria pública como regla general para elección de servidores públicos por las corporaciones públicas, y que el concurso de méritos cuya reglamentación trata la ley 909 de 2004 y otras leyes especiales para cada ramo, la forma de elección en el concurso establece un orden de elegibilidad o lista de elegibles, y se ordena estrictamente de acuerdo con el resultado del procedimiento de selección, de modo que, quien se encuentre en el primer rango, es quien deba ser otorgado el cargo al cual aspiró; distinto lo es, en el caso de la "CONVOCATORIA PÚBLICA", que si bien se funda en los mismos principios básicos de los concursos públicos, los cuales son inherentes al criterio de mérito, no resulta aplicable el mismo procedimiento de selección, por cuanto, varía en los criterios de evaluación y ponderación, que serán los dados por cada Corporación atendiendo las normas generales que regulan el marco de idoneidad para el cargo que se convoca, y en la etapa final de selección del aspirante al cargo, las Corporaciones Públicas conservan la potestad de valorar y escoger entre los candidatos que han sido mejor calificados, sin que sea imperativo el primero en lista, toda vez que, en el ejercicio político-administrativo le asiste la facultad de deliberar y escoger el aspirante que mejor convenga, y esto conforme a la autonomía que goza la misma corporación, por su esencia que guarda desde la noción constitucional.

Como ha quedado planteado, el Acto Legislativo 2 de 2015 adoptó el sistema de "convocatoria pública" como regla general para la elección de servidores públicos por parte de las corporaciones públicas, frente a lo cual cabe preguntarse si se trata de una figura igual o diferente a la del "concurso público de méritos" que ya estaba prevista en la Constitución Política como regla general para el reclutamiento de funcionarios públicos (artículo 125). Esto porque si fueran términos equivalentes la consulta se resolvería fácilmente mediante la aplicación directa y sin restricciones de las normas legales que regulan actualmente el concurso público de méritos.

Pues bien, según la Ley 909 de 2004 (régimen general del empleo público), el concurso público de méritos es un procedimiento de selección de servidores públicos basado en la libre concurrencia, la publicidad, la transparencia, la objetividad, la eficiencia, la eficacia, la confiabilidad y el mérito: como quiera que su objetivo es la búsqueda de las personas más capacitadas e idóneas para el ejercicio del cargo ofrecido, lo cual se relaciona directamente con los derechos fundamentales a la igualdad y a la participación en el ejercicio y conformación del poder público, es el procedimiento aplicable en todos aquellos casos en que la ley, excepcionalmente, no haya previsto una forma diferente de vinculación al empleo público (artículo 125 C.P.). (…) De acuerdo con la misma Ley 909 de 2004 y de otras leyes especiales que regulan concursos de méritos para la provisión de diversos empleos públicos, los concursos siguen en esencia unas etapas básicas de convocatoria y reclutamiento, evaluación de condiciones objetivas y subjetivas de los candidatos, y conformación de listas de elegibles.

Además, como ha reiterado la jurisprudencia, es característica esencial del concurso que la lista de elegibles se ordene estrictamente de acuerdo con el resultado del procedimiento de selección (regla de mérito), de modo que quien obtiene la mejor calificación adquiere el derecho a ser nombrado en el respectivo cargo. (…) Ahora bien, en el caso consultado los debates legislativos dan cuenta de que el Acto Legislativo 2 de 2015 al utilizar la expresión **"convocatoria pública"** optó por un mecanismo de elección que si bien se funda en los mismos principios básicos de los concursos públicos (incluso en cuanto al criterio de mérito), **se diferencia de estos en que al final del proceso de selección las corporaciones públicas conservan la posibilidad de valorar y escoger entre los candidatos que han sido mejor clasificados.** (Subrayado y negrilla fuera del texto). Se entendió que, si se adoptaba un concurso público de méritos como tal, se obligaba al organismo nominador a nombrar de acuerdo con el orden de clasificación de los aspirantes, lo que se consideró como una reducción indebida de la autonomía de las corporaciones públicas. Por tanto, se dijo, era necesario acudir a un sistema transparente, público, objetivo y basado en el mérito, pero que fuera distinto al concurso público en cuanto permitiera al organismo elector escoger entre los varios candidatos que superaran la etapa de selección. (…)

De este modo, además de que literalmente se trata de expresiones distintas y que el nuevo artículo 126 Constitucional alude a una y otra como figuras separadas (al señalar que la convocatoria aplicará "salvo los concursos regulados por la ley"), la

Sala observa que los antecedentes del Acto Legislativo 2 de 2015 ratifican que el constituyente derivado quiso diferenciar la convocatoria pública del concurso público de méritos del artículo 125 de la Constitución Política, particularmente porque en los procesos de elección mediante ***convocatoria pública no existe un orden obligatorio de escogencia entre los candidatos que superan las etapas de selección***, tal como ocurre en los concursos de méritos. Así pues, el sistema de convocatoria pública mantiene un grado mínimo de valoración o discrecionalidad política en cabeza de las corporaciones públicas para escoger entre quienes se encuentran en la "lista de elegibles", aspecto que constituye el elemento diferenciador entre la convocatoria pública de los artículos 126, 178A, 231, 257, 267 y 272 de la Constitución Política, y el concurso público de méritos a que alude el artículo 125 de la misma Carta. Sin embargo, en lo demás *(publicidad de la convocatoria, reclutamiento de los mejores perfiles, transparencia, aplicación de criterios objetivos y de mérito, etc.)* puede decirse que no existen diferencias sustanciales entre uno y otro mecanismo de selección de servidores públicos.

Siguiendo la línea jurisprudencial el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, con ponencia del Consejero Lucy Jeannette Bermúdez, para el año 2.017, sostuvo que:

Para esta Sección, por un lado, la ausencia de una ley que regule la convocatoria pública no constituye un obstáculo insalvable para que los operadores jurídicos la lleven a cabo, pues hasta que el legislador llene tal vacío las corporaciones nominadoras cuentan con la autonomía suficiente para determinar sus parámetros en cada caso. Y, por otro lado, también se infiere que dicha autonomía no puede desconocer, entre otros, los principios consagrados en el mismo artículo 126 de la Constitución, es decir, la "publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito" para la selección del servidor de que se trate. En otras palabras, es la ley la que debe determinar la forma en la que ha de realizarse la convocatoria de que trata el referido artículo constitucional. Sin embargo, a falta de esta, la corporación nominadora cuenta con un margen de autonomía que, en todo caso, está limitado por los principios enunciados en el párrafo anterior. Se podría decir entonces que la convocatoria pública, como está consagra en el artículo 126 Superior, ***es un nivel intermedio entre ese tipo de procedimientos en los que no necesariamente se debe designar a quien ocupe el primer lugar en una lista de elegibles –como sí ocurre en los concursos de mérito–, pero que, en todo caso, sí requiere de la fijación de unos procedimientos y requisitos mínimamente***

reglados –lo cual se evidencia en menor medida en los avisos de invitación– que consulten criterios de mérito.(Subrayado y negrilla fuera del texto)

Como se ha expuesto, su señoría la CONVOCATORIA PÚBLICA adelantada por el Concejo Municipal de Acacías, obedeció a las reglas propias de una convocatoria, respetando los postulados establecidos en el artículo 126 de la norma superior, y de la Ley 136 de 1994, y ante la falta de procedimiento reglado, con la expedición de los actos administrativos referidos anteriormente por parte de la Mesa Directiva en ejercicio de las facultades conferidas por la plenaria, se estableció una estructura del proceso y criterios de evaluación para luego realizar elección en plenaria, según documenta los actos administrativos.

De esta manera, es imperante y en una labor acuciosa ruego al señor Juez examinar de fondo que la CONVOCATORIA PÚBLICA, permite que se tenga al autonomía por los Honorables Concejales de decidir mediante VOTO SECRETO, conforme el reglamento interno de elegir a la aspirante que cumpla con la idoneidad, sin que ello, sea de obligatorio cumplimiento ceñirse a elegir a la persona que ocupe en el primer puesto del orden de la lista de elegibles, porque no es un concurso de méritos, como ya quedo decantado en sentencias del Consejo de Estado, y se reitera la consonancia jurídica que debe mantenerse por la línea jurisprudencial que se ha trazado en el ordenamiento jurídico colombiano.

Debido proceso

Ahora bien, en relación con el debido proceso administrativo para la elección de Secretaria de Concejo Municipal, si bien es un derecho fundamental, “el derecho al debido proceso se muestra como desarrollo del principio de legalidad, pues representa un límite al ejercicio del poder público, y en particular, al ejercicio del ius puniendi del Estado. En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos.” (Sentencia Exp. 00055-00, 2015, Págs. 13-14)

De esta manera, debe interpretarse que el alcance del derecho fundamental al debido proceso en materia administrativa hace referencia al comportamiento que debe observarse por las autoridades en el ejercicio de sus funciones, el cual debe ser

adecuado a los intereses generales, bajo los principios orientadores del artículo 209 de la Carta Política, y en términos generales sobre la eficacia, celeridad, economía e imparcialidad en la función pública, lo cual para el caso concreto, ha quedado ilustrado que ha sido objetivo el proceso de elección basado en una CONVOCATORIA PÚBLICA, y como lo ha reiterado la Corte Constitucional, la oportunidad de acceder a un empleo conforme el mérito debe estar reglado, pero para cada empleo existe un régimen aplicable, que no puede confundirse una convocatoria con un concurso de méritos, si no existe procedimiento reglado por la Ley, y aun existiendo claramente la vertiente a seguir, si bien se guarda similitud, ya ha quedado zanjado el asunto por el Consejo de Estado sobre el alcance que ha dado el legislador a la disposición normativa aplicable al caso concreto.

Por ende, el artículo 37 de la Ley 136 de 1994, es el procedimiento propio para la elección del cargo que carece de funciones de dirección y control como lo es, la Secretaria General del Concejo.

Igualdad

En relación con el derecho fundamental a la igualdad es imperante denotar que la accionada al igual de las demás aspirantes tuvieron el mismo trato para acceso a la convocatoria, y el tratamiento en el desarrollo de la estructura del proceso siempre obedeció a los principios de legalidad, transparencia, y debido proceso, y de esta manera, no existe un riesgo de vulneración o amenaza sobre el derecho a la igualdad de los actores, así que, el procedimiento obedeció a criterios objetivos y razonables basados en los lineamientos de la convocatoria.

Acceso a cargos públicos y trabajo

La jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho a acceder a un cargo público consiste en la prerrogativa que tiene toda persona de presentarse a presentarse a la convocatoria, luego de haber de acreditado los requisitos previstos y con base en el criterio del mérito pueda participar, para el caso concreto, siempre se guardó la objetividad y la accionante tuvo toda la oportunidad para ejercer su derecho a la defensa y a la contradicción.

En la intención de analizar la legalidad del acto como refiere el juzgador en sede de tutela, pues debe considerarse que, el control de legalidad es propio de la jurisdicción contenciosa administrativa, y el juez de tutela no puede soslayar el ámbito por factor de competencia, donde el análisis para el amparo gira entorno sobre la protección de derechos fundamentales, como lo es, el debido proceso, y los reclamados por la accionante, que en este caso, no han sido afectados o vulnerados con el proceder de los Concejales en el acto de elección de la Secretaria General del Concejo del Municipio de Acacías, toda vez que, la elección se dio mediante voto secreto que se garantizó la transparencia, y de la lista de elegibles se escogió la que en su autonomía los Concejales votaron y consideran adecuada e idónea para ocupar el cargo.

El criterio de impugnación radica en que el Juzgador de primera instancia trata la lista de elegibles como documento en firme que debe ser ejecutado por la Corporación para nombrar y posesionar a la primera en el orden estricto de lista, tratamiento que no es adecuado ni está soportado legalmente en el ordenamiento jurídico para la CONVOCATORIA PÚBLICA; de los fundamentos jurisprudenciales citados en los apartados del fallo, se hace referencia a concurso de méritos, y la decisión está inspirada en que la lista de elegibles es de un concurso y por tanto, debe ceñirse a dicho procedimiento, lo cual, por parte de esta Corporación Pública, no es admisible que el juzgador decida causando una imprecisión sobre un aspecto tan fundamental como es la facultad que le asiste a los Concejales de poder elegir en su autonomía y margen de discrecionalidad siempre atendiendo al mérito, a la Secretaria del Concejo Municipal, es un derecho de rango constitucional que reposa sobre la Corporación, y debe verse impreso en la elección de funcionarios.

Sobre la jurisprudencia base para decisión.

En relación la sentencia C-123 DE 2013 de la Corte Constitucional, el apartado citado está dirigido exclusivamente al acto de convocatoria dentro de un concurso de méritos, y la situación expuesta trata exclusivamente de nombramiento derivado de concurso por lista de elegibles, situación que, aunque se recurre al criterio de mérito, dista de la convocatoria pública propia para elección de funciones por el Concejo Municipal. Además, el verbo rector “elegir”, implica el acto de votación secreta que realizan con sujeción al reglamento interno del Concejo y de los actos propios de la CONVOCATORIA PÚBLICA, distinto es, un nombramiento donde no queda margen a la discrecionalidad del nominador debe nombrar a quien ocupar el primer lugar, y no existe otra forma de realizarlo. Por tanto, se insiste que esta es una entidad

político-administrativo, y el valor sustancial de la deliberación y votación es fundamental e imperante para elegir.

Sobre la sentencia No. 00204 de 2019 del Consejo de Estado, hace alusión a la elección de los personeros que está precedida de un concurso, situación que es distinta al caso concreto, puesto que, este cargo es de dirección y control, y el procedimiento para el concurso está reglado, y de la lista de elegibles derivada dentro de las etapas del concurso de méritos, debe respetarse en estricto orden. Como ya se ha expuesto en apartes anteriores, este proceso de elección de SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL es propio de una CONVOCATORIA PÚBLICA, y no puede confundirse que una etapa del concurso se llama convocatoria, es totalmente distinto, y el caso citado por el Aquo en esta sentencia no se ajusta con el caso objeto de decisión en sede de tutela.

La Ley 909 de 2004 aunque regula el empleo público en Colombia, no es el sustento legal aplicable para elección de SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL, recordando que solamente la Ley 136 de 1994 en el artículo 37 es quien establece la elección de este funcionario, por cuanto, no es aceptable que el Juzgador haga alusión a la norma y sustente que el empleo derivado de la modalidad de concurso de público, debe respetarse la ubicación de la persona concursante para realizar el nombramiento, vuelve y se insiste que la situación que motiva a decidir al juzgador, entra en el campo de un concurso de méritos, lo cual no es propio de este caso objeto de estudio, no se puede tratar una convocatoria como un concurso, y menos hacer referencia jurisprudencial de concurso, no es viable jurídicamente, lo cual genera un improperio para la Corporación, por cuanto, no se estaría **eligiendo**, sino limitando a **nombrar**, verbo rector que comporta una situación distinta en el ámbito del empleo.

El juzgador reitera y cita la Sentencia T-502-2010/ CONCURSO DE MÉRITOS de la Corte Constitucional, aduciendo que descarta de plano que el Concejo Municipal tenga la autonomía para elegir a la Secretaría General conforme una lista de elegibles, sin que sea de obligatorio cumplimiento designar a la persona ubicada en el primer lugar de la lista, y procede a citar la sentencia referida en este párrafo, la cual plasma el caso sobre un **concurso de méritos**, lo cual es, totalmente distinto a la convocatoria pública para elección de funcionarios como la Secretaria General del Concejo, donde los Concejales les asiste el derecho en plenaria de realizar votación como órgano político que es, y asimismo, derivado del resultado elegir a quien

consideren idóneo basado en el mérito, por tanto, la referencia jurisprudencial no es admisible para el caso concreto.

PETICIÓN

Teniendo en cuenta, los cargos propuestos en el acápite de impugnación, ruego su señoría Ad quem, que proceda a revocar la decisión de primera instancia, y en cambio, emita decisión ajustada a las normas aplicables al caso, y teniendo en cuenta los fundamentos jurisprudenciales que decanta el asunto de la convocatoria pública, se confirme el acto de elección realizado en plenaria por el Honorable Concejo Municipal de Acacías, donde resulto elegida la señora Katherine Arenas Álvarez como Secretaria General del Concejo Municipal para el período 2021, según obra en Acta No. 134 del día 18 de Diciembre del año 2.020.

OPORTUNIDAD DEL RECURSO

Atendiendo el Decreto 2591 de 1991, en el artículo 31, encontrándose dentro del término procesal de los 3 días, me permito presentar el recurso de impugnación contra el fallo de tutela en primera instancia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Constitución Política de 1991 (Art. 29, 216, entre otros), Ley 136 de 1994, Ley 1955 de 2019, Actos Administrativos de la Convocatoria expedidos por la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Acacías, Reglamento Interno del Concejo Municipal, Sentencias citadas en el acápite de sustentación de la impugnación y demás normas aplicables por materia al caso concreto.

PRUEBAS

Sírvase señor Juez, tener como pruebas las que relaciono y presento descritas así:

1. En seis (06) folios útiles, Resolución No. 048 de 17 de Noviembre de 2020, por medio del cual se realiza una convocatoria para la elección de la Secretaria General del Concejo Municipal de Acacías.
2. En dos (02) folios útiles, Oficio calendado de 27 de noviembre de 2020, por el cual se realiza entrega hojas de vida aspirante al cargo Secretaria General del Concejo Municipal vigencia 2021.

3. En un (01) folio útil, Acta No. 001, por la cual se da cierre al plazo para recepción de hojas de vida en el marco de la Convocatoria Pública para elección de la Secretaría (o) General del Concejo Municipal de Acacías-Meta.
4. En un (01) folio útil, Oficio de publicación de lista de admitidos y no admitidos para la convocatoria pública.
5. En seis (06) folios útiles, Resolución No. 073 de 01 de Diciembre de 2020, por medio de la cual se modifica la resolución 48 de 2020 “Por medio del cual se realiza una convocatoria para la elección de la Secretaria General del Concejo Municipal de Acacías”.
6. En un (01) folio útil, Acta No. 002, que trata sobre el listado definitivo de admitidos convocatoria pública realizada mediante Resolución No. 048 de 2020.
7. En cinco (05) folios útiles, Oficio calendado de 04 de Diciembre de 2020, en el cual la comisión accidental realiza evaluación de los requisitos y establecen tabla de ponderación de los resultados de las aspirantes al Cargo.
8. En un (01) folio útil, Citación a prueba de conocimiento.
9. En un (01) folio útil, Acta No. 003 de 2020, publicación de resultados parciales.
10. En catorce (14) folios útiles, Cuadernillo de preguntas de prueba de conocimiento, hojas de respuestas de las aspirantes al cargo y resultados de la prueba.
11. En un (01) folio útil, Acta No. 004 de 2020, Citación a Entrevista.
12. En quince (15) folios útiles, Evaluación por entrevista dada por cada concejal del Municipio de Acacías.
13. En 1 (01) folio útil, Acta No. 005 de 2020, Publicación de resultados obtenidos y publicación de la lista de elegibles de conformidad con la Resolución No. 048 y No. 073 de 2020.
14. En dos (02) folios útiles, Tabulación información de resultados prueba de entrevista de la convocatoria elección secretaria general del concejo municipal de Acacias.
15. En quince (15) folios útiles, Votación escrita de concejales – elección secretaria general del concejo municipal de Acacias vigencia 2021.
16. Acuerdo N° 427 del 09 de Diciembre de 2016 “Por medio del cual se adopta el reglamento interno del concejo municipal de Acacias y se dictan otras disposiciones”.

NOTIFICACIONES

Para efectos de notificación de la decisión adoptada por el A quem, se recibe al correo electrónico concejo@acacias.gov.co, o en las oficinas del Concejo Municipal ubicada en la Dirección Carrera 14 # 13- 30 Barrio Centro del Municipio de Acacías.

Del señor Juez,



VÍCTOR JULIO RAMOS CUBILLOS
Presidente del Concejo Municipal de Acacías

JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE ACACIAS, META
Acacias, Meta, veinticinco (25) de febrero de dos mil veintiuno (2021)

I-. OBJETO POR DECIDIR

La impugnación interpuesta por los concejales del Municipio de Acacías -Meta, **Zulma Yolima Díaz Díaz, Víctor Julio Ramos Cubillos** y **Liliana Marcela Baquero Torres,** contra el fallo de primera instancia proferida el 6 de enero de 2021 por el **Juzgado Promiscuo Municipal de Guamal, Meta,** dentro de la acción de tutela promovida por la señora **Patricia Morera Anaya**, identificada con cédula de ciudadanía No 55.058.856, contra el **Concejo Municipal de Acacías, Meta,** por la presunta vulneración de los derechos al debido proceso, igualdad, trabajo y acceso a los cargos públicos por concurso de méritos.

II-. SÍNTESIS DE LA DEMANDA

1.- De la tutela

La accionante fundamenta la acción de tutela en los siguientes hechos:

-. El Concejo de Municipal accionado, apertura convocatoria por medio de la Resolución No 048 de 2020, modificada mediante Resolución No 073 de 2020, para la elección de Secretaria General del Concejo para la vigencia 2021.

-. Se postuló y concursó por el empleo convocado, presentando las pruebas que correspondían según el cronograma de la convocatoria realizada.

-. El 16 de diciembre de 2020, la plenaria del Concejo Municipal accionado, realizó la entrevista como bien estaba señalado en la Convocatoria, con anterioridad, se habían establecido con precisión las reglas de la prueba, forma de calificación de 1 a 100, las cuales debían estar soportadas y sustentadas por parte de los evaluadores (concejales).

-. Los evaluadores (concejales) faltaron a su deber objetivo, imparcial y transparente, toda vez que al momento de calificar las entrevistas se pusieron de acuerdo, con el único propósito de beneficiar a la aspirante **Katherine Arenas Álvarez**; afirmación que soporta con las hojas de calificación, donde 8 concejales le pusieron 100 a la aspirante mencionada, sin exponer las razones por las cuales le daban el máximo puntaje permitido.

-. Igualmente, se pusieron de acuerdo -considera que no debe tomarse como mera coincidencia- que los mismos ocho concejales la calificaron a ella -**Patricia Morera**- con 1, la mínima calificación permitida.

-. Una vez finalizadas las pruebas -evaluaciones de las hojas de vida, de conocimientos y entrevista- la mesa directiva expidió la correspondiente lista de elegibles, atendiendo la consolidación de resultados.

-. El 18 de diciembre de 2020, la plenaria del Concejo Municipal adelantó la respectiva elección del cargo de secretaria general, sesión en la que también se presentan irregularidades, tales como:

a.- Una vez expedida la Lista de Elegibles, los concejales debían, en virtud de la convocatoria, elegir el primero de la lista que, para este caso, obedecía a ella -**Patricia Morera Anaya.**

b.- Al momento de la votación, efectivamente 8 concejales -**Wilmer Orlando Carvajal Olaya, Jhonny Andrés Basto Hernández, José Jair Echeverry Ospina, Héctor Reyes Rativa, Luis Carlos Richard Rodríguez, Orlando Granados Acevedo, Arnold Mauricio Pinilla Triana** y **Gildardo Santos Chaparro**- manifestaron a viva voz, mediante el uso de la palabra al momento de votar, que su voto era por ella -**Patricia Morera Anaya;** así que, de los 15 votos posibles, ella tenía 8.

c.- Al momento de contar los votos, por extrañas circunstancias, la comisión escrutadora contó 8 votos en favor de **Katherine Arenas Álvarez** y 7 en favor de **Patria Morera**, hecho contrario a lo expuesto por los concejales al momento de votar.

-. La comisión escrutadora y la mesa directiva declararon elegida a **Katherine Arenas Álvarez** como secretaria general para la vigencia 2021.

-. La situación presentada en la entrevista, la forma de calificación en la prueba de evaluación de 8 concejales, la cual fue realizada sin argumentos serios, parcializados y amañados, con un claro y notorio direccionamiento de lo que iba a ser la elección plenaria, su actuar doloso y mal intencionado en el resultado del proceso de selección, aún mas grave el hecho que 8 concejales manifestaran su intención de voto por **Patricia Morera**, y luego, la comisión escrutadora solo cuenta 7 votos, todos ellos, son hechos que vulneran sus derechos fundamentales.

-. El Concejo no respetó los principios al mérito, al no elegir a la primera de la lista de elegibles.

- Con base en dichos precedentes, la accionante solicita que:

-. Se protejan sus derechos derechos al debido proceso, igualdad, trabajo y acceso a los cargos públicos por concurso de méritos, vulnerados por el **Concejo Municipal de Acacías -Meta.**

-. Se ordene al Concejo Municipal accionado respetar la lista de elegibles proferida al interior del Concurso de Méritos para el nombramiento de la secretaria general de ese órgano colegiado.

-. Se ordene al Concejo Municipal elegir como secretaria general de ese órgano colegiado a quien ocupó el primer puesto del concurso de méritos adelantado.

2-. Respuesta de las accionadas y vinculadas.

Con ocasión de la vacancia judicial iniciada el 19 de diciembre de 2020, el Consejo Seccional de la Judicatura del Meta emitió el Acuerdo No CSJMET202-107 del 28 de octubre de 2020, con el cual asignó turno para dicho periodo al **Juzgado Promiscuo Municipal de Guamal, Meta,** autoridad judicial que, finalmente, avocó el conocimiento de la acción de tutela, mediante providencia del 22 de diciembre de 2020, y emitió el fallo que ahora se revisa.

En el auto admisorio se dispuso la notificación de la entidad accionada Concejo Municipal de Acacías, Meta.

Posteriormente, mediante providencia del 24 de diciembre de 2020, el a quo dispuso la vinculación de la **Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC-**; de cada uno de los concejales: **Liliana Marcela Baquero Torres, Jhonny Andrés Bastón Hernández, Wilmer Orlando Carvajal Olaya, Ferley Carvajal Rey, Andrés Mauricio Chávez Quevedo, Zulma Yolima Diaz Díaz, José Jair Echeverry Ospina, Jhonny Stevenson Giraldo Aragón, Orlando Granados Acevedo, Arnold Mauricio Pinilla Triana, Víctor Julios Ramos Cuvillos, Héctor Reyes Rativa, Luis Carlos Richar Rodríguez Cortes, Gildardo Santos Chaparro** y **Alexander Valero**, y, de cada una de las aspirantes del Concurso de Méritos par nombrar secretario general del Concejo Municipal accionado, ellas son, **Katherine Arenas Álvarez, Johana Patricia Ovalle Rojas, Angelica Alejandra Ordoñez Osorio** y **Lizeth Katherine Rodríguez Prieto.**

2.1.- Respuesta de la concursante Angelica Alejandra Ordoñez Osorio.

La participante del Concurso para nombrar el secretario general del Concejo Municipal accionado, frente a los hechos expuestos por la accionante, expuso lo siguiente:

"PRIMERO: CIERTO, la corporación apertura una convocatoria para la elección de la Secretaria General de ese organismo.

SEGUNDO: NO ME CONSTA, sin embargo, como se observa en las pruebas aportadas se observa el nombre de la accionante dentro de las listas y resultados de las etapas de la convocatoria como también, aparece mi nombre como concursante.

TERCERO: ES CIERTO, EL 16/Dic/2020, se llevó a cabo la entrevista de las concursantes que realizamos la prueba, estableciéndose las reglas de la misma en la Resolución No. 073 de 2020, en especial la forma de calificación de 1 a 100 donde los evaluadores debían soportar sus calificaciones de manera objetiva, sin razones políticas, sin distinción de residencia y forma de presentación de la prueba, como sucedió en mi caso que, me discriminaron por residir en otro municipio y haber presentado la entrevista de forma virtual (evaluadores 7, 6 y 3) el resto se abstuvieron a soportar las respuestas.

Es de resaltar que, los evaluadores se encontraban evidentemente inclinados y divididos ante dos (2) candidaturas, es decir, por la accionante la Sra. Moreno Anaya y la Sra. Arena Alvares, lo anterior se prueba con sólo el analizar los resultados de las calificaciones de los evaluadores que, se precavieron a calificar con los resultados mas bajos a quienes no contábamos con acompañamiento político, como fue en mi caso que participe con la legitima confianza de poder hacer parte de un concurso trasparente y no irregular e parcializado como realmente sucedió.

CUARTO: ES CIERTO PARCIALMENTE, es totalmente cierto que, los evaluadores faltaron a la forma de evaluar de manera responsable, imparcial, objetiva y con mayor énfasis con Transparencia a la entrevista de quienes participamos en ella con la legitima confianza de encontrar una oportunidad y no una mera formalidad de llenar espacios para justificar el actuar de un Concejo dividido políticamente ante dos candidatas la Sra. Moreno Anaya y la Sra. Arena Alvares.

Confianza que se quebranta con la forma en que se calificó y por no haberse considerado la experiencia y formación académicas de quienes nos postulamos como es mi caso la única profesional con sólo la falta de la graduación.

QUINTO: ES CIERTO, El concejo violo con flagrancia los principios de imparcialidad, moralidad y selección objetiva no de la Sra. Moreno Anaya y la Sra. Arena Alvares, si no de quienes participamos creyendo en la meritocracia.

SEXTO: ES CIERTO, pero se expidió de forma irregular.

SÉPTIMO: NO ME CONSTA, no me permitieron llegar a esa instancia, luego que era evidente la inclinación del concejo ante las concursantes Sra. Moreno Anaya y la Sra. Arena Alvares, sin embargo, esto es una prueba más de que la división política de la corporación que vulnero los Derechos no de la accionante sino de quienes participamos creyendo en el mérito.

OCTAVO: NO ME CONSTA.

NOVENO: ES CIERTO, aclarando que, la forma de calificación sólo dio muestra de división política e inclinación ante dos candidatas la Sra. Moreno Anaya y la Sra. Arena Alvares, defraudando verdaderamente a quienes participamos creyendo en la meritocracia.

DÉCIMO: No es un hecho es una afirmación, lo cierto es que, el concurso desde su inicio estuvo direccionado hacia dos candidatas la Sra. Moreno Anaya y la Sra. Arena Alvares, y quienes creíamos en la meritocracia estamos condenados al fracaso, como es mi caso que cuento con la mejor preparación académica y cuento en experiencia suficiente para el cargo."

Con base en los precedentes, la concursante, vinculada a la presente acción de tutela, solicita en su contestación lo siguiente:

"1. ACCEDER a proteger los Derechos Fundamentales de manera PARCIAL en protección de Derechos consolidados de quienes los que hasta el momento tenemos aspiraciones legítimas para ser elegidos por haber pasado las diferentes etapas con éxito,

2. ORDENAR al Concejo de Acacias Meta, realice nuevamente la etapa de entrevistas a todos concursantes con la OBLIGACIÓN de la corporación para que la califique bajo las reglas de la Resolución No. 073 de 2020.

3. ORDENAR al Concejo de Acacias Meta, realice me realice la entrevista de manera virtual por ser una ciudadana residente del Municipio de Zarzal (V), y debido a la distancia y el crecimiento y el peligro de contagio de Sars-Corv2."

2.2.- Respuesta de la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC.

El apoderado de la Comisión señala que, en el caso de esa entidad se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva.

2.3.- Respuesta del concejal Andrés Mauricio Chávez Quevedo.

El Concejal, vinculado a la presente acción de tutela, manifestó que de acuerdo al reglamento interno del Concejo Municipal, Acuerdo 427 del 2016, artículo 50, y, artículo 2° del Acto Legislativo 02 del 2015, la forma de elección del cargo de secretaria general de ese órgano colegiado, es mediante la figura de Convocatoria, y, no de Concurso de Méritos; razón por la cual, hace énfasis en la diferencia entre estas dos figuras, advirtiendo que, en el marco de la primera no es obligación del Concejo elegir quien ocupe el primer puesto, pues ello ocurre es en los concursos de méritos.

En ese sentido, solicita que, se denieguen las pretensiones de la accionante, por cuanto carecen de fundamento, además, acceder a las mismas, sentaría un

precedente equivocado, máxime, cuando los nombramientos del cargo de secretario general de los Concejos Municipales del orden nacional, se realizan a través de Convocatoria Pública, y, de la lista de elegibles resultante de las pruebas realizadas, los concejales tienen la potestad de elegir a quienes en su discrecionalidad decidían, esto, por cuanto los Concejos son órganos Político-Administrativos.

2.4.- Respuesta del concejal Farley Carvajal Rey.

El concejal solicitó que se restituyera el derecho adquiridos por la señora **Katherine Arenas Alvares,** quien fue elegida por el Concejo Municipal de Acacías, Meta, como secretaria general, quien superó todas las pruebas y hace parte de la lista de legibles resultante de la Convocatoria adelantada por ese órgano; también, pidió que se negaran las pretensiones de la accionante, quien confunde Convocatoria Pública con Concurso Público de Méritos.

III-. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El juzgado de conocimiento, mediante fallo del 6 de enero de 2021, resolvió lo siguiente:

> *"PRIMERO: CONCEDER la acción de tutela instaurada por PATRICIA MORERA AMAYA por las razones dadas en la parte motiva de esta providencia.*
>
> *SEGUNDO: Ordenar a los integrantes del Concejo Municipal de Acacias Meta, al Presidente del Concejo Municipal de Acacias Meta que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación del presente fallo, procedan a nombrar en el cargo de secretaria general del concejo municipal de Acacias Meta para el período 2021 a la señora PATRICIA MORERA ANAYA, quien obtuvo el mayor puntaje en el proceso de méritos convocado para el efecto según consolidación de resultados de la lista de elegibles.-*
>
> *TERCERO: Notifíquese a la accionante, a los integrantes del Concejo Municipal de Acacias, al presidente del Concejo Municipal de Acacias, a las personas participantes de la convocatoria, al Departamento Administrativo del Servicio Civil, y a las demás involucrados en los hechos el contenido de este fallo por el medio más expedito."*

IV-. IMPUGNACIÓN

Como en el presente caso se formularon varias impugnaciones contra el fallo de primera instancia, todas ellas con el objetivo que se revocara la decisión, y en su lugar, se negaran las pretensiones de la accionante, por no existir transgresión de los derechos fundamentales alegados, se hará alusión a cada una de ellas de la siguiente manera:

4.1.- Impugnación de la concejal Zulma Yolima Díaz Díaz:

La concejal fundamentó su recurso en tres puntos, a saber:

a.- Criterios para la elección del secretario del Concejo Municipal.

Para el caso concreto, de conformidad con lo determinado en el artículo 50 del Acuerdo 427 de 2016, a través del cual se establece el Reglamento Interno del Concejo Municipal de Acacías, "*El secretario general será elegido por el concejo para un período legal de un (1) año, de la lista de admitidos previa convocatoria pública con criterios de mérito*". Asimismo, la Resolución N°18 del 05 de marzo de 2020, expedida por la actual Mesa directiva, mediante la cual actualizo y ajustó el Manual de funciones y competencias, en cuanto al cargo de Secretario General del Concejo Municipal de Acacías, estableció que *"El cargo de Secretaria General del Concejo será elegido por los Concejales del Municipio de Acacías, previa convocatoria realizada, verificación de requisitos mínimos establecidos y entrevista pública ante la plenaria donde se surtirá finalmente el proceso de elección".*

En ejercicio de las anteriores facultades, la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Acacías expidió la Resolución 048 del 17 de noviembre de 2020 "Por medio de la cual se realiza una convocatoria para la elección de la Secretaria General del Concejo Municipal de Acacías", la cual fue modificada por la Resolución 073 del 1 de diciembre de 2020 y la Resolución 077 del 17 de diciembre de 2020.

En las referidas resoluciones se establecieron las reglas de la Convocatoria Pública para la elección del Secretario General del Concejo, dentro de los cuales está:

1. Requisitos y documentos.
2. Pruebas, puntaje y ponderación.
3. Etapas de la estructura del proceso.
4. Cronograma del proceso.
5. Principios orientadores del proceso.
6. Empleo convocado.
7. Naturaleza del cargo.
8. Funciones.
9. Reclamaciones.

Como se puede observar, en la convocatoria pública para la elección del Secretario General del Concejo municipal de Acacías, se cumplieron con los criterios de mérito que establece el artículo 126 de la Constitución Política y de acuerdo al alcance dado por el Consejo de Estado, el cual estableció*: "Se podría decir entonces que la convocatoria pública, como está consagra en el artículo 126 Superior, es un nivel intermedio entre ese tipo de procedimientos en los que no necesariamente se debe designar*

a quien ocupe el primer lugar en una lista de elegibles – como sí ocurre en los concursos de mérito–, pero que, en todo caso, sí requiere de la fijación de unos procedimientos y requisitos mínimamente reglados –lo cual se evidencia en menor medida en los avisos de invitación– que consulten criterios de mérito".

Como se puede observar, con la convocatoria se buscó establecer la capacidad e idoneidad de la persona que fuera a ocupar el cargo de Secretario General a través del estudio de las (i) calidades académicas, (ii) la experiencia y (iii) las competencias.

b.- Diferencia entre el concurso público de mérito y la convocatoria pública.

Si bien el mecanismo de convocatoria consagrado en la Carta y el concurso público tienen como común denominador el "mérito", uno y otro no son equiparables, pues, mientras este último es la regla general, el primero constituye un procedimiento exceptivo y, por tal, con características propias.

Sobre este punto el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, a través del concepto de noviembre diez (10) de 2015, radicación No. 2274, expediente No. 11001-03-06-000-2015-0182-00, C.P. Álvaro Namen Vargas, sobre la diferencia entre el concurso público de mérito y la convocatoria pública, se pronunció en los siguientes términos:

> *"en el caso consultado los debates legislativos dan cuenta de que el Acto Legislativo 2 de 2015 al utilizar la expresión "convocatoria pública" optó por un mecanismo de elección que si bien se funda en los mismos principios básicos de los concursos públicos (incluso en cuanto al criterio de mérito), se diferencia de estos en que al final del proceso de selección las corporaciones públicas conservan la posibilidad de valorar y escoger entre los candidatos que han sido mejor clasificados. Se entendió que, si se adoptaba un concurso público de méritos como tal, se obligaba al organismo nominador a nombrar de acuerdo con el orden de clasificación de los aspirantes, lo que se consideró como una reducción indebida de la autonomía de las corporaciones públicas. Por tanto, se dijo, era necesario acudir a un sistema transparente, público, objetivo y basado en el mérito, pero que fuera distinto al concurso público en cuanto permitiera al organismo elector escoger entre los varios candidatos que superaran la etapa de selección. (...) el constituyente derivado quiso diferenciar la convocatoria pública del concurso público de méritos del artículo 125 de la Constitución Política, particularmente porque en los procesos de elección mediante convocatoria pública no existe un orden obligatorio de escogencia entre los candidatos que superan las etapas de selección, tal como ocurre en los concursos de méritos. (...) Sin embargo, en lo demás (publicidad de la convocatoria, reclutamiento de los mejores perfiles, transparencia, aplicación de criterios objetivos y de mérito, etc.) puede decirse que no existen diferencias sustanciales entre uno y otro mecanismo de selección de servidores públicos".*

De lo anterior se concluye que una de las principales diferencias entre el concurso público de mérito y la convocatoria pública está en la etapa de elección, ya que en el

primero el nominador obligatoriamente debe elegir a la persona que haya ocupado el primer lugar en la lista de elegibles, mientras que en el segundo no existe un orden obligatorio de selección, lo anterior, atendiendo el principio de autonomía de las corporaciones públicas.

c.- Error en los criterios jurídicos que sustentan el fallo de primera instancia.

Dentro de los argumentos que sustentan la sentencia de primera instancia de la tutela de la referencia, el juez constitucional establece:

> *"Se tiene el concepto a nivel jurisprudencial que la lista de elegibles es el acto administrativo que conforma y adopta una entidad, que el mismo otorga una posición a los elegibles en estricto orden de mérito, y esta posición de ubicación se crea a partir de los resultados obtenidos en el proceso de selección para la provisión de un empleo, en el caso concreto se trata para proveer el cargo de secretaria general del concejo municipal de Acacias por el año 2021 en cuyo listado figura la accionante en el primer puesto con un puntaje según la tabla que obra en el proceso y es la misma que se transcribió en esta sentencia de tutela, puntaje que corresponde al valor numérico de 92.15."*

Asimismo, el juez de tutela expresó lo siguiente:

> *"Para el despacho judicial es claro entonces, que las corporaciones públicas en este caso el ente accionado no puede transgredir derechos fundamentales de la concursante, por lo tanto, la lista de elegibles es un acto administrativo de carácter particular que debe ser utilizada para proveer los cargos convocados. El fin de la lista de elegibles es el tener por parte del nominador el resultado de la participación en el concurso de méritos, en la que de manera ordenada se indican las personas que alcanzaron los mejores resultados en las diferentes pruebas realizadas para acceder a los respectivos cargos ofertados. De acuerdo a la Jurisprudencia Constitucional la provisión de cargos debe tener en cuenta el orden establecido en el correspondiente registro de elegibles, so pena de afectar diversos derechos fundamentales".*

Al estudiar el fallo de primera instancia, se observa que el sustento jurídico que utiliza el juez está relacionado con el concurso público de mérito, que como se explicó anteriormente, difiere del alcance de la convocatoria pública que deben adelantar las corporaciones públicas para la elección de los servidores públicos de acuerdo a lo establecido en el artículo 126 de la Constitución Política de Colombia.

Así las cosas, yerra el juez de tutela al concluir que la persona que ocupó el primer lugar en la lista de elegibles como resultado de la convocatoria pública debe ser obligatoriamente elegido como secretario general del concejo municipal, ya que mantener esta tesis, es equiparar la convocatoria pública con el concurso público de méritos, lo cual desconoce el espíritu del artículo 126 de la Constitución Política, que como se citó anteriormente, que no es otro que crear un mecanismo de elección que si bien se funda en los mismos principios básicos de los concursos públicos

(incluso en cuanto al criterio de mérito), se diferencia de estos en que al final del proceso de selección las corporaciones públicas conservan la posibilidad de valorar y escoger entre los candidatos que han sido mejor clasificados, en atención de principio de autonomía de las corporaciones públicas, que en últimas, fue lo que hizo el Concejo de Acacías.

En conclusión, la recurrente considera que, el **Concejo Municipal de Acacías Meta,** no le vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, al principio de confianza legítima y acceso a cargos públicos invocados por la accionante, y tutelados por el juez de primera instancia, toda vez que como se ha explicado en el presente documento, la referida Corporación actuó de acuerdo con la discrecionalidad que le otorga el artículo 126 de la Constitución Política, en atención al principio de autonomía.

4.2.- Impugnación del presidente del Concejo Municipal de Acacías -Meta.

El presidente del Concejo accionado, formuló recurso de impugnación, fundamentando el mismo en que, atendiendo a las consideraciones esbozadas por el *a quo* sobre la decisión adoptada, es fundamental establecer la clara diferencia sobre el sentido esencial de la Convocatoria Pública, y el hilo conductor que determina la brecha existente con el denominado Concurso de Méritos, porque no puede considerarse que ambos son iguales, porque son disímiles, en el aspecto del orden de elegibilidad, y que la estructura del proceso, en el caso específico, puede determinarse el procedimiento por parte de la Corporación Pública, por cuanto, se ciñe al reglamento interno del Concejo, y si en el mismo no reza de forma específica, el acto administrativo de Convocatoria lo determinará, situación que es distinta en un concurso, que, en su mayoría, están reglados, por ejemplo, los concursos de carrera de régimen especial, caso que no es asunto a tratar en este recurso.

El problema jurídico que es derrotero del sustento de la impugnación a la decisión adoptada en primera instancia por el Juzgador en relación a decidir conforme a que se emitió una lista de elegibles por parte de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Acacías, y apreciando que la señora **Patricia Morera Anaya**, es quien ocupaba el primer lugar, debía ser ella, quien fuese elegida, situación jurídica que cercenaba totalmente el derecho al voto por los Concejales, y afecta profundamente el ejercicio constitucional de ámbito político sobre la elección de funcionarios, toda vez que, si se mantiene dicha regla de elegir en el orden estricto, se entraría en el campo de un concurso de méritos, desdibujando el sentido de la norma cuando el Legislador expidió el Acto Legislativo 02 de 2015, sembró una clara diferenciación entre convocatoria pública y el concurso de méritos, y precisó que si bien ambos

comparten los principios orientadores, y el criterio de mérito es piedra angular, el primero, la convocatoria permite un radio de acción por los miembros de una corporación pública, como lo es el Concejo Municipal de Acacías, para decidir mediante votación secreta quien debe ser la Secretaria General del Concejo, por esto, no es dable restarle dicha autonomía que guarda la entidad político-administrativa.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 136 de 1994, *"El Concejo Municipal elegirá un secretario para un periodo de un año, reelegible a criterio de la corporación y su primera elección se realizará en el primer periodo legal respectivo."*.

Esta disposición establece que corresponde al Concejo realizar la elección de su secretario. Sin embargo, la norma no previó ningún trámite o procedimiento para el efecto, razón por la que se entendía que la corporación pública tenía discrecionalidad y autonomía para fijar la forma en la que realizaría la designación. Sin embargo, a raíz de la expedición del Acto Legislativo 2 de 2015 las funciones electorales asignadas a las corporaciones públicas deben ejecutarse de acuerdo con lo establecido en el artículo 126 Superior.

Por tanto, no cabe duda de que por disposición constitucional desde el año 2015 las designaciones a cargo de las corporaciones públicas, entre las cuales se encuentran los concejos municipales deben estar precedidas de una convocatoria pública regulada por la ley, entidad que debe ceñirse a los postulados ahí expuestos.

El juzgador reitera y cita la Sentencia T-502-2010/ Concurso de Méritos de la Corte Constitucional, aduciendo que descarta de plano que el Concejo Municipal tenga la autonomía para elegir a la Secretaría General conforme una lista de elegibles, sin que sea de obligatorio cumplimiento designar a la persona ubicada en el primer lugar de la lista, y procede a citar la sentencia referida en este párrafo, la cual plasma el caso sobre un concurso de méritos, lo cual es, totalmente distinto a la convocatoria pública para elección de funcionarios como la Secretaria General del Concejo, donde los Concejales les asiste el derecho en plenaria de realizar votación como órgano político que es, y asimismo, derivado del resultado elegir a quien consideren idóneo basado en el mérito, por tanto, la referencia jurisprudencial no es admisible para el caso concreto.

4.3.- Impugnación de la concejal Liliana Marcela Baquero Torres.

En el escrito de impugnación, la concejal también hace referencia a la diferencia entre Convocatoria Pública y Concurso de Méritos, señala la normatividad aplicable al caso de elección del secretario general del Concejo Municipal de Acacías, Meta, explica la naturaleza del cargo, cita cada uno de los Actos Administrativos que

deben ser tenidos en cuenta al momento de decidir el caso tutelado, resume cada uno de las fases de la Convocatoria aquí cuestionada y hace énfasis en la legalidad de la elección del cargo convocado.

Con base en lo anterior, concluye que, no se materializa la violación de derechos fundamentales invocados por la accionante y erro el a quo al desestimar las razones expuestas en la contestación de la tutela, al dar por hecho que del proceso de selección realizado para el cargo convocado aplicaba la modalidad de concurso de méritos y se obligaba al concejo a elegir al primero de la lista de elegibles. Desconociendo el alcance que el legislador mediante acto legislativo le quiso dar al diferenciar la forma de proveer el cargo de secretaria general de una corporación pública. Al no haberse materializado violación alguna a los derechos fundamentales impetrados por la accionante, en cambio si los derechos de la accionante tienen límites que podrían a raíz de la decisión errada del A quo al realizar una indebida interpretación y aplicación del mérito en convocatoria pública, vulnera los derechos que le genero la elección de la secretaria a la concursante elegida por la corporación.

V-. RAZONAMIENTOS QUE FUNDAMENTAN LA CONCLUSIÓN

1-. Problema Jurídico

Con fundamento en la decisión cuestionada y las razones expuestas por los concejales recurrentes, corresponde a este juzgador resolver si se debe revocar el fallo de primera instancia, que concedió el amparo constitucional deprecado por la señora **Patricia Morera Anaya**, y, ordenó su nombramiento como secretaria general del **Concejo Municipal de Acacías -Meta,** y en su lugar, negar la acción de tutela, atendiendo que existió error por parte del a quo al no diferenciar entre Concurso de Méritos y Convocatoria Pública.

Sin embargo, previo a resolver el problema jurídico anterior, debe el despacho analizar sí la acción de tutela es procedente para resolver de fondo la controversia suscitada entre los participantes de una Convocatoria Pública y el órgano colegiado que convoca, atendiendo que en dichos eventos existen otros medios de defensa judicial.

2-. Sobre la procedencia de la acción de tutela cuando existen otros medios de defensa judicial.

Conforme al artículo 86 de la Constitución y a lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la Acción de Tutela, de manera general, ésta tiene como objeto la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas *"cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la*

omisión de cualquier autoridad pública" o, de un particular en las condiciones determinadas en dichas normas. Procede siempre y cuando no exista otro medio judicial de defensa idóneo, es decir, tanto o más eficaz que la acción de tutela para lograr la garantía efectiva del derecho vulnerado o amenazado, a menos que se ejerza como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Es, además, un mecanismo subsidiario; en cuanto que solo resulta procedente cuando se carece de otro medio judicial ordinario para el efecto de su protección. No obstante, excepcionalmente, pero de manera transitoria procede así exista otro instrumento judicial ordinario cuando se trata de evitar un perjuicio irremediable, de forma que de no ser recurriendo a ella, tal perjuicio se consumaría irreversiblemente.

2.1.- Análisis del caso concreto - Procedencia de la acción de tutela para intervenir en el proceso de selección del cargo de secretario general de un Concejo Municipal.

Acorde con la documental aportada se tiene:

-. La Mesa Directiva del **Concejo Municipal de Acacías -Meta,** profirió la Resolución No 48 del 17 de noviembre de 2020 *"Por medio del cual se realiza una Convocatoria para la elección de la secretaria general del Concejo Municipal de Acacías"* (Fls. 134 al 139).

-. La Mesa Directiva del **Concejo Municipal de Acacías -Meta,** profirió la Resolución No 73 del 1° de diciembre de 2020 *"Por medio de la cual modifica la Resolución 48 de 2020 "Por medio de la cual se realiza una Convocatoria para la elección de la secretaria general del Concejo Municipal de Acacías"* (Fls. 140 al 145).

-. La Mesa Directiva del **Concejo Municipal de Acacías -Meta,** profirió la Resolución No 77 del 17 de diciembre de 2020 *"Por medio de la cual se ajusta y modifica la Resolución 073 de 2020 y se dictan otras disposiciones en el marco de la Convocatoria para la elección de la secretaria general del Concejo Municipal de Acacías"* (Fls. 20 al 24).

-. En la Convocatoria para la elección de la secretaria general del Concejo Municipal accionado fueron admitidas las concursantes: **Patricia Morera Anaya, Katherine Arena Álvarez, Johana Patricia Ovalle Rojas, Angelica Alejandra Ordoñez Osorio** y **Lizeth Katherine Rodríguez Prieto** (Fl. 25).

-. Que mediante Acta No 5 el Concejo Municipal accionado emitió el consolidado de Resultados obtenido por las aspirantes dentro del proceso de selección de la secretaria general, dentro de la cual se publicaron los resultados en orden, de la siguiente manera:

LISTA DE ELEGIBLES EN ESTRICTO ORDEN DE RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE LAS PRUEBAS REALIZADAS

ORDEN	IDENTIFICACION DE LOS ASPIRANTES		PONDERACION DE PUNTAJES			CONSOLIDACION RESULTADO FINAL			
NUM.	NOMBRE COMPLETO DEL ASPIRANTE	NUM. CEDULA	CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	ESTUDIOS ADICIONALES	EXPERIENCIA	TOTAL PARCIALIDAD	PRUEBA CONOCIMIENTOS 5%	PRUEBA ENTREVISTA 5%	TOTAL CONVOCATORIA 100
1	Patricia Morera Anaya	55.058.656	60	10	10	80	7,5	4,65	92,15
2	Katherine Arenas Alvarez	1.030.564.899	60	10	10	80	5	5,99	90,99
3	Angélica Alejandra Ordoñez O	1.112.626.153	60	10	10	80	5,5	2,11	87,61
4	Lizeth Katherine Rodríguez P.	1.122.134.161	60	10	10	80	5,5	1,60	87,10
5	Johana Patricia Ovalle Rojas	40.434.906	60	10	0	70	4,7	1,94	75,94

ORLANDO GRANADOS ACEVEDO
Presidente Concejo Municipal

HECTOR REYES RATIVA
1ER Vicepresidente

ARNOLD MAURICIO PINILLA TRIANA
2DO Vicepresidente

-. Que el 18 de diciembre de 2021 se llevó a cabo la etapa de la Convocatoria denominada *"Elección y Posesión secretario (a) general del Concejo Municipal"*, en donde los diferentes concejales emitieron de forma escrita y secreta su voto por cada una de las aspirantes inscritas en la Lista de Elegibles publicada por la Mesa Directiva del órgano accionado.

Ahora, como se ha dicho, la accionante centra la acción de tutela en el hecho que, pese haber ocupado, por mérito, el primer lugar en la lista de elegibles, no obstante, en la elección surtida el 18 de diciembre de 2021, los miembros del Concejo Municipal, que en su mayoría habían votado por ella, finalmente, optaron por elegir a la segunda aspirante inscrita, vulnerando con ello sus derechos al debido proceso, igualdad, trabajo y acceso a los cargos públicos por concurso de méritos.

Empero, debe el despacho señalar que, frente a las controversias suscitadas entre los participantes de una Convocatoria Pública y el órgano colegiado que convoca, existen otros medios de defensa judicial, siendo el idóneo y eficaz el denominado medio de control de *"Nulidad Electoral"*, consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011 -Código Contencioso Administrativo- el cual establece lo siguiente:

> *"ARTÍCULO 139. NULIDAD ELECTORAL. Cualquier persona podrá pedir la nulidad de los actos de elección por voto popular o por cuerpos electorales, así como de los actos de nombramiento que expidan las entidades y autoridades públicas de todo orden. Igualmente podrá pedir la nulidad de los actos de llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones públicas."*

A este respecto llama la atención del despacho, una de las pruebas aportadas por la recurrente -concejal- **Liliana Baquero**, quien allega la providencia proferida el 19 de noviembre de 2020 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, en donde se: *"... profiere sentencia por escrito de única instancia dentro del proceso de nulidad electoral instaurado por JOSÉ ENRIQUE MOLINA ROJAS contra*

el acto de elección de la Secretaria General del Concejo Municipal de Acacías (Meta), señora LEIDY ALEXANDRA ROMERO URUEÑA para el periodo 2020, contenido en el Acta de Sesión Plenaria No. 002 del 03 de enero de 2020."

Como se observa, dentro de dicho proceso de Nulidad Electoral también se discute la elección de la secretaria general del **Concejo Municipal de Acacías, Meta**, para el periodo 2020, trámite procesal dentro del cual se resuelve lo siguiente:

> **PRIMERO: DECLARAR** la nulidad parcial del Acta de Sesión No. 02 del 03 de enero de 2020 del Concejo Municipal de Acacías-Meta, en lo que respecta a la elección de la señora LEIDY ALEXANDRA ROMERO URUEÑA, como Secretaria General del Concejo Municipal de Acacías para el periodo 2020.
>
> **SEGUNDO:** Contra la presente decisión no procede recurso de apelación, al tratarse de un proceso de única instancia.
>
> **TERCERO: NOTIFICAR** esta decisión al demandante, señor JOSÉ ENRIQUE MOLINA ROJAS, a los demandados, Concejo Municipal de Acacías-Meta y la señora LEIDY ALEXANDRA ROMERO URUEÑA y a la agente del Ministerio Público, de conformidad con el artículo 289 del CPACA.
>
> **CUARTO:** Ejecutoriada esta providencia, archívense las diligencias.

En ese sentido, debe concluir el despacho que dicho medio de control resulta idóneo y eficaz para resolver el problema jurídico planteado por la accionante en el presente trámite constitucional, legitimando la improcedencia de la acción por existir otro medio de defensa judicial.

Además, debe atenderse que, en este evento, la acción constitucional no se interpone como "*mecanismo transitorio"* para evitar un perjuicio irremediable, por tanto, no existe justificación o razón alguna para inaplicar el numeral 1°, artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 el cual reza que la acción de tutela no procederá *"Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante."*

En esencia, se reitera que no se evidencia que los mecanismos ordinarios de defensa judicial no sean idóneos para garantizar una solución adecuada a la controversia planteada. Por el contrario, como se expresó, pretermitiendo acudir ante el juez natural se busca por esta vía sustituirlo.

En igual sentido, debe advertirse a la parte accionante que el primer análisis que se surte al interior de la acción de tutela, radica en la procedencia del mecanismo constitucional, determinando para ello si se cumplen con los requisitos de subsidiaridad e inmediatez, por tanto, en caso que no se encuentre acreditado uno de

ellos, como sucede en el caso concreto en donde no se acreditó el cumplimiento del requisito de subsidiaridad, corresponde al Juez Constitucional declarar la improcedencia de la acción, sin que para ello requiera realizar un análisis profundo de los hechos expuestos en la acción de tutela

Conforme a las razones expuestas se revocará el fallo proferido en primera instancia, que concedió la acción de tutela impetrada por la señora Patricia Morera Anaya y, en su lugar, se negará por improcedente el amparo constitucional deprecado.

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE ACACIAS, META, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, actuando como juez constitucional,

R E S U E L V E:

Primero-. Revocar el fallo de primera instancia proferido el 6 de enero de 2021 por el **Juzgado Promiscuo Municipal de Guamal, Meta,** por las razones expuestas.

Segundo-. En su lugar, **negar** por improcedente el amparo constitucional deprecado por la señora **Patricia Morera Anaya**, identificada con cédula de ciudadanía No 55.058.856.

Tercero-. Comuníquese lo resuelto, tanto al Juez *a quo* como a las partes, por los medios más expeditos y eficaces.

NOTIFÍQUESE Y ENVÍESE A LA H. CORTE CONSTITUCIONAL PARA SU EVENTUAL REVISIÓN-.

El Juez,



DIDIER LÓPEZ QUICENO